LUIS CORVALÁN

El Gobierno de Salvador Allende



LUIS CORVALÁN L.

El Gobierno de Salvador Allende



LOM PALABRA DE LA LENGUA YÁMANA QUE SIGNIFICA **SOL**

Corvalán Lépez, Luis, 1916 -
El gobierno de Salvador Allende [texto impreso] / Luis Corvalán Lépez. — 1ª ed. — Santiago: LOM Ediciones, 2003.
366 p.: 16x 21cm.- (Colección ciencias sociales)

ISBN : 956-282-576-0
R.P.I.: 134.694

1. Allende Gossens, Salvador, 1908 – 1973. 2. Chile – política y gobierno – 1970-1973. I. Título. II. Serie.

Dewey : 983.0646 .— cdd 21
Cutter : C832g

Fuente: Agencia Catalográfica Chilena

Primera edición, 2003
I.S.B.N: 956-282-576-0

Motivo de cubierta: Veragua y Toledo

Diseño, Composición y Diagramación:
Editorial LOM. Concha y Toro 23, Santiago
Fono: (56-2) 688 52 73 Fax: (56-2) 696 63 88

Impreso en los talleres de LOM
Maturana 9, Santiago
Fono: (56-2) 672 22 36 Fax: (56-2) 673 09 15
web: www.lom.cl
e-mail: lom@lom.cl

En Buenos Aires *Editores Independientes* (EDIN)
Baldomero Fernández Moreno 1217
Fono: 5411-44322840
editoresindependientes@hotmail.com

Impreso en Santiago de Chile.

A la memoria de
Salvador Allende,
el compañero presidente

Palabras preliminares

A treinta años del derrocamiento del gobierno del Presidente Allende me ha parecido un deber escribir las páginas que componen este libro. En ellas invoco la obra realizada, la audaz tentativa de producir cambios de raíz en busca de una vida mejor para todos y en primer lugar para los más desposeídos y necesitados. Destaco el protagonismo del pueblo, la posición asumida por los diferentes actores, las dificultades que surgieron en el camino, las insuficiencias y fallas del gobierno y de los partidos que lo apoyaban. Y me permito expresar algunos juicios críticos y auto críticos, bajo mi propia responsabilidad, productos de las reflexiones que me merecen los acontecimientos mirados a la distancia que nos separa de aquel tiempo.

Doy también mi testimonio sobre el largo proceso de luchas sociales y políticas que generó la unidad de la izquierda chilena y su victoria del 4 de septiembre de 1970, entrego mi visión del gobierno de Salvador Allende, traigo al recuerdo lo que hizo a favor del pueblo, las transformaciones revolucionarias que llevó a cabo en la esfera de la economía, su política internacional independiente, las preocupaciones más sentidas que lo motivaban, todo aquello que lo inscribe y lo inserta en la historia con rasgos propios e indelebles.

Pretendo, a la vez, sumar mi voz junto a la de otros compatriotas, en contra de las tergiversaciones y de los tergiversadores, todavía empeñados en denostar la figura del Presidente Allende, en menoscabar su obra y presentar, en cambio, como salvadores de la Patria y dechados de virtudes al dictador y a quienes, junto a él, gobernaron durante 17 años, sembrando el terror y la muerte.

La década del 60 y los primeros años del 70 fueron en Chile tiempos de esperanza y lucidez, de poderosos movimientos obreros, campesinos, femeninos, estudiantiles; tiempos durante los cuales el pueblo imponía un alto grado de respeto a la persona humana y la adhesión a los principios democráticos. Millones de compatriotas, especialmente adolescentes y jóvenes, –los que se ilusionaron con la Revolución en Libertad pregonada por la Democracia Cristiana y las multitudes que se incorporaron al torrente de la Revolución que promovió la Unidad Popular–, recuerdan aquella época y las luchas de entonces por el sentido que les dio a sus vidas, por la altura de los ideales que los motivaban.

La democracia chilena no era precisamente ejemplar. Pero muchas de sus conquistas y valores le daban prestigio internacional. Los tiempos de las encerronas y compra de electores y la proscripción de los comunistas, habían quedado atrás. La política, considerada como preocupación y actividad relacionada con los

asuntos públicos, se había transformado en el quehacer de cientos de miles o millones de personas. En ella participaban grandes masas del pueblo. Del seno de éste habían surgido –y surgen siempre– hombres y mujeres, especialmente jóvenes, que sólo tienen como norte el interés por el avance social, por la felicidad humana, por el progreso de su país. En la discusión política no participaban sólo los políticos, sino medio mundo, jóvenes y viejos; y los partidos exponían sus puntos de vista en grandes concentraciones públicas y en sus propios órganos de prensa, mientras en los tres canales de televisión que existían –el canal 7 del Estado, el 9 la Universidad de Chile y el 13 de la Universidad Católica–, se debatían los asuntos públicos con participación de personeros de las distintas corrientes.

En aquellos años de la revolución cubana encendía de entusiasmo, a los pueblos latinoamericanos, los vietnamitas conquistaban el aprecio y la admiración de la humanidad progresista por su gloriosa resistencia a los invasores yanquis; muchas naciones de Asia y de África, liberadas del colonialismo, tomaban el camino del progreso, y los bonos del socialismo estaban en alza en todo el orbe. En ese cuadro internacional, Chile –con sólo 9 millones 780 mil habitantes y una población activa de 3 millones 189 mil 200, la mitad compuesta por obreros–, se dio un gobierno revolucionario, profundamente democrático, antiimperialista, prosocialista.

Los ojos del mundo se volvieron hacia nuestro país. El mismo día de la victoria de Salvador Allende se produjeron manifestaciones callejeras de júbilo en varias capitales latinoamericanas y europeas, diarios que no alcanzaron a publicar la noticia de su triunfo sacaron ediciones extraordinarias que fueron arrebatadas por el público. En Montevideo, centenares de personas se sentaron en plena calle formando el nombre del nuevo Presidente chileno. Las transformaciones revolucionarias que llevó a la práctica el gobierno de Allende, empezando por la nacionalización del cobre, concitaron la simpatía de los pueblos. Cuando vino el golpe fascista y se implantó la dictadura, arrasando con todas las libertades, reemplazando la ley por el abuso, por la tortura y el asesinato de miles de chilenos y sumiendo al país en una larga noche de terror, la solidaridad de los seres humanos se expresó, en los cinco continentes, en mil formas por espacio de 17 años.

Desde entonces, hasta en los más apartados rincones de la tierra están vivos el recuerdo y la imagen de Salvador Allende y el desprecio y la condena hacia quienes condujeron a las instituciones castrenses a la cobardía de disparar las armas contra el pueblo para cortar así su audaz proyecto de transformación de la sociedad.

La lucha por la verdad y la justicia conlleva la preocupación y el empeño permanentes contra el olvido y la impunidad de los crímenes, el deber de preservar la memoria histórica.

Acostumbrado a pisotear la verdad, hay un sector político minoritario que usufructúa del poder, monopoliza los medios de comunicación y trata de hacer creer a todos los chilenos que el gobierno del Presidente Allende fue un caos y un fracaso, que el país vivió entonces bajo un régimen antidemocrático y el peligro de una "dictadura comunista". Ese sector, constituido por lo más rancio y troglodita de la derecha chilena, se dedicó ayer a distorsionar los hechos de esa manera, a justificar el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, uno de los más brutales de la historia universal, y todavía les pone la nota máxima a los que asesinaron a miles de chilenos, incluidos dos Comandantes en Jefe del Ejército, seis sacerdotes, madres embarazadas y decenas de niños; a los que torturaron a cientos de miles de hombres y mujeres, destruyeron hogares y arrojaron al exilio a un millón de compatriotas. Y todo esto con la complicidad del arcaico Poder Judicial, que entre el 11 de septiembre de 1973 y comienzos de 1979 recibió 5 mil recursos de amparo que le fueron presentados y acogió sólo uno. La indolencia de ese poder quedó grabada en una frase que se hizo famosa, de Israel Bórquez, quien fuera en algunos de esos años Presidente de la Corte Suprema de Justicia. En una de las tantas ocasiones que las esposas y madres clamaban por saber el paradero y el destino de sus maridos o hijos desaparecidos, les dijo con no disimulada molestia: *"Basta, ya me tienen curco con el cuento de los desaparecidos"*.Con esta frase no se ganó el bronce; pero sí el sobrenombre de *"el curco Bórquez"*, como se le empezó a llamar en el ambiente judicial. Se inspiró, seguramente, en Augusto Pinochet Ugarte, de cuya indolencia salieron frases como esta: *"Dos mil muertos no es nada"*, dicha a propósito de una información acerca de que esa cantidad de chilenos habrían sido asesinados por su dictadura.

Que *"todos tuvimos la culpa, todos somos responsables"* dicen los que buscan pasar la mentira por verdad. Algunos han ido más lejos, han sostenido que el derrumbe del régimen democrático en 1973 y todo lo que pasó después es culpa de la Unidad Popular. Otros han pretendido hacer creer que la raíz de cuanta fechoría tuvo lugar bajo el régimen militar está en las luchas –ellos llaman desórdenes– que entraron a un período de gran combatividad ya en los años 60, comprendido el primer gobierno de la Democracia Cristiana.

No podría decir que el gobierno de Allende y la Unidad Popular estuvieron exentos de errores. Nos envolvió el sectarismo. Fue uno de los factores que impidieron consolidar y ampliar los vínculos y las acciones comunes con la Democracia Cristiana en los primeros tiempos. Tras el propósito de cumplir con los objetivos que a la mayoría del país le interesaban, debimos plantearnos, en

tanto se conocieron los resultados de la elección presidencial, el entendimiento a largo plazo con el Partido de Radomiro Tomic, sumar y no restar fuerzas. Pero esto no lo vimos como Unidad Popular ni como Gobierno, y el Partido Comunista, en el cual yo ocupaba el puesto de mayor responsabilidad, habiéndolo percibido, no le prestó la atención que merecía. La embriaguez de la victoria y el sectarismo que acorta la vista; nos impidieron ver con profundidad y en la perspectiva del tiempo, la magnitud y seriedad de las responsabilidades que asumíamos y la necesidad de buscar un gran acuerdo con la Democracia Cristiana. Durante la campaña electoral, la Democracia Cristiana había coincidido con la Unidad Popular en objetivos tan importantes como la nacionalización del cobre y la culminación de la reforma agraria. La mayoría de sus militantes y simpatizantes, actuando codo a codo con los de la Unidad Popular, habían salido a la calle a defender la victoria de Allende, manifestaban su acuerdo con gran parte de su programa y respaldaban la posición de Radomiro Tomic, quien proclamaba que el capitalismo era incapaz de resolver los problemas del país y de los países latinoamericanos. En estas condiciones debió considerarse la posibilidad de que, pasadas las elecciones, la Democracia Cristiana y la Unidad Popular llegaran a acuerdos y que el entendimiento se abriera camino entre los más vastos sectores democráticos, reforzando y ampliando así la correlación de fuerzas en favor de los cambios que el país requería.

Otro de nuestros pecados fue la debilidad que en determinados momentos demostró el gobierno para meter en cintura a sus más frenéticos enemigos. Esa debilidad alentó a los sediciosos, aunque de esto no se puede derivar, en absoluto, que la Unidad Popular y el gobierno de Allende sean los culpables del golpe y de lo que vino tras él.

Seamos claros y francos. El golpe fue montado desde Washington en acuerdo con la reacción chilena o, si se prefiere que diga, por ésta en contubernio con Washington. Once años antes, el 1° de enero de 1959, había triunfado la Revolución cubana. No dejó piedra sobre piedra de la dictadura de Fulgencio Batista. Chile siguió el ejemplo de Cuba, aunque por otros caminos, mediante una lucha no armada, multitudinaria y multiforme del pueblo. Wall Street y Washington comprendieron muy bien las proyecciones de la victoria popular de septiembre de 1970. Y no se cruzaron precisamente de brazos.

El asesinato, en vísperas de asumir Allende, del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, el sabotaje y el terrorismo que pusiera en práctica Patria y Libertad y otros grupos fascistas y, más tarde, la destrucción del Palacio de La Moneda, el cierre del Parlamento, la proscripción de los partidos políticos, la supresión de las libertades, los asesinatos, las torturas, tienen marca

de fábrica conocida, fueron "made in USA". Con razón, el actual senador socialista Jaime Gazmuri, cuando era Secretario general del MAPU Obrero y Campesino, escribió lo siguiente en noviembre de 1974: *"Es claro que la brutalidad de la dictadura, la amplitud de la represión, la conculcación sistemática de los más elementales derechos humanos, la liquidación de las conquistas democráticas, su desprecio por el humanismo, su odio sin límites hacia la clase obrera y el movimiento popular, son los métodos y la consecuencia inevitable del camino reaccionario que ha tomado, el precio indispensable de la restauración del dominio de una minoría nacional y del imperio sobre Chile y su pueblo"*. Y agregó: *"sin el terror fascista era imposible la restauración gran-burguesa e imperialista en Chile*[1]*"*. De ahí el carácter fascista del golpe y de la dictadura que se impuso durante 17 años.

Lo antes dicho es lo primero que quería expresar como palabras de introducción. Siguiendo con esta, recordemos que el pueblo chileno conquistó con Allende el Gobierno, la parte principal del poder político, en un instante histórico de profunda efervescencia social en América Latina, de pujante irrupción de muchos pueblos de África y Asia, de lucha permanente de las fuerzas progresistas de Europa a favor de la paz y la democracia y cuando el sistema socialista era el contrapeso del capitalista y un factor de paz entre las naciones.

Con la constitución del gobierno de Allende se produjo un relevo de clases en la dirección del país. Tal relevo y el proceso de cambios político-sociales que ese gobierno y el movimiento popular desencadenaron en los primeros años de la década del 70, constituyeron una verdadera revolución, parcial e inconclusa, pero revolución al fin y al cabo.

Los cambios realizados en esos años despertaron interés en los diversos continentes, en especial en América Latina y en Europa, por el hecho de que la Revolución Chilena se abría paso por medios pacíficos, sin recurrir a las armas. Ese interés se acrecentó por una circunstancia adicional, porque el gobierno que encabezó el Presidente Allende fue generado e integrado por un movimiento popular dentro del cual coexistían corrientes democráticas –marxistas, racionalistas, cristianas y laicas–, representadas por varios partidos agrupados en la Unidad Popular, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista que se entendían en lo fundamental entre sí y asumían la responsabilidad principal en la coalición.

Los éxitos logrados en los sesenta días cruciales comprendidos entre la elección y la toma de posesión de la Presidencia de la República por Salvador Allende, y los que se obtuvieron en todo un primer período, durante

---

[1] "Aprender las Lecciones del Pasado para Construir el Futuro", Jaime Gazmuri, Folleto, Página 12.

aproximadamente un año, respondieron, por una parte, al vasto apoyo nacional que lograban los objetivos inmediatos que se trazaba el movimiento popular, a la movilización de masas desarrollada para alcanzarlos, a la unidad y cohesión demostrada en lo fundamental y en ese período por la Unidad Popular y, por otra parte, a que ésta buscó y logró con otras fuerzas acuerdos y compromisos que resultaban objetivamente necesarios. Estos se concretaron con la Democracia Cristiana y consistieron, primero, en un pacto de garantías constitucionales, y luego, en una reforma a la Constitución para nacionalizar el cobre.

Hubo gente de izquierda, dentro y fuera de nuestro país que, desde posiciones dogmáticas y anticomunistas, le negaban al pueblo chileno toda posibilidad de triunfar por la vía no armada. Tampoco faltaron aquellos que, una vez obtenida la victoria, dijeron que fue producto de un error de cálculo de la derecha que en esta ocasión presentó su propio candidato, a diferencia de lo que había hecho en la elección presidencial de 1964.

La verdad sea dicha, el triunfo popular de 1970 fue el resultado de una larga y sostenida batalla de la clase obrera y del pueblo de Chile por desplazar del poder a la oligarquía y tomar en sus manos la dirección del país, objetivo que fue posible alcanzar gracias al esfuerzo desplegado por el sector más esclarecido de la izquierda en favor de la unidad de la clase obrera, del entendimiento socialista-comunista, de la agrupación de los partidos populares y de la acción común de los más amplios sectores democráticos. Fue también el resultado del aporte personal de Salvador Allende, comprendidos el aprecio y la confianza que despertaba en millones de chilenas y chilenos.

En tanto asumió Allende, la clase obrera y el pueblo en general pusieron sus fuerzas en tensión, desplegaron sus iniciativas creadoras, lucharon abnegadamente en favor del éxito del Gobierno Popular y de la realización de su programa. Los trabajadores, la juventud, las mujeres, los artistas, los intelectuales, escribieron páginas de heroísmo en la creación de un nuevo orden social, en la batalla de la producción, en la distribución de los productos que escaseaban y en la lucha contra cada arremetida reaccionaria. Se demostró una vez más que la revolución libera muchas energías, que el pueblo es capaz de las mayores proezas cuando vislumbra un porvenir mejor. Millones de chilenos y chilenas trabajaron en esa dirección hasta el final.

Bien se sabe que toda revolución lleva consigo el peligro de la contrarrevolución. Esta última se abre paso cuando los revolucionarios pierden la iniciativa, cuando la revolución se atasca y pasa a la defensiva; en definitiva, cuando la correlación de fuerzas cambia en favor de sus enemigos. En Chile, se produjo este fenómeno tras un período de ascenso del movimiento popular, luego de una etapa de cambios democráticos, en la cual primaban los éxitos y

aciertos, y la política del Gobierno Popular contaba con mayoritario apoyo ciudadano. La situación se invirtió por diversos factores que entraron en juego. Los precios de los productos importados subieron a fines de 1972 y durante 1973, en tanto que los precio de los productos de exportación bajaron considerablemente. Se sumó a ello el hecho de que el Gobierno de Nixon, en el momento que el cobre alcanzaba la más alta cotización en el mercado internacional, puso en venta gran parte de sus reservas estratégicas del preciado metal, para provocar una baja artificial de su precio y hacer "reventar la economía chilena". Todos estos factores que escapaban al control del gobierno y de la Unidad Popular, pesaron decisivamente.

En la Unidad Popular se agrupaban fuerzas de diferente procedencia social y de distintas ideologías. Este era un hecho positivo, reflejo de la amplitud de la alianza construida en torno a la clase obrera. En tal hecho, en la unidad de la coalición, radicaba la fuerza del pueblo. Pero dicha unidad, para que fuese consistente, debía estar basada no sólo en un programa común, sino también en una dirección política común y acertada. Cuando hubo esa dirección y se luchó resueltamente por aplicar el programa, las cosas marcharon bien en términos generales. Cuando tales requisitos se cumplieron a medias, las cosas empezaron a descomponerse.

A medida que la revolución entraba en dificultades, era más necesaria la unidad de pensamiento y de acción; pero, precisamente entonces, las discrepancias se hicieron más patentes y agudas. En el interior de la Unidad Popular se acentuaron las posiciones divergentes respecto a una serie de problemas y ello conspiró contra la política de unir a todo el pueblo alrededor de la clase obrera. Así, paulatinamente, se iba debilitando el cumplimiento del programa. Ya no se dirigían todos los efectivos del movimiento popular a dar golpes decisivos al imperialismo, a los monopolios, a la oligarquía terrateniente, sino que se establecía también una pugna con los sectores medios que en la primera etapa habían sido en parte ganados y en parte neutralizados, y se socavaba la fuerza real del proceso.

La reacción pudo conformar un frente con estos sectores, extender su influencia incluso a determinados grupos proletarios, salir de su aislamiento y pasar a la ofensiva, en buena medida a raíz de nuestros errores en la conducción política. No todos comprendieron que la fuerza del gobierno y de la Unidad Popular radicaba en su programa en la medida que éste era el fundamento estratégico de una dirección política correcta, amplia y no estrecha.

Esta dirección acertada existió mientras todos los partidos integrantes de la Unidad Popular actuaron en conjunto. Cuando menudearon las transgresiones al programa, las diferencias de opinión sobre asuntos capitales inmovilizaron en

gran parte a la Unidad Popular y al gobierno. Entonces, la situación empeoró aceleradamente hasta que sobrevino con el golpe.

La reacción presenta el objetivo revolucionario de la conquista plena del poder como un fin siniestro, como un propósito totalitario, como la antidemocracia. Y es precisamente lo contrario. Al proponernos tal meta, los revolucionarios perseguimos algo muy noble y democrático: que el pueblo esté y sea mayoría en el parlamento, que esté presente en la generación, composición y funcionamiento de los organismos e instituciones del Estado, comprendidos los tribunales de justicia, las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Los organismos de fiscalización y los resortes decisivos de la dirección económica permanecían al margen de un real control democrático, y en su generación, composición y funcionamiento estaba ausente el pueblo. Por lo tanto, se trataba de que a todos los organismos e instituciones del Estado tuvieran acceso los trabajadores y fueran en ellos los protagonistas principales. Esto no estaba vinculado, como la reacción lo presentaba, a ningún procedimiento tortuoso, sino a formas, métodos y caminos democráticos decididos y respaldados por el pueblo. Se podría afirmar que la conquista de todo el poder es la única materialización verdadera del concepto de Lincoln sobre la democracia, la que definía como *"el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo"*.

En la marcha del proceso revolucionario tenía señalada importancia el éxito del Gobierno Popular. Se requería demostrar que el régimen que despuntaba abría las compuertas al desarrollo de las fuerzas productivas, al incremento económico, a una mejor distribución de la renta nacional, al aumento del nivel de vida del pueblo, a elevar el nivel cultural de la población, a la justicia social, al progreso del país. Ello se demostró en el primer año, mientras se pudo aprovechar la capacidad instalada de la industria y, sobre esta base, producir más y mejorar los ingresos de los trabajadores y de los pequeños y medianos industriales y comerciantes. Pero llegó el momento en que lo decisivo era el aumento de la productividad. Una gran parte de los trabajadores así lo comprendió, se guió por una orientación correcta y realizó múltiples y valiosos esfuerzos, en las industrias estatizadas y en el campo, para ganar la batalla de la producción. El triunfo pleno del gobierno de la Unidad Popular en la solución de los problemas económicos le habría permitido consolidar y desarrollar lo que al comienzo había conseguido en cuanto a volcar a su lado a la mayoría del país. Esto habría facilitado enormemente el avance hacia el cumplimiento de las tareas relativas a la conquista plena del poder. Pero el sabotaje reaccionario en la producción, la política de desestabilización puesta en práctica por el imperialismo norteamericano y, de otro lado, el desprecio, en una parte de la Unidad Popular, por las tareas económicas y la falta de una mejor dirección en la economía, terminaron por pesar más. En esas

circunstancias, la escalada reaccionaria logró bloquear los cambios en la superestructura y modificar el curso de la situación.

De otra parte, las acciones de la ultra-izquierda contra propietarios pequeños y medianos, que no fueron combatidas por toda la Unidad Popular, tuvieron una repercusión negativa superior a la envergadura de esas acciones y al peso real de sus promotores, debido a la amplificación que de ellas hacía la prensa opositora. En esto influyó también el hecho de que en la Unidad Popular no existía plena conciencia respecto al carácter de la etapa de la revolución que estaba en desarrollo. Algunas personas de la Unidad Popular pensaban que ya se trataba de una revolución socialista y no entendían, en lo referente a los pequeños y medianos industriales, agricultores, comerciantes y otros sectores medios que, incluso cuando de eso se trata, se debe seguir con ellos una política que permita su aporte al proceso. Esta política debe ser amplia y flexible y, a la vez, firme, conjugando el interés material de dichos sectores con la persuasión y la presión de la lucha de las masas, dirigidas a vencer las vacilaciones de la pequeña burguesía.

En la gestación de la victoria de 1970 y en las realizaciones del gobierno del Presidente Allende, entregaron su contribución todos los partidos de la Unidad Popular. Eso está fuera de discusión. Pero lo está también el hecho de que el Partido Comunista de Chile fue el principal artífice de la Revolución Chilena. Tuvo el mérito de vislumbrar la posibilidad de conquistar el gobierno por la vía no armada y de jugarse con todo tras el propósito de materializarla. Luchó incansablemente, durante años y años, por la unidad de las fuerzas antiimperialistas y antioligárquicas alrededor de la clase obrera y en función de las transformaciones que maduraban en la sociedad. Definió acertadamente el carácter de la revolución y la política de alianzas. Llegó a la conclusión de que la vía pacífica no excluía confrontaciones más o menos violentas, como la toma de tierras por los campesinos y de terrenos por los pobladores de la periferia urbana, y que requería ante todo de la unidad y de la movilización activa y constante de las masas. En la lucha por esta línea, cuya justeza demostró la práctica, libró un combate permanente contra las posiciones erróneas, contra el sectarismo de izquierda que cuestionaba su política y se oponía a las amplias alianzas y contra las tendencias derechistas de conciliación con el enemigo.

Existía una fuerte estratificación política. El peso de los partidos políticos en la vida nacional era muy grande y sus resoluciones no sólo guiaban la conducta de sus militantes, sino también la del grueso de los sectores sobre los que influían. Por eso, el Partido Comunista consideraba que cumplía su misión de vanguardia no sólo buscando el fortalecimiento de sus filas y más influencia directa sobre las masas, sino, al mismo tiempo, el entendimiento con el Partido

Socialista y el acuerdo con todos los partidos de la Unidad Popular. Más aun, concebía la unidad socialista-comunista como la fuerza de vanguardia, como "vanguardia compartida".

En uno de los tantos libros que se han escrito en el mundo sobre la experiencia chilena, concretamente, en el libro *El Partido Comunista de Chile y el camino al socialismo*, su autor afirma que "la alianza entre el Partido Comunista y el Partido Socialista era crucial" y señala que "un aspecto importante al estudiar el origen y el desarrollo de la vía pacífica al socialismo es la relación entre los dos partidos más influyentes de la izquierda, el Partido Comunista de Chile y el Partido Socialista de Chile. Ambos fueron aliados durante el período del Frente Popular, luego enemigos acérrimos al comienzo de los años 40. En 1952 la sección del Partido Socialista de Chile liderada por Salvador Allende formó el Frente del Pueblo en alianza con el Partido Comunista. Después de la reunificación del Partido Socialista, socialistas y comunistas formaron el Frente de Acción Popular, el FRAP. Sin embargo, los dos partidos tuvieron diferentes estrategias políticas y en el largo plazo estas diferencias probaron ser cruciales en la derrota del gobierno de Allende".[2]

Naturalmente, no todo dependía del Partido Comunista. La posibilidad de alcanzar un rol dirigente tenía limitaciones objetivas. No en todos los momentos podía ser verdadera vanguardia de la clase obrera. Y no bastaba su decisión para salir adelante en las situaciones críticas. La iniciativa y la decisión revolucionaria tienen marcada importancia, en ocasiones una importancia vital. Pero, en su aplicación no se puede prescindir de las condiciones objetivas, concretas, so peligro de caer en el voluntarismo y hasta en la aventura.

El Pleno de agosto de 1977 del Comité Central del Partido Comunista puso de relieve sus propios errores y deficiencias efectivas. Dos de estas últimas tienen particular relevancia. El Partido hizo una buena elaboración de su línea política para todo el período que condujo a la conquista de una parte del poder y para los primeros tiempos del Gobierno Popular; pero esa elaboración fue insuficiente en relación al tránsito de una etapa a otra de la revolución y a la conquista de todo el poder. Por otra parte se debe reconocer que careció durante casi toda su vida de una política militar y que la derecha, en cambio, siempre la tuvo y hasta actuó al interior de las Fuerzas Armadas.

De su lado, los partidos de la Unidad Popular y en particular el gobierno, no abordaron bien la cuestión de la libertad.

El programa de la Unidad Popular establecía expresamente el reconocimiento de los derechos de la oposición, y el gobierno actuó en consecuencia. Ese

---

[2] *The chilean Comunist Party and the road to socialism*, Carmelo Furci, Zed London, 1984.

reconocimiento debía regir conforme a los mecanismos del Estado de Derecho, es decir, con la oposición actuando en los marcos de la ley. Así ocurrió durante cierto tiempo. Pero llegó un momento en el cual una parte de la oposición, a través de "Patria y Libertad" y del "Comando Rolando Matus", se lanzó por el camino de los atentados criminales, dedicándose a crear un clima de inseguridad. Sus publicaciones estaban plagadas de injurias y calumnias contra el Presidente de la República y colaboradores suyos. En ese momento, el gobierno debió aplicar una política de mano firme contra la sedición y a favor de la democracia y la libertad. Pero primó en él la debilidad, no obstante tener entonces un fuerte respaldo ciudadano y de su lado la ley.

Fuimos partidarios de que el pueblo en el gobierno le garantizara a la oposición el pleno uso de las libertades democráticas y el pluralismo político así descrito, pero sin darle cabida al fascismo que es sinónimo de crímenes y es contrario a la libertad. La revolución debe darle mayor libertad al pueblo y reconocer los derechos de sus adversarios, pero no permitir que sus enemigos, aliados del gran capital extranjero, hagan lo que se les venga en gana en su afán de recuperar el poder para una minoría ultra reaccionaria y antinacional.

Tales son los principales comentarios que se pueden extraer de los hermosos años en que el pueblo de Chile se propuso construir con entusiasmo y esperanza una vida más justa y mejor.

En las páginas siguientes se exponen y analizan más claramente y hasta con cierto detalle los fenómenos y hechos de que hablo, comprendidos los éxitos logrados, las dificultades, la conducta y las fallas de cada actor político y social. Ocasionalmente, para mayor claridad y precisión, uso fragmentos de artículos, discursos y otros escritos míos, publicados en los años de la Unidad Popular.

Luis Corvalán, Invierno del año 2003

1.- De las palabras a los hechos.

"Yo sólo tomo en mis manos la antorcha que encendieron los que antes que nosotros lucharon junto al pueblo y para el pueblo".
(Del discurso pronunciado por Allende en la noche del 4 al 5 de septiembre de 1970.)
Aquí estoy para incitarles a la hazaña de reconstituir la nación chilena tal como la soñamos. Un Chile en que todos los niños empiecen su vida en igualdad de condiciones, por la atención médica que reciban, por la educación que se les suministre, por lo que coman.
Un Chile en que la capacidad creadora de cada hombre y de cada mujer encuentre cómo florecer, no en contra de los demás, sino a favor de una vida mejor para todos". (Del Mensaje Presidencial ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971.)

"Este Gobierno quiere una auténtica democracia y una libertad concreta para todos los chilenos. La democracia y la libertad son incompatibles con la desocupación, con la falta de vivienda, con la incultura, con el analfabetismo, con la enfermedad. ¿Cómo se afianza la democracia? Dando más trabajo. Redistribuyendo mejor. Levantando más viviendas. Dando más educación, cultura y salud al pueblo". (Del discurso en el Estadio Nacional con motivo del primer año de Gobierno de la Unidad Popular. 4 de septiembre de 1971.)

Un gobierno realizador y distinto

El gobierno de Salvador Allende entró en el corazón y en la memoria del pueblo chileno porque siempre tuvo en el centro de sus preocupaciones los intereses de los obreros, de los campesinos, de los pequeños y medianos empresarios, de los pueblos originarios, de las madres y sus hijos, de los jubilados y pensionados, de la gente sencilla, postergada y maltratada. Se formó para eso y por eso se confabularon contra él los que se consideran amos y dueños del país.

Desde el primer día demostró que era distinto. Empezó, como es natural, por constituir su gabinete ministerial, con la particularidad de que cuatro obreros ocuparon importantes carteras, por primera vez en la historia de Chile. Ellos

fueron Américo Zorrilla, en Hacienda; José Oyarce, en Trabajo y Previsión Social; Pascual Barraza, en Obras Públicas, y Carlos Cortés en Vivienda, comunistas los tres primeros y el cuarto socialista. El resto de los ministros eran maestros, empleados y profesionales. Ellos fueron: José Tohá, en Interior (PS); Clodomiro Almeyda en RR.EE (PS); Alejandro Ríos Valdivia, en Defensa (PR); Jacques Chonchol, en Agricultura (MAPU); Orlando Cantuarias, en Minería (PR); Pedro Vuscovic, en Economía (independiente); Lisandro Cruz Ponce, en Justicia (PS); Óscar Jiménez, en Salubridad (PR); Mario Astorga, en Educación (PR); Humberto Martones, en Tierras (PSD); Jaime Suárez, en la Secretaría general de Gobierno (PS) y Gonzalo Martner, en la Oficina de Planificación (Independiente).

En la primera reunión de su gabinete, Allende señaló las normas de austeridad a las que deberían estar sujetos los ministros y todos los funcionarios designados por él. Una de ellas fue la fijación de un máximo de 20 sueldos vitales en la Administración Pública, empezando por el sueldo del Presidente, la renuncia a los "pitutos" y el uso racional y justificado de los autos fiscales, limitado a las actividades propias de las funciones públicas de cada cual, con prohibición expresa de ser usado los fines de semanas para asuntos personales.

Se redujeron los viáticos de 80 a 15 dólares para todos los funcionarios públicos que salieran al extranjero en comisión de servicio.

La honestidad fue una de las características del Gobierno Popular. Todos los anuncios que hizo la Junta Militar, acerca de que tales o cuales ministros, parlamentarios y altos funcionarios tenían en su poder, cuando fueron detenidos, miles de dólares y millones de escudos, fueron miserables calumnias. La dictadura se empeñó en investigar sus haberes y hasta su vida privada en busca de hechos de corrupción que les permitiera denigrarlos. A Isla Dawson[3] mandó, incluso, a un abogado de Impuestos Internos, Jaime Figueroa, que durante varios días se dedicó a interrogar, uno por uno, a los personeros del gobierno y de la Unidad Popular que estábamos allí. Llegó muy altanero y retornó a Santiago con la cola entre las piernas. No pudo formularle a ninguno la más mínima acusación de deshonestidad.

Las primeras medidas adoptadas marcaron también el carácter del gobierno de la Unidad Popular. Sin mayores trámites, procedió a reincorporar a los obreros y empleados despedidos por conflictos del trabajo en la Línea Aérea Nacional y de la Empresa Nacional de Minería; suprimió los reajustes CORVI (Corporación de la Vivienda); retiró de la Contraloría más de 20 decretos de alzas de precios, derogó el alza de las tarifas eléctricas que hacía pocos días se

---

[3] La isla Dawson, situada al sur del Estrecho de Magallanes, habitada por una reducida Base Naval transformada en campo de concentración a pocos días del golpe.

había puesto en práctica con la autorización del gobierno de Eduardo Frei, estableció la gratuidad de la atención médica en postas y policlínicas, disolvió el "Grupo Móvil" de Carabineros, de carácter abiertamente represivo; indultó a 43 presos políticos, la mayoría miembros del MIR; terminó con las entradas liberadas al Estadio Nacional para parlamentarios y autoridades de gobierno, eliminó el oneroso gasto que significaba la vieja costumbre de cubrir las principales salas de los ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos con retratos del Presidente de la República (costumbre que restableció la dictadura y continúa hasta ahora).

Chile en el escenario mundial

A la semana siguiente de asumir Allende la Presidencia de la República, el 12 de noviembre de 1970, Chile reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba. Esta fue la primera reafirmación de soberanía e independencia del nuevo gobierno. Luego vinieron otras. La delegación chilena votó en la ONU a favor de la incorporación de la República Popular China al organismo supremo de la comunidad internacional, el país estableció relaciones diplomáticas con ella, con Nigeria, Mongolia, Tanzania y Libia, y concertó relaciones comerciales con Vietnam y con la República Popular de Corea. Todo esto lo hizo como reafirmación de la soberanía nacional y a contrapelo de los Estados Unidos, país con el cual el Gobierno Popular se empeñó, sin embargo, en mantener las relaciones en la mejor forma que fuese posible en el plano del mutuo respeto y del interés recíproco.

Nuestra Patria alcanzó entonces una significación internacional que nunca había tenido antes.

El Gobierno Popular se preocupó especialmente de impulsar el "Pacto Andino" y las relaciones diplomáticas y comerciales con todos los países de América Latina. Allende se entrevistó, en Salta y en Antofagasta, con el Presidente argentino Lanusse. Visitó Perú, Ecuador y Colombia. Estuvo en México en noviembre de 1972, donde firmó diversos acuerdos para incrementar la cooperación entre nuestros países, particularmente en el transporte marítimo y en la actividad industrial. Visitó Cuba, ocasión en la cual el gobierno de Fidel Castro dispuso la entrega gratuita a Chile de 50 mil toneladas de azúcar.

En la Asamblea general de la ONU, en diciembre de 1972, Allende destacó la buena posición alcanzada por el país en el plano latinoamericano y mundial. *"Chile* –dijo– *no está solo, no ha podido ser aislado de América Latina ni del resto del mundo. Por el contrario, ha recibido infinitas muestras de solidaridad y de apoyo. (...) En*

América Latina todos los esquemas de cooperación o integración económica y cultural de que formamos parte han continuado vigorizándose a ritmo acelerado y dentro de ellos nuestro comercio ha crecido considerablemente, en particular con Argentina, México y los países del Pacto Andino. No ha sufrido trizaduras la coincidencia de los países latinoamericanos, en foros mundiales y regionales para sostener los principios de libre determinación sobre los recursos naturales. Y frente a los recientes atentados contra nuestra soberanía, hemos recibido fraternales demostraciones de total solidaridad. A todos, nuestro reconocimiento. Cuba socialista, que sufre los rigores del bloqueo, nos ha entregado sin reservas, permanentemente, su adhesión revolucionaria". En seguida destacó que la gran mayoría de la comunidad mundial *"nos honró con la elección de Santiago como sede de la III UNCTAD" y recordó* que la reunión de los países no alineados celebrada en Guyana, en septiembre último, *"nos expresó su decidido apoyo frente a la agresión de que somos objeto por la Kennecott Copper"*[4].

Poco antes, en abril de 1972, en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo realizada en Santiago, Allende invocó la "Declaración de Lima de los 77" que señala como principio: "el reconocimiento de que todo país tiene el derecho soberano de disponer libremente de sus recursos naturales en pro del desarrollo económico y del bienestar de su pueblo; toda medida o presión externa, política o económica que se aplique contra el ejercicio de este derecho es una fragante violación de los principios de libre determinación y de no intervención, según lo define la 'Carta de las Naciones Unidas', y de aplicarse podría constituir una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales".

En primer lugar los trabajadores

Los trabajadores empezaron a tener arte y parte en el presente y en el futuro del país. La clase obrera, la clase más numerosa, explotada, avanzada y patriótica, ligada a las fuerzas productivas más modernas, asumió posiciones de poder junto a las otras clases y capas sociales interesadas en el progreso social, en el desarrollo cultural y en la justicia y la libertad verdaderas. Se produjo un cambio en la actitud de los hombres y mujeres del pueblo. Los trabajadores y las masas populares sintieron que el gobierno de Allende era su gobierno, que ellos tenían algo que hacer en su país más allá de vender su fuerza de trabajo en una fábrica o taller o lavar ropa ajena en una artesa de población. Los humillados y postergados por

---

[4] Kennecott Copper, empresa norteamericana que demandó al Estado chileno ante los tribunales de varios países de Europa a raíz de la nacionalización del mineral de Chuquicamata.

tantos años visualizaron y empezaron a sentir que también tenían derecho a vivir de otra manera y a ser tratados con respeto y dignidad.

La abogada Aída Figueroa que se desempeñara como Directora general del Trabajo, me dijo que la labor del Ministerio fue constantemente bombardeada por la reacción y fue difícil la misión política sindical del gobierno. Tres obreros ocuparon la cartera ministerial, *"José Oyarce, para mi gusto el más práctico; Luis Figueroa, el más visionario; Jorge Godoy, con estudios en materia de administración de empresas y eficiencia laboral, inoperantes en Chile, y Mireya Baltra, entusiasta y osada"*. Aída Figueroa me agregó que el sindicalismo tradicional, el sindicalismo histórico, estuvo a la altura, con buenos y responsables dirigentes, aunque no faltaron, entre ellos, quienes conciliaron con el oportunismo y no atacaron como se debía la corrupción en que incurrió alguna gente que en un momento recibió mercaderías como parte del salario y ésas mercancías las llevaba al mercado negro.

Allende tenía un gran aprecio por la organización de los trabajadores. Lo proclamó en muchos de sus discursos. Lo dejó de manifiesto al entregarle a la CUT la "Radio Balmaceda", cuya concesión estaba caducada por no ser capaz de pagar una deuda de 3 mil 800 millones de pesos. Al pasar a manos de la central obrera, la emisora transmitió con el nombre de "Luis Emilio Recabarren" hasta que fue silenciada y confiscada por la dictadura.

El Gobierno Popular firmó un convenio con la CUT en virtud del cual se crearon comisiones tripartitas, integradas por representantes de los trabajadores, empresarios privados y gobierno, estas comisiones se formaron en la construcción, en la industria gráfica, en las bombas que expenden bencina, en la industria textil y otras actividades privadas. Una de las más importantes comisiones tripartitas se constituyó en el área textil con participación de 2 mil 500 fábricas o talleres. Con ellas se convino en salarios mínimos por especialidad, en el pago de colación y de subsidios por enfermedad, en la indemnización por años de servicio y otros beneficios que se extendieron a decenas de miles de trabajadores industriales.

Mejores salarios y previsión social

Mejoraron las remuneraciones, incluidas las asignaciones familiares, las jubilaciones, las pensiones y montepíos. Las remuneraciones de los trabajadores del sector público, incluidas las de las municipalidades, fueron reajustadas de acuerdo al alza del costo de la vida más un 5% adicional y las remuneraciones

que eran iguales o superiores a dos sueldos vitales tuvieron el reajuste que correspondía al alza del costo de la vida más un 3% adicional. Por primera vez, en el primer año del Gobierno Popular se dio un reajuste que se cargó a las utilidades de los patrones y en el sector público no se financió con impuestos que gravaran al pueblo. Se trazó y aplicó una política coherente a favor de la pequeña y la mediana industria, del pequeño y mediano comercio y del mediano y pequeño empresario agrícola, a través del aumento de la capacidad de compra de las masas, de la rebaja del interés bancario, de la reorientación del crédito, de la estabilización del precio de las materias primas.

El salario mínimo pasó a ser, en términos reales, tres veces superior al de 1968, según reconoció posteriormente *El Mercurio*, en su editorial del 24 de septiembre de 1989. Las asignaciones familiares de los obreros, campesinos y empleados públicos, tuvieron un aumento porcentual más alto para acercarlas a las que recibían los empleados particulares. Con una asignación familiar se podía comprar 39 kilos de pan en 1973 –obviamente antes del golpe militar–, y en 1985 no más de 6 kilos, recordó el ex ministro del Trabajo José Oyarce, durante su intervención en el Seminario que realizó el Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, en conmemoración del 25° aniversario de la victoria de la Unidad Popular.

A la vez, se creó el Fondo Único de Asignaciones Familiares con vista a que todas llegaran a tener el mismo valor.

El alza del costo de la vida, que de enero a noviembre de 1970 era del orden del 30%, bajó a menos del 15% en el mismo período del año siguiente.

Como resultado de la política económica y social del Gobierno Popular, comprendidas las mejores remuneraciones que los trabajadores empezaron a ganar, cientos de miles de chilenos y chilenas tuvieron por fin acceso a bienes que hasta entonces eran un lujo. Consumir carne, vestir adecuadamente, calzar a los niños, disponer de catres y colchones, poseer un televisor o un refrigerador o una estufa a gas licuado, pasaron a ser aspiraciones realizables para todos. El aumento de la capacidad adquisitiva de la gente llevó a los industriales a elevar su producción para satisfacer las mayores demandas y esto condujo a la reducción de la cesantía a sólo el 3%, la cifra más baja desde que se iniciaron las estadísticas.

El gobierno de Allende se distinguió, además, por apoyar decididamente la organización de los trabajadores y su independencia. Le concedió personería jurídica a la Central Única de Trabajadores y facilitó la formación del Sindicato Único de Trabajadores de la Enseñanza.

Entre septiembre de 1970 y septiembre de 1973 aumentó de 1.448 a 1.841 el número de sindicatos industriales, de 2.536 a 3.733 el número de sindicatos

profesionales y de 774 a 1.118 el de los sindicatos agrícolas, según fuente de la Dirección general del Trabajo. Y la masa laboral, comprendidos los trabajadores agrícolas, que era de 630.392 el año 1970 pasó a ser en 1973 de 1.009.319.

El 30% de la fuerza laboral llegó a estar organizada y los trabajadores pasaron a elegir, en votación secreta, sus representantes en los Consejos de las Cajas de Previsión.

Se dispuso por Ley 17.392 la creación de la Caja de Previsión Social de Comerciantes, pequeños industriales, transportistas, artesanos, y todo tipo de trabajadores independientes. Entre ellos, además de los ya mencionados, estaban los artistas, los sacerdotes, las monjas, los pastores y ministros de todos los credos religiosos, los pequeños y medianos agricultores, los pirquineros, los pescadores artesanales, los suplementeros y los odontólogos independientes. Con la dictadura la ley desapareció.

El 21 de diciembre se creó el Consejo Nacional de la Juventud, encargado de promover la organización y de atender los problemas de los jóvenes. La juventud chilena, junto a los trabajadores, fue y se sintió protagonista de la historia y vio la posibilidad de hacer realidad sus más queridos sueños. ¡Cientos de miles de hombres y mujeres de hoy, muchachos y muchachas de entonces, recuerdan aquellos años como los más hermosos de sus vidas!

Durante el gobierno de Allende se logró el más alto grado de organización campesina. ¡Como que en 1972 había ya 278 mil campesinos sindicalizados, un 168% más que en 1969!

Salud y educación para todos

El cambio se operó en todos los terrenos.

Para el Gobierno Popular la salud pasó a tener preocupación prioritaria. Se crearon consultorios a razón de uno por cada 40 mil habitantes y uno de cada tres consultorios comenzó a atender noche y día a la gente, para lo cual se contrató a los médicos recién egresados y a los alumnos del último curso de medicina. Las consultas externas del Servicio Único de Salud aumentaron de 8 millones 900 mil en 1970 a doce millones 200 mil en 1971, año en el cual crecieron, asimismo, en un 32,2% las prestaciones de los servicios de urgencia. Aumentaron también la atención a los niños y a los enfermos de cualquier edad. Mejoró la alimentación en proteínas y calorías por persona. Bajaron las tasas de mortalidad infantil y de mortalidad en general.

La Universidad de Chile abrió carreras vespertinas de médicos y enfermeras universitarias. Aumentó el número de dentistas para cubrir la atención

social, creándose, además los cargos de odontólogos de zona en el Servicio Nacional de Salud. En concreto, durante el gobierno de la Unidad Popular se aumentó en un 6,6% el personal médico, en un 31,5% el número de odontólogos y en un 17,8% el de enfermeras. En 1971 se capacitaron 3 mil trabajadores para participar en los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad Industriales previstos por la ley. En los consultorios se daban talleres de primeros auxilios, de nutrición y de prevención de enfermedades. En las tareas referidas a la salud entraron a colaborar juntas de vecinos, los centros de madres, los sindicatos y clubes de barrio.

Un tren, habilitado especialmente para llevar atención médica y dental gratuita a campesinos y pobladores sin acceso a consultorios y hospitales, recorrió la zona central y sur del país durante aproximadamente dos años.

En 1972, el gasto en salud correspondió al 3,5% del presupuesto. Durante la dictadura bajó al 0,6%.

En el vasto campo de la educación, se empezó por reafirmar la gratuidad de la matrícula en la enseñanza básica y media, en tanto que en la Universidad de Chile miles de estudiantes quedaron exentos de pagarla y los que tenían que hacerlo, cancelaban sumas por lo general modestas, pues lo hacían de acuerdo a los ingresos de sus padres.

En 1972 el gasto en educación alcanzó al 7,2% del PIB, muy superior al que existe actualmente, no obstante la recuperación de su monto después de la caída que tuvo en los años de la dictadura.

Ya en el primer año del Gobierno Popular, la escolaridad alcanzó al 94% en los niños de 6 a 14 años y a un 35% en los jóvenes entre 15 y 19 años.

En la educación básica se distribuyeron gratuitamente más de seis millones 417 mil textos escolares en los dos primeros años del gobierno popular. Con los entregados en 1973, el total llegó a ocho millones. Igualmente gratuita fue la distribución de libros y demás útiles escolares y el desayuno se extendió a todos los alumnos de la educación básica y el almuerzo para los alumnos de más bajos recursos.

Se creó el Programa Experimental de nivelación básica para obreros y alrededor de 4 mil trabajadores recibieron cursos de nivelación media y carreras tecnológicas.

El convenio CUT-UTE inspiró y patrocinó un sistema nacional de educación que llevó la Universidad a las fábricas, a los puertos, a las minas, haciendo posible que los alumnos que alcanzaran el grado de Técnico Universitario siguieran estudios de ingeniería. La Universidad Técnica del Estado estaba dirigida entonces por Enrique Kirberg, quien fue el rector que más empeño le puso en abrir

las puertas de la educación superior a los muchachos y muchachas provenientes de familias modestas. En 1972 había 6 mil estudiantes y en 1973 ocho mil alumnos que estudiaban en esas condiciones. Conforme a ese mismo convenio, fue posible que mil 500 trabajadores que tenían licencia secundaria siguieran carreras universitarias en la Universidad Técnica. También lo hicieron 150 miembros de la Aeronáutica (ha de saberse que la Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago, USACH, derivó de la Escuela de Artes y Oficios, que funcionaba en el mismo lugar, y que de ella Kirberg fue expulsado allá por el año 1939 por un escrito suyo en un diario mural que no fue del agrado de la rectoría de ese tiempo y estuvo, también, relegado en Aysén por el gobierno de Alessandri Palma).

En la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, bajo el decanato del profesor Alejandro Jadresic, se iniciaron en abril de 1972 carreras vespertinas para 300 trabajadores en diversas especialidades. Desde que se firmó el convenio entre la CUT y el Servicio Nacional de Salud, en junio de 1972, hasta fines de ese mismo año, se capacitaron alrededor de 14 mil trabajadores en riesgos ocupacionales, mientras las mutuales, que tenían muchos más recursos, capacitaron en ese período solamente a 3 mil.

Siguió disminuyendo el número de analfabetos. Sólo en 1971 fueron alfabetizadas 20 mil personas. El presupuesto fiscal para educación pasó de 405 a 617 millones de dólares (dólares de 1976).

Los mejores alumnos de la enseñanza básica de todo el país eran recibidos en los veranos del 71-72 y 73 en el Palacio Presidencial de Viña del Mar.

Mediante becas especiales pudieron ingresar a las escuelas universitarias muchos hijos de obreros y campesinos y también hijos de soldados. Con tal fin el Gobierno Popular instituyó la "Beca René Schneider".

Justicia para el pueblo mapuche

En marzo de 1971, con la firma del Presidente Allende y de sus ministros Jacques Chonchol y Humberto Martones, entró al Congreso Nacional un proyecto a favor del pueblo mapuche. Un año y medio más tarde, el 15 de septiembre de 1972, se convirtió en la Ley 17.729. Aunque el proyecto fue modificado y desmejorado por el Parlamento, en el cual la Unidad Popular no tenía mayoría, la ley aprobada fue particularmente significativa para nuestro pueblo originario. Como señalara en 1999 la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, "recogía muchas de las aspiraciones que le fueron presentadas (al Gobierno) por el propio movimiento mapuche en múltiples reuniones, (y) entre sus principales aportes se encontraba el reconocimiento de la existencia de

tierras usurpadas y el establecimiento de los mecanismos mediante los cuales se procedería a su restitución[5]".

En la Novena Región se intensificó especialmente la Reforma Agraria, para cuyo efecto el ministro de Agricultura, Jacques Chonchol, trabajó en terreno durante cierto tiempo. Se restituyeron a los mapuches 70 mil hectáreas usurpadas por los terratenientes, se crearon 37 cooperativas de producción agrícola en las comunidades de Malleco y Cautín y numerosas cooperativas de artesanos a las cuales el INDAP les compraba su producción a precio justo. Se incorporaron al proceso de reforma agraria 370 familias mapuches de Cautín, importante cantidad si tenemos presente que el gobierno de Eduardo Frei Montalva sólo incorporó 60. En 1973 se otorgaron 17 mil becas para estudiantes mapuches desde el cuarto grado primario hasta la universidad; se organizaron centros de alfabetización que lograron contar con 27 mil alumnos de ambos sexos, que habían empezado a leer y escribir en ese período. Se crearon 70 postas de primeros auxilios en las comunidades, en conjunto con el Servicio Nacional de Salud y se fundó la Corporación de Desarrollo Indígena.

La Ley 17.729 contempló, además de la recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes, la formación voluntaria de comunidades cooperativas de producción, y creó el Instituto de Desarrollo Indígena, que tenía como misión formar centros educacionales de carácter politécnico para los hijos de los mapuches, promover la enseñanza del mapudungún en las escuelas ubicadas en las comunidades o cerca de ellas, defender las tradiciones culturales de nuestros aborígenes y entregar becas a los jóvenes para su ingreso a las universidades. El Instituto de Desarrollo Indígena se propuso también crear un hospital central y postas de primeros auxilios en las comunidades, formando a la vez personal médico y paramédico mapuche, tarea que no alcanzó a cumplir a causa del golpe del 11 de septiembre.

La Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco reconoció las realizaciones del Gobierno Popular. En su informe del año 1999 dice expresamente: "El gobierno de Salvador Allende fue la primera oportunidad real que tuvieron los mapuches para solucionar la difícil situación de marginación política, social y territorial que les afectaba desde la pérdida de su independencia". Añade que "a partir del golpe de Estado que derrocó al gobierno de Allende y del inicio de la dictadura militar, la mayoría de las tierras entregadas al pueblo mapuche fueron devueltas a sus antiguos propietarios o sacadas a remate público". Mediante el Decreto-Ley 2.568 del año 1979 la dictadura impuso una vuelta atrás, derogó la Ley dictada durante el Gobierno de la Unidad

5 Informe de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco, año 1999.

Popular y dio luz verde a la subdivisión de las comunidades. Añade la Coordinadora que después de la dictadura surgió en los mapuches "la esperanza de que el nuevo régimen democrático trajera consigo un cuadro de garantías, de derechos y de libertades políticas más favorable para las reivindicaciones históricas de nuestro pueblo. En un comienzo, todo parecía indicar hacia esa dirección. El año 1989, el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin Azócar, se comprometió formalmente, con los dirigentes mapuches en la ciudad de Nueva Imperial a legislar durante su gobierno en favor del desarrollo y la libertad de los pueblos indígenas y a establecer nuevas formas de relación entre ellos y el Estado chileno. El mismo compromiso estipulaba, entre otras cosas, que el nuevo gobierno reconocería mediante un proyecto de reforma constitucional a los mapuches y demás pueblos indígenas como sujetos específicos al interior del país; esto es, como entidades jurídico-políticas que existen como tales al interior del Estado y a las cuales les corresponden no sólo los derechos de los ciudadanos, sino que también los derechos de los pueblos que se encuentran consignados en diversos instrumentos jurídicos internacionales, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes, y los Pactos de Derechos Humanos de las Naciones Unidas". Y a continuación afirma que la Ley Indígena 19.253, dictada en octubre de 1993, definió "al pueblo mapuche como una etnia con ciertos derechos menores, pero sin la posibilidad de escoger libre y soberanamente su destino... (y) .lo que es aún más preocupante, (después) se ha producido un resurgimiento de las violaciones de derechos humanos en contra de los mapuches por parte del Estado. (...) Dirigentes de comunidades que mantienen disputas territoriales con empresas forestales y de organizaciones que reclaman por la autonomía política de nuestro pueblo han sido particularmente perseguidos y encarcelados. La mayoría de ellos están siendo juzgados por tribunales militares y acusados de delitos violentos mediante montajes incriminatorios, pruebas fraudulentas, testigos sin rostro o confesiones obtenidas por medio de la tortura u otras formas de malos tratos".

Los mapuches tienen su propia lengua –el mapudungún–, sus vernaculares expresiones artísticas –musicales y artesanales–, sus vestimentas, sus cementerios, sus tótem, sus costumbres ancestrales. El vocablo mapuche está compuesto de dos palabras, *mapu* que significa tierra y *che*, gente. La naturaleza, la tierra son, para el mapuche, parte de su vida y de su espiritualidad. Su razón de ser y de existir en el mundo viene de su tierra, donde crece el canelo, su árbol sagrado, y donde abunda el pehuén (la araucaria) que les ofrece el alimento

diario, el piñón, que es como el pan de cada día. Reúnen todos los requisitos para ser reconocidos como minoría nacional.

La forma en que el pueblo mapuche ejerza su derecho a su autonomía dentro del Estado de Chile y lo que en este terreno corresponda hacer en relación a los rapanuís y los aimarás, deben ser considerados y convenidos con estos pueblos y etnias originarios. Lo que no pueden hacer los gobernantes es seguir ignorándolos y menos continuar tratando a nuestros compatriotas mapuches como delincuentes y terroristas, persiguiéndolos y encarcelándolos, todo ello con el respaldo de Endesa, la hidroeléctrica española, y de las grandes empresas madereras, varias de ellas multinacionales, que hoy ocupan las tierras donde nacieron y se criaron los hijos de Lautaro y Caupolicán, tierras que cada día son invadidas por el pino insigne, cuyo monocultivo provoca un empobrecimiento en la biodiversidad y en la disponibilidad de alimentos que desde tiempos inmemoriales son parte del consumo de nuestros aborígenes.

Los libros y las artes para el pueblo

En los años del Gobierno Popular la cultura recibió un impulso extraordinario. Se expropió la empresa Zig-Zag, transformándose en una editora estatal que pasó a llamarse Quimantú, voz mapuche compuesta por *Quim* que significa saber y *Antú*, sol. Etimológicamente se refiere a la idea de conocimiento, y en general al acceso de las mayorías a la cultura. Como si le hiciera honor a su nombre, Quimantú sólo en dos años publicó más de 12 millones de ejemplares de las mejores obras de la literatura nacional y universal. Por primera vez los mineros del carbón pudieron leer *Subterra*.

Nunca antes las ediciones habían alcanzado tirajes de decenas de miles de ejemplares, ni los libros tuvieron un precio tan bajo. El precio de los minilibros de la colección *Quimantú Para Todos* correspondía al valor de una cajetilla de cigarrillos Hilton. Por camión se mandaron a Chuquicamata miles de ejemplares de obras de diversos autores pensando que se venderían en un mes y se vendieron en un santiamén.

De los textos de estudios el 50% se distribuían gratuitamente y el resto se comercializaba en librerías. Desde la llegada del Gobierno Popular el 100% de esos textos se entregó gratis a todos los escolares de la enseñanza básica.

Dados los altos tirajes que alcanzaban los libros de los autores nacionales, se llegó a considerar si se mantenía el mismo porcentaje que antes se pagaba por derecho de autor. Lo que este derecho significaba en dinero era tan importante que un día el escritor Manuel Rojas devolvió un cheque porque era mucha plata.

Después del golpe la dictadura hizo embalar muchos libros de Gabriela Mistral, Jack London, Pablo Neruda y otros autores y se los entregó a la Papelera como material de reciclaje.

Quimantú tenía maquinarias de fabricación norteamericana. Cuando tuvieron problemas de repuestos no pudieron adquirirlos en Estados Unidos. Pero los fabricaron los propios trabajadores que en esto y en todo se empeñaron por hacer que la empresa funcionara mejor que cuando estaba en manos privadas.

El teatro llegó más a la gente. En los marcos del convenio CUT-UTE, el Teatro Nuevo Popular realizó un total de 37 funciones en una gira por las tres regiones más septentrionales del país, para luego llevar el arte escénico a los Centros de Reforma Agraria, asentamientos e industrias de la Región Metropolitana.

Adquirió mayor auge el movimiento musical que fundía los valores auténticos del folklore con la experiencia de músicos de formación académica, y surgió una rica y variada actividad pictórica que tuvo caracteres de masas.

El cine recibió un buen impulso. Surgieron nuevos cineastas y se produjeron más de 20 largometrajes, entre ellos *Palomita Blanca* de Raúl Ruiz. Bajo la dirección de Miguel Littin se creó en Chile Films un centro productor y distribuidor dirigido a los sindicatos y demás organizaciones populares de masas. (Dicho centro y, ciertamente, Chile Films, que era una empresa estatal, pasó a manos privadas con la dictadura). Por su lado, las Juventudes Comunistas crearon el sello discográfico, DICAP, que editó millares de discos, divulgando la música chilena y latinoamericana.

Como en el caso de la salud, se montó un "Tren de la Cultura" que recorrió buena parte del país, con la participación de artistas y estudiantes de artes.

La artesanía fue apoyada y estimulada en todas sus expresiones.

Había otro ambiente. Primaba el deseo de estudiar, de saber más y de darle al espíritu los disfrutes del arte y la cultura.

Atención preferente a la madre y al Niño

Una de las 40 medidas que la Unidad Popular señaló como de aplicación inmediata fue la entrega de medio litro de leche diario para cada niño chileno.

El compromiso del medio litro de leche se mantuvo contra viento y marea durante los Mil 41 días que duró la Presidencia de Salvador Allende. Cuando la producción interna no dio abasto, se importó leche en polvo. Esta subió de precio y escaseaban las divisas, pero ningún niño dejó de recibir su medio litro

de leche. En 1970, antes de constituirse el Gobierno Popular, habían recibido leche gratuitamente 650 mil personas, particularmente niños. En 1971 se distribuyeron gratuitamente 47 millones de litros, una cantidad semejante en 1972 y, a pesar de todas las dificultades, 49 millones en 1973, llegando a favorecer a 3 millones 600 mil niños.

En 1973 entraron en funciones alrededor de 400 jardines infantiles que atendían a cerca de 70 mil niños, como fruto de una ley propiciada por el movimiento femenino, ley que llevó la firma del Presidente Allende y de su Ministra del Trabajo, Mireya Baltra.

Había más de 20 mil Centros de Madres a lo largo de todo el país, muchos de ellos creados por el gobierno de la Democracia Cristiana. Agrupaban a 600 mil mujeres. En la *Revista Principios* N°150 de marzo-abril de 1973, Elena Pedraza, una de las primeras kinesiólogas chilenas y fundadora de la Escuela de Kinesiología en Cuba, destacaba la labor de las madres como voluntarias de la salud en las campañas de vacunación contra las enfermedades de la infancia y por la higiene ambiental, en los jardines infantiles y en los esfuerzos por la superación de la mujer a través de cursos de Auxiliares de Párvulos y Manipuladoras de Alimentos. Los convenios CUT-UTE y COCEMA-UTE permitieron que se graduaran mil 500 auxiliares de párvulos.

La mujer tuvo también un trato prioritario. En su favor se estableció por ley que el montepío, que equivalía al cincuenta por ciento de la jubilación que recibía o habría recibido su esposo fallecido, aumentara en el ciento por ciento, conquista que la dictadura derogó por completo y que aún no se restablece plenamente. Para ella se amplió, además, a 4 semanas el permiso por natalidad antes del parto y a 6 después del parto.

Se elevó de 12 a 20 escudos el salario mínimo industrial; estableciéndose igual salario para el hombre y la mujer. "Y serán los propios trabajadores de la industria –dijo el Presidente Allende– los que impidan al mal patrón discriminar en la remuneración que debe recibir la mujer. No sólo será la mujer la que debe defender sus derechos, sino que será la obligación de los trabajadores no permitir, no tolerar, no aceptar que se explote más a la mujer. Por eso es que yo llamo a la responsabilidad de los trabajadores. Ahora comprenderán porque vamos a crear – esta semana enviaré el proyecto al Congreso– el ministerio de protección a la familia. Cuántas veces le dijimos a la mujer chilena: A ustedes les han hecho creer que nosotros queremos desquiciar a la familia –y agregó–: ¿De qué familia están hablando, compañera? ¿Es una familia real la que tiene la mujer campesina, la mujer de los grandes sectores trabajadores? No, no puede haber familia normal donde falta lo esencial para la existencia; no pueden asentarse el vínculo y el afecto cuando la mujer, joven todavía, envejece prematuramente; cuando pasa las

24 horas del día desgreñada y sucia; cuando tiene que ir acarrear el agua para el consumo elemental; cuando tiene en una pieza 4 ó 6 personas; cuando los hechos más íntimos de la familia se practican casi en presencia de los hijos, conscientes estos ya de lo que son las relaciones humanas".[6]

El proyecto sobre el Ministerio de la Familia anunciado por Allende en el mes de enero del 71 sólo se pudo convertir en ley pocos días antes del golpe militar, sin que siquiera pudiera ser promulgado. La dictadura de Pinochet no lo tomó en cuenta. Pero de la historia de Chile no puede borrarse el hecho de que el gobierno de la Unidad Popular, cuya aspiración final era el socialismo y éste era motejado de enemigo de la familia, quiso crearlo para darle más fuerza, categoría y medios a su política a favor de las madres y sus hijos.

Carmen Gloria Aguayo encabezaba el Comando de Mujeres de la Unidad Popular, y estuvo oficialmente dedicada a impulsar el proyecto. "La iniciativa –me cuenta– *nació del MAPU, partido que yo representaba, y el proyecto de cuya redacción estuvo a cargo José Antonio Viera Gallo fue enviado al Parlamento a principios de marzo de 1971. Tenía una aceptación muy amplia. Ningún político quería aparecer oponiéndose a tal iniciativa"*

Me agrega que cuando el proyecto tuvo el triste destino de quedar empantanado en el Congreso, como antes he mencionado, se trabajó a pesar de la falta de recursos por ausencia de la ley. Se propusieron juntar varios organismos estatales afines a los intereses de la familia. Estos eran la Promoción Popular, creada por el gobierno de Eduardo Frei y dependiente de la Presidencia de la República; la Junta de Jardines Infantiles; la Oficina Encargada de los Niños en Situación Irregular, que dependía del Ministerio de la Salud, y la Asistencia Social, dependiente del Ministerio del Interior.

Carmen Gloria Aguayo fue nombrada Directora de Promoción Popular, que existía en todas las provincias, y a partir de ese organismo se impulsó la organización de los Centros de Madres que formaron agrupaciones a nivel de la población y luego Uniones Comunales, logrando crear la primera Federación Provincial que abarcó en Santiago a decenas de miles de mujeres. Los programas de salud estuvieron a cargo de monitoras voluntarias, se crearon lavanderías populares donde las dueñas de casa usaban por turno una máquina lavadora. Muchas madres aprendieron a participar en la creación de nuevos jardines infantiles haciendo el catastro de su vecindario y ofreciendo ayuda para cuidar a los niños. Ayudaron también a escoger entre las familias más pobres a los grupos de mujeres y niños que irían a los balnearios populares de los cuales

---

[6] Discurso de Salvador Allende en la inauguración de Jornadas de Discusión Popular, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile de Valparaíso, enero de 1971.

hablo más adelante. Las monitoras preparaban también actividades culturales, espectáculos teatrales, música, debates, además de gimnasia y deportes.

Viviendas para los más necesitados

Tras el propósito de atender los problemas que más afligen a la familia, el gobierno de la Unidad Popular echó mano de todos los medios que estaban a su alcance para enfrentar el problema habitacional. Faltaban 480 mil viviendas, déficit que se elevó a 520 mil con el terremoto de julio de 1971 que afectó principalmente a lo que es hoy la Quinta Región. Pues bien, ya en el primer año de Gobierno se lograron construir 73 mil viviendas de las 83 mil que se habían programado. En los casi tres años del Gobierno Popular se logró un aumento promedio de un 8% anual en las construcciones habitacionales. Se hizo también un gran esfuerzo en cuanto a establecimientos educacionales, lográndose construir 221 mil metros cuadrados en 1971 contra 79 mil del año anterior.

En construcción de viviendas, el Gobierno Popular superó a todos los gobiernos precedentes, levantó 156 mil viviendas con un promedio de 52 mil unidades anuales, cifra claramente superior a las 39 mil levantadas anualmente durante el período de Eduardo Frei Montalva y casi el doble, como promedio anual, de las 30 mil registradas durante la dictadura de Augusto Pinochet.

De acuerdo a los indicadores utilizados por las Naciones Unidas para medir la construcción habitacional, durante el Gobierno Popular la edificación de viviendas llegó a la cifra de 5,29 viviendas por cada mil habitantes, en tanto que durante Frei Montalva fue de un 4,4 y en la dictadura de 3,31.

Si bien es importante el número de viviendas construidas por el gobierno de la Unidad Popular, más significativo es el hecho de que fueron asignadas preferentememente a los sectores de más bajos ingresos, dándoles prioridad en el primer programa habitacional a las familias instaladas en las tomas o campamentos y luego a los allegados y a las familias favorecidas con la Operación Sitio durante el gobierno anterior y que no habían podido levantar sus casas.

Como los sin casa reclamaban su derecho a permanecer en las comunas donde vivían rechazando el traslado a otros sectores, lo que conlleva una ruptura con sus lazos de arraigo sociales y muchas veces la pérdida de su fuente de trabajo, se resolvió construir viviendas a los sin casa que vivían en Las Condes junto a las riberas del Mapocho. Así surgió la Villa Carlos Cortés, nombre del fallecido ministro socialista de la Vivienda, entregándose en los años 1972 y 1973 mil 38 departamentos. La instalación de las primeras familias dio origen a una fiesta popular emotiva y brillante, grandes fogatas iluminaron la noche del

barrio alto con la quemazón de las tablas de madera que los había albergado hasta entonces, mientras jóvenes y niños subían y bajaban las escaleras ayudando en la mudanza y otros protagonizaban un espectáculo artístico al aire libre. Las familias favorecidas cumplieron con todos los requisitos de la postulación y cancelaban mensualmente los dividendos en una oficina instalada especialmente por la CORHABIT en uno de los bloques. Entre los años 75 y 78 la dictadura procedió al desalojo de todos los habitantes de la Villa, algunos fueron lanzados a la calle o enviados a viejas poblaciones del Ejército situadas en Renca o en La Granja, cuyos moradores, en su mayoría suboficiales del Ejército, pasaron a ocupar los departamentos de los pobladores desalojados a la fuerza. Y para colmo de infamia, en 1997 el Ejército trasladó a otro lugar al personal de sus filas que había sido llevado a Las Condes y vendió en 80 millones de dólares el terreno con todos sus edificios a una sociedad inmobiliaria. La inmobiliaria, por supuesto, demolió los edificios para dar curso a un negocio más rentable, la construcción de un gran centro comercial. El entonces Alcalde de Las Condes encabezó la ceremonia, no la ceremonia de colocación de la primera piedra, sino la de demolición de los muros a raíz de lo cual el diario *Las Últimas Noticias* del 16 de julio de 1997 escribió lo siguiente "Joaquín Lavin, de un plumazo derribó un mito: el anhelo del Gobierno de la Unidad Popular de abrir las comunas más pudientes a los sectores más desposeídos".

Se fijó por ley un tope máximo del 20% del salario para el pago de los dividendos de las viviendas de menos de 90 metros cuadrados y a la vez fue derogada la reajustabilidad de los dividendos.

Antes los programas de construcción de vivienda no tenían destinatarios determinados, lo que daba origen a un largo y burocrático proceso de asignación. Durante la Unidad Popular se localizaban previamente a los grupos más necesitados, tarea que se hacía de acuerdo con los dirigentes de los pobladores. Cada vivienda que se iniciaba estaba preasignada. Se garantizaba el cumplimiento del compromiso mediante Certificados de Localización emitido por el Ministerio de la Vivienda y firmados por el propio ministro y el Comité de Pobladores, en los cuales se consignaba el número y tipo de vivienda a construir en cada terreno.

Se crearon también los Comités Paritarios, formados por el delegado comunal de la CORHABIT y representantes de los Comités de Pobladores, que entregaban las viviendas preasignadas en cada proyecto. Además los trabajadores de la construcción entraron a formar parte de las empresas de construcción estatal que organizaron la CORVI (Corporación de la Vivienda) y la CORMU (Corporación de Mejoramiento Urbano).

Se dio un fuerte impulso a los sistemas industrializados de construcción de viviendas, implementados con gran esfuerzo en los años precedentes por

empresas de tamaño mediano como "Xilostécnica Moreno Vial", "Simples Cepol" y otras que construían escuelas y viviendas sociales, en especial para regiones aisladas, de difícil acceso y escasez de mano de obra.

La construcción de viviendas prefabricadas adquirió un importante impulso con la Planta de Prefabricados de Hormigón que le donó a Chile la Unión Soviética a raíz del terremoto de 1971 y que sólo alcanzó a terminar algunos conjuntos habitacionales en El Belloto de Quilpué, donde se instaló dicha planta. Desgraciadamente con la dictadura ésta y todas las plantas de prefabricados desaparecieron.

El Gobierno Popular se preocupó de estimular la construcción de viviendas –ya sea individualmente o a través de cooperativas– destinadas a los sectores medios de la población. En este terreno le prestó gran apoyo al SINAP, Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, que presidía la arquitecta Ana María Barrenechea y que financiaba la construcción de unas 20 mil viviendas anuales sin aportes fiscales. Dicho sistema había servido de modelo para el establecimiento de instituciones análogas en otros países de América Latina, pues constituía una importante fuente de actividad profesional para arquitectos y constructores y facilitaba la actividad de pequeños empresarios. Operó exitosamente durante el gobierno de Allende, siendo destruido posteriormente por los grupos económicos bajo el amparo de la dictadura.

Es especialmente demostrativo de la sensibilidad social del gobierno de la Unidad Popular el hecho de que haya levantado en tiempo record 17 balnearios populares en las playas, cada uno con capacidad para hospedar a 500 personas. A los cuales pudieron ir miles de modestas familias por turnos de 15 días. Estos balnearios contaban con asistentes sociales, animadores y profesores de educación física encargados de dirigir variados programas culturales y de entretenimiento para niños y adultos. Dos de esos balnearios, el de "Ritoque" y el de "Puchuncaví" fueron convertidos en campos de concentración por la dictadura y, tras el término de estos, desmantelados por completo. Los 13 restantes fueron entregados a diversas ramas de las Fuerzas Armadas para usos diferentes o vendidos a privados.

También se construyeron balnearios populares a la orilla de algunos ríos como el de Puente Negro y el de Tinguiririca, situados a las afueras de San Fernando. Se habilitó la piscina de Chacarilla en el cerro San Cristóbal, adaptándose con tal fin un estanque de hormigón de 90 metros de largo, destinado al riego y que permanecía en desuso. Y se recuperó el viejo Parque Cousiño, hoy Parque O'Higgins de 54 hectáreas, que permanecía abandonado; se le puso un sistema de riego automático y se plantaron en él 20 mil nuevos árboles y arbustos. Se amplió su laguna y se habilitó el llamado "Pueblito" con diversos restaurantes y recintos destinados a centros culturales y de recreación.

Resumiendo, se puede decir, como lo expresara el arquitecto Miguel Lawner, que fuera Director Ejecutivo de la CORMU, en el Seminario organizado por el CENDA en noviembre del año 2000, "las viviendas levantadas en esos apasionantes mil días se extienden a lo largo de todo Chile. Han transcurrido 30 años y la calidad de su construcción les ha otorgado una vida envidiable, otorgándoles a sus beneficiarios una propiedad que se ha valorizado con el tiempo. La eficaz fiscalización ejercida por los organismos fiscales y municipales garantizó este resultado. Situación que contrasta con el increíble deterioro experimentado en la construcción de las viviendas sociales en los años posteriores".

2.- Las grandes transformaciones.

"Desde el punto de vista interno, nosotros los chilenos, pensamos que no podemos romper este círculo vital que oprime a Chile sin haber recuperado nuestras riquezas básicas de manos del capital foráneo, si no terminamos, si no estatizamos el crédito, si no controlamos el comercio de importación y exportación y si no hacemos una profunda y auténtica reforma agraria. De allí entonces que la solución de nuestros problemas implica aprovechar los excedentes de nuestra economía, producir para las necesidades esenciales del pueblo y evitar que en el esfuerzo se beneficie una minoría. Por eso es que nosotros decimos que esta es una revolución, porque el poder que estaba en una clase social ha pasado a otra clase social, que es la mayoría, que son los trabajadores. Entendemos por trabajadores desde el campesino hasta el profesor universitario sin negar que la columna vertebral sean los obreros de la ciudad y el campo". (Conferencia de prensa, Santiago 5 de mayo de 1971.)

El cobre de Chile para los chilenos

La preocupación central del Gobierno Popular, su objetivo supremo, no era otro que el de terminar con la pobreza, el atraso y la desigualdad sociales, y lograr que todos los habitantes de nuestra tierra pudieran disfrutar de los bienes de la naturaleza, de los avances de la ciencia y de la técnica, del trabajo del conjunto de la sociedad. Por eso fue mucho más allá de las medidas que de inmediato podía adoptar y adoptó; entró a poner las riquezas nacionales al servicio de todos los chilenos y a terminar con los grandes monopolios, llevando a la práctica las transformaciones de fondo contempladas en el Programa de la Unidad Popular.

Con esta orientación tomó el toro por las astas desde el primer instante.

La nacionalización del cobre fue la transformación más importante, vital, histórica, acometida por el Gobierno Popular. El proyecto respectivo que, para tal fin, se envió al Parlamento con la firma del Presidente de la República y la de su ministro de Minería, el radical Orlando Cantuarias, se convirtió en breve tiempo en una reforma constitucional convenida con la Democracia Cristiana. El proyecto se conoció primero en la Comisión de Minería del Senado, donde la

posición del Ejecutivo se dio a través del abogado Eduardo Novoa Montreal y de Sergio Insunza, también abogado y Subsecretario general de Gobierno. La participación que en la Comisión de Minería tuvo su Presidente, Renán Fuentealba, senador democratacristiano "fue –me dijo Insunza– particularmente notable". La ley de nacionalización del cobre –subrayó– "fue la ley de oro del gobierno; nada hicimos mejor que eso".

Fue presentado al Parlamento el 22 de diciembre de 1970, aprobado en abril de 1971 por amplia mayoría en la Cámara y en el Senado y ratificado 60 días después, el 16 de julio, por la unanimidad de los diputados y senadores que concurrieron a la reunión del Congreso Pleno. La derecha no se atrevió entonces a oponerse a tan patriótica exigencia.

El abogado independiente Eduardo Novoa Montreal, que fue cercano colaborador de Allende en todo lo que tuvo que ver con la nacionalización del cobre, dice en su libro *Chile en la Legalidad* que la Ley 17.450 que en 1971 permitió recuperar para el país su principal riqueza extractiva, "consagra constitucionalmente la nacionalización como un medio de recuperar o adquirir para el Estado riquezas naturales básicas y elementos para explotarlas, mediante el pago de una indemnización que se ajuste a las posibilidades financieras de la nación " y, a la vez, "permite deducir de la indemnización que llegue a pagarse las 'rentabilidades excesivas' que hubieran obtenido esas entidades (las empresas extranjeras) en años anteriores".

Como las ganancias excesivas que habían obtenido las grandes empresas del cobre Anaconda y la Kennecott, propietarias de "Chuquicamata", "El Salvador" y "El Teniente" eran muy superiores al valor de las indemnizaciones que habría de pagárseles, el gobierno de la Unidad Popular, conforme a la ley, no les dio un solo peso. La ley había establecido el 12% como límite razonable de las utilidades, y las empresas mencionadas excedían en mucho ese margen. Sólo fue indemnizada la "Compañía Minera Andina" con 4 millones 800 mil dólares.

"Las utilidades que habían obtenido en el transcurso de los últimos 15 años algunas de las empresas nacionalizadas eran tan excesivas –dijo el Presidente Allende en la Asamblea general de las Naciones Unidas en diciembre de 1972– que al aplicárseles como límite de utilidad razonable el 12% anual, esas empresas fueron afectadas por devoluciones de significación. Tal es el caso, por ejemplo, de una filial de Anaconda Company que, entre 1955 y 1970, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 21,3% anual sobre su valor de libro, mientras las utilidades de Anaconda en otros países alcanzaban sólo un 3,6% al año". Y a continuación mencionó a la "filial de Kennecott Copper Corporation que, en el mismo período, obtuvo en Chile una utilidad promedio del 52% anual, llegando en algunos años a utilidades tan increíbles como el 100% en 1967, el 115% en 1968

y más del 200% en 1969", mientras "el promedio de las utilidades de la Kennecott en otros países alcanzaba, en la misma época, a menos del 10% anual".

La producción de cobre de la gran minería, que fue en 1970 de 541 mil toneladas, subió en 1971 a 571 mil, a 593 mil toneladas en 1972 y a 615 mil en 1973. En los tres años aumentó en casi un 20%.

La nacionalización del cobre le permitió a Chile disponer de cuantiosos recursos financieros. Gonzalo Martner afirma en su libro *El Gobierno del Presidente Salvador Allende* que desde 1972 hasta 1985 Chile obtuvo 20 mil seiscientos millones de dólares que quedaron íntegramente en beneficio del país.

En los años 60, el 70% del valor de las exportaciones correspondía al cobre. En 1971 el precio del cobre fue de 64 centavos de dólar la libra, bajando al año siguiente a 49 centavos.

Según Max Nolf, quien fuera el primer vicepresidente de CODELCO, Chile produjo 700 mil toneladas de cobre el último de los años 60 y en toda esa década las empresas norteamericanas se llevaron fuera del país una cantidad superior a los 10 mil millones de dólares, más que el valor total del patrimonio nacional de ese entonces.[7]

Así pues, los antiguos propietarios de las minas se llevaban la tajada del león, cientos de millones de dólares y a veces más de mil millones al año, por concepto de utilidades.

Más aún, las grandes empresas cupreras, la Anaconda, la Kennecott y la Bramen, manipulaban a sus anchas los precios en contra de los intereses chilenos. En los años de la segunda guerra mundial se las arreglaron para mantener en 11,5 centavos de dólar la libra de cobre, con una pérdida de 500 millones de dólares para el Estado. Durante la guerra de Corea lo mantuvieron en 24,5 centavos, con una pérdida para Chile que se calcula entre 200 a 300 millones de dólares y durante la guerra de Vietnam le entregaron a Estados Unidos, como reserva estratégica, 90 mil toneladas de cobre a 36 centavos la libra en circunstancias que en la Bolsa de Londres se cotizaba entonces a 60 centavos, lo que significó otra pérdida para Chile superior a 50 millones de dólares.

La nacionalización de las grandes minas de cobre puso fin por varios años al saqueo imperialista de nuestra principal riqueza y contribuyó con millones de dólares a financiar los gastos del Estado. En el artículo de José Cademártori, publicado por *El Siglo* en una de sus ediciones del mes de julio del 2001, se dice que gracias a la nacionalización del cobre han ingresado, "hasta nuestros días," al presupuesto público, más de 24 mil millones de dólares, suma de dinero que

---

7 *Salvador Allende*, Max Nolf, pág. 101, Ediciones Documentas, 1993.

habría sido muy superior de haber permanecido en manos de CODELCO toda la explotación de la gran minería del cobre.

Salvador Allende decía, con toda propiedad, que el cobre era el sueldo de Chile.

¡Antes ni después de Allende, nunca un gobierno chileno enfrentó de tal manera el poder del imperialismo, de los grandes terratenientes, de los banqueros y de los monopolios industriales y de servicios!

El dinero de la CIA corre a raudales

Los grandes monopolios del cobre y el gobierno de Richard Nixon no se resignaron a acatar la decisión soberana que tomaba nuestro país de recuperar su principal riqueza extractiva. La Kennecott demandó ante los tribunales de Francia y Holanda el embargo de los cargamentos de cobre chileno que iban a esos países y el gobierno de Washington se propuso obstaculizar por todos los medios la marcha del gobierno de Allende.

Dice Orlando Millas en la página 83 de sus memorias: "Por medio de manipulaciones de los mercados y con ingentes recursos organizó una operación de desestabilización del precio del cobre a fin de asfixiar a Chile. En una coyuntura internacional de aumento de los precios de la mayoría de las materias primas, el cobre se vino abajo. La cotización de 64 centavos de dólares por libra de cobre bajó a 49 centavos en 1971 y 1972, volviendo a elevarse sólo en 1973, lo que implicó una pérdida total para el país de 550 millones de dólares. Cuando en el primer trimestre de 1973 el cobre logró conseguir mejor precio, de inmediato el gobierno de EEUU anunció la venta de sus reservas estratégicas para echarlo abajo".

A la semana siguiente de que Salvador Allende asumiera la primera magistratura de la Nación, el Presidente Nixon declaró que las relaciones de Estados Unidos con Chile serían las que Chile desease mantener con su país. Faltó a su palabra. El Gobierno Popular se preocupó de mantener buenas relaciones con Estados Unidos y con todos los países, relaciones en pie de igualdad y de respeto mutuo. No aconteció lo mismo de la otra parte.

Nixon sentenció con brutalidad y desparpajo: "hay que hacer reventar la economía chilena". La orden de William Broe, jefe de división del hemisferio occidental de la CIA, dada el 28 de septiembre de 1970, fue la de "provocar el colapso económico". Por esos mismos días, la ITT se pronunciaba por organizar "un deterioro acelerado de la economía de Chile" para desencadenar enseguida "una ola de violencia de la cual resulte un golpe militar".

El gobierno de Nixon dispuso la suspensión de los créditos por parte de los dos organismos financieros que dependen directamente del gobierno de Washington, la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID) y el Banco de Importación y Exportación, EXIMBANK. El presidente del Eximbank, Mr. Henry Kearns, le comunicó abiertamente a nuestro embajador, Orlando Letelier, que no habría créditos para que la Línea Aérea Nacional, LAN (que entonces era verdaderamente nacional), comprara tres aviones Boeing mientras Chile no asegurase la debida indemnización a las compañías norteamericanas. Chile repudió la conducta del EXIMBANK. La condenaron expresamente todos los partidos políticos, la Central Única de Trabajadores, las Federaciones de Estudiantes y la Sociedad de Fomento Fabril, SOFOFA.

La Comisión o Comité 40, como también se le llamaba, aprobó un total de más de 7 millones de dólares en apoyo secreto a grupos de oposición en Chile[8].

La CIA dispuso de cuantiosos recursos para generar propaganda contra Allende. Financió diarios y periódicos, programas de radio, postales y prensa clandestina. Financió a la organización fascista Patria y Libertad.

La dictadura de Pinochet no desnacionalizó CODELCO, pues buena parte de los militares estaba porque siguiera siendo propiedad nacional. Sin embargo, le abrió las puertas al gran capital financiero extranjero para explotar otros yacimientos cupreros. Lo hizo de manera sibilina. Por una parte, dejó en pie la disposición constitucional según la cual "el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las áreas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arenas superficiales" y, a la vez introdujo en el mismo artículo de la Constitución una disposición que de hecho niega la anterior al afirmar que: "La exploración o el beneficio de los yacimientos que contengan substancias no susceptibles de concesión, podrán ejecutarse directamente por el Estado o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el Presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo". Y haciendo caso omiso del interés del país, a las empresas nacionalizadas les pagó –mejor dicho les regaló– una indemnización por más de 500 millones de dólares y modificó la ley de nacionalización estableciendo que el 10% de las ventas brutas del cobre irían a parar a las Fuerzas Armadas como fondos reservados, obligación que no rige para las nuevas compañías y ha cumplido solamente CODELCO.

---

8 La Comisión o Comité 40 está integrado por todos los organismos de inteligencia del gobierno norteamericano y es una comisión de staff de la Casa Blanca, encargada de las operaciones secretas en el exterior y opera con diferentes nombres.

Para remate, a comienzos de 1992, durante el gobierno de Patricio Aylwin, fue aprobada una ley que les ha permitido a grandes empresas extranjeras asociarse a CODELCO en la explotación de nuevos minerales, a tal punto que hoy más del 60% de la producción cuprera está en manos privadas y solo alrededor de un tercio la tiene el Estado.

De este modo, la dictadura y los tres gobiernos de la Concertación que le han sucedido pasaron por encima de la ley aprobada en 1971 por la unanimidad del Parlamento y son responsables de una serie de hechos contrarios a los intereses de todos los chilenos. Concretamente, son responsables de los siguientes tres mayúsculos delitos contra el interés nacional: 1) Haber entregado al capital extranjero yacimientos mineros que contienen no menos de 10 millones de toneladas de cobre fino cuyo valor es superior a los 150 mil millones de dólares; 2) Favorecer a las empresas multinacionales con exenciones de impuestos y ventajas tributarias que no rigen para CODELCO, y 3) Permitir que dichas empresas exporten fabulosas cantidades de cobre concentrado, sin refinar, que de elaborarse en el país generaría más trabajo y en los últimos 10 años el ingreso de divisas habría aumentado en alrededor de 5 mil millones de dólares.

José Cademártori dice, al efecto, en el artículo antes citado, que en 1996, por cada tonelada producida, CODELCO aportó a la caja fiscal 515 dólares y La Escondida sólo 295 dólares. Las demás compañías aportaron mucho menos y en el caso de la transnacional Exxon que explotaba "La Disputada", no aportó nada. Para mostrar las consecuencias antinacionales de la privatización llevada a cabo en el último decenio, se expresa en el artículo que mientras en 1989, cuando todavía las compañías foráneas no estaban operando, el Estado chileno recibió en ingresos el equivalente al 50% del valor del cobre exportado, con un volumen físico de un millón quinientas mil toneladas y que diez años después, en 1999, cuando la exportación había llegado a 4,3 millones de toneladas, el Estado ya no recibió el 50% del valor exportado, como diez años antes, sino apenas el 5% a causa de la privatización de nuestros yacimientos. Y en el año en curso, el 2003, de 47 empresas cupreras que hoy funcionan en el país, sólo dos pagan impuestos. Las voces del senador Jorge Lavandero, del médico Edgardo Condesa, de los economistas Orlando Caputo y Hugo Fazio y de muchos otros, vienen denunciando este escándalo desde hace varios años. Son miles y miles los chilenos que las han escuchado y acogido, firmando demandas colectivas, realizando pequeñas reuniones para hacer conciencia del problema. Pero los que pueden y deben terminar con el robo de nuestra principal riqueza están sordos y los medios de comunicación, ciegos. La TV se encarga, en especial, de desviar la atención de la gente, dedicando gran parte del tiempo a tratar de entretenerla con tonterías.

El Gobierno Popular nacionalizó la Sociedad Química y Minera (SOQUIMICH), propietaria de los minerales de salitre de "Pedro Valdivia" y "María Elena", mediante la compra del 63% de sus acciones que estaba en poder de norteamericanos. El restante 37% de las acciones ya eran de propiedad del Estado chileno. SOQUIMICH, además de salitre, producía yodo y sulfato de sodio. La oficina "Victoria", también pasó a manos del Estado. En manos estatales, la producción de salitre aumentó en 1971 en un 23% con respecto al año anterior, la de yodo fue superior en un 12% y la del sulfato de sodio en un 43%.

Los minerales de hierro de "El Romeral", que eran de propiedad de la empresa norteamericana Bethlehem Steel Corporation fueron nacionalizados, igual que los anteriores, mediante la compra de acciones a través de la Compañía de Acero del Pacífico, CAP. El mismo procedimiento se usó para la estatización del carbón y la compra del 51% de las acciones de INDAP y de ARMCO que producía, esta última empresa, bolas para molienda de minerales de la gran minería.

Del mismo modo, las minas de "Cemento El Melón" y las de carbón de Lota y coronel fueron estatizadas.

De manera similar fueron estatizadas las firmas que se dedicaban al comercio al por mayor de importación y distribución Williamson Balfour, Gibbs, Duncan FOX y Agencias Graham, la mayoría con capital inglés.

Todo esto permitió, junto a la nacionalización del cobre y otras medidas, que el Estado también tomara en sus manos casi todo el comercio de exportación e importación, más concretamente, el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones, además de la distribución interna de bienes de consumo.

La Reforma Agraria se hace plena realidad

La reforma agraria era una de las transformaciones más necesarias y apremiantes que imponía la situación del país, pues la producción agrícola sólo crecía, desde mediados de los años treinta, a una tasa anual del 2%, en tanto que en el mismo período la población lo hacía en un 2,6%. Más aún, entre 1955 y 1965, la producción agrícola per cápita había descendido en los rubros más importantes. La de trigo había bajado de 164 a 146 kilos por habitante; la de arroz, de 13,6 a 9,5 kilos; la de papas, de 102 a 78 kilos; la de porotos de 11,7 a 9,5 kilos; la de leche de 101 a 94 litros. También había bajado la disponibilidad de carnes, de 30 a 20 kilos per cápita, comprendida la de bovino que había tenido el mayor descenso. En estas condiciones, el país tenía que importar alimentos en

cantidades cada vez mayores. En 1936 se importaron alimentos y materias primas derivadas de la agricultura por un valor de 52 millones de dólares. En 1965, veintinueve años más tarde, el coste de esta importación fue del orden de los 152 millones de esa misma moneda.

Para remediar esta situación, el Parlamento aprobó, en enero de 1967, por iniciativa del Presidente Eduardo Frei Montalva, una ley de reforma agraria que contó con el apoyo de los partidos de izquierda y tuvo una tenaz oposición de la derecha.

El gobierno de Frei inició la reforma agraria. Expropió 3 millones 557 mil hectáreas en tres años y diez meses.

Completar la reforma y elevar y modernizar la producción agrícola fueron dos de las más grandes tareas, vitales y apremiantes, que encaró con firmeza y celeridad el gobierno de Allende. Sólo en los primeros 5 meses de su gestión expropió 350 fundos con más de 1 millón 50 mil hectáreas. Puso fin al latifundio en 1972 luego de haber expropiado 5 millones 355 mil 223 hectáreas, casi el doble de lo que había hecho el gobierno anterior.

Del total de hectáreas expropiadas durante el gobierno de la Unidad Popular, 1 millón 273 mil 493 eran de riego y secano arable y 4 millones 81 mil 736 hectáreas de secano no arable, apto para la ganadería y para ciertas explotaciones forestales y hoy hasta para viñedos y plantaciones de árboles frutales con riego tecnificado –también llamado por goteo– en el norte chico y en la zona central.

Por ser Chile un país que tiene distintas zonas climáticas y tierras de diferentes calidades, no se podía establecer en la ley la misma cantidad de hectáreas para determinar qué haciendas debían expropiarse, cuales no y qué cantidad de hectáreas debían quedar en manos del latifundista expropiado. En base a un estudio que realizó el Ministerio de Agricultura durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, teniendo en cuenta la productividad de los terrenos, se fijaron las equivalencias correspondientes a partir de una hectárea de tierra de riego del valle del río Maipo y se determinó la expropiación de los latifundios que, hechas las equivalencias, tuvieran extensiones superiores a 80 hectáreas de riego del valle mencionado.

En dicho estudio se había calculado la productividad de una hectárea de tierra aledaña al río Maipo, tierra de buena calidad, con regadío, no trabajada con la pala y el azadón simplemente, sino con los medios y técnicas más avanzados de ese tiempo. En la zona central o en otras regiones del país y con mayor razón en la precordillera o en la costa, había que reunir por lo general centenares de hectáreas, según fuera la calidad del terreno, para que en conjunto pudieran tener un rendimiento superior al de las 80 hectáreas del valle del río Maipo,

donde se siembra y cosecha todo el año, se cultivan hortalizas todo el tiempo y se tienen árboles frutales que son más rentables. En consecuencia, el patrón de las 80 hectáreas de tierra de la zona del Maipo era muy alto, generoso para los latifundistas y atentatorio a los intereses de los campesinos, pues con él no se alcanzaría a darles tierra a las 100 mil familias del agro que formalmente tenían derecho a recibirla. Así lo expusieron, tanto en la Cámara baja como en el Senado, los parlamentarios del Frente de Acción Popular, FRAP (la coalición de izquierda que existía cuando se discutió y aprobó la ley) y propusieron que el límite de las 80 hectáreas fuera reducido a 40. Jacques Chonchol y otros demócratas cristianos eran de esta misma opinión. Pero el hecho es que en este punto, la derecha, que rechazaba la totalidad del proyecto, apoyó a la Democracia Cristiana y así salió la ley. Entre paréntesis, las cuentas que sacó el Ministerio de Agricultura para determinar el tamaño de las haciendas que no se expropiarían desde Ñuble al sur fueron todavía más favorables para los latifundistas.

Cuando ya estaba por completarse la reforma agraria a mediados de agosto de 1972, se habían beneficiado directamente 70 mil familias campesinas. Veinte mil 978 habían recibido tierra durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y 33 mil 948 durante el gobierno de Allende, quedando más de 30 mil familias sin tierra o con muy poca tierra. Previendo esta situación, en una reunión que en enero de ese año celebró en El Arrayán el Comité Nacional de la Unidad Popular con el Presidente de la República y algunos de sus ministros, se acordó preparar un nuevo proyecto de reforma agraria para rebajar a 40 el límite de las 80 hectáreas. Pero el proyecto ni siquiera alcanzó a elaborarse pues, a esa altura del tiempo, no había ninguna posibilidad de que el Parlamento lo aprobara.

La supresión de la propiedad latifundista y su reemplazo por la de los propios trabajadores del agro no fue una tarea fácil, tanto menos cuanto que el campesinado había estado sometido al atraso y al analfabetismo por generaciones, la Democracia Cristiana había llevado al campo el paralelismo sindical y no pocas veces los partidos de la Unidad Popular tomaban sus decisiones sobre problemas del mundo rural en las oficinas de la ciudad, al margen de la realidad.

De otra parte, ni los Asentamientos ni los Centros de Reforma Agraria, contemplados en la ley y formados durante los gobierno de Frei y Allende, satisfacían plenamente a los campesinos. No constituían las formas más adecuadas de organización del sector reformado. Además, los campesinos no aceptaban que los excedentes de su producción fueran a un fondo común ni que el derecho a talaje se fijara inflexiblemente, como estaba reglamentado de acuerdo con la ley. Y tenían razón, pues era funesto imponerles normas que van contra sus intereses y también contra los intereses nacionales. Las fallas principales no estaban en los campesinos, sino en nosotros mismos, que seguíamos considerando

que la reforma agraria era una tarea de los trabajadores del campo y de las instituciones del agro, en circunstancias que era una tarea nacional, de todo el país, de todo el pueblo y, en primer lugar, de la clase obrera del campo y de la ciudad. En relación a todo esto tampoco hubo un criterio único, ni durante el gobierno de Frei ni bajo el gobierno de Allende. Además, existían diferentes opiniones en cuanto a las formas de propiedad. Para algunos había que entregar la tierra a los campesinos en propiedad individual y otros estaban porque ello se hiciera como propiedad cooperativa. Al mismo tiempo, se consideraba que en algunos casos la tierra expropiada debía pasar a manos del Estado, cuando se trataba, por ejemplo, de grandes extensiones de bosques. El ideologismo a ultranza llevaba a algunos dirigentes políticos y sindicales, comprendidos funcionarios del agro, a optar por una de estas formas de propiedad, cerrándose a considerarlas, a todas ellas, coexistentes de acuerdo con la realidad. Estas discrepancias no impidieron la obra gruesa de la reforma agraria, pero no dejaron de entrabar los esfuerzos que se realizaban en su favor y en alguna medida obstaculizaron una mayor entrega y participación de los campesinos en todas las tareas que apuntaban a la transformación del campo y al pleno éxito del gobierno.

A pesar de las dificultades y complejidades, el gobierno de la Unidad Popular completó el proceso de reforma agraria, hecho que constituyó un cambio histórico en el régimen de tenencia de la tierra y que implicó, de pasada, la eliminación del inquilinaje y otras reminiscencias de tipo feudal que aún se mantenían en pie. Tal fue uno de sus grandes méritos.

En el período de 1971-1972, con la mayor parte de la tierra cultivable ya en poder de los campesinos, se sembraron 1 millón 294 mil 740 hectáreas. En el período siguiente se observó una disminución en la superficie sembrada por retraso en la entrega de tractores, de semillas y fertilizantes y por factores climáticos que afectaron fundamentalmente la siembra de trigo de invierno. En cambio, en 1973 aumentaron todas las siembras de invierno y especialmente las de trigo, que se expandieron en 23 mil hectáreas. En este período se alcanzó la mayor cantidad de hectáreas sembradas en toda la historia del país. De este modo, la producción agrícola de 1974 creció en un 26,7% –hasta entonces también la más grande de la historia–, gracias a la reforma agraria y al esfuerzo de los campesinos y de los técnicos del Gobierno Popular y no debido al gobierno militar, como sostuvieron desvergonzadamente algunos corifeos del régimen castrense. En la ampliación del área sembrada jugó también su papel la importación de 10 mil tractores en los años 1971 y 1972, con lo cual el parque de estas máquinas pasó de 12 mil a 22 mil, o sea, creció en un 80%. Esos tractores fueron traídos de la Unión Soviética, de Rumania y Checoslovaquia.

Durante el gobierno de la Unidad Popular se duplicó la superficie forestal que se plantaba anualmente. Se registraron 54 mil hectáreas plantadas como promedio anual entre 1971 y 1973. Las 56 mil de bosques que se plantaron en 1974 fueron también fruto del gobierno de Allende. Éste eligió los lugares para reforestarlas y firmó con la gente dueña de la tierra los convenios para hacer las plantaciones. Eran hectáreas para reforestación de fundos no expropiados.

La cuestión agraria es lo más complejo en toda revolución. Terminar con el latifundio es lo primero, pero no es todo. En la transformación del campo chileno influían múltiples factores y problemas. Además del apoyo de los campesinos se requería disponer de semillas de calidad y en cantidades suficientes, de maquinaria agrícola, del necesario transporte, de silos y bodegas para el almacenaje de los productos, de suficiente capacidad de carga y descarga en los puertos, de una extensa red de frigoríficos, de una política adecuada de créditos, de una buena investigación tecnológica y de educación técnica de los trabajadores del campo.

Desde comienzo de la década del sesenta creció extraordinariamente la organización sindical en el campo. En 1962 los campesinos sindicados apenas alcanzaban a los 5 mil. En 1964 cuando asumió Eduardo Frei existían 24 sindicatos agrarios con mil 700 afiliados. En 1969, ya en marcha la reforma agraria y con la ley de sindicalización campesina dictada en 1967, habían 421 sindicatos con 104 mil 700 afiliados. A finales del gobierno de Allende los campesinos sindicalizados eran del orden de los 300 mil.

Había que apoyarse más en la organización de los trabajadores agrícolas. Con tal propósito, el 17 de noviembre de 1970, por decreto del Presidente Allende, fue creado el Consejo Nacional Campesino, en calidad de órgano consultivo dependiente del Ministerio de Agricultura. Su objetivo consistía en impulsar la participación activa de los campesinos para la realización de los cambios en el campo y ayudar a la CORA en la determinación de la política agraria, en la distribución de créditos, en la asignación y realización de la producción. Del Consejo Nacional Campesino formaron parte representantes de las más grandes organizaciones de trabajadores del campo, a saber "Libertad", "Triunfo Campesino" y "Ranquil", las dos primeras de ellas dirigidas por democratacristianos. También participaron organizaciones de pequeños y medianos agricultores y el Consejo de la Confederación Nacional de Asentados y Cooperativas Campesinas. Filiales del Consejo Nacional Campesino fueron creadas en todas las provincias.

Existían también 200 mil propietarios de predios agrícolas de no más de 40 hectáreas. El Gobierno Popular extendió hacia ellos la ayuda crediticia.

Pero esta era insuficiente. Había que prestarles más apoyo en créditos, ampliar los poderes de compra de sus productos evitando que cayeran en manos de los intermediarios, desarrollar proyectos que apuntaran a diversificar y aumentar su producción, asegurándoles precios realmente remunerativos y, a la vez, había que darles plena seguridad de inexpropiabilidad de sus tierras, derrotando la incertidumbre que cundía en ellos a raíz de las tomas de predios pequeños y medianos y de la campaña de la derecha contra el gobierno.

En el desarrollo de la agricultura en el período de la Unidad Popular tuvieron especial importancia la Empresa Nacional de Semillas, ENS; la Empresa de Comercio Agrícola, ECA; la Sociedad de Comercio Agropecuario, SOCOAGRO; la Sociedad de Comercio de la Reforma Agraria, SOCORA, y la Empresa Nacional Avícola, ENAVI.

La Empresa Nacional de Semillas, ENS, tuvo un desarrollo acorde con la magnitud, la profundidad y la rapidez con que se llevaba a cabo la reforma agraria. Crecieron extraordinariamente los volúmenes de producción de semillas de las diferentes especies y variedades. La disponibilidad de semillas de frijoles pasó de 13 mil quintales en el período 1970-1971 a 61 mil en el período 72-73, la de arroz pasó de 12 mil a 48 mil, la de trigo de 400 mil a 900 mil y la de papas de 75 mil a 170 mil quintales, todo esto en el mismo período. Estos aumentos espectaculares en la disponibilidad de semillas se lograron gracias a contratos con propietarios agrícolas y a la producción directa de antiguas haciendas expropiadas que fueron transferidas a la Empresa Nacional de Semillas. Particularmente exitosos fueron también los aumentos logrados en el caso de las especies forrajeras como la semilla de alfalfa cuya disponibilidad aumentó en un 100%.

Cuando se inició el gobierno de la Unidad Popular la producción de aves estaba lejos de satisfacer el consumo. Para resolver este problema se decidió otorgarles créditos del Banco del Estado a los productores avícolas y se creó la Empresa Nacional Avícola, ENAVI, al amparo de la CORFO. Una de las primeras firmas intervenidas fue la avícola "Purina", situada cerca de La Calera, cuyos propietarios, norteamericanos, la habían cerrado a raíz de un conflicto con sus trabajadores. A través de "Purina" el estado garantizó a los productores de aves la entrega de alimentos y el uso del matadero donde iban los pequeños avicultores a faenar sus pollos. En tanto se constituyó la ENAVI ésta abrió sus puertas a la incorporación voluntaria de pequeños productores privados. En una primera etapa se incorporaron principalmente cooperativas campesinas de Colchagua y O'Higgins, entre ellas la Cooperativa de Marchigüe y la Cooperativa La Estrella.

La producción de maíz era insuficiente, debido a lo cual la Empresa de Comercio Agrícola tuvo que importar grandes cantidades de este grano.

La idea era alcanzar una producción de 60 millones de pollos. Al momento del golpe militar el país ya estaba produciendo más de 40 millones.

En los años 71 y 72 la Empresa de Comercio Agrícola importó 150 mil reproductoras broiler, ponedoras. Esta fue, en esos años, la importación más grande de reproductoras realizada a nivel mundial. Las reproductoras pasaron a manos de los campesinos integrados a las distintas cooperativas.

Cuba hizo una donación espectacular: obsequió una cantidad significativa de pies de cría, de los que nadie se desprende, pues se trata de líneas puras para producir reproductores machos y hembras. Cuando se vio la posibilidad de traer mil 500 reproductoras de Inglaterra que nos pudieran asegurar una independencia de reproductoras broiler y posteriormente de pollos, se supo que cada pie de cría costaba mil dólares.

Con el propósito de aumentar la producción y mejorar la tecnología se iban a traer un par de complejos búlgaros, que se iban a instalar en la zona de Melipilla. Dichos complejos tenían un sistema de producción de aves con ambientes controlados. Pero esta idea no se alcanzó a materializar por el golpe.

Resumiendo, la Empresa Nacional Avícola tuvo grandes éxitos en el aumento de la producción de aves y, además, logró una mejor distribución de estos productos empezando por el gran Santiago. En esta empresa trabajó, con desbordante entusiasmo y competencia mi hijo Alberto, ingeniero agrónomo, quien, siempre bromista se autocalificaba "ministro de los pollos".

A inicios del gobierno de la Unidad Popular el consumo de pollos en los sectores altos de la población era de alrededor de 10,2 kilos de carne de pollo por habitante al año, en tanto que en lugares como Pudahuel, San Miguel y otros no llegaba a más de 2 kilos por habitante al año. Esto cambió apreciablemente durante el gobierno de Allende.

SOCOAGRO, empresa filial de CORFO, cuya función consistía en el control de los mataderos modernos que habían sido construidos con ayuda norteamericana, controlaba también la comercialización de la carne. Logró, además establecer un sistema de comercialización con los medianos ganaderos y agricultores.

En el período 1971-1973 se amplió el tipo de productos comercializados, incorporando a éstos fruta fresca y deshidratada, además de frijoles y algas. Esta ampliación comprendió el mercado externo. Durante el Gobierno Popular SOCORA logró exportar volúmenes cuyos valores representaron aproximadamente un tercio del total de las exportaciones agrícolas del país.

El gobierno de la Unidad Popular tuvo como ministro de Agricultura a Jacques Chonchol, del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), quien

fuera connotado militante de la Democracia Cristiana y director del Instituto Nacional de Desarrollo Campesino durante el gobierno de Frei, y a Rolando Calderón, socialista, dirigente obrero y campesino. Por breve tiempo Pedro Hidalgo reemplazó a Calderón y Jaime Tohá a Hidalgo. Al frente de la Corporación de la Reforma Agraria, CORA, estuvieron el ingeniero agrónomo David Baytelman y el Médico veterinario Hugo Díaz, quienes implementaron la aplicación de la ley, expropiando todos los latifundios de más de 80 hectáreas de riego básico, fortaleciendo los Asentamientos, los CERAS y las Estancias Estatales. Junto a los ministros y funcionarios del agro trabajaron en la implementación de la reforma agraria y en la batalla por el aumento de la producción decenas y decenas de modestos y valiosos dirigentes, en especial miembros de los Partidos Comunista y Socialista, que a lo largo de los años se habían especializado en el trabajo con los campesinos, ayudándolos sobre todo en el terreno de la organización. Entre ellos estaban Jacinto Nazal, Bernardo Araya, César Cerda, Luis Alberto Peña, de la Comisión Agraria del PC; José Campusano, Enrique Avendaño, Manuel Vargas, Sergio Villalobos y Ulises Araya.

La dictadura se empeñó en revertir el proceso de la reforma agraria. Dejó nulas todas aquellas expropiaciones que tenían trámites legales pendientes. Al que le faltara el más mínimo trámite se anulaba la expropiación y se devolvía la tierra a sus antiguos propietarios. Formó comisiones liquidadoras de las cooperativas para quitarles la tierra a los campesinos cooperados, afectando especialmente las expropiaciones realizadas durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Además, puso en venta las más grandes cooperativas, entre otras la Topocalma, de 7 mil hectáreas, y la Ñuble Rupanco, de 47 mil hectáreas, que pasó a manos de un ricachón árabe. En una de estas operaciones obtuvo pingües ganancias Julio Ponce Lerou, en ese tiempo yerno de Pinochet.

La dictadura suprimió también los créditos especiales del Banco del Estado para incentivar la producción campesina. Sin apoyo estatal muchos campesinos favorecidos por la reforma se vieron obligados a vender la tierra que habían conquistado y algunos, como sucedió en Paine y en Chiu-Chiu, fueron perseguidos y hasta salvajemente ultimados.

No obstante, el edificio del arcaico sistema del latifundio semifeudal no se pudo reconstruir tal cual era ayer y la agricultura chilena entró a una etapa de modernización de tipo capitalista. La agroindustria que existe hoy es consecuencia de la Reforma Agraria que puso fin al latifundio improductivo y remolón. Desgraciadamente, está en manos de un grupo de grandes capitalistas nacionales y extranjeros, que se enriquecen cada día más con la fruticultura explotando inhumanamente a los trabajadores del campo y de las aldeas campesinas, especialmente a las mujeres, las temporeras, que ganan salarios

miserables en jornadas de sol a sol como en los peores tiempos del latifundio, expuestas a enfermedades provocadas por el uso de los insecticidas, tres de los cuales –lindano, paquart y paration– pertenecen a la llamada "docena sucia" y están prohibidos en el mundo desarrollado. Algunas veces, a causa de estos insecticidas las temporeras se enferman de cáncer o dan a luz hijos con deformaciones.

La expropiación de las grandes industrias y la nacionalización de la Banca

De acuerdo al Programa del Gobierno Popular, debían haber tres áreas de propiedad: la propiedad social, la propiedad mixta y la propiedad privada. En el área social estarían las empresas que ya eran del Estado más las que fuesen nacionalizadas o estatizadas. En el área mixta se hallarían aquellas empresas medianas y grandes de las cuales serían copropietarios y coadministradores, por voluntad común, el Estado y uno o más capitalistas, y en el área privada quedarían los talleres de los artesanos, las fábricas de los pequeños y medianos empresarios y las tierras, máquinas y ganado de los pequeños y medianos agricultores.

El área de propiedad social empezó a constituirse en tanto asumió el gobierno de la Unidad Popular. El 2 de diciembre de 1970 fue expropiada la primera empresa industrial, la fábrica Textil Bellavista de Tomé, cuyos propietarios la habían cerrado en respuesta a una huelga de sus trabajadores. Al siguiente día fue intervenida la Empresa Purina y a continuación, el 27 de enero de 1971 la Lanera Austral de Magallanes, el 11 de marzo la Fábrica Ítalo Americana de Paños Bellavista-Tomé y Fabrilana de Santiago (FIAP). En junio de 1971 ya estaban estatizados todos los monopolios textiles, entre ellos los más grandes, SUMAR y YARUR.

Transcurrido un año y medio del gobierno, el 50% de las empresas industriales de tipo monopólico se hallaba en manos del Estado. Todas, incluidas las que venían de antes del gobierno de la Unidad Popular, representaban el 40% de la producción. Como ya he dicho, también ya se había estatizado el comercio al por mayor, el 90% de las exportaciones y el 60% de las importaciones. Además, el Estado se había hecho cargo de la distribución de alimentos y otros bienes a los comerciantes y consumidores de todo el país, asegurándoles el abastecimiento a precios razonables y no especulativos.

Según Gonzalo Martner, quien fuera ministro Director de la Oficina de Planificación, ODEPLAN, hoy MIDEPLAN, la industria manufacturera, "que

había crecido en 13,6% en 1971, siguió expandiéndose en un 2% más en 1972, es decir, en 1971 y 1972 la industria creció en cerca de un 16% sobre el año 1970. El grado de industrialización fue de 26,6% en 1972, un nivel no alcanzado antes. También aumentó el sector electricidad, gas y agua, en 6,7%. El comercio, que había crecido en 15,8% en 1971 creció otro 3,8% en 1972, completando una expansión de 19,6% en 1971-1972".[9]

Cuando todavía no llevaba dos meses como Presidente, Allende anunció la nacionalización de la banca privada. –"No he querido terminar este año –le dijo al país en discurso por cadena de radio y televisión el día 30 de diciembre de 1970–, sin hacerles a ustedes un anuncio trascendental para el cumplimiento de nuestros planes económicos y que se refiere a la nueva política bancaria y crediticia. Ante la conciencia ciudadana, nos comprometemos a que la Banca deje de ser un instrumento al servicio de una minoría, para utilizar sus recursos en beneficio de todo el país". (...) "En vista de lo anterior –agregó más adelante– he resuelto enviar en la próxima semana al Congreso, un proyecto de ley para estatizar el sistema bancario. No obstante esta decisión, el gobierno quiere ofrecer otra alternativa, que además de acelerar el proceso represente una buena opción para todos los accionistas, especialmente los pequeños. El gobierno ofrece desde el lunes 11 hasta el 30 de enero, comprar las acciones de la banca privada por intermedio del Banco del Estado".

Los accionistas corrieron a vender sus títulos al precio que se les ofrecía, temerosos de que más tarde valieran menos. Según contó Víctor Pey a *Punto Final* Jorge Alessandri fue uno de los primeros en vender sus acciones[10]. De esta manera, ya a mediados de 1971, el Estado controlaba 16 de los 18 bancos privados.

Con la nacionalización de la banca se redujo sustancialmente la tasa máxima de interés, se establecieron tasas inferiores para ciertas actividades económicas y algunos sectores empresariales, se promovió una fuerte redistribución del crédito a favor de los pequeños y medianos empresarios y una descentralización del mismo para favorecer a las regiones y provincias.

El paso de los bancos a manos del Estado acarreó también beneficios para sus trabajadores. En el mismo discurso en que el Presidente anunció su nacionalización comunicó la "supresión de imposiciones tan humillantes y retardatarias al personal, como por ejemplo la obligación de solicitar permiso para casarse y el término de los contratos de trabajos para las mujeres que se casan o aval para ser contratadas".

---

9 *El Gobierno del Presidente Salvador Allende, una evaluación*, Gonzalo Martner, 1970-1973, Pág.378, Ediciones LAR, 1988.

10 Revista *Punto Final* N° 471. Edición del 28 de agosto al 10 de septiembre de 1988.

Estatizada la banca, y a fin de impulsar el desarrollo de las actividades productivas, se redujo el interés anual por los créditos del 24 al 18% a los industriales, y del 24% al 12% a los agricultores. Además se ampliaron los plazos para cancelarlos. Se dieron créditos especiales a los cooperados bajo la responsabilidad de las cooperativas. Se condonaron las deudas tributarias inferiores a 100 escudos. Quedaron exentos de pagar impuestos más de la mitad de los propietarios de bienes raíces y aumentó el número de los que estaban liberados de pagar el impuesto patrimonial, pues dejaron de cancelarlos aquellos que tenían un ingreso inferior a 20 sueldos vitales. Se aumentó la exención del global complementario de uno a dos sueldos vitales.

El sistema legal debía ser cambiado

Cuando se cumplió el primer año del gobierno de la Unidad Popular, el Presidente de la República, en una asamblea que se efectuó en el Estadio Nacional repleto, le dio cuenta al pueblo y al país de lo que se había hecho en doce meses. "Podemos decir –expresó Salvador Allende con voz entera y legítimo orgullo revolucionario– que "el pueblo de Chile ha recuperado lo que le pertenece, ha recuperado sus riquezas básicas de manos del capital extranjero. (...) Nuestro cobre, nuestro hierro, nuestro salitre, nuestro acero, las bases fundamentales de la economía pesada, son hoy de Chile y los chilenos" "Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada, 16 bancos, los más poderosos, entre ellos el Español, el Sudamericano, el Crédito e Inversiones y el Banco de Chile y más de 70 empresas monopólicas y estratégicas ya han sido expropiadas, intervenidas, requisadas o estatizadas"(...)"Hemos acentuado y profundizado el proceso de reforma agraria: 1.300 predios de gran extensión, con 2 millones 400 mil hectáreas, han sido expropiados" Y si es importante haber aplicado la Reforma Agraria para hacer producir de manera distinta la tierra y cambiar su propiedad, lo es más haber hecho que el campesino se sienta ciudadano, y comprenda la gran tarea de estar junto al pueblo, al obrero, para hacer posible que nuestra gente coma más. Su trabajo lo siembra a lo largo de la Patria y ha de representar más salud y más bienestar para todos los chilenos".

En la situación concreta que se daba en los años 1970 y 1971, el Estado de Derecho que heredó el gobierno del Presidente Allende posibilitó hacer realidad importantes cambios en la esfera de la propiedad y poner en práctica una serie de medidas de justicia social contenidas en el programa de la Unidad Popular.

La Constitución que normaba ese Estado de Derecho le confería al Presidente de la República, vale decir al Poder Ejecutivo, importantes atribuciones, convirtiendo en secundario el Poder Legislativo que en muchos países es el principal. Había en esa Constitución un cierto número de disposiciones y leyes que le permitieron al Primer Mandatario tomar una serie de medidas dirigidas al cumplimiento de su programa, esto es, a la transformación social y el mejoramiento de los niveles de vida del pueblo. El Presidente tenía -y sigue teniendo- en forma exclusiva, la iniciativa y el patrocinio de leyes que implican gastos públicos y poder de veto sobre las decisiones del Congreso que no fueran de su parecer. Los vetos sólo podían y pueden ser rechazados por los dos tercios del Parlamento.

Además existían decretos leyes y disposiciones legales que aumentaban apreciablemente la capacidad operativa del Ejecutivo. El código del trabajo autorizaba al Presidente para intervenir aquellas empresas que estuviesen paralizadas y que, por tal motivo "pusiesen en peligro la salud de la población o afectaren la tranquilidad económica-social" o fuesen productoras de "artículos o mercaderías esenciales para la defensa nacional o el abastecimiento de la población". El Decreto Ley 520, dictado en agosto de 1932 por el gobierno de facto de Carlos Dávila, que sucedió al de la República Socialista, autorizaba también al Ejecutivo para expropiar empresas industriales y comerciales, en los casos de que estuviesen "en receso", "para el solo efecto de atender a las necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo". Y el Artículo 30 de la Ley 12.927 también lo facultaba para intervenir empresas de transporte o productoras o elaboradoras de artículos esenciales para el abastecimiento de la población o para la defensa nacional, en los casos en que hubiesen paralizado su actividad.

El gobierno hizo un amplio y legítimo uso de estas atribuciones legales.

El poder que tenía y aún tiene el Presidente de la República no es precisamente propio de un régimen democrático, toda vez que dicho poder hacía y hace del Primer Mandatario un verdadero monarca que dura 6 años. Pero en el caso concreto que analizamos, con un Presidente como Allende, para el cual el primer actor era y debía ser el pueblo, poseído, además, de una férrea voluntad de hacer los cambios que el país necesitaba, esa suma de atribuciones que la Constitución y las leyes le conferían fue un elemento vital y decisivo para emprender la tarea de crear una democracia real y despejar un buen trecho del camino hacia el socialismo.

Al mismo tiempo, ese estado de derecho obstaculizaba, entrababa llevar a la práctica gran parte de las transformaciones, especialmente aquellas que tenían que ver con la institucionalidad vigente, es decir con el mismo Estado de

Derecho que era indispensable modificar para que fuese más democrático y pudiese servir los intereses del pueblo y de la nación.

Expresamente, en su primer Mensaje al Congreso Pleno, Salvador Allende se refirió a este asunto con estas palabras: "Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista conforme a las transformaciones socioeconómicas que estamos implantando, sin que una ruptura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que responsablemente queremos evitar".

Pues bien, la Constitución contemplaba la posibilidad de cambiar o modificar substancialmente la propia institucionalidad. Y Salvador Allende y la Unidad Popular consideraban fundamental convertir esa posibilidad en hechos. En su primer Mensaje del 21 de mayo de 1971 sostuvo, sin subterfugios, que el Gobierno Popular se proponía "reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista. Y el sistema bicameral en funciones, por la Cámara Única". Al efecto, en noviembre de ese mismo año, con la firma del Presidente Allende y de los ministros de Justicia, Lisandro Cruz Ponce, y de Interior, José Tohá, se envió al Parlamento el proyecto de reforma constitucional que establecía el sistema legislativo unicameral, ampliaba los derechos y garantías individuales, consagraba tres áreas de propiedad, (la propiedad social, la mixta y la privada) y estipulaba la participación de los trabajadores y del pueblo en la conducción del Estado y de la economía nacional.

En los fundamentos del proyecto, el Presidente de la República afirmaba que "el sistema bicameral no responde a ninguna necesidad real y en la actualidad contribuye a dilatar la adopción de decisiones políticas oportunas, a dificultarlas artificialmente y a crear en la opinión pública una suerte de desconfianza y recelo frente al proceso de formación de la ley que se estima costoso, lento e ineficaz". Invocaba el hecho de que, en dicho sistema, un proyecto "debe recorrer largas etapas de tramitación en el Congreso para llegar a ser ley, lo que resta de inmediato a esa norma gran parte de su efectividad". Como prueba de tal afirmación hacía presente que aún se encontraba pendiente de la decisión del Parlamento el proyecto que se le había enviado "el día 13 de junio del presente año para enfrentar los efectos del sismo ocurrido el día 8 del mismo mes". ¡Y habían pasado ya cinco meses sin ser despachado! Mencionaba también, como muestras de "lenta tramitación parlamentaria, los 26 años que demoró en salir la ley sobre accidentes del trabajo" y los 20 años que se requirieron para que ambas Cámaras aprobaran la Ley que creó el Servicio Nacional de Salud. Sostenía, por último, que el bicameralismo "ha servido de

freno a la transformación social desde los inicios de nuestra vida republicana" y hacía suya la opinión del jurista demócrata cristiano Francisco Cumplido, quien afirmaba que "el Parlamento debe ser unicameral en Estados unitarios como Chile" a fin de lograr "que sea un instrumento eficiente en el cambio social".

El proyecto contemplaba, además, elegir la Cámara Única junto con el Presidente de la República para"evitar los problemas que tradicionalmente han enfrentado los Ejecutivos que han debido gobernar con Parlamentos adversos". Establecía también "eliminar las elecciones extraordinarias que en el orden práctico no se justifican", cubriendo cada vacante con "el candidato que habría sido elegido de haber correspondido un cargo más a la lista" del parlamentario a reemplazar. Consideraba además que el cargo de parlamentario fuese incompatible con los de director, asesor o gestor, a cualquier título, de empresas o sociedades. En ningún caso, el parlamentario podría percibir del Estado una suma mensual que excediera de 20 sueldos vitales. Se elegiría un parlamentario por cada 60 mil habitantes. Se introducía una novedad en cuanto establecía la obligación de conservarles a los Parlamentarios el cargo que hubiesen estado desempeñando al momento de ser elegidos. De este modo, al término de su período podrían incorporarse a funciones iguales o análogas a las que antes efectuaban dentro de sus actividades privadas.

Por otra parte el proyecto le daba al Presidente de la República "la facultad de disolver el Parlamento por una sola vez en su período, con el objeto de permitir que la ciudadanía resuelva los posibles conflictos que puedan suscitarse entre ambos órganos de Estado", prohibía el desempeño de los cargos parlamentarios por más de dos períodos sucesivos, proponía que los ministros de la Corte Suprema duraran seis años en sus funciones y extendía el derecho a sufragio a los chilenos residentes en el extranjero.

Por su lado el Congreso Nacional podía considerar proyectos de ley por iniciativa del Presidente de la República, de cualquiera de sus miembros o con la firma de al menos cinco mil ciudadanos o el patrocinio de la Central Única de Trabajadores. Facultaba al Congreso para pronunciarse sobre la culpabilidad: a) del Presidente de la República, de los ministros de Estado y de los Intendentes y Gobernadores, por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones, en que hubiesen comprometido gravemente el honor o la seguridad del Estado, o infringido la Constitución o las leyes; b) de los Magistrados que establece esta Constitución, de los Magistrados de los demás Tribunales Superiores de Justicia y del Contralor general de la República por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones con infracción abierta de la Constitución o las leyes, y c) de los generales o Almirantes de las Fuerzas

Armadas por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación.

Otro grupo de estas materias básicas de la citada reforma constitucional se refería a las garantías y derechos individuales. El proyecto planteaba terminar con las disposiciones discriminatorias respecto de los hijos calificados de legítimos, naturales o simplemente ilegítimos. Asimismo, proponía eliminar en las leyes chilenas las disposiciones discriminatorias en razón de filiación, sexo, raza, ideología o religión. Tampoco podrían establecer diferencias de capacidad para la mujer en razón de su estado civil. Las madres, cualquiera que fuere su estado civil, tendrían los mismos derechos ante la ley. Las leyes chilenas establecerían un sistema adecuado que posibilitara una efectiva investigación de la paternidad. El que procreaba un hijo debía asumir la responsabilidad paterna.

Además, el Estado establecería un sistema nacional de atención jurídica que aseguraría a todos los habitantes de la República la posibilidad de ejercer efectivamente sus derechos. La ley determinaría la gratuidad de esta atención.

También el proyecto contemplaba la creación de sistemas o fondos únicos por ramas de seguridad social, que garantizaran efectivamente la igual protección de todos los habitantes del país frente a los estados de necesidad.

Establecía, asimismo, el derecho a la salud, imponiéndole al Estado y a la sociedad la obligación de crear las condiciones que permitieran un adecuado desarrollo físico, mental y social del ser humano.

Creaba el derecho a la vivienda, obligando al Estado a adoptar las medidas necesarias para que nadie careciera de una habitación adecuada para él y su familia, la que sería inembargable si su superficie no pasara de 100 metros cuadrados.

Se garantizaba la estabilidad del trabajo, elevando este derecho a rango constitucional. Paralelamente se declaraba como deber del Estado procurar las condiciones adecuadas para un justo descanso y para la asistencia económica en la vejez..

La Reforma Constitucional que contemplaba modificaciones tan democráticas como las señaladas fue enviada por el Presidente de la República a comienzos de noviembre de 1971 y ni siquiera se trató en el Parlamento.

Obreros y campesinos participan en la conducción y la administración.

El programa de la Unidad Popular decía que: "Las transformaciones sociales que el país necesita solo podrán realizarse si el pueblo de Chile toma en

sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente". Y añadía: "Desde el mismo día que asuma el mando, el gobierno popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal". Luego añadía: "En las instituciones de previsión y de seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurándoles a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados".

Conforme a tales enunciados, los trabajadores asumieron responsabilidades en la conducción y administración del país. Además de ministros de Estado, numerosos obreros fueron intendentes, gobernadores, subdelegados, jefes de servicios o embajadores. La administración de las instituciones de previsión y de seguridad social quedó en manos de sus propios imponentes, quienes, conforme a la Ley 17.676, pasaron a elegir, en votaciones secretas, los Consejos de las Cajas de Previsión que antes eran designados desde arriba por los gobernantes. El Consejo de la más grande de las instituciones previsionales que entonces existían, la Caja del Seguro Social, fue encabezado por Galvarino Melo Páez, que había nacido y trabajado en Constanza, oficina salitrera de la Segunda Región y más tarde se había desempeñado en Humberstone y en Cemento Melón. Además y por primera vez en la historia de Chile, los trabajadores entraron a participar en el funcionamiento de numerosas empresas, a ocupar puestos de gerentes o de administradores de industrias, a dirigir servicios estatales, a integrar consejos de bancos. Fue, pues, apreciable el número de trabajadores, hombres y mujeres, que accedieron a cargos administrativos en todos los niveles y trabajaban en equipos. ¡Y los trabajadores, también por primera vez en la historia de Chile, podían opinar libremente en las industrias sin temor al despido!

En tanto se inició el proceso de transformación de la propiedad surgieron formas inéditas de organización. En las empresas de propiedad social y mixta, se formaron los Consejos de Administración con destacada participación de los trabajadores. El primero en constituirse fue el de Chuquicamata, ante el cual los mineros eligieron sus representantes en votación directa, los que se interiorizaron rápidamente del manejo de la industria y alcanzaron en ella un gran poder de decisión. Allí, el más grande mineral de cobre del mundo a rajo abierto, estuvo dirigido por el ingeniero David Silberman que era el Gerente general de la empresa; el Presidente de la Federación Minera, David Miranda; el ingeniero comercial, Aroldo Cabrera y otros. Todos ellos fueron asesinados por la dictadura. También lo fue el ingeniero Lenin Díaz, de La Exótica, cercana al mineral de Chuqui, y dos

mil kilómetros al sur, el gerente de la Compañía Carbonífera Lota- Schwager, el minero Isidoro Carrillo, cuyo oficio era el de barretero.

En el área reformada de la agricultura se constituyeron consejos campesinos, cordones industriales en los lugares de mayor concentración fabril y comandos comunales para coordinar y unificar la actividad de las organizaciones populares.

El gobierno envió al Parlamento un Proyecto de ley que consagraba la participación legal de los trabajadores. No fue despachado por el Congreso.

Un alto número de obreros, de campesinos y estudiantes, de hombres y mujeres sentían la necesidad de colaborar en las tareas de transformación que llevaba adelante el gobierno. Con especial ahínco se preocuparon del aumento de la producción en las empresas del área social. En muchas de ellas se crearon Comités de Producción y Comités de Vigilancia, con las misiones que indican sus nombres. Los propios trabajadores idearon y aplicaron importantes innovaciones en los procesos productivos para elevar su rendimiento y para economizar divisas. Pusieron en práctica diversos métodos para ahorrar materias primas. Las máquinas trabajaban *full time* y cuando faltaron repuestos los fabricaron ellos mismos. Echaron a andar empresas que sus dueños abandonaban en actitud de cerrada oposición. Impulsaron nuevos usos de las instalaciones para encarar los problemas que acarreaba el boicot económico y el sabotaje promovidos por la reacción y el imperialismo.

Estuve en casa de Mario González, quien fuera, en tiempos de la Unidad Popular, presidente del sindicato de la empresa Algodones Hirmas. Recordó lo que sucedió tras la estatización de la industria donde trabajaba, palabras que grabé y transcribo:

"El gobierno –dijo– nombró como interventor a Waldo Fuentes y un consejo de administración en el cual los trabajadores tuvieron 5 representantes. También pertenecieron al Consejo algunos técnicos que formaban parte del ejecutivo de la fábrica. Pero los representantes de los trabajadores estaban en mayoría.

Avanzamos mucho, se fijaron salarios iguales para hombres y mujeres, salarios y beneficios adicionales por profesión. Hubo varios reajustes. Se otorgaron becas de estudio para los hijos de los trabajadores de la fábrica. Aumentó la producción de la industria y la producción por hombre. La gente empezó a trabajar con bastante entusiasmo. Muchos de los que tenían turno se quedaban trabajando voluntariamente. Hicimos varios trabajos voluntarios los días domingo. Había 3 mil obreros y más o menos 800 empleados. Permanentemente, el Comité de Administración se reunía con los técnicos de la empresa que venían de los Hirmas, se discutían mucho los incentivos de producción y algunos técnicos tenían una postura diferente a los obreros. Hubo un trato propio de compañeros, pero con el respeto debido. Ahí nadie perdía la pega.

"Teníamos los mejores salarios del sector, las mejores indemnizaciones por años de servicios, aguinaldos por nacimiento de cada hijo. Tuvimos un campamento de vacaciones en Quintero. Hubo harta actividad cultural, creamos un conjunto musical, un club de fútbol y club de boxeo, clases de teatro, cosas que no existían antes. Seleccionábamos a grupos de niños para que fueran a la costa en vacaciones. Con fondos de los sindicatos costeábamos todo, movilización, cuidadoras, etc. El sindicato se preocupaba de todo esto y, desde luego, de que las cosas marcharan bien y se resolvieran bien los problemas que se presentaban en la empresa.

"Tuvimos también no pocas dificultades. Por ejemplo, faltaron repuestos. Pero, como en el caso de las "espadas" de los telares, nosotros mismos las empezamos a hacer, con madera firme, en la maestranza de la industria.

"También escasearon las materias primas. A veces había que aminorar la producción por falta de algodón. En la época de desabastecimiento se formaron grandes colas para comprar telas que luego se revendían. Con MADEMSA hacíamos trueque de telas por artefactos.

"Los compradores, especialmente turcos, iban a las puertas de la fábrica a presionar a los trabajadores para que consiguieran telas y se las vendieran a ellos. Como Sindicato nos opusimos a este negocio corrupto. Se lo dijimos al interventor, pero sólo logramos que durante 15 días saliera un camión a las poblaciones para vender telas a precios baratos pero rentables.

"En todo caso, quedó demostrado que la empresa Hirmas funcionó bien y produjo más en manos de los trabajadores hasta que empezaron las grandes dificultados creadas por los enemigos que terminaron por echar abajo a nuestro gobierno".

En la historia de Chile no hay otro gobierno que le haya dado tanta participación al pueblo y haya tomado tantas medidas para elevar su nivel de vida en todos los planos.

Por lo que hizo, porque siempre tuvo en el centro de su preocupación y de su acción los intereses de Chile, de los obreros, de los campesinos, de los pueblos originarios, de los pequeños y medianos empresarios, de las madres y sus hijos, de los jubilados y pensionados, de la gente sencilla, postergada y mal tratada, por todo ello, el gobierno de la Unidad Popular y el Presidente Allende, entraron en el corazón y en la memoria del pueblo chileno.

Los que aún buscan la impunidad, tratan de hacerle creer al país, sobre todo a la gente más joven, a los que no habían nacido o eran muy niños cuando se produjo el golpe, que las demasías y el salvajismo que sufrió el pueblo en los años de dictadura castrense, se aplicaban y justificaban por lo que ellos llaman desorden, abusos, peligros para la democracia y desgobierno que habrían existido en el período de la Unidad Popular. Algunos van más lejos, dicen que el desorden y la inseguridad vienen de los años 60, de la efervescencia social

durante el gobierno de la Democracia Cristiana, todo ello para justificar el golpe militar y la barbarie fascista. Un general en retiro, de apellido Canessa que ostenta también el título de senador designado, es uno de los que hablan de esta manera, con palabras que parecen venir de las cavernas.

En aquella época que tanto descalifican los más testarudos reaccionarios, se vivían días de esperanzas. Eran los años del despertar de los estudiantes que impusieron la reforma universitaria, de esos estudiantes que, encabezados por Miguel Ángel Solar, pusieron en el frontis de la Universidad Católica un gran lienzo que decía: *"El Mercurio Miente"*. Eran los tiempos de la masiva solidaridad con Cuba y Vietnam, los tiempos en que la clase obrera afianzaba su organización y asumía un papel protagónico de primera, los tiempos de la Unidad Popular y del Presidente Salvador Allende, los tiempos en fin, en que primaban los más altos valores del espíritu, y multitudes de chilenos participaban activamente en política en busca del mejor camino para el desarrollo de la democracia, la independencia nacional y la justicia social.

3.- Fruto de una larga lucha.

"El cambio en la estructura del poder que estamos llevando a cabo, el progresivo papel de dirección que en ella asumen los trabajadores, la recuperación nacional de las riquezas básicas, la liberación de nuestra Patria de la subordinación a las potencias extranjeras, son la culminación de un largo proceso histórico, del esfuerzo por imponer las libertades políticas y sociales, de la heroica lucha de varias generaciones de obreros y campesinos por organizarse como fuerza social para conquistar el poder político y desplazar a los capitalistas del poder económico". (Del discurso de Salvador Allende, pronunciado en la Asamblea general de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1972.)

En las tempestades del Siglo Veinte

La formación del Gobierno Popular que presidió Salvador Allende y el proceso de transformaciones revolucionarias que con él se puso en práctica, constituyeron el acontecimiento político más importante ocurrido en Chile durante el siglo veinte. Para América Latina fue, después de la Revolución Cubana el hecho político-social más trascendente acaecido en la segunda mitad del mismo siglo.

El gobierno de Allende se propuso terminar con la dominación imperialista, los monopolios y el latifundio que constituían las dos más grandes trabas al progreso nacional y, a la vez, llevar al pueblo a la dirección del Estado para establecer un sistema de justicia social y una democracia de verdad y luego avanzar a la construcción de una sociedad socialista, sin recurrir a las armas. En tal sentido trabajó, con inquebrantable decisión, durante 1.041 días.

En ese tiempo el socialismo tenía un gran prestigio en los cinco continentes. Con él simpatizaba gran parte de la Humanidad y era el objetivo de cientos de miles de seres humanos en la lucha por una sociedad mejor. Pero la mayoría de quienes asumían tal posición querían alcanzarlo sin los enfrentamientos armados de las revoluciones socialistas que habían tenido lugar hasta entonces. Por ello, los ojos del mundo se volvieron hacia Chile. Los hombres y partidos de numerosos países se interesaron por saber cómo en el último rincón austral de la tierra podían marchar unidos socialistas y comunistas que en casi todas partes no podían verse entre sí y aquí eran los pilares principales de una coalición de

izquierda que accedía al gobierno en elecciones a Presidente. La concurrencia a la ceremonia de la transmisión del mando de un número nunca antes visto de representaciones gubernamentales, muchas de ellas de alto nivel, y la inmensa cantidad de periodistas extranjeros que vinieron a cubrir el hecho, fueron las primeras demostraciones del gran interés que despertó la experiencia chilena en aquel tiempo. Al margen de esta atmósfera de simpatía por el cambio político que se operaba en Chile, se hallaba el gobierno de los EEUU, cuyo Presidente, Richard Nixon, ni siquiera le envió a Allende un saludo con motivo de asumir el cargo de Primer Mandatario que le había dado el pueblo y refrendado el Parlamento chileno.

El triunfo de la Unidad Popular y la formación del gobierno revolucionario que encabezó Salvador Allende fue uno de los acontecimientos propios de los vientos que corrían en esos años y expresión de las tendencias entonces prevalecientes. El mundo estaba convulsionado, cambiaba y quería cambios. La revolución cubana tenía particular incidencia en la moral y la conducta de todos los pueblos latinoamericanos. Con ella, de repente, se había demostrado la posibilidad de derrotar al imperialismo estadounidense y a sus socios en cada país, y de conquistar la plena independencia de nuestras naciones. La heroica gesta del pueblo vietnamita, que mantenía a raya y le propinaba contundentes golpes al poderoso ejército invasor de los Estados Unidos, era también un factor que en todo el orbe contribuía a levantar la moral combativa de los pueblos y a impregnarlos de nuevos valores. En todas las latitudes surgían amplios y poderosos movimientos de respaldo al pueblo vietnamita. Memorables fueron las dos marchas desde Valparaíso a Santiago que en su apoyo realizaron los jóvenes chilenos en 1968 y en 1969, en 6 días la primera y en 5 la segunda.

Muestra elocuente del clima imperante en ese tiempo fueron los acontecimientos que tuvieron lugar en París en mayo de 1968, cuando multitudes de estudiantes salieron a la calle, realizaron una marcha con participación de 700 mil personas, instalaron barricadas y, apoyados por 10 millones de obreros que se declararon en huelga, enfrentaron valerosamente a la policía mientras gritaban a todo pulmón: "¡Queremos lo imposible", "¡Prohibido prohibir!", La imaginación al poder, "¡Las elecciones son una trampa!".

También en la década del 60 terminaron por liberarse casi todas las últimas colonias que aún quedaban en Asia, África y América, surgió el Movimiento de los No Alineados y los negros norteamericanos dijeron ¡basta! a la discriminación de que eran víctimas. En 1963 iniciaron en Alabama un formidable movimiento que encabezó el líder negro Martin Luther King y se extendió a todo Estados Unidos. El racismo entró en retirada y tuvo un mayor desarrollo la lucha contra la segregación racial.

Los vientos de renovación que soplaron durante todos esos años remecieron a la Iglesia Católica. Al término de una prolongada discusión, que duró más de 4 años, el Concilio Vaticano Segundo resolvió poner en práctica importantes reformas que inspiró y patrocinó Juan XXIII, el Papa Bueno, y llevó a feliz término Pablo VI. Ellas contemplaron el acercamiento de la Iglesia Católica a las iglesias protestantes y a las otras religiones, la decisión de que en adelante se impartiría la misa en el idioma de cada país y el principio, contenido en su documento constitucional Gaudium et Spies, de que "La espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación por perfeccionar esta tierra". De este modo, después de un largo período histórico durante el cual la Iglesia se dedicó a predicar la resignación a los pobres, diciéndoles que encontrarían su liberación más allá de la muerte, surgió por varios años y prevaleció en ella una tendencia que puso el acento en los problemas terrenales. Y así surgió, por ejemplo, el *Movimiento Latinoamericano de los Cristianos por el Socialismo,* cuyo primer Congreso se realizó en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular, en mayo de 1972. Como decían sus resoluciones, estuvo animado del propósito de "impactar la conciencia latinoamericana y mundial, contribuyendo a destruir la aparente legitimidad del capitalismo a que están acostumbrados la mayoría de los países del Tercer Mundo". La organización de dicho encuentro estuvo principalmente en manos del *Grupo de Los 80* sacerdotes que se había formado en nuestro país.

La Iglesia Católica chilena asumió una posición amistosa con el nuevo gobierno. Su figura más relevante, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, miraba con simpatía las transformaciones que se llevaban a la práctica, ponía de relieve las buenas relaciones entre la Iglesia y los dirigentes de la Unidad Popular a pesar de no existir coincidencia en muchos puntos de vista. Se refería a Salvador Allende como a "un político honrado que en el transcurso de toda su vida luchó por sus ideales".

Se destacaron, también, en su actitud constructiva frente al Gobierno Popular y en contra de la dictadura después, prestigiosos presbíteros, como los sacerdotes jesuitas José Aldunate, fundador del "Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo"; Alfonso Baeza, Pablo Fontaine, Esteban Gumucio y Ronaldo Muñoz, activos participantes del Movimiento "Cristianos por el Socialismo"". Los mencionados sacerdotes y muchos otros, animaron a la juventud chilena y especialmente a los pobladores de los barrios populares, a trabajar por la justicia y la paz, incluso hasta el sacrificio de sus vidas.

Durante los casi tres años de gobierno de la Unidad Popular, los pueblos de todos los continentes, en especial los de América y Europa, siguieron con

abierta simpatía la marcha de los acontecimientos que tenían lugar en nuestra tierra. Y cuando el gobierno de Allende fue derrocado por las armas y en su reemplazo se instauró una dictadura de tipo fascista, el pueblo de Chile recibió, a lo largo de 17 años, una gran solidaridad, tan grande como la que tuvieron el pueblo español durante la guerra civil desencadenada por Franco y el pueblo vietnamita en su resistencia contra la invasión norteamericana. Dicha solidaridad fue un testimonio más de la simpatía internacional que había despertado el nuevo camino al socialismo emprendido por el pueblo de Chile.

Culminación de un largo proceso

Las condiciones descritas facilitaron la gran victoria de la Unidad Popular. Pero esa victoria y las transformaciones revolucionarias que tras ella se materializaron fueron la culminación de un largo proceso histórico, el resultado de la batalla de muchos años librada por la clase obrera y el pueblo en general en pos de la democracia y la justicia social y de los esfuerzos de todos los partidos de izquierda por abrirles camino hacia el poder. En consecuencia, las transformaciones revolucionarias que tuvieron lugar durante el gobierno del Presidente Allende entroncan hasta con nuestro pasado más remoto, con los sueños y acciones por la libertad y la justicia que datan incluso de la época colonial, con las batallas por la independencia encabezadas por O'Higgins y demás padres de la patria, con todas las lides libradas por hombres y mujeres de las generaciones precedentes que consagraron sus vidas a la causa de la emancipación de los explotados y oprimidos. En particular, se enlazan con la gigantesca obra de organización de los trabajadores y de promoción de sus luchas, que dirigió Luis Emilio Recabarren en las primeras décadas del siglo XX y prosiguieron destacados dirigentes sindicales comunistas, socialistas, radicales, demócratas cristianos y sin partido, Clotario Blest entre los últimos y más sobresalientes. Son, por último, la continuidad de los combates emprendidos por la izquierda chilena desde que esta se conformó como tal, como movimiento democrático pluralista, y se propuso asumir la dirección del Estado a los comienzos de la década de los años treinta.

Chile era el único país que producía salitre, nitrato de sodio como fertilizante. La explotación de esta riqueza natural daba trabajo a decenas de miles de personas y constituía la principal fuente de financiamiento fiscal. Pero esta situación cambió bruscamente tras la aparición del salitre sintético que entró a reemplazar al natural.

Tras la revolución rusa de 1917 pasó a primer plano en todo el mundo la llamada cuestión social. En Chile se alzó más fuerte la voz de los trabajadores en demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo, el Partido Obrero Socialista conquistó la dirección de la Federación Obrera de Chile, la FOCH, y con el apoyo de la Alianza Liberal formada por los partidos Radical y Demócrata más un sector del Partido Liberal, fue elegido en 1920 Presidente de la República el entonces senador Arturo Alessandri Palma, luego que éste se comprometiera ante el país a reformar la Constitución y hacer realidad las reformas sociales y sindicales que exigían los trabajadores.

En las elecciones de marzo de 1924 la Alianza Liberal ganó la mayoría de ambas ramas del Parlamento. Pero no respondió a las expectativas de los electores. Pasaron los días y los meses sin atender las demandas más sentidas que los partidos y parlamentarios de la Alianza habían acogido cuando eran candidatos, como la de establecer por ley el contrato de trabajo, la indemnización por accidentes del trabajo, la creación de una caja de seguro obligatorio, el derecho a huelga, el mejoramiento económico del personal de las Fuerzas Armadas y otras conquistas sociales.

El país entró a un período de golpes y contragolpes de Estado, de franca inestabilidad política. En vista del incumplimiento de tantas promesas del Presidente de la República y de la gestión legislativa francamente nula, aumentó la efervescencia social y en los primeros días de septiembre se produjo el primer golpe contra Alessandri. La oficialidad joven del ejército, junto a una parte de la Alianza Liberal, hicieron a un lado al Presidente de la República, y se instaló una Junta de Gobierno con la presencia de tres altos jefes militares y encabezada por el general Luis Altamirano. De acuerdo con la derecha, la Junta exigió la dimisión del Presidente Alessandri, quien envió su renuncia al Parlamento. Pero é54ste la rechazó y le dio, en cambio, un permiso para salir al extranjero manteniendo su investidura de Presidente. La Junta Militar respondió con la destitución de Alessandri y clausuró el Parlamento apenas este aprobó la reforma de la Constitución y varios proyectos de leyes, entre ellos el Código del Trabajo. El 23 de enero de 1925, un nuevo golpe militar destituyó a la Junta que encabezaba el general Altamirano y asumió el mando una nueva Junta de Gobierno con Emilio Bello Codecido como Presidente y un ministerio en el cual Armando Jaramillo desempeñó la cartera del Interior y Carlos Ibáñez del Campo, la de Guerra.

La Junta que presidió Bello Codecido llamó a Arturo Alessandri para que completara su período de Presidente. Este volvió de su autoexilio en París, reasumió el 18 de septiembre de 1925 y promulgó la nueva Constitución, que pasó a llamarse la Constitución de 1925 y estableció el presidencialismo como régimen de gobierno, dándole tantas facultades al Jefe del Estado, que de hecho, prácticamente pasó a

convertirlo en un monarca por un periodo de 6 años. La Constitución fue aprobada en un plebiscito por menos de la mitad de los electores de ese tiempo, pues sólo contó con los votos a favor de 128 mil ciudadanos, 6 mil 40 en contra y 167 mil 833 abstenciones, más abstenciones que la suma de votos a favor o en contra.

Tres meses antes de terminar su mandato, Alessandri fue otra vez aventado del poder por un tercer movimiento militar instigado por su ministro de Guerra, Carlos Ibáñez. El país fue convocado a elecciones presidenciales, donde se presentaron dos postulantes, Emiliano Figueroa, candidato de la Alianza Liberal y de los conservadores y liberales, y el médico del Ejército José Santos Salas, candidato de la Asamblea de Asalariados de Chile y del Partido Comunista, que obtuvo el 28,5% de los sufragios. De la Asamblea de Asalariados formaban parte la Federación Obrera de Chile, la Federación Obrera Ferroviaria, la Asociación general de Profesores, la Liga de Comerciantes Industriales, la Liga de Arrendatarios y otras organizaciones. El historiador Hernán Ramírez Necochea sostiene en su libro *Origen y Formación del Partido Comunista de Chile* que la alianza que constituyeron esas organizaciones más el Partido Comunista fue "*una especie de Frente Popular,* representando un fenómeno político nuevo precursor del Frente Popular y de la Unidad Popular".

El gobierno de Emiliano Figueroa duró apenas un año y ocho meses. Presionado por los militares, dimitió el 4 de mayo de 1927, y a fines del mismo mes, el general Ibáñez se hizo elegir Presidente en elecciones en las que tuvo un solo opositor, el candidato comunista. Elías Lafertte, que es relegado a la isla Más Afuera por la osadía de habérsele cruzado en el camino. Junto a él marcharon a la relegación decenas de personas, la mayoría comunistas, que inscribieron su candidatura.

Carlos Ibáñez implantó una dictadura brutal, que se lanzó contra todos los partidos, incluso de derecha y con especial saña contra el Partido Comunista. Cayó el 26 de julio de 1931 en medio de un movimiento popular sin precedentes, cuando cientos de miles de chilenos, gente de las capas medias y en especial, trabajadores y estudiantes, ganaron las calles y exigieron la renuncia del dictador.

Durante la dictadura de Ibáñez se aplicó una política represiva mediante la aplicación del "termocauterio abajo y arriba", como así se llamaba en ese tiempo a la política de aguda represión dirigida contra sus adversarios de la derecha y de la izquierda. Fueron perseguidos hombres democráticos de todas las tendencias, entre ellos notables personalidades como el conservador Rafael Luis Gumucio, el abogado Carlos Vicuña Fuentes que escribiera esa apasionante monografía *La Tiranía en Chile,* Manuel Rivas Vicuña, Eliodoro Yánez, Pedro León Ugalde y Santiago Labarca. Pero fue el Partido Comunista, junto a la clase

obrera, el primer y principal blanco de la dictadura. La represión comprendió asesinatos individuales, detenciones masivas, torturas, relegaciones, destierros y supresión de las libertades públicas y de los derechos ciudadanos. Fue acompañada de la infiltración de agentes en todos los ámbitos, con la proliferación de delatores y soplones.

Junto a la crisis económica, una profunda crisis política sacudía al país

En el trasfondo de los acontecimientos, sucintamente anotados, cruzaba la lucha de la ascendente burguesía minero-industrial por desplazar del poder a la oligarquía latifundista y financiera, ligada al imperialismo inglés que pasaba a posiciones secundarias en América, en tanto el imperialismo estadoudinense ocupaba el primer lugar. Al mismo tiempo la clase obrera levantaba sus propias banderas. Ya en 1920 el Partido Comunista presentó a Luis Emilio Recabarren como candidato en las elecciones presidenciales de ese año, en 1924 constituyó el Comité Obrero Nacional con el apoyo de la Federación de Estudiantes y en 1925, a iniciativa de dicho Comité se realizó un Congreso Constituyente de Asalariados e Intelectuales que discutió las medidas que debía consultar una nueva Constitución, entre otras *"la socialización de la tierra y de los medios de producción"*. El Comité se empeñó, a la vez, en coordinar su acción con la oficialidad joven del Ejército y fue antecesor de la Asamblea de Asalariados de Chile que ya hemos mencionado.

Pero la mayoría de los políticos se rindieron y colaboraron con la dictadura a cambio de ocupar un sillón en el "Congreso Termal", así llamado, por haber sido fabricado ad-hoc conforme a la lista que se elaboró en las Termas de Chillán, el 6 de enero de 1930, mientras el Presidente Ibáñez tomaba allí sus vacaciones de verano. Citados por él llegaron hasta allí los más altos representantes de los Partidos Conservador, Liberal, Radical y Demócrata y de la Confederación Republicana de Acción Cívica, la CRAC, nombre que tenía una agrupación de obreros y empleados constituida a gusto del dictador. La ley electoral de esa época establecía que si el número de candidatos que se presentaban a una elección era inferior o igual al número de diputados y senadores que debían elegirse, se podía prescindir de las elecciones, y el Tribunal Calificador, sin mayor trámite, podría proclamar, como diputados y senadores, a las personas que se hubiesen presentado en esas condiciones. De este modo, tras

las bambalinas de la política, se convino en la repartija de los cargos parlamentarios designando, a dedo, un número de candidatos exactamente igual al que debía ser elegido. Y así, conforme a la legislación vigente, no fueron necesarias las elecciones de 1930.

Chile era uno de los países más dependientes y, según la Liga de las Naciones, fue el más afectado en América Latina por la mayor crisis mundial del capitalismo, cuya primera expresión de gran magnitud fue el crack de la bolsa de Nueva York, el 29 de octubre de 1929. Todavía el salitre era, aunque a mucha distancia de diez años atrás, nuestro principal producto de exportación. Pero sus ventas, que ya habían bajado en más de 4 millones de toneladas entre 1914 y 1920, como consecuencia de la aparición en el mercado mundial del salitre sintético, después de una subida transitoria, volvieron a bajar, debiendo cerrar la mayor parte de las "oficinas" que lo elaboraban. Descendieron las importaciones en un 80%. Toda la economía nacional entró en crisis y decenas de miles de trabajadores fueron lanzados a la cesantía. Muchísimas familias tuvieron que ser acogidas en los albergues creados por el Estado, donde el hacinamiento y la insalubridad dieron motivo a una violenta epidemia de tifus exantemático.

Cuando el descontento salió a la calle y se manifestó en multitudinarias movilizaciones, principalmente obreras y estudiantiles, la dictadura de Carlos Ibáñez no resistió la avalancha de las masas y cayó el 26 de julio de 1931.

La sucedió el anodino gobierno de Esteban Montero, quien antes de cumplir un año fue también derribado. Cayó sin pena ni gloria, de un simple manotazo golpista encabezado por el coronel de Aviación Marmaduque Grove Vallejos, dando origen a la llamada República Socialista que duró sólo 12 días, del 4 al 16 de junio de 1932. La Junta de gobierno que la presidía se propuso elaborar y poner en práctica un plan de reforma agraria, nacionalizar el salitre y crear el Banco del Estado, controlar el comercio exterior e interior, aplicar impuestos a las grandes fortunas y una reforma constitucional, entre otras medidas de gran proyección que, ciertamente, no fueron aplicadas. No obstante, la República Socialista fue recordada con agrado durante muchos años por la gente más modesta por haber dispuesto que las Casas de Empeño devolvieran las herramientas de trabajo que se habían depositado en ellas a cambio de préstamos miserables. Tuvo otro mérito valorable: disolvió el "Congreso Termal", el cual, de este modo duró sólo dos años y tres meses.

La echó a pique un movimiento militar encabezado por los Mayores Julio Labbé y Alfredo Espinoza. Estos, a la cabeza del Regimiento Buin, se tomaron el Ministerio de Guerra que estaba frente a La Moneda, en un edificio situado en lo que es hoy la Plaza de la Constitución. De inmediato se instaló un nuevo gobierno Provisional, presidido por Carlos Dávila, el que a su vez fue aventado el 13 de

septiembre por otro movimiento militar, que irrumpió en Antofagasta dirigido por el general Pedro Vignola. A continuación vino la segunda Presidencia de Arturo Alessandri Palma, elegido el 24 de octubre de 1932. Estos últimos cuatro cambios de gobierno se produjeron en menos de año y medio, lo que da cuenta de la profundidad del malestar social y de la crisis política que sacudía al país.

En este marco, el movimiento popular levantó cabeza y comenzó a irrumpir con vigor creciente gracias al empuje del Partido Comunista, del Partido Democrático, del naciente Partido Socialista, de la mayoría del Partido Radical que asumía posiciones antiderechistas, de la Federación Obrera de Chile y de la Federación de Estudiantes de Chile.

Simultáneamente, la izquierda chilena dio comienzo a un proceso de unidad de sus fuerzas con la idea de generar su propio gobierno, un gobierno comprometido en atender las necesidades del pueblo, desconsideradas por las administraciones de la derecha conservadora o liberal y por la dictadura de Ibáñez. Surgió primero el Block de Izquierda que agrupó a los Partidos Radical-Socialista, Socialista y Democrático. El Partido Comunista, que estaba fuera de él, se empeñó en lograr una alianza más amplia con su participación, y propició la formación del Frente Popular después de ser vencidas algunas resistencias. Se fundó el 26 de marzo de 1936 en el diario *La Opinión*, en la oficina de su director Juan Bautista Rossetti, con participación de representantes de los partidos Socialista, Comunista y Radical Socialista. Luego se incorporó el Partido Radical cuando su ala de izquierda ganó la directiva y eligió Presidente a Alfredo Guillermo Bravo.

A su formación contribuyeron, de modo relevante la Asamblea Radical de la primera comuna de Santiago y un jacobino político de esa filiación, Justiniano Sotomayor, que fuera varias veces diputado por el primer distrito de la capital.

Simultáneamente a la constitución del Frente Popular, los trabajadores chilenos iniciaron un importante proceso de organización y unificación de sus fuerzas. Se crearon poderosas federaciones sindicales por ramas de la industria, del transporte y los servicios, como la Federación de la Construcción, la Federación Nacional Ferroviaria, la Federación Minera, la Federación Metalúrgica, la Unión de Profesores de Chile, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y varias otras. En ese momento de auge del movimiento sindical se fundó la Confederación de Trabajadores de Chile, CTCH, producto de la fusión de la Confederación de Sindicatos, dirigida por los socialistas; de la Federación Obrera de Chile, dirigida por los comunistas y de la Confederación general del Trabajo, de orientación anarco-sindicalista.

La CTCH pasó a formar parte del Frente Popular junto a los partidos Radical, Socialista, Democrático y Comunista.

Cuando la izquierda llega al gobierno por primera vez

Chile fue el único país de América Latina y uno de los tres de todo el mundo donde los partidos de izquierda conquistaron el gobierno luego de agruparse tras la bandera del Frente Popular. Los otros dos fueron España y Francia. En la década siguiente, en 1942, en plena guerra mundial, el Frente Popular se formó también en Bulgaria con el nombre de Frente de la Patria y conquistó el poder en septiembre de 1944 en el marco de la contraofensiva del ejército soviético que culminó con la derrota de la Alemania fascista en mayo de 1945.

Además de Francia, España, Chile y Bulgaria, la unidad antifascista cuajó en cierta medida en Brasil, donde tomó el nombre de Alianza Libertadora.

La Internacional Comunista había asumido el ejemplo y la experiencia de los comunistas y socialistas de Francia que marchaban unidos en la lucha antifascista. En su VII Congreso, celebrado en agosto de 1935, la Internacional propició la formación del Frente Popular con el apremiante objetivo de atajar y derrotar el fascismo hitleriano que se levantaba como grave amenaza a la paz, a la democracia y a la independencia de las naciones. Su llamado resonó en todo el planeta. Pero fue desoído en la generalidad de los países. Las desavenencias entre socialdemócratas y comunistas pesaron más que el interés de los pueblos de poner una barrera de contención al fascismo que pretendía establecer su dominio en todo el globo terráqueo. Y así Hitler se apoderó de Europa.

Nuestro Frente Popular se destacó en la solidaridad con el pueblo español que junto a su gobierno republicano tuvo que hacer frente a la guerra civil desencadenada por Franco con el apoyo de Hitler y Mussolini. A la vez, enfrentó decididamente al fascismo criollo en todos los lugares donde se hacía presente. En estos enfrentamientos cayeron varios luchadores antifascistas, entre ellos el joven poeta socialista Víctor Barrueto, asesinado en la calle San Diego, a la salida del Café Volga. El fascismo tenía aquí sus seguidores y adeptos, en primer lugar en los chileno-germanos del sur y en el sector más reaccionario de la derecha. Se había formado el Partido Nacional Socialista, a imagen y semejanza –y con el mismo nombre– del Partido de Adolfo Hitler. Lo encabezaba Jorge González Von Marée, que entre 1932 y 1937 fue diputado por Santiago. La derecha lo miraba con simpatía. En sus filas se formaron connotados derechistas, entre ellos René Silva Espejo, quien años después fuera director de *El Mercurio*.

El Frente Popular se desarrolló en Chile como una poderosa coalición de izquierda, constituida al calor de la lucha por los derechos de los trabajadores, por la democracia y el progreso social. Tuvo la simpatía de las masas y se materializó en un amplio y vigoroso movimiento social porque nuestro pueblo comprendió

que el fascismo y la guerra amenazaban también la paz y la independencia nacionales. Prendió, sobre todo, porque la situación exigía un cambio en los rumbos del país y para ello se requería reunir las fuerzas necesarias para desplazar del gobierno a la oligarquía que compartía su dominio con el imperialismo.

Los tres primeros gobiernos elegidos por el pueblo

Con el Frente Popular, el pueblo entró a jugar un papel influyente en la vida política del país. El 25 de octubre de 1938 eligió Presidente de la República a don Pedro Aguirre Cerda, constituyéndose el primer gobierno de izquierda en la historia de Chile. De él formaron parte los Partidos Radical, Socialista y Democrático. El Partido Comunista lo apoyó decididamente en el cumplimiento de su programa, sin participar ni haberse propuesto participar en él.

El gobierno de Aguirre Cerda comenzó por restablecer el ejercicio de las libertades públicas, el respeto a los derechos ciudadanos y la soberanía nacional en las salitreras y minas de cobre en manos del capital extranjero, a las cuales ningún ciudadano podía entrar sin previo permiso de los "mandamases" de las compañías mineras[11]. Les devolvió la personalidad jurídica a los sindicatos de las oficinas salitreras "María Elena" y "Pedro de Valdivia" de propiedad de la firma norteamericana Lautaro Nitrate. Dispuso, además, la reincorporación de los 200 y tantos profesores exonerados durante la administración de Arturo Alessandri Palma y de los trabajadores expulsados de la Empresa de Ferrocarriles del Estado a raíz de la huelga del verano de 1936. Hizo efectiva la libertad de prensa. Aparecieron los diarios *El Siglo* del Partido Comunista y *La Crítica* del Partido Socialista. Circulaban, además, *El Ilustrado*, conservador; *El Imparcial*, liberal; *La Hora*, radical; *La Opinión*, independiente de izquierda, y *El Mercurio*. Había, pues, una prensa pluralista que reflejaba todas las corrientes de opinión. Además se hicieron efectivas las conquistas sociales de los obreros y empleados, como las 8 horas de trabajo, el llamado sábado inglés (durante el cual se trabajaba medio día), las vacaciones pagadas y demás disposiciones de la legislación laboral que se habían establecido a su favor.

El 6 de noviembre de 1940 el gobierno de Aguirre Cerda fijó los límites del territorio chileno antártico, entre los meridianos 53 y 90 de longitud oeste. Le dio

---

11 El propio Pedro Aguirre Cerda, cuando era candidato a Presidente tuvo que ser proclamado fuera de las oficinas salitreras, en "las huellas" como llamaban en el norte a los caminos y, para entrar a Chuquicamata, a Potrerillos y Sewell había que conseguir previamente permiso de los "mandamases" de las empresas norteamericanas.

gran impulso a la educación, particularmente, a la primaria y a la media técnico profesional. Su lema fue "Gobernar es Educar." Creó la Corporación Constructora de Establecimientos Educacionales, que levantó numerosos y excelentes edificios para escuelas y liceos, desapareciendo posteriormente por decreto de la dictadura. Creó también la Corporación de Reconstrucción y Auxilio para ayudar, con créditos a bajo interés y pagaderos a largo plazo, a la construcción de habitaciones en lo que es hoy la Octava Región, devastada por el terremoto de Chillán el 29 de enero de 1939.

Especial trascendencia tuvo su preocupación por la industrialización del país, para lo cual creó la Corporación de Fomento a la Producción. Chile era hasta entonces un país principalmente minero y agrario.

Bajo el alero de la CORFO surgió la siderúrgica de Huachipato y la Empresa Nacional de Electricidad, ENDESA. Se produjeron cañerías y planchas de cobre, se inició la fabricación de lavadoras, refrigeradores y otros electrodomésticos, se levantaron nuevas fábricas textiles y de diversos materiales para la construcción.

Por iniciativa de la esposa del Presidente de la República, doña Juanita Aguirre, el Estado tomó en sus manos la celebración de la Navidad, lográndose desde entonces que todos los niños chilenos tuvieran su juguete para la Pascua.

Aguirre Cerda falleció a fines de 1941, sucediéndolo Juan Antonio Ríos, elegido con el apoyo de todos los partidos de izquierda y de un sector del Partido Liberal encabezado por Arturo Alessandri Palma. A mitad de su mandato, Ríos se enfermó de cáncer. En su reemplazo asumió el radical derechista Alfredo Duhalde como Vicepresidente de la República. Su gobierno las emprendió en contra de los trabajadores, disuelve los sindicatos de las oficinas salitreras "Humberstone" y "Mapocho" que se hallaban en huelga, y carabineros ataca con fusiles-ametralladoras el mitin que en su apoyo realiza la CTCH el 28 de enero de 1946 en la Plaza Bulnes, donde cayeron asesinados la joven comunista, obrera del Laboratorio Recalcine, Ramona Parra, Alejandro Gutiérrez, Adolfo Lisboa, Filomeno Chávez, Manuel López y René Tapia. La CTCH respondió con un paro nacional de trabajadores. Este se suspendió al formarse un nuevo Ministerio comprometido a castigar a los responsables directos de la masacre y a devolverles la personería jurídica a los sindicatos disueltos. Ante el incumplimiento de la palabra empeñada por el Gobierno, el paro se reanuda el 4 de febrero por acuerdo unánime de los dirigentes nacionales de la CTCH, incluido su secretario general, Bernardo Ibáñez, quien luego llamó a romperlo desde los micrófonos del Palacio de Gobierno. La Central Obrera se dividió, se descargó la represión contra los trabajadores de Cemento El Melón y Cristalerías Chile y se inició el llamado gobierno del Tercer Frente con el respaldo del Partido Socialista.

Meses después, el 4 de septiembre de 1946, fue elegido otro Presidente radical, Gabriel González Videla, apoyado por los partidos Radical, Comunista y Democrático que asumieron, los tres, responsabilidades ministeriales junto con el Partido Liberal. El Partido Socialista se apartó de los otros partidos de izquierda y presentó su propio candidato, Bernardo Ibáñez, que sólo recibió 12 mil 114 votos.

Antes de cumplir un año como gobernante, González Videla le dio la espalda al pueblo y promovió y aplicó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia, que de tal sólo tuvo el nombre y que la gente llamó, con más propiedad, Ley Maldita. Mediante esta ley fueron eliminados de los registros electorales cerca de 30 mil ciudadanos y en ella quedó expresamente establecida la prohibición de que los miembros del Partido Comunista se inscribieran en los registros electorales, y fuesen elegidos parlamentarios o cualquier otro cargo público de representación popular, prohibición que de hecho se volvió a imponer más tarde por decisión de Pinochet. Al mismo tiempo, González Videla abrió en Pisagua el primer campo de concentración en la historia chilena, adonde fueron conducidos varios miles de luchadores del pueblo. Y se puso abiertamente al servicio del imperialismo norteamericano en su política de guerra fría.

Su gobierno terminó en medio del mayor descrédito. No obstante, hay que registrar tres hechos importantes que ocurrieron en ese período: el inicio de la explotación del petróleo de Magallanes, la creación de la Universidad Técnica del Estado y la promulgación, el 8 de febrero de 1949, de la ley que estableció el derecho a voto de las mujeres.

Con González Videla finalizó el período de las administraciones radicales generadas con el apoyo de los partidos de izquierda. Independientemente de las cosas positivas que hicieron, en especial la de Aguirre Cerda, conciliaron en aspectos fundamentales con la derecha, no estuvieron a la altura de lo que el país necesitaba y las dos primeras, que gobernaron en los años de la segunda guerra mundial, no asumieron una posición de apoyo decidido a la coalición anti-hitleriana.

Entonces, el pueblo entró a desconfiar de los políticos burgueses, aunque sin acrecentar de inmediato la confianza en sus propias fuerzas, debido a la dispersión de la izquierda y al debilitamiento de los vínculos del Partido Comunista con las masas durante 5 de los 6 años del gobierno de González Videla. Así se explica el hecho de que en las elecciones presidenciales de septiembre de 1952 una gran parte del pueblo se fuera con Carlos Ibáñez del Campo, quien obtuvo el 46% de los votos contra el 27% de su más cercano contendor, el personero de la derecha Arturo Matte Larraín, el 19% del radical Pedro Enrique Alfonso y el 5,4% de Salvador Allende, candidato del Frente del Pueblo.

La candidatura de Ibáñez fue proclamada y apoyada por los partidos Agrario Laborista, Socialista Popular y Nacional Democrático. Tuvo un claro sello populista y demagógico. Ibáñez alzó como símbolo la escoba, con la cual barrería la corrupción y a los corruptos que acompañaron a los dos últimos gobiernos radicales. Prometió hacer la reforma agraria, atender las más apremiantes demandas del pueblo, derogar la Ley Maldita y desahuciar el Pacto de Río de Janeiro que obligaba a todos los países americanos a ponerse al lado de los Estados Unidos en cualquier nuevo conflicto bélico. Pero, una vez instalado en La Moneda como Presidente de la República, puso en práctica una política reaccionaria y dejó de lado sus promesas, salvo la derogación de la ley anticomunista que cumplió al final de su gobierno.

El fructífero entendimiento entre comunistas y socialistas

El cuadro cambió rápida y completamente. Transcurrido apenas un año de Presidente, quedó claro que Ibáñez, como su antecesor en el cargo, se ponía también al servicio de los poderosos. Entonces, el Partido Socialista Popular, por acuerdo de su XV Congreso Ordinario celebrado en San Antonio en octubre de 1953, se retiró del gobierno y luego buscó el entendimiento con el Partido Comunista, con el Partido Socialista de Chile en el cual militaba Allende y con los demás partidos que formaban parte del Frente del Pueblo.

Especialmente significativo y trascendente fue el acercamiento que se produjo entre los influyentes Partidos Comunista y Socialista, los cuales llegaron a tener, por sobre determinadas divergencias, posiciones comunes sobre los asuntos principales, contribuyendo en forma apreciable a que la clase obrera pudiera desempeñar un papel hegemónico, necesario para lograr una firme dirección en la lucha por los cambios revolucionarios.

Comunistas y socialistas llamaron a constituir una nueva alianza de izquierda, propósito que se materializó en febrero de 1956 con la formación del Frente de Acción Popular, el FRAP, a cuyas filas se incorporaron, además y desde el primer día, los Partidos Nacional Democrático, Democrático del Pueblo, del Trabajo y la Alianza Independiente que dirigía Mamerto Figueroa.

Este proceso de reunificación de la izquierda ayudó a la unidad del socialismo chileno, cuyos partidos, el Socialista de Chile y el Socialista Popular, resolvieron fusionarse. Con tal fin celebraron juntos el Congreso de Unidad en julio de 1957 y pasaron a constituir, como sucedía diez años atrás, una sola colectividad.

El Partido Socialista que emergió del Congreso de Unidad –con Salomón Corbalán como Secretario general y después con Raúl Ampuero y Aniceto Rodríguez– consideró fundamental el entendimiento con el Partido Comunista. Este fue un hecho muy positivo. Ayudó a que ambas colectividades entraran a coincidir cada vez más en la necesidad de promover profundos cambios democráticos, antiimperialistas y antifeudales, con vista al socialismo. El entendimiento socialista-comunista fue un gran aporte al movimiento obrero, que adquirió, entonces, mayor potencialidad. Pasó a ser, también, la base del Frente de Acción Popular. No obstante, una marcada diferencia en política de alianzas, en cuanto a las fuerzas que la izquierda debía tratar de agrupar en pos de los cambios señalados, seguirían manteniéndose entre socialistas y comunistas, y esta diferencia se prolongaría, en menor o mayor grado, hasta el fin del gobierno de Salvador Allende y aún después de él.

En el X Congreso Nacional del Partido Comunista, celebrado clandestinamente en Cartagena, en abril de 1956, su Secretario general, Galo González, valoró los avances logrados en la reunificación de la izquierda y particularmente en las relaciones entre comunistas y socialistas. "En Chile –dijo– se ha iniciado, desde hace cierto tiempo, una nueva etapa en las relaciones entre comunistas y socialistas. En el pasado luchamos juntos muchas veces. Pero también en ciertas ocasiones nos fuimos poco menos que de las manos. No es del caso discutir quién o quiénes tenían razón. Pero sí lo es recordar que cada vez que marchamos unidos la clase obrera salió ganando y cada vez que nos apartamos o peleamos entre sí, el enemigo obtuvo ventajas. En 1938, estuvo el Partido Socialista en el gobierno. El Partido Comunista no. En 1946 estuvimos nosotros en el gobierno. El Partido Socialista no. Otra cosa habría sido si comunistas y socialistas hubiésemos estado juntos tanto en el gobierno como fuera de él. Nuestro partido tiene el más vehemente deseo de estrechar de más en más su amistad con los partidos socialistas. No queremos rivalizar con ellos, disputarnos los sindicatos ni nada parecido. Deseamos un gran Partido Comunista, luchamos por nuestros puntos de vista. Pero deseamos también un gran Partido Socialista y nos parece saludable que ellos luchen como nosotros por sus puntos de vista. Más todavía, miramos con simpatía la idea lanzada para fusionar los partidos socialistas en uno solo. Somos partidarios de todo esto en el bien entendido, claro está, que de la otra parte haya sentimientos recíprocos y que todos juntos, comunistas y socialistas lucharemos por el socialismo y hoy día por la liberación nacional".

Un gran ejemplo de amplitud política en la lucha por la democracia

El Frente de Acción Popular desplegó una gran actividad en la lucha por las libertades democráticas y ante todo por la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia. Tocante a esta cuestión, en las postrimerías del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo surgió una coyuntura ante la cual el FRAP actuó con amplitud y sagacidad políticas. Algunos de los más influyentes personajes que formaban parte del gobierno o seguían manteniendo relación con él eran partidarios de cerrarle el paso a la derecha que aspiraba ganar las elecciones presidenciales de 1958. Con este objetivo se propusieron hacer un postrer esfuerzo por suprimir la Ley de Defensa de la Democracia que Carlos Ibáñez del Campo había prometido derogar. Les interesaba, en especial, que en dichas elecciones pudieran sufragar los ciudadanos que en razón de esa ley habían sido eliminados de los registros electorales. En estas circunstancias, el FRAP tomó contacto con ellos y jugó un papel determinante en la elaboración de un proyecto que derogaba la Ley Maldita y establecía, además, la cédula única y con ella un nuevo sistema de votación. Con tal fin promovió y logró la formación del Bloque de Saneamiento Democrático, en el cual, además de los partidos de izquierda, participaron el Partido Demócrata Cristiano que entonces presidía Rafael Agustín Gumucio, el Partido Radical que dirigía Alberto Baltra, el Agrario Laborista que encabezaba Julio Mühlenbroock y el Partido Nacional Popular que conducía Sergio Onofre Jarpa. Un mes antes de las elecciones presidenciales el proyecto fue aprobado en el Congreso por amplia mayoría, con la sola oposición de los conservadores y liberales.

La derogación de la Ley Maldita y el establecimiento de la cédula única fueron éxitos muy importantes en la lucha por la democracia. Gracias a ello recuperaron su derecho a voto los casi treinta mil ciudadanos que habían sido eliminados de los registros electorales, el Partido Comunista alcanzó reconocimiento legal y por muchos años se terminó con el cohecho que se practicaba en ese tiempo. En tanto la derogación se convirtió en ley y esta fue promulgada por Ibáñez; una delegación del Partido Comunista, integrada por Pablo Neruda, Julieta Campusano, Galvarino Melo, Manuel Cantero y quien escribe, llegó hasta "La Moneda" para expresarle al Presidente de la República nuestro reconocimiento por su aporte a la democratización del país.

De acuerdo al sistema electoral que existía hasta 1958, en la mesa donde correspondía sufragar no se entregaba el voto (la papeleta con los nombres de los candidatos) a los ciudadanos que iban a sufragar. Cada partido o candidato las

imprimía por su cuenta y las distribuía de tal modo que el elector podía llevarla en su bolsillo o tomarla en la caseta del lugar donde debía sufragar, caseta en la cual todos los partidos y candidatos independientes dejaban también votos a disposición de los ciudadanos. De acuerdo a tal sistema, los partidos y candidatos montaban todo un dispositivo dirigido a comprar electores o dicho en otras palabras, a entregarle una cierta cantidad de dinero o alguna prenda necesaria y no fácil de adquirir a los ciudadanos dispuestos a vender su voto. A este respecto se hizo famosa la compra de votos por un colchón, con la particularidad de que se entregaba medio colchón antes de sufragar y el otro medio colchón después del acto electoral, una vez que el comprador se sentía seguro de que la operación se había efectuado "en forma correcta" y no había sido engañado por el vendedor. Esta clase de cohecho había creado un personaje ad-hoc, el "acarreador". Su papel consistía en "acarrear" al elector o, dicho en términos más elegantes, en acompañarlo a votar, asegurándose, mediante diversas formas de vigilancia y control, que el tipo "votara bien".

A propósito de estas ferias electorales Pablo Neruda escribió el siguiente poema que está en su *Canto general*.

Elecciones En Chimbarongo

"En Chimbarongo, en Chile,
hace tiempo,
fui a una elección senatorial.
Vi cómo eran elegidos
los pedestales de la patria.
A las 11 de la mañana
llegaron del campo las carretas
atiborradas de inquilinos.
Era en invierno, mojados,
sucios, hambrientos, descalzos,
los siervos de Chimbarongo
descienden de las carretas.

Torvos, tostados, harapientos
son apiñados, conducidos
con una boleta en la mano,
vigilados y apretujados
vuelven a cobrar la paga
y otra vez hacia las carretas
enfilados como caballos
los han conducido.
Más tarde
les han tirado carne y vino
hasta dejarlos bestialmente
envilecidos y olvidados.
Escuché más tarde el discurso
del Senador así elegido:
"Nosotros, patriotas, cristianos,
nosotros, defensores del orden,
nosotros, hijos del espíritu".
Y estremecía su barriga
su voz de vaca aguardientosa
que parecía tropezar
como una trompa de mamut
en las bóvedas tenebrosas
de la silbante prehistoria.

Lamentablemente, el cohecho ha vuelto, aunque de otra manera. Hay voces que lo condenan, entre ellas la del ex diputado Andrés Aylwin, quien, a raíz del despilfarro gigantesco de dinero en las elecciones de 1993, denunció públicamente que los gastos electorales de algunos candidatos a diputado suelen ser "cuatro o diez veces superiores al monto de la dieta de un diputado durante todo su período de cuatro años como parlamentario" y agregó que esos gastos son cubiertos por "los grandes poderes financieros actuando desde la sombra y por lo mismo, determinando mayorías parlamentarias e influyendo, en mayor o menor grado las conductas de los candidatos elegidos".

Han pasado 10 años desde que Andrés Aylwin puso de relieve estas verdades y las cosas siguen igual. Con escasas excepciones, los cargos parlamentarios se conquistan con el dinero que ponen "los grandes poderes financieros", hecho que deja a los elegidos, "en mayor o menor grado", atados a sus intereses. Si a ello se suma la existencia de senadores designados y vitalicios, y el sistema binominal, que permite la repartija de los asientos de ambas cámaras entre los dos partidos o bloques mayoritarios, sólo se puede llegar a la conclusión de que Chile ha retrocedido casi un siglo en materia de elecciones.

Bajo las banderas del frente de Acción Popular

La izquierda, agrupada en el Frente de Acción Popular, libró la batalla presidencial de 1958, en la cual Salvador Allende obtuvo la segunda mayoría relativa con el 28,5% de los votos y Alessandri la primera, con el 31,2%. Más atrás quedaron Frei que reunió el 20,5%, Bossay el 15,4% y Antonio Zamorano, el cura de Catapilco, el 3,3%. A raíz de estos resultados, algunos dijeron que Allende perdió por culpa del cura, ya que sumada la votación de Zamorano a la de Allende este habría salido primero. Otros sostuvieron que la culpa fue de las mujeres debido al hecho de que en el registro de varones nuestro candidato obtuvo el 31,9% de los sufragios, más votos que Alessandri que logró el 27% y, en cambio, en el de mujeres llegó solo al 22,1% y su contendor al 33,8%. De acuerdo a estas cifras, era también evidente que si no hubiese sido tan grande la diferencia de la votación femenina entre ambos, el candidato del FRAP lejos habría triunfado. Pero era absurdo echarles la culpa a las mujeres. Si éstas votaban por la derecha más que los hombres era, porque en no pocas de ellas habían hecho algún efecto las historias de terror que la reacción inventaba para inducirlas a no votar por Allende. Y nuestra era la responsabilidad por no haber trabajado suficientemente para hacerles comprender que esas historias eran simples cuentos y miserables embustes. Por eso, el Partido Comunista afirmó, con sentido autocrítico, que los resultados de la elección indicaban

ante todo la necesidad de trabajar más y mejor para atraer a nuevos sectores del pueblo, comprendidas las mujeres, hacia las posiciones y la alianza de izquierda.

El Parlamento ratificó la victoria de Alessandri y con ello la derecha tradicional retomó el gobierno en sus manos y lo puso al servicio de sus intereses y de los intereses de los monopolios yanquis.

Por "recomendación", más bien imposición de los magnates estadoudinenses, el gobierno de Alessandri levantó los controles a las importaciones, convirtió a todo Chile en un puerto libre, siguió desvalorizando la moneda, continuó aplicando la política de estabilización que inició el Gobierno de Ibáñez conforme a las recetas del Fondo Monetario Internacional y se empleó a fondo por imponer un límite de 9% al reajuste de los salarios. Pero no les fijó límites a las alzas de precios. A la vez, restringió los créditos a la pequeña y mediana industria y al pequeño y mediano comercio, aplicó diversas medidas orientadas a elevar las ganancias de los monopolios y siguió cargando la mano a los impuestos que pagaba el pueblo.

Con razón el de Jorge Alessandri fue llamado "el gobierno de los gerentes". Al término de su gestión, diez clanes financieros poseían el 76% del capital de las 476 empresas más grandes del país. El Banco Sudamericano, del clan Matte-Alessandri, controlaba 130 sociedades anónimas; el Banco Chile, de los clanes Matte- Alessandri y Edwards, controlaba 74; el Banco Edwards del clan del mismo nombre, 61; el Banco del Trabajo, de los Said, Kattan e Hirmas, 48: el Banco Árabe, 12; el Banco de Crédito e Inversiones, 11. De esta suerte, el grupo financiero de los Matte-Alessandri controlaba casi totalmente la producción de cemento, de papeles y cartones, de vidrios, de géneros de lana y la distribución del gas en Santiago.

Los trust norteamericanos dominaban otra parte substancial de la economía. El "clan Morgan" controlaba la Compañía Chilena de Electricidad, la Compañía de Teléfonos y la Sociedad Minera de El teniente; el "grupo Rockefeller", propietario de la "Esso Standard Oil", controlaba la distribución de la gasolina, los demás derivados del petróleo y varias empresas de la industria química; el "grupo Keller" explotaba los minerales de hierro; la "Bethleman Steel Corporation", tenía en sus manos el mayor paquete de acciones de la "Compañía de Acero del Pacífico"; el First National City Bank, a través de la Anaconda, era el dueño virtual de "Chuquicamata" y de otros importantes yacimientos de cobre, etc. Chile ocupaba entonces el séptimo lugar en el mundo por la magnitud de las inversiones norteamericanas.

Todo esto precipitó y profundizó la crisis económica, agravó la miseria de las masas y condujo a que los ricos se hicieran más ricos y los pobres más pobres. La clase obrera resistió valerosamente bajo la dirección de la Central

Única de Trabajadores. En marzo y abril de 1960 el país fue estremecido por grandes huelgas en contra de la congelación de salarios y sueldos. Los mineros del carbón, que entonces constituían un fuerte del proletariado, se distinguieron en esta lucha, protagonizando, a comienzos de ese año, una de las huelgas más largas de nuestra historia, que duró 86 días, doblándoles la mano a las empresas y al gobierno después de realizar una marcha de 32 kilómetros, desde Lota a Concepción, con participación de mujeres y niños y con el respaldo solidario de los trabajadores y el pueblo de Chile.

En noviembre de 1960 tuvo lugar otro paro nacional contra la política salarial del gobierno y las medidas represivas que aplicaba. El 19 de diciembre de 1962, más de un millón de trabajadores paralizaron sus labores en contra de un proyecto de ley del Ejecutivo que pretendía limitar los aumentos de salarios a un 15% mientras se registraban alzas de precios hasta de un 60%. En 1963 y 1964, la ola de huelgas siguió subiendo, destacándose, por su magnitud y combatividad las que protagonizaron los portuarios, los metalúrgicos, los trabajadores de la salud y los profesores, además de los paros estudiantiles.

Para las elecciones presidenciales de 1958 Jorge Alessandri fue presentado candidato con el ropaje de hombre sin partido, apolítico y por encima de las clases. Como Presidente quedó clara su condición de gobernante autoritario, ante todo al servicio de su clase. Para los chilenos que pudieran haber olvidado la experiencia de los gobiernos de derecha, Alessandri demostró que la mona es mona aunque se vista de seda. A su manera lo dijo Violeta Parra –"el León es un sanquinario en toda generación"– cuando supo de la masacre en la Población José María Caro, ocurrida en noviembre de1962 y compuso su canción "La Carta" mientras estaba en París.

Cuando los Estados Unidos promueven un escape a la caldera social

Mientras gobernaba Alessandri, estalló la revolución cubana y con ella afloraron con más fuerza los sentimientos revolucionarios que venían germinando en el corazón de los pueblos latinoamericanos.

En tanto Estados Unidos se percató de que se trataba de una revolución en serio, se propuso ahogarla en su cuna. Preparó y avitualló el desembarco en Playa Girón a comienzo de 1961 de todo un ejército mercenario, con los resultados desastrosos que se conocen para él y sus marionetas. Los pueblos de América Latina expresaron de inmediato su repudio a la intervención imperialista. Los

trabajadores chilenos y uruguayos paralizaron sus faenas y los estudiantes ganaron la calle diciendo NO a la intromisión yanqui en Cuba.

El imperialismo norteamericano sacó sus conclusiones. El horno no estaba para bollos. Para evitar que en otros países reventara la caldera social optó por darle algún escape, y con tal objetivo promovió gobiernos civiles, relevos insustanciales en la dirección de los estados latinoamericanos y algún tipo de reforma agraria que solo afectara los intereses de los grandes latifundistas semifeudales. ¡Sus tradicionales socios podían ser sacrificados en aras de salvar el imperio! Jorge Alessandri siguió sus consejos. Promovió y sacó una ley de reforma agraria que nadie recuerda. Fue tan insignificante que en su tiempo fue llamada "reforma de macetero".

A fines del gobierno de Alessandri, el anhelo de modificar las cosas y el avance de la izquierda eran tan firmes que la derecha optó por cambiar de caballo para las elecciones presidenciales de 1964. El sismo político-electoral que se produjo en Curicó le abrió los ojos. Este tuvo lugar el 15 de marzo de 1964 a 5 meses de la elección presidencial. Allí, en la provincia del mismo nombre, considerada un baluarte de la oligarquía terrateniente, se efectuó una elección complementaria a diputado. Contra todos los pronósticos, triunfó el candidato del FRAP Óscar Naranjo. El Frente Democrático, constituido por los partidos Conservador, Liberal y Radical, tenía allí el 47% de la votación y bajó al 32%. La Democracia Cristiana tenía el 21% y subió al 27% y el FRAP aumentó del 29 al 39%. Los dirigentes de los partidos tradicionales de la derecha se asustaron y decidieron retirarle su apoyo al candidato radical Julio Durán para dárselo a Eduardo Frei Montalva de la Democracia Cristiana, quien salió elegido con el 55,6% de los votos, seguido de Salvador Allende que obtuvo el 38,6%.

La derecha apoyó a Frei como candidato aunque después poco acompañara a su gobierno y discrepara con él en muchas cosas.

También el imperialismo yanqui vio en la Democracia Cristiana la mejor carta para contener a la izquierda. La Revolución en Libertad que pomposamente proclamaran Frei y los suyos calzaba perfectamente con la Alianza para el Progreso, el nuevo "look" que asumía la potencia imperialista. Por ello tuvo el apoyo resuelto de los EEUU.

El Informe Church, varias páginas de las memorias de Henry Kissinger, el libro *Los dos últimos años del Gobierno de Allende* del ex embajador norteamericano en Santiago, Nathalie Davis, y los documentos secretos de la CIA, desclasificados en los años 1999 y 2000, prueban fehacientemente que ya para las elecciones presidenciales de 1964 llegaron a Chile millones y millones de dólares para impedir que en tal ocasión surgiera en nuestro país un gobierno revolucionario que, como ya había sucedido en Cuba, pusiera fin, aunque de otra manera, al imperio de los grandes magnates.

Al revelar dichos documentos se mantienen expresamente ocultos los nombres de los norteamericanos y chilenos que personalmente participaron en este deleznable tráfico de dinero. Tampoco se mencionan las personas que actuaron en labores de espionaje en o hacia las Fuerzas Armadas ni los que en uno que otro momento trabajaron por el golpe de Estado instigados por una potencia extranjera.

No obstante, aparecen otros antecedentes que habían permanecido ocultos. Se informa, por ejemplo, que en operaciones encubiertas, propaganda electoral y otros aportes a partidos políticos, producción y difusión de propaganda, y apoyo a prensa, radio y televisión y a organizaciones del sector privado, el gobierno norteamericano invirtió en Chile 13 millones 200 mil dólares entre 1963 y 1973, sin considerar los gastos para la preparación del golpe de Estado ni los dineros entregados por la ITT y otras corporaciones multinacionales. Asimismo, se da cuenta pormenorizada de los dineros entregados por la CIA a los partidos políticos de centro y de derecha desde que se hizo clara la posibilidad de que la izquierda ganara la presidencia de la república, luego de la elección presidencial de 1958, en la cual Allende salió segundo. Por eso se emplearon a fondo para la siguiente elección presidencial, la de 1964. En esta –se dice en la versión Nizkor de los documentos que comentamos– "los Estados Unidos estuvieron involucrados a gran escala". "El grupo especial –añade– utilizó más de tres millones de dólares durante el período 1962–1964 para evitar la elección de un candidato socialista o comunista, y un total de cerca de cuatro millones de dólares se gastaron en unos 15 proyectos de acciones encubiertas".[12]

Para las elecciones presidenciales de 1964, como mencioné anteriormente, aparecieron dos años antes los conglomerados que podían derrotar a la izquierda, la Democracia Cristiana, por un lado, y por el otro la coalición radical-derechista del Frente Democrático. Por ello, "durante 1963 los EEUU subvencionaron a los dos grupos, al PDC y a la coalición derechista del Frente Democrático. Después de la derrota del candidato del Frente Democrático en mayo de 1964, los Estados Unidos enfocaron completamente su apoyo al candidato del Partido Demócrata Cristiano".

Bajo el subtítulo "Técnicas de acciones encubiertas", la versión Nizkor de los documentos desclasificados dice textualmente: "La acción encubierta durante la campaña de 1964 estaba formada de dos elementos principales. Uno era el apoyo económico directo a la campaña de los demócratas cristianos. La CIA aseguró algo

---

[12] Las frases o párrafos de este capítulo que van entre comillas son, salvo que se mencione otra fuente, citas que corresponden a la versión Nizkor de los documentos desclasificados de la CIA en torno a sus actividades en Chile durante el período 1963-1973. Nizkor, palabra de origen judío que significa "los que no olvidamos nunca" o "los que recordamos siempre" es un organismo especializado en derechos humanos a nivel internacional.

más de la mitad del total de los costes de la campaña. Además de las subvenciones al PDC, el Grupo Especial asignó fondos al Partido Radical y a grupos de ciudadanos independientes. La CIA montó una masiva campaña propagandística anti-comunista. Se hizo uso extenso de la prensa, radio, películas, panfletos, carteles, pasquines, correo directo, banderolas de papel y pintadas en las paredes. Fue una campaña de terror, que contaba con la dureza de las imágenes de tanques soviéticos y pelotones de fusilamiento cubanos y fue orientada especialmente a las mujeres. Cientos de miles de copias de la carta pastoral anticomunista del Papa Pío XI se distribuyeron a organizaciones demócrata cristianas".

"La campaña propagandística fue enorme. Durante la primera semana de intensa actividad –la tercera semana de junio de 1964–, un grupo de propaganda financiado por la CIA insertó 20 anuncios diarios en las radios de Santiago y en 44 emisoras provinciales, doce minutos de informativos cinco veces al día en tres emisoras de Santiago y 24 salidas provinciales; miles de dibujos, y muchos anuncios radiofónicos en Santiago y provincias, 26 programas de "coloquios" semanales, 3.000 carteles distribuidos diariamente. La CIA se refería a la campaña de alarma anticomunista como la actividad más efectiva dirigida por Estados Unidos a favor del candidato demócrata cristiano".

"La CIA dirigió operaciones de acción política independientemente de la campaña de los demócratas cristianos a un número importante de grupos de votantes, incluyendo los de barrios marginales, campesinos, trabajadores, organizados y disidentes socialistas. Se dio apoyo a miembros anticomunistas del Partido Radical en sus empeños para lograr posiciones de influencia en la jerarquía partidista, y para evitar que el partido enfocara su apoyo hacia Allende".

La intromisión norteamericana no fue en vano. "Un estudio de la CIA concluye en que la intervención de los Estados Unidos posibilitó a Eduardo Frei ganar con clara mayoría en las elecciones de 1964 y al Partido Demócrata Cristiano establecer una extensa organización vecinal y a nivel de pueblos" que sirvió de "apoyo a los esfuerzos reformistas que el gobierno de Frei llevó a cabo en los 6 años siguientes".

La versión detalla, en seguida, el apoyo que la CIA le dio, de acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Santiago, a un cierto número de candidatos a parlamentarios en las elecciones de 1965 y 1969. Este "apoyo secreto a candidatos seleccionados en las elecciones al Congreso en Chile en marzo de 1965" –dicen los documentos– "ayudó a la derrota de hasta 13 candidatos del Frente de Acción Popular que de otra manera hubieran ganado escaños en el Congreso".

Antes de las elecciones parlamentarias de 1969 –dice el Informe Nizkor– la Comisión 40 autorizó 350.000 dólares "con el objetivo de reforzar los grupos políticos moderados antes de las elecciones presidenciales de 1970". Se proporcionó

apoyo económico en especial a disidentes del Partido Socialista para disminuir los votos favorables a Salvador Allende. El Informe agrega: "La CIA se refirió a las acciones electorales como todo un éxito en el logro del objetivo establecido; diez de los doce candidatos elegidos para apoyarles consiguieron su objetivo, incluyendo una muy inesperada victoria" (Los nombres de los favorecidos se mantienen, ciertamente, en secreto). "El apoyo proporcionado a los disidentes del grupo socialista privó al Partido Socialista por lo menos de 7 escaños en el Congreso".

"La operación de propaganda de la CIA para las elecciones de 1970 comprendió cientos de miles de impresos de gran calidad, desde carteles y octavillas, folletos y estampados, hasta llevar a cabo un extenso programa de propaganda a través de radio y salidas en prensa. Otros mecanismos de propaganda que tuvieron lugar antes de la campaña de 1970 incluyeron el apoyo de un grupo editorial que proporcionaba artículos, editoriales y crónicas nuevas para ser colocadas en prensa y radio; un servicio para colocar artículos anticomunistas en la prensa, emisoras radiales, y tres diferentes servicios de noticias".

"Había una amplia variedad de productos propagandísticos: se envió por correo un boletín informativo a aproximadamente 2 mil periodistas, académicos, políticos, y otros creadores de opinión, un libreto que mostraba cómo sería la vida si Allende ganaba las elecciones presidenciales; traducción y distribución de crónicas de oposición al régimen soviético, distribución de carteles y equipos de muralistas. Los equipos de muralistas que hacían los rayados tenían instrucciones de pintar el slogan "su paredón" en 2 mil muros, evocando una imagen de pelotones de fusilamientos comunistas. La "campaña del terror" explotó la violencia de la invasión en Checoslovaquia con grandes fotografías de Praga y tanques en el centro de Santiago, avisando que una victoria de Allende significaría el fin de la religión y la vida familiar en Chile".

La Democracia Cristiana levantó la bandera de los cambios. Hizo no pocas cosas de interés y de importancia, como la Ley de sindicalización campesina –que ayudó al despertar, a la organización y a la lucha de grandes masas del campo–, y la Ley de Reforma Agraria que, no obstante sus limitaciones, fue un gran paso adelante y encontró, por eso, una tenaz y airada resistencia de la oligarquía latifundista. La Democracia Cristiana hizo también una reforma educacional que mereció muchas críticas y fue en todo caso positiva. A un cierto número de egresados de la enseñanza media los preparó como profesores en breve tiempo, por lo cual fueron livianamente motejados de maestros "marmicoc" en atención a las ollas a presión que con ese nombre recién aparecían en el mercado.

Los trabajadores tuvieron al comienzo mejoras de tipo económico. En 1965 y 1967 los sueldos y salarios crecieron, en términos reales, en porcentajes superiores al 10%, llegando en algunos casos al 17%. Pero el índice promedio de

sueldos y salarios para 1968 tuvo un crecimiento real de solo un 0,8 %. Transcurridos 4 años de gobierno de la Democracia Cristiana, la inflación llegó al 27,9%, casi 6 veces más de la meta que se había trazado el Presidente Frei. Según publicación oficial del Fondo Monetario Internacional, en dicho año Chile ocupó el 4º lugar entre 62 países con mayor inflación, solo antecedido por Brasil, Vietnam del Sur y Argentina.

Esa inflación no afectó a los grandes capitalistas. En su edición del 25 de enero de 1969, *El Mercurio* informó que 47 grandes empresas tuvieron el año anterior una rentabilidad real, es decir descontada la inflación, del 25%. El diario destacó que la Compañía de Acero del Pacífico alcanzó un aumento del 120% de rentabilidad con lo cual sus accionistas más que duplicaron su capital en un año, y que la Refinería de Viña del Mar tuvo una rentabilidad de 81%; general INSA de 62%, Chilena de Tabacos de 88% y los Bancos Edwards y Sudamericano de 56% cada uno. En definitiva, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, siguieron siendo los ricos los más favorecidos.

En estas condiciones, la lucha por cambios verdaderos siguió durante el gobierno de Eduardo Frei y esos cambios solo pudieron ser tangibles realidades con la victoria popular del 4 de septiembre de 1970, que fue, como hemos visto, fruto de una larga batalla, de la rica experiencia acumulada a lo largo de mucho tiempo, de la unidad de los partidos de izquierda y de la multitudinaria movilización de la clase obrera y de los diversos estratos sociales que constituyen el pueblo.

La clase obrera como principal protagonista

En este largo batallar, revistió especial importancia el auge en las luchas sociales y políticas de la clase obrera y del pueblo que mostraron una fuerza impresionante en la década del 50. De dicho auge forman parte hechos tan trascendentes como la reconstitución de la unidad sindical en el Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores, que se realizó en febrero de 1953 y eligió la primera Dirección de la CUT, compuesta por representantes de todas las corrientes que tenían alguna influencia en el movimiento obrero, desde anarco-sindicalistas a falangistas (que luego formaron el Partido Demócrata Cristiano) pasando por socialistas, comunistas y radicales.

La CUT impulsó la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones más apremiantes en materia de salarios, de seguridad social, de salud y de vivienda; y se pronunció a favor de la reforma agraria y de la nacionalización

del cobre. Como establece la Declaración de Principios aprobada en su Congreso Constituyente, "repudia el orden capitalista y burgués porque está basado en la explotación del hombre por el hombre" y lucha "por llegar a establecer nuevas estructuras sociales basadas, en lo esencial, en la propiedad pública de los medios de producción".

Bajo la dirección de la CUT, los trabajadores efectuaron, durante el Gobierno de Ibáñez, tres grandes paros nacionales por aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo. Ellos tuvieron lugar en mayo de 1954, en julio de 1955 y en noviembre de 1955. En este último paro participaron 1 millón 200 mil obreros y empleados que exigían, además de remuneraciones más altas, la derogación de la Ley de Defensa de la Democracia y el derecho a sindicalización de los trabajadores agrícolas. Este tercer paro recibió el apoyo declarado de los partidos que constituyeron el Frente del Pueblo y del Partido Socialista Popular, del Partido Nacional Democrático y de la Falange Nacional. El gobierno recurrió a la policía uniformada y al ejército para reprimirlo. Esto provocó una protesta indignada de la mayoría nacional, lo que obligó a las autoridades a parlamentar con la CUT, a satisfacer parcialmente la demanda de aumento de salarios y a designar comisiones para llevar adelante varias iniciativas legislativas. Ese mejoramiento de salarios fue pronto anulado por la inflación desatada, y las comisiones aludidas quedaron en nada. Ibáñez mandó al Parlamento un proyecto de Estabilización de Salarios y Precios, destinado a congelar las remuneraciones de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores respondieron con una oleada de paros y huelgas que tuvieron lugar en enero de 1956. Paralizaron sus labores los obreros del cobre, los portuarios, los metalúrgicos, los trabajadores de la construcción, los empleados municipales. El gobierno declaró "estado de emergencia", ordenó la detención de Clotario Blest, de otros dirigentes de la CUT, de varios periodistas y dirigentes comunistas y socialistas y reabrió el campo de concentración de Pisagua, al cual fueron a parar la mayoría de los detenidos.

Las luchas libradas en esos años por los trabajadores no fueron en vano. La mayor parte de los chilenos sintió en carne propia las consecuencias del saqueo imperialista y del atraso semifeudal que afectaba a la agricultura. El costo de la vida se disparó cada vez más alto. De acuerdo a las estadísticas de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, los precios, que en 1951 tuvieron un alza de un 22,3%, llegaron en 1956 a un 76,3%. La producción agrícola era insuficiente para abastecer la demanda del consumo interno y se hacía necesario importar alimentos, para lo cual se requerían divisas que el país no tenía porque la mayor parte del valor de los productos que Chile exportaba quedaba en el exterior en las cuentas bancarias de las empresas imperialistas que explotaban el cobre y otros minerales o servicios como la electricidad y la telefonía.

Al abordar estos problemas y vincular sus reivindicaciones más sentidas con las aspiraciones democráticas y antimperialistas, la clase obrera se abrió paso hasta el centro del escenario y fue en las más importantes coyunturas políticas y sociales el eje del movimiento popular, posición que luego fue reforzada con un mayor y más amplio entendimiento entre socialistas y comunistas.

Hubo otro avance fundamental. Los trabajadores del campo dieron un salto en la organización y la lucha por sus derechos. Importancia histórica tiene la huelga campesina que estalló en Talca a fines de 1953 en la viña San Pedro y se extendió rápidamente a una veintena de fundos. Propietario de esa viña era Alejandro Dussaillant, conocido político derechista y uno de los grandes viñateros del país.

El movimiento campesino continuó en ascenso, convirtiéndose en una gran fuerza social en la lucha por la reforma agraria. Un fenómeno fundamental del período fue el explosivo aumento de la sindicalización campesinas. En 1964 los campesinos sindicalizados eran mil 647, en 1968 –a consecuencia de la ley de sindicalización campesina aprobada el año anterior– subió a 83 mil 255 y en 1973 llegó a 207 mil 910. En el mismo período creció también la organización cooperativa. Se crearon alrededor de 200 cooperativas campesinas y poco más de 2 mil Comités de pequeños agricultores.

El pueblo impone su derecho a tener un sitio bajo el sol

Otro frente de lucha de masas, que surgió en los años 40, alcanzó gran envergadura en los 50 y 60. Me refiero a la gigantesca batalla por la vivienda que dio el pueblo de Santiago y otras grandes ciudades. El crecimiento vegetativo de la población y, sobre todo, el éxodo del campo a la ciudad y de las provincias a la capital, hicieron del déficit habitacional uno de los problemas más agudos. Al principio, la gente se cobijaba en casas de amigos o parientes, dando origen a la categoría de los "allegados". Pero llegó un momento verdaderamente dramático. En las casas no cabían más allegados y los diferentes gobiernos que se sucedían en La Moneda eran incapaces de solucionar el problema. Entonces el pueblo tomó la palabra e hizo valer su derecho a tener un lugar donde vivir. Se apoderó de cuanta tierra abandonada había en la periferia de Santiago.

Los pobladores se ponían previamente de acuerdo en el terreno que ocuparían, hacían un plano del mismo, señalando expresamente las calles que tendría la población, el sitio que le correspondería a cada familia, el lugar en que se levantaría la plaza, la escuela, y otros servicios públicos. Convenían también en el día y la hora que harían la toma, generalmente en la noche, en las primeras

horas de la madrugada. En carretelas tiradas por caballos o en camiones destartalados llevaban sus camas, sus sillas, sus ollas, todos sus bártulos y se dirigían a la "toma". De este modo, las poblaciones nacían, de un día para otro, como las callampas y de ahí el nombre genérico que le pusieron, sin perjuicio de que cada una de ellas tuviera un nombre propio. Generalmente tenían que enfrentarse con los pacos apenas aclaraba el día.

El 16 de marzo de 1967, en la antigua Comuna de Barranca, hoy Lo Prado y Cerro Navia, mil 200 familias se tomaron un terreno y levantaron una nueva población a la cual le pusieron "Herminda de la Victoria". Herminda se llamaba la pequeña hija de una joven que fue arrastrada por carabineros cuando reprimían la ocupación. La joven madre llevaba en brazos a su pequeña criatura; y en la desesperación, para protegerla, la apretó contra sí misma y la asfixió. Fue la primera víctima de la toma. Por eso le pusieron su nombre. Y le agregaron "de la Victoria" porque vencieron, porque triunfaron, imponiendo, con la razón y la fuerza, su derecho a tener un lugar bajo el sol, en medio de la hostilidad del régimen y los alaridos de la prensa reaccionaria y de la derecha en defensa de la sacrosanta propiedad privada.

A partir de "Lo Herminda" se produjo en el sector una sucesión de tomas de terreno y el nacimiento consiguiente de nuevas poblaciones, a tal punto que en los primeros seis años siguientes se construyó allí la mitad de lo que es hoy la Comuna Cerro Navia. El arquitecto Mario Neira, actual asesor urbanista de la Municipalidad se quedó pasmado cuando conoció la planificación que los propios pobladores habían hecho para la población "Lo Herminia" donde habían reservado y muy bien ubicado los diferentes sitios correspondientes a la escuela, la plazoleta, la iglesia y otros servicios públicos.

Así se extendió la capital, principalmente hacia el sur y hacia el poniente. La gente levantó poblaciones con sus propias manos: la "José María Caro", "La Victoria", "Santa Adriana", "Nueva La Legua", "La Pincoya", "Pablo Neruda", "La Bandera" y tantas otras, dando origen a nuevas comunas, transformando la gran ciudad en una urbe de más de 6 millones de habitantes. Esta fue una de las luchas más gloriosas del pueblo, libradas por los sin casa, por los allegados, hombres y mujeres de todas las edades. Costó lágrimas y sangre, pero los pobres salieron adelante, triunfaron, se hicieron de los terrenos que necesitaban y levantaron sus propias viviendas.

El movimiento de los pobladores fue uno de los afluentes más importantes del inmenso río humano que llevó a la gente humilde de Chile a hacerse parte del gobierno para tratar de hacer realidades sus aspiraciones de libertad, justicia social y bienestar para todos.

La clase obrera y el pueblo de Chile pusieron sus fuerzas en tensión, desplegaron sus iniciativas creadoras, lucharon abnegadamente a favor del éxito del Gobierno Popular y de la realización de su programa. Millones de chilenos trabajaron en esa dirección hasta el final. Los trabajadores, la juventud, las mujeres, los artistas e intelectuales, escribieron páginas de heroísmo en el trabajo, en la organización del nuevo orden de cosas, en la distribución de los productos que escaseaban, en la batalla contra cada arremetida reaccionaria. Se demostró una vez más que la revolución libera muchas energías, que el pueblo es capaz de las mayores proezas cuando vislumbra un porvenir mejor.

4.- La difícil construcción de la unidad y de la victoria del pueblo.

"Si la victoria no fue fácil, difícil será consolidar nuestro triunfo y construir una nueva sociedad, la nueva convivencia social, la nueva moral y la nueva Patria" . (5 de septiembre de 1970.)

"Aquí, en nuestra Patria y en este instante, de acuerdo con la realidad chilena, la historia, la tradición y la idiosincrasia de nuestro país, estamos haciendo un camino auténticamente nuestro, pero un camino revolucionario, y ese camino revolucionario tiene que afianzarse para hacer posible la independencia económica de Chile y por tanto su plena soberanía en la gran conciencia multitudinaria de las masas trabajadoras chilenas, disciplinadas, conscientes, con un alto nivel político, con un profundo sentido nacional y patriótico. (Universidad de Chile de Valparaíso, 13 de enero de 1971.)

La unidad del pueblo se forja en la lucha y no está exenta de dificultades

En todos los países ha sido siempre muy difícil agrupar en un solo bloque a los partidos de izquierda y en algunos, hasta hoy, nunca se ha podido lograr. En el nuestro, no son pocas las ocasiones en las cuales se han puesto de acuerdo y se han agrupado en coaliciones como el Frente Popular en 1936, el Frente Nacional Democrático en 1942, la Alianza Democrática en 1946, el Frente de Acción Popular en 1956 y la Unidad Popular desde 1964 hasta 1986. Chile ha sido uno de los pocos países en donde los partidos de izquierda han marchado juntos en más ocasiones y durante más tiempo.

Los partidos que la forman o que ayer la integraron son parte del pueblo y sus programas contienen postulados comunes, democráticos y progresistas. Pero no todos tienen la misma composición social, no responden a los mismos intereses de clase, no se inspiran o guían por la misma ideología y, por ello, tienen entre sí afinidades y diferencias que siempre están presentes, con mayor o menor relieve y unas más que otras, según el momento que se vive, los cambios

que se producen en la correlación de fuerzas, la intensidad de las contradicciones sociales y la personalidad de sus dirigentes.

De ahí que la izquierda haya pasado por diversos momentos de solidez y crisis, de cohesión y dispersión de sus fuerzas. Desde 1956, primero bajo las banderas del Frente de Acción Popular y luego como Unidad Popular, permaneció cohesionada por más de 25 años, viva y activa tanto en la oposición como en el gobierno. Su caso reviste especial importancia y valor por el hecho de que, tanto en el FRAP como en la Unidad Popular, su unidad se cimentaba en el entendimiento de los dos partidos más representativos de la clase obrera, los partidos Comunista y Socialista. Su programa apuntaba abierta y directamente a liberar al país de la opresión imperialista, de la dominación de la oligarquía terrateniente y financiera y de la gran burguesía de tipo monopólico. Se proponía, mediante un conjunto de medidas de transformación de la sociedad y del Estado, hacer de Chile un país más democrático y justo en camino al socialismo.

En su largo batallar, la izquierda ha conocido la victoria y la derrota, ha desempeñado un papel relevante en el desarrollo democrático y progresista de Chile, y éste ha salido ganando, ha logrado más avances en los períodos en que ella ha permanecido unida, ya sea en la oposición o en el gobierno.

Como ya dije en el capítulo anterior, la primera coalición de izquierda se constituyó para las elecciones presidenciales que tuvieron lugar el 24 de octubre de 1927. El Frente Popular, que fue la segunda coalición de izquierda, se formó nueve años más tarde, y en 1938 generó el gobierno del Presidente radical Pedro Aguirre Cerda.

En noviembre de 1940, el Frente Popular fue desahuciado por el Partido Socialista mediante un discurso que en el Teatro Caupolicán, hoy Monumental, pronunció su líder máximo, Óscar Schnake, apenas regresó de un viaje de tres meses que efectuó a EE.UU. De ese viaje y de la primera Conferencia Panamericana que tuvo lugar en Cuba, en la que participó como representante del gobierno chileno, Schnake volvió echando chispas contra el Partido Comunista.

El primero de septiembre de 1939 había comenzado la segunda guerra mundial, ante la cual los socialistas proclamaron su apoyo a las potencias occidentales al estimar que luchaban por la democracia, mientras los comunistas, por su parte, se pronunciaron a favor de la neutralidad por considerar que se trataba de una guerra inter-imperialista. Era una diferencia importante, pero no tanto como para desahuciar al Frente Popular. Lo prueba el hecho de que, cuando tuvo lugar dicho desahucio, ya había pasado un año y dos meses desde el comienzo de la guerra, tiempo durante el cual la alianza del Frente Popular y dentro de ella las relaciones entre socialistas y comunistas no se habían afectado mayormente a causa de la referida diferencia. Si el líder socialista Óscar

Schnake la tomó como motivo para romper con el Partido Comunista fue porque en su viaje a Estados Unidos o en la Conferencia Panamericana de La Habana, o en ambas partes, se había comprometido con la política del Departamento de Estado en ese primer período de la segunda guerra.

Un año y medio más tarde, en julio de 1941, Hitler agredió a la Unión Soviética. Con ello la guerra contra Alemania adquirió a todas luces un carácter antifascista. Por iniciativa del Partido Comunista surgió en nuestro país un amplio y vigoroso movimiento de apoyo a la coalición anti-hitleriana bajo el nombre de "Unión Para La Victoria", presidido por el connotado político radical Marcial Mora Miranda y apoyado por la mayoría ciudadana. En ese marco, desapareció el motivo, más bien el pretexto que se invocó para romper el Frente Popular y disparar contra el Partido Comunista, mejoraron las relaciones entre todos los partidos de izquierda y obviamente entre socialistas y comunistas. Pero esas relaciones volvieron a resentirse, otra vez por presión norteamericana, apenas terminó la segunda guerra mundial y comenzó la guerra fría.

La guerra fría influyó en la vida política de todos los países, dividió el vasto campo antifascista particularmente en Europa y América. Desaparecieron entonces los frentes populares, conformándose otros alineamientos políticos.

El quiebre de la izquierda chilena fue total. Para las elecciones presidenciales de 1946, el Partido Socialista fue solo, y para las presidenciales de 1952 ya se había dividido en dos colectividades, el Partido Socialista Popular y el Partido Socialista de Chile. Ambos apoyaron a distintos candidatos. El Partido Socialista de Chile que era el más pequeño de los dos, se unió al Partido Comunista. Juntos constituyeron el Frente del Pueblo y proclamaron candidato a Salvador Allende. El Partido Socialista Popular apoyó a Carlos Ibáñez del Campo.

En su campaña electoral, Ibáñez prometió hacer un gobierno honesto y eficiente, derogar la Ley Maldita y el Pacto de Río de Janeiro, pero siguió una política reaccionaria. Ibáñez, como González Videla, envió a Pisagua a centenares de sus opositores, entre ellos algunos socialistas populares y en lo fundamental sirvió a los intereses de los poseedores del gran capital. Contrató una misión norteamericana, la misión Klein-Saks e hizo suyas sus recomendaciones para combatir la inflación a través de medidas contrarias a los intereses populares y nacionales, como la congelación de salarios y sueldos, el despido de miles de empleados públicos y la desnacionalización de empresas estatales.

En rechazo a tal política los trabajadores declararon dos paros nacionales dirigidos por su Central Única de Trabajadores, la CUT, que se había constituido en febrero de 1953 bajo la presidencia de Clotario Blest. Por su lado, el Partido Socialista Popular, ya en oposición al gobierno de Ibáñez, junto al

Partido Comunista y al Partido Socialista de Chile, participó en la formación del Frente de Acción Popular, FRAP, que nació como una nueva y prometedora coalición de izquierda a principio de 1956, cualitativamente superior, más avanzada que las precedentes. Como anota Carmelo Furci en el capítulo 9 de su libro *El Partido Comunista de Chile y el Camino al Socialismo*, el FRAP "ya no era la formación de una alianza en la cual el Partido Radical jugaba el rol protagonista, sino una en que los comunistas y socialistas serían la fuerza principal. Esto es de considerable importancia porque, desde este nuevo concepto de alianza, una estrategia política distinta emergió dentro de la izquierda chilena".[13]

El entendimiento entre socialistas y comunistas

Desde la formación del FRAP fue de toda evidencia que se iniciaba un nuevo período, cualitativamente superior, en las relaciones entre socialistas y comunistas. Juntos éramos más fuertes, separados más débiles. Ni comunistas ni socialistas podían aspirar por sí solos, sin marchar unidos, a dirigir los destinos del país. Se necesitaban recíprocamente, y unidos los necesitaban la clase obrera y el pueblo. Los necesitaba Chile.

En ambos partidos, esta convicción había emergido con fuerza tras la experiencia vivida en los años precedentes, en especial bajo los gobiernos de González Videla y Carlos Ibáñez, el primero generado con una destacada participación de los comunistas y sin los socialistas, y el segundo, con el concurso de los socialistas y sin los comunistas.

Con el FRAP se inició un período de firme entendimiento entre comunistas y socialistas, que fue determinante en la lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones y derechos durante los gobiernos de Carlos Ibáñez, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Tal entendimiento jugó un papel altamente positivo en la generación del Gobierno de la Unidad Popular y en los casi tres años que éste administró al país y fue muy importante durante la mayor parte de los 17 años de la dictadura militar.

El entendimiento entre partidos políticos presupone coincidencias y diferencias entre los mismos y a menudo la discusión de las diferencias en función de fortalecer y desarrollar la unidad y ser más eficientes en la acción común. Comunistas y socialistas, además de no tener la misma formación ideológica ni la misma composición social, recibían en alguna medida, distintas y ocasionalmente

---

13 *The chilean Comunist Party and the road to socialism*, Carmelo Furci, Ediciones Zed, London, 1984.

contrapuestas influencias de orden internacional. Siempre los socialistas buscaban diferenciarse de los comunistas en política internacional, poniéndose más bien del lado de aquello países socialistas que tenían y marcaban sus diferencias con la Unión Soviética, como Yugoslavia y China, aunque en menor medida en este último caso. En determinados momentos afloraba entre ambos la pugna por la hegemonía al interior del movimiento obrero y de las diversas coaliciones populares a las que pertenecieron los dos partidos. Entonces surgía la discusión, la lucha ideológica que ayudó al entendimiento entre socialistas y comunistas y a la unidad de la izquierda, salvo en uno que otro caso secundario y excepcional. Unos y otros partían del propósito común de ponerse de acuerdo y superar las dificultades y habían aprendido a discutir poniendo en primer término los intereses del pueblo, sin recurrir a epítetos hirientes, sin calificar intenciones, siempre con altura, en tono fraternal, con respeto por las opiniones de cada cual. La vida les había enseñado, además, que en pro de la confianza entre ambos partidos y también entre todas las colectividades de la coalición, tenia una importancia no menor los encuentros informales, las atenciones recíprocas, las conversaciones personales. Y así, con alguna frecuencia solíamos encontrarnos en nuestras propias casas, en torno a la mesa familiar. Estas prácticas ayudaban a conocernos más y mejor y afianzaban las relaciones amistosas de la alianza que unos y otros estábamos empeñados en afianzar o en construir. Entusiastas partidarios de estos encuentros fueron, entre los socialistas, sus secretarios generales Salomón Corbalán y Aniceto Rodríguez.

En la segunda mitad de la década de los años 50 y en toda la de los años 60, la cuestión central de la discusión al interior de la izquierda y en particular entre socialistas y comunistas, giró principalmente en torno al carácter y a la amplitud de la coalición que era necesario forjar para alcanzar el poder y acometer con éxito las tareas de la transformación social. Los comunistas sostuvimos la necesidad de trabajar con sectores que giraban en torno al Partido Radical y a la Democracia Cristiana. Con relación a los radicales esta fue materia de discusión desde mediados de los años 50 hasta 1969, año en que se formó la Unidad Popular, y en relación a los demócratas cristianos fue asunto de controversia hasta poco antes del fin de la dictadura militar.

En aquellos años 50, los comunistas sosteníamos que se debía marchar hacia la formación de un Frente de Liberación Nacional, en el cual debía agruparse la mayoría del país, desde la clase obrera hasta los sectores progresistas de la burguesía. Los socialistas, por su lado, propiciaban la política de Frente de Trabajadores, negándole carácter progresista a toda la burguesía, incluyendo en ella a aquellos partidos que, sin ser propiamente de derecha, en alguna medida la representaban, como el Radical y el Demócrata Cristiano.

La amplitud de criterio de los comunistas en materia de unidad jugó un papel importante –en ocasiones decisivo– en la lucha democrática de nuestro pueblo. Pero la expresión de atraer "desde la clase obrera a los sectores progresistas de la burguesía", era un planteamiento chocante para los socialistas y otra gente de izquierda y confuso para muchos trabajadores. Cuando nos percatamos de esta situación, hicimos los correspondientes cambios en nuestro lenguaje, sin mengua de nuestra amplitud política. Dejamos de hablar de los sectores progresistas de la burguesía. Los socialistas hicieron lo suyo por su parte. Abandonaron su formulación acerca del Frente de Trabajadores que aunque era clara y atractiva, implicaba una notoria dosis de sectarismo.

La claridad y precisión del lenguaje es siempre de primordial importancia. Mas, los acuerdos entre diversas fuerzas sociales y políticas son determinados también por la fuerza de la realidad que las induce a concertarse entre sí porque sin su entendimiento y su acción común no pueden conseguir los objetivos que se proponen. Adicionalmente, el imperativo de materializar su entendimiento se concreta en la medida en que, en esas fuerzas exista o prevalezca una posición unitaria.

La relación con los radicales y los demócratas cristianos

La discusión entre comunistas y socialistas en materia de alianzas o acuerdos con otras fuerzas se acentuó después de las elecciones de 1964 respecto al Partido Radical, a la conducta que se debía asumir ante al gobierno de Eduardo Frei Montalva y a la acción común que se requería plasmar con todas las fuerzas progresistas, comprendidos vastos sectores demócrata-cristianos.

En su Congreso realizado en Chillán, en noviembre de 1967, el Partido Socialista resolvió endurecer su oposición a toda alianza "con sectores burgueses" (léase radicales y demócratas cristianos), propiciar la revolución socialista aunque sin descartar la participación en las contiendas electorales y hacer pública su posición en el sentido de que "la violencia revolucionaria es inevitable y legítima" y "constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento".

Por su lado, el Partido Comunista, a pesar de haber sido perseguido por el gobierno radical de González Videla ponía en primer término la necesidad de agrupar a la mayoría ciudadana en torno a la clase obrera y se empeñaba para que el Frente de Acción Popular se abriera a los más amplios sectores cuyos intereses se veían amagados por la dominación imperialista y oligárquica, entre los cuales estaban capas sociales aún bajo la influencia de los radicales. Veía que el radicalismo seguía teniendo una gran influencia en las capas medias de la

sociedad chilena, entre los pequeños y medianos mineros de Coquimbo y Atacama, en el campo de los profesionales, en el magisterio y otros sectores. Su representación parlamentaria daba cuenta de esa influencia. En 1961, el Partido Radical había elegido 39 diputados y 20 en 1965. Después, en 1969, en pleno reinado demócrata cristiano elegiría 24. Los comunistas habíamos sido los más afectados por las inconsecuencias de los radicales. Pero la lección que debíamos sacar de esas deslealtades no era su marginación, sino la lucha por una alianza de izquierda más amplia bajo una dirección consecuente, una alianza en la cual pesara más la clase obrera y los partidos comunistas y socialistas. Y esta era la situación que se empezaba a dar y que se debía desarrollar para ampliar y hacer más fuerte al Frente de Acción Popular. "Una lección más profunda –dijo el Partido Comunista–debe sacar al pueblo de Chile de los acontecimientos que hemos vivido desde el triunfo del Frente Popular. Lo que ha ocurrido es que los movimientos democráticos que gestaron las victorias de 1938, 1942 y 1946 tuvieron como fuerza dominante y dirigente a la burguesía, o sea, a una clase social inconsecuente y vacilante, incapaz de luchar de una manera resuelta contra las supervivencias feudales y la dominación imperialista. De esta experiencia fluye la conclusión de que una nueva victoria del pueblo sólo puede consolidarse y significar un cambio fundamental en los rumbos del país realizando las transformaciones que están a la orden del día, siempre y cuando nos unamos todos y la clase obrera esté en condiciones de impulsar este movimiento por el camino de la lucha consecuente, contra el imperialismo y la oligarquía terrateniente, uniendo alrededor suyo y de su programa de liberación nacional, a todas las fuerzas progresistas, incluyendo al sector progresista de la burguesía nacional y en primer lugar al campesinado"[14].

Más aún, en los últimos años de la década del 60, las posiciones de izquierda se habían fortalecido y desarrollado en el seno del radicalismo. Un importante número de radicales, entre ellos Alberto Baltra, Hugo Miranda, Anselmo Sule, Carlos Morales, Orlando Cantuarias y Aníbal Palma se empeñaban en lograr que su partido volviera a marchar junto a las fuerzas políticas más avanzadas que se agrupaban en el FRAP. Algunos manifestaban incluso públicamente sus simpatías por el socialismo. Alberto Baltra, en su libro *Tres Países del Mundo Socialista* escribió: "los intereses objetivos del proletariado y de los sectores medios son semejantes," (...) "el mundo marcha inevitablemente hacia el socialismo"(...) "es perfectamente concebible una alternativa viable

---

[14] Informe de Galo González a la IX Conferencia Nacional del Partido Comunista de Chile, celebrada en agosto de 1952.

lo suficientemente socializada como para permitir una planificación eficaz, preparar el cambio del sistema capitalista, extirpar los monopolios, debilitar la influencia imperialista y facilitar la acumulación y movilización de los cuantiosos recursos que se necesitan para acrecentar la capitalización nacional y, por ende, el ritmo del desarrollo en Chile". En este predicamento, Baltra propiciaba "un proceso de acciones comunes entre el radicalismo y las otras fuerzas de izquierda". En tales condiciones procedía y era factible atraer a los radicales hacia el cauce de la lucha unificada del pueblo. Había, ciertamente radicales con los cuales no cabía la posibilidad de ningún entendimiento, como en el caso de Julio Durán, a quien apoyara la parte derecha en las elecciones presidenciales de 1964 y mantuviera siempre una posición contraria a la izquierda.

Comunistas y socialistas asumieron también posiciones más disímiles que concordantes en cuanto a la Democracia Cristiana, especialmente a partir del gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva.

La "Revolución en Libertad" que proclamaba la Democracia Cristiana era la fórmula que adoptaba en Chile la política de la Alianza para el Progreso propiciada por Estados Unidos para América Latina después de la revolución cubana. Para Washington lo fundamental era salvaguardar los intereses del gran capital de tipo monopólico, evitar otra Cuba y para ello había que darle algún escape a la caldera social, hacer algunos cambios, aunque, como en el caso de la reforma agraria, hubiera que sacrificar a algunos de sus tradicionales aliados. A este respecto, en el informe a su XIII Congreso Nacional celebrado en octubre de 1965, el Partido Comunista afirmó que "el objetivo que persigue la democracia cristiana es salvar el capitalismo en Chile e impedir la revolución popular y el socialismo. Lo singular –agregó– es que trata de lograrlo, no a la vieja usanza de la reacción, sino con métodos y lenguaje modernos, dándole especial importancia al trabajo con las masas, remozando en parte la vieja estructura del país y mejorando en cierto grado la situación de algunos sectores del pueblo". Más aún, el Partido Comunista declaró abiertamente que el gobierno de la DC no se proponía, en modo alguno, "resolver los problemas básicos de la reestructuración nacional, sin lo cual es imposible dar satisfacción a las necesidades de las grandes masas" y llamó la atención al hecho de que el Pentágono, la CIA, los elementos más frenéticos del Departamento de Estado, los mismos que en 1961 llevaron a Kennedy a intervenir en Cuba y más tarde en Santo Domingo, querían impedir que Chile se encaminara "hacia la constitución de un gobierno revolucionario".

Pero tal era solo una parte de la película. Había otros hechos que no se podían pasar por alto. La Democracia Cristiana y su gobierno tenían contradicciones con el proletariado, pero también las tenían en algún grado con la oligarquía. En la medida que promovían algunas reformas antioligárquicas,

como la reforma agraria, coincidían con la izquierda en aspectos concretos. De ahí que la relación con la Democracia Cristiana y el Gobierno de Frei no sólo era de lucha sino también de unidad o coincidencia en algunas cosas.

El gobierno de Frei adoptó medidas plausibles. Facilitó, por ejemplo, la organización sindical de los campesinos, estableció el derecho a voto desde los 18 años de edad, le dio derecho de jubilación a la mujer a los 55 años de edad, (la que mantuvo el gobierno de Allende y subió a 60 años en la dictadura) promovió la Ley de "Lámpara a Lámpara" que obligaba a los patrones a contar la jornada de trabajo desde que el minero entraba a los socavones de las minas hasta su salida de ellas, estableció el impuesto patrimonial (que fue eliminado por la dictadura sin ser después restablecido), promovió la reforma agraria y condenó la intervención norteamericana en Santo Domingo en contra del movimiento patriótico encabezado por el coronel Caamaño, que buscaba restablecer el régimen constitucionalista que existía durante el gobierno democrático del Presidente Juan Bosh. (Ante esa intervención imperialista levantaron también su voz de protesta además del FRAP, el Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Liberal y el Senado de la República.)

En tal situación no era pertinente asumir una oposición intransigente y cerrada frente al gobierno de Frei Montalva, ni considerar, a fardo cerrado, como enemigos a todos los demócratacristianos.

El Partido Comunista señaló que no solo había que ver las discrepancias sino también las coincidencias con la Democracia Cristiana. Por ello, en el informe a su XIII Congreso Nacional celebrado en octubre de 1965, llamó la atención sobre "el hecho de que una parte importante de los que habían votado por Frei y militantes del partido de gobierno tomaban en serio las necesidades de cambio y querían echarle para adelante atacando, al menos, diversos centros de poder de la derecha", y sostuvo que "a través de la unidad de acción se puede poner en movimiento a todo el pueblo, a las masas trabajadoras que votaron por Salvador Allende y a las que lo hicieron por el Sr. Frei". Dijimos claramente: "A un lado debe estar el pueblo y al otro los reaccionarios. En consecuencia se debe ir abriendo paso a la unidad de acción de todas las fuerzas populares y progresistas que están con la oposición o con el gobierno en contra de las fuerzas reaccionarias que hay en el gobierno y en la oposición. En otros términos es factible avanzar sobre el terreno de la unidad de acción, del FRAP, del Partido Democrático Nacional, de los demócrata cristianos, y de los radicales anti-derechistas, en contra del imperialismo y la oligarquía, en contra del sector más reaccionario, compuesto por conservadores, liberales, radicales y demócratas cristianos de derecha".

En ese período, la táctica comunista se definía como de *"unidad de todas las fuerzas populares y democráticas que están en la oposición o en el gobierno en contra*

de las fuerzas reaccionarias que hay en la oposición y en el gobierno", desde el punto de vista de clase, esta era la línea divisoria que se debía considerar para diseñar y practicar una amplia política unitaria. Un valioso ejemplo de esta amplitud política dieron los comunistas de Aconcagua que movilizaron a su gente en apoyo de los campesinos del fundo "Santa Marta de Longotoma" expropiado por el gobierno de Frei.

Esta política ayudaba al fortalecimiento de la izquierda y a mantener con la Democracia Cristiana relaciones que fueron útiles más tarde, desde luego para el reconocimiento de la victoria de Allende.

En las elecciones municipales realizadas el 2 de abril de 1967, tras dos años y medio de gobierno demócrata cristiano, se reflejó en gran parte el desplazamiento de fuerzas a favor de comunistas y socialistas. El Partido Comunista obtuvo 354 mil sufragios y el Partido Socialista 322 mil, ganando en conjunto 120 mil electores que votaban por la Democracia Cristiana. Comunistas y socialistas reunieron el 30% de la votación total del país. El Partido Demócrata Cristiano, que tenía el 42% del electorado nacional, bajo al 36%. Tales resultados constituyeron una dura derrota para el Partido Demócrata Cristiano y el gobierno del Presidente Eduardo Frei. El Frente de Acción Popular se transformó en el punto de conjunción de amplias fuerzas democráticas.

En el Partido Socialista primaba una posición estrecha en relación a la Democracia Cristiana, que se expresaba con las siguientes palabras: "Ni la sal ni el agua para el gobierno de la Democracia Cristiana". Las dijo un mal día Aniceto Rodríguez, su Secretario general, trasuntando un sectarismo que en honor a la verdad no era característico en él. No obstante, como las realidades políticas suelen imponer actitudes más sensatas, el Partido Socialista votó favorablemente el proyecto de reforma agraria del Presidente Frei, y a fines de 1969 apoyó el paro de la CUT en contra del fracasado golpe encabezado por el general Roberto Viaux, aunque algunos de sus dirigentes lo vieron al comienzo con cierta simpatía en la creencia de que iría a favor de la causa popular.

Nace la Unidad Popular y ésta proclama a Salvador Allende

Recordemos una vez más que en las elecciones presidenciales de septiembre de 1958, en la cual fue elegido Jorge Alessandri con el 31,2% de los votos, Salvador Allende obtuvo el segundo lugar con el 28,5% como candidato del Frente de Acción Popular. Seis años antes, en 1952, como candidato del Frente del

Pueblo había reunido el 5,4% de los sufragios. El salto era grande. Claramente se abrían las posibilidades de conquistar el gobierno, y de abrir camino a la materialización de las profundas transformaciones sociales que el país requería.

De ahí en adelante, los partidos de izquierda trabajaron con esa perspectiva, se concentraron en esa dirección. En este sentido, tuvieron una importancia fundamental los tres congresos nacionales que realizó el Partido Comunista en los años que antecedieron a las elecciones presidenciales de 1970. En 1962, durante el gobierno de Alessandri, el XII Congreso del Partido Comunista se realizó bajo la consigna: "¡A la conquista de un Gobierno Popular!" y planteó la necesidad de construir una alianza suficientemente vasta para lograr dicho objetivo. Tres años más tarde, durante el gobierno democratacristiano, su XIII Congreso levantó la consigna "La clase obrera, centro de la unidad y motor de los cambios revolucionarios", propiciando la unión de todos los que estaban por los cambios, incluso de aquellos que habían sido seducidos temporalmente por el reformismo. Esta política contribuyó a evitar el enconamiento de las divisiones en el seno del pueblo y a facilitar la posibilidad de concretar alianzas en torno a la clase obrera, condición básica para generar una correlación de fuerzas favorable al proceso revolucionario. Finalmente en su XIV Congreso Nacional, celebrado en 1969, el Partido Comunista alzó como consigna de factibilidad inmediata, la de "Unidad Popular para conquistar un Gobierno Popular".

En el Informe al Pleno del Comité Central, reunido en abril de ese mismo año, expresamos nuestro convencimiento de que todo alineamiento estrecho de fuerzas, la puesta en práctica de cualquier política que condujera a dejar fuera del movimiento a sectores populares de avanzada, haría muy difícil –por no decir imposible– una victoria del pueblo. En consecuencia –añadimos– continuaríamos luchando por la unión de todas las fuerzas anti-imperialistas y anti-oligárquicas, por la unión de las fuerzas necesarias para triunfar. Concretamente, respecto a las elecciones presidenciales a realizarse al año siguiente, expresamos que mientras no se produjera dicha unión el Partido Comunista no patrocinaría ni apoyaría ninguna candidatura, reservándose el derecho a postular un candidato propio para el caso de que no hubiese unidad.

Llegó el momento en que se hizo factible la ampliación del FRAP, por la cual bregaban los comunistas y muchos socialistas, Salvador Allende en primer término. Los partidos comunista y socialista invitaron al Partido Radical, al Movimiento de Acción Popular Unitario, MAPU, al Partido Socialdemócrata y a la Acción Popular Independiente, API, a ponerse de acuerdo en relación a las elecciones presidenciales de 1970. Entonces, el 7 de octubre de 1969 el FRAP devino en la Unidad Popular, con la participación del Partido Radical,

haciéndose más factible la victoria de la izquierda en las elecciones presidenciales que ya estaban en el centro de la preocupación política nacional.[15]

Los seis partidos constituyentes de la Unidad Popular se pusieron de acuerdo, en primer término en el programa de la coalición, que sería también el programa del candidato que ella designara. Así se hizo y, como culminación de discusiones y estudios que venían desarrollándose desde hacía algunos meses, el 17 de diciembre de 1969 fue aprobado el Programa Básico de gobierno de la Unidad Popular y, luego, el acuerdo en torno a la conducción y el estilo de la Campaña Presidencial y las primeras 40 Medidas del Gobierno Popular.

En la elaboración del Programa Básico de Gobierno se consideraron y cotejaron los programas de los partidos Comunista, Socialista y Socialdemócrata, aprobados en sus respectivos congresos, las resoluciones programáticas de las últimas convenciones del Partido Radical y los acuerdos sobre principios y fines del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU, y de la Acción Popular Independiente, API, extrayéndose lo que podría llamarse el pensamiento común de todas las colectividades integrantes de la Unidad Popular.

Como expresó Jorge Insunza en su Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista celebrado en los primeros días de febrero de 1970, "desde 1938 el pueblo de Chile no conseguía reunir en un solo haz fuerzas políticas y sectores sociales tan vastos. La Unidad Popular –dijo– está cimentada en un programa definido y claro que propone los cambios revolucionarios que están a la orden del día, en una concepción de poder y en un acuerdo sobre Gobierno que garantiza a todas las fuerzas políticas su integración responsable en la conducción de los asuntos del país. Es una alianza con calidades nuevas, más avanzada que las del pasado, con un peso mayor de la clase obrera y los sectores sociales y políticos más consecuentes. Es, por lo tanto, una unidad que está acorde con la madurez alcanzada por el movimiento popular chileno, capaz de crecer y ampliarse, de transformarse en centro de atracción para la inmensa mayoría de la población, para el 90% de nuestros compatriotas, cuyos intereses recoge y representa".

---

15 Demócrata, fundado en 1887, que en sus orígenes tuvo una apreciable influencia en la clase obrera, el artesanado y el pequeño comercio (después se llamó Partido Democrático y luego Democrático del Pueblo). El Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) procedía del ala izquierda de la Democracia Cristiana y la Acción Popular Independiente (API), estaba constituida por colaboradores del segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo y por oficiales y suboficiales en retiro de las Fuerzas Armadas. El Partido Socialista fue fundado en abril de 1933 asumiendo "el marxismo enriquecido por los aportes del constante devenir social". El Partido Comunista fue fundado el 4 de junio de 1912 por Luis Emilio Recabarren, con el nombre de Partido Obrero Socialista.

La designación del candidato único fue una tarea más difícil, un hueso duro de roer. Cuatro de los seis partidos de la Unidad Popular aspiraban a que un hombre de sus filas fuese el candidato. Los socialistas proponían a Salvador Allende, los Radicales a Alberto Baltra, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) a Jacques Chonchol y la Acción Popular Independiente a Rafael Tarud. Cada cual tiraba para su raya y alegaba en favor de su propio postulante, a la espera de que el Partido Comunista le diera su respaldo. No faltaron las presiones para que los comunistas nos inclináramos unilateralmente a favor de uno u otro de los precandidatos, ni las especulaciones y versiones antojadizas acerca de cual sería el candidato de nuestra preferencia. Se llegó al extremo de echar a correr la "bola" de que el personero que más nos gustaba ni siquiera era de la Unidad Popular y que los ojos del Partido estaban puestos en Radomiro Tomic. Este buscaba el apoyo de la izquierda, atraía a medio mundo con esta frase que acuñara y se hiciera famosa: "cuando se gana con la derecha es la derecha la que gana"; se pronunciaba también por la nacionalización del cobre y afirmaba que el capitalismo es incapaz de resolver los problemas de los pueblos latinoamericanos. En tal situación, no faltaban quienes creyeran que los comunistas podríamos estar pensando en respaldar su candidatura si no había acuerdo en la Unidad Popular. Hasta en el Partido Socialista había personas que comulgaban con tamaña rueda de carreta. Existía, pues, el peligro de que el infundio referido resintiera la confianza entre los integrantes de la Unidad Popular y en especial entre socialistas y comunistas, debilitándose la solidez del entendimiento entre ambos partidos y con ello la solidez de la coalición. En esa circunstancia, no se nos entró el habla y ante el requerimiento de un periodista opté por decir sencillamente: "¡Con Tomic ni a misa!" Y se desinfló la copucha.

Es cierto que en política no se debe ser tan tajante en cuanto a las personas; no se debe decir con éste sí con éste no, como si se condenara por toda la vida a quien o quienes no piensan como nosotros y en un momento dado o en un período de su vida hasta hubiese estado en la otra barricada. Hay que considerar que mucha gente aprende con la vida o cambia de acuerdo con las circunstancias y si cambia positivamente, sería absurdo asumir con ella una posición negativa y no tenderle la mano. Más aún, hay quienes cambian por oportunismo, por ambiciones personales y aun en tales casos no cabe rechazarlos si tras ellos hay gente que se mueve por otros valores. Los antecedentes de las personas tienen su importancia, una importancia no escasa que no se debe dejar de tener en cuenta. Pero siempre que sea en interés del pueblo uno se puede entender hasta con el diablo, si en el momento dado el diablo asume una posición correcta. En el caso de Tomic no era aplicable ninguna de estas consideraciones. Él

era un político distinto, limpio, fiel a su ideario, inteligente y honesto. Fue un gran orador, y simpatizante de la revolución cubana desde el primer día. Jugó un papel positivo en la política chilena. Pero fue una ingenuidad de su parte el hecho de haber pensado que en la campaña presidencial de 1970 podría tener nuestro apoyo y el de la izquierda. Lo cierto y lo concreto es que se habían ahondado las diferencias y desacuerdos con el gobierno de Frei Montalva y su Partido, se había radicalizado el pensamiento político del pueblo, la Unidad Popular había crecido y las condiciones le eran a ella de tal manera favorables que habría sido absurdo que levantara o apoyara un candidato que no fuera de sus filas. De ahí lo de "con Tomic ni a misa".

Para dejar las cosas aún mas claras y presionar en favor del acuerdo en la Unidad Popular en torno a un candidato único, el Partido Comunista proclamó la candidatura de Pablo Neruda el 30 de septiembre de 1969 con la advertencia expresa de que llegaría con él hasta el final si no se convenía en uno solo que podía ser o no ser de nuestras filas. Éramos entonces, como hemos sido siempre y lo somos hoy, los más decididos y consecuentes partidarios de la unidad de las fuerzas de izquierda. Advertimos, sin embargo, que no estábamos dispuestos a respaldar un postulante que no tuviera el apoyo de todos los partidos de la coalición, porque ningún candidato que no fuese el de toda la Unidad Popular salvaría al pueblo de una derrota que no estábamos dispuestos a compartir.

Pablo Neruda era un excelente candidato y habría sido un Presidente de lujo, teniendo en cuenta su inteligencia, su consecuencia, su sensibilidad social y su capacidad de escuchar a los demás y de trabajar en equipos. Pero ni él ni sus compañeros del Comité Central del Partido nos hacíamos ilusiones en el sentido de que los demás pudieran sustentar la misma opinión y pasar por alto los prejuicios anticomunistas que aún existían o podían existir en los otros partidos.

Pensábamos que de los precandidatos no comunistas, Salvador Allende era el mejor por muchas razones. Desde luego, por ser un político más combativo, peleador, conocido, con una trayectoria larga, consecuente, con gran dinamismo. Y, además, porque era el candidato del Partido Socialista. Y nosotros pensábamos que si el abanderado del pueblo no iba a ser comunista, lo mejor era que fuera socialista, lo que no quería decir que no podía ser otro. Si hubiese habido acuerdo en torno a Alberto Baltra, Jacques Chonchol o Rafael Tarud, o en torno a otro –porque también en algún momento se barajaron los nombres de Rafael Agustín Gumucio o de Aniceto Rodríguez–, nosotros no íbamos a ser obstáculo, puesto que no podíamos colocar en primer término la persona del candidato.

Sí, las cosas se fueron dando de tal manera que hubo un momento en que había que resolver, y el Partido Comunista, en ese momento decisivo, retiró la candidatura de Neruda y dimos una opinión categórica a favor de Salvador Allende. Fuimos a hablar con los radicales. Hablamos con los otros partidos. Hablamos con Baltra, quien nos había pedido que cualquier resolución de nuestro Partido sobre el problema presidencial le fuera comunicada con anticipación, asegurando que la recibiría con el mejor espíritu. Hablamos con Tarud. Ya se había retirado Chonchol. Les dijimos "creemos que las cosas ya no dan para más y que el candidato tiene que ser Salvador Allende". Antes que hubiera acuerdo de los demás partidos, dimos una opinión, y ésta era una opinión absolutamente unánime del Comité Central. Lo antes dicho, ya contado en 1972 con iguales palabras por el autor al periodista Eduardo Labarca[16], significa, dicho sea de paso, que no tiene nada que ver con la realidad lo que al respecto aparece diciéndole Carlos Altamirano a Patricia Politzer[17] en 1989, en el sentido de que el Partido Comunista "se negaba rotundamente a apoyar a Allende (...) y no era partidario de apoyar a ningún socialista sino que se inclinaba por un candidato radical como Alberto Baltra".

La campaña

Por fin, el 22 de enero de 1970 se produjo el acuerdo en torno al candidato, en los instantes en que el Partido Comunista realizaba un gran mitin en la Avenida Bulnes. Cuando allí anunciamos que había salido humo blanco y que el candidato único de la izquierda era Salvador Allende, la multitud recibió la noticia con un estruendoso y prolongado aplauso. La gente se abrazaba y saltaba de alegría.

El parto había sido difícil y la campaña no despegó de inmediato. Una parte de la Unidad Popular estaba desanimada porque el candidato designado no había sido el de su preferencia. En el Comité Central del propio partido del candidato designado faltaba la entrega y el entusiasmo necesarios, como si aún pesara el hecho de que en el Pleno socialista del 29 de agosto de 1969 Allende fuese elegido precandidato con el respaldo de sólo 12 dirigentes y se hubiesen abstenido los 13 restantes de los 25 que a esa reunión concurrieron. Para colmo, estábamos en pleno verano, mucha gente se hallaba de vacaciones o por salir de vacaciones. Pero no faltaron quienes le pusieron el hombro a la tarea desde el

---

16 *Corvalán 27 Horas*, Eduardo Labarca, Editorial Quimantú, 1972.

17 *Altamirano*, Patricia Politzer, página 50. Ediciones Melquíades, Santiago de Chile.

primer momento, en la cúspide Allende y los dirigentes políticos más responsables, en la base muchos aguerridos militantes de izquierda y en particular la Brigada de Propaganda "Ramona Parra"(BRP)[18] de las Juventudes Comunistas, y la brigada "Elmo Catalán" (BEC) de las Juventudes Socialistas[19]. Ambas se lanzaron de inmediato a recorrer todos los caminos de Chile grabando el nombre del candidato del pueblo en las panderetas de los sitios eriazos, en las rocas, en los puentes, sobre pasos niveles, en el pavimento de calles y caminos. Las BRP realizaron más de 16 mil rayados en los muros a través del país.

Un papel relevante jugaron los artistas que llevaron a todas partes el canto, el baile, la danza, la alegría y la palabra de compromiso con la lucha de los trabajadores. Inti-Illimani, se desplegó en más de 100 actuaciones, empezando por la que tuviera en San Bernardo ante sólo 10 trabajadores a pleno sol, en la calle, durante una hora de excavación. Víctor Jara, guitarra en mano recorrió las Comunas del segundo distrito, a Isabel Parra la vimos en el Campamento Luis Emilio Recabarren y a Héctor Pavez en varias poblaciones, todos cantándole a la vida.

Desde la proclamación de Allende como candidato hasta el día de las elecciones transcurrieron 7 meses y 13 días. Fue una de las campañas presidenciales más cortas de la izquierda y tuvo calidades superiores a todas las precedentes.

Los partidos que constituían la Unidad Popular expresaban la pluralidad ideológica que existe en el pueblo chileno. Y superaban a la Democracia Cristiana y a la derecha en ambas Cámaras del Parlamento. De los 150 miembros que había en la Cámara de Diputados, 57 pertenecían a la Unidad Popular. De ellos, 22 eran del Partido Comunista, 19 del Partido Radical, 15 del Partido Socialista y 1 de la Acción Popular Independiente, API. La Democracia Cristiana tenía 55 y la Derecha 38. En el Senado, la Unidad Popular tenía 23 de sus miembros, la Democracia Cristiana 20 y la Derecha 7. Esta última estaba representada por el Partido Nacional.

El programa en torno al cual se habían agrupado los partidos populares era más radical, más avanzado y le asignaba al pueblo el principal papel protagónico. Textualmente decía: "El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno. Las fuerzas populares y revolucionarias

---

18 Ramona Parra, nombre de una joven comunista, obrera del Laboratorio Recalcine, asesinada en la masacre de la Plaza Bulnes en enero de 1946 durante el Gobierno de Alfredo Duhalde.

19 Elmo Catalán, periodista, que inició sus labores de tal en el diario *El Siglo*, se incorporó a la guerrilla que el Che Guevara comandaba en Bolivia, y allí murió en uno de sus combates.

no se han unido para luchar por la simple substitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige, sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes, a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo. El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país. En materia de estructura política, el gobierno popular tiene la doble tarea de preservar, hacer más efectivos y profundizar los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores, y transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder. El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente, sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes".

Salvador Allende y los partidos de la Unidad Popular explicaron, a lo largo y lo ancho de todo el país, los cambios que llevarían a cabo tras la conquista del gobierno. En las ciudades y pueblos fueron de casa en casa. Llegaron hasta los más apartados rincones del territorio patrio.

Con palabras sencillas Allende decía lo que debía hacerse en el país para sacarlo del atraso y darle al pueblo el bienestar, la educación y la libertad a las que tiene derecho. A menudo declaraba: "No quiero ser un Presidente más. Quiero ser el primer Presidente revolucionario del primer gobierno revolucionario del pueblo de Chile". Al mismo tiempo llamaba a la gente a organizarse, a unir sus fuerzas y a luchar por sus derechos.

El pueblo tomó como suya la tarea de ganar la Presidencia de la República. Se constituyeron 14 mil ochocientos Comités de Unidad Popular en los sitios de trabajo o lugares de residencia, en aldeas y barrios, en fábricas, servicios públicos, empresas de la construcción y del transporte, establecimientos educacionales, etc. En ellos trabajaban con entusiasmo los militantes y dirigentes de todos los partidos de izquierda y mucha gente sin partido que se plegó a la candidatura de Allende. Esos Comités fueron los artífices de la victoria. Entablaron conversaciones con cientos de miles de trabajadores de la ciudad y del campo y con miles de artesanos, comerciantes e industriales y otras gentes de las capas medias. Reunieron dinero, peso a peso, para cubrir los gastos de la campaña. Como nunca antes ni después se realizaron entonces multitudinarios mítines y un incontable número de actos pequeños en ciudades, pueblos, barrios, aldeas, hasta en los más apartados poblados campesinos. La gente gritaba: "¡Se siente, se siente, Allende Presidente!" y "¡El pueblo unido

jamás será vencido! Los niños coreaban con entusiasmo y alegría: "¡Pica el ajo, pica el ají, sale Allende, claro que sí!" El candidato recibía con emoción y alegría estas manifestaciones de sus partidarios más pequeños.

En su inmensa mayoría el mundo del arte y la cultura se identificó con la postulación de la izquierda y dio una valiosa contribución a la victoria. La dieron, principalmente conjuntos musicales como Quilapayún, Inti-Illimani, Lonquimay, Aparcoa, Tiempo Nuevo, Millaray, Cuncumén y solistas –compositores, cantores y cantautores– de la talla de Sergio Ortega, Gabriela Pizarro, Héctor Pavez, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Patricio Manns, Tito Fernández, Osvaldo Rodríguez, Richard Rojas y tantos otros creadores y cultores del movimiento de la nueva canción chilena.

La campaña se cerró el 1º de septiembre, tres días antes de las elecciones, con un gigantesco mitin realizado en la Alameda. En su último discurso como candidato, Allende dijo:

"El 30% de las familias chilenas ganan menos de un sueldo vital, mientras el uno por ciento gana más de sesenta vitales. Óiganlo bien y no lo olviden, los pobres de Chile necesitarían trabajar 150 años para ganar lo que gana en 12 meses un privilegiado de la oligarquía y de los monopolios. ¡Ciento cincuenta años contra 12 meses! No olviden estas cifras, compañeros y compañeras de Santiago".

Y luego agregó: "Crearemos una nueva economía, daremos en Chile un gran salto adelante. En vez de producción para los ricos y su consumo suntuario, habrá producción para las grandes mayorías, producción para las masas chilenas; en vez de cesantía habrá trabajo".

La encuesta Gallup había pronosticado el triunfo de Alessandri con el 41,5% de los sufragios, a Tomic le daba el 29%, y a Salvador Allende el 28%.

Falló el olfato de la Gallup. Allende salió primero con un millón 75 mil 616 votos (36,3%), Alessandri con un millón 36 mil 278 votos (34,9%) y Tomic con 824 mil 849 votos (27,8%).

Allende obtuvo amplias primeras mayorías en 12 de las 24 provincias que existían en ese tiempo, en Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso, O'Higgins, Curicó, Talca, Concepción, Arauco y Magallanes.

Los resultados de la elección confirmaron la justeza de la posición de quienes sostenían, en primer lugar Allende y el Partido Comunista, la posibilidad de marchar por una vía pacífica hacia la conquista del poder político y, con tal objetivo, la necesidad de la más amplia unidad de las fuerzas de izquierda. Demostraron que habían tenido razón al bregar, en los años precedentes, por ampliar el Frente de Acción Popular, la coalición antecesora a la Unidad Popu-

lar, atrayendo a sus filas al Partido Radical que se liberaba de los elementos más derechistas y anticomunistas. El apoyo radical fue fundamental. Todos los apoyos fueron necesarios. Todos contribuyeron a la victoria.

Los resultados de la elección revelaron que se hacía presente una nueva correlación de fuerzas en favor de cambios de fondo en todos los ámbitos de la vida nacional.

Como en otras ocasiones, el país se daba un gobierno de izquierda con la particularidad de que ahora, por primera vez en la historia nacional, el programa en torno al cual se habían agrupado los partidos populares, era más radical, más avanzado y la clase obrera tenía un mayor peso, una mayor gravitación en la política nacional y en la coalición de izquierda. A la vez, los dos partidos más representativos de los trabajadores, el Comunista y el Socialista, tenían una influencia mayoritaria en las organizaciones de masas, entre los obreros, los campesinos, los pobladores, los estudiantes y la intelectualidad chilena. Ello permitiría que el proletariado, –no en oposición a los demás sectores del pueblo, sino en alianza con ellos y en el interés general– pudiera contribuir al éxito del Gobierno Popular con su firmeza en el combate y su decisión inquebrantable de realizar y profundizar los cambios, sin pararse a medio camino.

El desplazamiento de las clases dominantes y un cambio de rumbos en la dirección del país eran vitalmente necesarios para poner fin a la estagnación económica y asegurar el progreso social. Por ello, el Programa de la Unidad Popular establecía claramente que apoyar la candidatura de Salvador Allende significaba "pronunciarse en favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros. Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente". Y luego agregaba: "Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo".

Esta era la gran empresa, la gran tarea que el pueblo de Chile se propondría realizar con el gobierno de la Unidad Popular.

El pueblo se hace respetar y se frustró la intervención yanqui

La Constitución del 25, entonces vigente, establecía que si en una elección a Presidente de la República en la que participaren tres o más candidatos ninguno obtuviera la mayoría absoluta de los votos, los diputados y senadores, en sesión conjunta, debían pronunciarse por uno de los dos que hubieren recibido la mayor cantidad de sufragios. En las ocasiones anteriores en que tal situación se había dado, el Congreso Nacional, sin excepción y sin dificultad ni dilación alguna, se había decidido por el que había salido primero. Así lo había hecho en 1946 confirmando la victoria de Gabriel González Videla con el 40,1% de los votos, en 1952 la de Carlos Ibáñez con el 46,8% y en 1958 la de Jorge Alessandri con el 31,2%. Además, en víspera de las elecciones de 1970, Jorge Alessandri había hecho publicar un aviso de página entera en *El Mercurio*, divulgado también en otros medios, con el texto siguiente: "Con el objeto de contribuir a la paz y a la concordia que deben existir entre todos los chilenos, reitero que acepto públicamente, desde ya, que se proclame al candidato que obtenga la primera mayoría en las urnas. Este pronunciamiento público, estoy cierto, contribuirá a la pacificación de los espíritus, lo que será apreciado por todos los chilenos".

Pasada la elección, Alessandri apareció olvidándose de estas palabras. En una nueva declaración dijo que de ser elegido Presidente por el Congreso Pleno, presentaría su renuncia. En forma inmediata, en un discurso en el Senado, Volodia Teitelboim puntualizó que Alessandri en su declaración "formulaba una invitación a una treta indigna" que podría llevar al país al caos, a la tembladera y hasta a una posible guerra civil.

El Comando Alessandrista declaró en un comunicado que el proceso electoral no había terminado e hizo un llamado "a los hombres y mujeres libres de Chile a defender el orden y el respeto a la ley" y el derecho que la Constitución Política le otorgaba al Parlamento para pronunciarse por cualquiera de los dos candidatos que habían obtenido las más altas votaciones.

El gobierno de los EEUU hizo caso omiso de la soberanía chilena y se arrogó el derecho a intervenir en los asuntos propios de nuestro país, tratando de decidir, por encima de la voluntad popular y de la opinión del Parlamento Nacional, quién debía ser y quien no debía ser Presidente de Chile. El gobierno norteamericano jugó sus cartas. Según confiesa en sus memorias el ex Secretario de Estado, Henry Kissinger, se entrometió en el asunto en tanto se conocieron en Washington los resultados de las elecciones chilenas, resolviendo bloquear por todos los medios el acceso de Salvador Allende a la Presidencia de la República.

La colusión entre la reacción chilena y el imperialismo norteamericano se convirtió en un macabro contubernio antinacional a partir de los años 60, cuando se visualizó la posibilidad de que la izquierda se abriera paso hacia el poder político para instaurar un régimen popular y democrático en marcha al socialismo. La victoria de la revolución cubana, los resultados de las elecciones presidenciales de 1958 y el ascenso del movimiento obrero y popular hacían ver que esa posibilidad era cierta. Y para tratar de frustrarla, los defensores del régimen imperante no se quedaron en chicas. Se confabularon contra Chile pasando por alto la voluntad del pueblo, sus instituciones democráticas y la legalidad vigente.

Henry Kissinger dice que el triunfo de Allende fue para Washington "una sorpresa aturdidora" y "nuestras reacciones eran realmente frenéticas". El Presidente Nixon "estaba fuera de sí. Por más de una década había criticado duramente las administraciones demócratas por permitir el establecimiento del poder comunista en Cuba. Y ahora percibía cómo otra Cuba había surgido a la vida durante su propia administración sin que a él se le hubiera dado la oportunidad de tomar una decisión. Esto explica la virulencia de su reacción y su insistencia de hacer algo, cualquier cosa, que anulara la negligencia anterior".

Kissinger agrega que después de la reunión del 8 de septiembre en el Comité 40 "decidimos instruir al Embajador Korry para preparar una evaluación a sangre fría de la posibilidad y probabilidad de un golpe de Estado y de los pros y contras involucrados en la organización de una futura y efectiva oposición chilena a Allende". "El 14 de septiembre –expresa– el Comité 40 consideró lo que para ese entonces habíamos apodado el gambito Rude Golberg". De acuerdo a éste el sector más reaccionario de la derecha chilena trató de poner en práctica, una tras otra, tres maniobras: la primera, lograr que la Democracia Cristiana y la derecha votaran por Alessandri en el Congreso Pleno, tras lo cual Alessandri renunciaría transcurridas un par de semanas y se llamaría a nuevas elecciones con Frei Montalva como candidato de tal contubernio; la segunda, convencer a Frei para que renunciase antes de terminar su mandato, se designase un Vice-Presidente y se llamase a nuevas elecciones, y tercera, provocar la renuncia del ministerio e inducir a Frei a designar un gabinete integrado sólo por militares y abandonar el cargo.

Ese mismo 14 de septiembre –dice Kissinger– Richard Nixon "había sido impulsado a actuar por Agustín Edwards, el editor *de El Mercurio* que había venido a Washington a advertir cuáles serían las consecuencias de la toma de Allende". Allá se entrevistó con Henry Kissinger y John Mitchell, encargado del Departamento de Estado el primero y Secretario de Justicia el segundo, y junto a ellos lo hizo con el Presidente Nixon. En la tarde del 15 de septiembre –agrega–, "en una conversación que duró menos de 15 minutos. Nixon le pidió a Helms

y a mí –Helms era el jefe de la CIA– un esfuerzo mayor para ver qué podría hacerse para evitar que Allende llegara al poder. Si hubiera una oportunidad en diez de librarnos de Allende deberíamos probarla; si Helms necesita diez millones de dólares él los tendría".

Richard Nixon dispuso que las medidas que se habían acordado se pusieran en manos de la CIA para su ejecución inmediata. Entre el 5 y el 20 de octubre de 1970, la CIA se contactó en 21 ocasiones con los mandos militares y oficiales de carabineros en Chile. A los chilenos que se inclinaban a protagonizar un golpe se les aseguró el apoyo de los Estados Unidos tanto antes como después del golpe.

Fracasadas estas maniobras deleznables, se tramó el secuestro del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, buscando crear una situación de caos que justificara el golpe de Estado que promovía en las sombras el general en retiro Roberto Viaux Marambio, en contacto con un grupo de militares de la Escuela de Suboficiales y del Batallón Blindado N°2. La operación se llevó a cabo a las 8 y cuarto de la mañana del 22 de octubre, en la intersección de las calles Martín de Zamora con Américo Vespucio, un par de minutos después que el general Schneider saliera de su casa. A los encargados del secuestro se les pasó la mano y asesinaron a Schneider cuando este resistió el atraco. El país reaccionó a favor del orden democrático y se impuso la voluntad del pueblo. El Congreso Pleno ratificó la victoria de Allende y éste asumió la Presidencia de la República el 3 de noviembre de 1970. Durante varios años se ocultó la participación de la CIA en el asesinato del general Schneider. Pero las evidencias de hoy son tales que su familia se ha movido en busca del esclarecimiento del crimen. "Hay pruebas de que ellos (los de la CIA) mandaron dinero a los responsables de la muerte de mi padre", subrayó el hijo del general asesinado. Lo concreto es que la familia Schneider presentó una querella en Estados Unidos, nada menos que contra Henry Kissinger quien había tramado este asesinato, junto a Richard Helms, el Jefe de la CIA en ese momento.

Pero la intervención norteamericana continuaría, en pleno acuerdo con la reacción interna, durante todo el gobierno de Salvador Allende.

La mayoría del país reconoce la victoria de la Unidad Popular

En la misma noche del 4 de septiembre, Radomiro Tomic reconoció el triunfo de Allende en una declaración que leyó ante los periodistas en la sede de

su colectividad. Y al día siguiente fue a la propia casa del candidato triunfante a felicitarlo con un fuerte abrazo.

La Directiva del Partido Democratacristiano emitió una declaración oficial sobre la elección presidencial, reconociendo oficialmente la victoria del candidato de la Unidad Popular.

La CUT celebró la elección de Allende, llamó "a los trabajadores organizados, estudiantes, campesinos, pobladores y a todos los organismos sociales del pueblo chileno a defender el triunfo popular" y declaró que convocaría a un Paro Nacional contra cualquier intento de arrebatarlo o escamotearlo.

Los trabajadores y las masas populares salieron a la calle y buscaron, en todos los ámbitos, el contacto y el entendimiento con aquellos sectores democráticos que, aunque no habían votado por Salvador Allende, estaban porque se reconociera su triunfo. Estos últimos pensaban así por diversas razones: los más porque estaban más cerca de la Unidad Popular que de la derecha, de Allende más que de Jorge Alessandri y querían mantener la tradición nunca alterada de confirmar la primera mayoría.

La Iglesia Católica chilena asumió posición correcta y sabia. Dos semanas después de las elecciones presidenciales de 1970, en el tradicional Tedéum de Fiestas Patrias, el presbítero Vicente Ahumada expuso en su homilía una actitud abierta y comprensiva a la época que vivíamos y llamó a los creyentes a no tener miedo a los cambios, a no aferrarse al pasado, sino a mirar hacia el futuro.

Los rectores de la Universidad Católica, Fernando Castillo Velasco; de la Universidad Técnica del Estado, Enrique Kirberg, y de la Universidad del Norte, Manuel Campos, visitaron a Allende para felicitarlo por el triunfo. El Consejo Superior de la Universidad Santa María acordó reconocer la victoria del candidato de izquierda y la Universidad de Concepción organizó las "Jornadas de análisis y defensa de la victoria popular" con participación de todas las Universidades.

Entre muchos otros reconocimientos del triunfo de Allende estuvieron los que expresaron públicamente, la Masonería, la Facultad de Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio Médico, la Confederación Nacional Triunfo Campesino, la Cámara de Comercio Minorista, el Sindicato de Comerciantes (SIDECO), el Sindicato Profesional de Suplementeros de Concepción, los trabajadores de la Empresa de Buses Vía Sur, los empleados del Sanatorio El Pino y la Asociación de Empleados de la Caja de Previsión de Carabineros.

El pueblo no se hallaba dispuesto a que se escamoteara su victoria.

La derecha fracasó en su intento de impedir que la revolución siguiera su curso, frustrándose sus iniciativas en el terreno militar porque ya estaba derrotada políticamente.

El 24 de octubre, el Congreso Pleno proclamó Presidente de la República a Salvador Allende, quien asumió el cargo el día 3 de noviembre. El pueblo celebró el acontecimiento con la mayor fiesta que haya habido en la historia de Chile, cubriendo de oriente a poniente toda la Alameda de las Delicias y calles perpendiculares cercanas al lugar donde se levantó la tribuna.

Se había ganado una gran batalla.

La lucha que se desarrolló desde el 4 de septiembre al 3 de noviembre de 1970, se convirtió en una verdadera epopeya. Cientos de miles de chilenos y chilenas, el pueblo que había sufragado por Allende, muchos de los que habían votado por Tomic, y tras ellos una gran parte de los chilenos, salieron a la calle en ciudades y pueblos de todo el país para respaldar la victoria de la Unidad Popular, en contra de las maniobras antidemocráticas de la reacción nativa y foránea e hicieron valer su voluntad. Se vio que la clase obrera era capaz de reunir en torno suyo a la mayoría nacional en función de los grandes cambios que requería el país y que era capaz también, sobre la base de esa mayoría y de una actividad de masas fuerte y tenaz, de impedir la consumación de los siniestros planes de los enemigos de la democracia y el bienestar del pueblo.

En este proceso, la primera mayoría relativa se transformó, en la práctica, en mayoría absoluta y se conformó una correlación de fuerzas a favor de la Unidad Popular.

La lucha entre el pueblo y la reacción por cambiar la correlación de fuerzas a favor de uno u otro fue lo central en esos tensos días. Al resolverse a favor del pueblo, en septiembre-octubre de 1970, la cuestión de quién aísla a quién, la derecha aislada se vio impedida de ahogar en su cuna la revolución. Fracasó, sobre todo porque en esa circunstancia ya estaba aislada y políticamente derrotada.

El Pacto de Garantías Constitucionales que se firmó entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, presidida por Benjamín Prado, permitió confirmar en el Parlamento la elección de Allende. Tuvo alguna resistencia en el seno del Partido Socialista, pero en definitiva fue aceptado. Contempló disposiciones como el respeto a la libertad de prensa, de reunión, de enseñanza, de trabajo, de movimiento y de participación en las organizaciones comunitarias, la inviolabilidad de la correspondencia y el carácter profesional de las Fuerzas Armadas. Todo ello fue aprobado por el candidato electo y por la Unidad Popular, que sólo rechazaron una disposición que convertía a las FF.AA. en árbitros y garantes de su cumplimiento. Constituyó en los hechos una victoria del pueblo. Las concesiones que implicaba, de tipo menor, eran más que compensadas con la concesión de la otra parte. Por esto, todos los partidos de la Unidad Popular estuvieron contestes en que había que entrar en el compromiso. En la concertación del Pacto de Garantías y en la elaboración de la ley respectiva "trabajó mucho Orlando Millas" según recuerda Sergio Insunza.

En las elecciones no habíamos logrado la mayoría absoluta. Pero en los días siguientes fue posible generar y volcar a nuestro favor a la mayor parte de la ciudadanía, separar de la oligarquía y de la alta burguesía a vastos sectores medios, incluso burgueses, que se identificaban con la Democracia Cristiana y que en el pasado se habían unido a la reacción en contra del movimiento popular. Los que no estaban con nosotros estaban separados y no todos contra nosotros. Esta no era una circunstancia fortuita, sino un hecho político producido por el contenido y la forma del movimiento revolucionario y su correcta conducción.

5.- Hacia el socialismo en democracia, pluralismo y libertad.

"Nuestro camino será aquel que ha sido construido a lo largo de nuestra experiencia, el consagrado por el pueblo en las elecciones, el señalado en el Programa de la Unidad Popular, el camino al socialismo en democracia, pluralismo y libertad". (Discurso en el Estadio Nacional el día 4 de noviembre de 1970.)

Nuestro camino revolucionario

Desde mediados de los años 50, en la izquierda chilena se discutió acerca de la posibilidad de acceder al poder sin el recurso de las armas, por una vía que se denominó pacífica. Esta discusión fue particularmente intensa a fines de la década de los 60 y al comienzo del gobierno de la Unidad Popular. Fue una discusión insoslayable, importante y necesaria.

La posibilidad de conquistar el poder por una vía pacífica fue considerada por Carlos Marx ya en 1872, cuando habló sobre el tema en un mitin celebrado en Amsterdan. En tal ocasión recordó expresamente que "jamás hemos afirmado que a este fin (la conquista del poder político para construir el socialismo) conduzcan necesariamente medios idénticos" y que siempre "hay que tener en consideración las instituciones, las costumbres, las tradiciones de los diversos países". Lenin, por su parte, en sus famosas tesis de abril de 1917, en los primeros meses que siguieron al derrumbe del imperio zarista, estimó posible que la revolución socialista se realizara en Rusia a través de un camino pacífico mediante la conquista de la mayoría en los soviets. Abandonó esta opinión cuando fueron ametrallados los obreros en Petrogrado y la contrarrevolución de Kornilov daba sus primeros trancos. Después, la tesis en referencia cayó en el olvido por largo tiempo. Fue restablecida por el vigésimo Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, celebrado a comienzos de 1956 y suscrita por el conjunto de los partidos comunistas.

El Partido Comunista de Chile la hizo suya en su Congreso Nacional celebrado clandestinamente en Cartagena en abril de 1956, en la casa de veraneo de la Escuela Salvador Sanfuentes, hoy Estados Unidos. En esa ocasión su Secretario general, Galo González, la consideró factible en dependencia "de la capacidad

de la clase obrera para unir en torno suyo a la mayoría nacional y conquistar, por medio del sufragio u otra vía similar, el poder para el pueblo".

Explícita o implícitamente la acogieron también los demás partidos de izquierda. Sólo encontró alguna resistencia en un sector del Partido Socialista, posición a la cual se sumó el MIR desde su aparición a la vida política en 1965.

Mas aún y sin disminuir la importancia que tuvo la recreación de la vía pacífica por parte del XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, se debe anotar que, en los hechos, esa vía la venía recorriendo la izquierda chilena desde la década de los años 30, desde los tiempos del Frente Popular.

Cuando se efectuó el XX Congreso, la clase obrera chilena ya había reconstituido su unidad sindical al crear en 1953 la Central Única de Trabajadores, en tanto los partidos Socialista de Chile, Socialista Popular, Comunista, del Trabajo, Democrático de Chile y Democrático del Pueblo, se agrupaban en esos mismos días en el Frente de Acción Popular, FRAP, antecesor de la Unidad Popular. Para las elecciones presidenciales de 1958, esos partidos, se propusieron la conquista del Poder Ejecutivo y proclamaron candidato a Salvador Allende. Aunque estas elecciones y las que siguieron jugaron un importante papel era incorrecto hablar de "vía electoral" dado el carácter combativo, multifacético y de masas del movimiento popular.

Los impugnadores de la vía pacífica se escudaban en la revolución cubana que encendió de entusiasmo a los pueblos de América Latina. Fueron muchos los que se orientaron a seguir su mismo camino, el de la lucha armada, más exactamente, el de la revolución a partir del foco guerrillero. Trataron, a la vez, de presentar la vía chilena como reformista y sin destino.

Nunca presentamos la llamada "vía pacífica" o "vía chilena", como un camino opuesto al que siguió la revolución en Cuba. Sosteníamos y sostenemos que todos los pueblos en América Latina, unos primeros y otros después, y cada cual de acuerdo a sus propias condiciones, con sus propias características, romperían y romperán las cadenas de la opresión imperialista, de la dominación de las oligarquías y marcharían y marcharán hacia el socialismo. Y todo ello, porque en los diversos procesos revolucionarios, hay no pocas similitudes, pero hay también diferencias que obligatoriamente deben tomarse en cuenta.

Los hechos demostraron que esta tesis era realista. Nunca hicimos nada por convertir a Chile o al movimiento popular chileno en algo así como un centro que atrajera a movimientos populares de otros países del continente para que siguieran, de una u otra manera, una orientación que pudiera parecer o presentarse en contradicción con la cubana. Y desde el primer momento, desde el instante mismo de la victoria de la Unidad Popular, fuimos enfáticos al decir que no teníamos la pretensión de elevar nuestra experiencia a la categoría de

modelo para los demás países del continente. Pensábamos y seguimos pensando que en América Latina el movimiento revolucionario de cada país determina su propio camino y que nuestros pueblos tendrán que abrirse paso hacia el poder a través de algún tipo de lucha armada o a través de combativos movimientos sociales que no desemboquen en ella, por lo menos en la primera etapa.

La vida presenta y presentará muchas variantes en cuanto al camino armado o al camino no armado.

El Partido Comunista libró a este respecto una batalla política e ideológica de fundamental importancia para el reagrupamiento de las fuerzas de izquierda en torno a una política revolucionaria y realista. Desde el primer día apoyó resueltamente a la revolución cubana, siendo enfático en sostener, a la vez, que los procesos sociales son obligatoriamente diferentes. Las diferencias, sostuvo, están marcadas por la realidad. Los revolucionarios no pueden elegir, indistintamente, uno u otro camino, el de la vía pacífica o el de la vía no pacífica, ni tal o cual forma de acceso al poder dentro de una misma vía, sino el camino y la forma que surgen de las condiciones concretas en que actúan. Tienen el deber de tomar en cuenta *"las instituciones, las costumbres, las tradiciones de los diversos países"* de acuerdo al pensamiento ya recordado de Marx. Por ello, los comunistas chilenos sostuvimos explícitamente que, en las condiciones de nuestro país, la llamada vía pacífica podría materializarse a partir de la conquista del Poder Ejecutivo en una elección presidencial y no a través de la conquista de una mayoría parlamentaria, como lo concibiera y lo planteara el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética. Entre otras cosas, tuvimos en cuenta que en el sistema presidencial vigente en Chile desde 1925, el Poder Ejecutivo era y sigue siendo la parte más importante del poder político y se podía conquistar a través de una elección en la cual la izquierda lograra la mayoría relativa de los sufragios y consiguiera enseguida la ratificación de su triunfo en el Congreso Pleno.

El pensamiento de los comunistas chilenos fue expuesto a la consideración del pueblo por dirigentes y militantes en miles de encuentros y en informes, discursos, entrevistas de prensa y especialmente en cuatro artículos que, como Secretario general, escribí sobre el tema.[20]

En uno de esos artículos, publicado en octubre de 1961, expresamente dije: *"Si la clase obrera y el pueblo de Chile han de conquistar el poder político a través de un*

---

[20] Los artículos en referencia se publicaron primero en *El Siglo* y luego en un folleto con el título "Nuestra Vía Revolucionaria". Aparecen también en el libro *Camino de Victoria* de Luis Corvalán.

proceso electoral, es más probable que ello ocurra en torno a una elección presidencial que a una elección de parlamentarios o de representantes en las municipales. A esta conclusión se puede llegar en la presente situación, dentro de la cual el poder ejecutivo tiene en Chile más atribuciones que el poder legislativo, está más identificado con el poder político y se puede conquistar con obtener solo la primera mayoría relativa en las urnas".

Salvador Allende fue un convencido y entusiasta partidario de la vía pacífica. Se refería a ella como "vía chilena al socialismo". Escribió Eduardo Novoa Monreal en su libro *Chile en la Legalidad*: "Allende, profundo conocedor de la tradición institucional y legal del pueblo chileno, se decide a intentar lo que hasta ahora parecía no admitir fusión: cambios revolucionarios dentro del imperio de la legalidad. (...) Su posición es audaz, pero no podría tachársela de irreflexiva. En todo momento tiene presente –y lo manifiesta– los peligros y dificultades que le acechan, según puede observarse en muchos de sus discursos".

Los comunistas, que fuimos los primeros en propiciar en Chile la vía pacífica, no nos quedamos en su mera formulación. Nuestros planteamientos sobre la materia fueron puliéndose, afinándose, haciéndose cada día más precisos, más claros, y lo que es tanto o más importante, en la acción práctica seguimos demostrando que, para nosotros, lo principal y lo central eran la unidad y la lucha de la clase obrera, la movilización de las más amplias masas populares, el combate decidido por los intereses y derechos del pueblo y en contra de sus enemigos, la alianza entre las fuerzas democráticas. Ello ayudó a convencer a buena parte de los que dudaban de la corrección del camino que seguía el movimiento popular.

En este terreno, el Partido Comunista tiene méritos, que pueden calificarse de históricos, como el de haber hecho una correcta elaboración de la vía pacífica chilena –mejor dicho de la vía no armada– para todo el período que condujo a la generación del Gobierno Popular. Supo sacudirse del dogmatismo, pronunciándose, con espíritu innovador y certero, a favor del pluripartidismo, de la vanguardia revolucionaria compartida con el Partido Socialista, de la libertad de creación de los escritores y artistas, de la importancia de la pequeña burguesía revolucionaria y de otros asuntos capitales. Esta elaboración teórica, acompañada de la consiguiente práctica política, fue un factor fundamental que facilitó la gestación y desarrollo de un gran movimiento social que permitió el triunfo de Salvador Allende.

La definición de pacífica que tenía nuestra vía era insuficiente e inducía a equivocaciones, a pensar que se trataba de una vía exenta de conflictos. El propio término de pacífica sonaba a pasividad.

Definirla como vía electoral, era también incorrecto porque no se trataba únicamente ni obligatoriamente del camino electoral, y no tenía nada que ver con las concepciones reformistas de la socialdemocracia.

La llamada vía pacífica era, en primer lugar, la vía de la organización y la lucha multifacética de las masas populares por sus reivindicaciones y derechos y por los cambios revolucionarios que requería la sociedad chilena. Dentro de ella tenían cabida acciones de fuerza, múltiples combates y diversas formas de lucha, mitines, huelgas, paros nacionales, tomas de terrenos, ocupaciones de fábricas, violentos enfrentamientos con la policía. Por eso era impropio calificarla de pacífica. Lo más correcto era definirla como no armada. Salvador Allende la llamó "vía chilena al socialismo", denominación que al comienzo los comunistas no avalamos porque considerábamos que podíamos aparecer inmodestos más allá de nuestra fronteras.

En la Conferencia Internacional de los Partidos Comunistas y Obreros, celebrada en Moscú a comienzos de 1969, la delegación chilena integrada por Volodia Teitelboim, César Godoy Urrutia, José Miguel Varas y yo, propusimos que en adelante todos la llamáramos "vía no armada". La proposición no fue aceptada. Pero los comunistas chilenos seguimos hablando de "vía no armada", aunque a veces usábamos también la expresión vía pacífica que estaba muy metida en la gente.

En el XXIV Congreso del Partido Comunista de la URSS que tuvo lugar en Moscú, en los inicios del gobierno de Allende, en abril de 1971, la delegación chilena constituida por Marta Ugarte, Samuel Riquelme y yo, fue recibida con especial atención y afecto. Ello era explicable. Por primera vez en la historia un movimiento revolucionario que proclamaba abiertamente que se proponía como meta el socialismo, conquistaba el poder, más bien el gobierno, por una vía pacífica, a través de una elección. Este era un fenómeno singular y esperanzador para otros pueblos. Eran vistos con interés varios rasgos de la situación chilena de aquel momento. Por ejemplo, llamaba la atención que los profundos cambios que se operaban en el país se llevaran a cabo en los marcos de la Constitución y de la ley y, asimismo, el hecho de que los Partidos Socialista y Comunista, que andaban como el perro y el gato en casi todos los países donde coexistían, aquí marchaban de común acuerdo y constituían la base de una amplia coalición de izquierda y de un gobierno pluralista.

Para muchos comunistas soviéticos en Chile se rompían sus esquemas.

En nuestro saludo al Congreso del PCUS destacamos expresamente lo peculiar de nuestro proceso revolucionario. Sostuvimos que frente a la afirmación de nuestros enemigos en el sentido de que la composición pluripartidista del Gobierno Popular de Chile era un fenómeno pasajero y de que los comunistas trataríamos muy pronto de saltar sobre esta característica para ir al establecimiento de un sistema de partido único, sólo podíamos decir que no teníamos otro camino que el de trabajar junto a nuestros aliados, sin límite de tiempo, y

que, por supuesto, no estábamos descontentos con desenvolvernos en este marco tan propio de nuestra tradición y de nuestra realidad social y política.

La victoria de Salvador Allende en las elecciones de septiembre de 1970 demostró la razón que tenían todos los que habíamos proclamado y defendido la vía pacífica y confirmó el acierto de la posición sostenida por el Partido Comunista y otros partidos y corrientes democráticos en favor de la más amplia unidad de las fuerzas de izquierda. En particular demostró que habían estado en una posición correcta quienes sostuvieron, en los años precedentes, la necesidad de ampliar el Frente de Acción Popular y de atraer a las filas de la izquierda al Partido Radical que se liberaba de los elementos más derechistas y anticomunistas.

Pluripartidismo y Estado de Derecho

En un multitudinario mitin realizado en el Estadio Nacional, a pocas horas de haber asumido la Presidencia de la República, Salvador Allende reafirmó el compromiso contraído por él y por los partidos de la Unidad Popular, de actuar dentro de la Constitución sin perjuicio de buscar su modificación a fin de hacer los cambios necesarios contemplados en su programa.

Diez días después, en un Pleno de su Comité Central, el Partido Comunista subrayó el pluralismo político como uno de los rasgos esenciales que practicaría el Gobierno Popular. Lo hizo en los siguientes términos a través del informe que Orlando Millas dio a esa reunión: "Una de las modalidades específicas del avance chileno hacia el socialismo es el pluripartidismo. En las condiciones concretas de nuestro país, los comunistas hemos planteado en el Programa del Partido y en los informes y resoluciones de nuestros últimos tres Congresos Nacionales, durante doce años, alcanzar el socialismo mediante el entendimiento, indefinido en el tiempo, de varios partidos. Estamos por una sociedad pluralista y lo venimos reiterando desde hace tiempo. En cuanto al gobierno popular, el pluralismo se manifiesta, en primer término, en que los partidos y movimientos que constituimos la Unidad Popular integramos solidariamente y con responsabilidad compartida dicho gobierno y, además, en que existan también, fuera de él, partidos en distintos grados de oposición"..

El gobierno de la Unidad Popular buscó acuerdos con la Democracia Cristiana y respetó los derechos de la oposición. Si en este último terreno hay algo que criticarle es haber observado ese respeto más allá de las obligaciones de la ley.

A contrapelo de la realidad, el sector más reaccionario de la oposición se empeñaba en presentar al gobierno como antidemocrático o como una grave amenaza a la democracia, atribuyéndole el propósito de implantar una "dictadura

comunista", un régimen arbitrario, sin prensa independiente y represor de la disidencia.

Lo cierto es que bajo el gobierno de Salvador Allende el país vivió en un régimen democrático, en constante ampliación, ante todo por el hecho de que, por primera vez en la historia de Chile, los obreros tenían plena libertad de opinar y criticar fuera y dentro de las fábricas donde trabajaban y para ellos se abrieron diversos canales –también por primera vez en la historia del país– para hacer efectiva su participación en la dirección del Estado, en las empresas en manos del Estado y en las tareas de abastecimiento y distribución de los artículos de mayor consumo.

La única libertad suprimida durante el gobierno de la Unidad Popular fue la libertad de la Chile Exploration, de la Kennecott y de la Anaconda para seguir disfrutando de la explotación del cobre, la principal riqueza de la Patria, la libertad de los grandes monopolios internacionales y nacionales para continuar acumulando riquezas a expensa de la mayoría de los chilenos y la libertad de los latifundistas para seguir dominando y mantener en la miseria y el oscurantismo a gran parte de la población campesina.

Los que durante el Gobierno Popular se presentaron como los defensores y campeones de la democracia y la libertad fueron los que promovieron y apoyaron el golpe militar de tipo fascista del 11 de septiembre de 1973, los que respaldaron el cierre de los diarios "El Siglo", "Clarín", "Puro Chile", "Ultima Hora" y "La Prensa" de Santiago, "El Despertar" de Iquique, "El Popular" de Antofagasta, "El Siglo" de La Serena, "Diario Color" de Concepción y otros cotidianos y/o periódicos provinciales, y procedieron a la clausura de las radios "Magallanes", "Prat", "Colo-Colo", "Corporación", "Luis Emilio Recabarren", "Radio De La Universidad Técnica", "Coloso" de Antofagasta, "Ernesto Riquelme" de Coquimbo, "Caupolicán" de Valparaíso, "Cachapoal" de Rancagua, "Radio Talca" de Talca, "Aguas Negras" de Curicó, "Simón Bolívar" de Concepción, "La Frontera" de Temuco, "Eleuterio Ramírez" de Osorno, "Vicente Pérez Rosales" de Puerto Montt y "La Voz Austral" de Punta Arenas. Fueron ellos, los que además de arrasar con todas las libertades, clausuraron el Parlamento, destituyeron y reemplazaron las administraciones municipales que eran electas por la ciudadanía; fueron los que destituyeron los rectores de las Universidades y los substituyeron por militares y uno que otro civil sin suficientes méritos académicos; los que decretaron la disolución de los partidos políticos, de la Central Única de Trabajadores, de las federaciones sindicales, de los colegios profesionales; los que detuvieron y torturaron a cientos de miles de chilenos, a muchos de ellos los encerraron en campos de concentración o los arrojaron al exilio y a varios miles de hombres y mujeres, incluso mujeres embarazadas, los

asesinaron e hicieron desaparecer. Y después han tenido la desfachatez de defender al tirano, de promover una compasión que no se merece, de pretender convencer a los demás que si hubo exceso es culpa de otros y no del dictador y hasta de exaltarlo a la condición de senador vitalicio de la República con fuero y sueldo suculento, aún sin desempeñar el puesto y que sigue percibiendo aún después de ser obligado a renunciar y declararse demente para salvarse de un juicio por algunos de sus crímenes.

Nunca ha existido ni existirá la libertad por encima de las clases. No ha habido ni habrá jamás libertad absoluta para el individuo. Desde el momento que éste vive en sociedad y tiene no sólo derechos, sino también deberes, existen para él limitaciones. En rigor, la libertad está vinculada al progreso que permita satisfacer las necesidades del hombre, al dominio de las leyes de la naturaleza y de la sociedad y a las normas de convivencia que se establezcan en armonía con todo ello. En la sociedad capitalista y en todo estado dominado por el despotismo de unos pocos, hay una clase que tiene amplia libertad, una clase o una casta que disfruta de la libertad mientras las otras carecen de ella casi por completo.

En algunas democracias burguesas –que por otra parte no son muchas– los trabajadores han conquistado ciertas libertades. Pero en los hechos esta libertad es muy inferior a lo que se proclama de palabra, es más formal que real, es más ficticia que verdadera. La libertad de trabajo no existe para los millones de desocupados y es menos que relativa para los que tienen empleo. Generalmente éstos no trabajan en lo que quieren, sino en lo que pueden, en muchas ocasiones al margen de sus capacidades personales.

Para no poca gente de los países capitalistas, lo principal es el derecho a la protesta, el derecho a pataleo. Esa gente mide el grado de libertad y democracia de su país en relación directa con la posibilidad que tiene de expresar sus puntos de vistas, de reclamar algo, sin reparar en el eco de sus opiniones, en el resultado de sus reclamos, ni en el ámbito restringido en que puede hacerlo.

Cómo se planteaba el cambio en el poder

Después de conquistar el gobierno, la Unidad Popular se propuso acometer primero los cambios que se requerían en la estructura económica del país. Pero esta opción no se asumió por casualidad. Gonzalo Martner García, fundamentó la prioridad que se daba a las transformaciones económicas con las siguientes palabras: "la falta de progreso en el frente del cambio institucional (el gobierno no tenía mayoría parlamentaria) obligó a avanzar fuertemente en otros frentes,

en particular en el de la nueva economía, a fin de captar allí fuerzas suficientes para luego modificar la estructura del Estado. Fue por ello que se dio énfasis al avance en el frente económico para lograr debilitar, desde la base, el poder de las clases tradicionales. Se pensó que un cambio profundo en la infraestructura de la sociedad llevaría al cambio de la superestructura".

No había otra posibilidad de avanzar hacia el objetivo central, el cambio del régimen social.

El economista norteamericano Edward Boorstein, que colaboró con el gobierno de Allende en el Banco Central y antes trabajó en la Federal Reserve Board en tiempos de Franklin Délano Roosevelt, en la administración militar norteamericana de Alemania en los primeros años que siguieron a la segunda guerra mundial y en el Ministerio de Comercio Exterior de Cuba, afirma: "La Unidad Popular pudo tomar en sus manos el brazo ejecutivo del gobierno no porque contase con una mayoría de fuerzas que pudiesen apoyar el cumplimiento de un programa revolucionario por los medios que fuesen, sino porque la mayoría de los chilenos –incluidos muchos oficiales de las Fuerzas Armadas– le daban crédito a la legalidad. El hecho de tener que respetar la legalidad limitaba la capacidad del gobierno de la Unidad Popular de hacer una revolución. La burguesía no estructura su sistema para apoyar revoluciones. Sin embargo, si no hubiese sido con la legalidad, no habría habido gobierno de la Unidad Popular. Dada esta situación, la Unidad Popular no podía pura y simplemente tratar de destruir el aparato de estado burgués (el gobierno) no tenía poder legal para hacer cualquiera de esas cosas simplemente por orden suya, y no disponía de fuerza necesaria para hacerlas de otro modo".

Obviamente, la vía seguida presentaba también no pocas dificultades. Apenas se inició el gobierno del Presidente Allende, el 26 de noviembre de 1970, en el Pleno de su Comité Central del Partido Comunista advertimos: "El enemigo no nos dejará expedito el camino. Ya se sabe cuánto hizo y trató de hacer por impedir el triunfo popular en las urnas y luego la formación de este nuevo gobierno".

Dos meses después, ante el Congreso del Partido Socialista en Febrero de 1971, insistíamos: "Podríamos afirmar que las dificultades más grandes recién comienzan. Los que ayer no vacilaron en fraguar el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército general René Schneider, no vacilarán en nada en el futuro"

No había más que enfrentar los escollos de todo tipo llevando adelante la lucha de las masas populares, atrayendo y poniendo en movimiento la fuerza social necesaria para vencer la resistencia reaccionaria a los cambios aún pendientes, principalmente en el terreno de la superestructura.

El camino recorrido mostró, en un primer período, un crecimiento del apoyo que el pueblo le daba al gobierno. Acumulábamos fuerzas y era posible seguir conteniendo y derrotando a los contrarrevolucionarios y continuar

cumpliendo el Programa de la Unidad Popular, apoyándonos en una correlación de fuerzas favorable.

Ocurrió, sin embargo, que al poco tiempo de lograrse, esa correlación de fuerzas favorable empezó a modificarse y no precisamente a nuestro favor y así llegó el momento en que no se pudo avanzar en el terreno de los cambios que apuntaban a una verdadera democratización del país y a la conquista de la plenitud del poder. Pero esta es harina de otro costal, problema que abordaremos en el capítulo final.

La reunión de El Arrayán

En los primeros días de febrero de 1972, transcurrido un año y tres meses desde el inicio del gobierno de Allende, se reunió en El Arrayán el Comité Nacional de la Unidad Popular con el Presidente de la República y los ministros de Hacienda, Economía y Agricultura, el director de la Oficina de Planificación, ODEPLAN, y el secretario ejecutivo del Comité de Comercio Exterior.

Días antes, habían tenido lugar dos elecciones complementarias, una en O'Higgins y Colchagua, para llenar la vacante que dejara el fallecimiento del senador de la Democracia Cristiana, José Isla, y la otra en Linares para reemplazar al diputado del Partido Nacional, Carlos Avendaño, que se había fugado a Australia. En los dos casos la Democracia Cristiana y el Partido Nacional fueron unidos, apoyándose recíprocamente y eligiendo para ambos cargos los candidatos de la misma filiación política de quienes los habían dejado vacantes. En relación a las elecciones presidenciales los resultados de las tres provincias indicaban que la Unidad Popular subía de 70 mil 920 sufragios a 89 mil 508, pero en comparación a los resultados logrados en las elecciones municipales realizadas en abril del año anterior, la Unidad Popular bajaba su votación del 52,9% al 49,3% en O'Higgins, del 45,1% al 41% en Colchagua y del 46,3% al 41% en Linares.

Los resultados de esas elecciones penaron en el "cónclave" de El Arrayán. Obligaron a considerar, con realismo y responsabilidad, las debilidades y deficiencias en el trabajo de la Unidad Popular, las dificultades de distinto orden que tenía que enfrentar el gobierno y la cuestión de cómo seguir adelante en el cumplimiento del Programa convenido entre todos los partidos de la coalición.

En las conclusiones de esta reunión se empezó por destacar los importantes éxitos logrados por el gobierno en el primer año y tres meses de su gestión. Se destacaron, por ejemplo, los que se alcanzaron en la producción, señalándose

especialmente que en 1971 se produjeron 730 mil toneladas de cobre, 40 mil más que en el anterior, incluyendo la producción de la mediana y de la pequeña minería. Se mencionaron también los rendimientos en la producción de electricidad que fue de 5 mil 790 millones de kw/hora, y en la refinación de petróleo que llegó a 5 millones 600 mil metros cúbicos, en ambos casos cifras nunca antes alcanzadas. En ese mismo 1971 la producción de carbón fue de un millón 400 mil toneladas, un 10% más que en 1970 y la de salitre pasó de 674 mil a 830 mil toneladas.

Después de exponer lo realizado en 1971 en la reunión de El Arrayán se plantearon los principales objetivos para 1972, entre ellos:

-completar rápidamente lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sentar bases más firmes para el desarrollo futuro, todo lo cual exige, en primer término, profundizar el proceso con la incorporación real y masiva de los trabajadores a todos los niveles de decisión,

–culminar el proceso de la reforma agraria mediante "la expropiación de todos los predios agrícolas mayores de 80 hectáreas de riego básicas del modo más rápido posible", emprendiendo esta acción "en estrecho contacto con los campesinos y sus organizaciones, especialmente a través de sus Consejos Comunales y Provinciales", y enmarcarla, "como hasta ahora, en la legislación vigente, no obstante las imperfecciones de la ley y los muchos problemas que plantean los campesinos con respecto a sus limitaciones".

--reafirmar "nuestra política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, que dificultan el proceso de la Reforma Agraria y no resuelven los problemas de los campesinos".

–reiterar "la decisión de que se incorporen al área social o mixta las empresas, cuya lista fue dada a conocer públicamente por el Presidente de la República, sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajadores",

–"asegurar una dirección económica centralizada, que de unidad al conjunto de la política económica mediante orientaciones precisas, con la asesoría de organismos de planificación".

–"vincular directamente la política de producción y distribución al objetivo de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, a cuyo efecto se definirá una canasta de consumo popular, que precise un conjunto de bienes y servicios a los que se asignará primera prioridad para aumentar la producción, asegurar el complemento necesario de las importaciones y concretar un programa de inversiones que amplíe la capacidad de producción de las industrias alimenticia, textil y otras que suministren bienes de consumo popular".

En la reunión de El Arrayán la Unidad Popular convino también en un vasto plan de inversiones, dándole la mayor importancia a la inversión productiva y, dentro de ella, a la que se destinaba a producir bienes de consumo popular y a aumentar el empleo.

Prestó también atención a los pequeños y medianos empresarios, agricultores y comerciantes. La declaración reconoció la complejidad de las relaciones que en ese momento existían con esos sectores sujetos a la "penetración ideológica de la reacción". No obstante, manifestó la disposición del gobierno al entendimiento con ellos, entendimiento a favor del cual "se han dado recientemente pasos significativos". Reiteró la disposición "a suscribir con el comercio detallista un estatuto similar al acordado con la pequeña industria" y declaró que estaban abiertas "las posibilidades de una amplia y permanente participación de los pequeños y medianos empresarios, a través de los canales que les permitan expresar sus problemas, iniciativas y sugerencias y acoger, oportunamente, sus requerimientos para asegurarles sus abastecimientos de materias primas, equipos y créditos". De igual disposición dio muestras la Unidad Popular tocante a los pequeños y medianos agricultores que representaban cerca del 40% de la población agraria del país. "Para ellos –decía la declaración– las líneas fundamentales de la política del Gobierno Popular se reiteran, asegurando la inexpropiabilidad de sus predios, la rápida extensión de los beneficios previsionales que el gobierno les ha otorgado a través de la legislación, el fomento del sistema cooperativo, con asignación de tierras a aquellas cooperativas que no estén en condiciones de producir suficientemente con los recursos de tierras que ahora tienen en sus manos".

Las resoluciones cumplidas y otras no

La Reunión de El Arrayán aprobó el documento *Las Nuevas Tareas Del Gobierno Popular y el Pueblo Chileno*. Se determinó que las tareas más inmediatas eran las siguientes:

1.- Superar el sectarismo

2.- Impulsar la participación de los trabajadores de todos los niveles.

3.- Realizar asambleas locales y regionales de los comités de la Unidad Popular con vistas a una reunión general y nacional.

4.- Profundizar el proceso hacia el socialismo.

5.- Crear garantías para el desarrollo de la pequeña y mediana industria privada y el comercio.

6.- Terminar con la expropiación de los latifundios y preparar un nuevo proyecto de Reforma Agraria, garantizar el aumento de la producción en el sector reformado, terminar con las prácticas de burocratismo y el paternalismo en el campo.

En el encuentro de El Arrayán, tanto o más importantes que las definiciones y tareas antes señaladas, fueron las orientaciones expuestas para el trabajo de masas de la Unidad Popular. De ellas se destacan los siguientes enunciados:

–"La realización de los cambios sociales exige, ante todo, una movilización de masas en torno a los objetivos concretos que se derivan de esas mismas tareas. El retraso y la insuficiencia en el trabajo en esta dirección constituyó uno de los principales temas de crítica y autocrítica en la reunión de la dirección política de la Unidad Popular, de la que surge, en consecuencia, como una de sus conclusiones centrales, la de hacer efectivamente del cumplimiento del Programa una tarea que tiene que tomar en sus manos el pueblo mismo".

En esa oportunidad abordamos también otro problema en torno al cual había opiniones discrepantes en la izquierda. ¿Se puede avanzar en el cumplimiento del Programa actuando dentro de la legalidad? "Los comunistas pensamos –fue nuestra respuesta– que la institucionalidad, la legalidad prevaleciente no nos ayuda. Estimamos que es un freno, que es un obstáculo al desarrollo del proceso revolucionario, pero no un obstáculo insalvable, porque hasta ahora se ha demostrado que se pueden hacer cosas en los marcos de la legalidad y que lo que se puede hacer no depende tanto de la ley como de la lucha, de la organización, de la movilización de las masas, de la correlación de fuerzas en un momento determinado".

En estas cuestiones había una gran coincidencia entre el Partido Comunista y el Presidente de la República. A la vez, eran motivo de reflexión y controversia, especialmente al interior del Partido Socialista.

Como ya hemos visto en el Capítulo 2 de este libro, se cumplió a cabalidad con una de las tareas señaladas en la reunión de El Arrayán, la que dice relación con la expropiación de los latifundios. Pero en el cumplimiento de las otras tareas es poco lo que se avanzó y dos de las más importantes resoluciones allí adoptadas quedaron en el papel. No se superó el sectarismo ni se dieron las garantías para el desarrollo de la pequeña y mediana industria privada y del mediano y pequeño comercio. Por el contrario, el sectarismo siguió su curso y los pequeños y medianos empresarios de la industria y el comercio continuaron siendo torpemente tratados, pasando por encima de la opinión del Presidente Allende y de la mayoría de los partidos de la Unidad Popular.

En cuanto al acuerdo allí adoptado en el sentido de "profundizar el proceso al socialismo" es preciso señalar que fue puro bla-bla. Y esto porque,

objetivamente, no se trataba de edificar el socialismo ni en ese momento, ni antes, ni en el período que siguió en pie el Gobierno Popular. Lo que estaba en primer plano era la necesidad de reunir más y más fuerzas para desbaratar la sedición en marcha y cumplir el Programa, esto es para realizar los cambios que corresponden a una revolución democrática, nacional, antiimperialista y con ello abrir camino al socialismo.

Que era posible avanzar dentro de la legalidad lo prueban las cosas que se hicieron en los marcos de la ley, las que no fueron pocas ni insignificantes a menos que así se califiquen las nacionalizaciones de las empresas del cobre que estaban en poder del capital imperialista o la expropiación de más de 5 millones y medio de hectáreas de tierra para que pasaran a manos de los campesinos.

La amplitud de criterio con miras a superar los escollos y a salir adelante con la causa popular es una cualidad fundamental que se requiere de los políticos revolucionarios y nada tiene que ver con el oportunismo y la renuncia a los principios que han acompañado a no pocos ex dirigentes de izquierda que ayer se caracterizaban por la fraseología revolucionaria y hoy, insertos en el sistema neoliberal, se ven satisfechos y cómodos. Pero, en medio del sectarismo imperante en esos días, aquella amplitud política nos faltó incluso a los comunistas.

6.- El aporte de Salvador Allende.

"Yo les pido a ustedes que comprendan que soy tan solo un hombre, con todas las flaquezas y debilidades que tiene un hombre, y si pude soportar -porque cumplía una tarea –la derrota de ayer, hoy sin soberbia y sin espíritu de venganza, acepto este triunfo que no tiene nada de personal y que se lo debo a la unidad de los partidos populares, a las fuerzas sociales que han estado junto a nosotros.
La victoria alcanzada por ustedes tiene una honda significación nacional. Desde aquí declaro que respetaré los derechos de todos los chilenos. Pero también declaro, y quiero que lo sepan definitivamente, que al llegar a La Moneda y siendo el pueblo gobierno, cumpliremos el compromiso histórico que hemos contraído, de convertir en realidad el Programa de la Unidad Popular". (Del discurso pronunciado desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile horas después del triunfo del 4 de septiembre de 1970.)

Las promesas se cumplen

En pos de la victoria de 1970 y de los profundos cambios que vinieron tras ella, decenas o cientos de miles de hombres y mujeres de todas las edades dieron su tiempo, su capacidad física, su corazón, su inteligencia, todo cuanto tenían. Como parte del pueblo y como dirigentes políticos de distintos niveles, muchos hombres y mujeres desempeñaron, a lo largo de todo el país, un papel de primera importancia. Lo desempeñó, ante todo, Salvador Allende, con singular constancia y empeño, como lo había hecho desde los primeros años 30.

Como Presidente demostró una voluntad indómita en la consecución de ese propósito y en todo lo que significaba cumplir el Programa de la Unidad Popular. Al enemigo lo notificó una y otra vez de que jamás claudicaría y que sería siempre leal al pueblo, incluso al precio de su vida. Y así fue en los hechos.

Chile había conocido y sufrido a no pocos demagogos. Uno de ellos fue Arturo Alessandri, quien decía a menudo, en el curso de las elecciones presidenciales de 1920, que hablaba "con el corazón en la mano", prometiendo gobernar en favor de "mi chusma querida" y en contra de "la canalla dorada," según sus

propias expresiones. Pero, después de ser elegido se olvidó de la chusma, se fue con la canalla, no tuvo corazón y reprimió a sangre y fuego las luchas proletarias en la pampa salitrera y en Punta Arenas. El pueblo había conocido y sufrido también la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo entre los años 27 y 31 y luego una sucesión de golpes y contragolpes de Estado y un nuevo período presidencial de Arturo Alessandri.

En seguida vinieron los Presidentes Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla. Aunque estos tres eran miembros del Partido Radical, gobernaron con distintas orientaciones. Los dos primeros, –más el primero que el segundo– hicieron importantes cosas al servicio del progreso del país y en particular de su industrialización y del desarrollo de la educación. Dejaron, no obstante, una sensación de insatisfacción en el pueblo. No estuvieron a la altura de las esperanzas que despertaron, y el tercero sembró la amargura. Como candidato, González Videla, declaraba a los cuatro vientos que "*no habrá* nada, ninguna fuerza humana ni divina que pueda separarme del pueblo y del Partido Comunista". Aún no había cumplido un año como presidente cuando arremetió contra el pueblo, proscribió al Partido Comunista y arrojó al campo de concentración de Pisagua y a inhóspitos y apartados lugares continentales o insulares, a miles de militantes o simpatizantes comunistas.

De lo vivido en esos años, desde el 20 hasta el 52 inclusive, quedó en el pueblo un profundo sentimiento de desconfianza hacia los políticos burgueses y comenzó a madurar en su conciencia la idea de tomar sus destinos en sus propias manos. El liderazgo de la burguesía entró en cuestionamiento.

Salvador Allende tuvo el mérito de haber captado a plenitud esa experiencia y de haberse propuesto doblar la hoja de las inconsecuencias y traiciones. No cabe duda que él pensó que el pueblo de Chile merecía un Presidente que le fuera leal y honesto, se propuso serlo y lo fue cabalmente.

El diario *El Mercurio* estaba acostumbrado a comportarse como un camaleón cada vez que la ciudadanía elegía un Presidente que no era de sus afectos. Pasaba del dicterio a la alabanza, del improperio al arrumaco, y con ello sacaba sus dividendos. Pretendió hacer lo mismo con Allende. En su comentario político del 8 de noviembre de 1970, cuatro días después que el nuevo gobernante asumiera el mando, dijo muy suelto de cuerpo: "Sea como fuere, la opinión pública no ve en el triunfo del Dr. Allende la buena fortuna de un grupo de partidos sino la victoria de un líder que luchó valientemente para ocupar el cargo que ha conquistado". Y casi sin respirar, agregó lo siguiente: "El carácter mismo de la institución presidencial chilena impulsa a quien recibe tan alta investidura a emanciparse de los intereses partidarios estrechos".

El Mercurio había tenido varias veces éxito en esto de inducir y conducir a políticos de izquierda, comprendidos algunos primeros mandatarios, a olvidarse de sus compromisos con el pueblo. Pero con Allende se pisó la huasca.

Allende provenía de la llamada clase media, de una familia relativamente acomodada, formada en los principios de la Masonería. Su abuelo, Ramón Allende Padín, que se desempeñara como Jefe de Sanidad del Ejército durante la guerra del Pacífico y fuera diputado y senador radical, fue nominado, en 1884, Gran Maestro de la Gran Logia de Chile. Atraído por la personalidad de don Ramón y por los principios humanistas y democráticos de la masonería, Salvador Allende se hizo también masón. Se incorporó a sus filas en noviembre de 1935. En 1965 se dirigió a su "Querido Hermano Luis Olguín, venerable maestro", pidiéndole su retiro de la orden, por la insensibilidad que veía en ella frente al drama social. La Logia rechazó el retiro que solicitara Allende, diciéndole, a raíz de los motivos que el renunciante invocaba, que "la Gran Logia de Chile está en un proceso de revisión, ya que no puede constreñir su existencia a formas exclusivamente tradicionales. (...) y, en cambio, "debe proyectar genuina contemporaneidad y consistencia". Poco antes de las elecciones presidenciales de 1970 fue invitado a un "diálogo entre hermanos", y pasadas esas elecciones, fue recibido en la Gran Logia cuatro días después de ser confirmado en su cargo por el Parlamento. Con el correr de los días el respaldo de la Masonería se diluyó.

No pocos de sus compañeros de Partido trataron de establecer, en varias ocasiones, la incompatibilidad entre ser socialista y masón al mismo tiempo, como ya lo había establecido el Partido Comunista.[21]

Salvador Allende nació en Valparaíso el 26 de junio de 1908. Cursó la Escuela primaria en Tacna, ciudad que entonces estaba bajo la jurisdicción de

---

[21] El PC en su IX Pleno, celebrado a mediados de 1940, estableció la incompatibilidad entre militar en sus filas y ser a la vez miembro de la Masonería. El autor de estas líneas, que en esos días se encontraba temporalmente suspendido de sus funciones de Jefe de Crónica del vespertino *Frente Popular* a raíz de un chiste que apareció en una de sus páginas y se estimó antiestalinista, recuerda que la resolución del Pleno tuvo mucho revuelo y que ella se explicaba como una medida necesaria al descubrirse que habían hecho mella en el Partido influencias extrañas que provenían de la masonería y tendían a hacerlo marchar a la saga de la burguesía. No recuerda que esa incompatibilidad haya sido incorporada a los estatutos del Partido por alguno de sus Congresos. Tampoco ha dispuesto de materiales impresos de aquella época con más antecedentes sobre el tema. Puede agregar que en los estatutos vigentes del Partido se establece solamente que "el ingreso a sus filas está vedado a aquellos que sustentan ideologías fascistas o racistas" y que en él "militan personas creyentes y no creyentes". Otros partidos comunistas no se han pronunciado sobre el tema. El Partido Comunista de Francia, en cambio, cuando Waldeck Rochet era su Secretario General, desechó expresamente establecer la incompatibilidad entre ser militante comunista y masón.

Chile y donde su padre ejercía la profesión de abogado. Hizo la secundaria en el Instituto Nacional de Santiago y en el liceo Eduardo de la Barra de Valparaíso.

El poeta Óscar Aguilera, buscador y descubridor de excentricidades y curiosidades, sabedor que estaba escribiendo este libro, me hizo llegar una poesía escrita por Salvador Allende, cuando aún no cumplía 20 años. Apareció en la revista *Viña del Mar* Año II Nº19 de mayo-junio de 1929. Va a continuación como primicia, con la primacía que la "j" tenía en ese tiempo.

Angustia

Calma un instante tus angustias locas
Pobre corazón mío,
Si sientes que te oprime el hondo frío
De las nieves eternas y las rocas,
Pronto a este invierno seguirá el Estío.
Todo tiene en la vida
Amargas horas de implacable duelo:
Las tiene el ave que, en la selva, herida
Arrastra su nidal de rama en rama,
Las flores que hacia el suelo
Pálidas doblan sus marchitas hojas,
La virjen infeliz que sufre y ama
Y devora en silencio sus congojas,
La desolada madre que en pedazos
Siente su pobre corazón partido,
Al ver que para siempre se ha dormido
El hijo de su amor entre sus brazos,
Y hasta la mar inmensa que batalla
Con su dolor a solas
Y, sollozando, vierte por la playa
Cual torrentes de lágrimas sus olas.
Pero todo no es duelo ni quebranto,
Ni jamás es eterna la agonía,
Y surje a veces en el placer del llanto,
Como tras de la noche surje el día.
No sufras, corazón. Calma un instante
Esa angustia letal que te domina,
Y ten valor en la áspera jornada,
Tu alegre despertar no está distante,
Ya el oscuro horizonte se ilumina
Con todo el resplandor de una Albo
rada!

Como estudiante de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile se destacó ya en 1928 en la lucha en contra de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, quien, el año anterior, se había hecho elegir Presidente de la República. En 1930 fue elegido Vicepresidente de la Federación de Estudiantes y luego expulsado de la Universidad, a la cual se reincorporó tras la caída del dictador, acaecida el 26 de julio de 1931. Cuando se fundó el Partido Socialista, el 19 de abril de 1933, Salvador Allende, recién egresado de la Universidad como médico cirujano, se incorporó a sus filas y fue elegido Secretario Regional de Valparaíso. En 1935 fue relegado a Caldera por el gobierno de Arturo Alessandri Palma. En 1937 fue elegido diputado por Valparaíso, cargo al cual renunció al año siguiente

para desempeñarse como ministro de Salubridad del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Tenía entonces 30 años de edad.

Fue militante socialista desde la fundación de su Partido. En cuatro períodos continuos ocupó una banca en la Cámara Alta. En 1945 fue elegido Senador por las provincias de Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aysén y Magallanes; en 1953 por Tarapacá y Antofagasta, en 1961 por Valparaíso y Aconcagua, y en 1969, de nuevo, por las provincias australes.

Reseño todo esto para anotar un hecho que bien destacó el Cardenal Raúl Silva Henríquez pocos días después de la elección presidencial del 4 de septiembre en 1970. En tal ocasión, el insigne prelado, luego de señalar que las relaciones entre la Iglesia y los dirigentes de la Unidad Popular eran buenas a pesar de no existir coincidencias en muchos puntos de vista, caracterizó a Salvador Allende, como un político que en el transcurso de toda su vida luchó por sus ideales hasta que obtuvo la posibilidad de hacerlo realidad.

Era un hombre muy sensible. Se conmovía profundamente ante los sufrimientos de la gente, en especial de los más necesitados. Siempre tuvo una preocupación preferente por la madre y el niño. Desde la tribuna explicaba, de manera sencilla, cómo la desnutrición, las carencias en el consumo de alimentos proteicos en la madre embarazada o en el niño de la edad más tierna, influían en el desarrollo físico y en la capacidad mental del ser humano para toda la vida. Textualmente decía: "si un niño, en los primeros ocho meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla. ¡Y cuantas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos –nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre– y no lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes y porque ellas se sub-alimentan! Como madres están castigadas en sus propias vidas, y lo que es más injusto, en la vida de sus propios hijos".[22]

De allí que su gobierno tuviera especial preocupación por la mujer y le diera medio litro de leche a cada niño chileno. Este no era un acto de demagogia, como lo calificaron algunos. Era un acto de justicia que salía al encuentro de una necesidad vital de la generación naciente. Un hermoso afiche de aquel tiempo decía "La felicidad de Chile comienza por los niños".

Como la generalidad de los dirigentes socialistas que surgieron en la década del 30, Salvador Allende tuvo una formación ideológica ecléctica. Nunca se declaró marxista-leninista, ni siquiera cuando lo hizo su Partido. Solía

---

[22] Palabras de Allende pronunciadas el 21 de diciembre de 1972 en el Auditorio del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, México.

decir: "Yo no soy un teórico". Pero fue un hombre de convicciones y posiciones sólidas. Sus propios compañeros le hicieron algunas desconocidas. En el congreso que el Partido Socialista realizó en Chillán en 1967, quiso expresar su opinión contraria a la línea que allí terminó aprobándose, opuesta a todo entendimiento con la Democracia Cristiana y el radicalismo. No lo dejaron hablar. Más aún, lo abuchearon. No obstante, se mantuvo enhiesto.

Una vez recordó sus discrepancias con su propio Partido. Ellas –precisó– "siempre quedaron dentro de la discusión interna. Muchas veces fui el único, como ocurrió en Linares y en Talca, donde sostuve la necesidad de la Unidad Popular. Pero jamás hice un trabajo en contra de la línea del Partido".

Una relación de amistad permanente tuvo Salvador Allende con Manuel Mandujano, Carlos Briones, Hernán Santa Cruz, José Tohá, Hugo Miranda, Arturo Jirón y sus más cercanos colaboradores, su secretario Osvaldo Puccio y los periodistas Carlos Jonquera y Augusto Olivares Becerra, quien fuera el primero en morir en La Moneda, quitándose la vida con sus propias manos. El aprecio y la amistad que compartía con algunos dirigentes de su colectividad, como en el caso de Carlos Altamirano, solían mantenerse por sobre las diferencias políticas que tenía con ellos, enfrentando a veces la difícil situación de actuar sin afectar ni uno ni otro de esos valores. Igual cosa solía ocurrir con políticos de otros partidos, como pasó con Eduardo Frei Montalva, su vecino en Algarrobo, hasta que esta amistad terminó cuando el ex Presidente demócrata cristiano dio muestras de disgusto por los resultados de las elecciones, ante el temor de pasar a la Historia como el Kerenski chileno. [23]

Tenía un concepto de la hombría y del honor propio de los antiguos caballeros. El 6 de agosto de 1952 se batió a duelo con su amigo Raúl Rettig por palabras más o palabras menos en los postreros días del último gobierno radical, cuando los correligionarios de Rettig eran objeto del "ninguneo" y se les "ladroneaba" a cada rato. El lance que tuvo lugar en una chacra de Macul, demostró la mala puntería de uno y otro. Pocos días después de las elecciones presidenciales de septiembre de ese año los duelistas volvieron a ser amigos. Según cuenta Carlos Jorquera, ambos fueron invitados a cenar por una amiga común, previamente informados de que se encontrarían de nuevo, esta vez para compartir la misma mesa y dejar las cosas como si nada hubiese pasado.

Corajudo, como era, le tenía pavor a los temblores. Cuando se produjo el terremoto de Chillán, a las 11 y media de la noche de enero de 1939, salió espantado

---

[23] Aleksandr Kerenski fue el moderado político socialista-revolucionario ruso que, a la caída del zarismo, presidió el gobierno provisional a comienzos de 1917, después del cual vino el gobierno dirigido por los bolcheviques.

del Templo masónico donde se hallaba. Y en esas circunstancias se encontró por primera vez con una hermosa joven, Tencha Bussi, que salía asustada del cine Santa Lucía. Allí, frente al cerro Huelén, empezó el romance que los llevaría al matrimonio. Personalmente fui testigo del miedo que Allende le tenía a los temblores. Cuando se produjo el terremoto de La Ligua, en junio de 1971, Volodia Teitelboim y yo comíamos con él en La Moneda y apenas se sintió el movimiento sísmico, arrancó despavorido. Al rato se reanudó la cena y Allende seguía temblando.

Vivía su vida y amaba la vida. Pero la imagen de hombre corrupto, bebedor y mujeriego sempiterno que de él pretendieron pintar sus más tenaces adversarios, no correspondía a los hechos. Su consecuencia y grandeza como político están y quedarán para siempre grabadas en la historia. Vestía bien. Era atento, cordial, persona de buen humor y lo más importante de todo, leal y consecuente con lo que decía.

Los actores principales serían los trabajadores

Allende se puso al servicio de los trabajadores cuando estos entraron a cuestionar el liderazgo de la burguesía, giraron más hacía la izquierda. Asumió esta posición, jugándose, con decisión y consecuencia por la unidad de la izquierda a partir del entendimiento socialista-comunista.

"Nuestra democracia será más real cuanto más popular sea, cuanto más esté dirigida por el pueblo", expresó en el Estadio Nacional, en su discurso del 4 de noviembre de 1970. Y en el mitin del 1° de mayo de 1971 les dijo a los trabajadores: "Fortalecer el poder popular y consolidarlo significa hacer más poderosos los sindicatos, con una nueva conciencia, la conciencia de que son un pilar fundamental del gobierno, pero que no están dominados por él, sino que, concientemente, participan, apoyan, ayudan y critican su acción. Fortalecer el poder popular significa organizar la movilización del pueblo, pero no tan sólo para los eventos electorales; movilizarlo diariamente porque el enfrentamiento de clase se produce todos los días, a todas horas, minuto a minuto y hay que tener conciencia de ello".

Ahondó sobre el tema en el plenario de Federaciones realizado en el Edificio Gabriela Mistral, hoy Diego Portales, el 25 de julio de 1973. Manifestó entonces: "Siempre he tenido conciencia de la necesidad de que la CUT participe en las tareas constructoras de la nueva sociedad, teniendo el más absoluto respeto a su independencia, sabiendo que jamás la CUT será un instrumento

obsecuente al gobierno. Yo respeto demasiado a los trabajadores para siquiera aceptar que alguien diga o piense algo semejante".

En tanto asumió la Presidencia de la República se dirigió a los trabajadores para pedirles que no lo llamaran Su Excelencia o Señor Presidente, sino "Compañero Presidente". Diría también, con alguna frecuencia, para que comprendieran sus propios deberes todos los que querían un Chile mejor, que "La tarea de Chile no es la tarea de un hombre, ni de un grupo de partidos. La tarea es del pueblo organizado, disciplinado y conciente". Repetiría a menudo "A la lealtad de ustedes, responderé con la lealtad de un gobernante del pueblo, con la lealtad del Compañero Presidente". Y afirmaría muchas veces: "Yo no soy un caudillo ni un Mesías, ni un hombre providencial; soy un combatiente del pueblo que comprende que la unidad lleva en si la posibilidad del triunfo del pueblo y no de un hombre; soy un militante del socialismo, un servidor del pueblo un hombre que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado". Como tal se comportó desde el primer hasta el último día de su vida política.

Su pensamiento, profundamente humanista se reflejaba también en frases, palabras y sentencias que llegaban al corazón de la gente, cuando afirmara, por ejemplo, en su primer mensaje al Congreso Pleno, con la más intima convicción que: "Atender a las reivindicaciones populares, es la única forma de contribuir de hecho a la solución de los grandes problemas humanos, porque ningún valor universal merece este nombre sino es reducible a lo nacional, a lo regional y hasta las condiciones locales de existencia de cada familia".

Buscaba, por sobre todo, que los desamparados, los humillados, los pobres pudieran tener una vida digna. Lo conmovía el dolor de la gente y ese dolor le daba más fuerza para luchar por un mundo mejor. En junio o julio de 1970 se dirigió a las poblaciones "El Esfuerzo" y "El Ejemplo" de Las Condes, situadas en la ribera norte del Mapocho, para ser proclamado como candidato a Presidente. Cuando se iba a iniciar el acto se oyó la voz de un hombre que pedía auxilio a todo pulmón porque su mujer estaba pariendo sin ayuda de nadie. Sin pensarlo dos veces, Allende se dirigió al lugar, dispuso que se trajera agua caliente, toallas y sábanas limpias, y aunque no era obstetra, se las arregló para ayudarla a tener su cría. La proclamación no se llevó a cabo porque en ese trajín se pasó la hora y empezó a llover a cántaros. Se subió al auto conmovido por la miseria que había presenciado en el hogar de la parturienta y el barro que circundaba esa casa como todas las demás viviendas del lugar. Cuando rompió su silencio –me cuenta Miguel Lawner que viajaba con él en el mismo coche– expresó las siguientes palabras que le salieron del alma "Aunque solo fuera por sacar a esta gente del barro y el abandono en que viven, yo debería ser elegido Presidente". Propósitos tan nobles como este, motivaban sus actos de político y gobernante y, junto a la conciencia del

papel que personalmente jugaba en la historia de Chile, le daban fuerza para llevar adelante la revolución chilena.

Sembró la semilla de los grandes cambios que necesitaba el país, como la nacionalización del cobre y la reforma agraria. No fue el único. Los partidos de izquierda, ante todo el Partido Comunista, hicieron lo propio. Pero, como dirigente político, como personaje histórico, nadie fue, después de Recabarren, un tan grande educador social. Las masas acogieron su palabra porque era de lenguaje claro, directo y sencillo. Hablaba de los asuntos que le interesaban a la gente, saliendo al encuentro de las cosas en que el pueblo pensaba.

Cuatro veces candidato a Presidente, recorrió el país de norte a sur y de mar a cordillera, haciéndose presente, desde la mañana a la medianoche, hasta en los más apartados rincones de la Patria. Dominaba una técnica yoga que le permitía superar el cansancio concentrándose en si mismo durante diez minutos y eso le bastaba para recuperarse y quedar como tuna. Más de una vez, lo vi hacer este ejercicio mientras en sus campañas electorales íbamos de un pueblo a otro pueblo, de una aldea a otra aldea, y al despertar reiniciaba la conversación generalmente con alguna humorada. El humor, humor de buena ley, lo acompañó toda la vida.

No lo amilanaron las derrotas. Jamás cambió en función de los vientos que corrían. Fue un gran visionario. Cuando en 1952, como candidato del Frente del Pueblo sacó el 5% de los sufragios, sólo 52 mil votos, levantó la vista y tres días después de las elecciones dijo en el Senado "nunca pensamos triunfar, pero esos 52 mil sufragios constituyen la expresión de otras tantas conciencias limpias, que sabían que votaban por un programa, por una idea, por algo que estaba apuntando hacia el futuro". Seis años más tarde, en 1958, como candidato del Frente de Acción Popular obtuvo el 28,5% de los sufragios, y entonces por cadena radial expresó que las fuerzas que representaba habían salido victoriosas "porque hoy son más fuertes que ayer, porque hemos penetrado en las conciencias con nuestro pensamiento renovador". En la tercera ocasión en que fue candidato a Presidente, también por el Frente de Acción Popular, obtuvo el 38,6%. Y en la noche del 4 de septiembre de 1970, plenamente posesionado de la responsabilidad que él y todos asumíamos, dijo desde los balcones de la Federación de Estudiante de Chile: "Si la victoria no era fácil, más difícil será consolidar nuestro triunfo y construir la nueva sociedad".

Fue un político que brilló más allá de nuestras fronteras, un hombre poseedor de una profunda sensibilidad social y de firme consecuencia revolucionaria, un hombre de personalidad fuerte, pero no un mandamás autoritario. Tenía autoridad, pero no la usaba para escudarse en sus prerrogativas, imponer criterios personales y apartarse de sus compromisos que, por lo demás, formaban parte de sus propias convicciones, y si una que otra vez tomó decisiones individuales fue

en circunstancias en que faltaba un criterio común en las fuerzas que lo apoyaban y había que adoptar decisiones.

Defensor de los intereses de Chile y del pueblo

Para la campaña presidencial de 1958, hubo gente de derecha que trató de presentarlo como un potentado, con fastuosa casa y lujoso yate en Algarrobo. Tenía, efectivamente casa en ese balneario, una modesta casa al lado de otra, igualmente modesta, de Eduardo Frei Montalva y, era dueño de un yate que, en respuesta a los infundios urdidos en su contra, lo trajo a Santiago y lo exhibió en una pileta que entonces existía en el frente sur de La Moneda. El yate más bien parecía un bote a vela.

Clodomiro Almeyda dijo en un artículo escrito en 1983:"Confieso que en más de una ocasión pensé que el innegable sentido de la realidad que percibí en Allende por la vía del pragmatismo podía conducirlo a posturas oportunistas, pero cuando junto a él y como su inmediato colaborador desde el cargo de ministro de RREE, estuve en condiciones de vivir y ya no sólo de suponer su conducta política, pude también constatar y dar fe que Allende en todo momento actuó en función de su compromiso con el pueblo y el socialismo".

Agregó Almeyda estas certeras palabras: "aunque Allende siempre quiso y logró intervenir en la coyuntura, nunca lo hizo perdiendo de vista el objetivo final, sino adecuando su propuesta política a la realidad concreta, pensando siempre – intuitivamente y con razón–, que el proceso político se da en el terreno de la fuerza y no en el de las ideas, lo que no significa menospreciar a estas últimas, sino valorarlas en cuanto esclarecen y no en cuanto confunden, en cuanto movilizan y no en cuanto sumen en la perplejidad, en el desconcierto y en el inmovilismo. Siempre tuvo claro que la política era una cuestión de poder, y no de tener la razón. De ahí que muchas veces su aproximación a las cuestiones políticas divergiera y se distanciara de las políticas ideologizantes, cuya relación con lo concreto se empobrece y distorsiona, porque no son capaces de captar lo particular, de descubrir en la apariencia la manifestación de lo esencial, y no pueden así encontrar en la vida y por los caminos de la vida, la vía posible para transformarla y convertir en los hechos la idea en realidad".[24]

El periodista francés Jean-Claude Buhrer-Solal destaca uno de sus rasgos más valiosos: "A diferencia –dice– de otros hombres políticos de su generación,

---

24 *Cuadernos de Orientación Socialista* N°16, editado en Berlín.

la manera de ver de Allende se había radicalizado con los años. La guerra fría y sobre todo la revolución cubana han influido mucho en esta evolución. También sus viajes a través del mundo y el fruto de sus contactos con otras realidades, otras concepciones, otras perspectivas contribuyeron a madurar su propia visión. Sin embargo, a diferencia de la mayor parte de los otros líderes de los movimientos populares latinoamericanos, supo evitar a lo largo de su carrera el escollo del populismo". [25]

Constructor de la vía chilena al socialismo

Allende fue un político realista y responsable, convencido de la causa que abrazaba y del llamado camino pacífico que seguía el movimiento popular de acuerdo a las condiciones que se daban. Pero no estaba cerrado a considerar y recorrer otras vías.

Ya conté en mi libro de memorias De lo vivido y lo peleado, que al leer el artículo que publiqué en *El Siglo* en marzo de 1964, titulado "Aseguremos El Camino Pacífico", me dijo: "Yo debí haberlo escrito". Y en ese artículo sostenía en conclusión: "Que quede claro, entonces, nosotros no buscamos la violencia. No la queremos y en toda circunstancia haremos lo posible por llevar o hacer retornar los acontecimientos a la vía menos dolorosa. Pero que también quede en claro que el pueblo está dispuesto a luchar en todos los terrenos".

Tal era también su pensamiento, como lo expresara en una carta abierta dirigida a *El Mercurio*, en la cual dijo: "A pesar de todas sus carencias Chile es, indiscutiblemente, uno de los países de América Latina donde las luchas cívicas tienen todavía contenido, pero donde la posibilidad de conquistar el poder por las urnas se restringe siempre más para las masas populares. Yo espero y deseo, como chileno, que nos libremos de la violencia. (...) Sin embargo, cuando se sabe lo que son las "fronteras ideológicas", cuando se conoce el derecho que se toman los norteamericanos de invadir Santo Domingo y lo que ellos han hecho en Brasil, se puede tener serias dudas en cuanto a su respeto de la voluntad del pueblo. He aquí por qué yo continúo luchando y repito que no deseamos la violencia; pero la violencia revolucionaria es a veces la única respuesta a vuestra violencia, a la violencia reaccionaria".[26]

---

[25] *Allende, Un itineraire sans dètours*, de Jean-Claude Buhrer-Solal, pág. 25, editado por les presses de L'Université Québec.

[26] *Allende, Un itineraire sans dètours*, Jean-Claude Bhurer-Solal, páginas 48-49 Ediatdo por Les presses de L'Université dù Quebec.

No era, pues, un político a quien le tiritaran las piernas ante la posibilidad de que se impusiera otro camino, aunque se esforzó hasta los últimos días de su gobierno por una salida pacífica al agudo conflicto social que amenazaba desembocar en un derramamiento de sangre, una guerra civil u otra forma de confrontación armada.

Se formó como hombre y como político en las concepciones más idealistas sobre la libertad, como aquella que se encuentra en esa conocida, atractiva y sonora sentencia de Voltaire –nunca respetada por la burguesía en el poder– que dice así: "estoy en completo desacuerdo con tu opinión, pero daría gustoso mi vida por defender tu derecho a expresarla".

Premunido de tales concepciones, en Allende solían chocar su firme propósito de llevar a cabo la revolución en democracia y libertad, con su decidido deseo de no permitir que la reacción retomara el poder para implantar un régimen contrario a la democracia.

Algunos analistas y protagonistas le atribuyen al Presidente Allende la principal responsabilidad por no haber podido su gobierno resolver esa contradicción, particularmente en aquellos momentos en que la situación política jugaba a su favor y se podía y debía aplicar medidas coercitivas contra los promotores de la sedición. Si, se dieron esos momentos y no los aprovechó. Sus concepciones idealistas fueron entonces más fuertes que sus deseos de contener y derrotar la sedición. Y cuando estuvo dispuesto a dejarlas de lado y sumar a la razón la fuerza como dice el escudo nacional, ya la situación se había deteriorado de tal manera que solo cabía optar por una salida mediatizada para lo cual no tenía respaldo en su propio partido.

Corresponde reconocer que no fue menor la responsabilidad de la Unidad Popular, pues se podría decir que las limitaciones del Presidente, derivadas de su propia formación, no eran el único obstáculo. Más de una vez se mostró dispuesto a actuar como revolucionario consecuente. En la Asamblea Nacional de la Unidad Popular realizada del 8 al 10 de enero de 1971, dijo: "Hasta ahora hemos actuado dentro de los marcos de la Ley, pero si emplean la violencia, si pasan de la conspiración a la acción, responderemos a la violencia reaccionaria con la violencia revolucionaria". Estas no fueron palabras impensadas ni ocasionales, pues muchas veces repitió esta advertencia. El obstáculo principal estaba en la Unidad Popular que ya había perdido su cohesión y en cuyo seno se habían conformado dos corrientes. Una, privilegiaba la lucha y la movilización de las masas populares en apoyo del gobierno, en pro del estricto cumplimiento del programa y de la búsqueda de acuerdos con la Democracia Cristiana en torno a aquellas materias que requerían la aprobación del Parlamento. La otra, se declaraba partidaria de "avanzar sin transar", de echarle para adelante de

cualquier manera, prescindiendo de la legalidad que el gobierno y los partidos de izquierda se habían comprometido a respetar, y fuera de la cual, en las condiciones prevalecientes, no había ninguna posibilidad de ganar fuerzas, vencer las dificultades y avanzar.

Salvador Allende y los partidos políticos

Aunque todos los Presidentes que le antecedieron habían tenido, sin excepción el patrocinio de partidos y sin estos, no habrían sido tales, todos, cual más cual menos, salvo Salvador Allende, se habían escudado en la letra de la Constitución de 1925. Hicieron uso de sus facultades, tratando de imponer sus criterios personales, siempre dentro del marco de intereses de las clases dominantes, creyendo y haciendo creer que su palabra es la ley, como dice la canción mexicana.

Allende tenía autoridad, defendía y usaba sus prerrogativas. Exponía sus puntos de vista, pero también escuchaba y consideraba las opiniones de los demás. Más aún, las requería. Se reunía frecuentemente con los partidos de la Unidad Popular. Además de los encuentros permanentes que tenía con ellos, efectuaba reuniones con los partidos de la coalición, algunas de varios días de duración, como las efectuadas en Lo Curro y en El Arrayán, donde se examinaron los problemas con detención, profundidad y espíritu crítico.

El poder y la autoridad que tenía Salvador Allende emanaban no sólo de las prerrogativas constitucionales, sino de la firme voluntad de hacer las cosas, que era una de sus características más relevantes y del apoyo que le daban los partidos comunista y socialista cuando funcionaba la llamada "mesa de tres patas", es decir, cuando se reunían expresamente el Presidente y los dos partidos mencionados, por iniciativa de una u otra parte.

A la vez, debemos reconocer el hecho de que no siempre operó la mesa ya nombrada y el Presidente no usó sus prerrogativas para remover de las Fuerzas Armadas aquellos altos mandos -coroneles, generales, almirantes- que vulnerando la constitución actuaban coludidos con la derecha en busca del derrumbe del gobierno.

En esta omisión jugaron varios factores. Por una parte, al asumir el cargo de Presidente no tenía amigos en las instituciones de la Defensa, carecía del conocimiento necesario de los jefes militares como para remover y reemplazar a algunos y optó por aconsejarse de unos pocos, del general Carlos Prats ante todo, incluso para designar a Pinochet en su reemplazo. Por su lado, la Unidad

Popular, cuyos partidos jamás se preocuparon de los problemas relativos a las Fuerzas Armadas, con excepción del Partido Socialista en los años en que Raúl Ampuero fue su Secretario general, también carecían, tanto o más que Allende, del conocimiento que debían haber tenido del mundo militar. Por ello, socialistas y comunistas hablamos de este problema con el Presidente solo en contadas ocasiones, salvo en los últimos meses de su gobierno cuando a este respecto era poco o nada lo que se podía hacer.

No contradigo lo anterior si expreso que, sin embargo, comparto el pensamiento de Clodomiro Almeyda quien, en el segundo de sus "Tres ensayos sobre las Fuerzas Armadas chilenas", escribió: "Hubo entre otras, dos oportunidades en que a mi juicio se pudo haber alterado fundamentalmente los mandos, con un mínimo riesgo de provocar una reacción militar subversiva".

"Desde luego, al comienzo, casi inmediatamente o inmediatamente después de haber accedido al gobierno el Presidente Allende. En esa ocasión, investigando hacia el interior de la FF.AA., a propósito del asesinato del general Schneider, se pudo constatar que había numerosos oficiales de altos rangos comprometidos con la conspiración contrarrevolucionaria; y entre ellos nada menos que el jefe de la Guarnición de Santiago.

"Esta situación, producida después del ascenso del presidente Allende al gobierno, y contando en consecuencia éste con gran legitimidad y un gran apoyo popular, creaba una coyuntura política excepcionalmente favorable para haber intentado una modificación parcial, pero importante de los mandos, disminuyendo así desde el comienzo la peligrosidad contrarrevolucionaria del Ejército.

"Luego, a principios de 1971, una vez producido el triunfo electoral de la Unidad Popular en las elecciones municipales, en que se alcanzó más del 51% de los votos, se dio un momento particularmente propicio para haber intentado modificar nuevamente la composición de los mandos, alejando de las filas a los elementos más reticentes o adversos al proyecto político de la Unidad Popular, profundizando los cambios iniciales.

"Es evidente por lo demás, que este proceso de modificación de los mandos, inserto dentro de un plan racional, no tenía por qué haberse realizado de golpe en un solo acto. Estuvimos tres años en el gobierno, siendo este lapso más que suficiente para haber planteado toda una estrategia destinada a maximizar la lealtad de las FF.AA. hacia el gobierno y a minimizar las posibilidades de insubordinación por parte de aquellos oficiales que por una u otra razón era presumible que tuvieran una actitud antigubernamental[27]".

---

27 *Tres ensayos sobre las Fuerzas Armadas chilenas*, Clodomiro Almeyda, Ediciones Arauco, pág. 33, año 1981.

En las giras que realizó por todo el territorio nacional en sus cuatro campañas como candidato a Presidente, se preocupaba de que se oyera la voz de los representantes de todos los partidos que lo apoyaban, independientemente de su tamaño. Comprendía muy bien la necesidad, la importancia, el valor de los aliados, por pequeños que fuesen algunos. Compartíamos la idea de que no había aliados chicos. A todos ellos, independientemente de su tamaño, les prestaba la debida atención. Tampoco echaba a todos los contrarios en el mismo saco. Hacía distingos entre enemigos y adversarios. Con estos últimos también cabían entendimientos aunque fuesen ocasionales. Pero nunca buscó el consenso universal que conduce a la conciliación y al empantanamiento, como ha ocurrido durante los gobiernos posteriores a la dictadura.

Estimaba vital, asunto clave, la alianza entre socialistas y comunistas. A la vez era quien más se preocupaba de que todos los partidos de la Unidad Popular hicieran valer sus opiniones, que él escuchaba y consideraba con atención e interés. Tenía que hacerlo, respondía a una lógica a la que el adhería. Siempre se distinguió por su amplitud de criterio en cuanto a las fuerzas sociales y políticas que se debían agrupar como coalición democrática. Dijo en el Estadio Nacional el 5 de noviembre de 1970: "sostuve y reitero que en la unidad de los partidos que integran este movimiento, tan nuestro, tan profundamente nacional y patriótico, está la fortaleza granítica para arrasar con las dificultades artificiales que quieran imponernos y avanzar en el camino, sin desmayo, a fin de hacer posible una vida mejor para todos los chilenos". Fue un socialista unitario, abierto al acuerdo entre todas las fuerzas democráticas, sin excluir a priori a ninguna persona o grupo.

Con vista a las elecciones presidenciales de 1970 hizo cuanto pudo para que el Frente de Acción Popular abriera sus puertas al Partido Radical y este se reencontrara con la izquierda, cuestión que se resolvió favorablemente y fue fundamental, decisiva, para el triunfo de la Unidad Popular. En 1971 lamentó públicamente la división del Partido Radical y con éxito transitorio se esforzó para que el sector que surgía de esa división con el nombre de Partido Radical Independiente (PRI), continuara formando parte del gobierno.

Asimismo, su amplitud de criterio había quedado de manifiesto ya después de la elección presidencial. Bregando decididamente en favor de acuerdos con la Democracia Cristiana, con miras a que ella reconociera la victoria del 4 de septiembre y aprobara la nacionalización del cobre y demás cambios que requerían sanción legislativa.

Salvador Allende y el Partido Comunista

A través de tantos años de lucha por los intereses de los trabajadores se estableció entre Allende y el Partido Comunista una sólida amistad. Nuestras relaciones fueron siempre francas, cordiales y respetuosas. No nos habíamos formado en la misma escuela ideológica, no teníamos las mismas concepciones y no siempre coincidimos en todo. Generalmente estábamos de acuerdo, pero a veces, disentimos. Cuando se presentó alguna diferencia de opinión, simplemente conversamos, discutimos fraternalmente, en busca de un criterio común.

Poco antes que la Unidad Popular llegara a acuerdo para que él fuese el candidato de todos los partidos de izquierda, los comunistas fuimos particularmente francos en una conversación que Volodia Teitelboim y yo sostuvimos con él en mi casa. En esos momentos se podía observar que Allende caía en sus discursos en repeticiones que ya eran más o menos conocidas. El movimiento popular había crecido más que él. Esta era también la opinión que tenían y expresaban en conversaciones privadas no pocos dirigentes de los otros partidos de la Unidad Popular. Se lo dijimos francamente. Su primera reacción fue la siguiente: "Si ustedes –nos dijo– consideran que yo no debo ser candidato, si no tengo la confianza de ustedes y la confianza de mi Partido y las demás colectividades, simplemente designen a otro". Le respondimos que nuestras observaciones no estaban dirigidas a bloquear su candidatura, de ningún modo. Le recordamos que siempre habíamos mantenido relaciones de amistad, relaciones políticas, desde hace un largo tiempo, que lo apreciábamos sinceramente y que si era designado candidato, el Partido Comunista de Chile estaba dispuesto a trabajar por su victoria con toda decisión para que esta vez fuera elegido.

Hay que decir que Allende demostró una gran capacidad de superación, en la campaña primero, y después como Presidente de la República. Como candidato y como Presidente estuvo a la altura de la responsabilidad que asumía.

Durante su gobierno mantuvimos también la misma relación de mutua franqueza y comprensión. En otro momento le expresamos, por ejemplo, que en nuestra opinión el gobierno debía actuar con más energía para combatir el sabotaje y los atentados criminales de los grupos terroristas. Él, de su parte, nos hacía presente, tanto a nosotros como a los demás partidos de la Unidad Popular, las debilidades que solía observar respecto a uno que otro de los problemas y situaciones políticas que nos correspondía atender y a menudo enfrentar. Pero es un hecho indiscutible que entre Allende y el Partido Comunista existió una gran coincidencia en la línea gruesa, especialmente en cuanto al carácter de la revolución, a sus etapas, a la política de alianzas, a la combinación de la presión de

masas desde abajo con la actividad del gobierno desde arriba para llevar a la práctica el programa que teníamos el deber de cumplir.

El Partido Comunista fue la única colectividad política que apoyó a Salvador Allende en las cuatro elecciones en que fue candidato a Presidente de la República, en los años 1952, 1958, 1964 y 1970.

Nunca olvidamos la posición consecuentemente democrática que asumió Allende durante el Gobierno de Gabriel González en defensa del Partido Comunista y en contra de la Ley Maldita. Con la claridad y energía que lo caracterizaban, el 18 de junio de 1948 levantó su voz en el Senado para denunciar el carácter antidemocrático de la llamada Ley de Defensa de la Democracia y defender el derecho del partido de los comunistas a la vida legal, como los demás partidos. "Lucharemos como socialistas, como siempre lo hemos hecho, con honradez y con cariño, con emoción chilena, por el engrandecimiento y el progreso de nuestra patria. Lucharemos dentro de los cauces democráticos y combatiremos tenazmente esta ley que, tarde o temprano, tendrá que derogarse, para que vuelva la democracia a imperar en nuestra tierra querida". Tales fueron las palabras finales de ese discurso.

Nuestra amistad con Allende se hizo más estrecha, sólida y de todos los días, a partir de 1952, cuando entramos a compartir un mismo proyecto político en función de los cambios que el país necesitaba.

En los comienzos de ese año, un sector socialista, con el nombre de Partido Socialista Popular, pactó con el Partido Agrario Laborista y se matriculó con la candidatura de Carlos Ibáñez del Campo. Otro sector, minoritario, se constituyó en Partido Socialista de Chile, sostuvo que se debía enfrentar la elección de Presidente con un programa y un candidato definidamente anti-imperialista y anti-oligárquico, se unió al Partido Comunista y demás fuerzas de izquierda, procediéndose a formar el Frente del Pueblo que proclamó la candidatura de Salvador Allende a la Presidencia de la República.

Al año siguiente, en marzo de 1953, terminaba el período senatorial de Allende y también el de Elías Lafertte. Este último representaba, en la llamada Cámara Alta, a los trabajadores de Tarapacá y Antofagasta que lo habían elegido senador en dos ocasiones, en 1937 y en 1945. En esa agrupación senatorial el Partido Comunista fue por muchos años una gran fuerza política, a tal punto que la primera vez que Elías Lafertte fue elegido senador, ni siquiera se encontraba en Chile pues cumplía una condena de destierro en México, ello durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma. En otras dos oportunidades, en 1961 y en 1969, el Partido eligió en esa misma agrupación a dos senadores, Víctor Contreras y Luis Valente, con la particularidad de que en esta última vez, en marzo de 1969, la votación comunista

habría permitido elegir un tercer senador si hubiésemos llevado un candidato más en la lista.

El caso es que en 1953 Lafertte no podía ir a la reelección, pues se lo impedía la Ley Maldita que aún permanecía vigente. Podíamos haber presentado y elegido un candidato no conocido como comunista. Pero el Partido desistió de ello, vio más que probable que Allende no fuera reelecto sólo con el apoyo de su Partido y, considerando de capital importancia que siguiera en el primer plano de la política, le propuso que se presentara como candidato a Senador por Tarapacá y Antofagasta, donde resultó elegido con holgura.

Los hechos que recordamos muestran claramente el tipo de relaciones que existió entre el Partido Comunista y Salvador Allende. Fueron relaciones de aprecio, de confianza y de correcta apreciación de las coincidencias y diferencias que había entre ambas partes.

En el informe al Pleno que el Comité Central del Partido Comunista celebró el 20 de noviembre de 1970, a 15 días de instalarse el nuevo gobierno, expresé clara y rotundamente: "Nada hay más importante en estos días, nada hay más revolucionario que actuar en función del éxito del Gobierno Popular, en función del cumplimiento de su programa". Por esta idea, por este principio, nos guiamos durante toda la administración del Presidente Allende. Todos los que vivieron la experiencia de aquellos años o la han estudiado con posterioridad, reconocen la similitud política que había entre el Partido Comunista y el Presidente Allende y el hecho de que nuestro Partido fue el que más contribuyó al éxito de su gobierno.

El luchador internacionalista

Salvador Allende fue un consecuente luchador antiimperialista e internacionalista. En esta posición se mantuvo durante su gobierno y hasta el fin de sus días.

Apreció el papel que jugó la Unión Soviética a favor de la paz mundial y de la lucha de los pueblos por su liberación, no obstante no compartir todas sus actuaciones como la de 1968 en Checoslovaquia.

Apoyó resueltamente la Revolución Cubana, desde el día de su victoria. En enero de 1959 voló hasta La Habana. Fue el primer o uno de los primeros chilenos en entrevistarse con Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Con Fidel mantuvo una estrecha y cordial amistad hasta el fin de sus días. Por el Che Guevara tuvo admiración y simpatía y con frecuencia mostraba, con orgullo, el libro *Guerra de Guerrilas* que el Che le había regalado con

una dedicatoria que decía: "A Salvador Allende, quien por otros medios trata de hacer lo mismo". En 1967 participó en la conferencia tricontinental celebrada en la Habana, en la cual se formó la Organización Latinoamericana de Solidaridad OLAS que lo eligió su presidente. Saliendo al paso de las deformaciones inventadas y/o propagadas por la prensa reaccionaria la defendió, definiéndola claramente como lo que era, "un organismo de información, coordinación y solidaridad". Al año siguiente concurrió a la Conferencia de Solidaridad con Vietnam, realizada en Canadá.

En octubre de 1967, después que el Che Guevara cayera en combate y fuera derrotada la guerrilla que encabezó en Bolivia, un grupo de guerrilleros entró clandestinamente al territorio chileno con la idea de viajar luego a Cuba. Fueron sorprendidos por la policía chilena y tomados presos. Allende, que era entonces Presidente del Senado, partió inmediatamente a Iquique, donde estaban detenidos y encabezó toda una operación dirigida a lograr su libertad y facilitarles su traslado a La Habana. Le llovieron las críticas de los elementos más reaccionarios. Pero la operación fue todo un éxito. Él mismo los acompañó en su viaje a Cuba, que tuvieron que hacer vía Tahití y Nueva Zelandia, porque ningún país de América del sur ni de Europa occidental les concedía visas de tránsito.

La gesta vietnamita la sintió profundamente, la hizo suya, como lo hicieron los jóvenes, como una causa propia. Tuvo especial aprecio y admiración por Ho-Chi-Min, a quien conoció personalmente en 1968.

Cuando ya era Presidente, el 4 de mayo de 1972 les habló a los estudiantes de la Universidad de Concepción de su conversación con Ho-Chi-Min, quien le dijo que siempre recibía información sobre los alumnos más distinguidos en los estudios y que siempre también él les enviaba algunas líneas de felicitaciones. "*Yo pensaba y pienso, ¡qué gran estímulo, qué extraordinaria recompensa debe haber sido para aquellos jóvenes recibir esas líneas de Ho-Chi-Min!* –expresó Allende–. Y agregó "*¡y qué buena lección para mí! ¡Nunca me olvidaré de su figura, nunca dejaré de recordar la transparencia de su mirada y la bondad de sus palabras! Al saludarnos (yo iba con el compañero Eduardo Paredes), nos dijo: gracias por venir de tan lejos con tanto sacrificio, a traernos el apoyo moral de su pueblo.*

Allende prosiguió hablándoles a los estudiantes de Concepción sobre la vida y la lucha de Vietnam, donde estuvo más de un mes. Fue impresionante el ejemplo que dio de una muchachita de unos 22 años que los atendía como empleada del hotel y que de repente desapareció, regresando tres días después.

–Ella hablaba –dijo Allende– en correcto francés. Le preguntamos. ¿Estuvo enferma?

–No –respondió.

Se disculpó diciéndonos que había estado fuera de la ciudad, en la universidad.

–¿Y donde está?

–En la montaña.

–¿Y como viajó?

–En bicicleta.

Y mientras ella se retiró para ir a buscar café, llegó el intérprete a quien Allende y Paredes le contaron la conversación con la joven vietnamita.

–¿No les contó nada más? -preguntó el intérprete.

–No –le respondió.

El intérprete dijo entonces:

–Es que además de estudiante universitaria es sub-comandante de un escuadrón de ametralladoras.

La lealtad por sobre todas las cosas de la vida

Desde las primeras horas del golpe el Presidente Allende comprendió que la suerte de su gobierno ya estaba echada. Su alocución final, a través de Radio Magallanes, no admitió dudas. Fue para él la última oportunidad de dirigirse a los trabajadores. La aprovechó para decirles que no renunciaría y que pagaría con su vida la lealtad del pueblo. La aprovechó también para advertirle al enemigo que la derrota sería transitoria.

La última página de su vida alcanzó las altas cumbres del heroísmo. Con absoluta serenidad, en la mañana del día 11, se informó de todo y tomó decisiones. Estuvo en su puesto de mando, en La Moneda ya envuelta en llamas. Pidió y luego exigió que se retiraran las mujeres, entre las cuales se hallaban dos de sus hijas, Beatriz e Isabel y su secretaria Miria Contreras, la Payita. Quedaron unos cuarenta hombres, colaboradores de su gobierno y miembros de su guardia personal, el GAP y siete de investigaciones. El Presidente fijó las posiciones de combate, distribuyó personalmente armas y el mismo dispara una y otra vez con el AKA que le había regalado Fidel Castro y que solía mostrar orgullosamente a sus compañeros y amigos en la casa del El Cañaveral, donde nos ofrecía probarla disparando a un disco instalado expresamente al otro lado de la quebrada.

Nos había dicho muchas veces que no saldría de La Moneda con sus propios pies y dispararía hasta la última bala –que alguna vez nos dijo hasta podría reservarla para sí–, defendiendo los derechos del pueblo y la legitimidad de su cargo. En 1972, en un discurso que pronunciara en el templo N°8 de la masonería, recordó el ejemplo de Balmaceda que prefirió morir antes de ceder a los dictados

de la oligarquía y citó al Presidente Aguirre Cerda, quien fuera connotado radical y masón y que a raíz del intento de derribarlo del general Ariosto Herrera dijo: "Sólo saldría de La Moneda en un pijama de madera".

"El Presidente –expresó Fidel Castro, en La Habana en el mitin del 28 de septiembre de 1973– no sólo fue valiente y firme en cumplir su palabra de morir defendiendo la causa del pueblo, sino que creció en la hora decisiva hasta límites increíbles. La presencia de ánimo, la serenidad, el dinamismo, la capacidad de mando y el heroísmo que demostró fueron admirables. Nunca en este continente ningún Presidente protagonizó tan dramática hazaña. Muchas veces el pensamiento inerme quedó abatido por la fuerza bruta. Pero ahora puede decirse que nunca la fuerza bruta conoció semejante resistencia, realizada en el terreno militar por un hombre de ideas, cuyas armas fueron siempre la palabra y la pluma. Salvador Allende demostró más dignidad, más honor, más valor y más heroísmo que todos los militares fascistas juntos".

Más que una ambición, más que un simple anhelo, común a la mayor parte de los políticos más sobresalientes, tenía el firme propósito de ser Presidente de la República para trabajar tesoneramente por un cambio profundo en favor del pueblo. Dijo muchas veces: "Yo no quiero ser un Presidente más. Quiero ser el primer Presidente del primer gobierno revolucionario del pueblo de Chile."

Les había advertido a los reaccionarios que sólo muerto podrían sacarlo del puesto que el pueblo le había dado. A ellos se dirigió expresamente el 4 de diciembre de 1971 en el acto que se efectuó en el Estadio Nacional en homenaje a Fidel Castro, que nos visitaba por esos días: "Se los digo con calma, –expresó– con absoluta tranquilidad, yo no tengo pasta de apóstol, ni pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado. Pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer la voluntad mayoritaria de Chile. No daré un paso atrás. Que lo sepan: dejaré La Moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. Que lo sepan, que lo oigan, que se les grabe profundamente: defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular porque es el mandato que el pueblo me ha dado. No tengo otra alternativa. Sólo acribillándome a balazos podrán impedir mi voluntad que es hacer cumplir el programa del pueblo".

A comienzo de agosto de 1970 lo entrevistó la periodista de *Ercilla*, Érika Vexler, un mes antes de las elecciones. Le preguntó acerca de como le gustaría que lo recordaran. Le respondió con estas palabras: "Como un chileno consecuente". Y tres años más tarde, cuando la casa del Gobierno era asaltada y ardía en llamas, pudo decir con entera propiedad en su postrer discurso "Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será el de un hombre digno que fue leal con la Patria".

Desde la media mañana de ese trágico 11 de septiembre era claro que la lucha estaba ya pérdida. Le ofrecieron un avión para salir del país, físicamente ileso, junto a su familia. Pero prefirió morir combatiendo, para refrendar así su lealtad al pueblo y dejar un testimonio más de que los revolucionarios verdaderos pueden ser aplastados transitoriamente, pero jamás abdicar de su causa ni rendirse.

A fines del siglo XIX, el Presidente José Manuel Balmaceda se había enfrentado al capital inglés. Quería que la explotación del salitre sirviera de base a la prosperidad de Chile. La reacción pelucona se puso al lado de mister North, el Rey del Salitre y de los capitalistas nativos que con él compartían el reparto de esa riqueza. Lo hizo con la hipocresía de siempre, agitando la bandera de la libertad. Condujo entonces a la Marina de Guerra a levantarse contra el Presidente constitucional, quien, luego de su derrocamiento, se suicidó el 19 de septiembre de 1892, en la legación de la República Argentina.

Para Salvador Allende, Balmaceda era en muchos aspectos un ejemplo. El también se enfrentaría al capital extranjero, esta vez el imperialismo norteamericano, y no transaría en el patriótico propósito de recuperar para Chile su principal riqueza, que ahora ya no era el salitre sino el cobre.

Neruda dice en sus memorias que en su larga historia civil Chile tuvo muchos Presidentes chicos y sólo dos Presidentes grandes, José Manuel Balmaceda y Salvador Allende. Los dos se enfrentaron al gran capital extranjero y fueron víctimas de una confabulación reaccionaria. Balmaceda decía que el salitre y los ferrocarriles serían la base del progreso nacional. Allende sostenía que había que recuperar el cobre porque era el sueldo de Chile. Los gobiernos de ambos Presidentes, junto al de Bernardo O'Higgins, son los más patrióticos que ha tenido el país. Los tres se guiaron por los principios contenidos en la Declaración de la Independencia Nacional, que dice a la letra: "Chile y sus islas adyacentes forman, de hecho y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la monarquía de España y de cualquiera otra dominación, con plena aptitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses".

A treinta años de su muerte, así lo recuerda y lo recordará el pueblo chileno.

Un testimonio del aprecio internacional que hay por del Presidente Allende y la original y audaz empresa revolucionaria que él encabezara, está a la vista en muchos países donde existen calles, avenidas, plazas, hospitales y otros lugares públicos que llevan su nombre. En Francia existen 23 avenidas y calles en homenaje a Salvador Allende y 15 en España, 1 en Cuba, 1 en Brasil, 3 en Alemania, 1 en Portugal, 19 en Bélgica, 1 en Bulgaria, 2 en Venezuela, 1 en Perú, 1 en Argentina y 9 en Chile. Llevan su nombre un total de 20 Plazas en España, Francia, Bélgica, Cuba, Chile, Uruguay y Australia; 4 centros culturales en Francia, Bélgica y Chile; 4 auditórium en universidades, 3 en Bélgica y 1 en Chile; un Hospital en Cuba y un

consultorio médico en Chonchi (Chiloé); un total de 8 centros de estudios (colegios, institutos, etc.) ubicados en España, Guinea Bissau, Italia, Alemania, Cuba y Chile; 1 puente en Bélgica y 1 barco en Rusia.[28]

El Museo de la Solidaridad Salvador Allende es otra expresión de la estima mundial que despertara la experiencia chilena. Creado inicialmente en junio de 1972, alcanzó a reunir 400 obras en el período del gobierno de la Unidad Popular. En los años siguientes, por iniciativa y empuje de José Balmes, Rojas Mix, Miria Contreras, Pedro Miras y Mario Pedrosa se formaron varias sucursales en el exilio, las que reunieron centenares de obras hasta alcanzar un total de 1.500. No existe en el mundo otro museo con tantas obras donadas de todo corazón por sus creadores de distintos países para solidarizar con una causa tan noble como la que encarnó el Presidente Allende.

Y no hay otro Presidente de Chile tan conocido y estimado en todo el planeta.

---

[28] Según sostienen chilenos que viven en Francia, son varios centenares las calles y avenidas que allá llevan el nombre de Salvador Allende. En Internet (www.chilevive.com) se mencionan las siguientes ciudades donde hay calles que así lo recuerdan. Ellas son Paris, Ville de Niort, Champigny, Lyon, Bron, Arcueil, Limoux, Epinay Sur Mer, Vitroller, Marseille, Epinay Sur Seine, la Seine Sur Mer, Bobigny, Ville Fanche de Roverque, Bollenne, Grenoble, Martinique, Meaux, Castanet Tobsan, Epinal, Parthenay, Ville Urbainne y Vaulx en Velin.

7.- El abastecimiento y la batalla de la producción.

"Hay que producir más. Y para aumentar la producción a largo plazo necesitamos también aumentar las inversiones, los excedentes, óiganlo bien, los excedentes de las empresas. Las utilidades de las empresas servirán, en parte, para mejorar los sueldos y salarios de los que allí trabajan, pero el más alto porcentaje de esas utilidades y de esos excedentes deberán ser invertidos para crear más fuentes de trabajo, nuevas empresas, para movilizar la capacidad ociosa de miles de ellas". (Del discurso del 1 de mayo de 1971.)

Problema N°1: El abastecimiento alimenticio de la población

La economía nacional, que en el primer año y medio de Gobierno Popular había tenido un notable crecimiento, entró a complicarse por la escasez de no pocas mercancías de consumo diario, las alzas de precios, la especulación y la inflación monetaria.

El problema del abastecimiento pasó al primer plano, transformándose en una de las principales preocupaciones del gobierno. No era para menos, pues se trataba del alimento del pueblo, de las necesidades vitales de la población, de asuntos en torno a los cuales la derecha reaccionaria realizaba una campaña miserable, tratando de desprestigiar al gobierno para acarrear agua a su molino.

Aunque habíamos renegociado la deuda externa, con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, lo que constituyó un gran éxito del gobierno y en particular de su ministro de Hacienda Américo Zorrilla, teníamos que pagar más de 200 millones de dólares en 1972 por los compromisos contraídos por anteriores gobiernos. Además, disponíamos de menos dólares por el valor de nuestras exportaciones y teníamos que pagar más caro las mercancías que importábamos. Alzas extraordinarias registraban el precio de la carne, de la leche, del maíz, del trigo, del petróleo, de todo lo que traíamos del exterior.

A principios del gobierno, cuando este resolvió darle medio litro de leche a cada niño, se calculó, por este rubro, un mayor gasto de 10 millones de dólares

anuales, con el agregado que en el Mercado Común europeo había una superproducción de leche en polvo y esta se entregaba a crédito. Pero en 1972, había que gastar, no 10 millones, sino 54 millones de dólares para el medio litro de leche destinado a nuestros hijos.

A lo anterior, se sumaron la negativa de la mayoría parlamentaria a otorgar financiamiento a los gastos fiscales, incluido el aumento de las remuneraciones del sector público en 1972 y a cubrir los déficits de las empresas del área social, a consecuencia de la rigidez de los precios. Una y otra cosa obligaron a emitir dinero más allá de la cuenta, provocando una inflación monetaria que de enero a junio de 1973 fue del 60% de acuerdo al INE y según la Universidad de Chile de 107,1%.

En esta inflación disparada influyó no sólo la acción negativa proveniente de los EEUU y el sabotaje, la especulación y escasez provocadas por la oposición más reaccionaria, sino también errores de nuestra parte. José Cademártori me dijo: "Los de la Unidad Popular subestimamos la importancia política de la inflación, es decir no nos preocupamos de ella. En la última entrevista que le dio a *El Mercurio*, Pedro Vuscovic, que fue el primer ministro de Economía de Allende, expresó también esta opinión. Se dispararon los precios, hubo excesos de gasto público con relación a los ingresos. Hubo déficit fiscal, gastamos más de lo que podíamos y debíamos gastar, también hubo déficit de divisas. Y hubo fallas en la política crediticia. Los Bancos estatizados tuvieron una política muy de mano abierta con las empresas estatizadas, sin exigirles que presentaran presupuestos reales y asumieran las pérdidas en que incurrían. Se dio también el siguiente fenómeno: con el propósito de no recargar a la gente, se mantuvieron congelados los precios de los productos de las empresas estatizadas durante bastante tiempo con lo cual éstas cayeron en fuertes déficit, mientras las empresas privadas subían los suyos a pesar de los controles".

El economista Hugo Fazio, Vicepresidente del Banco Central en tiempos de la Unidad Popular y actual director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA, en la exposición que hizo en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile el 5 de mayo del 2003, sostuvo que en el primer tiempo del gobierno de Allende el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población "se concretó, en primer lugar, al lograrse que la distribución funcional del ingreso mejorase significativamente. La participación de las remuneraciones aumentó cerca del 60%, porcentaje sin precedente en la vida nacional. La importancia de este paso se aprecia más claramente con la perspectiva del tiempo". Y añadió que hoy "la participación de las remuneraciones en la distribución funcional es de aproximadamente un 40%... retroceso que se manifestó ante todo en los años de dictadura, pero que ha continuado

aunque lentamente durante los gobiernos de la Concertación, con la excepción de los inicios de la administración Aylwin". Con referencia a las altas tasas que alcanzó la inflación monetaria después del primer año de gobierno, dijo Fazio: "En 1972, el índice de precios aumentó en 163,4%. Se produjo una hiper inflación. La pérdida en el poder adquisitivo del dinero condujo a que se generase una gran presión por adquirir rápidamente bienes, favoreciendo el desarrollo de maniobras especulativas". En estas condiciones y cuando la oposición "llegó al extremo de aprobar presupuestos fiscales anuales en los gastos, rechazando *los financiamientos propuestos, el Banco Central proporcionó al ejecutivo el* financiamiento que requería mediante créditos con cargos a excedentes futuros. Evidentemente, ello llevaba a incrementar la masa monetaria transformándola en un factor inflacionario. No hacerlo, habría significado paralizar el gobierno".

Los Esfuerzos Por Asegurar El Consumo De Carne

La naturaleza nos jugó también una mala pasada. El verano de 1971 fue muy lluvioso en el sur de Chile, no pudiéndose henificar el pasto en cantidades necesarias. El ganado de engorda encerrado descendió en un 75 por ciento. Además, el gobierno del Presidente Allende dictó un decreto prohibiendo la matanza de hembras. Era absolutamente indispensable dictarlo. Pero esa prohibición significó una disminución del orden del 11% por ciento del ganado que se enviaba para el consumo de Santiago y Valparaíso, y contribuyó a la escasez de carne. El mejoramiento de los salarios y, por lo tanto, la mayor capacidad de consumo de la población fue otro factor que se tradujo, en el primer semestre de 1971, en un aumento del consumo de carnes del orden de un 20% respecto al primer semestre de 1970.

Por decisión gubernamental, SOCOAGRO (Sociedad de Comercialización Agropecuaria) y ECA (Empresa de Comercio Agrícola) entraron a controlar el ciento por ciento de la matanza y de la distribución de carne en Santiago y Valparaíso y, entre el 70 y el 100 por ciento de la matanza y distribución en Concepción, Valdivia y Temuco. Esto fue muy importante, porque se sacó la matanza y la comercialización de manos de determinados industriales, que de haber continuado con este negocio hubieran realizado nuevas y mayores especulaciones.

SOCOAGRO abrió poder comprador de la carne, y esto también golpeó a la especulación. Engordó miles de novillos a medias con los campesinos, eliminando intermediarios, medieros y engorderos. ECA, por su lado, importó carne de Argentina y de otros países. En el primer semestre de 1971 esta importación fue baja, incluso menor que la del primer semestre de 1970. Y esto debido a que los ganaderos enviaron grandes cantidades de ganado a las ferias y los mataderos para convertirlas en dinero. Pero en el segundo semestre de 1971 las

importaciones de carne fueron una locura. Se optó, entonces, por comprar ganado en pie en Argentina, en especial novillos, para aprovechar los pastos de la temporada, lograr que el pasto se convirtiese en más carne y atender las necesidades durante 6 u 8 meses del año siguiente. También se incrementó la compra de carne congelada, que era más barata.

En los meses anteriores a las Fiestas Patrias de 1972, *El Mercurio* anunció que el pueblo no tendría dónde proveerse de carne para comer siquiera una carbonada y menos una empanada o un asado al palo para el 18 de septiembre. El Presidente de la República se encontró de pasada con Hugo Díaz, que en ese tiempo era Gerente de SOCOAGRO, a quien le hizo ver su preocupación por la publicación del diario de los Edwards. Díaz le contó que SOCOAGRO tenía en engorda los suficientes animales para que no faltara la carne para los días del 18 ni en los días siguientes. Efectivamente, SOCOAGRO había comprado una buena cantidad de terneros de 200 a 300 kilos y se los había entregado a los campesinos para que los engordaran. Con la engorda y el crecimiento de las reses, los campesinos se llevarían el 50% de la engorda, de los kilos más que pesaran los animales. Antes de la Unidad Popular, este negocio lo hacían los terratenientes, las ferias y los bancos. Del valor del sobrepeso se quedaban con la tajada del león. Les daban a los campesinos solamente el 30 o el 40%. El trato que les diera la SOCOAGRO incentivó a los campesinos, quienes engordaron 100 mil novillos. Así no faltó la carne para el 18 ni para los días posteriores y precedentes de ese año. *El Mercurio* sufrió un golpe morrocotudo y Allende llamó a Hugo Díaz, esta vez para decirle:

–Usted tenía la razón. Lo felicito.

Hay que decir también que durante el Gobierno Popular se construyó el Matadero de Lo Valledor, aprovechándose una infractora que se había levantado durante el gobierno de don Pedro Aguirre Cerda precisamente para trasladar a ese lugar el viejo matadero que estaba en la calle San Francisco, cosa que no se pudo efectuar entonces, ni durante el segundo Gobierno de Carlos Ibáñez que abrigó también ese propósito. En ambas ocasiones se impusieron los llamados intereses creados. Pero en esta tercera tentativa esa resistencia fue vencida, gracias al diputado Cesar Godoy Urrutia, quien, como conocido y apreciado en El Matadero, acompañó a Hugo Díaz y convenció a los comerciantes del sector que era mejor para ellos irse a Lo Valledor.

Para asegurarle a la población alimentos con alto contenido proteico se tomaron también medidas a fin de aumentar la pesca y promover el consumo de pescado. Para ambos propósitos se contó con la colaboración de los pescadores artesanales y de las empresas pesqueras Arauco, Tarapacá y Hading y con el apoyo de barcos cubanos y soviéticos. Se abrieron poderes compradores regionales para la pesca artesanal y de alta mar.

Los otros factores de la escasez

Aunque en el primer año de Gobierno Popular la producción industrial aumentó en un 7,8%, ya a fines de 1971 se notó cierta escasez o síntomas de escasez de productos de procedencia industrial, a causa de la mayor capacidad de compra de los trabajadores, de las especulaciones y de las insuficiencias en la administración de algunas empresas que se hallaban en manos del Estado.

No pasó mucho tiempo más y los problemas del abastecimiento se agravaron artificialmente.

Después de la toma de posesión de Allende la Comisión 40 del Senado de los Estados Unidos aprobó un total de más de 7 millones de dólares en apoyo secreto a grupos de oposición en Chile. Con este dinero se financiaba la propaganda clandestina contra Allende, al grupo fascista Patria y Libertad, a periodistas venales, a la prensa nacional chilena y a especialistas en fabricar rumores y torcerle el pescuezo a la verdad. Todos ellos se dedicaron a montar una campaña de terror que creó un sentimiento de inseguridad y condujo, entre otras cosas, al acaparamiento y la especulación en gran escala.

Ya en los días previos al ascenso de Salvador Allende a la Presidencia de la República, se echaron a correr las bolas más truculentas, entre otras la de que el gobierno de la Unidad Popular confiscaría las cuentas bancarias y que por ello los depositantes deberían correr a retirar sus fondos. También serían expropiadas todas las empresas (las 4 mil sociedades anónimas que existían entonces) por lo cual la gente que tenía acciones debía apresurarse a venderlas antes que se convirtieran en papeles sin valor alguno. Más aún, el Estado se apoderaría de todos los bienes raíces en vista de lo cual se recomendaba a las personas que tenían casas que se desprendieran de ellas.

Encuestadores bien rentados recorrían el llamado barrio alto de Santiago preguntando en cada casa cuántas piezas tenía cada casa que era visitada y cuántas personas vivían en ella.

–¿Quiénes son ustedes y cual es el motivo de esta encuesta? se les solía preguntar a los encuestadores.

La respuesta era clara e inmediata.

–Somos, señora, de la Unidad Popular y sólo queremos saber en qué casas podrían alojarse personas que carecen de vivienda.

Por esos mismos días, *El Mercurio* comentó editorialmente la "perspectiva de que haya limitaciones para entrar o salir del país".

Todo esto condujo, entre otras cosas, a que decenas de miles de chilenos se fuesen al extranjero y algunos de ellos no regresasen hasta después del golpe militar.

El abastecimiento alimenticio de la población comenzó a complicarse. Al aumento del consumo debía responderse con el aprovechamiento de la mayor capacidad de producción de las fábricas que surtían el mercado interno y con el aumento de la producción agropecuaria. El Gobierno Popular y los trabajadores se esforzaban en ambos sentidos. La reacción, en cambio, se dedicó a crear más y mayores dificultades. Concretamente, se dedicó a promover la escasez, el acaparamiento y el sabotaje. Los ganaderos trasladaron a Argentina 200 mil cabezas de vacunos, enviaron al matadero novillos que no había alcanzado el peso requerido para su comercialización y se dedicaron a la matanza indiscriminada de hembras. No obstante los voceros del Partido Nacional tenían la desfachatez de culpar de la falta de carne al gobierno de la Unidad Popular.

Este tomó medidas para aumentar el consumo de aves y de pescados. Para lo primero, creó, bajo el alero de la Corporación de Fomento a la Producción, la Empresa Avícola Nacional que trabajó con los productores de aves, incentivándolos y comprometiéndolos a aumentar la producción y, a la vez, por su cuenta puso en práctica un exitoso plan de criaderos de aves. Para lo segundo, conminó a las empresas pesqueras del país a aumentar su producción y, a la vez, contó con la valiosa cooperación de la Unión Soviética y de Cuba que pusieron en manos del gobierno de Chile varios barcos para la pesca de alta mar.

La reacción chilena echó a correr el rumor de que la pescada capturada por los barcos soviéticos se vendía congelada porque estaba descompuesta y que, para evitar el envenenamiento de quienes la consumían, los rusos le ponían penicilina y la solidificaban a bajas temperaturas. Dijeron también que la pescada congelada carecía de todo valor alimenticio y un diputado derechista (cuyo nombre no recuerdo porque nunca hizo nada que lo hiciera conocido) lanzó en la Cámara la especie de que las ricas conservas de cerdo que venían de China estaban contaminadas con la peste porcina africana.

Los verdaderos responsables cargaban a cuenta del Gobierno de la Unidad Popular todas las dificultades que vivía el país. Más aún, pusieron en práctica un siniestro plan para agravar todavía más los problemas de abastecimiento. Faltó en un momento hasta el hilo de coser. Promovieron el acaparamiento y el mercado negro. Repletaron sus despensas con mercaderías no perecibles y, a la vez, echaron a correr voces alarmistas para que todo el mundo acaparara cuanto mas pudiera.

Refiriéndose a estos hechos, el economista Jacobo Schatán recordó en el Seminario del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz, ICAL, realizado en ocasión del 25 aniversario de la victoria de la Unidad Popular, que "inmediatamente después del golpe" se produjo "la aparición milagrosa" de muchas de las mercancías que faltaban.

Se daban casos de sabotaje de algunos empresarios. Uno de los más sonados fue el de la Textil Andina, cuyo propietario huyó del país. Al año de la elección su empresa estaba produciendo menos de la mitad. Se le había exigido contingentes de producción en diversas oportunidades y sus representantes o socios no respondían a esos requerimientos. Pudiendo producir 60 mil kilos de hilados al mes, la Textil Andina producía apenas 30 mil o 35 mil a lo sumo. Tal estado de cosas no hizo más que acelerar la requisición de la fábrica.

No pocas familias acaparaban también diversos artículos y productos, instigadas por una campaña abierta o soterrada anunciada por los medios contrarios al nuevo régimen. Ocurría, por ejemplo, que al llegar una señora a una tienda de géneros, se solía entablar un diálogo como el siguiente:

–Necesito seis metros de crea– decía una clienta.

–Muy bien señora –respondía el vendedor y le agregaba– pero compre otros seis metros porque no va a haber crea.

Semejante diálogo se repetía respecto a otros productos y servicios. Se trataba de una campaña bien montada, como la que habían organizado los reaccionarios en el gremio de los taxistas. No pocos de éstos buscaban conversación a quien se subía a un taxi para luego decirle: –Este Gobierno no puede durar muchos días más.

Por otro lado, existían industrias textiles estatizadas que no obstante estar trabajando a todo vapor podían aumentar su producción a través del mejoramiento de los sistemas de trabajo, a través del aumento de la productividad, del rendimiento por hombre. Había que reemplazar, entre otras cosas, los reglamentos de fábricas, de minas y talleres, derogando los anteriores y elaborando nuevos con la participación y de acuerdo con los trabajadores, de tal manera de establecer una nueva disciplina, consciente, acordada voluntariamente, en reemplazo de la disciplina impuesta por los patrones. En muchas partes se actuó así, pero en muchas otras imperó la anarquía, las viejas normas, la insuficiencia. No pocos administradores o interventores de las empresas estatizadas o requisadas se distinguían por ser más remolones que activos. Muchos interventores eran competentes y sacrificados. Otros, en cambio, se hicieron famosos por su falta de conocimiento de la industria que administraban y/o por algunos hechos de corrupción política que introdujeron.

Hubo administradores e interventores de empresas y de bancos estatizados que actuaban "por la libre", procedían como querían y a nadie daban cuenta de su gestión. En materia de salarios, de contratación de empleos y en muchas otras cosas hacían lo que les daba gana, lo que estimaban conveniente a su partido político o a sus posiciones personales.

En enero de 1973 hizo crisis, por así decirlo, la irresponsabilidad con que algunos interventores se desempeñaban como tales en varias industrias como la Compañía Cervecerías Unidas y Vidrios Lirquén. En Cervecerías Unidas el interventor resolvió subir las remuneraciones en un 48,44% más correspondiente al alza del costo de la vida del año anterior, no obstante que la empresa tenía que cubrir un déficit de 300 millones de escudos y financiar el aumento de salarios y sueldos de sus obreros y empleados. En Vidrios Lirquén los empleados hicieron un petitorio que tenía un costo de 700 millones de escudos que el interventor de la planta lo elevó a mil millones. Los hechos que he recordado, hablan de la irresponsabilidad o incompetencia de algunos interventores, reafirma la idea de la cual hablo en el capítulo sobre las fallas en la conducción política, en el sentido de que las direcciones de los sindicatos debieran haber participado en la dirección de las industrias y no personas nominadas por los partidos, sin desconocer que la mayoría de esas personas eran idóneas y tuvieron un comportamiento correcto y honesto.

Se presentaron problemas en los cuales la falta de dirección y decisión causaban graves daños. En el transporte tuvimos posibilidades de resolver problemas mediante créditos a largo plazo y bajo interés desde distintos países socialistas y capitalistas. La Unión Soviética nos ofreció, por ejemplo, mil camiones cuando estuvo allá el Presidente Allende. Pero pasaron meses y meses sin que nadie decidiera nada. Mientras tanto, escaseaba el transporte para la minería, para la agricultura, para sacar la mercadería que se atochaba en los puertos.

Todo el mundo en los trabajos voluntarios

Bajo la consigna "¡Póngale el hombro a la Patria!" surgió y se desarrolló el movimiento del trabajo voluntario, que contó con el concurso masivo de mucha gente y en especial de la juventud chilena.

La primera Jornada Nacional de trabajo voluntario se realizó el domingo16 de mayo de 1971 por iniciativa de la Oficina Nacional de la Juventud. En ella participaron las juventudes de los partidos de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, jóvenes sin partido, alrededor de dos millones de chilenos, empezando por el Presidente Allende y los ministros que lo acompañaron en esa jornada, el ministro de Economía Pedro Vuscovic, el del Trabajo José Oyarce, el de Educación Samuel Astorga y el de Minería Orlando Cantuarias.

Brigadas de obreros y estudiantes plantaron árboles en la Pampa del Tamarugal, participaron en las obras de regadío de Cabildo, en el ensanche de la

vía de Angostura, en el camino de Valdivia a Corral, en la construcción de establecimientos avícolas estatales, de viviendas populares y de plazas públicas y juegos infantiles en las poblaciones. Brigadas especiales les enseñaron a leer a los adultos analfabetos. Otros brigadistas se preocupaban de hacerles ver a las madres que tiene más valor alimenticio una sopa de verdura que una sopa de huesos y promovían el consumo de pescado por su alto contenido proteico, carecer de grasas saturadas y estar más al alcance de los bolsillos. A mediados de 1971, cien alumnos de la Universidad Técnica del Estado se sumaron a los trabajos voluntarios en varias empresas estatizadas de Santiago y 400 alumnos de la misma Universidad partieron al norte a "ponerle el hombro a la Patria", como decía un afiche. Fueron a las minas de cobre y de salitre, sacrificando sus vacaciones de invierno. Y a raíz de un paro de los ingenieros y técnicos que temían perder el status del que gozaban bajo la administración de la Chile Exploration, 22 alumnos de la especialidad en minas del último curso de la escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile partieron a trabajar a Chuquicamata.

Centenares de personas de modesta condición formaban los Comités de Salud o se desempeñaban como inspectores ad-honórem de la Dirección de Industria y Comercio, DIRINCO, o se integraban a las Juntas de Abastecimientos y Control de Precios, las JAP, que se formaron en barrios y poblaciones apenas se hizo sentir la escasez de determinados productos, incorporando a todas las personas de la cuadra o lugar de residencia sin importar su posición política.

El pueblo hizo múltiples esfuerzos en la tarea de construir una nueva sociedad. Una muestra elocuente de la responsabilidad, la decisión y el entusiasmo que mucha gente sentía y desplegaba en ese tiempo fue palpable a raíz de la construcción del edificio Gabriela Mistral, hoy Diego Portales. En Chile debía efectuarse la III Asamblea Mundial de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD III), pero no había lugar adecuado para que se reunieran cómodamente los centenares de delegados que llegarían de todo el mundo, más los funcionarios de la ONU, periodistas, etc. Se decidió, entonces, construir un edificio adecuado para el caso, levantándose sólo en 9 meses los 40 mil metros cuadrados que tiene el Diego Portales, en medio del asombro de los santiaguinos que pasaban día a día por la Alameda Bernardo O'Higgins. La concepción del edificio y la dirección de la obra estuvieron a cargo de 5 arquitectos, de Sergio González que dirigía el equipo, más Juan Echeñique, José Covacevich, José Medina y Hugo Guggero. La calidad arquitectónica de la obra recibió unánimes elogios de chilenos y extranjeros. En ella, trabajaron día y noche, perfectamente mancomunados, autoridades de gobierno, obreros de la construcción, arquitectos, empresarios, artistas y artesanos.

Después de servir como sede de la III UNCTAD, el edificio se transformó en un centro de múltiples actividades artísticas y culturales por el cual pasaban diariamente miles de personas. El casino, que fue toda una innovación como autoservicio, llegó a servir 5 mil raciones diarias de calidad y al alcance de todos los bolsillos. Particularmente los estudiantes y los jóvenes hicieron de él un centro de encuentros cotidianos, matizados con fiestas y recitales permanentes. Secretaria Ejecutiva, Administradora y Directora de la Casa de la Cultura Gabriela Mistral fue Irma Cáceres.

Los trabajadores estaban en la producción y cada vez que era necesario, al terminar sus labores hacían multitudinarios desfiles y mítines de apoyo al gobierno popular y de repudio a los ataques, calumnias y maniobras sediciosas de los imperialistas norteamericanos y de los reaccionarios criollos. La Central Única de Trabajadores tenía entonces un gran peso en la vida del país. 800 mil trabajadores pertenecían a sus filas cuando la masa total de asalariados era de 3 millones y la población nacional ya tenía alrededor de 10 millones de habitantes. La movilización popular de octubre de 1972, durante el primer paro de transporte organizado por la CIA y la reacción, se inscribe entre las más grandes acciones de masas del pueblo chileno. Los trabajadores hicieron funcionar todas las industrias, organizaron la distribución, resolvieron numerosos problemas, demostraron una conciencia, una responsabilidad y una disciplina ejemplares. Junto a ellos, miles de jóvenes obreros y estudiantes, organizados en el "Movimiento de Voluntarios de la Patria", conducían sobre sus hombros las mercancías inmovilizadas por el paro patronal. Lo hacía mucha gente del arte. El pintor José Balmes, en conversación con Radio Nuevo Mundo a mediados del 2002, contó con emoción y entusiasmo que el lugar donde en esos momentos exponían sus obras Gracia Barrios y él, era una inmensa bodega ubicada en Matucana N°100 y que ellos, junto con Ana González –la Desideria–, Víctor Jara y otros artistas habían cargado allí los camiones con la mercadería que DIRINCO tenía que distribuir a todo el país durante el paro de los transportistas.

Aparecen las JAP y entran en acción

La Unidad Popular no se cruzó de brazos frente a las dificultades. Comprendió que el abastecimiento de la población pasaba a ser tarea de primer plano, campo de la lucha de clases y de la lucha política entre el pueblo y la reacción, y asumió sus responsabilidades.

En tanto comenzó la escasez de productos en el mercado, se crearon las Juntas de Abastecimiento y Precios, las JAP. Su partida como movimiento la dio el

ministro de Economía Pedro Vuscovic en una gran Asamblea de Mujeres que se realizó en el Estadio Chile el 29 de julio de 1971. Una de las primeras JAP, se formó en la población Juan Antonio Ríos, donde vivían entonces 20 mil personas. En tanto se constituyó la JAP de esa población se acercó a DIRINCO, SOCOAGRO y ECA, organismos estatales que tenían que ver con el abastecimiento. En esa ocasión, una de esas entidades le suministró 5 mil kilos de pollos y 15 cerdos que fueron distribuidos de acuerdo con los comerciantes minoristas.

Patty Coñomán, Presidenta de la Federación Textil, me contó que en la población El Bosque, de la Comuna del mismo nombre, donde ella vivía, se hizo una encuesta de los habitantes y de las necesidades que tenían en cada manzana, cada una de las cuales estaba representada por su delegado ante la JAP. De este modo, conociéndose exactamente las necesidades de cada familia, se hacía llegar a cada hogar la cantidad que le correspondía de azúcar, arroz, harina, aceite, queso, mantequilla y demás productos de consumo que les enviaba la DIRINCO, sin haber habido jamás problemas en el reparto. Me dijo también que a su población llegaron vehículos especiales con productos del mar y, como un hecho anecdótico, me agregó que entonces allí conoció varios mariscos y comió locos por primera vez en su vida.[29]

La Dirección de Industria y Comercio (DIRINCO) estaba facultada por ley para organizar a los consumidores. Basada en esa disposición legal, se formaron las JAP. Podía haber una en cada Unidad Vecinal. La JAP ayudaba al abastecimiento del comerciante buscando regularizar con él la venta y el precio de las mercaderías. No era una organización de ciudadanos para requerir a la autoridad el cumplimiento de un derecho, sino una organización de ciudadanos con atribuciones legales para aportar a resolver los problemas de abastecimientos y precios. Las JAP –dice Patricio Palma–"estaban concebidas como organismos de poder de los consumidores y no de los partidarios de la Unidad Popular. No eran organismos de la UP. Por lo tanto no podía discriminar entre partidarios de la UP y opositores de la Unidad Popular".

Las JAP, como organismo básico de los consumidores surgieron con el respaldo del gobierno. En opinión de Patricio Palma, que fue director de DIRINCO, las JAP eran de hecho un organismo de poder popular, a través del cual se prolongaba el Estado y que muchos cientistas políticos la consideraban así. Era una forma embrionaria de poder popular que contó con el apoyo de los

---

29 La población El Bosque, situada en la comuna del mismo nombre, al oriente del Paradero 36 de la Gran Avenida, se llamó inicialmente Los Duraznos. Surgió cuando un grupo de "los sin casa" se tomó allí unos terrenos el 16 de septiembre de 1970, diez días después del triunfo de Salvador Allende, cuyo gobierno les dio los materiales necesarios para su autoconstrucción.

partidos de gobierno que vieron en ella una forma diferente de hacer política de Estado.

La DIRINCO se apoyó mucho en las JAP. Inicialmente, éstas no manejaban los productos, sino la posibilidad de que llegaran donde se necesitaban. Tenían poder real, influencia real en el proceso de distribución, sus dirigentes y activistas se destacaban por su conciencia y honradez en la tarea de hacer entrega de los productos donde debían llegar y no a otra parte. El riesgo de la corrupción era grande. Pero la gente trabajó sacrificadamente y con honradez. Se presentaron sólo algunos casos de corrupción absolutamente menores.

Las Juntas de Abastecimiento ayudaron apreciablemente a evitar la pequeña especulación y el posible negocio o negociado por parte de distribuidores o ciertos intermediarios de la carne y otros productos alimenticios. La reacción hizo una furibunda campaña contra las JAP, afirmando, que repartían las mercancías según el color político de la gente. Por encima de ésta y otras infamias, hay que destacar el hecho de que las JAP y en especial las dueñas de casas que asumían sus tareas, realizaron una gran labor social a favor de las familias de los barrios y poblaciones sin ningún tipo de discriminación. Las JAP fueron creativas, extraordinariamente creativas y se sintieron partícipes de un proceso que iba mucho más allá de ellas.

Recordemos un caso concreto. Cuando la oposición echó a correr la chiva, que antes he mencionado, que la pescada proveniente de los barcos rusos estaba semi podrida, centenares de mujeres las cocinaron en la calle para echar abajo tal embuste y propagar su consumo. Más aún, Patricio Palma recuerda: "las JAP organizaban grandes almuerzos populares de pescado en las poblaciones y nosotros, los funcionarios del gobierno nos dedicábamos a comer pescado todos los fines de semana, los sábados y domingos, invitados por las JAP o algunas Juntas de Vecinos que colaboraban con ellas. Se hacían almuerzos colectivos para comer pescado, y allí los ministros de Estado, en primer lugar, y los que éramos funcionarios, explicábamos el sentido político de comer pescado. Todo esto era una creación del pueblo. Yo hago un juicio un poco duro a veces: el que no ve estas cosas que se hicieron en la Unidad Popular no puede entender lo que ocurrió. Yo digo que la UP fue una revolución; si tú te quedas solamente en la esfera de la pugna política supraestructural y no ves esto, no ves la esencia del proceso. Esto te explica por qué en una concentración popular como la última, del 4 de septiembre de 1973, fueron 500 mil personas a marchar. 500 mil personas para una ciudad que tenía en ese tiempo como 3 millones de habitantes.(...) La gente estaba movilizada por un objetivo que era consciente. Entonces, fue creativa y optimista. En esos almuerzos se

cantaba, se conversaba, se hacían planes, se veía cómo se podía ayudar a otras cosas, se hablaba de salud, de educación, de aumentar la producción[30]".

La batalla de la producción

Luego de conquistar el gobierno, la principal preocupación de los trabajadores pasó a ser la batalla de la producción. Si la consigna del imperialismo y la oligarquía era la de "hacer reventar la economía", el objetivo de los trabajadores y el pueblo debía ser el de sacarla adelante, venciendo todas las dificultades. Se operó de acuerdo a esta orientación con éxitos notables. La Central Única de Trabajadores prestó una gran cooperación al gobierno a favor del aumento de la producción, sobre todo en las empresas del área social, llegando a firmar con él un importante convenio que vinculaba el aumento de salarios con el aumento de la productividad.

Los esfuerzos que se desplegaron en este plano dieron su resultado. El diario *El Siglo* del 13 de agosto de 1971 informó que la producción de cobre aumentó en un 9,9% en los primeros siete meses de dicho año. El Instituto Nacional de Estadísticas dio cuenta que en agosto de 1971 la producción industrial había crecido en un 7,9% con respecto a igual periodo del año anterior y el 3 de octubre del mismo año afirmó que la producción manufacturera había aumentado en un 17,3% en relación al mismo mes del año anterior. En *El Mercurio* del 24 de agosto se informó que la Sociedad de Fomento Fabril registró en el primer semestre de 1971 un crecimiento de 3,7% en la producción de bienes de consumo y que en bienes intermediarios para las industrias se registraron incrementos mayores.

En el primer año de gobierno la economía había crecido. Pero podía crecer más. Por eso se libraba la lucha por la eficiencia en el trabajo, por que todas las fábricas trabajaran a pleno rendimiento, no sólo en un turno diario y para que en las administraciones de las empresas existiera la suficiente conciencia acerca de la importancia de la planificación, de la participación de los trabajadores, del aumento de la producción y de la productividad, asegurando el autofinanciamiento de las empresas y su rentabilidad.

A esta necesidad respondieron los trabajadores de las cinco grandes empresas cupreras. Los de El teniente, por ejemplo, aumentaron la producción de

---

[30] De las conversaciones de Patricio Palma con el Doctor en Historia Franck Gaudichuad, realizadas el 28 de noviembre del año 2000.

cobre en un 27,1% en los primeros tres meses de 1972. En 1971 la fundición de POLPAICO fundió 340 toneladas de cobre líster más que en el año anterior. Los trabajadores del salitre lograron también aumentar la producción en cerca de un millón de toneladas.

Se firmaron convenios de producción en varias industrias, entre otras, en la línea blanca, en la industria conservera, en los ferrocarriles y en la construcción de viviendas.

Fuertes inversiones

El país necesitaba fuertes inversiones para el desarrollo de la minería, la industria y la agricultura, la energética, las instalaciones portuarias, el transporte y otras obras de infraestructura. Pero no disponíamos de recursos suficientes. En general, los países Europeos tuvieron una política flexible para darnos créditos, incluso España, de donde se trajeron los buses Pegazos, cuando aún Franco estaba vivo. También Argentina nos dio crédito. Los países socialistas nos ayudaron especialmente a través del intercambio comercial. El viaje que hiciera Salvador Allende a Moscú en 1972, luego de concurrir a la Asamblea general de las Naciones Unidas y de visitar México, no respondió a las expectativas que teníamos en cuanto a obtener créditos en divisas. Las cuantiosas inversiones que hacía la Unión Soviética tratando de impedir que su poderío bélico quedara atrás del de los Estados Unidos, la ayuda que le prestaba a Vietnam que enfrentaba la invasión norteamericana de su territorio, los gastos que efectuaba tras el propósito de estar en la primera línea de la revolución científico técnica que comenzaba en esos años, los compromisos que ya tenía con países socialistas más pequeños y con naciones emergentes de Asia y África y el hecho de ser el rublo una moneda no convertible, no hicieron posible una asistencia mayor de su parte. En divisas, el crédito en dinero contante y sonante se limitó a una cantidad que hoy suena irrisoria, a 45 millones de dólares, millones de hace 31 años. A pesar de estas dificultades, el comercio de Chile con la Unión Soviética y otros países socialistas alcanzó cierto desarrollo pudiendo ser mayor al mediar las trabas burocráticas de una y otra parte, al desconocimiento de la calidad de las mercancías soviéticas y al temor a las dificultades que podría haber más tarde para adquirir repuestos.

Lo fundamental era aprovechar racionalmente los recursos existentes, sin perjuicio de la inversión intensiva que se realizara en cada empresa para incrementar la producción a corto plazo. La forma de impulsar eficazmente la

batalla de la producción residía en la aplicación práctica de unas pocas ideas simples, claras para todos, capaces de ser comprendidas y acogidas de inmediato, como tareas concretas y esenciales, por los trabajadores y el pueblo en general.

Los trabajadores conocían, junto a los técnicos, todas las potencialidades de sus instrumentos de trabajo. Cuando se planteó la batalla por el ahorro de divisas florecieron mil iniciativas que le permitieron al país ahorrar millones de dólares. Ahí estaba, entre otros, el caso de Textil Progreso que, en colaboración con la Escuela Industrial de Puente Alto, se propuso y logró fabricar en Chile una serie de repuestos.

El Pleno del Comité Central del Partido Comunista, que se efectuó a fines de marzo de 1973, puso el acento en la necesidad de lograr una organización del trabajo que asegurase el aprovechamiento total y óptimo de los equipos y materias primas con que se disponía. Se daba el caso, por ejemplo, de que los 5 mil tractores que se importaron desde la Unión Soviética se utilizaban tan sólo en poco más de un 50 por ciento del tiempo que podían y debían trabajar. También había fábricas donde no se utilizaba la posibilidad de establecer un segundo o tercer turno. Para corregir estas deficiencias e insuficiencias, se debía exigir a los administradores, interventores y jefes de empresas y servicios, a considerar las proposiciones que surgían de los trabajadores y a responder por escrito a sus sugerencias, en el plazo máximo de 15 días, si eran aceptadas o explicar las razones de por qué no se acogían. Se requería también dar estímulos morales y materiales en razón de las iniciativas positivas que surgían de los trabajadores, de su rendimiento, de su asistencia al trabajo, etc., y de establecer con ellos convenios que ligaran el aumento de los salarios con el desarrollo de la producción y productividad, todo esto en el marco del autofinanciamiento de las empresas y el aumento de la rentabilidad.

Desafortunadamente, estas preocupaciones no estaban en la cabeza de todos los partidos de la Unidad Popular y la situación general empezó a deteriorarse con una rapidez que no dio tiempo para atenderlas con prioridad.

La lucha por una mayor producción agraria

En función de resolver los problemas del abastecimiento se realizó un Pleno del Comité Central del Partido Comunista a mediados de agosto de 1972 para tratar el tema de la producción agraria. Contó con la participación de miles de trabajadores de la tierra. Ellos llegaron de los asentamientos, de los Centros

de Reforma Agraria, de los Centros de Producción y de aquellos fundos expropiados dirigidos por Comités de Campesinos. En él estuvieron también pequeños agricultores, comuneros del Norte Chico y de San Pedro de Atacama, una delegación de mapuches y un representante de la Isla de Pascua, además de funcionarios del agro, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios, ingenieros forestales y técnicos agrícolas.

En el campo llegaron a estar organizados en sindicatos cerca de 300 mil trabajadores. La importancia de este número de organizados no sólo era grande en comparación a la población activa del agro, sino al hecho de que apenas 10 años antes, los trabajadores sindicados no pasaban de 5 mil. Mediante la acción común de todas sus organizaciones y el fortalecimiento de los Consejos Campesinos, los trabajadores del campo podían alcanzar una mayor participación en las decisiones sobre la política agraria y el aumento de la producción, pero eso no dependía solo de ellos, sino también de las fuerzas políticas que los influían, y en tales fuerzas no había suficiente conciencia al respecto.

Era preciso aprovechar el ímpetu inicial de los campesinos en los predios expropiados y acelerar la toma de posesión de los quinientos y tantos predios que aún no habían pasado a sus manos no obstante existir la resolución correspondiente.

El camino a seguir para asegurar el mayor aumento posible de la producción exigía la inmediata rediscusión de los planes de cultivo en todos los niveles, la discusión de estos planes por la masa misma de los campesinos, la toma de medidas oportunas para asegurar el suministro de semillas y fertilizantes, la eliminación de las trabas burocráticas del Banco del Estado para la otorgación de créditos y la firma de contratos de producción respaldados por la rápida fijación de una política de precios.

El Pleno Agrario del Partido Comunista prestó especial atención a los pequeños y medianos propietarios, hombres de trabajo, que usaban la tierra con una intensidad entre 2 y 4 veces mayor que el latifundio, que producían casi la totalidad de las hortalizas, gran parte de la chacarería, tenían las lecherías más intensivas y una parte apreciable de las plantaciones frutales del país.

Había más de 200 mil propiedades menores de 40 hectáreas básicas. En ellas vivían centenares de miles de chilenos. No podíamos abastecer al país si se prescindía de su producción. El Gobierno Popular había ampliado su ayuda crediticia a favor de ellos, pero era insuficiente y se precisaba ayudar a su organización en cooperativas, otorgarles más créditos, ampliar en forma efectiva los poderes de compra para que no cayeran en manos de los intermediarios, asegurarles el transporte de su producción, desarrollar proyectos que

diversificaran y absorbieran la producción a precios realmente remunerativos y, sobre todo, establecer en los hechos la seguridad de la tenencia de la tierra.

Los pequeños y medianos agricultores debían convertirse en aliados del proceso histórico que vivía Chile y era contrarrevolucionaria la conducta de quienes los empujaban al otro lado.

Los esfuerzos realizados por los campesinos y por el gobierno, permitieron que la producción agraria aumentase en los años 1971 y 1972. Se efectuaron muchas reuniones en terreno con participación de trabajadores agrícolas, funcionarios de CORA y activistas de los partidos de izquierda explicando la importancia de aumentar la producción en el campo. Los campesinos la tomaron con entusiasmo. Uno de ellos, en una reunión celebrada cerca de Ovalle lo reflejó en estas palabras: "¡compañeros, que sólo los caminos queden sin sembrar!".

Si a pesar del empeño de los campesinos y de los técnicos, la producción agraria disminuyó en algunos rubros en 1973, se debió, en lo fundamental, al paro del transporte que promovieron los reaccionarios en octubre del año anterior y que impidió en la práctica la siembra de primavera que representa en Chile la mitad de las siembras del país. Además fue otro año excesivamente lluvioso a tal punto que obligó al gobierno a declarar zonas de catástrofe a cinco de las provincias agrícolas. No obstante, en 1972-1973 se cosechó mas maíz que en los años anteriores y en la siembra de hortaliza se alcanzó a la cifra record de 80 mil hectáreas.

El desabastecimiento afectó principalmente al pueblo, a la gente más necesitada.

La reacción promovió otro paro de transportistas en junio de 1973. Con él fueron inmovilizados 14 mil camiones, hecho que contribuyó a agravar más los problemas del abastecimiento.

Gonzalo Martner anota que *"hubo un retroceso en la producción agropecuaria que bajó 7,4% según el Banco Central. La pesca, que había aumentado en 1971, bajó fuertemente, aunque su gravitación en el Producto Interno Bruto es pequeña. Asimismo, disminuyó el gasto en la construcción. El transporte, que había crecido en 6,2% en 1971, bajó sólo en 0.9% en 1972, a pesar del paro de los camiones, y de la disminución de servicios que se compensó con el aumento del transporte en ferrocarriles"*.

La situación se complicó –añade Martner– porque "los mejoramientos en la esfera real de la economía contrastaron con las variables financieras", como el aumento de los gastos del gobierno, de un 26% en 1970 al 31,1% del producto geográfico en 1972; la aprobación de leyes sin el debido financiamiento y otros factores que generaron un déficit fiscal. Se desató, a la vez, una inflación que, contenida hasta agosto de 1972, llegó a finales de año al 163%.

A pesar que las dificultades siguieron creciendo, el Gobierno Popular trató de seguir cumpliendo su Programa. También hubo retrocesos y la pista se puso cada vez más pesada. De hecho, el proceso de transformación de la economía había llegado a una situación crítica.

Había surgido una nueva forma de organización transitoria, los Comités Campesinos, como una manera de iniciar el proceso productivo y evitar el conflicto en torno a sí debían constituirse Centros de Reforma o Asentamientos. Era fundamental y urgente revisar todas estas formas orgánicas y tener indispensablemente en cuenta la opinión e interés de los campesinos, única manera de contar con ellos para el cumplimiento de las grandes tareas que teníamos en el campo. Había que buscar con ellos y no al margen de ellos, las soluciones que más convinieran y que por cierto estuvieran de acuerdo a sus intereses y a los intereses del país. Pero no fuimos capaces, como Unidad Popular, de encarar de esta manera los problemas que surgían en el agro.

Es claro que había muchos compañeros, comunistas y socialistas, que dejaban las suelas de sus zapatos recorriendo los campos y direcciones regionales que tenían una real preocupación por los problemas agropecuarios. Pero había otros, que se daban vueltas sólo en torno a los problemas de las ciudades, no obstante que el campo solía ser en sus zonas más importante desde todo punto de vista. Había también valiosos ejemplos de sindicatos y de trabajadores de empresas estatizadas que prestaban ayuda efectiva a sus hermanos del campo, pero faltaba incorporar a este trabajo a la clase obrera organizada.

8.- La rosca por las tres áreas en la propiedad y la sedición en marcha.

La Revolución, el destino, el futuro de Chile está en manos de ustedes, compañeros trabajadores. Si fracasamos en el campo económico, fracasaremos en el campo político, y será la decepción y la amargura para millones de chilenos y para millones de hermanos de otros continentes, que nos miran y que nos apoyan. Tenemos que darnos cuenta que más allá de nuestras fronteras, desde África y Asia, y aquí, en el corazón de América Latina, hombres y mujeres miran con apasionado y fraterno interés lo que estamos haciendo nosotros. Piensen, compañeros, que en otros continentes se levantaron sus pueblos para hacer su revolución y que la contrarrevolución los aplastó. (Conferencia de Prensa, Santiago, mayo 5 de 1971.)

La cuestión de las áreas

Se conocieron tres proyectos sobre áreas de propiedad. Los dos primeros, prácticamente se fusionaron y se discutieron en 1971. Hablo del proyecto del gobierno y del que presentaron los senadores Hamilton y Fuentealba.

El artículo 30 del proyecto original del gobierno definía las tres áreas de propiedad social de las "empresas productoras de bienes y servicios". Se consideraba necesario darles esta definición, entendiendo que según los postulados de la teoría económica, ella comprende las diversas modalidades que toma la propiedad, tanto las industrias como las empresas de distribución, transporte o bancarias y demás servicios que atienden a la comunidad.

El proyecto de los senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba, que fue en los hechos el aprobado, establecía además de las áreas social, mixta y privada las "empresas de propiedad de los trabajadores" y disponía que debía dictarse una ley para cada empresa que pasara al área social o a la mixta. Esto significaba que se malograba el propósito de reestructurar la economía porque el gobierno no tenía mayoría en el Congreso y, aún si la hubiera tenido, cada proyecto de expropiación habría requerido de meses o años para su aprobación y, de este modo, en el período del Presidente Allende se contarían con los dedos de la mano o de las dos a lo sumo, las empresas traspasadas al área social o mixta.

El proyecto aprobado disponía, también, lisa y llanamente la derogación de "las normas sobre requisiciones de establecimientos industriales y comerciales contenidas en el Decreto del Ministerio de Economía y Comercio N° 338, de 1945, y toda disposición de carácter reglamentario o administrativo que permita de modo directo o indirecto, requisar, nacionalizar o estatificar empresas". Establecía, asimismo, que "ninguna Ley vigente a la fecha que comience a regir ésta reforma constitucional podrá ser interpretada ni aplicada en el sentido de que autoriza al Estado o a los organismos que de él dependían para nacionalizar, estatificar o incorporar a las áreas social o mixta empresas productoras de bienes o servicios de derechos en ellas". Contenía, en fin, una cláusula, la vigésimo primera, que decía: "Declárense nulos y sin valor alguno los actos o convenios ejecutados o celebrados por el Estado, los organismos o entidades que lo integran, que están bajo su control o que de él dependen, a contar del 14 de octubre de 1971, para adquirir acciones o derechos de o en personas jurídicas de derecho privado con el fin de nacionalizar, estatificar empresas productoras de bienes o servicios, que no hubieren sido expresamente autorizadas por ley dictada en conformidad a lo prescrito en el N° 16 del artículo 44 de la Constitución Política del Estado".

En otras palabras, el proyecto aprobado, dejaba en nada todas las requisiciones, intervenciones y compras de acciones por parte del gobierno; imponía una marcha atrás en lo avanzado en cuanto a crear un nuevo y democrático sistema social y virtualmente hacía ilusorio los cambios respecto a la propiedad. Por estas razones, el Presidente lo vetó.

En esos encuentros se convino en las definiciones que tendría el área social de la economía y en lo que sería votado a favor en el Parlamento por la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Los asuntos en desacuerdos serían también incluidos en el proyecto de ley para ser sometidos a debate, sin compromiso en cuanto a la forma de votarlos en la Cámara y el Senado y, sin desmedro de lo anterior, el Partido Democratacristiano presentaría otras proposiciones que la Unidad Popular votaría a favor o en contra según fuere la opinión que les mereciera.

Respecto a las "empresas de trabajadores", propuestas por la Democracia Cristiana, sostuvimos que no se podía convertir a los trabajadores en capitalistas, entregándoles las grandes industrias en calidad de propiedad privada. Esto no iba en beneficio del país, ni en beneficio de los trabajadores. La Democracia Cristiana hacía cuestión para que los bancos pasaran a ser de propiedad de los trabajadores porque en cuatro de ellos –en el Banco Chile, Crédito e Inversiones, Edwards y Sudamericano– el personal estaba dirigido por militantes suyos.

En el curso de las conversaciones, la Democracia Cristiana modificó su criterio en esos puntos, precisando que quería que aquellas empresas llamadas "de trabajadores" fueran en todo caso empresas de propiedad del Estado, donde

los trabajadores sí tuvieran en sus manos la dirección y se hallaran obligadas a producir excedentes, no sólo para beneficio de quienes en ellas laboraban, como primitivamente planteaba, sino también para acumular recursos financieros a fin de ampliar la productividad y concurrir a los fondos del Estado para la inversión nacional. Esto significaba un cambio en la concepción misma de la "empresa de trabajadores" por parte de la Democracia Cristiana. En base a esta nueva definición de esa clase de empresas podría haberse logrado acuerdo porque lo importante era que esos bancos fueran estatizados, aunque quedaran bajo la administración mayoritaria de sus trabajadores, cosa que podría modificarse posteriormente cuando la vida demostrara que lo mejor para el país y para los propios empleados bancarios era que pasaran a manos del Estado.

Pero el acuerdo en principio convenido entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana tuvo alguna resistencia en el seno del partido opositor y en definitiva no prosperó. Esa resistencia se hizo de pronto mas fuerte, el acuerdo fracasó y el proyecto Hamilton-Fuentealba fue aprobado con los votos de la derecha.

Desde ese momento, la Democracia Cristiana acentuó su oposición al Gobierno Popular y se entendió cada vez más con la derecha.

Los cambios en el aparato estatal

El aparato estatal era y es el instrumento principal en la construcción de una nueva sociedad. En nuestro país se daba el caso particular de que el Gobierno Popular, empeñado en la realización de profundas transformaciones revolucionarias, actuaba con un aparato estatal de tipo burocrático burgués. Su reemplazo, su sustitución, era una necesidad vital.

La legalidad permitía hacer no pocas cosas, pero cuanto se hizo fue ante todo resultado de la lucha del pueblo, de la expresión de la mayoría de la población, de la conformación de una vasta conciencia social democrática y progresista, de una correlación de fuerzas favorable y de la firmeza del gobierno, de sus partidos y, desde luego, del Presidente Allende. Todo lo realizado se logró en constante pugna con las fuerzas reaccionarias, haciendo uso de las facultades que disponía el gobierno, de las leyes y decretos que facilitaban su acción. El Estado de Derecho que había en Chile hacía factible esos cambios. Pero existía, a la vez, la necesidad de modificarlo para llevar adelante la transformación progresista del país.

Se requería, ante todo, darles un más sólido respaldo legal a los cambios que en la propiedad se habían hecho, especialmente en el terreno industrial. Como

ya dije en el segundo capítulo de este libro, las requisiciones e intervenciones de fábricas e industrias se hicieron recurriendo a leyes y decretos que existían desde hacía mucho tiempo. Los caminos seguidos eran legítimos y legales, y más cortos y efectivos en el caso de la compra de acciones o de la formación de empresas mixtas. Pero las intervenciones y requisiciones de empresas eran medidas transitorias que no dejaban resuelta la cuestión de la propiedad, lo que dio margen a la Contraloría general de la República, en julio de 1971, para declarar ilegales, por ejemplo, las requisiciones de las empresas textiles. Había, pues, necesidad de consagrar en la ley la propiedad estatal de aquellas empresas que estaban intervenidas o requisadas. En otras palabras, era indispensable refrendar por ley el traspaso al área social de las empresas que solo estaban requisadas y sobre las cuales había órdenes de devolución a sus antiguos propietarios. Era conveniente también dejar definitivamente en el área social o mixta, varias empresas donde había capitales de diversos países de Europa con los cuales teníamos y nos interesaba tener buenas relaciones. Se requería hacer inversiones en algunas empresas que solo estaban requisadas o intervenidas y ellas no se podían efectuar jurídicamente mientras no pasaran por ley al área social. Y convenía, obviamente, dejar en claro los límites de cada área de propiedad. Por ello, el 20 de octubre de 1971, el gobierno mandó al Congreso un proyecto para regularizar toda la situación, determinar claramente, con nombre y apellido, las empresas monopólicas o estratégicas que quedaban definitivamente en el área social o en el área mixta. En la elaboración del proyecto participaron todos los partidos de la Unidad Popular.

El proyecto que el gobierno enviara al Parlamento sobre las tres áreas fue aprobado en general, pero enseguida la oposición derechista-democratacristiana lo hizo tiras en la discusión particular y metió en él casi todo el articulado del proyecto que presentaron sobre la misma materia los senadores Juan Hamilton y Renán Fuentealba.

Este proyecto transformado, que ya había visto el Senado, tuvo la aprobación de la Cámara de Diputados el 22 de diciembre de 1971, después de lo cual fue vetado por el Presidente Allende y, por consiguiente, no pasó al Congreso Pleno para ser ratificado.

Los resultados de las elecciones a Regidores que se realizaron en abril de 1971 habían demostrado que obteníamos una correlación favorable de fuerzas. Pero ello no quería decir que el Gobierno Popular tenía ya el apoyo de la mayoría para acometer los cambios superestructurales que, por otro lado, ni siquiera habíamos planteado o planteamos débilmente en el curso de esa campaña electoral. Y la mayoría parlamentaria estaba absolutamente en contra de esa reforma.

Desde los años 50, los partidos de izquierda y personalmente Salvador Allende, habían hecho conciencia nacional en torno a la necesidad de llevar a

cabo transformaciones de fondo en la esfera de la economía. Asuntos tales como la necesidad de la Reforma Agraria y de la Nacionalización del Cobre y de la Banca, se habían abordado en forma permanente y convincente.

De ahí el apoyo popular y nacional que tuvieron tanto el proyecto de Reforma Agraria como el de la Nacionalización del Cobre, los dos aprobados en ambas Cámaras por los parlamentarios de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana. Pero no habíamos hecho la misma conciencia en torno a las transformaciones que se precisaban en las instituciones del Estado, no habíamos explicado los cambios que se deberían hacer para facilitar el acceso del pueblo al Poder Legislativo y, en un sentido más amplio a la dirección del país, y ni siquiera habíamos expuesto las ventajas de un parlamento constituido por una sola cámara. Menos aún habíamos hecho ver la necesidad de democratizar el vetusto Poder Judicial, a tal punto que el Gobierno Popular tuvo que echar marcha atrás con un proyecto dirigido a crear Tribunales Vecinales encargados de tratar y resolver asuntos de menor cuantía, porque la derecha logró levantar una polvareda, atrajo a su lado a la Democracia Cristiana y la iniciativa fracasó.

Si asuntos como los antes señalados ni siquiera los habíamos expuesto ante el país, es obvio que el 50,3% de los votos que obtuvo la Unidad Popular en las elecciones municipales no significaba de por sí que la mayoría ciudadana, y menos la mayoría del Parlamento, respaldaban los cambios superestructurales con vista a una verdadera democratización del Estado.

Se contó –ya dije– con el apoyo de la Democracia Cristiana para aprobar una reforma constitucional que permitió nacionalizar el cobre. Pero ese apoyo no se daba para otras iniciativas que implicaran cambios en la Carta Fundamental, y en el Parlamento no hubo acuerdo entre la Unidad Popular y la DC en cuanto a legislar sobre las tres áreas de propiedad.

Y se armó la gran rosca, se creó la impasse, el gran conflicto, porque la oposición sostuvo que le bastaba la mayoría del Parlamento para insistir en sus puntos de vista en circunstancias que para ello requería de los dos tercios.

Por cierto, la rosca no fue por una simple cuestión del quórum que requería el veto. En el fondo se trataba de dejar las empresas monopólicas en manos de puñados de grandes capitalistas o de ponerlas en manos del Estado a beneficio de todos los chilenos.

Esta impasse se prolongó por todo el año 1972 y en la práctica, aunque no todos lo comprendieran y/o lo dijeran, los enfrentamientos políticos que desde entonces se desarrollaron en forma aguda hasta el fin del Gobierno Popular, estuvieron determinados por la cuestión de en qué manos iba a quedar la gran propiedad. Empeñado en darle a este conflicto una salida o solución constitucional el gobierno buscó y realizó nuevas conversaciones con la Democracia Cristiana

para llegar a un acuerdo sobre esta materia. En ellas participaron los ministros Manuel Sanhueza, Orlando Millas, Carlos Matus y Fernando Flores en representación del gobierno, y por la Democracia Cristiana, el senador Tomás Pablo y Sergio Saavedra. En casa de este último se realizaron los encuentros en el otoño de 1972, en uno de los cuales participó también, Sergio Molina, hombre de confianza, aunque, entonces, no militante de la DC. "A través del conjunto de esas entrevistas –relata Orlando Millas en sus memorias– se precisó el nuevo proyecto de ley sobre creación del área social de la economía, respecto del cual surgieron tres asuntos: primero, aquello en que existía coincidencia de opiniones del gobierno y del partido democratacristiano, por lo cual figuraría en el proyecto y sería votado favorablemente por ambas fuerzas del Parlamento; segundo, lo propuesto por el gobierno y objetado por los democratacristianos, que iba también a incorporarse en el proyecto para ser objeto de un gran debate nacional, sin compromisos respecto de la forma de votarlo en la Cámara y el Senado; y tercero, un cuerpo de proposiciones que levantaría el partido democratacristiano durante la tramitación parlamentaria, bajo su responsabilidad[31]".

En los meses venideros se agudizaron los conflictos políticos y perdieron fuerza en la Democracia Cristiana y en la Unidad Popular, los partidarios de buscar un entendimiento.

El 2 de enero de 1973, el general Prats, que ocupaba la cartera del Interior, sugirió en una reunión del Consejo de ministros, a la cual concurrió por sugerencia del Presidente: "La necesidad impostergable –dice en sus *Memorias*– de buscar una salida legal para la definición de las áreas de la economía". Su opinión tiene amplia acogida y el 4 de enero se reúne con el ministro Millas "para elaborar un anteproyecto de ley que permitiera una salida al encajonamiento en que el gobierno se encontraba". "Llegamos a la conclusión de elaborar un anteproyecto de ley para expropiar las empresas nominalmente comprendidas en los siguientes grupos:

– las de la lista de las 91 todavía no integradas al Estado.

– las 32 requisadas o intervenidas, no comprendidas inicialmente entre las 91 y que son estratégicas para la economía nacional, de acuerdo con la experiencia recogida en el paro de octubre".

"En los casos de las empresas consideradas para expropiar y cuyo decreto de requisición o intervención hubiera sido rechazado por la Contraloría, se establecería la formula de "co-administración" transitoria, mientras se tramitaba el proyecto de ley de expropiación".

---

31 *Orlando Millas, Memorias 1957-1991, una disgresión*, página 62, Ediciones Cesoc, 1996.

"Las empresas requisadas o intervenidas, pero que no revisten carácter monopólico, serían devueltas a sus propietarios, previo estudio de una comisión de casos de los problemas que podrían suscitarse al levantarse la requisición o intervención".

El segundo proyecto sobre las tres áreas de propiedad, conocido como proyecto Prats-Millas, fue enviado por el Ejecutivo al Parlamento el 23 de enero de 1973. Conforme a su texto, la lista de las empresas que pasarían al área social o mixta era la siguiente:

Empresas definidas para integrar el área social: 1.-CTC Compañía de Teléfonos de Chile S.A., 2.-Manufacturas SUMAR S.A., 3.-Algodones HIRMAS S.A., 4.-S.A. YARUR Manufacturas Chilenas de Algodón, 5.-Tejidos Caupolicán S.A., 6.-CCU Compañía de Cervecerías Unidas, 8.-Rayón Said Industrias Químicas S.A., 9.-Textil Progreso S.A., 10.-Paños Oveja Tomé S.A., 11.-Rayonhil Industria Nacional de Rayón S.A., 12.-Lanera Austral S.A., 13.-Textil Banvarte S.A., 14.-Compañía Industrial El Volcán S.A., 15.-Fábrica Nacional Loza Penco, 16.-Compañía de Papeles y Cartones, 17.-Compañía Sudamericana de Vapores S.A., 18.-General Electric, 19.-Compañía de Petróleos de Chile, 20.-Compañía Industrial, 21.-Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 22.-Consumidores de Gas de Santiago, 23.-MADEMSA, Manufacturera de Metales S.A., 24.-FENSA, Fábrica de Enlozados S.A., 25.-CIC, Compañía de Industrias Chilenas S.A., 26.-Cristalerías de Chile S.A., 27.-CAROZZI, Compañía de Molinos y Fideos S.A., 28.- S.A. de Navegación Petrolera, 29.-Acero Andes S.A., 30.-Carburo y Metalurgia S.A., 31.- Compañía Chilena de Navegación Interoceánica, 32.-SINDELEN S.A.I.C., 33.-Sociedad Industrias Eléctricas Nacionales, 34.-Compañía Nacional de Fuerzas Eléctricas, 35.- Cemento Bío- Bío S.A., 36.-Gildemeister S.A., 37.-Industrias Químicas Dupont S.A., 38.- Pesquera Indo S.A., 39.-Aceites y Alcoholes Patria S.A., 40.-INDURA Industria Química de Soldadura S.A., 41.-Refractarios Lota Green S.A., 42.-Compañía Distribuidora Nacional Codina, 43.-Compañía Industrial Metalúrgica S.A., 44.-Compañía Nacional de Teléfonos S.A., 45.-FERRILOZA S.A. Industria de metales, 46.-Compañía de Gas de Concepción, 47.-Coresa S.A. Unidades y Complementos de Refrigeración, 48.-SOPROLE, Sociedad Productora de Leche, 49.-Licores Mitjans S.A., 50.-Compañía Productora Nacional de Aceites S.A., 51.-Chiprodal S.A.I., 52.-Grace y Compañía Chile S.A., 53.-Agencias Graham S.A.C., 54.-Sociedad Pesquera Guassaye.

El proyecto agrega las siguientes empresas sujetas a acuerdos para integrar el área social o mixta: 55.-Manufacturas de Cobre MADECO S.A., 56.-Industria Chilena de Alambres INCHALAM, 57.-Vidrios Planos Lirquén S.A., 58.-Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S.A., 59.-Compañía Estándar Electric S.A.C., 60.-Naviera Interoceangas S.A., 61.-Aga Chile S.A., 62.-

Phillips Chilena S.A. de Productos Eléctricos, 63.-Indus Lever S.A.C.I., 64.-Compañía Industrial Hilos CADENA S.A., 65.-Embotelladora Andina S.A., 66.-Compañía Chilena de Tabacos S.A., 67.-Sociedad industrial Pizarreño S.A., 68.-BATA Sociedad Anónima Comercial, 69.-Sociedad Industrial de Calzado, SOINCA, 70.-Manufacturera de Cauchos Tejidos y Cueros, CATECU S.A., 71.-Compañía Chilena de Fósforos, 72.-Cobre Cerrilos S.A., 73.-Fábrica de Envases S.A., 74.-Nieto Hermanos S.A.C.I. Consorcio, 75.-Confecciones Burger S.A.I.C., 76.-Calderón Confecciones S.A.C., 77.-Confecciones Oxford S.A., 78.-Dos Álamos S.A.I.C., 79.-Lechera del Sur S.A. Llanquihue, 80.-Electrometal S.A. Fábrica de Materiales Eléctricos, 81.-Industria Textil Hermanos Polar y Compañía, 82.-Fábrica de Paños Continental S.A., 83.-COMANDARI S.A. Hilos, 84.-Hilos Paños de Lana S.A., 85.-Compañía Tejidos Salvador Cotesa, 86.-S.A.C. Saavedra Bernard, 87.-Laja Crown S.A. Papeles Especiales, 88.-Elaboradora de productos Químicos SINTEX S.A., 89.-OXIQUIM Limitada, 90.-Farmoquímica del Pacífico S.A., 91.- Empresa Pesquera Eperva S.A., 92.-Maderas y Sintéticos, Masisa S.A., 93.-Maderas Prensadas y Pinos Cholguán[32].

Algunas de estas empresas han desaparecido por haberse fusionado con otras o haber sido liquidadas por la competencia de las más poderosas, nacionales o extranjeras. En la lista anterior no están los bancos ni las empresas que ya se habían nacionalizado o estatizado por ley, como en el caso del cobre, las empresas mineras de hierro, carbón y cemento y otras que pasaron a manos del Estado por acuerdo mutuo mediante la adquisición de sus acciones.

El proyecto Prats-Millas no tuvo el respaldo del Partido Socialista ni del MAPU que dirigía Óscar Guillermo Garretón. Ambos partidos hicieron públicas sus discrepancias y en forma, también pública, recibieron respuestas del Presidente Allende.

En relación a las empresas que debían pasar al área social surgieron discrepancias también en el seno de los trabajadores. Por propia iniciativa suya o del MIR o de sectores de izquierda de la Unidad Popular, se llegó a ocupar un número de empresas que superó con creces el centenar, exigiendo del gobierno la expropiación de todas ellas. En no pocos casos se trataba de empresas menos que medianas, incluso algunas pequeñas. El colmo se produjo cuando fue ocupada –y se exigió su expropiación– la Fábrica de Confites Ro-Ro, en la cual laboraban 8 o 9 trabajadores.

---

[32] Aunque se habla de las 91 empresas, en la nómina de este libro aparecen 93. Corresponden a la versión del proyecto enviado por el Ejecutivo al Parlamento, que está en el Tomo V de *La izquierda en Chile* de Víctor Farías.

Los tribunales "populares" y otras tergiversaciones

Uno de los objetivos principales de los partidos de la Unidad Popular fue el de hacer cambios que apuntaran a una mayor democracia, justicia y libertad. Para ello el gobierno envió al Parlamento un proyecto mediante el cual se creaban los Tribunales Vecinales. Se trataba de extender la justicia creando en la base social, en los barrios y aldeas, tribunales que se preocuparan de las pequeñas faltas, de las disputas que suelen presentarse entre los vecinos, de la violencia intrafamiliar y otros problemas contingentes de la vida; a fin de que la justicia llegara a sectores que nunca antes la conocieron. Esos tribunales estarían constituidos por las personas que eligieran los propios vecinos en votación directa. Por eso al proyecto se le daba el nombre de Tribunales Vecinales. Al entregarle a éstos la responsabilidad de atender y resolver las desavenencias y los conflictos menores, se mostraba fe y confianza en el pueblo, se le daba una responsabilidad superior, se ampliaba la justicia. La iniciativa tenía profundas proyecciones de orden social y estaba destinada a enseñar a la gente a ejercer una justicia al servicio del pueblo y por el propio pueblo.

Juristas y catedráticos, con o sin domicilio político en la Unidad Popular y la convención de magistrados realizada en la ciudad de Valdivia, habían aprobado nada menos que la idea de llevar adelante la organización de estos tribunales.

Pero lo más reaccionario de la sociedad chilena saltó a la palestra, habló de "tribunales populares" tratando de darle una connotación que no tenían, sostuvo que era una iniciativa anticonstitucional y que la Unidad Popular quería silenciar a sus adversarios políticos.

Con el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, ENU pasó algo semejante. No conforme con todo lo que había hecho por la educación, el gobierno se propuso llevar a cabo un cambio profundo en el sistema para lo cual elaboró lo que se dio en llamar el proyecto Escuela Nacional Unificada. Este surgió del Primer Congreso Nacional de Educación, realizado entre el 13 y el 16 de diciembre de 1971 en Santiago, en el cual participaron más de mil delegados representantes de los más diversos organismos relacionados con la enseñanza. Su propósito principal consistía en crear un sistema de educación unificado que combinara las materias científico-técnicas con las humanistas y entregara un mismo caudal de conocimientos. "Al recibir todos los estudiantes la misma base de formación –expresó Aníbal Palma en la segunda Escuela de Verano del Instituto de Ciencias Alejandro Lipchutz– el acceso a carreras superiores iba a depender única y exclusivamente de su capacidad de rendimiento y aptitudes, y no del sistema

educacional al cual las circunstancias lo hubieran incorporado. El Proyecto se complementaba con la creación de Institutos Superiores de educación que ofrecerían una amplia variedad de carreras cortas. Además –agregó Palma– al combinar las materias científico-técnicas con las humanistas se perseguían y corregían los siguientes objetivos. Después de cursar 8 años de enseñanza básica y 4 de enseñanza media, el alumno quedaba capacitado para incorporarse con eficiencia al área productiva, evitando el destino incierto que le aguardaba en caso de no haber podido acceder a la Universidad. ¿Y cómo lograba esa eficiencia? El proyecto ofrecía también la posibilidad de hacer prácticas de trabajo en las industrias, en las oficinas públicas o privadas. Esto contribuía a que el muchacho que no alcanzaba a ingresar a la Universidad podía, entonces, incorporarse a las tareas productivas porque había recibido una preparación adecuada".

El proyecto ENU "recogía –siempre en palabras de Aníbal Palma– antiguas aspiraciones del Magisterio, de sus organizaciones gremiales y se ajustaba a las recomendaciones hechas por la UNESCO", "sistemas similares ya se encontraban en aplicaciones en algunos países europeos",–y se proponía superar– "graves problemas que afectaban a nuestra educación problemas que se venían arrastrando desde el siglo pasado...".

No obstante sus fundamentos y sus bondades, esta iniciativa encontró una porfiada resistencia, incluso en los estudiantes a quienes estaba destinado a favorecer. Ello se debió en gran medida –agregó Aníbal Palma– "a que siendo el proyecto excelente en su finalidad pedagógico-docente, tuvo una presentación muy desafortunada. Y, en segundo lugar, se trató de implementar en un momento absolutamente inoportuno. ¿Por qué hablamos de una presentación muy desafortunada? Porque en su primer párrafo, más aún, en tres líneas, se le atribuye a la ENU un contenido ideológico que en verdad no tenía. Allí se sostiene que el proyecto de la ENU "procura formar el hombre nuevo en la sociedad socialista".

Esta era una formulación torpe e inexacta. En realidad la revolución que estaba en marcha no era de carácter socialista y aunque queríamos abrir con ella camino al socialismo, nunca habíamos pensado en una educación que se propusiera formar seres humanos cortados por una misma tijera y menos en negarles su derecho a pensar de manera distinta. No era eso lo que buscaba el gobierno ni la Unidad Popular y tampoco se podía deducir del texto del proyecto que de ello se trataba. Pero en la circunstancia que vivía el país, en el clima conflictivo de ese momento, tan "desafortunada presentación" como dijera, Aníbal Palma, favoreció el juego del enemigo.

El estado mayor de la oposición, que no era siempre el que daba la cara, armó una furibunda campaña tratando de presentar al gobierno y a la izquierda como

empeñado en terminar con la libertad de enseñanza y de imponer la ideología socialista o comunista a todos los niños de Chile, a pesar de que lo único que se trataba de hacer era unificar el sistema educacional.

La reacción se aprovechó y tocó a rebato las campanas sembrando la alarma, tergiversando el proyecto, especialmente en el mundo católico. Pero el hecho concreto es que la Iglesia valoraba ampliamente la iniciativa. En declaración entregada a la prensa, la Conferencia Episcopal de Chile, con la firma de su Presidente el Cardenal Silva Henríquez y de su Secretario General, el entonces Obispo auxiliar de Concepción Carlos Oviedo Cavada, se decía textualmente: "los datos que tenemos de la forma como ha sido discutido hasta ahora, a lo largo del país y, la comprensible sensibilidad de la Iglesia en todo lo que toca a la educación, nos lleva a hacer la siguiente declaración: El Informe tiene, sin lugar a dudas, aspectos positivos que apoyamos sin vacilar. Destacamos dos, el primero, la incorporación de todos los chilenos a un proceso educacional que no discrimina a nadie por su capacidad económica, su condición social o su posición ideológica, y ofrece a todos las mismas opciones de acuerdo a sus diversas capacidades. El segundo, la integración de estudio y trabajo, y la valorización del trabajo físico, como uno de los elementos que contribuyen al pleno desarrollo del hombre y al desarrollo económico y progreso social de la comunidad.

También vemos elementos positivos en la integración al proceso educativo de todas las edades de la vida, respetando el insustituible valor educativo del propio hogar".

La objeción que hacía la Iglesia se refería al hecho de no verse en el texto del proyecto "los valores humanos y cristianos que forman parte del patrimonio espiritual de Chile y a los que adhiere un altísimo porcentaje de los estudiantes y de los padres de familia chilenos". Para incluir expresamente estos valores y eventualmente mejorarlos en otros aspectos, el Comité Permanente del Episcopado pidió "que se postergue la aplicación de este plan de la ENU, para permitir un amplio debate nacional, serio y constructivo, verdaderamente democrático y pluralista". El Ejecutivo accedió a este pedido. Pero nunca más se consideró el asunto porque ya a esa altura del tiempo (fines de marzo de 1973), la atención de unos estaba concentrada en la defensa del gobierno y la de otros en el objetivo de echarlo abajo.

Se habían cometido dos errores mayúsculos. El primero, que ya lo mencioné, fue el nombre inapropiado que se le dio. El segundo fue el hecho de no ponerlo a discusión de todos los sectores interesados en el tema –profesores, estudiantes, padres y apoderados, partidos políticos e Iglesia– antes de ser sometido al Parlamento. Eso no se hizo.

La Papelera

Un alboroto tanto o mayor montó la oposición cuando apareció la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones de Puente Alto, del clan Matte-Alessandri, entre las grandes empresas que pasarían al área social de la economía. Se repitió la escandalera cuando el 9 de noviembre de 1971 la Corporación de Fomento de la Producción compró 4 millones de acciones de esa empresa a través del Banco Osorno y La Unión y eso no obstante que los primeros en vender sus acciones fueron, entre otros, Mónica Matte y Luis Matte Valdés.

La reacción, que nunca respetó la verdadera libertad de prensa, gritó esta vez a todo pulmón que la Unidad Popular pretendía terminar con ella. El gobierno lo desmintió. Su ministro Pedro Vuscovic anunció y luego envió al Parlamento un proyecto que creaba el Instituto de Papel Periodístico, que se encargaría de asegurar el abastecimiento de papel a toda la prensa, independientemente de su orientación. El Instituto estaría integrado por 3 representantes de la Asociación Nacional de la Prensa, 2 designados por el Congreso Nacional, 3 por el Colegio de Periodistas, 1 por la Central Única de Trabajadores y 2 nombrados por el Presidente de la República.

La oposición no se sintió satisfecha con esta iniciativa y en sesión especial de la Cámara de Diputados, promovida por el Partido Nacional, siguió oponiéndose a la estatización de la Papelera. Levantó la consigna "La Papelera No" y sostuvo que la Compañía de Papeles y Cartones no constituía un monopolio. El ministro Pedro Vuscovic, demostró que lo era indiscutiblemente, toda vez que producía en ese entonces más del 90% del papel de consumo interno. Por otro lado, en los últimos años, se habían reforestado sólo 300 mil hectáreas, de las cuales apenas 16 mil lo fueron por iniciativa de la Papelera; habían 10 millones de hectáreas susceptibles de ser reforestadas y la fuerte demanda externa e interna hacía recomendable crear un complejo industrial del papel y la celulosa teniendo como base la Compañía de Papeles y Cartones.

Las cartas sobre la mesa

El 3 de abril de 1971, exactamente cinco meses después que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República, se efectuaron elecciones municipales en todo el país. En ellas la Unidad Popular recibió el 50,86 % de los sufragios, 13,9% más que en las presidenciales de 1970. La derecha fue la gran derrotada, pues los Partidos Nacional y Democracia Radical sacaron sólo un 22,44%

contra el 34,9% que habían obtenido con su candidato Jorge Alessandri en las elecciones presidenciales realizadas 7 meses antes. La Democracia Cristiana también bajó su votación, pero en forma insignificante, del 26,8% a un 26,21%. La mayoría absoluta que la Unidad Popular obtuvo en esa contienda electoral fue una valiosa victoria que elevó el entusiasmo del pueblo y llevó a los derechistas más reaccionarios a jugárselas por entero con el objetivo de entorpecer la marcha del gobierno y atraer a su lado al Partido Demócrata Cristiano.

La mayoría ciudadana le daba su respaldo al nuevo gobierno por lo que había hecho hasta ese momento y por lo que proyectaba hacer. Un mes y dieciocho días más tarde, el 21 de mayo, en su Primer Mensaje ante al Congreso Pleno, el Presidente dio cuenta de lo realizado en los primeros seis meses de su administración y expuso las medidas que se proponía seguir adoptando en interés del pueblo y del país. Dirigiéndose a los senadores y diputados les dijo que tenía muy presente que en el lugar donde se encontraba se dictaron "las leyes que ordenaban la estructura agraria latifundista" y "las normas institucionales en que se basa la explotación extranjera de los recursos naturales de Chile", pero que allí también "fueron derogadas instituciones obsoletas para asentar las bases legales de la Reforma Agraria" y se revisan las normas (que permitieron la explotación foránea del cobre) "para devolverle a los chilenos lo que por derecho les pertenece". Hizo presente que "Chile tiene ahora en el gobierno una nueva fuerza política cuya función social es dar respaldo no a la clase dominante tradicional, sino a las grandes mayorías" y sostuvo que "a lo avanzado en la liberación de las energías chilenas para reedificar la nación, tendrán que seguir pasos más decisivos. A la Reforma Agraria en marcha, a la nacionalización del cobre que sólo espera la aprobación del Congreso Pleno, cumple agregar, ahora, nuevas reformas, sea por iniciativa del Parlamento, sea por propuesta del Ejecutivo, sea por iniciativa conjunta de los dos poderes, sea con apelación legal al fundamento de todo poder, que es la soberanía popular expresada en consulta plebiscitaria".

De esta manera, clara y categóricamente, Allende reafirmó su posición –que era y fue también la posición de la Unidad Popular– de llevar adelante el cumplimiento de su programa.

En vista de la decisión, presteza y celeridad que en su primer año caracterizaban la acción del Gobierno Popular, el gran capital imperialista, el gobierno norteamericano y la reacción chilena, representada políticamente por el Partido Nacional, los radicales de derecha y un reducido grupo demócrata cristiano, asumieron cada vez más posiciones abiertamente antidemocráticas, sediciosas y antinacionales.

Dichas fuerzas habían tratado de evitar la victoria de la Unidad Popular y de impedir que Salvador Allende fuera confirmado Presidente de la República

por el Congreso Nacional. Pero ante la firme posición democrática que asumiera la mayoría del país tuvieron que echar marcha atrás.

En la nueva situación, cuando el gobierno avanzaba a paso firme por el camino del cumplimiento de su programa y se llevaba adelante un proceso de cambios que constituía en los hechos una verdadera revolución, aquellas fuerzas reaccionarias decidieron resistir y obstaculizar la acción del gobierno en todos los frentes y abrirle camino a la contrarrevolución.

Ya el 6 de enero de 1971, cuando el gobierno de Allende recién cumplía dos meses, el Partido Nacional propuso la formación de un Frente Único "para la defensa de la democracia". Días después el Senador radical derechista Morales Adriazola, en ese momento desaforado por su participación en el asesinato del general Schneider, le propuso a la Democracia Cristiana un frente cívico contra el Partido Comunista, y a fines del mismo mes, Sergio Onofre Jarpa, dirigente de la derecha más retrógrada, declaró a *El Mercurio* que era preciso "organizarnos para defender nuestra libertad". Las uvas aún estaban verdes y esos llamados no fueron entonces acogidos por sus destinatarios.

Los enemigos observaban con pavor la fuerza que adquiría la coalición de gobierno, la simpatía que la reactivación económica del país despertaba entre los pequeños y medianos industriales, además de comerciantes, y las posibilidades de nuevos acuerdos coyunturales entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana.

Entonces pusieron en práctica una maquinación de largo aliento que recurría a cualquier forma y usaba cualquier medio, por inmoral que fuese, para atacar al gobierno de la Unidad Popular.

Para reforzar la imagen de la anarquía y el desastre y provocar con ello una reacción ciudadana contraria a la constitución y consolidación del nuevo gobierno, el grupo fascista Patria y Libertad, se encargó de cometer una serie de fechorías, como los asaltos al Banco Franco-italiano, a la sede de la Federación de Estudiantes de Chile y al Canal 9 de Televisión, el atentado contra instalaciones del aeropuerto de Pudahuel y el lanzamiento de cartuchos de dinamita a casas de cuatro dirigentes del Partido Nacional.

El asesinato de Pérez Zujovic

El 8 de junio de 1971 fue asesinado Edmundo Pérez Zujovic, destacado miembro de la Democracia Cristiana, que se había desempeñado como ministro del Interior del gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva. El crimen ocurrió a las 10:47 horas en la calle Hernando de Aguirre. Su hija María Angélica,

que lo acompañaba, le advirtió que venían siguiéndolo y lo instó a que sacara su pistola. Pero los asesinos fueron más rápidos, incrustándole doce balas en diversas partes del cuerpo.

El Servicio de Investigaciones, que dirigían Eduardo Paredes y Carlos Toro, se movilizó de inmediato en persecución de los autores de tan alevoso crimen. Estos resultaron ser miembros de un grupo de ultra izquierda que en 1968 se retiró del MIR constituyéndose en la llamada Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), cuyo principal cabecilla era el mentado guatón Osvaldo Romo, quien más tarde sería uno de los sanguinarios torturadores de la DINA.

El Presidente Allende y los partidos de gobierno fueron categóricos en condenar el horrendo homicidio. "Fue un crimen contra Chile, contra su pueblo y su gobierno", declaró el Presidente Allende. Y decretó 3 días de duelo nacional por la muerte de Pérez Zujovic. "El asesinato es parte de un plan de la reacción dirigido a detener el proceso revolucionario", expresó una declaración de la Comisión Política del Partido Comunista. La Comisión Política del Partido Socialista afirmó que "el crimen político del que ha sido víctima Pérez Zujovic es el resultado de un complot dirigido desde el exterior", y de paso criticó a la dirección de la Democracia Cristiana por haber declarado públicamente que era consecuencia de una supuesta debilidad del gobierno con los grupos armados "y del clima de odio, violencia y calumnias creado por los partidos de la Unidad Popular en contra de la Democracia Cristiana". El MIR también condenó el asesinato de Pérez Zujovic.

El crimen estaba dirigido principalmente contra el gobierno y evidenció que estaban ocurriendo cosas ajenas a nuestras tradiciones y a nuestras normas políticas.

En la sesión del Senado en homenaje a Pérez Zujovic, Volodia Teitelboim afirmó:"las situaciones en que han muerto el general Schneider y Pérez Zujovic son semejantes y evidencian que los organizadores de estos atentados perseguían el mismo objetivo: el derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular". Agregó que el asesinato de Pérez Zujovic estaba dirigido contra el Gobierno Popular, la Unidad Popular, contra el Partido Demócrata Cristiano y el pueblo chileno.

Así lo veía también la mayoría de los demócratas cristianos, comprendidos no pocos de sus hombres más connotados, aunque éstos guardaran silencio en ese momento. Uno de ellos, el ex canciller del Presidente Frei Montalva y actual senador Gabriel Valdés Subercaseaux, en las declaraciones que hizo el 14 de julio del 2002 en el programa Cita con la Historia del canal de televisión ARTV, afirmó enfáticamente que tenía la íntima convicción de que estuvo metida "una mano mora en el asesinato de Pérez Zujovic". Agregó textualmente "yo siempre he tenido la convicción de que todo fue provocado por alguien externo, no me atrevo a

acusar a alguien, pero un ente externo hizo lo que era necesario para crear un abismo insuperable entre Frei y Allende, que eran íntimos amigos". Y agrego que esta opinión "me la confirmó Bernardo Leighton antes de morir".

No obstante la claridad de los hechos, en el Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, reunido expresamente a raíz del crimen, se aprobó una resolución en la cual se culpaba al gobierno de la Unidad Popular y personalmente a Salvador Allende, de debilidad frente a los grupos armados existentes en el país, y dos semanas más tarde, en el mitin de homenaje a Pérez Zujovic, realizado por la Democracia Cristiana en el "Teatro Caupolicán", Eduardo Frei culpó al gobierno de "crear una situación de odio y violencia" y dijo que ello exigía un Frente Único para defender las tradiciones democráticas del país. Agregó que el Partido Demócrata Cristiano era la única alternativa contra la Unidad Popular.

La reacción se aprovechó del asesinato de Pérez Zujovic para promover un distanciamiento cada día mayor de la Democracia Cristiana con respecto al gobierno de la Unidad Popular. Y desde entonces la Democracia Cristiana y el Partido Nacional empezaron a coincidir y a actuar en conjunto contra el gobierno del Presidente Allende.

Preocupado de tal situación, el Partido Comunista, a través del informe que José Cademártori entregó a fines de julio al Pleno de su Comité Central, expresó confianza en que las fuerzas progresistas que existían en la Democracia Cristiana harían sentir su voz y crearían las condiciones para seguir dialogando con la Unidad Popular.

"Una institución chilena –dice el informe Church– que fue usada en la campaña contra Allende era la cadena de periódicos *El Mercurio*. Tanto el gobierno de los EEUU como la ITT repartían dinero a individuos asociados con el periódico. Estas subvenciones continuaron después que Allende asumiera su cargo".

De acuerdo a documentos de la CIA, estos intentos jugaron un papel importante en la puesta en escena del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

En 1971 y a comienzos de 1972, el consentimiento de la Comisión 40 para subvencionar a *El Mercurio* se basaba en informes que decían que el gobierno de Chile intentaba cerrarlo. Más tarde la Comisión 40 aprobó 700 mil dólares para mantenerlo a flote.

El Informe Nizkor sobre la Comisión 40 del Senador norteamericano, dice que más de la mitad de los 7 millones aprobados para financiar las actividades de la oposición fueron entregados: *al Partido Demócrata Cristiano (PDC), al Partido Nacional (PN), y a varios grupos de disidentes.(...) A comienzos de 1971 las subvenciones de la CIA posibilitaron que el PDC y el PN compraran sus propias empresas de radio y periódicos. (...) También se hizo un esfuerzo para generar una fractura de*

la coalición UP. Los fondos de la CIA apoyaron a los partidos de la oposición en 3 elecciones en 1972, y en las elecciones al Congreso en marzo de 1973. El dinero suministrado a partidos políticos no solo servía para apoyar a candidatos en varias elecciones, sino para posibilitar a los partidos a mantener una campaña en contra del gobierno durante la legislatura de Allende, instando a los ciudadanos a demostrar su oposición en una amplia variedad de maneras". (...) "A los chilenos que se inclinaban a protagonizar un golpe se les aseguró apoyo a los más altos niveles del gobierno de EEUU, tanto antes como después del golpe".

El abuso de las acusaciones constitucionales

Cuando el Gobierno Popular cumplió un año, en un mitin realizado a Estadio Nacional repleto y miles de personas en sus inmediaciones, el Presidente Allende dio cuenta de lo que se había hecho hasta ese momento. Empezó diciendo que el pueblo había dicho ¡Venceremos! y que habíamos vencido. Recordó lo que antes expresara: "vamos a cumplir y hemos cumplido". Mencionó las medidas adoptadas en favor de las masas trabajadoras y las transformaciones logradas en solo un año en el terreno de la economía. En seguida dijo: "Nuestro cobre, nuestro carbón, nuestro salitre, nuestro acero; las bases elementales de la economía pesada son hoy de Chile y de los chilenos. Hemos acentuado y profundizado el proceso de Reforma Agraria. Controlamos el 90% de lo que fuera la banca privada. Más de 70 empresas monopolistas y estratégicas ya han sido expropiadas, requisadas, intervenidas o estatizadas".

Estaba claro también cuánto había mejorado la situación de los trabajadores.

Lo que se había hecho en un año de gobierno y lo que se proyectaba hacer en los años venideros, alarmaba a los sectores más reaccionarios y, obviamente, al imperialismo norteamericano. La firme voluntad del Presidente Allende y de la Unidad Popular de llevar adelante las transformaciones revolucionarias y, a la vez, la decisión de esos sectores reaccionarios de cruzarse en su camino, eran reflejo de una aguda lucha de clase, de un combate que no tenía otra salida que el triunfo de una de las dos fuerzas que disputaban la dirección del Estado. Desde el comienzo, y en forma cada vez más desembozada y frecuente, la reacción chilena recurría a todos los medios en su afán de desprestigiar al gobierno, de erosionar su base social y, en definitiva, de echarlo abajo por cualquier medio.

El 10 de marzo de 1971, cuando el gobierno recién cumplía cuatro meses, se presentó la primera acusación constitucional contra el ministro del Trabajo

José Oyarce, por supuestas irregularidades cometidas en la dictación de decretos de intervención de las grandes empresas que pasarían al área social. En agosto el mismo año fue acusado constitucionalmente el ministro de Economía Pedro Vuscovic, por los procedimientos utilizados en la expropiación de grandes empresas. En seguida fueron blanco de similares acusaciones el 3 de diciembre el ministro del Interior José Tohá, el 15 de enero de 1972 el ministro de Justicia Lisandro Cruz Ponce, en febrero de 1972 el ministro de Agricultura Jacques Chonchol, en junio de 1972 el ministro del Interior Hernán del Canto, en diciembre de 1972 el ministro de Hacienda Orlando Millas, en junio de 1973 los ministro Sergio Bitar de Minería y Luis Figueroa del Trabajo, en julio de 1973 el ministro del Interior Gerardo Espinoza y en agosto de 1973 Carlos Briones del Interior. Ningún gobierno había sido objeto de tantas acusaciones constitucionales en las personas de sus ministros. Además, fueron acusados constitucionalmente el Intendente de Santiago Alfredo Joignant, el Intendente de Aysén Norberto Añasco, y los Intendentes de Bío Bío y Colchagua.

La marcha de las cacerolas

La oposición reaccionaria inició movilizaciones masivas en el afán de disputarle la calle a la Unidad Popular. El 1° de diciembre de 1971 realizó la llamada *"marcha de las ollas vacías"*, que nada tuvo que ver con el desabastecimiento, pues ella fue hecha por las mujeres del barrio alto, que en lujosos automóviles se dirigieron hacia el centro de la ciudad y quienes jamás carecieron de bienes de consumo, aunque solo fuese por el hecho de que donde vivían y viven –los llamados barrios altos– existía y existe comercialización de productos de todo tipo, comprendidos los alimentos. La mayoría de las mujeres que acudieron a tal marcha, además de tener los pulmones vírgenes porque nunca le habían trabajado un día a nadie, no tenían idea de lo que es cocinar y lavar ollas. El desabastecimiento servia sólo de pretexto como lo probara el hecho de que cuando llegaron al centro de la ciudad, las protagonistas sólo se dedicaron a lanzar consignas contra el gobierno e insultos y groserías contra el Presidente Allende y contra Fidel Castro que nos visitaba por esos días, mientras los guardias blancos que las acompañaban, centenares de individuos con cascos, garrotes y cadenas, protagonizaron una serie de actos terroristas. Entre las fechorías que cometieron están el asalto a dos locales del Partido Radical y a la sede de las Juventudes Comunistas, un atentado a la casa del ministro de Salud Juan Carlos Concha, una agresión al carismático líder del MAPU Rodrigo Ambrosio, y otras acciones vandálicas que duraron hasta la madrugada de

aquel primero de diciembre de 1971. Todo ello se generó como si fuera espontáneo.

Cuatro meses después la oposición resolvió salir otra vez a la calle, mostrando sus propios rostros, sin esconderse tras las faldas de las mujeres. Me refiero a la llamada "Marcha de la Democracia" que tuvo lugar el 12 de abril de 1972, encabezada por los dirigentes máximos de los partidos Nacional, Democracia Cristiana, Radical Democrático y Democrático Nacional que tres meses después constituyeron la llamada "Confederación Democrática". El diario *El Mercurio* realzó la magnitud de la marcha opositora. "El juicio unánime fue –dijo–: nunca se vio algo similar". La Unidad Popular respondió con una marcha aún más multitudinaria, durante la cual la gente gritaba "Allende, seguro, a los momios dale duro" y ¡Aquí van las tapas grandes, pa' las momias muertas de hambre! El mismísimo *El Mercurio* calificó esta marcha como "una extraordinaria demostración de masas", aunque a la vez trató de minimizarla porque a ella concurrió gente de Concepción, Viña del Mar, Valparaíso, Santa Cruz, Buin, Quillota y Los Andes que viajaron en ocho trenes especialmente contratados, "cada uno con capacidad para dos mil personas". En la Marcha de la Democracia el único orador fue Patricio Aylwin. En la que hizo la Unidad Popular, fue Salvador Allende. Aylwin, que a la fecha era Presidente del Senado, dijo en su discurso: "Nos reunimos para protestar por las amenazas y violaciones de que están siendo objeto, cada día en mayor grado y mas desembozadamente, los derechos democráticos de los chilenos y para notificar al gobierno y a quienes por tales métodos pretenden dominar al país, que no nos atemorizan y que seremos inflexibles en ejercer nuestros derechos". En el acto convocado por la Unidad Popular, el Presidente Allende, luego de realzar el hecho de que "jamás en nuestra vida se presenció un acto de esta magnitud, con este contenido y esta trascendencia", afirmó que allí nos habíamos congregado "para defender la auténtica democracia y la auténtica libertad". Y de paso criticó a los organizadores de la marcha anterior porque "tuvieron la pequeñez de querer utilizar la presencia de los 141 representantes de los países que integran la III UNCTAD, para desatar la crítica al gobierno, sembrar la duda y hacer creer que en este país no hay democracia ni libertad".

La oposición presentaba las cosas como si el país estuviera sumergido en el desorden y el caos, como si no se respetaran las libertades y los derechos ciudadanos y existiera un régimen antidemocrático que se propusiera terminar con la democracia para implantar la "dictadura comunista". Que Chile no era una taza de leche durante el gobierno de la Unidad Popular, nadie lo discutía ni lo discute hoy día; ni tampoco que había cierto grado de "desorden". Estaba en marcha una revolución, la lucha de clases adquiría un carácter agudo y con frecuencia se producían choques y enfrentamientos entre las fuerzas en pugna.

Si poco antes, bajo la llamada "Revolución en Libertad", Chile fue un país donde la agitación social, la confrontación social y política e incluso las acciones extralegales de la ultra izquierda eran moneda corriente, ¿por qué extrañarse que a veces las pugnas sociales y políticas se salieran de los marcos tradicionales durante el gobierno de la Unidad Popular, en el curso de una revolución sin comillas?

Bajo el gobierno de la Democracia Cristiana, antes y después de 1966, año en que el Parlamento aprobó la ley de Reforma Agraria, los campesinos de Melipilla, Curicó y demás provincias de la zona central, se tomaron varios fundos. En 1969 tuvieron lugar los primeros atracos a bancos. Fueron asaltadas la sucursal Estación Central del Banco Edwards, la sucursal Santa Elena del Banco Londres y la sucursal Las Condes del Banco del Estado. Y el 25 de agosto de ese mismo año se produjo el asalto al supermercado Portofino situado frente a la Comisaría de Carabineros de Los Guindos. En ese tiempo, el gobierno Demócrata Cristiano, a raíz de estos hechos, era atacado por la derecha en los mismos términos en que después, en 1971-1972 y 1973, lo hicieran la derecha y la Democracia Cristiana en contra del gobierno de la Unidad Popular. ¡Estas son las inconsecuencias de los políticos que desprestigian la política!

El paro de octubre

El 9 de octubre de 1972 la Confederación Nacional del Transporte acordó un paro nacional indefinido. Levantó como motivo su oposición a la iniciativa del gobierno de crear una empresa de transporte estatal en el vasto territorio de Aysén. Los camioneros se tomaron puntos estratégicos de la ruta al sur, el gobierno hizo uso de la ley de seguridad interior del Estado, declaró zona de emergencia las provincias de Valparaíso, Santiago, O'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepción y Bío-Bío, e hizo detener a 400 camioneros que obstaculizaban el flujo de aquellos camiones que no adherían al paro y transportaban mercancías perecibles para el abastecimiento de Santiago. Este paro causó pérdidas de 229 millones de escudos en el agro y 5 millones 646 mil escudos en el comercio y el transporte.

Apoyaron al paro, entre otras organizaciones, la Confederación del Comercio y la Producción, la Sociedad de Fomento Fabril y la Confederación de Comercio Detallista. El Partido Demócrata Cristiano señaló, primero, las condiciones que debía satisfacer el gobierno para solucionar el conflicto y luego, el 14 de octubre, acordó su apoyo total al movimiento.

La CUT afirmó que la ofensiva reaccionaria que tenía como centro el paro de camioneros, estaba destinada a provocar el caos económico con miras a derrocar al gobierno y llamó a los trabajadores a vigilar sus fuentes de trabajo. Más de un millón 800 mil obreros y empleados respondieron a su llamado y no permitieron que las industrias fueran paralizadas. Una conducta similar tuvieron los trabajadores del campo respondiendo a la voz de las Confederaciones Ránquil, Unidad Obrera Campesina y Confederación de Cooperativas Campesinas que formaron el Comando Nacional Campesino y crearon el Comité de Defensa y Vigilancia de la Producción. Un sector de los transportistas, formó el MOPARE el mismo día que se inició el paro. Lo integraron el Sindicato de Dueños de Camiones de Barranca y varios centenares de transportistas de todo el país, comprendidos, desde luego, los de Aysén. La CORFO los apoyó vendiéndoles a crédito, a través del Banco Osorno, 600 camiones FIAT con capacidad de carga de hasta 8 toneladas. El Presidente del MOPARE, Tulio Galgani, que estuvo preso en el Estadio Nacional y en Chacabuco, y exiliado en Canadá, desde donde volvió el año 2001, me contó que con ramplas y carros de arrastre cada uno de esos camiones cargaba hasta 25 mil kilos y que la flota que pusieron al servicio del Gobierno Popular alcanzaba a poco más de mil 200 doscientos camiones entre nuevos y viejos. Los camioneros del MOPARE prestaron un gran servicio al país distribuyendo las semillas para las siembras de primavera de 1972 y la leche para los niños y trasladando el cobre desde las minas nacionalizadas a las fundiciones de Ventanas, Chagres y El Salvador.

En respuesta al Paro de Octubre cientos de miles de chilenos se movilizaron para enfrentar las dificultades, principalmente en el terreno del abastecimiento. Ferrocarriles del Estado transportaba como promedio diario normal alrededor de 1.500 toneladas de alimentos destinados al consumo de Santiago. En los días del paro de octubre de 1972, gracias al esfuerzo de sus trabajadores y con la colaboración de estudiantes voluntarios, los abastecimientos que llegaron por el medio ferroviario a la capital subieron a las 3 mil toneladas diarias, es decir, se duplicaron. Lo mismo ocurrió con la carga que se enviaba desde Santiago al resto del país. 35 mil estudiantes trabajaron voluntariamente bajo la consigna ¡Póngale el hombro a la Patria! Miles de jóvenes cumplieron agotadoras jornadas de carga y descarga en las estaciones ferroviarias y en los terminales de los camiones manejados por los miembros del MOPARE. Ello atenuó las consecuencias del desabastecimiento, aunque éste no dejó de afectar al pueblo, a la gente más necesitada, pues los ricos, apenas comenzó el paro del transporte, llenaron sus *freezers* y despensas con las mercancías de consumo diario, y en alguna medida lo hacían también los sectores populares de mayores ingresos.

El gobierno tomó medidas para asegurar el abastecimiento de combustible, en primer lugar a los hospitales y otros servicios públicos. Gracias a ello la locomoción colectiva funcionó con normalidad en casi la totalidad de las provincias.

La Confederación del Comercio Minorista, presidida por Rafael Cumsille, acordó un paro de los comerciantes detallistas en apoyo a los camioneros. Una parte de estos abrieron sus negocios, sufriendo apedreos de los pijes de Patria y Libertad.

En el curso del paro de octubre, la oposición logró convertir en ley el proyecto sobre Control de Armas, presentado por el senador democratacristiano Juan de Dios Carmona, quien fue más tarde pinochetista ciento por ciento. Esta ley se prestó para que algunos oficiales que eran enemigos acérrimos del gobierno de Allende la usaran arbitrariamente, tal cosa sucedió, por ejemplo, en Punta Arenas. Allí, cada institución militar efectuó allanamientos en distintas industrias. En la Lanera Austral la FACH lo hizo en forma brutal, causando la muerte de un trabajador y provocando daños a las instalaciones de la industria. Allende mandó al ministro Sergio Insunza a informarse de lo ocurrido, constatando la conducta improcedente de la intervención militar. Insunza informó al Presidente que se emplearon procedimientos exagerados y abusivos, los que dieron origen a la indignación ciudadana contra el general Torres de la Cruz, jefe militar de la zona. El general Prats habla en sus memorias de lo exagerado de ese allanamiento y dice que, "ello está conduciendo al desprestigio de la Ley de Control de Armas".

En esos mismos días los confabulados agrupados en el Comando Nacional de Defensa Gremial, presentaron el llamado "Pliego de Chile". Lo firmaron las Confederaciones de Dueños de Camiones, del Comercio Detallista Establecido, de la Pequeña Industria y Artesanado, de Trabajadores Agrícolas de Provincias Agrarias-Unidas, de Pequeños Agricultores de Chile y de Choferes de Taxis; la Cámara Central de Comercio, la Cámara de la Construcción, la Sociedad de Fomento Fabril, la Federación de Trabajadores de la Enseñanza Particular y la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. En el pliego, en tono prepotente, le exigían perentoriamente al gobierno, como si fueran un poder que estaba por encima de él, el "fin inmediato de la cadena nacional de radioemisoras (...), alzamiento de la clausura y salida al aire de la Radio Agricultura de Los Ángeles (...), fin a la paulatina asfixia económica de la Papelera(...), promulgación inmediata de la reforma constitucional sobre la fijación de las áreas de la economía (...), enviar dentro del plazo de 48 horas un proyecto de reforma bancaria desechando el concepto de la banca única (...)", y otras exigencias señaladas en el mismo tono.

En vista de la obcecación de los confabulados, el 1º de noviembre de 1972 el Presidente Allende formó un nuevo Gabinete con participación de militares. Ocupó el Ministerio del Interior el general Carlos Prats, el de Obras Públicas el Contralmirante Ismael Huerta y en Minería el general de Brigada Aérea Claudio Sepúlveda. Los otros ministerios fueron integrados por Clodomiro Almeyda, socialista, en Relaciones Exteriores; Orlando Millas, comunista, en Hacienda; Fernando Flores, del MAPU, en Economía; Jorge Tapia, radical, en Educación; José Tohá, socialista, en Defensa; Luis Figueroa, comunista, en Trabajo; Rolando Calderón, socialista, en Agricultura; Luis Matte, independiente, en Vivienda; Juan Carlos Concha, del MAPU, en Salud; Humberto Martones, radical, en Tierras y Colonización; Sergio Insunza, comunista, en Justicia, y Hernán Del Canto, socialista, como Secretario general de Gobierno.

El Ministro del Interior, general Carlos Prats, se dirigió al país el día 3 de noviembre de 1972. En su declaración definió la posición del gobierno respecto al paro, planteando los criterios generales de solución a las peticiones gremiales y la actitud gubernamental frente a conflictos futuros que afectaren actividades vitales para el Estado. En una segunda declaración del día 4, que redactaron en conjunto los ministros Prats, Millas, Flores y Figueroa, fijaron el día lunes 6 para que los camioneros regresaran al trabajo.

Por su lado, el gobierno se desistiría de las querellas por el paro, se dejarían sin efecto los partes y requisiciones, se propondría un Proyecto de Ley para delimitar y garantizar la actividad de los transportistas privados, y éstos se comprometerían a cumplir las tarifas establecidas.

En la tarde del día 6 terminó el paro.

Pero la oposición continuó "revolviéndola". Sostuvo, ese mismo día 6 de noviembre de 1972, en sesión especial del Senado, que el gobierno se había puesto fuera de la ley. El senador Francisco Bulnes, del Partido Nacional afirmó que "el gobierno está colocado definitivamente en la ilegalidad"; el senador Acuña, del PRI dijo que el Presidente Allende "ha quebrado el régimen legal en el país"y, según publicación de El Mercurio del 7 de octubre de 1972 "expresiones similares tuvieron los senadores Patricio Aylwin y Julio Durán". Con cantinelas de este tipo siguió la oposición durante todo el año 72 y hasta el golpe militar. Así lo prueba el hecho de que con antelación a éste, el Partido Nacional, el 17 de junio de 1973 hizo una declaración de prensa con el provocador título: "El señor Allende ha dejado de ser Presidente Constitucional de Chile" y sostuvo barbaridades como "estas interferencias del gobierno dejan sin vigencia práctica al Poder judicial" y la "anarquía general en que se debate el país" se manifiesta, entre otras cosas, en "la destrucción física y moral mediante difamaciones,

persecuciones, torturas y asesinatos de quienes se oponen a los propósitos del gobierno marxista".

Según datos extraídos de cronologías de FLACSO y del libro *Los Mil Días De Allende* de Arturo Fontaine Talavera, perdieron la vida 18 personas en todo el periodo que va del 4 de septiembre de 1970 hasta el 10 de septiembre de 1973. Esas personas son: el general René Schneider, Edmundo Pérez Zujovic, el capitán Arturo Araya, el inspector de Investigaciones Mario Marín Silva y el detective Gerardo Romero, de Investigaciones; Francisco Cheuquelén Milín, asesinado en el fundo Huilío de Cautín; los hermanos Arturo y Ronald Rivera Calderón, que participaron en el asesinato de Pérez Zujovic; el miembro del VOP Heriberto Salazar Bello, Manuel Aguilar, que murió de un infarto en Punta Arenas en un incidente entre comerciantes y carabineros; el cabo Aroca de Carabineros de Concepción, en total 11, once con nombres, más tres personas que cayeron en una barricada que se levantó en Plaza Egaña como protesta por la detención del dirigente del MIR Víctor Toro, un industrial en un frigorífico cercano a Santiago, dos obreros que cuidaban una parcela en La Reina y un obrero de la industria Lanera Austral, cuyos nombres no aparecen en las fuentes consultadas. Como se puede apreciar, en la lista que doy, hay personas de uno y otro bando, o de ningún bando, y no cabe duda que faltan algunas, pero por muchas que falten, la suma total de las que cayeron durante el Gobierno de la Unidad Popular, no llega a medio centenar. La dictadura dio a conocer en su famoso Libro Blanco una nómina de 96 personas que perdieron la vida en ese período, pero en la mayoría de los casos menciona campesinos y funcionarios del agro que participaron en defensa de las tierras expropiadas y algunos en tomas de fundo. Incluye, también, los 22 militares y civiles muertos durante el amotinamiento del Regimiento Blindado N°2 en agosto de 1973, 3 personas fallecidas por infartos, 2 suicidios, los cuatro funcionarios de investigaciones que murieron en un atentado en el mismo cuartel del servicio y hasta el edecán Arturo Araya. Es decir, la mayoría gente que era partidaria del gobierno, y todos perdieron la vida en incidentes, en atentados, en luchas callejeras, en suma en un proceso revolucionario en una aguda lucha de clase, ninguno producto de torturas, de atropellos a los derechos humanos por parte del Estado.

En cambio, según se lee textualmente en el Informe Rettig –informe que no alcanzó a reunir todos los datos–"entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fueron muertas o desaparecidas 3.197 personas en manos de los agentes represores". Al lector de estas páginas dejo los comentarios.

El Tanquetazo

El 29 de junio de 1973 el país fue conmovido por una intentona de golpe de Estado que causó la muerte de 22 personas. Conocidos fascistoides y ultraderechistas habían proclamado ya, semanas antes, su propósito de derribar al gobierno. Aquel día 29 se trató de materializar esta idea siniestra. El regimiento Blindado N° 2, encabezado por el coronel Roberto Souper, se quiso tomar La Moneda a fuerza de tanquetazos. El motín fue conjurado gracias a la rápida y decidida acción de la Comandancia en Jefe del Ejército, a la lealtad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros e Investigaciones, y al hecho de que la clase obrera, apenas supo la noticia, se atrincheró en las industrias, dispuesta a tomar su parte en la defensa del gobierno.

Los protagonistas del tanquetazo no actuaron solos. Aunque fueron derrotados, el peligro no quedó totalmente conjurado, ni mucho menos, porque la referida asonada sólo fue la manifestación de una política que seguiría y siguió fríamente la derecha sediciosa.

Los confabulados contra el gobierno continuaron empeñados en derribarlo con la ayuda de al menos una parte de las Fuerzas Armadas. Aprovecharon todos sus contactos familiares y de amistad con los militares tras el propósito de atraerlos a sus posiciones e indisponerlos con las autoridades gubernamentales, a la vez que trataban de desprestigiar a los jefes militares que colaboraban con el gobierno. Usaban mucho el expediente de mandarles cartas con plumas de aves y de tirarles puñados de maíz a los ante jardines de las casas de los oficiales de diferentes rangos. Mediante las plumas y el maíz querían decirles que eran "gallinas", cobardes porque no hacían nada contra el gobierno de la Unidad Popular.

Por eso había que continuar alerta, dormir con un solo ojo, no adormecerse en los laureles de aquella victoria que constituyó la derrota de los golpistas.

El plan de la sedición contemplaba múltiples acciones y maniobras desestabilizadoras. El Presidente del PDC, Patricio Aylwin, en un discurso del 26 de julio de 1973 declaró que su partido "repudia toda solución que implique la búsqueda de salidas políticas al margen de la constitución y la ley y el desencadenamiento de la violencia, el fomento del odio y del enfrentamiento físico a través de golpes de estado o de la guerra civil o cualquier medio directo o solapado que conduzca al derrocamiento del Gobierno". Luego añadió que "mientras haya una posibilidad de salida democrática, nuestro deber es buscarla". Pero a los pocos días los presidentes provinciales del PDC plantearon como salida la renuncia simultánea del Presidente de la República y de los parlamentarios de ambas ramas del Congreso. El Presidente de los Diputados democratacristianos, José

Monares; el representante de los mismos ante el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, Humberto Palza y el Presidente de la Cámara de Diputados, Luis Pareto, entre otros, expresaron públicamente su adhesión a dicho acuerdo. El Partido Comunista denunció esta jugarreta, haciendo presente que no tendría ninguna significación en cuanto al Parlamento, pues sólo hacía seis meses que se había renovado, y recordando que en el país no había un régimen parlamentario. En cambio, la renuncia del Presidente sí tendría significación, pues con ella se trataba de poner fin al proceso de transformaciones revolucionarias y, por consiguiente, no era sino una variante apenas solapada de la sedición reaccionaria.

El mismo día del discurso de Aylwin, el 26 de julio, fue asesinado el capitán de Navío, Jefe de la Casa Militar de La Moneda, Edecán Naval del Presidente de la República, Arturo Araya. Muchos de nosotros tuvimos el agrado de conocerlo. Era un oficial meritorio, afable, inteligente, de nuestra Marina de Guerra. No fue un asesinato fortuito. Formó parte de una escalada sediciosa que a partir de ese día hasta el 3 de agosto cometiera 180 atentados terroristas, según los autores de la *Historia del Siglo XX*[33], invocando fuentes gubernamentales.

Desde abril de 1973 las FF.AA. entraron abiertamente por el camino de la deliberación como sucedió, cuando el ministro de Defensa José Tohá creyó conveniente que su colega de educación Jorge Tapia se reuniera con un grupo de 60 oficiales medios y superiores de las tres ramas de la Defensa Nacional para informarles acerca del Proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU). En esa reunión, el Almirante Huerta tomó la palabra atacando furiosamente el proyecto de la ENU, respaldado por mayoritarios aplausos de la concurrencia. Desfigurando y vapuleando el Proyecto, intervinieron el general Javier Palacios y el coronel Pedro Espinoza del Ejército, el general Gustavo Leigh de la FACH y algunos oficiales de la Armada.

Bajo el pretexto de un supuesto incumplimiento de lo convenido al término del paro de octubre de 1972, el estado mayor de la sedición lanzó un nuevo paro de transportistas el 25 de julio de 1973. Con él se creó una situación más complicada. Durante el paro del año anterior había stock de mercaderías de tal magnitud, que sus efectos más serios no se sintieron de inmediato, sino meses después. En cambio, para el paro de julio de 1973 no disponíamos de esos mismos stocks, de manera que las dificultades, sobre todo en el abastecimiento, se sintieron de inmediato y fueron mayores y colosales las pérdidas para la economía nacional.

---

[33] *Historia del Siglo XX chileno*, Sofía Correa, Consuelo Figueroa, Alfredo Jocelyn-Holt, Claudio Roble y Manuel Vicuña, 272, Editorial Sudamericana, año 2001.

En esos mismos días de julio del 73, Patria y Libertad anunció públicamente que pasaba a la clandestinidad e iniciaba la lucha armada.

A este segundo paro adhirió una parte de los trabajadores del mineral El teniente que pedían el cumplimiento de un reajuste del 41%, que el gobierno ya les había pagado al establecerse la escala móvil de sueldos y salarios. Los cuatro sindicatos que agrupaban a 7 mil 500 trabajadores, en su totalidad obreros que laboraban en los piques y en las fundiciones, continuaron trabajando. Los mineros en huelga protagonizaron una marcha hacia Santiago. Volvieron a sus faenas después de 74 días de paralización.

El paro de los transportistas paralizó el acarreo de concentrados y carga fría desde el mineral de El teniente hasta las fundiciones de Ventanas y Chagres, provocando una disminución de la producción de cobre del alrededor de 1.500 toneladas métricas. El mineral de Chuquicamata se vio también afectado en el traslado de concentrados y carga fría a las fundiciones de Paipote y Potrerillos, reduciéndose su producción en 3 mil 500 quinientas toneladas métricas durante el paro de los transportistas.

Otras consecuencias del paro fueron el menor rendimiento tributario del orden de 227 millones 320 mil escudos en la recepción del impuesto global complementario y de varios cientos de millones de la misma moneda en el pago de los impuestos de compra venta y servicios. El Ministerio de Hacienda calculó en 1100 millones de escudos la disminución de los ingresos fiscales durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Además, por las dificultades del transporte se perdieron 10 millones de litros de leche y miles de toneladas de hortalizas.

The New York Times reveló que "la mayor parte de los 8 millones de dólares autorizados para actividades clandestinas en Chile fue utilizado para constituir fondos u otros medios de apoyo a los huelguistas y trabajadores contrarios a Allende", concretamente para financiar los dos paros de los transportistas. Así pues, las dificultades que esos paros le crearon a la población fue fundamentalmente obra de las órdenes impartidas por el gobierno de Nixon y de la participación de la CIA con el fin de crear el caos en la economía chilena.

Como ocurrió ante el paro de octubre de 1972, los trabajadores siguieron laborando en las industrias, en los hospitales, en los puertos, en los ferrocarriles, en las plantas eléctricas y otros servicios. Los molineros trabajaron extraordinariamente sábados y domingos, y los funcionarios de la CORFO organizaron decenas de convoyes para el traslado de las mercaderías utilizando camiones del área social fuera de las horas de servicio. De esta manera, reforzaron y complementaron los esfuerzos que en el mismo sentido realizaba el MOPARE.

En resumidas cuentas, desde el día mismo de la elección presidencial, hasta el derrocamiento del Gobierno Popular, el imperialismo norteamericano y

la reacción chilena conspiraron incesantemente. Dicha conspiración comprendió el sabotaje en las minas de cobre, la suspensión de los créditos de corto y largo plazo del BID, del Banco Mundial, de la banca privada norteamericana; el embargo de nuestras exportaciones de cobre; el bloqueo a la importación de repuestos indispensables para el funcionamiento normal de la industria, las trabas para renegociar la deuda externa, el acaparamiento y la organización del mercado negro, la fuga de capitales; la guerra psicológica y todo un conjunto de acciones de "desestabilización" que comprendieron –como ya hemos visto– el contrabando masivo de ganado hacia Argentina y los dos largos paros en el transporte carretero.

Del Informe de la Comisión designada por el Senado de los EEUU para estudiar las operaciones gubernamentales del gobierno de Nixon, realizadas a través de la CIA, se desprende que la suspensión de los créditos norteamericanos al gobierno de Allende lo dañaron seriamente. Después de afirmar que nuestro país, a pesar de la diversificación de su comercio exterior, "continuaba dependiendo de la importación de componentes esenciales de empresas de los Estados Unidos", dice que "la posibilidad de créditos comerciales a corto plazo descendió de aproximadamente US$300 millones durante los años de Frei a cerca de US$30 millones en 1972. La caída, como resultado de una combinación de factores políticos y económicos, afectó seriamente al gobierno de Allende y a la posibilidad de compras de componentes y maquinaría de los sectores más críticos de la economía: cobre, acero, electricidad, petróleo y transporte". Y algunos renglones más adelante, agrega: "Las cifras cuentan claramente la historia. La ayuda bilateral de los Estados Unidos, que fue de US$35 millones en 1969, bajó a US$1.5 millón en 1971. Los créditos bancarios de exportación-importación, los cuales habían totalizado US$234 millones en 1967 y US$29 millones en 1969, bajaron a cero en 1971. Los préstamos del Banco de Desarrollo Interamericano (BDI). que habían totalizado US$46 millones en 1970; bajaron a US$2 millones en 1972. Los únicos nuevos préstamos hechos a Chile durante el periodo de Allende fueron dos pequeños créditos a universidades chilenas en enero de 1971. De la misma manera, el Banco Mundial no hizo nuevos préstamos a Chile entre 1970 y 1973. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional ingresó a Chile aproximadamente US$90 millones durante 1971 y 1972 para ayudar en las dificultades de cambio extranjero[34]".

[34] Citas extraídas de la versión Nizkor del llamado Informe Church, al Congreso norteamericano.

Hacia el golpe de Estado

Los cambios que ya se habían operado en el terreno de la economía, los nuevos rumbos que se seguían en política internacional y las posiciones de poder alcanzadas por la clase obrera en la dirección de las empresas del área social y en la administración del Estado, todo ello en medio de una intensa y aguda lucha de clases, mostraban claramente que Chile era escenario de un proceso de vitales transformaciones como parte de un camino que nos conduciría a crear una nueva sociedad.

En este clima de agudos enfrentamientos, las fuerzas reaccionarias se propusieron ganar los dos tercios del parlamento en las elecciones a diputados y senadores que se efectuaron el 4 de marzo de 1973, quórum que requerían constitucionalmente para ponerle al Presidente de la República la pistola al pecho, acusarlo ante el Parlamento y destituirlo.

Fracasaron. Sus sueños fueron por completo pulverizados por la lucha y la conciencia del pueblo. En esas elecciones, la oposición sacó sólo 54,5%, poco más de la mitad, pero menos de los soñados dos tercios que pretendía. Y la Unidad Popular obtuvo 43,4%, más que lo obtenido en la elección presidencial de 1970. Nunca una combinación de gobierno había logrado, dos años y medio después de ganar en las elecciones presidenciales, aumentar de tal modo su respaldo electoral. El de Allende fue el primer gobierno que a los dos años y medio de ejercer sus funciones mostró más fuerzas, sacó más votos en las elecciones parlamentarias que los votos que obtuviera cuando fue elegido Presidente. Recordemos, que Eduardo Frei fue elegido el año 64 con el 55,7% de los votos. En las elecciones parlamentarias de 1965, realizadas 6 meses después de las presidenciales, en medio de la euforia de la Democracia Cristiana, bajó al 42,3%. En las municipales de 1967 obtuvo el 35,6% y en las parlamentarias de 1969, las últimas que se realizaron bajo su mandato, logró reunir el 29% de los sufragios. Con el gobierno de Alessandri pasó otro tanto. Éste fue elegido en 1958 con el 31% de los votos. Los partidos que lo apoyaban, los conservadores y liberales, sacaron luego, en las elecciones municipales del año 1960, el 29,5% de los votos y terminaron gobernando apenas con el 23,6%.

Capítulo especial merece el aporte de la mujer chilena a la victoria del 4 de marzo. Si dijéramos que ganamos la elección por las mujeres, tal vez suene raro. La verdad es que no sólo triunfamos por ellas, puesto que no sólo ellas votaron, pero lo cierto es también, que el voto de la mujer fue decisivo. Desde las elecciones presidenciales de 1970, crecimos en votación de varones en un 15% y en votación de mujeres en un 25% del total de los votos de izquierda.

La primera vez que las mujeres votaron en Chile, de 100 votos que recibían los partidos de izquierda, sólo 13 procedían de ellas, y en las últimas elecciones que se realizaron en el gobierno de Allende, de cada cien personas que sufragaron por la izquierda, 39 fueron mujeres. Las alzas, las colas, no las confundieron, no les hicieron perder de vista el hecho de que ese gobierno tenía una preocupación primordial por el niño y la mujer, por el hogar, por la familia de los chilenos.

El Partido Comunista fue el que tuvo el mayor crecimiento de votación entre las mujeres. De cada 100 votos recibidos por este Partido 42 fueron votos femeninos. El porcentaje de votación femenina fue superior al promedio de la Unidad Popular. Presentó 6 candidatas a diputadas Wilma Rojas, Amanda Altamirano, Gladys Marín, Eliana Araníbar, Mireya Baltra y Silvia Costa, y las seis fueron elegidas. Fue el Partido que tuvo entonces en el Parlamento la más alta representación femenina y también la más alta representación de jóvenes. Por primera vez elegimos, con la primera mayoría, un representante mapuche como diputado en Cautín. Me refiero a Rosendo Huenumán.

El Partido Comunista aumentó su votación de 383 mil 49 votos obtenidos en las elecciones parlamentarias de 1969 a 627 mil 712 en 1973, comprendidos los votos que obtuvo en las elecciones de cuatro años antes en distritos donde esta vez no llevó candidato propio y votó por otros Partidos de la UP, contribuyendo a elegir al Doctor Luis Escobar del API en Cauquenes, a Alejandro Bell del MAPU en Linares y a Silvia Araya del API en la Región Sur de Coquimbo. En porcentaje creció del 15,9% logrado en las parlamentarias de 1969 al 17,14% en las de 1973. En estas elecciones el Partido Socialista también tuvo un importante aumento en votos y en parlamentarios. Recibió 687 mil 600 sufragios, el 18.37%. El Partido Radical sacó 144 mil 200, el MAPU 90 mil 700 votos, la Izquierda Cristiana 43 mil 500.[35]

La revista *Qué Pasa* dedujo que "el resultado del 4 de marzo mostró que la alternativa electoral aún no está cerrada para la Unidad Popular".

La oposición se proclamó victoriosa por el hecho de que obtuvo el 54,7% de los sufragios. Pero, no era esto lo que buscaban. No era su meta. Como ya he recordado, pensaba ganar los dos tercios para destituir al Presidente Allende.

El Mercurio comentando el resultado de las elecciones, sostuvo que *"una revolución marxista como la que ha estado desarrollándose en Chile no se detiene con una campaña publicitaria para convencidos ni con las tareas partidistas tradicionales"*.

---

[35] Desde poco antes de las elecciones presidenciales los radicales habían sufrido dos divisiones, la primera encabezada por Julio Durán y la segunda por Luis Bossay. El MIR no presentó candidatos y llamó a los suyos a votar por los socialistas o los comunistas.

El sector más reaccionario de la oposición se dedicó, entonces, a preparar nuevas escaladas sediciosas, a buscar por cualquier medio la caída del gobierno, antes que éste lograra remontar los obstáculos y el proceso revolucionario se afianzara definitivamente.

La revista *SEPA* que dirigía el periodista Rafael Otero, a quien sus colegas de izquierda llamaban el "enano maldito" publicó un reportaje que tituló en primera página "¿Cómo eliminar a Allende?". En su texto decía que "no queda ahora más que la lucha a muerte".

En adelante, y menos que nunca los acontecimientos no se desarrollarían en forma idílica, plácidamente, sino en medio de un forcejeo constante entre las fuerzas partidarias de la revolución y las que estaban por la contrarrevolución.

El pueblo no renunciaba, ni podría renunciar jamás, a las modificaciones que se requerían en las instituciones del Estado.

Los reaccionarios nos acusaban de pretender la totalidad del poder. A nombre de los comunistas les respondí de inmediato. "¡Sí, señores, eso queremos! Pretendemos que todos los poderes estén al servicio del pueblo, cada cual desde su órbita de acción y conforme a los límites que fije la ley, manteniendo el pluralismo y el reconocimiento de los derechos a quienes sean opositores, siempre que sus acciones se encuadren dentro de las normas jurídicas vigentes o de las que se dicten. ¿Qué pecado hay en esto? Si las clases hasta ayer del todo dominantes tenían en sus manos la suma de los poderes, ¿por qué el pueblo no puede aspirar a lo mismo? Derecho tiene a hacerlo y necesidad hay que así suceda. Una revolución debe expresarse en todas las esferas de la vida, en la estructura y en la superestructura de la sociedad. Así han sido y serán todas las revoluciones. Así fueron las revoluciones burguesas, y así son y deben ser las revoluciones populares".

"¿Cómo dejar incólume el Poder Legislativo o el Poder Judicial, si, como hemos dicho, se han convertido en trincheras de los enemigos del progreso, no funcionan de acuerdo con los tiempos, huelen a naftalina y sus ministros o jueces andan con polainas? Si, como se decía en el régimen pasado, todo tiene que cambiar, ¿por qué ahora se defiende esto, que es el sumum de la anti-democracia[36]?"

En esta situación, en maridaje con el imperialismo norteamericano, la reacción criolla se lanzó por el camino del golpe de estado, que se concretaría seis meses después, el día 11 de septiembre, impactando al mundo por su brutalidad y dando inicio a una dictadura terrorista, de tipo fascista que como ya he dicho, dejó miles de muertos y desaparecidos, miles de torturados y más de un millón de chilenos arrojados al exilio.

---

[36] Discurso pronunciado en el Teatro Caupolicán el 8 de julio de 1971.

9.- El Gobierno de Allende y las Fuerzas Armadas.

"La revolución chilena permitirá la participación activa de nuestras Fuerzas Armadas con un rango notable y protagónico en el proceso de liberación y desarrollo del país. Esto no implica, como es natural, que nos vayamos a empeñar en una carrera armamentista sin sentido, impropia de un gobierno llamado precisamente a interpretar la realidad latinoamericana en su contexto, bajo la inspiración de los propósitos de paz que siempre anhelan los pueblos y que nada tienen que ver con las situaciones conflictivas que fluyen de los afanes de predominio económico o de las pretensiones del imperialismo. Este gobierno necesita de la contribución eficaz, responsable y patriótica de las Fuerzas Armadas". (declaraciones a la Agencia latinoamericana de Prensa, 10 de febrero de 1971.)

Un camino auspicioso en las relaciones entre las FF.AA. y el pueblo

Cerrar el abismo de recelos e incomprensiones entre los partidos de izquierda y las Fuerzas Armadas fue una preocupación constante del Presidente de la República y de la Unidad Popular desde el primer día del nuevo gobierno.

Salvador Allende tuvo clara conciencia de la necesidad nacional y de la posibilidad de hacer participar a los militares en el proceso transformador. Por su lado, no pocos de los integrantes de las FF.AA. empezaron a mirar con buenos ojos, con interés y hasta con simpatía, los cambios que se realizaban o proyectaban. Algunos llegaron a considerar como propio el proceso en marcha. Sintieron que interpretaba sus aspiraciones.

La preocupación del Presidente Allende y de la Unidad Popular de apoyarse en los sectores democráticos de las FF.AA. buscaba una identificación creciente de los militares con el pueblo.

En el Ejército, la Marina de Guerra y la Aviación primaba un espíritu de respeto a la Constitución. El constitucionalismo y el profesionalismo, más concretamente, el principio de la subordinación de las Fuerzas Armadas al gobierno democráticamente constituido, fue incorporado expresamente a la Constitución de

1925. Rigió a partir de la década del 30. En efecto, los altos jefes que comandaban las instituciones militares hicieron fracasar todos los intentos golpistas que se conocieron desde la elección de Arturo Alessandri en 1932 hasta la de Salvador Allende en 1970, esto es, las maniobras de una parte de la derecha dirigidas a sacar al Ejército de sus cuarteles para que desconociera el triunfo del Frente Popular en 1938, la asonada del general Ariosto Herrera que en agosto de 1939 se alzó contra el Presidente Aguirre Cerda, el motín del general Roberto Viaux contra el Presidente Eduardo Frei en 1969 y el movimiento subversivo del mismo general Viaux que en septiembre-octubre de 1970, en connivencia con el gobierno de Washington y un sector reaccionario, trató de impedir, por la fuerza de las armas, que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República. Sin pretender apocar en lo más mínimo la conducta constitucionalista de los mandos militares, en las 4 ocasiones mencionadas el pueblo chileno se cruzó también en el camino de los golpistas.

El hecho de que durante más de 40 años el país estuviera libre de golpes militares que eran tan frecuentes en América Latina, llevó a muchas personas a hablar, con cierto orgullo nacional, del profesionalismo de las Fuerzas Armadas chilenas.

Ese profesionalismo y ese constitucionalismo habían favorecido por décadas la dominación de la burguesía, luego que ésta desplazara a la oligarquía aristocrática de las posiciones hegemónicas en el poder. Favorecieron también al gobierno del Presidente Allende en tanto la Constitución obligaba a las Fuerzas Armadas a respetar a las autoridades emanadas de la voluntad ciudadana y mientras las instituciones castrenses y ante todo el Ejército estuvieron comandadas por jefes íntegros, de prestigio y leales como Schneider y Prats

El general René Schneider fue designado Comandante en Jefe del Ejército por el Presidente Frei Montalva en reemplazo del general Sergio Castillo Aránguiz, quien había sido débil para enfrentar el levantamiento del general Viaux. Firme partidario del respeto a la Constitución fue el general Schneider. Lo declaró tajantemente al diario *El Mercurio* el 8 de mayo de 1970. El 7 de septiembre, tres días después de las elecciones presidenciales, reunió a los generales y les dijo que al Congreso Nacional le corresponde decidir cuál de los dos, Allende o Alessandri, será el futuro Presidente de Chile y "a quien elijan ahí, sea quien sea, lo debemos apoyar hasta las últimas consecuencias". Tal era su posición, aún a sabiendas que lo más probable era que el Congreso Pleno ratificara el triunfo del candidato de los partidos de izquierda. El general Prats era de esta misma opinión.

El Programa de la Unidad Popular, en su texto y aplicado dentro de los marcos legales, no merecía objeción en la mayoría de los miembros de las instituciones militares, dado su contenido esencialmente patriótico. Partiendo sólo de los deberes propios de las Fuerzas Armadas, el cumplimiento de ese Programa

despertaba en ellas alguna simpatía, pues estaba destinado a sacar a Chile del subdesarrollo, a fortalecer su economía, su infraestructura y por lo tanto a crear condiciones materiales muy sólidas que aumentarían la capacidad defensiva de la nación.

El pensamiento del general Carlos Prats era muy claro. A poco de asumir como Comandante en Jefe del Ejército, emitió una circular denominada Definición Doctrinaria Institucional, en la cual –según expresa en sus *Memorias*– reiteró "la posición doctrinaria del Ejército, señalando que debe ser comentada en forma muy precisa por cada general ante todos sus subalternos, representándoles que "ningún soldado puede apartarse de sus postulados", ni adecuarlos –maliciosa o ingenuamente– a sus intereses personales sin transgredir gravemente los principios básicos que condicionan la existencia misma del Ejército".

En dicha circular el general Prats señalaba que la institución "como parte intrínseca del pueblo de Chile no puede mantenerse al margen de la legítima visión general de lograr el mas alto grado de desarrollo autárquico en aras del bienestar ciudadano; por lo que, complementariamente, debe elevar y amplificar su "aptitud participativa", para asumir aquellas tareas específicas que contribuyan eficazmente al fortalecimiento del potencial económico defensivo del país".

Agregaba que "conforme al Artículo 22 de la Constitución Política del Estado, el Ejército es parte constitutiva de la "fuerza pública". Por lo tanto asegurará leal y firmemente –lo ha hecho siempre– la estabilidad del gobierno institucional".

"Su participación eventual en situaciones internas la dispone expresamente el Supremo Gobierno para imponer el imperio de la Ley, cuando exigencias de la seguridad nacional la hacen indispensables. Por consiguiente, el Ejército mantendrá su permanente alistamiento y sus medidas internas de seguridad, para reaccionar oportuna y eficazmente –cuando el Ejecutivo lo requiera– en resguardo de los grandes intereses nacionales".[37]

Los principios contenidos en la circular precitada fueron aplicados por el Ejército con ocasión del primer Paro del Transporte, paro de carácter sedicioso de octubre de 1972. Entonces se formó un Ministerio con participación militar. Se constituyó el 1° de noviembre de 1972, cuando el paro de los camioneros, promovido por los reaccionarios, afectaba gravemente el transporte y el abastecimiento del país. El Comandante en Jefe del Ejército, general Carlos Prats, se hizo cargo del Ministerio del Interior, el general de Aviación Claudio Sepúlveda

---

[37] *Memorias. Testimonio de un soldado*, Carlos Prats González, página 196, Pehuén Editores, año 1985.

del Ministerio de Minería y el Contralmirante Ismael Huerta de Obras Públicas. Junto a las Fuerzas Armadas, la clase obrera pasó a ocupar una posición relevante con Luis Figueroa, comunista y Presidente de la Central Única de Trabajadores como ministro del Trabajo y Rolando Calderón, socialista, Secretario general de la CUT, como ministro de Agricultura.

En los días previos a la formación del gabinete cívico-militar la oposición pasaba a la desobediencia al poder constitucional y al desacato de la autoridad militar, empezó a descolgar sus radios de la cadena obligatoria, acentuó sus actos de terrorismo y el Partido Nacional amenazó con acusar constitucionalmente al Presidente de la República, a ministros de Estado y al Comandante en Jefe del Ejército. La derecha y algunos democratacristianos habían logrado el apoyo del Contralor general de la República que se pronunció contra algunas requisiciones y un pronunciamiento del ministro Erbetta de la Corte de Apelaciones en contra de la cadena radial obligatoria. Hasta la Corte Suprema Suprema entró al baile tratando de cuestionar la actuación del gobierno. El conjunto de estos hechos tuvo la virtud de producir un cambio tanto en el pueblo como en las FF.AA. Se vio clara la necesidad de poner mano firme. La clase obrera había sido la fuerza fundamental que impidió la paralización del país, pues se mantuvo laborando en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los puertos, en los ferrocarriles y demás sitios de trabajo. Al mismo tiempo, las FF.AA., al formar parte del gabinete ministerial fueron un factor esencial, un dique contra la sedición. La constitución de este gabinete fue un avance y un signo de fuerza del Gobierno constitucional, de la democracia chilena. Baste recordar que los camioneros tuvieron que ponerle fin a su paro.

El gabinete cívico-militar surgió pues, ante una situación concreta. El Presidente de la República le asignó de inmediato tareas muy precisas, para un período que podríamos decir iba desde noviembre de 1972 hasta marzo de 1973, y que incluyó la necesidad de garantizar la realización de las elecciones parlamentarias, impidiendo que los grupos fascistas transformaran la campaña electoral en una reyerta sangrienta.

En el gobierno y en la Unidad Popular influyeron, en relación a las FF.AA., concepciones erróneas muy arraigadas en la mentalidad chilena que, de una u otra forma y en mayor o menor medida, alcanzaron a todos los partidos. Me refiero, especialmente, a la creencia de que las FF.AA. de Chile se singularizaban por su subordinación al poder ejecutivo, por su prescindencia política y por su sentido profesional. Afianzó esta creencia la posición constitucionalista que asumieron los generales Schneider y Prats en un momento crítico y trascendental para la vida del país, como fue el que todos vivimos en tanto se conocieron los resultados de las elecciones a Presidente.

Sin pretender afirmar que los comunistas estábamos completamente inmunes a las referidas concepciones erróneas, es preciso dejar en claro que nunca estuvimos de acuerdo, por ejemplo, con la idea de que el Ejército era "el pueblo con uniforme" y así lo dijimos públicamente. Más aún, en noviembre de 1969, después del intento golpista de Roberto Viaux, expresamos que el período de prescindencia de las FF.AA. en la vida política –prescindencia que nunca fue absoluta– había terminado o tendía a terminar. Agregamos en esa misma ocasión que no éramos defensores de la estructura ni de todos los preceptos que norman la vida de las instituciones armadas y que los partidos de la burguesía siempre buscaron el apoyo de los militares. Estábamos convencidos, a la vez, como ya está dicho, que en la oficialidad primaban las ideas democráticas y progresistas. Prats no era el único, aunque sí el más importante. Abrigaron pensamientos y sentimientos semejantes, entre otros, los generales Guillermo Pickering, Mario Sepúlveda y Ervaldo Rodríguez, que estuvieron siempre al lado del general Prats en ese tiempo complicado y difícil; el general Joaquín Lagos, que renunciara al Ejército a raíz de los crímenes cometidos por la Caravana de la Muerte a su paso por Antofagasta, donde tenía su asiento la Primera División que él comandaba; el general Augusto Lutz, una de cuyas hijas escribió un libro denunciando su muerte en manos de los militares, hecho que se había mantenido en secreto; el coronel Ariosto Lapóstol de La Serena, que le salvó la vida al intendente comunista Rosendo Rojas cuando llegó a esa ciudad la ya mencionada caravana; el coronel Renato Cantuarias, del Ejército, Comandante del Regimiento de Alta Montaña de Los Andes, arrestado a la una de la mañana del 11 de septiembre para después aparecer muerto; los generales Alberto Bachelet y Sergio Poblete, los coroneles Roberto Sánchez y Ernesto Galaz, los capitanes Silva y Vergara, todos ellos de la Fuerza Aérea; y el capitán Arturo Araya de la Marina, que fue edecán del Presidente Salvador Allende. El Informe Rettig contiene un dato tanto o más elocuente que los anteriores en el sentido que no eran pocos los miembros de las Fuerzas Armadas que no comulgaban con la Junta fascista. El informe dice que se efectuaron 299 Consejos de Guerra en los cuales aparecían 1.999 ex oficiales de las distintas ramas de las FF.AA. acusados de sedición, traición a la patria o incumplimiento de deberes.

Muchos otros oficiales y suboficiales de las FF.AA. y Carabineros pasaron por las cárceles, conocieron el exilio o fueron separados de las filas. Conversé con algunos de ellos. A Víctor López Zambrano, suboficial de la Marina y Jefe de radar en el "Prat" y a Julio González, cabo primero de la Marina, les pregunté por el movimiento "subversivo" que en 1973 se le imputó a la marinería y suboficialidad. Víctor López fue tajante: "Los constitucionalistas – me dijo– éramos nosotros. Debiera reconocerse que no estuvimos con el golpe y no deben quedar impunes los que participaron en él, y esto para que no se repita". Julio

González, me expresa, por su parte: "Nosotros teníamos simpatía por Allende, cuya preocupación por la tecnología de punta en la Armada fue muy importante. No necesitábamos pertenecer a un partido político para tomar conciencia de la situación de clase que existía en la Marina". Víctor López retoma la palabra para decir que ya el 4 de septiembre escuchó a varios oficiales hablar directamente contra Allende y que entonces se empezó a preguntar "¿por qué están en contra?". "En 1973 –me expresa– nos dábamos cuenta que se estaba preparando el golpe, pero no teníamos contactos con el gobierno. Nos contactamos con Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón a través de un familiar de uno de nosotros. Como un marino más, Juan Cárdenas habló con Altamirano, y le contó todas las charlas y las arengas, la preparación que había. Otro grupo se contactó con Miguel Enríquez. Y eso fue todo. Pero en la reunión que tuvimos con ellos hubo infiltrados y se tomaron las más drásticas medidas contra la suboficialidad y la marinería.

Sospechando que podía haber infiltraciones, el entonces diputado comunista por Valparaíso, Manuel Cantero, desistió de ir a esa reunión a la que también había sido invitado.

Igualmente, conversé con Juan Humberto Campos, teniente en retiro de Carabineros y exonerado político. Me dijo que en Carabineros la jerarquía era y es aún más espantosa. Con énfasis y orgullo anotó: "Yo era del 'perraje', de raíz pobre, y llegué a oficial gracias al gobierno de Allende".

Debo agregar que estas tres personas con las que me entrevisté fueron barridas de las instituciones a las que pertenecían. En la Armada, son alrededor de 800 los exonerados, de ellos 40 en el mes de agosto de 1973. En el Ejército y en la FACH la razzia fue más grande. Muchos que permanecieron en las filas, de todos los rangos, tuvieron que callar sus opiniones y ocultar sus sentimientos reales.

El deterioro en la correlación de fuerzas repercutió de tal modo en las instituciones armadas que numerosos oficiales y suboficiales se sintieron confundidos, frustrados y paralogizados. A esto se agregó el hecho de que ni como gobierno ni como Unidad Popular habíamos elaborado, con los militares leales, un plan operativo que mereciera tal nombre para enfrentar y derrotar un eventual golpe de Estado.

En las elecciones de marzo de 1973 la oposición fracasó en su propósito de obtener los dos tercios del Parlamento para destituir al Presidente. En estas circunstancias, su sector más reaccionario volvió a colocar el golpe de Estado al orden del día. Y precisamente, en ese momento, se prescindió del concurso militar en el gobierno. Esto constituyó un grave error, un error sectario, de "izquierda". A los ojos de muchos militares se dio la impresión que el gobierno recurría a ellos sólo cuando los necesitaba en determinadas coyunturas políticas, que eran objeto de uso y que no había real disposición por integrarlos al proceso nacional de modernización del país.

La falta de un criterio común en los partidos de la Unidad Popular desmotivaron de tal forma al general Prats y a los demás ministros militares que se sintieron obligados a renunciar al Ministerio, después de haber desempeñado un papel de primera importancia para todo el país, desde el paro de octubre hasta las elecciones del 3 de marzo. El Presidente Allende, con el respaldo de una parte de la Unidad Popular trató de convencerlos para que continuaran en el Gabinete. Pero no tuvo éxito, y el 27 de marzo de 1973 los ministros militares dejaron el Ministerio.

Las diferencias en el seno de la Unidad Popular –diferencias de enfoque sobre los problemas más vitales que había que encarar–, siguieron manteniéndose a pesar de las coincidencias y declaraciones unitarias que habíamos formulado los Secretarios generales de los Partidos Comunista y Socialista, valorando el resultado de las elecciones del 3 de marzo. Esas diferencias, notorias para todo el mundo, llevaron al general Prats a entregarle un memorándum al Presidente de la República con las opiniones que se había formado en torno a las contradicciones que veía entre los partidos de gobierno. Copia de ese memorándum nos entregó el general Prats a Volodia Teitelboim y a mí, haciéndonos presente que las discrepancias políticas que veía en la UP impedían una mejor labor de conjunto y contribuían a agravar los problemas y a favorecer la ofensiva de la oposición.

La otra cara de la moneda

El golpe militar que derribó al gobierno del Presidente Allende fue de tipo fascista, brutal, antidemocrático y antinacional.

Formalmente se dio contra el gobierno de la Unidad Popular, que seis meses antes había obtenido el 43% de los sufragios en las elecciones parlamentarias. Ya era de por sí muy grave que las Fuerzas Armadas hicieran uso de todo su poder de fuego para pisotear la voluntad de casi la mitad de la población y atacar con saña y alevosía a las organizaciones populares. Si tenemos presente que gran parte de la oposición, si bien era abiertamente crítica, no buscaba la caída del gobierno, se puede decir que el golpe se dio contra la voluntad de la mayoría del país.

Al tenor de los hechos más a la vista, las Fuerzas Armadas aparecen como las principales responsables de la ruptura constitucional y de la instauración de la dictadura que arrasó con todas las instituciones democráticas y las libertades públicas.

Veamos qué dicen los hechos.

La ciudadanía no llamó a las FF.AA. a intervenir como sostenía el tirano. Pero sí lo hizo la reacción. El Mercurio se dedicó a ambientar la idea de la "legitimidad de la intervención militar". Luego de las elecciones de marzo de 1973, sostuvo que sus resultados indicaban "que una revolución marxista como la que ha estado desarrollándose en Chile no se detiene con una campaña publicitaria para convencidos ni con tareas partidistas tradicionales". Abría también sus páginas al general Alfredo Canales, que había sido llamado a retiro por conspirador y afirmaba que las Fuerzas Armadas "no pueden seguir ciñéndose a una Constitución que no existe", porque ésta habría sido sobrepasada por el Gobierno Popular.

Todo esto indica que las FF.AA., hablando en general, fueron engañadas, presionadas o arrastradas a posiciones antidemocráticas mediante una sistemática propaganda anticomunista y la invocación del deber de acatar las resoluciones de los mandos superiores.

Quienes busquen formarse de las FF.AA. una opinión no precisamente unilateral y se esfuercen por descubrir lo que hay en el fondo de sus conductas de ayer y de hoy, concluirán por ver los intereses de clase que siempre se han movido a su alrededor.

Luego de la Independencia, en la formación del Estado Chileno, las Fuerzas Armadas desempeñaron un papel no exento de aspectos positivos. Pero nunca, ni siquiera en los días de su gloriosa lucha por la libertad de Chile, han estado por encima de las pugnas sociales. Más de alguna vez estuvieron al servicio de los intereses más mezquinos de la oligarquía. En el siglo XX los gobiernos oligarcas o burgueses utilizaron muchas veces a las Fuerzas Armadas para aplastar con sus armas las luchas de los trabajadores por sus derechos y reivindicaciones. Sólo entre 1901 y 1920 el Ejército y la Armada intervinieron en 293 movimientos huelguísticos, entre ellos la masacre en la "Escuela Santa María" en diciembre de 1907, y en los años siguientes lo hicieron en las oficinas salitreras de "San Gregorio" y "La Coruña", en Punta Arenas y otras ciudades y lugares. En todos estos casos, las Fuerzas Armadas dispararon contra el pueblo indefenso.

En algunas ocasiones han estado animadas, en cambio, de propósitos nobles. Por ejemplo, en el movimiento militar de 1924, en la oficialidad joven del ejército gravitaban corrientes progresistas. Los marinos y suboficiales que participaron en la sublevación de septiembre de 1931, tuvieron una motivación todavía más anti-reaccionaria.

El Ejército ha sido varias veces reorganizado y purgado. Tras la abdicación de O'Higgins, la aristocracia triunfante eliminó de sus filas a los partidarios

del prócer. Después de 1891, la razzia anti-balmacedista saqueó y arrasó cuanto encontró a su paso. Los militares que habían sido leales al gran Presidente fueron aventados de las filas y perseguidos aquellos hombres progresistas que no habían faltado a sus deberes con la Patria. No pocos sufrieron venganzas feroces.

A lo largo de su vida, el Ejército chileno ha pasado por diversos periodos. Primero estuvo bajo la influencia francesa. A fines del siglo XIX, abrió sus cuarteles a los instructores germanos. Desde hace más de seis décadas está adscrito a la doctrina y a los planes bélicos del imperialismo norteamericano. La Marina y la Aviación han caído también bajo la subordinación del Pentágono. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que se firmó en 1947 en Río de Janeiro, hace que las instituciones armadas de Latinoamérica –con la excepción obvia de Cuba y Venezuela– sean consideradas cuerpos dependientes del mando militar yanqui. Esta dependencia está refrendada por los pactos militares bilaterales. El pacto militar chileno-norteamericano, firmado en 1952, obliga a nuestro país a cambio de "ayuda" en armas, a suministrarle a los EEUU materia prima elaborada o semi-elaborada, con expresa prohibición de vendérsela a países socialistas. Desde aquel tiempo la dependencia ha sido creciente. Casi no hay oficial de las FF.AA. de Chile que no haya sido adoctrinado por los norteamericanos. Esa dependencia ha llegado a tal extremo que el Comando Sur de las Fuerzas Armadas norteamericanas con sede en Panamá o las autoridades del Pentágono tienen comunicaciones radiotelefónicas directas con las Fuerzas Armadas chilenas, sin el conocimiento de los gobiernos civiles. Más aun, existe un correo aéreo militar que regularmente transporta correspondencia y también personal entre unas y otras al margen de los conductos regulares y oficiales del Estado chileno.

Durante la Segunda Guerra Mundial surgió la "Doctrina de la Solidaridad Hemisférica" frente al enemigo externo, es decir, extra continental. Para muchos esta doctrina parecía destinada a alinear a todas las naciones del continente en contra de la agresión nazi, a prestarle a EEUU el mayor apoyo posible en la guerra contra el eje Berlín-Roma-Tokio, sobre todo en el suministro de materias estratégicas al más bajo precio, cobre, molibdeno y manganeso en nuestro caso. Una vez que terminó aquella contienda, la doctrina de la seguridad hemisférica se mantuvo en pie, esta vez con propósitos agresivos contra los obstáculos a la dominación mundial imperialista, que en el esquema del Pentágono pasaron a ser la Unión Soviética y los países que tomaron el camino al socialismo. Al mismo tiempo, se empezó a hablar de la forma interna que podría revestir una supuesta agresión exterior y, luego, más abiertamente, del "peligro de la agresión interna", del "peligro del comunismo" en cada país y a escala continental.

Desde el año 1940, el ejército y demás instituciones armadas, comprendido el cuerpo de carabineros, empezaron a ser modificados de acuerdo al modelo norteamericano. Fue precisamente en abril de ese año que Washington y Santiago acordaron instalar en nuestro país una Misión Aérea norteamericana. Luego vinieron las Misiones Militares y Naval. Su papel consistió en acentuar el trabajo de persuasión de los militares chilenos para equipar y adiestrar sus instituciones de acuerdo a las normas y técnicas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Desde aquel tiempo entraron a celebrarse toda clase de conferencias interamericanas, uniendo cada vez más a nuestro país a la política imperialista de los EEUU y atando a su engranaje militar a nuestras FF.AA.

Es preciso considerar también la influencia que han tenido los viajes a Norteamérica y Panamá de los oficiales chilenos que han pasado por las escuelas militares yanquis. Sólo entre 1950 y 1969 fueron instruidos 3 mil 667 oficiales chilenos en la U.S School Of The America. Han sido y son educados por décadas en la doctrina de una falsa "seguridad nacional", en principios que no tienen nada que ver con los que sustentara el padre de la Patria y creador del Ejército y de la Marina, el libertador Bernardo O'Higgins. Fueron concientizados en la antipatriótica idea de que su misión consiste en combatir el "enemigo interno", no el verdadero –la oligarquía– sino el supuesto, el inventado, el comunismo y, en definitiva, como lo han demostrado los hechos, su propio pueblo.

Carlos Altamirano, en su interesante libro *Las razones de una derrota*, escrito y publicado en 1979, cuando el Partido Socialista y él personalmente se declaraban marxista-leninistas, escribió lo siguiente: "el imperialismo norteamericano hizo su entrada a la fuerza en la instrucción de nuestros militares, utilizando todas las variedades posibles de formas de penetración, desarrollando al mismo tiempo una dependencia casi absoluta sobre el plano tecnológico y de aprovisionamiento en material de guerra. Podemos medir la amplitud de la infiltración si consideramos que entre 1950 y 1972, 4 mil 932 militares chilenos recibieron un entrenamiento intensivo en EEUU, y que a partir de 1968, prácticamente todos los cadetes de la Escuela Militar recibieron una instrucción de contra-guerrilla en la zona del canal de Panamá por un período de dos meses. Y hay un elemento todavía más revelador: el 55% del cuerpo de oficiales han sido entrenados de una u otra manera, en los centros de instrucción norteamericanos". (...) "La burguesía y el imperialismo tenían una política bien definida en dirección a las Fuerzas Armadas, comprendían que ellas eran su garante natural y en consecuencia no despreciaron nada para alcanzar su objetivo estratégico: la sublevación militar. Todo el modelo de actividad contrarrevolucionaria que fue puesto en práctica –la guerra psicológica, el caos económico, la lenta pérdida de la legitimidad del

gobierno y la imagen de "desorden colosal"– se dirigía a un solo y único blanco, las Fuerzas Armadas[38]".

El conocido Informe Church, habla de la injerencia de los EEUU en las Fuerzas Armadas de Chile con vista al golpe de Estado del 11 de septiembre. Dice textualmente: "Las relaciones de los Estados Unidos con los militares chilenos durante 1970-1973 deben ser vistas como telón de fondo no sólo de la tradición de estrecha cooperación entre los servicios americanos y chilenos y las continuadas acciones de inteligencia, sino también en el contexto del Plan de Acciones II - un intento para fomentar un golpe de Estado". "La estrecha cooperación personal y profesional entre los oficiales chilenos y americanos tiene una extensa tradición. La presencia de militares americanos en Chile era importante, formada por agregados militares, la Embajada, y miembros del Grupo Militar que proporcionaba entrenamiento y asistencia a los servicios del Ejército chileno". "A finales de 1971 y comienzos de 1972, la CIA adoptó una postura más activa vis-à-vis con su programa de penetración militar, incluyendo un intento a corto plazo para financiar un panfleto de noticias en contra del gobierno dirigido a los servicios del Ejército, compilación de listas de arrestos y otros datos operacionales, y su operación de decepción". "Los informes de inteligencia sobre la conspiración golpista alcanzaron dos periodos cumbres, uno en la última semana de junio de 1973 y el otro durante finales de agosto y las dos primeras semanas de septiembre. Está claro que la CIA recibió informes de inteligencia durante los meses de julio, agosto y septiembre de 1973 del plan golpista a través del grupo que llevó a cabo con éxito el golpe del 11 de septiembre". "Las acciones de recopilación de información referente al ejército chileno incluían actividades que iban más allá de la mera recopilación de información. Generalmente, estas acciones deben ser vistas en el contexto de la oposición de los Estados Unidos, de forma abierta y encubierta, al gobierno de Allende. Estas ponen al gobierno de los Estados Unidos en contacto con aquellos chilenos que buscaban una alternativa a la presidencia de Allende".

Con el correr de los años, a nuestras FF.AA. se les cambió la mentalidad, se les inculcaron ideas ultra-reaccionarias, se les metió en la cabeza lo del enemigo interno, se les enseñó el empleo de la tortura y de toda forma de violencia contra la gente modesta, se les educó en el repudio de la lucha de los trabajadores, en el desprecio por las tradiciones democráticas, las organizaciones sindicales y los partidos políticos de izquierda.

---

[38] *Chili: Les raisons d'une defait*, Carlos Altamirano, Edictorial Flammarion. Printed in France, Año 1979.

La transmutación ha sido enorme, particularmente la que ha tenido lugar bajo la égida del Pentágono, con el acuerdo de las clases reaccionarias y, a ratos, con la inconciencia de gran parte de las fuerzas progresistas.

Sólo el hecho de que las FF.AA. chilenas hayan sido largo tiempo instruidas conforme a los intereses foráneos explica que ellas se hayan prestado a los crímenes y fechorías del régimen fascista para combatir a su propio pueblo.

Después del triunfo de la revolución cubana, la lucha por la liberación nacional y social contra el imperialismo norteamericano alcanzó gran auge. La respuesta principal de los Estados Unidos fue la llamada "Alianza para el Progreso". Para evitar la revolución se debía hacer algunas reformas, pensaron los jerarcas de Washington y las promovieron en Chile y en otras naciones de América Latina. Pero ellos nunca juegan a una sola carta. Por esto, en la década del 60 se dedicaron, a la vez, a preparar a los ejércitos de casi todo el continente en la guerra antisubversiva, contra operaciones de guerrillas, contra el enemigo "interno", en el hecho, en el fondo contra luchadores de sus propios países.

La dictadura trató de justificar los crímenes cometidos, todos los atropellos a los derechos humanos que asombraron e irritaron al mundo, sosteniendo cínicamente que el país estaba en guerra. Esta guerra de las Fuerzas Armadas contra el "enemigo interno" tuvo rasgos singulares. Virtualmente ocasionó bajas en un solo lado. Los miles de hijos de nuestro pueblo que cayeron en ella, lo hicieron sin haber empuñado un arma de fuego, salvo excepciones muy contadas. Perecieron también no pocos niños y mujeres. Algunas de éstas desaparecieron en las cámaras de tortura de la DINA, incluso hallándose embarazadas.

Los altos mandos que organizaron el golpe incurrieron en el delito de sedición al arrogarse atribuciones que no tenían. Y en tanto derribaron el gobierno constitucional comenzaron a impartir órdenes para detener a medio mundo y hacer uso de las armas contra quienes presentaran aunque fuese la más leve resistencia. El Código de Justicia Militar permitía al subordinado representar la ilegalidad e inconveniencia de ese tipo de órdenes de sus superiores jerárquicos. Hubo oficiales, suboficiales y soldados que se atrevieron a ello. Pero fueron aventados de las filas en el primer momento y algunos incluso fusilados o encarcelados. En estas circunstancias, los oficiales, soldados y tropas que veían con simpatías al gobierno del Presidente Allende o que simplemente no querían salirse de la Constitución, consideraron que no tenían otro camino que ocultar sus verdaderos sentimientos y mantenerse silenciosos en las instituciones armadas, en la esperanza de que éstas pudieran más tarde modificar su actitud.

Ayudar a las FF.AA. a desprenderse de la dependencia norteamericana, de la ideología de tipo fascista, y a crear una nueva estructura y una nueva doctrina castrense es una tarea patriótica de la mayor importancia. Es una tarea que deben imponerse los propios militares con el apoyo de todos los chilenos.

Por duro que sea, se debe reconocer que las FF.AA. bajo el régimen de Pinochet, estuvieron al servicio de los enemigos reales del pueblo de Chile.

Los suboficiales, como los clases, eran sometidos a una presión ideológica y psicológica cotidiana que, junto al sistema de adiestramiento imperante, los convertían en entes que obedecían de manera maquinal las órdenes superiores, cualesquiera que ellas fueren.

Ahora se requiere que sean educadas en otros principios y valores.

Una educación verdaderamente democrática en las escuelas y cuarteles debe contemplar el aprecio, la consideración y el respecto por los obreros y campesinos, por nuestros pueblos aborígenes, por nuestros compatriotas más humildes.

Democratización de las instituciones armadas

En el campo militar se ha llegado a sostener que el primer Ejército de Chile de carácter profesional fue creado en enero de 1603 por el Rey de España Felipe III, y Pinochet se atrevió a decir en un discurso que las raíces del Ejército están en las huestes de Pedro de Valdivia. La verdad histórica es que surgió en la lucha por la independencia nacional bajo el impulso y la dirección de Bernardo O'Higgins y otros Padres de la Patria. Sus predecesores no hay que buscarlos en los cuerpos armados de Felipe III ni de ningún otro monarca, sino en Lautaro y otros jefes de las huestes mapuches que resistieron tres siglos la colonización española. La marina de guerra surgió, igualmente, por iniciativa de O'Higgins, ante los requerimientos de la lucha por la independencia.

El golpe de Estado –como ya se ha dicho– fue promovido por la CIA y la reacción interna. Hay civiles –oligarcas o sirvientes de la oligarquía– que tratan y tratarán de pasar inadvertidos y cargar todo a cuenta de los militares. Debemos preservarnos del peligro de confundir a los uniformados, salvo a los Pinochet y Contreras y a los criminales que actuaban a sus ordenes, con los verdaderos enemigos del pueblo y del progreso nacional.

Cuando fuimos detenidos, a pocos días del golpe, y durante varios meses después, encontramos soldados y suboficiales que nos trataron con respeto. Era evidente, incluso, que algunos de ellos no estaban de acuerdo con lo que se hacía. No eran los más. La mayoría había sido "encarajinada" contra la Unidad Popular. Cada vez que llegaba un detenido a los cuarteles esa mayoría tenía expresiones de júbilo por la nueva pesquisa. Pasado cierto tiempo, la situación empezó a cambiar. Al final, la generalidad de los militares que estaban a cargo de los campos de concentración, se comportaban más o menos correctamente y se manifestaban conformes cada vez que un prisionero salía en libertad.

¿Qué había ocurrido? Paulatinamente se habían dado cuenta de que no éramos delincuentes como afirmaba Pinochet, que lo del Plan Z era una invención, que lo que se les había dicho sobre Allende y la Unidad Popular estaba, al menos, lejos de la verdad, que la política de la dictadura favorecía a la derecha, perjudicaba al pueblo y separaba de éste a las FF.AA., que los problemas del país no se resolvían si no que se agravaban más y más y que, por último, la realidad no tenía nada que ver con la democracia y la libertad de la cual habían blasonado los golpistas.

De acuerdo con la Constitución, todos los Presidentes de la República que le precedieron desde la Constitución de 1925 tenían la facultad de llamar a retiro a cualquiera de los más altos jefes de las FF.AA. Pero no todos la usaron o la podían usar discrecionalmente. Cierto es que Carlos Ibáñez del Campo la usó tan a discreción en su segunda Presidencia que ascendió a un coronel a Comandante en Jefe del Ejército, con lo cual provocó la renuncia de todo el generalato. En la práctica, Allende actuaba con limitaciones de hecho y no de derecho. Por una parte, penaban en él y en los partidos de la Unidad Popular las circunstancias de haber recibido en las urnas poco más del tercio de los electores. Por la otra, el haber proclamado abiertamente su proyecto revolucionario y tratarse de FF.AA. donde predominaban los intereses y la ideología de la burguesía. Ibáñez, en cambio, había obtenido casi la mitad del electorado, el 46,8%, entre seis competidores, tenía fuerte arraigo en las filas castrenses de las cuales procedía y era un hombre de derecha, aunque en la ocasión de que hablamos había sido elegido con el respaldo de una parte de la izquierda, a excepción de los comunistas y de un sector minoritario del Partido Socialista.

No obstante las limitaciones señaladas, pudimos y debimos promover aunque hubiesen sido algunos cambios, eliminando de las filas a los elementos más reaccionarios.

Fueron muy pocos los dados de baja de las filas castrenses, entre ellos los coroneles Soupper y Labbé y los generales Canales, Stuardo y Ruiz Danyau, porque éstos se habían enfrentado abiertamente al gobierno. Socialistas y comunistas propusimos otros cambios, particularmente en la Aviación y Carabineros, pero no pudieron prosperar. Los Secretarios generales de los partidos Socialista y Comunista, Altamirano y yo, hablamos con el Presidente y también con el general Prats de la necesidad de hacer otros cambios. Nuestros interlocutores no nos dijeron que no, quedaron de verlos, pero nos adelantaron que hacerlos no era asunto sencillo. El propio Comandante en Jefe del Ejército tenía sus limitaciones, porque las modificaciones en los mandos no dependían solo de él, debía consultar las opiniones de otros generales y las propuestas tenían que pasar incluso por el Servicio de Inteligencia Militar, el SIM.

Clodomiro Almeyda, en una conferencia que dio en México en el "Seminario sobre Seguridad Nacional", en enero de 1978, bajo el patrocinio de la Casa Chile, extrajo correctas conclusiones acerca de las falencias de la UP y su gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas: "Personalmente –dijo– creo que era posible evitar lo que ocurrió, no obstante todas las condiciones que rodeaban el cuadro político chileno y que dificultaban la viabilidad de la empresa política propuesta por la Unidad Popular. Creo que fue posible haber resuelto favorablemente el problema de la probable insubordinación militar en una forma compatible con la naturaleza y las condiciones en que se concibió, se inició y se desarrollo la experiencia revolucionaria chilena. Pienso que sobre la base de esas condiciones políticas y sociales existentes, fue posible concebir un conjunto de medidas, una política frente a las FF.AA., que aplicada racionalmente desde el momento mismo del ascenso al gobierno de Salvador Allende, hubiese conducido, si no a evitar que estallara en algún momento la insurrección militar, al menos a debilitarla y favorecer con ello su derrota y aplastamiento.

¿A qué se debe entonces que no se hubiera intentado promover una política de ese tipo, destinada a evitar o debilitar la subversión militar? Hay, desgraciadamente, que constatar la ausencia, dentro del conjunto de grandes objetivos que se proponía realizar la Unidad Popular, de un gran proyecto de política militar, que hubiera debido ser uno de los supuestos básicos de toda la conducta del Gobierno, proyecto concebido y destinado a optimizar las condiciones favorables existentes para sustraer a las Fuerzas Armadas de un rol represivo, neutralizando al menos su capacidad política y militar de manera de evitar que sus recursos de poder, total o parcialmente, se colocaran a disposición de la contrarrevolución, en el momento más agudo de la crisis".[39]

En este ensayo, Clodomiro Almeyda expresa su convicción que a la Unidad Popular le faltó "un gran proyecto militar" que, entre otras cosas, "debiera haber consultado una política a largo y mediano plazo" tendiente a "maximizar (en el seno de las instituciones militares) el peso de los elementos más leales al sistema político democrático formal..., a una redefinición del papel de las Fuerzas Armadas en la sociedad..., a ligar la existencia concreta de los efectivos militares al quehacer nacional...,

Da también una valiosa opinión sobre el general Carlos Prats: "el general Carlos Prats –dice– era un militar conservador. Pero al contacto cotidiano con los hombres de gobierno y los representantes de los partidos populares, con los

[39] *Tres ensayos sobre las Fuerzas Armadas chilenas*, Clodomiro Almeyda, páginas 29, 30 y 31, Ediciones Arauco, 1981.

dirigentes de asociaciones de trabajadores, fueron cambiando positivamente su mentalidad, hasta el grado que en los últimos meses del gobierno de la Unidad Popular, se puede decir de él que era ya un militar progresista, un militar en el cual ese conflicto de lealtades a que aludimos anteriormente, se definió en favor de la lealtad al gobierno popular. Los valores que representaba ese gobierno de la Unidad Popular y el proyecto político que estaba promoviendo, llegaron a tener para el general Prats mayor significación nacional y patriótica que los valores formales reaccionarios que aprisionaban la mentalidad de la mayoría de sus colegas. Y sobre todo, para él, la propia Seguridad Nacional, cuya tutela incumbe esencialmente a la institución militar, estaba mucho más ligada a la existencia de un orden social justo, del que participa como usufructuaria la mayoría de la población, que a un orden social meramente represivo que margina de los beneficios del progreso social a esa mayorías.

Y no se crea que el caso de Carlos Prats fue una excepción absoluta. Hubo en las FF.AA. chilenas bastantes oficiales que experimentaron un proceso parecido. Con motivo del golpe fascista muchos de ellos fueron fusilados el día mismo del putsh, otros fueron procesados y condenados y se encuentran hoy en cárceles o en el extranjero, y no pocos lisa y llanamente desaparecieron.

La tercera línea de acción que debió haberse desarrollado es el esfuerzo por ligar estrechamente las actividades institucionales sociales, gubernativas y populares, con las FF.AA. Algo de esto se hizo durante la Unidad Popular, pero en forma improvisada, sin planificación. Fue simplemente un esbozo de lo que debiera haberse hecho en forma más sistemática para tratar de ligar profundamente a las Fuerzas Armadas con el quehacer nacional y social, y no sólo a través de los altos mandos y los oficiales, sino a través –y fundamentalmente– de la suboficialidad y de la tropa misma.

Las Fuerzas Armadas chilenas, como pocas, estaban aisladas del conjunto nacional, del cuerpo social. Era urgente y necesario hacerlas convivir con el pueblo chileno y con sus inquietudes. Creo que ello habría contribuido mucho a que lograran entender el sentido del proceso social que se llevaba a efecto en Chile, y la razón del apoyo popular que lograba. Además ello ayudaba a ir deteriorando la doctrina tradicional que divide artificiosamente a los ciudadanos en civiles y militares, otorgándoles a estos un estatus diferenciado y particular, lo que es una de las fuentes que facilita en los ejércitos la adopción de posturas reaccionarias, en la medida que tiende a legitimar la peligrosa teoría que nadie mejor que ellos están en condiciones de cautelar y defender los valores básicos del orden social".

Fuerzas Armadas, parte de la sociedad y no una casta privilegiada

Hay dos asuntos, a menudo materias de comentarios que van de boca en boca y que debieran abordarse franca y públicamente con la idea de darles una correcta solución. Me refiero a los fastuosos gastos que hicieron las FF.AA. porque a Pinochet se le ocurrió hacerlo y a los privilegios que tienen las instituciones militares y sus oficiales.

Bajo el gobierno militar se edificó en Lo Curro la "Casa de los Presidentes de Chile" en un terreno de 80 mil metros cuadrados, de los cuales 6 mil metros fueron construidos. Para levantar esta construcción fue necesario dinamitar el cerro, desplazando 500 mil metros cúbicos de tierra, equivalente a las excavaciones necesarias para construir 150 mil viviendas mínimas. En la mansión hay mil 600 metros de salones y oficinas y mil 200 destinados a servicios. Tiene circuito cerrado de televisión, refugio antiaéreo, invernaderos, cocinas con capacidad para atender 2 mil personas al mismo tiempo, abastecimiento de agua asegurado por 4 estanques subterráneos y una central eléctrica subterránea con 400 kw. de potencia. La obra gruesa costó 18 millones de dólares y el terreno un millón de dólares. Esa casa sigue en manos del Ejército.

No conforme con lo anterior, se construyeron cuatro mansiones situadas en Las Condes, casi al llegar al Arrayán y una quinta llamada "Casa de los generales" que ocupan dos manzanas completas cerradas. Cada una de ellas cuenta con piscina privada, y para las cinco casas cancha de tenis, generador eléctrico y estanques de agua subterráneo, una sala de cine y salas de juego. Todas tienen solarium y sauna.

Las Fuerzas Armadas gozan de privilegios desde hace larga data, pero fueron aumentados durante la dictadura de Pinochet y son francamente irritantes si se tiene en cuenta que al mismo tiempo los trabajadores, los obreros y los empleados públicos y particulares perdieron muchas conquistas. En el terreno previsional, por ejemplo la dictadura terminó con todas las cajas de previsión que tenían los trabajadores y en su reemplazo creó las Administradoras de Fondos de Pensiones que son negocios para un grupo reducido de personas que se enriquecen a costa de sus imponentes. En cambio, el personal de las instituciones armadas siguió con el mismo sistema de jubilación, previsión y atención médica, gozando de ventajas que no tiene ningún otro sector público y menos la generalidad de los trabajadores. Esta situación se ha mantenido durante los gobiernos post-dictadura.

No estoy propiciando medidas que afecten el nivel de vida de todas las clases y ni siquiera de los oficiales. Lo ideal sería que la situación de la generalidad

de los funcionarios públicos y de todos los trabajadores, alcanzara en estos aspectos el nivel que tienen los militares. Comprendo que esto no es fácil, pero el problema se debe abordar, trazándose una política que conduzca a darle solución en un plazo realista, sin perjuicio que de inmediato se eliminen privilegios que pueden suprimirse sin costo alguno para el Estado, como el de aquellos militares, autores de crímenes horrendos, condenados a leves penas, que están en una cárcel de lujo, igual que en un hotel de cinco estrellas o son huéspedes de algún regimiento o simplemente se hallan en sus propias casas con arresto domiciliario, sin perjuicio de salir de paseo de vez en cuando, como fue el caso de Álvaro Corbalán, a quien se encontró de parrandas en Papudo.

El Código de Justicia Militar, fue varias veces modificado durante la dictadura, terminando por consagrar –escribió el abogado Héctor Salazar, en *La Época* el 4 de enero de 1995– "Un sistema de privilegios que abarcó a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden, ya sea en actividad o en retiro y a aquellos civiles asimilados al fuero militar, con respecto a la forma en que debían cumplir con la detención y la prisión preventiva y que consistía que tales privaciones de libertad se cumplían en Unidades y Cuarteles destinados al efecto, y los oficiales por voluntad del juez incluso en sus domicilio, privilegio además extensivo a los oficiales generales en retiro".

En interés de Chile se requiere que no se repitan las barbaridades de los años de Pinochet. La frase "para que nunca más" fue dicha por Patricio Aylwin cuando, como Presidente de Chile solemnizó la entrega a publicidad del Informe Rettig. Si queremos convertirla para siempre en realidad se precisan modificaciones profundas en nuestras instituciones armadas y en materia de defensa.

Las Fuerzas Armadas post dictadura

Desde que Pinochet tuvo que salir de La Moneda el problema político más importante ha sido el de crear un régimen realmente democrático, cuestión que ha llevado implícita la necesidad de producir un cambio profundo en las FF.AA. Bien se sabe que éstas continuaron siendo un obstáculo para la materialización de tal objetivo. Pasada la dictadura se cruzaron en el camino del primer Presidente concertacionista, el demócrata cristiano Patricio Aylwin y se echaron a la espalda al Poder Legislativo. El 1° de diciembre de 1990 se produjo el movimiento militar conocido como "ejercicio de enlace". Ese día las unidades del ejército se acuartelaron en todo el país a raíz del acuerdo de la Cámara de Diputados de investigar el escándalo en que estaba metido Augusto Pinochet Hiriart, quien había recibido cheques por tres millones de dólares de la institución que comandaba su padre.

Esos tres millones de dólares correspondían al valor de la compra de armamentos a la Empresa PSP, de la cual Pinochet hijo era representante. El vástago del dictador se sentó en la diferencia, no concurrió a la citación que le hiciera la Comisión Investigadora de la Cámara, y el caso de los "pinocheques" quedó absolutamente en nada.

El 23 de agosto de 1992 estalló un escándalo por el espionaje telefónico del que fue objeto el senador Sebastián Piñera, en el que aparecieron comprometidos la diputada Evelyn Matthei y el capitán de Ejército Fernando Diez. Un mes más tarde, el 22 de septiembre, un funcionario de inteligencia, sin mostrar su rostro, afirmó ante las cámaras de Televisión Nacional que la DINE[40] efectuaba espionaje político. Al día siguiente el Ejército decretó "Estado de Alerta".

El 22 de mayo de 1993, el diario *La Nación* publicó una amplia información precedida de un llamativo titular de primera página que decía: "*Reabren caso cheques de hijo de Pinochet*" De inmediato –y mientras el Presidente, Patricio Aylwin, andaba en Europa– se hizo presente otro movimiento militar que recibió el nombre de "boinazo". Y una vez más la tapa cubrió el escándalo de los "pinocheques".

El jueves 27 de mayo de 1993, hubo otra demostración de fuerza de parte del Ejército. Ese día, inusitadamente, con traje de campaña, se reunió Pinochet y un grupo de generales en el edificio de las FF.AA. alrededor del cual se efectuó un desplazamiento de soldados igualmente vestidos en traje de campaña. El hecho llamó la atención. Pero no hubo ninguna explicación de parte del Ejército.

El más ruidoso y espectacular de este tipo de maniobras militares se puso en práctica durante el gobierno del Presidente Frei Ruiz Tagle, en contra del cumplimiento del fallo judicial que condenó a prisión al general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, y a su ayudante el brigadier Pedro Espinoza por el asesinato de Orlando Letelier. Los delincuentes resistieron la orden de prisión. Mientras Espinoza se encerró en un cuartel militar, Contreras se atrincheró en su fundo de Fresia, cerca de Puerto Montt y, cuando ya no podía mantenerse más allí, viajó hacia Santiago y con ello hizo pensar a todo el mundo que volvía a la capital para entregarse a la justicia; pero desvió hacia Talcahuano el avión militar que lo conducía y se metió al Hospital Naval de ese puerto con la anuencia cómplice de la jefatura de la Marina. La resistencia militar sólo cedió después de varias semanas que el país vivió en ascuas y que se hizo sentir la mayoría nacional, exigiendo se respetara el veredicto de la Corte Suprema. Contreras y Espinoza fueron a parar a la cárcel de Punta Peuco, construida especialmente para ellos y demás delincuentes de uniforme.

---

[40] DINE, Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército.

Todo esto sucedió bajo los dos primeros gobiernos post Pinochet, cuando el dictador seguía siendo Comandante en Jefe del Ejército y se parapetaba en un artículo de la Constitución elaborada por siete u ocho "constitucionalistas" de su entorno y sancionada en un plebiscito amañado que se efectuó, en septiembre de 1980, sin registros electorales y sin control ciudadano. En ese artículo de su Constitución se les otorgó a las Fuerzas Armadas el papel de garantes de la institucionalidad, lo que llevó a Patricio Aylwin a decir el 10 de mayo de 1988, que la Carta Fundamental, "lejos de establecer un régimen democrático, programa para el futuro y en carácter permanente un sistema presidencial bajo tutela militar".Cuando fue Presidente, Aylwin no promovió eliminar esta disposición, tampoco su sucesor, y recién ahora, en junio del presente año, está en trámite una reforma constitucional, de incierto porvenir, que tiende a suprimir y/o reemplazar ésta y otras disposiciones antidemocráticas de la Constitución de 1980.

Termino de escribir este libro a mediados de junio del 2003, cuando a propósito de encontrarnos cerca de cumplirse los 30 años del golpe militar, comienzan a pasar a primer plano el análisis, la valoración, la apreciación y los recuerdos del gobierno de la Unidad Popular y vienen también a la memoria el 11 de septiembre de 1973, el día más aciago de la historia de Chile, con el Palacio de La Moneda en llamas, la imagen de Salvador Allende y todo lo que ocurrió hasta el fin de la dictadura. Con tales motivos se preparan homenajes, foros, simposios de discusión, exposiciones, ediciones especiales en diarios, periódicos, revistas, radios y televisión. Por la pantalla chica ya han comenzado a exhibirse programas que traen el recuerdo de los acontecimientos de ese tiempo, recuerdos que emocionan a quienes vivieron esos días y asombran a los que entonces no existían.

En este marco, se ha escuchado la voz del Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, quien, retomando la expresión "nunca más", del primer Presidente de la Concertación, dijo en Calama y en Antofagasta en junio del presente año "Nunca más una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida".

Seis meses antes, el general Juan Emilio Cheyre, en un artículo que bajo su firma publicó *La Tercera* en su edición del día 5 de enero, escribió estas palabras: "Son muchas las personas y las instituciones del país que se encuentran, desde antes del término del gobierno militar, trabajando por la concordia y la reparación de los desaciertos del pasado a los cuales no podemos sustraernos como nación. El Ejército de Chile no ha estado ajeno a este esfuerzo. Comprende que

siempre se exigirá de nosotros un paso más adelante del que hemos dado. De hecho, la declaración final de la Mesa de Diálogo contiene la manifestación y el reconocimiento explícito de los excesos cometidos en contra de ciudadanos. Dichos atropellos a los derechos humanos no tienen justificación". Y casi a reglón seguido agregó: "No soy un actor político, ni deseo serlo; tampoco soy –ni lo es la institución a mi mando– heredero de un determinado régimen de gobierno. Haber asumido que este es el estado de la situación no me parece un logro menor. El Ejército no es contraparte de ningún partido político o sector de la sociedad. Pertenece a todos los chilenos a quienes está llamado a servir por igual"

La Tercera del mismo día 5 de enero informó que el artículo del general Cheyre fue puesto previamente en conocimiento de la Ministra de Defensa Michelle Bachelet y del Presidente de la República "para que las autoridades políticas no se sorprendieran con el paso dado" y horas más tarde Ricardo Lagos confirmó públicamente que había conocido el artículo y que le parecía muy importante.

El escrito del general Cheyre no fue una improvisación como no fueron tampoco, las palabras que pronunciara en el norte. Fueron fruto de reflexiones y entendimientos de varios años. Recordemos que a fines de mayo de 1996 se llevó a cabo en El Escorial, España, un seminario para estudiar el tema de la transición desde una dictadura militar a la democracia. El general Juan Emilio Cheyre, agregado militar en Madrid, fue uno de los participantes en ese encuentro. Junto a él, con el conocimiento de Pinochet, que todavía era Comandante en Jefe del Ejército, estuvieron el brigadier Carlos Molina y los coroneles Jaime García y José Miguel Piuzzi, más los civiles Sergio Rillón y el ex canciller Hernán Felipe Errázuriz, por un lado, y por el otro, el actual Presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, el Embajador de Chile en España Álvaro Briones, Camilo Escalona, Jaime Gazmuri y Enrique Correa, los cinco últimos miembros del Partido Socialista. Este es el antecedente más lejano del artículo del actual Comandante en Jefe del Ejército.

En enero del 2001, el general Cheyre y su antecesor, Ricardo Izurieta, fueron a hablar a Bucalemu para hacerle presente a Pinochet que no compartían el propósito que tenía el dictador de no concurrir a los interrogatorios del juez Juan Guzmán, ni el rechazo a los exámenes médicos que la justicia había dispuesto en el proceso por la llamada Caravana de la Muerte.

¿Qué otros pasos positivos se han dado? Se podría decir que fue una novedad, una grata novedad, la misa que el Ejército organizó, como homenaje al general Prats, en octubre del 2002, en la capilla de la Escuela Militar. También hubo un gesto de reconocimiento para el general René Schneider cuyo nombre lleva hoy el campo militar de La Reina. Y la Fuerza Aérea recibió en sus cuarteles, como si nada hubiese pasado, a los oficiales expulsados de sus filas en tiempos de Pinochet,

entre ellos al coronel Ernesto Galaz, destacado miembro del Partido Socialista. Esto es poco en el terreno de la dignificación de la imagen de los militares que ayer fueron asesinados, perseguidos, expulsados o basureados. Todos los militares que fueron marginados de las filas por ser constitucionalistas debieran ser rehabilitados y honrados. Muchas calles, avenidas, plazas, escuelas y otros lugares y/o establecimientos públicos, debieran llevar los nombres de civiles y militares que fueron ultimados por estar con la Unidad Popular. Bien podría cambiarse el nombre de la avenida 11 de septiembre por el nombre de Salvador Allende o el de uno de los dos generales, Carlos Prats o René Schneider, que perdieron la vida por defender y practicar el principio de la subordinación de las FF.AA. al gobierno legalmente constituido.

Los nuevos pasos y el nuevo lenguaje que se observan hoy en la autoridad superior del Ejército demuestran, a mi juicio, que hoy predomina la idea de limpiar las manchas que dejó en él la dictadura y el anhelo de recuperar la estima que tuvo de parte de la ciudadanía antes de ser puesto al servicio del gran capital nacional y extranjero.

Lamentablemente, en las palabras del general Cheyre hay también conceptos que –quiéralo o no– limitan la concreción de los propósitos que proclama, pues contribuyen a mantener en la impunidad a los verdaderos instigadores y responsables de los excesos, los crímenes, la violencia y el terrorismo en que él reconoce se vieron envueltas las FF.AA. No se puede disparar a la bandada, culpando a la clase política en general. Los partidos de la Unidad Popular portaban la bandera del progreso y de la independencia de la Patria, se guiaban por nobles sentimientos y si en su actuación hubo errores, ello solo se debe al hecho de que andaban por caminos nuevos, inexplorados, en búsqueda de mejores días para su pueblo. No cometieron ningún crimen, a nadie flagelaron o expulsaron del territorio patrio. Nada de lo que hicieron los partidos populares, ninguna actuación suya, ningún paso dado por el Presidente Allende y/o por su gobierno, justifica los atropellos a la humanidad, los crímenes cometidos por las instituciones armadas.

Los que incitaron a las Fuerzas Armadas a derribar el gobierno constitucional del Presidente Allende y a la comisión de tantos atropellos y crímenes contra el pueblo, fueron la reacción chilena y el imperialismo norteamericano. Es posible que estas últimas palabras aparezcan para algunos como un cliché sin vida. Pero corresponden ciento por ciento a la verdad. Las pruebas son ya conocidas, reveladas en los archivos secretos de la CIA y en otros documentos. Oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas y de casi todos los países de América Latina fueron adiestrados en las escuelas norteamericanas. Allí aprendieron la teoría de la guerra interna y los métodos de tortura que se

aplicaron contra los detenidos. ¿Acaso las Fuerzas Armadas chilenas inventaron la "parrilla eléctrica", "las perreras" donde se encerraban a los detenidos en cabinas que sólo permitía estar sentados en el suelo, "la paloma" que era el preso colgado de las manos atadas a su espalda, las quemaduras con ácido y cigarrillos, la inmersión del detenido en barriles con aguas nauseabundas plagadas de excremento, los abusos sexuales incluida la violación y utilización de animales para cometer depredaciones, la obligación de permanecer días enteros de pie y con la vista vendada y demás prácticas antihumanas?

El 31 de octubre del 2002 se realizó en el ex Congreso Nacional el Encuentro Archivos de la Memoria. En él, Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo, cuenta que el día anterior a dicho encuentro estuvo repasando las tres declaraciones de un agente de la DINA, una ante la policía de Investigaciones y dos ante un juez. En una de éstas últimas el ex agente relata lo que un día vio en Londres 38, uno de los lugares de tortura de la DINA. Patricia Verdugo pinta el caso con las siguientes palabras: "este hombre está en el segundo piso de Londres 38 y desde una ventana mira hacia el patio interior. Allí, abajo, hay una camilla ginecológica. Tendida en esa camilla, hay una muchacha. El la describe. El pelo rubio y muy largo, el cuerpo delgado, blanco, desnudo. Las piernas amarradas, abiertas. Ella se llama Valeria. Un agente le aplica electricidad en los pezones. Otro le aplica electricidad en la vagina. Sabemos ya de este cuadro, lo hemos leído muchas veces. Lo que yo no sabía era lo que viene a continuación. Al frente de la muchacha, sentado en una silla, con las manos amarradas a la espalda está su padre".

Al leerlo una y otra vez, no se puede dejar de llorar y llorar. ¿Cómo pudieron, cómo? ¿Quién se atreve a pedir a Valeria y a su padre que olviden, que perdonen que renuncien al derecho a la justicia?

No podemos permitir que se atrevan".

¿Acaso tormentos físicos y psicológicos tan horribles como este que relata Patricia Verdugo salieron de la mente y del corazón de los oficiales del Ejército y de las otras instituciones armadas chilenas? ¿Y qué hacer, cómo olvidar esto?, ¿Echarle tierra a tantos abusos, atropellos y crímenes?

Como se dice, no merecen perdón de Dios los que ordenaron o ejecutaron estas prácticas tan brutales y repugnantes.

La cuestión de los Derechos Humanos está y estará en primer plano hasta que imperen la verdad y la justicia.

Se equivocan aquellos que quieren convertir el 30 aniversario del golpe de Estado y del consiguiente derrocamiento del gobierno de Allende en una ocasión propicia para imponer el olvido. Aran en el mar. Sueñan con lo que es imposible. El golpe y lo que vino tras él, los miles de muertos, los cientos de miles

de torturados, los 50 mil jóvenes que fueron arrojados de las aulas universitarias, los niños que perdieron a sus padres, los hogares destruidos, el millón de chilenos arrojados al exilio, la inseguridad y el miedo en gran parte de la sociedad, el predominio del egoísmo, la desconfianza y el cambio en los valores que abrazaba la mayoría de la gente dejaron huellas imborrables en la conciencia ciudadana. Se precisa dejar de lado la vieja idea del borrón y cuenta nueva. La impunidad no sirve, perjudica. Mientras no se sepa toda la verdad y no haya justicia persistirán la preocupación, el empeño, la batalla permanente contra el olvido. Esta toma de posición, esta conducta es la base para un mañana mejor, para una democracia verdadera, para un Chile con FF.AA. libres de la ideología de tipo fascista, consagradas al resguardo de la soberanía nacional y a las grandes tareas que tienen que ver con el progreso de Chile.

Sobre esta base deben surgir una nueva concepción de la seguridad nacional y una nueva relación entre las FF.AA. y el pueblo, FF.AA. estrechamente vinculadas a los valores de la democracia, a la tradición democrática y a los objetivos progresistas del país, libres de la tutela yanqui, bien equipadas y abiertas a todos los horizontes donde tengan algo que aprender.

Las referencias críticas que he hecho a las Fuerzas Armadas no están inspiradas por el odio ni por la venganza, ni son productos de una posición antimilitarista. La situación general de las FF.AA. de hoy y el porvenir de las mismas, hay que mirarlos con espíritu realista y nacional. Los comentarios que me han merecido las palabras del general Juan Emilio Cheyre, por las ambigüedades y limitaciones que contienen, no me impiden reconocer que en ellas se ve también un deseo de superar el desprestigio y el rencor en que cayeron las Fuerzas Armadas por sus actuaciones durante los 17 años de dictadura.

Pienso que todas las fuerzas democráticas deben ayudar a las FF.AA. a desprenderse de la ideología de tipo fascista que las condujo a enfrentar, no las dificultades que entrababan la marcha del gobierno de Salvador Allende, sino, en los hechos las nobles y legítimas aspiraciones del pueblo.

Chile, como todos los países del mundo, como todos los países latinoamericanos, con la sola excepción de Costa Rica, tiene Ejército, Marina, y Aviación. Una política de defensa es incuestionablemente necesaria, sobre todo después de la guerra que Estados Unidos emprendió contra Irak, por propia decisión, haciendo caso omiso de las Naciones Unidas, a pretexto de buscar armas, de las que él dispone y que no tenían los iraquíes. Los gastos bélicos de los Estados Unidos, que es el país de donde proviene el peligro de agresión para todas las naciones latinoamericanas y del mundo, son gigantescos, son del orden de los 360 mil millones de dólares al año, equivalen al presupuesto de defensa de los 15 países que le siguen en poder bélico. Nada de esto puede dejar de tenerse en

cuenta. La defensa nacional, la defensa de todo los países latinoamericanos, ya no depende esencialmente de las adquisiciones de armamento. Sin perjuicios de las que se consideran indispensables, la seguridad nacional, la soberanía de nuestro país, su capacidad de defensa debiera basarse, principalmente, en los vínculos y colaboración recíproca que en todos los aspectos se deben establecer y desarrollar con nuestros vecinos, Perú, Bolivia y Argentina y con todos los países latinoamericanos en el marco de una postura de no alineamiento y de una consecuente conducta a favor de la paz y el desarme. Al mismo tiempo, en vez de atarse al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que envuelve más perjuicios que beneficios para Chile, el país debiera ampliar sus relaciones comerciales y de todo tipo con Brasil y todos los países latinoamericanos; retornar al MERCOSUR, el Mercado Común Sudamericano y asumir una posición de activa solidaridad latinoamericana y de firme condena a la política de la guerra preventiva, tras la cual está el propósito de Bush de imponer el imperio yanqui sobre todo el mundo, como antes Hitler pretendió imponer el imperio alemán.

Cuba, Venezuela y Colombia aparecen hoy en la mira del Pentágono, a pretexto de la lucha contra el terrorismo. En rigor, cualquier país latinoamericano puede ser blanco de los EEUU con Presidentes como Bush, sin que ninguno de ellos pueda disponer de armas que le permitan enfrentar por sí solo una invasión yanqui.

10.- Lecciones de la vida: Las fallas en la conducción política.

"Creemos que han quedado claras las dificultades inherentes a un proceso revolucionario en marcha como el actual. Tenemos fe en el pueblo, para superar con él los problemas, llamamos a la conciencia de toda la gente de izquierda a comprender que no es el momento de levantar falsas alternativas frente a la conducción política que la clase trabajadora ha entregado a la Unidad Popular en este momento histórico. Pretender hacerlo es diluir las fuerzas del pueblo y entregarle ventajas a la reacción y el imperialismo". (De la declaración de El Arrayán.)

La necesidad de continuar el análisis

Varios analistas sostienen que el gobierno de Salvador Allende fue derrocado porque la Unidad Popular no se preparó y no preparó al pueblo para pasar de una vía a la otra, de la pacífica a la armada. Otros afirman que la causa principal de la derrota se debe a que marchábamos por un camino estrecho y corto, dentro de una institucionalidad que se agotaba y que lisa y llanamente se debía reemplazar. Por eso –agregan– lo que se debió hacer fue destruir el poder burgués y sustituirlo por el poder popular. (¡Como si hacer tal cosa hubiese sido simple cuestión de voluntad!)

También hay quienes piensan que el gobierno pudo cambiar la situación cuando el 50,3% del electorado le dio sus votos a los candidatos de la Unidad Popular en las elecciones municipales de abril de 1971, oportunidad que le habría permitido cambiar la institucionalidad mediante una reforma constitucional. Tampoco faltan los que hablan de la inviabilidad del proyecto y del camino seguido para llevarlo a la práctica

Tales son, en síntesis, las opiniones vertidas por protagonistas, observadores y analistas de la revolución chilena. Pero el análisis no ha terminado y es un deber continuarlo. Es bueno seguir estudiando la experiencia del Gobierno Popular, poner de relieve tanto los éxitos como los errores en que incurrimos los que tuvimos responsabilidades relevantes y considerar las lecciones que de unos

y otros pueden extraerse. Ello puede ser útil para los luchadores de las noveles generaciones que hoy se baten en condiciones más difíciles de las que enfrentamos los que estuvimos con Salvador Allende empeñados en hacer de Chile un país más democrático, libre y próspero.

Las primeras desinteligencias en la Unidad Popular

Obviamente, los partidos de la Unidad Popular y el propio gobierno del Presidente Allende cometieron errores que al fin de cuentas resultaron fatales. He aquí los que me parecen más importantes que se conozcan y consideren.

Entre el 28 de enero y el 1° de febrero de 1971, a dos meses y días de la constitución del gobierno del Presidente Allende se realizó en La Serena el XXIII Congreso del Partido Socialista. Sus delegados representaban 72 mil 323 afiliados. En él chocaron dos tendencias, una encabezada por Aniceto Rodríguez, que era el Secretario general hasta ese momento y la otra representada por Carlos Altamirano, que emergía como líder de una corriente partidaria de "un avance acelerado al socialismo".

El Congreso de La Serena consideró dos ponencias, el informe de Aniceto Rodríguez, y un documento que presentó Altamirano bajo el título "El Partido Socialista y la Revolución Chilena". Aniceto Rodríguez expresó en su informe que el triunfo de la Unidad Popular dio un golpe a la concepción del "fatalismo geopolítico" y que "no significó un triunfo del pensamiento socialdemócrata, como irresponsablemente afirmaban algunos críticos del gobierno, sino un éxito auténtico de la política revolucionaria". El informe fue aprobado –mejor dicho desaprobado– por 59 votos y 69 abstenciones. Aniceto Rodríguez y la representación socialista que lo acompañó en la votación se retiraron del Congreso. Este eligió por unanimidad el nuevo Comité Central, encabezado por Carlos Altamirano.

En el documento de Altamirano, que respaldaba la mayoría, se criticaba a la dirección del Partido y personalmente a Rodríguez, "por incurrir en el caudillismo, el personalismo y el desprecio a la juventud". Se acusaba, además, al saliente Comité Central por haber cedido "a la política del Partido Comunista que logró imponer a la Unidad Popular su posición". Los delegados, todos partidarios de Altamirano, defendieron la política "del acelerado avance hacia el socialismo", llamaron a terminar con la hegemonía del PC y a encabezar la construcción del socialismo en el país. Criticaron el estatuto de las garantías constitucionales.

"En el momento actual –se subrayaba en las resoluciones del Congreso– la burguesía se agrupa principalmente en torno al PDC. (...) Los cristianos de

izquierda, que se quedan en las filas de éste partido sirven de biombo para los derechistas y otros reaccionarios por el estilo que preparan una conspiración contra el gobierno de Allende y de los trabajadores. Se sostenía, además, que "la burguesía nacional es inevitablemente una fuerza contrarrevolucionaria"; "la unión y los compromisos con ella solo dificultan y alejan su completa expropiación" y "en algunos casos la política de la Unidad Popular no refleja la iniciativa de los trabajadores que se plantean la real conquista del poder".

La orientación contenida en el informe de Altamirano y las resoluciones del congreso de La Serena tenían el respaldo de la Federación Juvenil Socialista, cuyo Comité Central, en carta dirigida a los miembros del partido y de la juventud socialista, afirmaba que Aniceto Rodríguez "sembró entre sus miembros tendencias socialdemócratas y prácticamente renunció a la línea del partido trazada en el anterior congreso de Chillán, en 1967". Agregaba que "el Partido Socialista tiene que ser el dirigente principal en el gobierno", se pronunciaba contra las garantías "dadas a los demócrata cristianos a espalda de las masas" y sostenía que "el Partido sufre una profunda crisis lo que ha permitido a los comunistas, aún antes del comienzo de la campaña electoral, imponernos su línea reformista y encabezar la lucha política".

De las citas y los hechos mencionados se desprende que el Partido Socialista salió del Congreso de La Serena con una línea política discordante a la del conjunto de la Unidad Popular y en particular a la orientación del Presidente de la República. Esa línea no pudo tener aplicación plena en el primer tiempo, durante el cual el pueblo estaba a la ofensiva y la revolución chilena se abría paso.

Cinco meses más tarde, el 26 de junio de 1971, apareció en diarios de la oposición un documento de la Comisión Agraria del Partido Socialista, calificando de "burguesa" la política agraria del gobierno y llamando a las tomas de tierras "para ayudar al crecimiento de la conciencia revolucionaria de las masas populares". La Comisión Política del Partido Socialista emitió una declaración el 28 de junio, en la cual decía que ese documento "refleja el criterio de algunos socialistas y no de todo el partido", y que con su publicación en la prensa de derecha se pretendía crear un conflicto entre el Partido Socialista, los demás partidos de la Unidad Popular y el ministro de Economía Pedro Vuscovic, que no estaba afiliado a ningún partido.

En el clima que rodeó al gobierno del Presidente Allende en sus primeros meses, las diferencias de opinión que existían en el seno de la Unidad Popular pasaron inadvertidas para mucha gente. Tal cosa sucedió, en especial, con la línea política discordante que aprobara el Partido Socialista en el Congreso de La Serena.

Sin embargo, a lo largo de los dos años y diez meses del gobierno de la Unidad Popular esa línea se hizo presente no pocas veces.

Por un diputado en Valparaíso

Mayor trascendencia tuvo de inmediato y a la larga la forma en que la Unidad Popular se presentó a la elección complementaria que tuvo lugar en Valparaíso el 18 de julio del mismo año 1971 para llenar la vacante producida por el fallecimiento de la diputada demócrata cristiana Graciela Lacoste. Su partido presentó, naturalmente, su propio candidato, el Dr. Óscar Marín. La mayoría de los demócratas cristianos esperaban que lo apoyara la Unidad Popular, y en este sentido abogó especialmente el Presidente Allende, quien, según expresa el general Carlos Prats en sus memorias, "con clara visión política, trata de evitar esta colusión (el choque entre la UP y la DC), procurando que la Unidad Popular no lleve candidato propio a la elección complementaria a verificarse en Valparaíso, para beneficiar al Partido Demócrata Cristiano; pero no logra que sus partidarios visualicen la importancia de la fuerza centrípeta que la derecha ejercía sobre la DC".[41]

No haber llevado candidato propio por parte de la Unidad Popular habría sido un gesto de respeto y amistad hacia la Democracia Cristiana, que habría redundado en favor del Gobierno Popular. Pero se perdió la ocasión. El Partido Socialista insistió en que la Unidad Popular debía llevar candidato y que este debería pertenecer a sus filas por ser el partido que tenía la mayor votación de la izquierda en la provincia. Resultado: perdió el candidato de la Unidad Popular, el socialista Hernán del Canto, y fue elegido diputado el Dr. Marín con el apoyo de la derecha.

Tras el triunfo del candidato de la oposición Óscar Marín, el Partido Nacional declaró que había nacido un movimiento que "une a todas las fuerzas democráticas que están por la libertad y el nacionalismo. Ahora –expresó– podemos estar seguros que las fuerzas democráticas marcharán unidas para defender los más importantes valores. La elección de Valparaíso demostró que esas fuerzas son más poderosas y dinámicas que los grupos marxistas extranjeros. No podemos quedarnos a manos cruzadas esperando nuevas elecciones".

El 3 de octubre el Partido Nacional hizo un llamado a todas las organizaciones no marxistas a formar un Frente Antimarxista. En un encuentro del Partido

---

[41] *Memorias, Testimonio de un soldado* Carlos Prats González, pág. 209, Editorial Pehuén, 1985.

Nacional con políticos "independientes" en el restaurante Audax Italiano, el Senador Raúl Morales Adriazola, quien fuera del ala más derechista del Partido Radical, señaló que el Frente Antimarxista solo estaría garantizado si en él participaban los democratacristianos. En ese momento, el llamado no fue acogido por la Democracia Cristiana, cuyo Vicepresidente, Fernando Sanhueza, declaró: "Nosotros respetamos la Constitución y no creemos que los llamados a derrocar al Presidente Allende puedan salvar a Chile. Somos la única alternativa al actual gobierno y estamos decididos a jugar un rol de oposición constructiva y permitir la solución de algunos problemas en relación a los cuales tenemos puntos de vistas comunes con el gobierno".

No siempre existió una sola dirección

Desde el principio al fin del gobierno de Allende la movilización social alcanzó un alto grado de presencia y de combatividad.

Los partidos que constituían la Unidad Popular estaban profundamente enraizados en el pueblo y procedían de las distintas clases sociales. Por esto, en su formación ideológica influían diversos pensamientos democráticos y, en consecuencia, como en toda coalición constituida por varios partidos, era natural que entre sus integrantes existiesen coincidencias y desavenencias, criterios comunes y dispares. Tenían el deber, sin ninguna excepción, de poner por encima de todo las coincidencias, siempre en procura del éxito del gobierno, del avance de la revolución. Lo hicieron muchas veces. Los grandes cambios que el país requería y se llevaron a cabo fueron posibles porque tal fue la conducta que observaron.

También forma parte de la experiencia vivida el hecho de que en no pocas ocasiones los desacuerdos entorpecieron la marcha del proceso revolucionario. Las primeras desinteligencias se expresaron incluso antes de que Allende asumiera el cargo de Presidente. Surgieron a raíz de las garantías planteadas por la Democracia Cristiana como indispensable condición para votar por él en la reunión del Congreso Pleno, donde –lo decimos una vez más– constitucionalmente debía optarse por uno de los dos candidatos que habían obtenido las dos más altas mayorías relativas. Esas desinteligencias, basadas principalmente en la indisposición del Partido Socialista de buscar acuerdos con la Democracia Cristiana, no pasaron a mayores, no tuvieron trascendencia, porque, por disposición del mismo partido, todos sus parlamentarios las votaron a favor, junto a los demás parlamentarios de la Unidad Popular y a sus colegas de la Democracia Cristiana.

Varias otras cuestiones fueron motivo de discrepancias o no tuvieron la mejor consideración de toda la Unidad Popular. La falta de un criterio realmente común acerca del carácter de la revolución –que era popular y democrática, antiimperialista y antioligárquica, con vista al socialismo, pero no socialista desde el comienzo– se reflejó en la adopción de distintas posiciones en la Unidad Popular en relación a la Democracia Cristiana y en el trato que debía dárseles a los pequeños y medianos industriales, agricultores, mineros y comerciantes, es decir, se tradujo en la indefinición de una común y correcta política respecto a estos sectores.

Una de las mayores desinteligencias entre los partidos de la Unidad Popular se produjo a la salida del verano de 1972. Cinco de los siete partidos que la integraban, concretamente el Partido Socialista, el Partido Radical, el MAPU, la Izquierda Cristiana y la Socialdemocracia, declararon "Territorio Allendista" y "Territorio Libre de América" a la ciudad de Concepción y se opusieron, en alianza con el MIR, a una marcha convocada por la Democracia Cristiana. Hicieron lo posible por impedirla, produciéndose serios incidentes callejeros, que culminaron con la muerte de un estudiante de 17 años.

Poco antes, bandas de la organización facciosa Patria y Libertad habían organizado la "Marcha de las Cacerolas", que no debió haberse autorizado. La de Concepción era una situación distinta. Aquí no se trataba de permitir o de no permitir una manifestación de tipo fascista, sino de autorizar o no autorizar un acto de un partido opositor. A nuestro juicio –y esta fue también la opinión del Presidente Allende– debía autorizarse, tal como se había autorizado la llamada "Marcha de la Democracia" que la oposición realizó en Santiago el 12 de abril.

Se encresparon los ánimos en el seno de la Unidad Popular. La Comisión Política del Partido Socialista entregó una declaración dejando establecido que no compartía los puntos de vista del Comité Regional Socialista de Concepción. Otro tanto hizo el Partido Radical. En el seno del Comité Nacional de la Unidad Popular hicieron lo suyo el MAPU, la Izquierda Cristiana y los socialdemócratas. Todo esto fue importante, pero no significó de por sí la superación de las discrepancias ni que se hubiera llegado, en esta materia, a un pensamiento común.

El Partido Comunista convocó a una conferencia de prensa. Les expresamos a los periodistas que no dábamos por superado lo sucedido en Concepción. "Lo que sucedió allí –les dijimos– pone de relieve una crisis real en el seno de la Unidad Popular, que afecta al gobierno y que no solo se plantea en relación con el problema de los derechos de la oposición, sino con el enfoque general de la situación actual y del camino a seguir. Todo indica –agregamos– que en la capital penquista tomó cuerpo una tendencia que considera que las posibilidades de

cambio en los marcos del cumplimiento del Programa y de los compromisos políticos de la Unidad Popular, ya estarían agotados. Los confabulados de Concepción, por así llamarlos, participan de la idea de que éste es un gobierno 'reformista' y estiman que hay que cambiar de rumbos, en lo cual lleva el pandero el MIR. Este afirma que el gobierno de Allende es un gobierno reformista y que su deber es combatir ese reformismo, desafiando y sobrepasando la autoridad de ese gobierno y el programa de la Unidad Popular".

Sí, en el gobierno había rasgos reformistas. Pero no eran los prevalecientes ni los determinantes. Era un gobierno revolucionario, que había llevado a cabo importantes transformaciones revolucionarias y requería de todo el apoyo del pueblo.

Les dije a los periodistas: "Sería erróneo creer que las discrepancias están circunscritas a Concepción. En mayor o menor medida las encontramos en todo el país. Estamos dispuestos, decididos a enfrentar esta crisis levantando la bandera de la unidad de los trabajadores, de la unidad del pueblo, del cumplimiento irrestricto del programa de la Unidad Popular".

Otra vez en Concepción

Dos meses más tarde, en los últimos días de julio se constituyó en Concepción la llamada "Asamblea del Pueblo" patrocinada por los mismos partidos que habían declarado a esa ciudad "Territorio Allendista", los partidos Socialista, MAPU, Radical e Izquierda Cristiana, todos ellos de la Unidad Popular, más el MIR. Esta vez no lo hicieron para decir, como en la ocasión anterior, que allá no tenían derecho a expresarse los partidos de oposición aunque se subordinaran a las disposiciones de la ley, sino para constituir, con participación de organizaciones sociales un órgano de poder popular con el nombre de "Asamblea Del Pueblo". Se trataba de un poder popular paralelo al gobierno del Presidente Allende, aunque no lo proclamaran así.

A propósito de esta extraña iniciativa, en carta fechada el 31 de julio de 1972 dirigida a los jefes de los partidos de la Unidad Popular el Presidente Allende dijo: " En la provincia de Concepción se ha producido por segunda vez en tres meses un fenómeno de tendencia divisionista que atenta contra la homogeneidad de la Unidad Popular. No vacilo en calificarlo como un proceso deformado que sirve a los enemigos de la causa revolucionaria." (...) "Una asamblea popular auténtica, revolucionaria concentra en ella la plenitud de la representación del pueblo, asume todos los poderes". (...) "En otras experiencias históricas ha surgido como "un doble poder", contra el gobierno institucional

reaccionario sin base social y sumido en la impotencia. Pensar en algo semejante en Chile, en estos momentos, es absurdo, sino crasa ignorancia e irresponsabilidad". (...) "No es una arbitrariedad proclamar a la llamada asamblea popular como fenómeno artificial. Si fuese un proceso social auténtico estaríamos ante un fenómeno capaz de impulsar la lucha del pueblo, y tal calidad sería apreciada por los revolucionarios, y también por los enemigos que descubrirían en ella un elemento peligroso para sus intereses. Sin embargo, son los adversarios los que se han encargado de publicar su existencia porque saben que es útil alentar todo proceso que distraiga al pueblo de sus verdaderas tareas".

El MIR sostenía que el gobierno se proponía "la reafirmación del orden burgués" y que "sólo avanzarán la clase obrera y el pueblo si crece y se fortalece un poder popular independiente del gobierno". Esto lo decía cuando el Presidente Allende y la Unidad Popular ya se hallaban bajo el fuego graneado del imperialismo y la oligarquía que se proponían derrocar, no al ostentoso "poder popular" del que hablaba el MIR, sino a un gobierno que era un hecho real y concreto, una conquista del pueblo que se debía defender y apoyar para seguir avanzando de más en más.

La llamada asamblea popular desapareció en 1972. Al año siguiente, en 1973, surgieron, por iniciativa del MIR y de un sector del Partido Socialista, los "Cordones Industriales", proclamados también como órganos de poder alternativo al gobierno. Los objetamos al comienzo por esta cualidad que se les daba. Sobre este punto conversamos socialistas y comunistas; coincidiendo finalmente en la necesidad de apoyar los cordones industriales, contribuyendo ambos partidos a darles el carácter de bastiones del proletariado bajo la dirección de la CUT. Convinimos también, en trabajar en conjunto para que en ellos participaran todos los sindicatos de cada sector industrial y tuvieran una generación democrática. Además, ambos partidos, así como todas las colectividades que integraban la Unidad Popular, terminamos por concebir esos cordones como órganos de poder que no eran ni podían ser paralelos, ni menos opuestos, al Gobierno Popular. Esta posición asumida por socialistas y comunistas partió de la necesidad de fortalecer todas las formas de poder popular y crear nuevas formas de ese poder a condición de que tendieran a fortalecer y no a debilitar al gobierno de la Unidad Popular, siempre y cuando no se plantearan como alternativas a él, porque esto último contribuía a debilitarlo y a favorecer la materialización del sueño predilecto de la ultra-reacción, el de echarlo abajo.

Siempre, desde el comienzo hasta el fin del gobierno de Allende, lo más revolucionario era darle el máximo respaldo, trabajar por el cumplimiento cabal de su programa, cerrar filas en torno a él en la lucha contra quienes se proponían hacer girar hacia atrás la rueda de la historia. Todo aquello que minara la autoridad del

gobierno favorecía al imperialismo y a la reacción, cualquiera fuese la ideología que proclamaran aquellos que eran o se hacían llamar de izquierda.

El MIR estaba constituido por jóvenes, animados de nobles propósitos y dispuestos, como lo demostró Miguel Enríquez, su principal dirigente y otros de sus compañeros, a dar la vida por sus ideales. Se trataba de un movimiento de izquierda, para ser más preciso, de ultra izquierda, cuyas acciones y opiniones solían ser amplificadas por la derecha y aprovechadas para presentar la situación del país como de anarquía y desgobierno. No obstante, ni el Presidente de la República ni los partidos de la Unidad Popular, pensábamos, ni de lejos, que se debían tomar medidas represivas contra quienes caían en la desesperación y sobrepasaban las libertades democráticas saliéndose de la ley. Estábamos por la acción común con todos los que querían impulsar las transformaciones que se hallaban a la orden del día y, a la vez, sosteníamos con ellos una lucha ideológica y política. Nos empeñábamos en lograr que todos comprendieran que de tanto caminar hacia la izquierda se llega siempre a la derecha y que no se le podía exigir al gobierno de Allende hacerlo todo de una vez. ¡Si hasta Dios no hizo el mundo en un solo día!

Poco después de los acontecimientos de Concepción tuvieron lugar, en varias organizaciones, elecciones que pusieron en evidencia la fuerza de los diversos conglomerados de izquierda. En la elección del Sindicato de la Construcción de la provincia de Santiago los comunistas obtuvieron 8 mil y tantos votos, los socialistas 6 mil y tantos, y el Frente de Trabajadores Revolucionarios (léase MIR) poco más de ochocientos. En el Sindicato de la fábrica textil Bellavista-Tomé el Partido Socialista eligió 2 dirigentes, 1 el Partido Comunista y 1 el MAPU, el quinto fue de la DC y el MIR "no la vio". En la elección del Directorio de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile los comunistas eligieron 7, socialistas 7 y el MIR 1. En las elecciones de la Universidad de Concepción se produjo un hecho todavía más revelador. Allí, donde se fundó y tenía su fuerte el MIR, los estudiantes le dieron la victoria a la Unidad Popular y a los comunistas la primera mayoría.

Obviamente, no se trataba de considerar sólo la fuerza real del MIR. Se trataba también de tener en cuenta que los jóvenes que pertenecían a sus filas querían cambiar la sociedad y sus posiciones extremistas tenían algún eco en algunos partidos de izquierda y en la juventud. Pero era nuestro deber la lucha ideológica contra sus posturas ultra izquierdistas que no ayudaban a atraer fuerzas a favor del gobierno de Salvador Allende.

Nuestra obligación era, también, comprender que las masas convergen al socialismo sin recorrer todas, el mismo camino, partiendo de distintas posiciones y haciendo diversas experiencias. Como la vida no se desarrolla en todo, según nosotros queremos, no había más que tener en cuenta los fenómenos nuevos que presentaba comprenderlos y salir a su encuentro.

El sectarismo se hizo presente

En la Administración Pública y en las industrias y servicios estatizados, intervenidos o requisados se observó, apenas se instaló el gobierno, que no pocas personas de centro y hasta de derecha se matriculaban con la Unidad Popular. Algunos, como siempre ha sucedido después de una elección presidencial, se subían al carro del vencedor en busca de una que otra prebenda personal; pero los más lo hacían sin propósitos menguados, sintiendo el deseo de respaldar al nuevo gobierno. A todos había que recibirlos con los brazos abiertos y así ocurrió en la mayoría de los casos. Pero hubo también quienes calificaron despectivamente de "UP 5" a los que llegaban a las filas después de la Victoria del 4 de septiembre. Puesto que habíamos triunfado con poco más del tercio del electorado, necesitábamos muchos "UP 5" para cumplir con las tareas que nos habíamos trazado. El sectarismo suele cerrar la mollera.

Si una clase, la burguesía, o una capa social más o menos homogénea dirigía antes el proceso económico, lo que correspondía es que otra clase social, en nuestro caso el proletariado y junto a el los sectores medios, pasaran a desempeñar ese papel. Tratamos de hacerlo y lo hicimos de manera limitada, haciendo que representantes de los trabajadores, junto a los ejecutivos designados por el gobierno, asumieran la plena dirección de las industrias. Donde ello se dio fue posible avanzar en el cambio de las relaciones de producción, desterrar las tendencias economicistas, vincular más el interés de los trabajadores al progreso y a la buena marcha de la industria. La base principal para lograr una dirección única y planificada de la economía estaba en la toma de mayores responsabilidades por parte de los trabajadores.

En un discurso que me tocó pronunciar el día 7 de marzo de 1973 en el Teatro Caupolicán, expresé que en materia de participación de los trabajadores "hemos cometido el error de prescindir de los sindicatos". Hoy pienso que debimos hacer mayores esfuerzos, ir más lejos, para que los sindicatos compartieran la dirección de las empresas del área social. Lisa y llanamente, para ello, había que incorporarlos, no a través de representantes elegidos, sino mediante las directivas sindicales, incluidas aquellas en las cuales no tenía mayoría la Unidad Popular.

Cual más cual menos, todos los partidos de la Unidad Popular cayeron en el sectarismo, en la sobre valoración de las fuerzas de izquierda.

En diciembre de 1972 se realizó el II Congreso Nacional del Movimiento de Acción Popular Unitaria, MAPU. En reemplazo de Jaime Gazmuri fue elegido Secretario general Óscar Guillermo Carretón que fue Subsecretario de economía los primeros seis meses del gobierno. Garretón se caracterizaba por asumir posiciones de ultra izquierda. Por ejemplo, al presentar el programa del MAPU, lo

hizo con estas palabras: "En el movimiento obrero de Chile existen dos líneas estratégicas. La primera, ve la revolución chilena como un proceso continuo, socialista por su contenido y en correspondencia con ello determina la política de unidad, las tareas y el camino revolucionario. La segunda línea estratégica que existe dentro del movimiento obrero es la que puede llamarse reformista o centrista. Según ella la revolución chilena es un proceso por etapas que se caracteriza por tomar medidas exclusivamente de contenido antimonopolista, anti-feudal y antiimperialista. Los partidarios de la segunda línea, quienes hoy dominan, están por la unión con las capas medias y se orientan por un desarrollo pacífico de la revolución. Por esto mismo, la tarea principal es la creación de un verdadero partido proletario revolucionario".

El sector que estuvo en desacuerdo con Garretón se constituyó en Movimiento de Acción Popular Unitaria Obrero y Campesino, MAPU-OC, presidido por Jaime Gazmuri, y siguieron formando parte de la Unidad Popular.

Interesante es también lo acontecido con la Izquierda Cristiana. Esta nació el 30 de julio de 1971 y se incorporó de inmediato a la Unidad Popular. Surgió a raíz del asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, cuando en la Democracia Cristiana tomaron más cuerpo las posiciones contrarias al Gobierno Popular y de acercamiento a la oposición derechista. Esto dio margen a una lucha aguda entre las corrientes de izquierda y de derecha. El grupo encabezado por Bosco Parra y los diputados Luis Maira y Pedro Felipe Ramírez se opuso abiertamente al creciente entendimiento con los partidos reaccionarios, el Nacional y la Democracia Radical. Ocho parlamentarios –dos de ellos senadores y 6 diputados– se marginaron del Partido y con el respaldo de unos 10 mil militantes formaron la Izquierda Cristiana.

La Unidad Popular abrió alborozada sus puertas al ingreso a sus filas de este nuevo partido. Lo saludamos como un hecho positivo. A la luz de lo que sucedió después, pareciera que no miramos más allá de nuestras narices. El sectarismo y el izquierdismo dominaron en la Izquierda Cristiana y esta perdió gran parte de su gente, demostrando que acaso habría sido mejor que sus militantes y sus figuras dirigentes hubiesen continuado en el seno de la Democracia Cristiana.

Renán Fuentealba, quien fuera Presidente del Partido Demócrata Cristiano durante el gobierno de Frei Montalva y en parte del gobierno de Allende, en el programa "Cita Con La Historia" de ARTV del 22 de septiembre del 2002, se refirió a esa división que sufrió su partido. "Más que dolor –dijo– la división me causó rabia. ¿Por qué no seguir dentro del partido? ¿Por qué no luchar dentro de él en el caso de la Izquierda Cristiana, sobre todo? Había que conquistar al partido por dentro para estas posiciones más avanzadas que formaban parte del bagaje intelectual, político y moral de nuestra colectividad".

Por su lado, Radomiro Tomic, entrevistado por el diario *Clarín* se manifestó contrario a la colaboración del Partido Demócrata Cristiano con la derecha y a favor de su unidad, afirmando su convencimiento de que la marginación de los militantes que se constituyeron en Izquierda Cristiana no ayudaba a las decisiones progresistas de su colectividad. Los hechos le dieron la razón pues, si bien la Izquierda Cristiana significó un crecimiento de la Unidad Popular, la salida de la DC de tantos militantes y de valiosos dirigentes debilitó efectivamente en ella las posiciones progresistas, como Tomic advirtió. En relación al Partido Radical ocurrió un fenómeno semejante. Sus dirigentes, entre ellos Hugo Miranda, Orlando Cantuarias, Anselmo Sule, Aníbal Palma y Carlos Morales, se destacaron por su lealtad con el Presidente Allende y su disposición favorable a consolidar la Unidad Popular, pero los cuidados del sacristán mataron al señor cura. Se les pasó la mano. En el XXV Congreso, celebrado en agosto de 1971, virtualmente empujaron fuera de la Unidad Popular a un sector radical. A los partidarios del líder de ese sector, Luis Bossay, les fueron desconocidos los poderes. Dicho grupo constituyó tienda aparte con el nombre de Partido de Izquierda Radical (PIR), presidido por el mismo Bossay. Lo acompañaron 5 senadores y 8 diputados. A pesar de todo, el PIR continuó apoyando al gobierno y permaneció como tal en la Unidad Popular hasta abril de 1972.

El ultraizquierdismo llevó a tal punto al Partido Radical que en ese Congreso se proclamó marxista y en el programa que en él aprobara declaró que su objetivo final era la construcción del socialismo y la liquidación de la propiedad privada en todas sus formas. Este pronunciamiento se puede calificar como un error, por cuanto el PR aparecía renunciando a desempeñar el papel que le correspondía, al cual se había referido el Presidente Allende con las siguientes palabras en la inauguración del Congreso: "El objetivo más importante del Partido Radical es representar en el gobierno de la Unidad Popular los intereses de la pequeña y de la mediana burguesía, de los empleados, profesores, técnicos especializados, pequeños comerciantes e industriales y pequeños latifundistas".

Para las elecciones de la nueva directiva del radicalismo se les negó el derecho a voto a cerca de 400 delegados, los que se retiraron del Congreso. Este eligió Presidente al diputado Carlos Morales con 470 votos contra 402 que obtuvo Hugo Miranda. En la votación participaron 872 delegados de los 1200 registrados al inicio. Luis Bossay y Alberto Baltra anunciaron su salida del Partido Radical, sosteniendo que en el transcurso del Congreso habían sido violadas las garantías democráticas, que los documentos en él aprobados no reflejaban la esencia del radicalismo y que la declaración que proclamara el carácter marxista del Partido Radical constituía un error.

La historia política chilena ha demostrado que el Partido Radical ha salido perdiendo tanto cuando se ha ido con la derecha como cuando, situado en la izquierda, ha caído en posiciones ultristas.

El Partido Comunista tuvo una línea más amplia, aunque no del todo exenta de sectarismo, como se desprende más adelante al referirme a las fallas en la conducción política de la coalición popular.

La cuestión de la libertad

Como Unidad Popular y como gobierno cometimos errores de izquierda y de derecha, que en buena medida se entrelazaban, se alimentaban y condicionaban entre sí.

La política trazada, la de unir fuerzas alrededor de la clase obrera, era bombardeada desde posiciones de "izquierda" y de "derecha" en el seno de la Unidad Popular. El revolucionarismo pequeño burgués y las tendencias de derecha asumían cierto grado de autonomía, se separaban de la dirección unitaria.

El principal error de derecha fue nuestra debilidad en cuanto a tolerar y no impedir las actividades sediciosas de la oposición y el abuso que esta hacía de las libertades consagradas en la Constitución. En este aspecto prevalecieron en el gobierno criterios reformistas y no revolucionarios. Los contrarrevolucionarios usaban descaradamente la prensa, la radio y la televisión para preparar el derribamiento del gobierno. Sin ningún tapujo anunciaban que "Ya Viene Yakarta", aludiendo a la matanza de miles y miles de luchadores que algunos años antes tuvo lugar en la capital de Indonesia y otras ciudades de aquel país asiático. En *El Mercurio* 2 de abril de 1972 se pueden encontrar "Si un golpe se produce es porque los militares van a cumplir con su deber". "No hacerlo sería traición a la Patria". Estas palabras constituían un llamado a la sedición de las FF.AA. Pero el gobierno las dejó pasar o no se sintió con fuerzas para someter a sus autores en los marcos de la ley. Tampoco se tomaron en cuenta las trogloditas palabras acuñadas y proclamadas por el entonces diputado liberal Víctor Carmine, aquellas que decían: "Los únicos marxistas buenos son los marxistas muertos". No se puede menos que acotar el hecho de que Pinochet puso en práctica la sentencia de Carmine y que éste volvió a ser parlamentario, para "honor" del régimen que sucedió a la dictadura.

El gobierno tomó ciertas medidas contra los excesos de la ultra derecha. Se clausuró temporalmente radio Agricultura de Los Ángeles y se suspendió por algunos días la circulación de *El Mercurio*. Además, fueron detenidos y sometidos a proceso unos pocos terroristas y sediciosos. Pero el Poder Judicial,

con el respaldo de la mayoría del Parlamento y de la oposición, anulaba tales acciones.

Nuestra respuesta a los excesos de los ultra reaccionarios fue tan insuficiente que sólo sirvió para demostrar, en este terreno, una asombrosa debilidad. No se entendió que la revolución, que le da y debe darle más libertad al pueblo, no debe permitir, precisamente en defensa de esa libertad, que la contrarrevolución se abra paso. Lo contrario conduce a su derrota y a la pérdida de la libertad, como se demostrara una vez más en la historia con lo que luego aconteció en nuestro país.

Hubo, pues, demasiada tolerancia con la derecha sediciosa y los grupos fascistas.

Varias veces hicimos presente en el gobierno y en la Unidad Popular la necesidad de tomar medidas al respecto. Por acuerdo de la Comisión Política, en agosto de 1972, le enviamos una carta al Presidente Allende, en la cual le expresábamos:

"No patrocinamos la ilegalidad ni la arbitrariedad, sino la resuelta aplicación de la ley. Usted sabe, compañero Presidente, que hemos tenido y tenemos una posición muy definida en cuanto al reconocimiento de los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de la ley. Por eso, hemos sido partidarios de que se autoricen los actos públicos de los partidos de oposición, sin perjuicio de que, en relación a ellos, se apliquen las atribuciones que tiene el Poder Ejecutivo a fin de evitar que los grupos fascistas los aprovechen para caer en desbordes que minen la autoridad del Gobierno y cometan desmanes y alteraciones inaceptables del orden público. Pero el reconocimiento de los derechos de la oposición no puede llevarnos a aceptar toda clase de excesos y fechorías. Por estas mismas razones el pueblo ha recibido con júbilo las decisiones que en Punta Arenas, en Arica y Santiago se han tomado contra acaparadores y contrabandistas y las que acaba de anunciar el ministro del Interior, compañero Jaime Suárez, en orden a denunciar a la Justicia las actividades delictuosas de Patria y Libertad y del Comando Rolando Matus y a clausurar radio Agricultura de Los Ángeles por su responsabilidad en la instigación de hechos que culminaron con el asesinato de un campesino en esa provincia. Nuestra primera y principal obligación con el pueblo y el país es ponerles camisa de fuerza a los que quieren arrastrar a Chile a un baño de sangre".

Había radios y diarios que convertían en pan de cada día la mentira, la injuria, la calumnia, las publicaciones falsas y alarmistas. Era indispensable que por estos delitos, se adoptaran las medidas legales correspondientes. "El Gobierno –le dijimos en esa carta al Presidente Allende– nunca será criticado por el pueblo si aplica medidas enérgicas contra los que se salen de la ley, los que mienten descaradamente, acaparan mercaderías, crean el mercado negro, hacen contrabando con el exterior y especulan con los productos alimenticios".

Allende, por su parte, confiaba en su muñeca, en su capacidad de convencer hasta a sus propios adversarios. Pero, cuando la situación había cambiado desfavorablemente, no había muñeca ni capacidad de persuasión que pudiera detener la sedición en marcha. Y en la Unidad Popular, no había un planteamiento claro, firme y único sobre esta cuestión.

La necesidad de mantener y asegurar el desarrollo de la libertad y la democracia nos imponía el deber de aplicar la ley contra quienes incurrían en delito en busca de la caída del gobierno y de la implementación de una dictadura fascista.

No se trataba solo de palabras, ni sólo de actuar enérgicamente conforme a la ley. En diciembre de 1971, luego de la "Marcha de las Cacerolas", el Partido Comunista expresó su decisión de no dejarle libre la calle a los fascistas. Sus militantes y los militantes de las Juventudes Comunistas y de otros partidos de la Unidad Popular, los batieron entonces y muchas veces.

Sin atenuar la responsabilidad que a todos nos correspondía en las debilidades del gobierno, debo decir que el Partido Comunista y el Partido Socialista hicieron esfuerzos reiterados dirigidos a lograr que se adoptaran medidas enérgicas contra el enemigo. Aunque al hacer este planteamiento no fuimos controvertidos, en los hechos, no fue acogido.

Se requería unir y no dividir a las fuerzas democráticas

En la reunión efectuada en El Arrayán para hacer un balance de la labor realizada, se expresó una gran preocupación por los resultados de las elecciones complementarias de O'Higgins, Colchagua y Linares, que habían tenido lugar pocos días antes, el 16 de enero de 1972. Esos resultados indicaban la disminución de la popularidad del gobierno, que sufríamos cierto desgaste político, debíamos tener una mayor conciencia nacional de nuestra responsabilidad y conquistar la más amplia confianza del pueblo.

A nombre del Partido de Izquierda Radical, recientemente constituido, intervino Luis Bossay. Recalcó la importancia de conquistar el apoyo de las capas medias y afirmó que al votar por la derecha en las últimas elecciones complementarias muchos chilenos demostraron temor por su pequeña propiedad, por sus casas, por sus medios de trabajo e incluso por sus hijos. Expresó la urgencia en definir una línea frente al MIR y también frente a las organizaciones extremistas de derecha.

El Secretario General del MAPU-OC, Jaime Gazmuri, señaló que los resultados en las elecciones complementarias eran una derrota producto de los errores

cometidos por el gobierno. El Secretario General de la Izquierda Cristiana, Bosco Parra, expresó la necesidad de un mayor contacto con las diferentes capas sociales sin necesidad de la mediación de ningún partido. El Subsecretario general del Partido Socialista, Adonis Sepúlveda, declaró que el gobierno estaba ante graves dificultades y que era necesario apoyarse aún más en los obreros y en los campesinos. Dijo que la clase media tenía una fuerte tendencia al individualismo y al oportunismo y que la clase obrera no debía ceder ante el individualismo de las capas medias y comprender que la Democracia Cristiana constituía "el último baluarte del capitalismo". Por eso, agregó, el Partido Socialista no creía en la posibilidad de superar las contradicciones que existían entre el Partido Democratacristiano y la Unidad Popular en base a llamados a la comprensión mutua porque eso era provocar confusión en las filas del proletariado.

A la vez, Sepúlveda se pronunció por la colaboración con el MIR. "Nosotros –dijo– no tenemos derecho a negar su condición de revolucionarios a quienes intervienen en defensa de los intereses del pueblo, aunque sus métodos sean diferentes a los de los partidos de la Unidad Popular".

Cuando primaron las diferencias en el seno de la coalición, cuando se pretendió pasar por encima del programa, cuando se quiso contraponer al Gobierno Popular a sectores –aunque minoritarios– del pueblo, cuando los sectores medios fueron convertidos en el enemigo principal, sufrimos derrotas, la oposición aprovechó nuestros errores y desmejoró la correlación de fuerzas.

Como ya he dicho, las cosas marcharon bien cuando hubo unidad de criterios al interior de la Unidad Popular, se actuó con fidelidad al programa, se abrió paso a la movilización del pueblo y el gobierno se apoyó en él, se dirigieron los fuegos contra los enemigos principales y se tuvo en cuenta por tanto las diferencias que había en la oposición. Y al contrario, cuando se deterioraron fue porque no hubo un criterio común entre los partidos de izquierda.

Muchas de las conquistas del pueblo que le dieron valor histórico al Gobierno Popular se materializaron actuando bajo el embate del enemigo. Sin embargo, a medida que arreciaban las dificultades y se fortalecía el campo de la contrarrevolución, dejó paulatinamente de operar una dirección común en el frente revolucionario. Surgieron criterios dispares en el seno de la coalición popular. Las desavenencias se ahondaron. En asuntos importantes se hacía cada vez más difícil el acuerdo, la política y la acción común. Tal situación se dio, en cuanto a la nacionalización de empresas, al destino de las tierras expropiadas, a las formas orgánicas de la producción en el área reformada de la agricultura, a los problemas de la distribución, a la política salarial en las empresas del Área Social, a la manera de encarar la ofensiva del enemigo o a la importancia de la batalla de la producción industrial y agrícola. En algunos partidos se llegó a afirmar que el aumento

de la producción era un objetivo burgués favorable a los capitalistas y, en más de una fábrica estatizada se contrató personal suplementario para actividades improductivas y hasta para pagar funcionarios políticos, o se aumentaron las remuneraciones sin que la empresa contara con recursos propios para financiar nuevos gastos. Se trasgredió también el programa de la Unidad Popular en el trato con los pequeños y medianos propietarios de la ciudad y del campo, empujándolos a la oposición. Se hicieron presentes desinteligencias y, a veces posiciones contrapuestas que dieron motivo a interminables y vanas discusiones que afectaron la capacidad realizadora del gobierno y contribuyeron a sembrar confusión y a bajar la moral en la gente de la propia Unidad Popular.

Los desacuerdos respecto al plebiscito

Las desinteligencias en la coalición gobernante culminaron con el desacuerdo entre la mayoría de los partidos y el Presidente de la República en las circunstancias más graves, en los días previos al golpe militar.

El Partido Socialista propuso el plebiscito en el segundo semestre de 1971, durante 1972 y hasta agosto de 1973. En 1971, en el Pleno que efectuara en Algarrobo en el mes de agosto, fue más allá, cuando su Secretario general, Carlos Altamirano, planteó en su intervención, como tarea estratégica, la disolución del Congreso y la formación de un parlamento de una sola cámara. Esta última idea estaba en el programa de la Unidad Popular, pero no sobre la base de la "disolución" del Congreso, planteamiento que no correspondía al Programa ni a la política de la Unidad Popular, sino a través de una reforma constitucional aprobada por la Cámara y el Senado.

La Carta Fundamental establecía que si el Parlamento rechazaba un proyecto de nueva Constitución o una reforma constitucional, el Presidente de la República podía llamar a plebiscito para que la ciudadanía decidiera. La cuestión se vio en el gobierno y en el Ejecutivo de la Unidad Popular. Pero no prosperó. No hubo acuerdo en convocarlo. El Parlamento estaba en contra de estos cambios, no habría aprobado una reforma constitucional para que el gobierno los llevara a cabo y, tratándose de asuntos en torno a los cuales no se había formado aún conciencia nacional, era muy probable perder el plebiscito a que ese rechazo daría lugar, llevando al gobierno a una derrota política.

Salvador Allende tenía el plebiscito como carta posible de jugar en una situación favorable, la que en verdad no se dio nunca y por eso no lo convocó. Y –¡cosas de la vida! –en la peor de las situaciones, en vísperas del golpe de Estado, Allende estuvo por el plebiscito, no para resolver el impasse con la oposición

en cuanto a las áreas de propiedad, sino para tratar de evitar el golpe de Estado que aparecía inminente.

Las desavenencias del Partido Socialista con la mayoría de los partidos de la Unidad popular y con el gobierno llegaron a tal punto que sobrepasaban a su propio Secretario General, Carlos Altamirano. Así se desprende de lo que este dijera a Patricia Politzer en el sentido de que no estuvo en contra de que el gobierno llegara a acuerdo con la DC en lo relativo a las áreas de propiedad ni en contra del llamado a plebiscito en los primeros días de septiembre del 73. Cuando la periodista le preguntó: "¿por qué el sábado 8 de septiembre de 1973 Adonis Sepúlveda le informó al Presidente que la idea del plebiscito había sido rechazada por el PS?", Altamirano le respondió: "Porque efectivamente fue rechazada por la dirección del Partido en una reunión a la cual decidí no asistir porque no estaba dispuesto a seguir avalando posiciones irracionales[42]".

En septiembre de 1973, la iniciativa del plebiscito fue objetada por 3 de las 7 colectividades que constituían la Unidad Popular, el Partido Socialista, la Izquierda Cristiana y el MAPU. La respaldaron las otras cuatro, el Partido Comunista, el Partido Radical, el MAPU Obrero-Campesino y la Acción Popular Independiente, API. En la coalición imperaba la norma de que todas sus resoluciones tenían que ser aprobadas por la unanimidad de sus miembros y, por lo tanto, el Presidente Allende no contó en este caso con el respaldo de la Unidad Popular, que en esos momentos estaba virtualmente quebrada.

En la mañana del 9 de septiembre, a menos de 48 horas del golpe, Víctor Díaz, Orlando Millas y el autor de estas páginas nos entrevistamos con el Presidente en su residencia de Tomás Moro. Hablamos, obviamente, de lo que había pasado en la Unidad Popular. Veía inminente el golpe de estado. Nos contó que había examinado con el general Prats la posibilidad de instalarse en algún regimiento para resistir desde ahí cualquier asonada facciosa. El general Carlos Prats le había dicho que esa posibilidad ya no existía. Aunque varios regimientos tenían comandantes fieles a la doctrina Schneider y leales al gobierno, sus jefes ya no estaban en condiciones de imponer su mando. Por otra parte, los grupos paramilitares que habían logrado montar los partidos de la Unidad Popular eran de todo punto de vista insuficientes para defender el gobierno en el terreno de las armas.

Vivíamos un momento difícil, complicado. Aceptar o promover el plebiscito en ese instante podía llevar a los golpistas al desacuerdo entre ellos mismos y a desistir por equis tiempo de sus planes, y de abrirse paso la idea en el mundo político, lo más probable es que perdiéramos el plebiscito, como nos había dicho

---

[42] *Altamirano*, Patricia Politzer, página 128. Ediciones Melquíades, Santiago de Chile.

el Presidente. Por doloroso que fuera sólo correspondía constatar que tal era la situación. Los comunistas consideramos que debíamos "apechugar", tomar una posición, decir lo que pensábamos, lo que creíamos mejor o menos inconveniente para el pueblo y, entonces le dijimos al Presidente que contara con nuestro respaldo en la decisión que pensaba adoptar.

El lunes 10 se reunió la Comisión Política del Partido Comunista, asumió la posición que le habíamos expresado al Presidente y a éste se la ratificamos en carta que al medio día le enviamos con José Cademártori, su ministro de Economía.

El golpe se veía venir, se olfateaba, se percibía en el ambiente. Por ello, el día 10 de septiembre, en la reunión que celebró la Comisión Política del Partido y en la que realizó en la tarde del mismo día su Comité Central, se tomaron las medidas que se veían factibles para el caso de que se produjera. El Manifiesto de la Comisión Política que leyó en la noche por cadena radial la Senadora Julieta Campusano y que publicó *El Siglo* el día 11 bajo el título "Cada cual en su puesto de combate" decía en sus primera líneas "El Partido Comunista se dirige a los trabajadores de la ciudad y del campo, al pueblo chileno, a todas las fuerzas democráticas, haciendo un llamado fervoroso y urgente, para que cada cual tome su puesto de combate dispuestos a repeler la intentona de los reaccionarios que se empeñan en echar abajo el gobierno constitucional en el curso de los próximos días". Y señalaba: "Que el estado mayor de la conjura tome nota, si el golpe se abre paso, cualquiera sea la forma que revista, la clase obrera y el pueblo se cruzará en su camino. Las masas están alertas y dispuestas a realizar los mayores sacrificios en defensa de sus conquistas, del gobierno legítimamente constituido y de la revolución chilena".

Las formas más brutales presentó el golpe. El bombardeo de La Moneda, la supresión instantánea de las libertades públicas y de los derechos ciudadanos, el ataque armado a industrias y universidades, la transmisión a cada minuto de los bandos militares, la implantación del toque de queda desde el mismo día 11 a partir de las dos de la tarde, la suspensión del desplazamiento diurno o nocturno de la población, aterrorizaron a todo el mundo. Nadie podía salir a la calle y el que lo hacía era blanco de los disparos militares sin que mediara detención previa ni explicación alguna. Se desató una verdadera carnicería humana, se fusilaba la gente en las calles y en las fábricas. Sólo el primer día hubo más de 100 mil detenciones. En la televisión transmitieron, durante todo el día 11, dibujos animados y, por supuesto, la voz de la dictadura. Semejante conducta tuvo la prensa escrita y las radios afectas al gobierno, sin excepción porque las otras fueron clausuradas en las primeras horas de ese día. En estas circunstancias, el pueblo quedó paralizado. Esta situación se prolongó por días y semanas durante los cuales se proscribieron los partidos de la Unidad Popular, se

impuso el receso a los restantes para luego ser también proscritos en 1977, se prohibieron las actividades sindicales, se cerró el Parlamento. El país entero fue sometido a una sola voz y a una sola mano. En esas condiciones se hizo prácticamente imposible desbaratar el golpe mediante la acción de las masas. Y donde se pudo oponer alguna resistencia –en la población La Legua, en la Universidad Técnica del Estado, el Ministerio de Obras Públicas, en SUMAR y otras industrias– se protagonizaron acciones de heroísmo que no cambiaron ni podían cambiar el curso de los acontecimientos. Y esto no por falta de deseos. Los partidos de la Unidad Popular, principalmente el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MAPU Obrero Campesino y la Izquierda Cristiana, se habían preocupado de preparar cierto número de militantes suyos y de contar con armas para el caso de que fuera necesario enfrentar algún tipo de sublevación armada. Los comunistas logramos tener alrededor de mil militantes que sabían manejar armas automáticas de distinto tipo, algunos de los cuales tenían nociones de tácticas y estrategias militares. También logramos disponer de una cantidad limitada de armamento. Otros dos mil compañeros sabían manejar armas cortas y poseían alguna preparación para la defensa personal y diversas formas de lucha callejera. Estos últimos jugaron su papel en la vigilancia de los locales y actos públicos del Partido y en la custodia de sus dirigentes.

El Partido Socialista tenía, de acuerdo a la conversación de Carlos Altamirano con la periodista Patricia Politzer "más o menos 1.000 a 1.500 hombres con armas livianas, como se dice en lenguaje militar, que jamás podrían enfrentar a un ejército regular". El MAPU y la Izquierda Cristiana también disponían de algunos hombres armados en una cantidad menor. Y el MIR contaba con un dispositivo armado construido en función de su propio proyecto revolucionario, que seguramente habría aportado también a la resistencia contra la dictadura, si esa resistencia de tipo militar o paramilitar hubiese sido posible operar.

Sin disminuir la importancia de los esfuerzos desplegados y de lo que se hizo en este terreno, hay que reconocer abiertamente que todo fue insuficiente, absolutamente diminuto para enfrentar el golpe fascista.

Faltaba, además, algo tanto o más importante que un mayor número de hombres bien armados y entrenados. No había un plan adecuado para la defensa del gobierno en caso de golpe. Y lo peor es que ya no se contaba con unidades militares dispuestas a defender el gobierno constitucional. Desde el Tanquetazo había declinado casi verticalmente la disposición de aquellos oficiales del Ejército y de las otras ramas de las FF.AA. a cruzarse en el camino de cualquiera otra intentona golpista. El general Prats había renunciado a la Comandancia en Jefe del Ejército porque ya no tenía el apoyo de altos oficiales, salvo un grupo reducido, entre ellos los generales Pickering y Sepúlveda.

Producido el golpe militar, el Comité Central del Partido Comunista no llamó a la resistencia armada. Si lo hubiera hecho no habrían faltado compañeros que dieran un paso al frente e hicieran uso de las pocas armas que teníamos y no habrían faltado trabajadores que los acompañaran. Pero ello habría significado llevarlos conscientemente al sacrificio de sus vidas en una batalla perdida de antemano, vidas que, por otra parte, podían ser útiles –y lo fueron– en batallas posteriores. No obstante numerosos compañeros y militantes de otros partidos y sin partidos se batieron guiados por su propia y respetable voluntad. Pero objetivamente no fue posible organizar una resistencia vertebrada. Como declaró Altamirano en 1979: "Hubo cierta resistencia en algunas fábricas, pero la verdad es que fue mínima, no había ninguna posibilidad de enfrentarse a los militares".[43]

Habíamos dicho que la primera respuesta anti golpe de la clase obrera sería el paro general y la ocupación de las fábricas. Se trabajó con esta orientación. Pero el enemigo se aprovechó del conocimiento de tal propósito y suspendió las actividades laborales durante toda la semana del golpe, esto es durante los días 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre. El día 16 era domingo y los días 17 y 18 eran también feriados por las fiestas patrias. El 19 la junta fascista ordenó la reanudación del trabajo a excepción de las fábricas donde la Unidad Popular tenía una influencia incontrarrestable. Por esta misma razón tampoco dispuso la vuelta a clases en las universidades.

De esta manera, la junta fascista se fue consolidando.

En la reunión que la Comisión Política del Partido Comunista celebró en la mañana del mismo día del golpe, en la sede del Comité Regional situada en calle Vergara, llegamos a la conclusión de que el golpe se imponía. Se ratificó, la idea del repliegue organizado que se había aprobado el día anterior y la resolución de prepararse para una larga resistencia.

En su último discurso, pronunciado en medio del bombardeo de La Moneda, consciente de lo que venía y ya decidido a quitarse la vida antes que ser prisionero de los fascistas, el Presidente Allende pronunció estas palabras: "El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse".

---

[43] *Altamirano*, Patricia Politzer, pág. 16, Ediciones Melquíades, año 1979.

La insuficiente preparación paramilitar de los partidos de la UP

La doctrina Schneider inducía a las Fuerzas Armadas a respetar la Constitución y al gobierno generado de acuerdo a las normas establecidas. El general Prats fue uno de los más destacados defensores de ese principio. En esta posición lo acompañaban otros altos oficiales del Ejército. Pero, como lo demostraron los hechos posteriores, el grueso de los mandos de todas las instituciones militares terminó por ceder a las presiones de quienes estaban en contra.

Desde que asumió su cargo de Primer Mandatario, Salvador Allende, se dedicó a atender personalmente lo que podría llamarse el frente militar. Se preocupó de establecer y mantener un diálogo permanente con los mandos de las Fuerzas Armadas, habiendo conseguido, en muchos de ellos, un alto grado de respeto, de comprensión, de reconocimiento y hasta de simpatía por la inspiración patriótica que animaba a su gobierno. Atendió, además, las necesidades de las instituciones militares en materia de abastecimientos, infraestructuras y remuneraciones dignas, en términos que no lo había hecho ningún otro Presidente de la República en los 40 años anteriores. Su labor en este plano fue titánica y encomiástica. Pero, con ello, no podía cambiar la situación. Se requería, más allá del empeño y la capacidad de persuasión de un hombre, modificar la correlación de fuerzas en favor del Gobierno Popular, modificarla de tal manera que no pudiera prosperar ningún plan dirigido a levantar contra él ni siquiera a un regimiento.Y esto, en las condiciones de ese momento, no dependía de su voluntad.

Al sostener, desde 1956 la posibilidad de la vía no armada en nuestro país, los comunistas tuvimos en cuenta, primero, que se trataba sólo de una posibilidad y, segundo, que de abrirse paso la revolución por dicha vía se haría necesario estar preparados para defender al gobierno del pueblo incluso con el uso de las armas. Por eso, desde 1963, los comunistas nos preocupamos de la preparación militar de miembros del Partido, no para derribar al gobierno de turno, que era el de Arturo Alessandri, ni al siguiente que fue el de Eduardo Frei, sino para contribuir a defender hasta con las armas las conquistas del pueblo chileno que, estábamos convencidos, alcanzaría el poder.

Más tarde, teniendo en cuenta que el Gobierno de Allende nacía bajo la amenaza de ser derribado por la fuerza, los partidos comunista, socialista y el Mapu se propusieron defenderlo por todos los medios y, con tal fin se empeñaron en montar dispositivos paramilitares que resultaron insuficientes. Podían haber sido útiles y hasta decisivos si, en tanto se produjo el golpe, los trabajadores y el

pueblo hubiesen estado en condiciones de tomarse las fábricas y ganar las calles y se hubiesen concertado con sectores leales de las FF.AA. Pero el enemigo, por lo visto, tenía claro que la correlación de fuerzas no estaba ya a nuestro favor y conocía lo que teníamos y podíamos hacer para enfrentar una situación como la descrita y, por eso planificó y llevó a la práctica un golpe fulminante, como la blitzkrieg de Hitler, descargando todo su poder de fuego y de terror.

Esta experiencia demuestra que lo principal no estaba allí, en la formación de aparatos paramilitares. En las condiciones del Chile de ese entonces –y pienso que también en las de hoy–, la política militar de un partido revolucionario debe contemplar, en primer término, el estudio, el conocimiento de las instituciones armadas y un trabajo dirigido a promover en su seno las ideas democráticas, el interés por las inquietudes y la lucha del pueblo.

Dicho trabajo, para producir frutos significativos, efectos de importancia, debió haber sido una constante en la actividad de los Partidos de la Unidad Popular. Los Partidos Comunista, Socialista y MAPU solo vieron esto en el último tiempo, lo cual constituyó una grave insuficiencia.

Hay que reconocer que el plan contrarrevolucionario fue concebido y ejecutado para controlar en horas toda la situación.

En el vigésimo quinto congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, su Secretario General, Leonid Brezhnev, luego de expresar que "la derrota temporal de la revolución chilena no merma sus méritos históricos ni la significación de su experiencia", sostuvo, recogiendo una frase de Lenin que, sin embargo, ella "ha recordado imperiosamente que la revolución ha de saber defenderse". Estas últimas palabras son, sin duda, una regla correcta, como lo es también la consigna del Manifiesto Comunista de Marx y Engels:"Proletarios de todos los países, uníos". Ambas normas se pueden decir o repetir mil veces, pero llevarlas a la práctica es otra cosa u "otra cosa es con guitarra", como se dice en buen chileno. La vida demuestra que "entre las palabras y los hechos hay mucho trecho". Lo prueba nada menos que el derrumbe del socialismo en la Unión Soviética y demás países socialistas centro-orientales de Europa, donde en su defensa no se disparó un solo tiro, no obstante contar con armas más que suficientes.

Como dice el Informe al Pleno del Comité Central del Partido Comunista, celebrado en Agosto de 1977, en nuestro país "llegó a existir (en septiembre de 1973) una correlación de fuerzas aún más negativa dentro de la cual no fue posible ni siquiera lo que era correcto plantear y disponerse hacer en julio, esto es, enfrentar al enemigo en cualquier campo. Lo decimos con franqueza porque es un asunto de fondo. La situación, que ya era difícil y grave en julio, se hizo insostenible en septiembre".

Por todo esto es que no pudimos traducir en realidad nuestra disposición a echar mano hasta de las piedras el día del golpe.

Las cosas se presentaron en forma tal que no debíamos lanzar al combate las fuerzas de que disponíamos. La mortandad habría sido varias veces mayor, habrían caído miles de militantes de nuestro Partido en un combate perdido de antemano, porque, como todos sabemos, no se trataba de luchar contra una facción alzada. Lo que ocurrió en Chile se asemeja mucho a lo que pasó en Europa en vísperas y al comienzo de la segunda guerra mundial, cuando los ejércitos de Hitler invadieron y coparon por completo algunos países, como fue el caso de Checoslovaquia. En Chile, las fuerzas militares ocuparon el país, lo invadieron, por así decirlo, como si se hubiese tratado de una guerra sobre otra nación casi indefensa.

La forma en que se dio el golpe, en particular el bombardeo de La Moneda, el uso de los Hawker Hunker, no eran indispensables para lograr la caída del gobierno. Pero si se hizo eso fue en función de un plan minuciosamente concebido para hacer lo que hacía Hitler, usar el terror psicológico y físico como un arma fundamental. Se fusilaba a la gente en las calles y en las fábricas; a los detenidos se les calificó de "prisioneros de guerra"; miles de ellos fueron asesinados en los centros de detención o en los campos de concentración; en bandos especiales se puso precio a la cabeza de los dirigentes populares; en otros, se estableció que por cada soldado herido o muerto serían fusilados diez prisioneros; se llamaba a la delación y se autorizaba e incitaba el fusilamiento inmediato, se tomó como rehenes a mujeres y niños y se estableció que el país estaba en estado de guerra. Y no hay que olvidar que el día 11 estaba la escuadra norteamericana en las costas de Chile y que en el curso del mes de agosto, con pasaportes diplomáticos, habían entrado al país mil agentes norteamericanos que, ciertamente, fueron la pieza fundamental en la concepción y organización de la operación de guerra.

Para combatir contra los golpistas no habrían faltado luchadores. Había espíritu de pelea. Pero una vanguardia responsable no puede tener en cuenta solamente ese factor. La verdad es que esa decisión de pelea estaba limitada por una impotencia real. Numerosos de nuestros compañeros y militantes de otros partidos y sin partido se batieron guiados por su propia, heroica y respetable decisión. Objetivamente no fue posible organizar una resistencia vertebrada. Pienso que, contrariamente a lo que algunos creen, presentar la resistencia que se requería, no dependía ya de un llamado o una orden que saliera del Partido Comunista, de la Unidad Popular o del Gobierno o personalmente del Presidente Allende. La lucha es más compleja. Para abrir camino al progreso del país, a la creación de un régimen ampliamente democrático, de bienestar y de justicia sociales, como contemplaba el programa de la Unidad Popular, no bastaba con la simple transferencia de los grandes medios de producción, de manos privadas a manos del Estado,

se necesitaba la democratización de todos los poderes públicos, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la vez que Fuerzas Armadas e instituciones policiales no represoras del pueblo y abiertas a la transformación progresista del país. Se requería, además, que los trabajadores tuvieran la más amplia participación en la dirección de la administración pública y de las industrias y servicios estatizados.

El proceso revolucionario en marcha habría seguido adelante en la medida que los trabajadores alcanzaran este Poder. En este terreno se habían dado pasos significativos. Y aunque en general existían serios retrasos y fallas, lo que se hizo en menos de tres años de Gobierno Popular, en medio de tantas dificultades, fue, por su tamaño y proyección una obra que demostró posible resolver los problemas que interesan vitalmente a millones de personas y convertir la democracia en tangible realidad.

Salvador Allende no era ni fue un Presidente más y tampoco su gobierno fue uno más. Fue, como él lo había dicho y el pueblo lo quería, el primer Presidente revolucionario del primer gobierno revolucionario de la historia nacional. Por esto, desde el primer día, mejor dicho desde antes que se constituyera su gobierno, tuvo la resistencia enconada de la oligarquía financiera y latifundista y de los Estados Unidos, dicho más correctamente, de sus grandes monopolios y del gobierno de Nixon que se propusieron simplemente eliminarlo.

Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista durante casi todo el gobierno de Allende, en la extensa entrevista que le hizo en 1989 la periodista Patricia Politzer, dijo: "Creo que ni siquiera el acuerdo con la DC hubiera impedido el golpe militar. La decisión en este sentido estaba tomada tanto por las fuerzas nacionales como internacionales. Y eso no es imaginación ni megalomanía mía. Antes que Salvador Allende asumiera el mando, el gobierno de Estados Unidos ya le había declarado la guerra y había decidido hacer 'aullar' la economía chilena como dijo textualmente Richard Nixon. A mediados del 72 ya se habían soltado en contra nuestra todos los 'demonios' que puso en marcha el gobierno norteamericano: la derecha política, el empresariado, el latifundio, la banca, la industria. La caída de la Unidad Popular era prácticamente imparable. (...) A mi juicio el problema central era el de un Partido Comunista ocupando un rol protagónico en el gobierno de otro país de América Latina, además de Cuba. No se trataba de un problema chileno sino mundial. Por una parte, Estados Unidos no toleraba otra Cuba en América Latina, y por otra, el movimiento comunista internacional no tenía credibilidad democrática"[44].

---

[44] *Altamirano*, por Patricia Politzer, páginas 64 y 65, Ediciones Melquiades, 1990.

Que desde antes que asumiera Allende el gobierno norteamericano de Richard Nixon ya le había declarado la guerra, es asunto sabido e incuestionable. Pero que la caída de la Unidad Popular era prácticamente imparable porque Nixon no podía aceptar que el Partido Comunista ocupara un rol protagónico en el gobierno de otro país de América Latina, además de Cuba, es una afirmación que nunca antes conocimos por parte de Altamirano y de ningún dirigente socialista. Significa prosternarse ante las dificultades o equivale a pensar y decir que la empresa de liberación nacional y de transformación social que se propuso Allende y los partidos de la Unidad Popular era una ilusión, que estábamos de antemano condenados a la derrota y/o que no puede haber más alianzas con los comunistas y sólo cabe entenderse con aquellas fuerzas que son aceptables para los Estados Unidos.

La tesis en comento lleva a la conclusión de que no tiene porvenir ningún proyecto revolucionario o simplemente democrático del pueblo chileno o de otros pueblos latinoamericanos o de cualquier parte del mundo y conduce a quienes la compartan a renunciar a la lucha por un gobierno que se guíe exclusivamente por los intereses de Chile y se proponga, como el de Allende, recuperar las riquezas nacionales, mantener una política independiente en el orden internacional, terminar con el dominio de los monopolios y avanzar más adelante hacia una sociedad socialista.

Todos sabemos que en el mundo unipolar en que vivimos, Estados Unidos constituye la potencia más poderosa de la tierra y en su afán expansionista y dominante hasta se echa al bolsillo a las Naciones Unidas, como lo vimos en la guerra contra Irak. Por ello es de toda evidencia que hoy es más difícil que ayer emprender el camino de cualquier lucha que no sea del agrado del gran imperio norteamericano. Sí, es más difícil. Pero no imposible. Los pueblos no se cruzarán de brazos para abrirse paso hacia un mundo de bienestar, libertad y justicia. Lo demostraron, entre otros hechos, las gigantescas movilizaciones que, a pesar de no comulgar en absoluto con el régimen de Hussein, se realizaron en los cinco continentes a propósito de la guerra contra Irak.

No hay potencia imperialista, clase gobernante, ni mesiánico dictador que pueda aplastar para siempre la lucha de los pueblos por su independencia, por el derecho a su propia autodeterminación.

La falla principal

Transcurrido un año del gobierno del Presidente Allende y habiendo ya comenzado a descender el respaldo ciudadano que había obtenido en las

elecciones de abril era evidente que la Unidad Popular, sola, no podía resolver los agudos y candentes problemas que estaban en el centro de la contienda política nacional. La legalidad imperante, dentro de la cual había sido posible nada menos que nacionalizar las grandes empresas mineras, había pasado a ser un freno, una traba, un obstáculo para seguir adelante con los cambios. Se hizo entonces más claro, más evidente, la necesidad de cambiarla, de crear un Estado de Derecho más democrático, con un Parlamento unicameral, con una judicatura en correspondencia con los nuevos tiempos. Todo esto se hallaba en el Programa de la Unidad Popular y, por supuesto, en ello estaban de acuerdo todos los partidos de izquierda. Pero no pudieron actuar en consecuencia. Por su propia cuenta, no podían cambiar ni modificar la institucionalidad por si solos, a través del camino legal, ni a través de un camino extralegal. Esta es la verdad, esta fue la situación real a la que se llegó.

Para seguir avanzando dentro de la legalidad se requería, además del apoyo de las masas, llegar a acuerdo con la Democracia Cristiana, dando así forma a una mayoría en el Parlamento para legislar sobre aquellas cuestiones en las cuales hubiera concordancia. Este acuerdo lo buscó el gobierno de Allende en varios asuntos capitales, especialmente en cuanto a consagrar en la ley las diversas áreas de propiedad. Hubo conversaciones con la Democracia Cristiana para legislar sobre esta materia. En la DC había no pocas personas que tenían al respecto una actitud favorable. De una y otra parte hubo algunas concesiones para facilitar el acuerdo. Pero en definitiva este no se produjo. La directiva de la Democracia Cristiana presidida por Patricio Aylwin puso fin a las conversaciones con un rotundo NO. El gobierno envió también al Parlamento otros proyectos de gran importancia para cuya aprobación se requería igualmente el concurso de la Democracia Cristiana. Entre ellos estaba el proyecto de reforma constitucional para cambiar el sistema parlamentario bicameral por el de una sola Cámara, proyecto que ni siquiera se consideró en el Congreso Nacional.

Inmediatamente después de las elecciones de marzo de 1973, cuando todavía Renán Fuentealba presidía la Democracia Cristiana, ésta hizo una declaración en cuyo punto cuarto decía que no había participado en las elecciones "para establecer sobre la victoria un dique de contención a los cambios que el país requiere". Por el contrario –agregó– "ha estado y está dispuesta a impulsarlos, pero que cree que ellos no pueden ser impuestos desde arriba por una minoría y que fuerzas populares y avanzadas, como nuestro Partido, que representan a extensos sectores de la clase media y popular, tienen el deber de luchar porque el nuevo orden responda a la voluntad mayoritaria del pueblo chileno y contemple los puntos de vista que el PDC ha expuesto, especialmente en su programa presidencial de la última campaña"

Teniendo en cuenta este planteamiento de Fuentealba que interpretaba a muchos de sus camaradas de partido, me inclino a creer que, a pesar de esa actitud tan negativa que en 1973 tenía el timonel de su colectividad, debiéramos haber hecho un esfuerzo más por salvar la situación, haciendo algunas otras concesiones, buscando la concordancia con la Democracia Cristiana en una salida, aunque minimizada, pero aceptable, que entonces ni siquiera se asomó a la mente de ninguno de los dirigentes de la Unidad Popular.

La amplitud de criterio con miras a superar los escollos y a salir adelante con la causa popular es una cualidad fundamental que se requiere de los políticos revolucionarios y nada tiene que ver con el oportunismo y la renuncia a los principios que han acompañado a no pocos ex dirigentes de izquierda que ayer se caracterizaban por la fraseología revolucionaria y hoy, insertos en el sistema neoliberal, se ven satisfechos y cómodos. Pero, en medio del sectarismo imperante en esos días, aquella amplitud política, si bien no faltó en los comunistas, fue expresada por nosotros con fuerza insuficiente.

La Democracia Cristiana tiene una responsabilidad no menor en el fracaso del nuevo camino que emprendía el país. Prestó, lo dijimos ya al comienzo, una colaboración valiosa, decisiva para que Salvador Allende asumiera la presidencia. Su votación a favor del reconocimiento del triunfo del candidato de la Unidad Popular en el Congreso Pleno y su apoyo a la nacionalización del cobre fueron dos hechos de importancia capital y de significación histórica. Cierto es también que a poco andar, se podría decir que a partir de la designación de Narciso Irureta como Presidente de la DC, se dedicó a explotar a su favor las dificultades y problemas que surgían en la marcha del país, particularmente las dificultades de abastecimiento y el "desorden". Se "olvidaba" que en gran parte las insuficiencias en materia de abastecimiento venían de muy atrás, en buena mediada eran producto del sabotaje de un sector más contrario a los cambios y del desborde comprensible en que caían personas socialmente abandonadas o de acciones irresponsables de grupos de ultraizquierda. Ella misma, la Democracia Cristiana, había sufrido las consecuencias del atraso económico social de las décadas precedentes y fue precisamente durante su gobierno bajo el cual se acentuaron y tomaron cuerpo hechos que tenían plena justificación como las huelgas legales o ilegales, las tomas de fundo y de sitios desocupados. Fue también, bajo su gobierno cuando los terratenientes iniciaron el uso de las armas contra los partidarios de la Reforma Agraria, agrediendo a funcionarios democratacristianos de la CORA, como en el caso de Hernán Mery, a quien lo ultimaron el 30 de abril de 1970, en el momento que se hacía efectiva la expropiación del Fundo "La Piedad" de Longaví. El 5 de mayo en sesión de la Cámara, el diputado Víctor Carmine, interviniendo a nombre del Partido Nacional dijo:

"Este es el primer muerto, compañeros. Les daremos el gusto con otros muertos. Yo no voto condolencias a familiares de cuatreros."[45]

El gobierno de Frei Montalva se inició en noviembre de 1964, año en que ya se conocieron 433 huelgas, las que subieron a 2 mil 177 en 1967. Lo mismo pasó con las tomas de fundo que en 1965 fueron sólo 10 aumentando año a año hasta alcanzar a 11 en 1969 y a 285 en 1970. Más aún durante el gobierno de Frei padre, comenzaron y se protagonizaron los mayores asaltos a bancos. No tenían, pues, razón los democratacristianos que ponían el grito en el cielo porque bajo el gobierno de Allende la convulsión social cruzaba toda la vida del país.

La Democracia Cristiana no tomó en cuenta el hecho de que estos fenómenos tenían raíces profundas, respondían a justos y nobles anhelos de las masas populares y eran propios de la época desde la mitad de los años sesenta. Peor aún, los catalogó, igual que los reaccionarios, como el reinado de la anarquía y terminó coludiéndose con la derecha y los golpistas pensando en que, apenas cayera el Presidente Allende, el gobierno volvería a sus manos. Instalada, incluso, la dictadura militar, pensaron que esta convocaría luego a elecciones y así recuperaría el poder. No fueron todos los DC los que comulgaron con tamañas ruedas de carreta, como lo demostró la declaración –que no publicó la prensa– del día 13 de septiembre suscrita por Radomiro Tomic, Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Ignacio Palma, Fernando Sanhueza, Claudio Huepe, Andrés Aylwin, Belisario Velasco, Ignacio Balbontin, Florencio Ceballos, Waldemar Carrasco y Marino Penna que destacaron el carácter constitucional del gobierno de la Unidad Popular y le rindieron homenaje al Presidente Allende.

Lo peor de todo es que transcurrido ya 30 años del golpe militar y ya conocida por todos los chilenos la tragedia que sobrevino, oficialmente el PDC no asume su responsabilidad por lo que aconteció.

¡Que distinta fue la actitud de la izquierda cuando el gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva se vio amenazado por el intento golpista que en 1969 encabezó el general Roberto Viaux!

Juntas, la Unidad Popular y la Democracia Cristiana representaban a la inmensa mayoría de los chilenos. Actuando de consuno habían desbaratado los planes del gobierno de Estados Unidos y de los sectores más reaccionarios de la derecha chilena, en septiembre de 1970, dirigidos a impedir que Salvador Allende asumiera la Presidencia de la República. De la misma manera hicieron posible la materialización de otros anhelos del pueblo.

En los tensos días que siguieron a la gran victoria del 4 de septiembre de 1970, las masas populares que votaron por Allende y vastos sectores del pueblo

---

[45] Diario *La Nación*, 6 de mayo de 1970.

que lo hicieron por Tomic salieron a la calle para cerrarles el paso a los reaccionarios de dentro y de fuera y apretar filas en favor de los cambios.

Pero desde mediados de 1971, las relaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana entraron en deterioro constante y creciente. En la primera pasó a primar la idea de que podía gobernar sola y en la segunda la creencia de que tras la derrota de la Unidad Popular retomaría el gobierno en sus manos.

En mi opinión, a tres décadas de distancia del gobierno del Presidente Allende, se puede afirmar que entre los principales factores que facilitaron su derrocamiento y tras éste los 17 años de dictadura fascista, estuvo –salvo en los primeros meses de gobierno– la falta de una dirección permanentemente única y amplia en la Unidad Popular y en el gobierno, capaz de concebir, programar y aplicar, con audacia y sin sectarismo, una política que permitiera agrupar a la mayoría nacional en la lucha por transformaciones democráticas. Una tal dirección tenía que haberse orientado a lograr un gran acuerdo con la Democracia Cristiana e incluso a gobernar en conjunto, de manera de haber contado siempre con una correlación de fuerzas favorable a los cambios y, de consiguiente, con el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Todo el programa de la Unidad Popular no lo compartía la Democracia Cristiana y, por esto, al menos podrían haberse buscado y concertado acuerdos parciales. Esto había que considerarlo. Así se podría haber levantado un dique a la consumación de los planes de Washington y de la reacción chilena.

En las condiciones de entonces, cuando existía una izquierda fuerte, basada en un firme entendimiento socialista-comunista, un gran acuerdo entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana se habría traducido en una alianza democrática avanzada, dentro de la cual los trabajadores habrían sido los actores principales. Pero el Partido Comunista no visualizó bien la importancia que habría tenido ese acuerdo y el Partido Socialista rechazaba de plano todo entendimiento con la Democracia Cristiana, con la cual hoy marcha del brazo, sin los comunistas y en torno a una política fundamentalmente continuista, de conciliación con el pinochetismo, de componendas con la derecha, de continuas privatizaciones y de apoyo a la globalización capitalista.

A lo largo de los años se habían producido no pocos entendimientos y acciones comunes entre la Izquierda y la Democracia Cristiana. Los predecesores de uno y otro conglomerado, el Frente de Acción Popular y la Falange Nacional, habían estado juntos en el Bloque de Saneamiento Democrático en 1958. Radomiro Tomic se había declarado partidario de un entendimiento de su Partido con la izquierda en las presidenciales de 1970 y, luego del triunfo de Allende, según afirmó Alberto Jerez, en entrevista al diario *El Mercurio* del 10 de septiembre del 2000, mucha gente en la DC, empezando por Tomic, "era partidaria, más

que de firmar un pacto de garantías, que su partido participara en el gobierno de la Unidad Popular".

No fue posible llegar a un entendimiento con la Democracia Cristiana no sólo porque en la DC había un sector influyente que se oponía y la derecha ejercía presión sobre ella, tentándola a seguir un camino dirigido a echar abajo el gobierno, sino también por el hecho de que la Unidad Popular, como tal, y el propio gobierno, no tuvieron a este respecto una posición unánime favorable, audaz y creadora. De haberla tenido, tal vez las cosas se habrían dado de otra manera y, por último, si en definitiva no se hubiesen dado nada se habría perdido y al menos se hubiese logrado un mejor clima de relaciones entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana y un mayor prestigio ante el país de la izquierda y su gobierno con proyecciones favorables aunque no fuese para el futuro inmediato.

Así pues, el giro de la Democracia Cristiana hacia la derecha y su paso definitivo a la oposición fue objetivamente facilitado por las conductas sectarias y prepotentes que tomaron cuerpo en una parte de la Unidad Popular.

Probablemente hay quienes critiquen las observaciones que hago en relación a la ausencia de un criterio más amplio que debió existir, entonces, en materia de alianzas, entendimientos o acuerdos políticos en torno a objetivos democráticos y revolucionarios. Pero la verdad es que en ningún tiempo y en ninguna parte de la Tierra la transformación social ha sido o ha podido ser la obra de una minoría, sino el fruto del esfuerzo, del trabajo y la lucha de millones y millones de seres humanos. Tal vez digan, también, que estoy soñando al creer que es posible volver a juntar a comunistas y socialistas y, además, unir a todas las fuerzas democráticas, comprendidos los demócratas cristianos en torno a un proyecto común que le ofrezca al pueblo de Chile y a Chile otros horizontes. De acuerdo. Es un sueño. Pero un sueño que mañana o pasado mañana se puede hacer realidad si aprendemos las lecciones de ayer y las que emanan del presente.

Un histórico documento socialista

A mediados de 1974, de vuelta de isla Dawson, los presos del Campo de Concentración de Ritoque tuvimos noticias de un importante documento del Partido Socialista. Pero nunca pude tenerlo en mis manos y leerlo. Cuando estaba por finalizar este libro tuve la grata posibilidad de conocerlo vía Internet. Quienes lo presentan dicen que el "Documento de Marzo" –tal es el nombre que se le ha dado– "es el hilo conductor, muchas veces invisible, silenciado, ocultado, escamoteado, tergiversado, que ordenará futuros debates, decisivos, en el interior del socialismo chileno". Se trata de un documento realmente valioso,

publicado en marzo de 1974. Es el primer intento de análisis marxista, serio y profundo sobre la experiencia de la Unidad Popular como gobierno. Fue elaborado por la Dirección Interior del Partido Socialista, formada por Exequiel Ponce, obrero portuario y Subsecretario General del Partido, por Carlos Lorca, médico y Secretario General de las Juventudes Socialistas y por Ricardo Lagos Salinas, Contador y miembro de la Comisión Política del PS[46] . Al referirse al significado del gobierno de Allende y de las causas de su derrota, el documento expresa, entre otros, los siguientes conceptos:

"Los mejores cerebros de los círculos políticos del imperialismo y la reacción interna, fuertemente relacionados con los medios empresariales monopólicos y agrarios, se abocaron a diseñar una política destinada a conquistar los necesarios aliados, explotar las debilidades del proceso revolucionario y utilizar eficazmente su inmensa fuerza económica, institucional y publicitaria, a fin de crear condiciones para terminar con el Gobierno Popular antes de 1976 y reemplazarlo por un régimen que aplastara el ascenso revolucionario del pueblo chileno. Para ello su primera tarea política fue asegurar la formación de un amplio frente opositor al Gobierno Popular y evitar a toda costa un eventual entendimiento de la D.C. con la U.P. en torno a iniciativas concretas. El hábil tratamiento de las contradicciones internas de ese partido constituyó uno de los problemas de la política de la reacción desde la ratificación de Allende por el Congreso Pleno. Para acumular fuerzas, la reacción aplicó una táctica muy flexible haciendo todo tipo de concesiones a la pequeña burguesía, conducente a aislar al movimiento popular y desgastar al Gobierno, creando hechos políticos que modificaran a su favor la correlación de fuerzas. Hábilmente combinaron todas las formas de lucha, legales e ilegales, pacíficas y violentas, para avanzar tras el objetivo final. Haciendo concesiones cada vez que el mantenimiento de la unidad política lo exigía la derecha arrastró a su política a la D.C. y a otros sectores políticos y fuerzas sociales no comprometidas directamente con los intereses imperialistas y monopólicos".(...)

"La derrota política del movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas y en los instrumentos de poder institucional al alcance del Gobierno".

---

46 Ponce, Lorca y Lagos fueron atrapados por la DINA en 1975. Se les vio en Villa Grimaldi y de ellos nunca más se supo. Ricardo Lagos Salinas era hijo de Ricardo Lagos Reyes, Alcalde socialista de Chillán que el día 16 de septiembre de 1976 fue asesinado por carabineros, en el frontis de su casa, junto a su hijo Carlos de 20 años y a su esposa Alba Ojeda de 29 años, embarazada de ocho meses.

"La incapacidad de usar la fuerza que se tenía y evitar el aislamiento progresivo de la clase obrera, reflejan claramente que no llegaron a imponerse los intereses de ésta en la conducción del proceso. Contando con las más importantes y significativas posiciones conquistadas en su historia, y con una estrategia viable que permitía la conquista del poder, el movimiento popular no logró concretar un acuerdo estratégico en torno al cual se debía constituir una real fuerza dirigente del Gobierno y del movimiento de masas".

"No habiendo hegemonía de la clase obrera en el frente, no fue posible desarrollar una política correcta para concretar la alianza que presuponía el programa, no se consiguió evitar el aislamiento buscado por el enemigo, no hubo capacidad de autocrítica y corrección oportuna de los errores, no hubo capacidad para retomar la ofensiva, no hubo línea política clara, confundiéndose diversas orientaciones y matices que no hacían sino reflejar la presión de las tendencias pequeño burguesas, disparadas hacia el evolucionismo, la conciliación sin principios, el aislamiento o el extremismo anárquico".

"La ausencia de unidad en torno a una estrategia única del movimiento popular, orientada por la clase obrera como fuerza dirigente, se expresó en diversos errores cometidos en el tratamiento de problemas y situaciones específicas a lo largo de los tres años".

"Se manifestaron discrepancias respecto al ritmo de desarrollo del proceso, cuestión que dependía en cada momento de la correlación de fuerzas real y no de la voluntad o buenos deseos de nadie. No hubo comprensión acertada de los requisitos de un proceso de acumulación de fuerzas para derrotar a un enemigo poderoso, y de la necesidad de avanzar fijando prioridades y subordinando objetivos parciales al gran objetivo estratégico".

"Faltó capacidad para que todo el movimiento popular se expresara en la acción de masas y en el ejercicio del poder de Gobierno, diferenciara los enemigos principales del pueblo de quienes no lo eran. No era lo mismo tratar a la SNA que a la Federación de Asentamientos, a la SOFOFA que a la AMPICH, al PN y P y L que a la D.C., etc".

"Respecto a la posibilidad de concertar compromisos tácticos y a la política de alianzas hubo todo tipo de desviaciones y prejuicios. Junto a las posiciones 'izquierdistas' de rechazo a cualquier forma de compromiso calificándolos de conciliación y traición, hubo quienes reducían el problema de ganar a los aliados sociales que señalaba el programa, a conquistarlos por la base a través de la política económica, al margen de sus representantes políticos, sin entender nada del papel decisivo que juega la ideología, sobre todo en las llamadas capas medias. Por otra parte, se manifestó la tendencia al entendimiento político superestructural desde posiciones de debilidad, sin articularlo con políticas de

masas". (...) "Pero la deficiencia principal, fue la incapacidad para articular y combinar el ejercicio de todas las formas de poder con que contaba el movimiento popular: el poder del Gobierno y la fuerza del movimiento de masas organizado. Todas las desviaciones pequeño burguesas, cuya pugna esterilizó la política popular, se conjugaron para impedir el avance del proceso sobre la base de la utilización armónica, oportuna y coordinada de estas fuerzas de poder, subestimando algunos las posibilidades del Gobierno y otros las de la acción de las masas". (...)

"La unidad alcanzada entre el PS y el PC, y entre todas las fuerzas de la Unidad Popular, fue suficiente para aplicar el Programa en sus postulados económicos fundamentales (con las debilidades y excesos anotados), pero fue absolutamente insuficiente para enfrentar las circunstancias más decisivas en que estuvo en juego el cambio de calidad en la correlación política de fuerzas, o el propio problema del poder".

"Para realizar los virajes tácticos exigidos por la situación política, o para entregar consignas únicas a las masas en las fases de repliegue del enemigo, o en sus momentos de ofensiva abierta, casi nunca estuvimos de acuerdo socialistas y comunistas".

"Esta dispersión y divergencias casi constantes, no hicieron posible que la hegemonía proletaria adquiriera la fuerza determinante en todo el proceso". (...)

"En torno a un proyecto de Reforma Constitucional sobre Área Social y participación de los trabajadores presentado por la D.C., y que perseguía paralizar el cumplimiento del Programa y en vista de la fuerza demostrada por el Gobierno Popular, la directiva del PDC (controlada todavía por su sector progresista), manifestó su disposición favorable a concertar un compromiso con la UP. Se presentó entonces una oportunidad de comprometer a la D.C. en el impulso a cuestiones esenciales del Programa (comunes al programa presidencial de Tomic), decisivas para quebrar el espinazo del régimen capitalista dependiente expropiando la propiedad monopólica".

"La oposición del ala derechista de la D.C., que se jugó entera, frustró esta posibilidad, y a ello contribuyó la oposición del oportunismo de izquierda, expresado principalmente en el seno del Partido, que no fue capaz de entender que los compromisos tácticos son posibles y necesarios en una política revolucionaria".

Hasta aquí la cita del documento socialista que va íntegro en los anexos de este libro.

La lucha continúa por un Chile verdaderamente democrático

Al cumplirse 30 años del golpe fascista, en Chile y en muchos países, especialmente latinoamericanos y europeos, se le rinde homenaje a Salvador Allende, se le recuerda con cariño y se destaca su gobierno y su obra como una audaz y singular tentativa de cambiar la sociedad para hacerla más justa y democrática y al país más independiente y soberano.

A treinta años de tan valiosa experiencia, truncada por un golpe de tipo fascista, el país se encuentra cada vez más inserto en el mundo unipolar que comanda a su entera voluntad Estados Unidos de Norteamérica y, tanto los partidos políticos de gobierno como los de derecha, marchan por el mismo sendero mientras las fuerzas alternativas al sistema, cuya consecuencia se reconoce y se respeta, siguen contenidas en su desarrollo. Entre los factores determinantes de esta situación se debe considerar, especialmente el hecho objetivo de que el país que tenemos es otro y otro el nivel político de la gente en su conjunto. La dictadura logró cambiar la mentalidad del pueblo, de la mayoría de los chilenos. Mantuvo al país en la oscuridad más absoluta, con prensa, radios y televisión que sólo expresaban el pensamiento que salía de la oficina del dictador, de los cuarteles y de la DINA. Varias generaciones nacieron, crecieron y se formaron en la oscuridad de la cerrada y larga noche del pinochetismo. Al menos dos tercios de los 15 millones 400 mil chilenos de hoy no habían nacido hace 30 o 33 años.

Hasta 1973, nuestra clase obrera y nuestro pueblo se distinguían por su alto grado de organización y de conciencia política. Casi un millón de sindicalizados pertenecían a la Central Única de Trabajadores, la tercera parte de la masa laboral. Hoy cuenta con menos de 500 mil miembros, cuando el número de trabajadores sobrepasa ligeramente los 6 millones. Los partidos de mayor raigambre proletaria, el Partido Comunista y el Socialista, llegaron a tener 22 y 26 diputados y 9 y 6 senadores, respectivamente. En el presente hay sólo 5 senadores y 11 diputados socialistas y ningún parlamentario comunista, esto último principalmente a causa de las "leyes" que impuso la dictadura y se mantienen hasta ahora. El nivel político de los trabajadores ha descendido visiblemente. Parte de la izquierda de ayer se ubica hoy en el centro y, junto a la derecha, mantiene y administra el sistema neoliberal y comparte la política de globalización capitalista que beneficia ante todo al gran imperio del norte. Se trabaja, cuando hay trabajo, para sobrevivir. Se vive "al tres y al cuatro". Las conquistas sociales y los ingresos de los trabajadores

han mermado. En la educación y en la salud se ha retrocedido. La corrupción es un escándalo en las altas esferas políticas y administrativas.

Chile ha vuelto a ser un país dominado por el gran capital monopolista.

Pero existe la gente pobre –pobre en bienes materiales y rica en sentimientos nobles–, los chilenos y chilenas que sueñan como Allende soñara, con un Chile verdaderamente democrático y un mundo diferente. Y aunque la desesperanza inmoviliza a muchos otros, no faltan quienes se mantienen leales al legado de Allende y asumen el deber de continuar la lucha. Hay también, chilenos y chilenas que sin haber vivido o habiendo vivido poco en aquel tiempo, se guían por principios, ideales y objetivos nobles y valiosos, defienden la naturaleza, repudian el consumismo, son críticos del sistema en su conjunto y en particular de la manipulación de los medios de comunicación, de la mediocridad y chabacanería que exhiben los programas de la televisión, de las coimas y de los sueldos y sobresueldos millonarios.

Nada ni nadie podrá impedir que el ser humano continúe bregando por un porvenir mejor. Hay quienes siguen pregonando la necesidad de olvidar el pasado, de dejar atrás lo que hizo el gobierno de Allende y lo que hizo la dictadura. Ni una ni otra cosa será posible. Los crímenes no serán olvidados. La verdad y el castigo son necesarios "para que nunca más en Chile" ocurran y para establecer una nueva relación entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. Nada hay que borrar de la historia de Chile, ni lo bueno ni lo malo. Por esto, los grandes méritos del gobierno de Allende, sin ocultar sus errores, también deben ser conocidos y reconocidos por todas las generaciones venideras.

Como dijera Pedro Vuscovic, "la derrota de 1973 no desmiente la validez, los atributos y la fuerza del proyecto y su proceso de materialización. Porque estrictamente fue eso: no fracaso, derrota; no fue el derrumbe de un proyecto inviable, mal concebido, ni siquiera de una conducción equivocada o un cúmulo de errores de dirección (aunque sin duda hubo muchos de ellos); fue el desenlace impredecible a que está expuesta cualquier empresa revolucionaria cuyo propósito transformador lo enfrenta a poderosos intereses y cuya trayectoria es, por lo mismo, una trayectoria de lucha cuyo éxito no está nunca garantizado".

Y más adelante agregó: "no se trata de retomar hoy en todos sus términos los mismos proyectos del pasado; aunque sí de analizarlos a fondo para que sus enseñanzas y la experiencia vivida sean factores de apoyo frente a aquel cuadro de dificultades mayores. Y también, para retomar sin complejos lo que hay en ellos de rescatable; porque sin duda el proyecto de Allende es, en muchos aspectos, una respuesta todavía idónea para Chile del presente; su aspiración a la síntesis de socialismo con democracia y libertad, la integración social interna como eje de un nuevo patrón de desarrollo, la reconversión de la economía de

modo que pase a ser una economía para todos. Y la autonomía nacional como requisito indispensable".[47]

Almeyda, por su lado, decía en 1980: "Debemos afirmar que la causa última de que se haya producido en Chile una contrarrevolución para derribar al gobierno de la Unidad Popular, no reside en nuestros errores cometidos –que reconocemos– sino en el hecho de que las profundas transformaciones socioeconómicas que ese gobierno realizó y estaba realizando en Chile herían de tal manera los intereses políticos y económicos del imperialismo y de las clases propietarias en Chile, que estas, necesariamente, como lo demuestran la experiencia mundial y la teoría, tenían que levantarse en armas en contra del régimen, al margen y en contra de la institucionalidad democrática"[48].

Y el autor, al concluir este escrito se permite decir y recordar que en el cercano y pasado siglo XX, ninguna coalición política pudo gobernar el país más de tres períodos presidenciales. Ello hace más valedera la idea de quienes piensan que la Concertación de Partidos por la Democracia vive sus últimos días... Su desintegración aparece cercana. La subsistencia y el porvenir de la llamada Alianza por Chile tampoco son tan claros. Hay una crisis que afecta a la sociedad en su conjunto, fenómeno que por lo general precede a un período de quiebres y realineamientos políticos que abren otras posibilidades. No estoy pensando en cambios radicales a corto plazo. La conquista de una democracia verdadera no está a la vuelta de la esquina. Pero vendrá, sin duda, cuando la organización y la lucha del pueblo vuelvan a estar en el centro de la política como en los años 60 y comienzos de los setenta, cuando el movimiento sindical alcance el vigor y la pujanza que tuvo en los años de Clotario Blest, Lucho Figueroa y Víctor Díaz, cuando el entendimiento entre los partidos y fuerzas democráticas sea una preocupación indispensable de todos los hombres y mujeres progresistas, cuando los partidos comunista y socialista se reencuentren de nuevo, vuelvan a ser colectividades vigorosas y centrales en la vida política del país y el eje de una izquierda fuerte, como en los tiempos de Salvador Allende y, cuando a consecuencia de cuanto he señalado, la confianza, la fe, la mística y el entusiasmo vuelvan a la conciencia y al corazón de la gente, todo lo cual no significa volver al pasado, pero sí al protagonismo del pueblo, recogiéndose su histórico legado.

---

[47] *Pedro Vuscovic. Obras escogidas sobre Chile 1964-1993*, págs. 423-428 Colección Siglo XX, Edición Centro de estudios Políticos de Latinoamérica Simón Bolívar, junio 1993.

[48] Intervención de Clodomiro Almeyda en la Conferencia Científica Internacional, realizada en Berlín del 20 al 24 de octubre de 1980.

APÉNDICES

PROGRAMA BÁSICO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR

PROGRAMA BÁSICO DE GOBIERNO DE LA UNIDAD POPULAR, aprobado por los Partidos Comunista, Socialista, Radical y Social Demócrata, el Movimiento de Acción Unitaria (MAPU) y la Acción Popular Independiente, el 17 de diciembre de 1969, en Santiago de Chile.

Introducción

Los partidos y movimientos que integran el Comité Coordinador de la Unidad Popular, sin perjuicio de mantener cada cual su propia filosofía y sus propios perfiles políticos, coinciden plenamente en la caracterización de la realidad nacional expuesta a continuación y en las proposiciones programáticas que serán la base de nuestra acción común y que entregamos a consideración del pueblo.

1.-Chile vive una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas, así como en las crecientes dificultades que enfrentan los empleados, profesionales, empresarios pequeños y medianos y en las mínimas oportunidades de que disponen la mujer y la juventud.

Los problemas en Chile se pueden resolver. Nuestro país cuenta con grandes riquezas como el cobre y otros minerales, un gran potencial hidroeléctrico, vastas extensiones de bosques, un largo litoral, rico en especies marinas, una superficie agrícola más que suficiente, etc., cuenta además con la voluntad de trabajo y progreso de los chilenos, junto con su capacidad técnica y profesional. ¿Qué es entonces lo que ha fallado?

Lo que ha fracasado en Chile es un sistema que no corresponde a las necesidades de nuestro tiempo. Chile es un país capitalista, dependiente del imperialismo, dominado por sectores de la burguesía estructuralmente ligados

al capital extranjero, que no pueden resolver los problemas fundamentales del país, los que se derivan precisamente de sus privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente.

Más aún, como consecuencia misma del desarrollo del capitalismo mundial, la entrega de la burguesía monopolista nacional al imperialismo aumenta progresivamente, se acentúa cada vez más en su dependencia, su papel de socio menor del capital extranjero.

Para unos pocos, vender a diario un pedazo de Chile es un gran negocio. Decidir por los demás es lo que hacen todos los días.

Para la gran mayoría en cambio vender a diario su esfuerzo, su inteligencia y su trabajo es un pésimo negocio, y decidir sobre su propio destino es un derecho del cual, en gran medida, aún están privados.

2.-En Chile las recetas "reformistas" y "derrotistas" que impulsó la Alianza para el Progreso e hizo suyas el gobierno de Frei no han logrado alterar nada importante. En lo fundamental ha sido un nuevo gobierno de la burguesía al servicio del capitalismo nacional y extranjero, cuyos débiles intentos de cambio social naufragaron sin pena ni gloria entre el estancamiento económico, la carestía y la represión violenta contra el pueblo. Con esto se ha demostrado una vez más que el reformismo es incapaz de resolver los problemas del pueblo.

3.-El desarrollo del capitalismo monopolista, niega la ampliación de la democracia y exacerba la violencia antipopular.

El aumento del nivel de lucha del pueblo, a medida que fracasa el reformismo, endurece la posición de los sectores más reaccionarios de las clases dominantes que, en último término, no tienen otro recurso que la fuerza.

Las formas brutales de la violencia del Estado actual, tales como las acciones del Grupo Móvil, el apaleo de campesinos y estudiantes, las matanzas de pobladores y mineros son inseparables de otras no menos brutales que afectan a todos los chilenos.

Porque la violencia es, que junto a quienes poseen viviendas de lujo, una parte importante de la población habite en viviendas insalubres y otros no dispongan siquiera de un sitio; violencia es que mientras algunos botan la comida, otros no tengan cómo alimentarse.

4.- La explotación imperialista de las economías atrasadas se efectúan de muchas maneras; a través de las inversiones en la minería (cobre, hierro, etc.), y en la actividad industrial, bancaria y comercial, mediante el control tecnológico que nos obliga a pagar altísimas sumas en equipos, licencias y patentes; de los

préstamos norteamericanos en condiciones usurarias que nos imponen gastar en Estados Unidos y con la obligación adicional de transportar en barcos norteamericanos los productos comprados, etc.

Para muestra un solo dato. Desde 1952 hasta hoy, los norteamericanos invirtieron en América Latina 7 mil 473 millones de dólares y se llevaron 16 mil millones de dólares.

De Chile el imperialismo ha arrancado cuantiosos recursos equivalentes al doble del capital instalado en nuestro país, formado a lo largo de toda su historia.

Los monopolios norteamericanos, con la complicidad de los gobiernos burgueses, han logrado apoderarse de casi todo nuestro cobre, hierro y salitre. Controlan el comercio exterior y dictan la política económica por intermedio del Fondo Monetario Internacional y otros organismos. Dominan importantes ramas industriales y de servicios; gozan de estatutos de privilegios, mientras hay reducción de salarios y sueldos y distorsionan la actividad agrícola por la vía de los excedentes agropecuarios.

Intervienen también en la educación, la cultura y los medios de comunicación. Valiéndose de convenios militares y políticos tratan de penetrar las FF.AA.

Las clases dominantes, cómplices de esta situación e incapaces de valerse por ellas mismas, han intensificado en los últimos diez años el endeudamiento de Chile con el extranjero.

Dijeron que los préstamos y compromisos con los banqueros internacionales podrían producir un mayor desarrollo económico. Pero lo único que lograron es que hoy día Chile tenga récord de ser uno de los países más endeudados de la tierra en proporción a sus habitantes.

5.- En Chile se gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas, cuyo poder permanece casi intacto.

A los dueños del capital les interesa siempre ganar más dinero y no satisfacer las necesidades del pueblo chileno. Si producir e importar automóviles de alto precio, por ejemplo, es buen negocio, se desvían hacia ese rubro valiosos recursos de nuestra economía, sin tener en cuenta que sólo un porcentaje ínfimo de los chilenos están en condiciones de adquirirlos y que hay necesidades mucho más urgentes que atender, desde luego, en este mismo rubro, la de mejorar la locomoción colectiva, dotar de maquinaria a la agricultura, etc.

El grupo de empresarios que controla la economía, la prensa y otros medios de comunicación; el sistema político, y que amenaza al Estado cuando éste insinúa intervenir o se niega a favorecerlos, les cuesta muy caro a todos los chilenos.

Para que ellos se dignen seguir "trabajando", pues sólo ellos pueden darse el lujo de poder trabajar o no, es preciso:

– Darles toda clase de ayuda. Los grandes empresarios estrujan al Estado bajo la amenaza que no habrá inversión privada si las ayudas y garantías que piden no se les otorgan;

– Permitirles producir lo que ellos quieran con el dinero de todos los chilenos, en lugar de elaborar lo que necesita la gran mayoría del país;

– Dejarlos llevarse las garantías que obtienen a sus cuentas bancarias en el extranjero;

– Dejarlos despedir obreros si éstos piden mejores salarios;

– Permitirles manipular la distribución de alimentos, acapararlos para provocar escasez y de esta manera subir los precios a fin de continuar enriqueciéndose a costa del pueblo.

Mientras tanto, buena parte de los que efectivamente producen experimentan una difícil situación;

– Medio millón de familias carecen de viviendas y otras tantas o más bien en pésimas condiciones en cuanto a alcantarillado, agua potable, luz, salubridad.

– La necesidad de la población en materia de educación y salud son insuficientemente atendidas.

– Más de la mitad de los trabajadores chilenos reciben remuneraciones insuficientes para cubrir sus necesidades vitales mínimas. La desocupación y el trabajo inestable se sufren en cada familia. Para innumerables jóvenes la posibilidad de empleo se presenta muy difícil e incierta.

El capital imperialista y un grupo privilegiado que no pasa del 10% de la población acaparan la mitad de la renta nacional. Esto significa que de cada cien escudos que los chilenos producen, 50 van a pasar a bolsillos de 10 oligarcas y los otros 50 deben repartirse entre 9 chilenos, del pueblo y de la clase media.

6.- El alza del costo de la vida es un infierno en los hogares del pueblo y, en especial, para la dueña de casa. En los últimos 10 años, según datos oficiales, el costo de la vida ha subido en un mil por ciento.

Esto significa que todos los días se les roba una parte de su salario o de su sueldo a los chilenos que viven de su trabajo. Igual como le ocurre a los jubilados y pensionados, al trabajador independiente, al artesano, al pequeño productor, cuyas exiguas rentas son recortadas a diario por la inflación.

Alessandri y Frei aseguraron que pondrían término a la inflación. Los resultados están a la vista. Los hechos demuestran que la inflación en Chile obedece a causas de fondo relacionadas con la estructura capitalista de nuestra sociedad

y no a las alzas de remuneraciones como han pretendido hacer creer los sucesivos gobiernos para justificar la mantención del sistema y recortar los ingresos de los trabajadores. El gran capitalista en cambio, se defiende de la inflación y más aún se beneficia con ella. Sus propiedades y capitales se valorizan, sus contratos de construcción con el Fisco se reajustan, y los precios de sus productos suben llevando siempre la delantera a las alzas de remuneraciones.

7.- Un alto número de chilenos están mal alimentados. Según las estadísticas oficiales, el 50% de los menores de 15 años de edad están desnutridos. La desnutrición afecta su crecimiento y limita su capacidad de aprender, de instruirse.

Esto demuestra que la economía en general y el sistema agrícola en particular, son incapaces de alimentar a los chilenos, pese a que Chile podría sustentar ahora mismo una población de 30 millones de personas, el triple de la población anual.

Por el contrario, debemos importar cada año centenares de miles de dólares en alimentos de origen agropecuario.

El latifundio es el gran culpable de los problemas de todos los chilenos y responsable de la situación de atraso y miseria que caracteriza al campo chileno. Los índices de mortalidad infantil y adulta, de analfabetismo, de falta de viviendas, de insalubridad son, en las zonas rurales, marcadamente superiores a los de las ciudades. Estos problemas no los ha resuelto la insuficiente Reforma Agraria del gobierno democratacristiano. Sólo la lucha de sus combates por la tierra y la liquidación del latifundio abren nuevas perspectivas al movimiento popular chileno.

8.- El crecimiento de nuestra economía es mínimo. En los últimos lustros hemos crecido en promedio, apenas a razón de un 2% anual por persona; y desde 1967 no hemos crecido, más bien hemos retrocedido, según las cifras del propio gobierno (ODEPLAN). Esto quiere decir que en 1966 cada chileno tenía mayor cantidad de bienes de lo que tiene hoy. Ello explica que la mayoría esté disconforme y busque una alternativa para nuestro país.

9.- La única alternativa verdaderamente popular y, por lo tanto, la tarea fundamental que el Gobierno del Pueblo tiene ante sí, es terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.

La unidad y la acción del pueblo organizado

El crecimiento de las fuerzas trabajadoras en cuanto a su número, su organización, su lucha y la conciencia de su poder, refuerzan y propagan la voluntad de cambios profundos, la crítica del orden establecido y el choque con sus estructuras. En nuestro país son más de tres millones de trabajadores, cuyas fuerzas productivas y su enorme capacidad constructiva, no podrán sin embargo liberarse dentro del actual sistema que solo puede explotarles y someterles.

Estas fuerzas, junto a todo el pueblo, movilizando a todos aquellos que no están comprometidos con el poder de los intereses reaccionarios, nacionales y extranjeros, o sea, mediante la acción unitaria y combativa de la inmensa mayoría de los chilenos, podrán romper las actuales estructuras y avanzar en la tarea de su liberación.

La Unidad Popular se hace para eso.

Los imperialistas y las clases dominantes del país combatirán la Unidad Popular y tratarán de engañar una vez más al pueblo. Dirán que la libertad está en peligro, que la violencia se adueñará del país, etc. Pero las masas populares creen cada vez menos en estas mentiras. Diariamente crece su movilización social que hoy se ve reforzada y alentada por la unificación de las fuerzas de izquierda.

Para estimular y orientar la movilización del pueblo de Chile hacia la conquista del poder, constituiremos por todas partes los Comités de la Unidad Popular, articulados en cada fábrica, fundo, población, oficina o escuela por los militantes de los movimientos y de los partidos de izquierda integrados por esa multitud e chilenos que se definen por los cambios fundamentales.

Los Comités de la Unidad Popular no sólo serán organismos electorales. Serán intérpretes y combatientes de las reivindicaciones inmediatas de las masas, y sobre todo, se prepararán para ejercer el Poder Popular.

Así, pues, este nuevo poder que Chile necesita debe empezar a gestarse desde ya, donde quiera que el pueblo se organice para luchar por sus problemas específicos y donde quiera que se desarrolle la conciencia de la necesidad de ejercerlo.

Este sistema de trabajo común será método permanente y dinámico de desarrollo del Programa, una escuela activa para las masas y una forma concreta de profundizar el contenido político de la Unidad Popular en todos sus niveles.

En un momento dado de la campaña los contenidos esenciales de este Programa, enriquecidos por la discusión y el aporte del pueblo y una serie de

medidas inmediatas de gobierno, serán señaladas en un Acta del pueblo que se constituirá para el nuevo Gobierno Popular y el Frente que lo sustenta, en un mandato irrenunciable.

Apoyar al candidato de la Unidad Popular no significa, por tanto sólo votar por un hombre, sino también pronunciarse a favor del reemplazo urgente de la actual sociedad que se asienta en el dominio de los grandes capitalistas nacionales y extranjeros.

EL PROGRAMA

El Poder Popular

Las transformaciones revolucionarias que el país necesita sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente.

El pueblo de Chile ha conquistado, a través de un largo proceso de lucha, determinadas libertades y garantías democráticas, por cuya continuidad debe mantenerse en actitud de alerta y combatir sin tregua. Pero el poder mismo le es ajeno.

Las fuerzas populares y revolucionarias no se ha unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.

El triunfo popular abrirá paso así al régimen político más democrático de la historia del país.

En materia de estructura política del Gobierno Popular tiene la doble tarea de:

a) Preservar, hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores.

b) Transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado donde los trabajadores y el pueblo tengan el real ejercicio del poder.

La Profundización de la Democracia y las Conquistas de los Trabajadores

El Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo. La libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y de organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes.

Para que esto sea efectivo, las organizaciones sindicales y sociales de los obreros, empleados, pobladores, dueñas de casa, estudiantes, profesionales, intelectuales, artesanos., pequeños y medianos empresarios y demás sectores de trabajadores serán llamados a intervenir en el rango que les corresponda en las decisiones de los órganos de poder.

Por ejemplo, en las instituciones de previsión y seguridad social, estableceremos la administración por sus propios imponentes, asegurando a ellos la elección democrática y en votación secreta de sus consejos directivos. Respecto de las empresas del sector público, sus consejos directivos y sus comités de producción deben contar con mandatarios directos de sus obreros y empleados.

En los organismos habitacionales correspondientes a su jurisdicción y nivel, las Juntas de Vecinos y demás organizaciones de pobladores dispondrán de mecanismos para fiscalizar sus operaciones e intervenir en múltiples aspectos de su funcionamiento. Pero, no se trata únicamente de estos ejemplos, sino de una nueva concepción en que el pueblo adquiere una intervención real y eficaz en los organismos del Estado.

Asimismo, el Gobierno Popular garantizará el derecho a los trabajadores al empleo y a la huelga y de todo el pueblo a la educación y a la cultura, con pleno respeto de todas las ideas y de las creencias religiosas, garantizando el ejercicio de su culto.

Se extenderán todos los derechos y garantías democráticas entregando a las organizaciones sociales los medios reales para ejercerlos creando los mecanismos que les permitan actuar en los diferentes niveles del aparato de Estado.

El Gobierno Popular asentará esencialmente su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado. Esta es nuestra concepción de gobierno fuerte, opuesta por tanto a la que acuñan la oligarquía y el imperialismo que identifican la autoridad con la coerción ejercida contra el pueblo.

El Gobierno Popular será pluripartidista. Estará integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias. Será así un ejecutivo verdaderamente democrático, representativo y cohesionado.

El Gobierno Popular respetará los derechos de la oposición que se ejerzan dentro de los marcos legales.

El Gobierno Popular iniciará de inmediato una real descentralización administrativa, conjugada con una planificación democrática y eficiente que elimine el centralismo burocrático y reemplace la coordinación de todos los organismos estatales.

Se modernizará la estructura de las municipalidades reconociéndoseles la autoridad que les corresponde de acuerdo a los planes de coordinación de todo el Estado. Se tenderá a transformarlas en órganos locales de la nueva organización política, dotándolas de financiamiento y atribuciones adecuadas, a fin de que puedan atender, en interacción con las Juntas de Vecinos y coordinadas entre sí, los problemas de interés local de sus comunas y de sus habitantes. Deben entrar en funciones con este mismo propósito las Asambleas Provinciales.

La Policía debe ser reorganizada a fin que no pueda volver a emplearse como organismo de represión contra el pueblo y cumpla en cambio, con el objetivo de defender a la población de las acciones antisociales. Se humanizará el procedimiento policial de manera de garantizar efectivamente el pleno respeto a la dignidad y a la integridad física del ser humano. El régimen carcelario, que constituye una de las peores lacras del actual sistema debe ser transformado de raíz, con vista a la regeneración y recuperación de los que hayan delinquido.

UN NUEVO ORDEN INSTITUCIONAL: EL ESTADO POPULAR

La Organización Política

A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas se construirá desde la base la nueva estructura del poder.

Una nueva Constitución Política institucional, la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.

Se creará una organización del Estado estructurada a nivel nacional, regional y local, que tendrá a la Asamblea del Pueblo como órgano superior de poder.

La Asamblea del Pueblo será la Cámara única que expresará nacionalmente la soberanía popular. En ella confluirán y se manifestarán las diversas corrientes de opinión.

Este sistema permitirá suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial, como el parlamentarismo corrompido.

Normas específicas coordinarán las atribuciones y responsabilidades del Presidente de la República, ministros, Asamblea del Pueblo, organismos regionales y locales de poder, partidos políticos con el fin de asegurar la operatividad legislativa, la eficiencia del gobierno y, sobre todo, el respeto a la voluntad de la mayoría.

A fin de establecer la debida armonía entre los poderes que emanan de la voluntad popular y de que ésta pueda expresarse de un modo coherente, todas las elecciones se efectuarán en un proceso conjunto dentro de un mismo lapso.

La generación de todo organismo de representación popular deberá realizarse por sufragio universal, secreto y directo, de los hombres y mujeres, mayores de 18 años, civiles, militares, alfabetos y analfabetos.

Los integrantes de la Asamblea del pueblo y todo organismo de representación popular estarán sujetos al control de los electores, mediante mecanismos de consulta que podrán invocar sus mandatos.

Se establecerá un riguroso sistema de incompatibilidades que conduzca al término del mandato o de la privación de su cargo cuando un diputado o un funcionario de altas responsabilidades, se desempeñe como gestor de intereses privados.

Los instrumentos de la política económica y social del Estado constituirán un sistema nacional de planificación, tendrán carácter ejecutivo y su misión será dirigir, coordinar y racionalizar la acción del Estado. Los planes que operen deberán ser aprobados por la asamblea del Pueblo. Los organismos de los trabajadores tendrán una intervención fundamental en el sistema de planificación.

Los organismos regionales y locales de poder del Estado popular ejercerán autoridad en el radio geográfico que les corresponda y tendrán facultades económicas, políticas y sociales. Podrán, además, entregar iniciativas y ejercer la crítica a los organismos superiores.

Sin embargo, el ejercicio de las facultades de los organismos regionales y locales deberá ajustarse a los marcos fijados por las leyes nacionales y por los planes generales de desarrollo económico y social.

En cada uno de los niveles del Estado Popular se integrarán las organizaciones sociales con atribuciones específicas. A ellas les corresponderá compartir responsabilidades y desarrollar iniciativas en sus respectivos radios de acción, así como el examen y solución de los problemas de su competencia. Estas atribuciones no implicarán limitación alguna a la plena independencia y autonomía del las organizaciones.

Desde el día mismo que asuma el mando, el Gobierno Popular abrirá canales a fin de que se exprese la influencia de los trabajadores y del pueblo, por

intermedio de las organizaciones sociales, en la adopción de decisiones y en la fiscalización del funcionamiento de la administración estatal.

Estos serán los pasos para la liquidación del centralismo burocrático que caracteriza el sistema de administración actual.

La Organización de la Justicia

La organización y la administración de la justicia deben estar basadas en el principio de la autonomía, consagrado constitucionalmente y en una real independencia económica.

Concebimos la experiencia de un Tribunal Supremo, cuyos componentes serán designados por la Asamblea del Pueblo sin otra limitación que la que emanen de la natural idoneidad de sus miembros. Este tribunal generará libremente los poderes internos, unipersonales o colegiados del sistema judicial.

Entendemos que la nueva organización y administración de justicia devendrá en auxilio de las clases mayoritarias. Además será expedita y menos onerosa.

Para el Gobierno Popular una nueva concepción de la magistratura reemplazará a la actual, individualista y burguesa.

La Defensa Nacional

El Estado Popular mantendrá una actitud alerta frente a la preservación de la soberanía nacional, lo que concibe como un deber de todo el pueblo.

El Estado Popular mantendrá una actitud de alerta frente a las amenazas a la integridad territorial y a la independencia del país alentadas por el imperialismo y por los sectores oligárquicos que se entronizan en países vecinos y que junto con reprimir a sus pueblos alientan afanes expansionistas y revanchistas.

Definirá una concepción moderna patriótica y popular de la soberanía del país basada en los siguientes criterios:

(a) Afianzamiento del carácter nacional de todas las ramas de las Fuerzas Armadas. En este sentido rechazo de cualquier empleo de ellas para reprimir al pueblo o participar en acciones que interesen a potencias extrañas.

(b) Formación técnica y abierta a todos los aportes de la ciencia moderna, y conforme a las conveniencias de Chile, de la independencia nacional, de la paz y de la amistad entre los pueblos.

(c) Integración y aporte de las Fuerzas Armadas en diversos aspectos de la vida social. El Estado Popular se preocupará de posibilitar la contribución de las Fuerzas Armadas al desarrollo económico del país sin perjuicio de su labor esencialmente de defensa de la soberanía.

Sobre estas bases, es necesario asegurar a las Fuerzas Armadas los medios y materiales técnicos y un justo y democrático sistema de remuneraciones, promociones y jubilaciones que garanticen a oficiales, suboficiales, clases y tropas la seguridad económica durante su permanencia en las filas y en las condiciones de retiro y la posibilidad efectiva para todos de ascender atendiendo sólo a sus condiciones personales.

La construción de la nueva economía

Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo.

En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo.

Área de Propiedad Social

El proceso de transformación de nuestra economía se inicia con una política destinada a construir un área estatal dominante, formada por las empresas que actualmente posee el Estado más empresas que se expropien. Como primera medida se nacionalizarán aquellas riquezas básicas que como la gran minería del cobre, hierro y salitre y otras, están en poder de capitales extranjeros y de los monopolios internos. Así quedarán integrando este sector de actividades nacionalizadas las siguientes:

1) La gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral;

2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros;

3) El comercio exterior

4) Las grandes empresas y monopolios de distribución;

5) Los monopolios industriales estratégicos;

6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario; aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel.

7) Todas las expropiaciones se harán siempre con pleno resguardo del interés del pequeño accionista.

Área de Propiedad Privada

Esta área comprende aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios, en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción.

Estas empresas en número serán la mayoría. Así por ejemplo, en 1967, de las 30.500 industrias (incluyendo la industria artesanal), solo unas 150 controlaban monopólicamente todos los mercados, concentrando la ayuda del Estado, el crédito bancario y explotando al resto de los empresarios industriales del país vendiéndoles baratos sus productos.

Las empresas que integran este sector serán beneficiadas con la planificación general de la economía nacional. El Estado producirá la asistencia financiera y técnica necesaria a las empresas de esta área, para que puedan cumplir con la importante función que desempeñan en la economía nacional, atendiendo el número de las personas que trabajan en ellas, como volumen de la producción que generan.

Además se simplificarán los sistemas de patentes, aranceles aduaneros, contribuciones y tributos para estas empresas y se les asegurará una adecuada y justa comercialización de sus productos.

En estas empresas se deberán garantizar los derechos de obreros y empleados a salarios y condiciones de trabajo justos. El resto de estos derechos será cautelado por el Estado y los trabajadores de la empresa respectiva.

Área Mixta

Este sector será mixto porque se compondrá de empresas que combinen los capitales del Estado a los particulares.

Los préstamos o créditos concebido por los organismos de fomento a las empresas de esta área podrán serlo en calidad de acreedor. Lo mismo será válido para los casos en que dichas empresas obtengan créditos con el aval o garantía del Estado o de sus instituciones.

Profundización y extensión de la Reforma Agraria

La Reforma Agraria es concebida como un proceso simultáneo y complementario con las transformaciones generales que se desea promover en la estructura social, política y económica del país, de manera que su realidad es inseparable del resto de la política general. La experiencia ya existente en esta materia y los vacíos o inconsecuencias que de ella se desprenden, conducen a

reformular la política de distribución y organización de la propiedad de la tierra y en base a las siguientes directivas:

1) Aceleración del proceso de Reforma Agraria expropiando los predios que excedan a la cabida máxima establecida, según las condiciones de las distintas zonas, incluso los frutales, vitivinícolas y forestales sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. La expropiación podrá incluir la totalidad o parte de los activos de los predios expropiados (maquinarias, herramientas, animales, etc.).

2) Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal.

3) Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa.

4) Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre las bases de cooperativa mutua.

5) También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.

6) En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.

7) Reorganización de la propiedad minifundista a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola.

8) Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicio de las cooperativas que operen en su área geográfica.

9) Defensa de la integridad y ampliación y asegurar la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas por la usurpación, y que al pueblo mapuche y demás indígenas se les asegure tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia apropiadas.

Política de desarrollo económico

La política del Estado se llevará adelante a través del sistema nacional de planificación económica y de los mecanismos de control, orientación, crédito a la producción, asistencia técnica, política tributaria y de comercio exterior, como asimismo mediante la propia gestión del sector estatal de la economía.

1) Resolver los problemas inmediatos de las grandes mayorías. Para esto se volcará la capacidad productiva del país de los artículos superfluos y caros destinados a satisfacer sectores de altos ingresos hacia la producción de artículos de consumo popular, baratos y de buena calidad.

2) Garantizar ocupación a todos los chilenos en edad de trabajar con un nivel de remuneraciones adecuado. Esto significa diseñar una política que genere un gran empleo proponiéndose el uso adecuado de los recursos del país y la adaptación de la tecnología a las exigencias del desarrollo nacional

3) Liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc.

4) Asegurar un crecimiento económico rápido y descentralizado que tienda a desarrollar al máximo las fuerzas productivas, procurando el óptimo aprovechamiento de los recursos humanos, naturales, financieros y técnicos disponibles, a fin de incrementar la productividad del trabajo y de satisfacer tanto a las exigencias del desarrollo independiente de la economía, como a las necesidades y aspiraciones de la población trabajadora y compatibles con una vida digna y humana.

5) Ejecutar una política de comercio exterior tendiente a desarrollar y diversificar nuestras exportaciones, abrir nuevos mercados, lograr una creciente independencia tecnológica y financiera y evitar las escandalosas devaluaciones de nuestra moneda.

6) Tomar todas las medidas conducentes a la estabilidad monetaria. La lucha contra la inflación se decide esencialmente con los cambios estructurales enunciados. Debe, además, incluir medidas que adecuen el flujo de circulante a las reales necesidades del mercado, controle y distribuya el crédito y evite la usura en el comercio del dinero. Racionalice la distribución y el comercio. Estabilice los precios. Impida que la estructura de la demanda proveniente de las altas rentas incentive el alza de precios.

La garantía del cumplimiento de estos objetivos reside en el control por el pueblo organizado del poder político y económico, expresado en el área estatal de la economía y en la planificación general de ésta. Es este poder popular el que se asegurará el cumplimiento de las tareas señaladas.

Tareas sociales

Las aspiraciones sociales del pueblo chileno son legítimas y posibles de satisfacer. Quiere, por ejemplo, viviendas dignas sin reajuste que esquilmen sus ingresos; escuelas, universidades para sus hijos; salarios suficientes; que terminen de una vez las alzas de precios, trabajo estable; atención médica oportuna; alumbrado público, alcantarillado, agua potable, calles y aceras pavimentadas;

una previsión justa y operante, sin pensiones de hambre; teléfonos, policías, jardines infantiles, canchas deportivas; turismo y balnearios populares.

La satisfacción de estos justos anhelos del pueblo –que en verdad constituyen derechos que la sociedad debe reconocerle– será preocupación preferente del Gobierno popular.

Puntos básicos de esta acción de gobierno serán:

a) Definición de una política de remuneraciones procediendo a crear de inmediato los organismos que con participación de los trabajadores determinarán cifras que efectivamente constituyan sueldos vitales y salarios mínimos en diversas zonas del país.

Mientras subsista la inflación se procederá a establecer reajustes automáticos, de acuerdo con el alza del costo de la vida. Estos operarán cada seis meses o cada vez que el costo de la vida supere un nivel del 5% de crecimiento.

En todos los organismos del Estado, y en primer lugar en los cargos de confianza del Ejecutivo, se limitarán los sueldos altos a una cifra compatible con la situación de nuestro país.

Se procederá en un plazo que será definido técnicamente a establecer un sistema de sueldos y salarios mínimos de niéveles iguales para trabajos iguales, cualquiera sea la empresa donde estos trabajos se realicen. Esta política se iniciará en el área estatal para irla extendiendo a toda la economía, sin perjuicio de las diferencias derivadas de productividades dispares en distintas empresas. Del mismo modo entre el hombre y la mujer o por edad en materia de sueldos y salarios.

b) Unificar, mejorar y extender el sistema de seguridad social manteniendo todas las conquistas legítimas alcanzadas, eliminando los privilegios abusivos, la ineficiencia y el burocratismo, mejorando y haciendo expedita la atención de los interesados, extendiendo el sistema previsional a los sectores de trabajadores que aún no la tienen, y entregando a los imponentes la administración de las Cajas de Previsión, las que fundarán dentro de las normas de la planificación.

c) Asegurar la atención médica y dental preventiva a todos los chilenos, financiada por el Estado, los patrones y las instituciones de previsión. Se incorporará la población a la tarea de proteger la salud pública.

d) Se destinarán fondos suficientes a fin de llevar a cabo un amplio plan de edificación de viviendas. Se desarrollará la industrialización de la construcción controlando sus precios, limitando el monto de las utilidades de las empresas privadas o mixtas que operen en el rubro. En situaciones de emergencia se asignarán terrenos a las familias que las necesiten, facilitándoles ayuda técnica y material para edificar sus viviendas.

El Gobierno Popular tendrá como objetivo de su política habitacional que cada familia llegue a ser propietaria de una casa habitación. Se eliminará el sistema de dividendos reajustables. Las cuotas o rentas mensuales que deban pagar los adquirientes de viviendas y arrendatarios, respectivamente, no excederán, por regla general, del 10% del ingreso familiar.

Llevar adelante la remodelación de ciudades y barrios, con el criterio de impedir el lanzamiento de los grupos modestos a la periferia, garantizando los intereses del habitante del sector remodelado, como del pequeño empresario que allí elabore, asegurando a los ocupantes su ubicación futura.

e) Se establecerá la plena capacidad civil de la mujer casada y la igual condición jurídica de todos sus hijos habidos dentro o fuera del matrimonio así como una adecuada legislación de divorcio con disolución del vínculo, con pleno respaldo de los derechos de la mujer y los hijos.

f) La división legal entre obreros y empleados será suprimida, estableciendo para ambos la calidad común de trabajadores y extendiendo el derecho a sindicalizarse a todos aquellos que actualmente no lo tienen.

Cultura y Religión

Una cultura nueva para la sociedad

El proceso social que se abre con el triunfo del pueblo irá conformando una nueva cultura orientada a considerar el trabajo humano como el más alto valor, a expresar la voluntad de afirmación e independencia nacional y a conformar una visión crítica de la realidad.

Las profundas transformaciones que se emprenderán requieren de un pueblo socialmente consciente y solidario, educado para ejercer y defender su poder político, apto científica y técnicamente para desarrollarse en la economía de transición al socialismo y abierto masivamente a la creación y goce de las más variadas manifestaciones del arte y del intelecto.

Si ya hoy la mayoría de los intelectuales y artistas luchan contra las deformaciones culturales propias de la sociedad capitalista y tratan de llevar los frutos de su creación a los trabajadores y vincularse a su destino histórico, en la nueva sociedad tendrán un lugar de vanguardia para continuar con su acción. Porque la cultura nueva no se creará por decreto, ella surgirá de la lucha por la fraternidad contra el individualismo; por la valoración del trabajo humano contra su desprecio; por los valores nacionales contra la colonización cultural; por

el acceso de las masas populares al arte, la literatura y los medios de comunicación contra su comercialización.

El nuevo Estado procurará la incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística, tanto a través de un sistema educacional radicalmente transformado, como a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular. Una extensa red de Centros Locales de Cultura Popular impulsará la organización de masas para ejercer su derecho a la cultura.

El sistema de cultura popular estimulará la creación artística y literaria y multiplicará los canales de relación entre artistas o escritores con un público infinitamente más vasto que el actual.

Un sistema educacional democrático único y planificado

La acción del nuevo Gobierno se orientará a entregar las más amplias y mejores oportunidades educacionales.

En el cumplimiento de estos propósitos influirá el mejoramiento general de las condiciones de vida de los trabajadores y la consideración, en el nivel que corresponde, de las responsabilidades de los educadores. Además, se establecerá un Plan Nacional de Becas lo suficientemente extenso como para asegurar la incorporación y la continuidad escolar a todos los niños de Chile, especialmente a los hijos de la clase obrera y del campesinado.

Por otra parte, el nuevo Estado desarrollará un plan extraordinario de construcción de establecimientos escolares, apoyado en recursos nacionales y locales movilizados por los órganos básicos de poder. Se expropiarán las edificaciones suntuarias que se requieren para habilitar nuevos establecimientos escolares e internados. Por estos medios se tenderá a crear por lo menos una escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población de las ciudades de Chile.

Con el fin de atender a las necesidades de desarrollo propias de la edad preescolar y para posibilitar la incorporación de la mujer al trabajo productivo, se extenderá rápidamente el sistema de salas-cunas y jardines infantiles, otorgando prioridad a los sectores más necesitados de nuestra sociedad. Por efecto de esta misma política, la niñez obrera y campesina estará más apta para ingresar y permanecer provechosamente en el sistema escolar regular.

Para hacer efectiva una nueva enseñanza se requiere la aplicación de métodos que pongan énfasis en una participación activa y crítica de los estudiantes en sus enseñanzas, en vez de la posición positiva y receptiva que ahora deben mantener.

Para liquidar rápidamente los déficits culturales y educacionales heredados del actual sistema, se llevará a cabo una amplia movilización popular destinada a eliminar a breve plazo el analfabetismo, elevar los niveles de escolaridad de la población adulta.

La educación de adultos se organizará principalmente en función de centros laborales hasta hacer posible el funcionamiento permanente de la educación general, tecnológica y social para los trabajadores.

La transformación del sistema educacional no será obra sólo de técnicos sino tarea estudiada, discutida, decidida y ejecutada por las organizaciones de maestros, trabajadores, estudiantes y padres y apoderados, dentro de los marcos legales de la planificación nacional. Internamente, el sistema escolar se planificará respetando los principios de unidad, continuidad, correlación y diversificación de la enseñanza.

En la dirección ejecutiva del aparato educacional habrá efectiva representación de las organizaciones sociales ya señaladas, integradas en Consejos Locales, Regionales y Nacional de Educación.

Con el objeto de hacer realidad la planificación de la educación y la escuela única, nacional y democrática, el nuevo Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados, empezando por aquellos planteles que seleccionan su alumnado por razones de clase social, origen nacional o confesión religiosa. Esto se realizará integrando al sistema educacional el personal y otros medios de la educación privada.

La educación física

La educación física y la práctica de todos los deportes, desde niveles básicos del sistema educacional y en todas las organizaciones sociales de jóvenes y adultos serán la preocupación constante y metódica del Gobierno Popular.

Democracia, autonomía y Orientación de la universidad

El Gobierno popular prestará un amplio respaldo al proceso de reforma universitaria e impulsará resueltamente su desarrollo. La culminación democrática de este proceso se traducirá en importantes aportes de las universidades al desarrollo revolucionario chileno. Por otra parte, la reorientación de las funciones académicas de docencia, investigación y extensión en función de problemas nacionales será alentada por las realizaciones del Gobierno Popular.

El Estado asignará a las universidades recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estabilización y democratización.

Consecuentemente el gobierno universitario corresponderá a sus respectivas comunidades.

A medida que en el conjunto del sistema educacional se eliminen privilegios de clases se hará posible el ingreso a los hijos de los trabajadores a la Universidad y permitirá también a los adultos, ya sea mediante becas especiales o a través de sistemas de estudio y trabajo simultáneo, ingresar a cursos de nivel superior.

Los medios de comunicación masiva

Estos medios de comunicación (radio, editoriales, televisión, prensa, etc.) son fundamentales para ayudar a la formación de una nueva cultura y un hombre nuevo. Por eso se deberá imprimirles una orientación educativa y liberarlos de su carácter comercial adoptando las medidas para que las organizaciones sociales dispongan de estos medios eliminando en ellos la presencia nefasta de los monopolios.

El sistema nacional de cultura popular se preocupará especialmente, del desarrollo de la industria cinematográfica y de la preparación de los programas especiales para los medios de comunicación masiva.

POLÍTICA INTERNACIONAL DEL GOBIERNO POPULAR

Objetivos

La política internacional del Gobierno popular estará dirigida a:

Afirmar la plena autonomía política y económica de Chile.

Existirán relaciones con todos los países de mundo, independientemente de su posición ideológica y política, sobre la base del respeto a la autodeterminación y a los intereses del pueblo de Chile.

Se establecerán vínculos de amistad y solidaridad con los pueblos independientes o colonizados en especial aquellos que están en desarrollando sus luchas de liberación e independencia.

Se promoverá un fuerte sentido latinoamericano y antiimperialista por medio de una política internacional de pueblos antes que de cancillerías.

La defensa decidida de la autodeterminación de los pueblos será impulsada por el nuevo Gobierno como condición básica de la convivencia internacional. En consecuencia, su política será vigilante y activa para defender

el principio de no intervención y para rechazar todo intento de discriminación, presión, invasión o bloqueo intentado por los países imperialistas.

Se reforzarán las relaciones, el intercambio y la amistad con los países socialistas.

Más independencia nacional

La posición de defensa activa de la independencia de Chile implica denunciar la actual OEA, como un instrumento y agencia del imperialismo norteamericano y luchar contra toda forma de panamericanismo implícito en esa organización. El Gobierno Popular tenderá a la creación de un organismo realmente representativo de los países latinoamericanos.

Se considerará indispensable revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenio que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de ayuda mutua y otros pactos, que Chile ha suscrito con los EEUU.

La ayuda foránea y empréstitos condicionados por razones políticas, o que impliquen la imposición de realizar las inversiones que deriven de esos empréstitos en condiciones que vulneren nuestra soberanía y que vayan en contra los intereses del pueblo, serán rechazados y denunciados por el Gobierno. Asimismo se rechazará todo tipo de imposiciones foráneas respecto a las materias primas latinoamericanas como el cobre y las trabas impuestas al libre comercio que se ha traducido durante largo tiempo en la imposibilidad de establecer relaciones comerciales colectivas con todos los países del mundo.

Solidaridad internacional

Las luchas que libran los pueblos por su liberación y por la construcción del socialismo recibirán la solidaridad efectiva y militante del Gobierno Popular.

Toda forma de colonialismo o neocolonialismo será condenada y se reconocerá el derecho a la rebelión de los pueblos sometidos a estos sistemas. Asimismo toda forma de agresión económica, política y/o militar provocada por las potencias imperialistas. La política Internacional chilena debe mantener una posición de condena a la agresión norteamericana en Vietnam y de reconocimiento y solidaridad activa a la lucha heroica del pueblo vietnamita.

Del mismo modo se solidarizará en forma efectiva con la Revolución Cubana, avanzada de la revolución y de la construcción del socialismo en el continente latinoamericano.

La lucha antiimperialista de los pueblos del Medio Oriente contará con la solidaridad del Gobierno Popular, el que apoyará la búsqueda de una solución pacífica sobre la base del interés de los pueblos árabe y judío.

Se condenará a todos los regímenes reaccionarios que promueven y practiquen la segregación racial y el antisemitismo.

Política Latinoamericana

En el plano latinoamericano el Gobierno Popular propugnará una política internacional de afirmación a la personalidad latinoamericana en el concierto mundial.

La integración latinoamericana deberá ser levantada sobre la base de economías que se hayan liberado de las formas imperialistas de dependencia y explotación. No obstante se mantendrá una activa política de acuerdos bilaterales en aquellas materias que sean de interés para el desarrollo chileno.

El Gobierno popular actuará para resolver los problemas fronterizos pendientes en base a negociaciones que prevengan las intrigas del imperialismo y los reaccionarios teniendo presente el interés chileno y el de los pueblos de los países limítrofes.

La política internacional chilena y su expresión diplomática deberán romper toda forma de burocratismo o anquilosamiento. Deberá buscarse a los pueblos con el doble fin de tomar de sus luchas lecciones para nuestra construcción socialista y de ofrecerles nuestras propias experiencias de manera que en la práctica se construya la solidaridad internacional que propugnamos.

LAS PRIMERAS 40 MEDIDAS DEL GOBIERNO POPULAR

1.- *Supresión de sueldos fabulosos*

Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. Terminaremos con la acumulación de cargos y sueldos (Consejerías, Directorios, Representaciones). Terminaremos con los gestores administrativos y traficantes políticos.

2.- *¿Más asesores? ¡No!*

Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del Estado Administrativo. En Chile no habrá más ASESORES.

3.- *Honestidad administrativa*

Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública. Habrá inamovilidad funcionaria. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno.

4.- *No más viajes fastuosos al extranjero*

Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen; salvo aquellos indispensables para los intereses del Estado.

5.- *No más autos fiscales en diversiones*

Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. Los vehículos que queden disponibles se utilizarán para fines de servicio público, como transporte de escolares, traslados de enfermos de las poblaciones o vigilancia policial.

6.- El fisco no fabricará nuevos ricos

Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos.

7.- Jubilaciones justas, no millonarias

Terminaremos con las jubilaciones millonarias, sean parlamentarias o de cualquier sector público o privado, y utilizaremos esos recursos en mejorar las pensiones más bajas.

8.- Descanso justo y oportuno

Daremos derecho a jubilación a todas las personas mayores de 60 años, que no han podido jubilar, debido a que no se les han hecho imposiciones.

9.- Previsión para todos

Incorporaremos al sistema previsional a los pequeños y medianos comerciantes, industriales y agricultores, trabajadores independientes, artesanos, pescadores, pirquineros y dueñas de casa.

10.- Pago inmediato y total a los jubilados y pensionados

Pagaremos de una sola vez los reajustes del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, y haremos justicia en el pago de pensionados y montepiadas del Servicio de Seguro Social.

11.- Protección a la familia

Crearemos el Ministerio de Protección a la Familia.

12.- Igualdad en las asignaciones familiares

Nivelaremos en forma igualitaria todas las asignaciones familiares.

13.- El niño nace para ser feliz

Daremos matrícula completamente gratuita, libros, cuadernos y útiles escolares sin costo, para todos los niños de enseñanza básica.

14.- *Mejor alimento para todos los niños de Chile*

Daremos desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar.

15.- *Leche para todos los niños de Chile*

Aseguraremos medio litro de leche, como ración diaria a todos los niños de Chile.

16.- *Consultorio materno-infantil en su población*

Instalaremos consultorios materno-infantiles, en todas las poblaciones.

17.- *Verdaderas vacaciones para todos los estudiantes*

Se invitará al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionado de todo el país.

18.- *Control del alcoholismo*

Combatiremos el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor y erradicaremos el clandestinaje.

19.- *Casa, luz, agua potable para todos*

Realizaremos un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas y garantizaremos el suministro de agua por manzana y luz eléctrica.

20.- *No más cuotas reajustables "corvi"*

Suprimiremos los reajustes de los dividendos y las deudas a la CORVI.

21.- *Arriendos a precios fijos*

Fijaremos el 10% de la renta como máximo para el pago del arriendo y dividendos. Supresión inmediata de los derechos de llave.

22.- *Sitios eriazos, ¡no! Poblaciones, ¡sí!*

Destinaremos todos los sitios eriazos fiscales, semifiscales o municipales a la construcción.

23.- *Contribuciones solo a las mansiones*

Libraremos del pago de contribuciones a la casa habitación hasta un máximo de 80 metros cuadrados donde viva permanentemente el propietario y no sea de lujo o de balneario.

24.- *Una reforma agraria de verdad*

Profundizaremos la Reforma Agraria que beneficiará también a medianos y pequeños agricultores, minifundistas, medieros, empleados, y afuerinos. Extenderemos el crédito agrario. Aseguraremos mercado para la totalidad de los productos agropecuarios.

25.- *Asistencia médica y sin burocracia*

Eliminaremos todas las trabas burocráticas y administrativas que impiden o dificultan la atención médica de imponentes y cesantes.

26.- *Medicina gratuita en los hospitales*

Suprimiremos el pago de todos los medicamentos y exámenes en los hospitales.

27.- *No más estafa en los precios de los remedios*

Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos reduciendo los derechos e impuestos de internación de las materias primas.

28.- *Becas para estudiantes*

Estableceremos el derecho a becas en la enseñanza básica, media y universitaria de todos los buenos alumnos, en consideración al rendimiento y a los recursos económicos de sus familias.

29.- *Educación física y turismo popular*

Fortaleceremos la educación física y crearemos campos deportivos en las escuelas y todas las poblaciones. Toda escuela y toda población tendrán su cancha. Organizaremos y fomentaremos el turismo popular.

30.- *Una nueva economía para poner fin a la inflación*

Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía.

31.- *No más amarras con el Fondo Monetario Internacional*

Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las escandalosas devaluaciones del escudo.

32.- *No más impuestos a los alimentos*

Terminaremos con las alzas de los impuestos que afectan a los artículos de primera necesidad.

33.- *Fin al impuesto de la compraventa*

Suprimiremos el impuesto a la compraventa y lo reemplazaremos por otro sistema más justo y expedito.

34.- *Fin a la especulación*

Sancionaremos drásticamente al delito económico.

35.- *Fin a la cesantía*

Aseguraremos el derecho de trabajo a todos los chilenos e impediremos los despidos.

36.- *Trabajo para todos*

Crearemos de inmediato nuevas fuentes de trabajo con los planes de obras públicas y viviendas, con la creación de nuevas industrias y con la puesta en marcha de los de los proyectos de desarrollo.

37.- Disolución de grupo móvil

Garantizamos el orden en los barrios y poblaciones y la seguridad de las personas. Carabineros e Investigaciones serán destinados a cumplir una función esencialmente policial contra la delincuencia común. Eliminaremos el Grupo Móvil y sus miembros reforzarán la vigilancia policial.

38.- Fin a la justicia de clase

Crearemos un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje, abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad.

39.- Consultorios judiciales en su población

Estableceremos consultorios judiciales en todas las poblaciones.

40.- Creación del instituto nacional del arte y la cultura

Crearemos el Instituto Nacional del Arte y la Cultura y Escuelas de formación artística en todas las comunas.

"DOCUMENTO DE MARZO"

Partido Socialista de Chile 1974.

Presentación

De los primeros análisis realizados por el socialismo chileno luego del golpe de Estado de 1973, el denominado "Documento de Marzo" ha sido el más polémico –(contemporáneos a él podemos citar la "Declaración de Febrero" del Comité Regional Cordillera, los Documentos de Abril, de la Coordinadora Nacional de Regionales y de la Dirección Interior, el artículo de Carlos Altamirano "Reflexiones críticas sobre el proceso revolucionario chileno" y el Pleno de La Habana)–, y el que más marca una etapa importante en la vida del Partido Socialista.

¿El Documento de Marzo fija un "antes" y un "después" en el itinerario socialista? Los editores de este nuevo número de *Cuadernos* creemos que sí.

El Documento de Marzo es el hilo conductor, muchas veces invisible, silenciado, ocultado, escamoteado, tergiversado, que ordenará futuros debates, decisivos, en el interior del socialismo chileno.

Fue distribuido y leído en Chile y en el exterior, aprobado o rechazado... después casi nada o nada.

Es un documento que merece ser leído. Merece estudio y discusión, como lo merece el Programa del 47, los escritos de Ampuero, los importantes aportes de la CNR, las propuestas de la renovación "original", el pensamiento de Almeyda, los interesantes aportes de Carlos Altamirano, etc., en general el estudio y debate de lo que ha sido el pensamiento socialista no sólo de estas tres últimas décadas, sino además abrir una reflexión y debate profundos de nuestra historia con el fin de encontrar las causas materiales (luego históricas) de nuestra crisis actual, y de allí intentar reencontrar el camino que seguramente nunca debimos abandonar.

El Documento de Marzo es la expresión política de la "Dirección Interior" (la de Ponce, Lorca y Lagos), es la crítica más fuerte (realizada desde el interior del PS) al Partido Socialista real; es el manifiesto más acabado de la "tendencia marxista-leninista" del PS y por supuesto la más consecuente (además se nota una verdadera lectura de Lenin); es la voluntad de poner fin a una de las contradicciones principales del PS: sus definiciones teóricas (acordadas y definidas en la superestructura) y su práctica; finalmente, y no deja de ser importante, es el testamento político y

teórico de una generación socialista que triunfó en el Congreso de la Juventud en Concepción (Carlos y Lucho Lorca, Mancilla, Norambuena, etc.) y que encontraron en Camú, Poupin, Paredes y Lagos, interlocutores atentos y comprometidos.

Por último, es un texto donde se percibe el enorme aporte ideológico, político y teórico de Ricardo Lagos Salinas. La dictadura militar y sus cuerpos represivos liquidaron a los mejores cuadros de la tendencia marxista-leninista y sus "herederos" nunca estuvieron a su altura teórica ni a su consecuencia política y revolucionaria, en caso contrario la "historia" se habría escrito de otra forma.

Los editores de *Cuadernos* tenemos opiniones divergentes sobre el Documento de Marzo, pero compartimos, sin discrepancias, el hecho que es un documento que debe ser estudiado y comentado.

Sobre esta edición: El Documento de Marzo se publica por primera vez en Internet. Hemos realizado pequeñas correcciones (que no cambian en nada el contenido ni las ideas del texto), hemos suprimido los subrayados (todos ellos agregados por los editores del "Secretariado Exterior", que lo publicó por primera vez en Berlín, República Democrática Alemana, sin fecha), con el objeto de permitir una lectura del texto sin "párrafos marcados". Igualmente hemos suprimido el índice (agregado en el Exterior) y hemos colocado como anexo (o sea fuera del texto original) la "presentación", igualmente redactada en el Exterior.

Hemos cotejado dos versiones del texto: una de Chile y una copia del original publicado en el Exterior, igualmente hemos revisado la versión original de Berlín.

Nuestra fuente principal es el texto publicado en Chile, sin índice ni presentación y sin subrayados. Hemos utilizado las versiones del exterior solamente en los casos en que la versión de Chile era ilegible.

No se trata de una "edición crítica" (en el sentido de una edición erudita, por ejemplo decir algo sobre la política del "Tercer Frente", etc.), no estamos, actualmente, en condiciones de hacerla, pero trataremos de realizarla.

Tenemos la esperanza de que la lectura del "Documento de Marzo" abra un amplio debate que además nos permitiría publicar un primer número de la futura *Revista Socialista*.

Esta publicación del Documento de Marzo no habría sido posible sin la colaboración de Danilo Aravena (militante socialista que reside en España), que nos proporcionó una muy buena copia de la versión publicada en Berlín; de María (la "Coneja"), que realizó búsquedas en los Archivos Allende (creados por Alejandro Witker), y de nuestro generoso compañero Francisco J. Laporte Derves, militante socialista de la maravillosa tierra de Los Ángeles, que se ocupa con entusiasmo y responsabilidad de la corrección de los textos publicados.

Pero los agradecimientos más importantes van a los integrantes de Debate Socialista: sin su voluntad y deseo de leer, o releer este texto emblemático del socialismo chileno, a casi 30 años de su primera publicación, la realización de esta edición habría sido tarea casi imposible.

El "precio" de este esfuerzo colectivo será el debate y la discusión acerca del "Documento de Marzo".

Será el mejor homenaje a Exequiel Ponce, a Carlos Lorca y a Ricardo Lagos Salinas. Siempre presentes en nuestras luchas y nuestras reflexiones.

Los Editores
Archivos Internet Salvador Allende

¡Al calor de la lucha contra el fascismo, construir la fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria!

"Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor..." (Desde La Moneda al pueblo de Chile, el 11 de septiembre de 1973).- Salvador Allende.

Documento del Comité Central del
Partido Socialista de Chile- 1974

Introducción

El pueblo de Chile atraviesa por el momento más difícil de su historia. La derrota de la Unidad Popular, y la instalación de la dictadura militar fascista han replegado profundamente al movimiento popular. La lucha por la liberación nacional y el socialismo se da ahora en condiciones muy distintas y particularmente duras. Sin embargo, el experimento fascista lleva en sí mismo los gérmenes de la derrota. La condición de su éxito es la destrucción definitiva del movimiento popular; y éste es indestructible. El pueblo, a las puertas de la conquista del poder, perdió una importante batalla, pero no está vencido. Reconstruye sus organizaciones y

enarbola nuevamente las banderas de la lucha, en las difíciles condiciones de la represión más violenta que haya conocido nunca. La brutalidad política y el inmenso costo económico antinacional y antipopular de la contrarrevolución, se enfrentan con la resistencia activa y latente de los sectores más avanzados de la clase obrera y del pueblo, a los que se suman día a día nuevos contingentes de fuerzas sociales y políticas que engrosan la oposición a la dictadura. Se crean aceleradamente las condiciones para forjar la más amplia y férrea unidad de todo el pueblo contra el fascismo. Se acera la voluntad y el compromiso de luchar, y se mejora la capacidad para hacerlo. En la obscura noche que el fascismo impuso a la Patria el 11 de Septiembre, clarean ya las esperanzas promisorias de un futuro pleno de luchas y de inmensos sacrificios, pero con la seguridad de la victoria final. Asegurar la victoria exige más que la sola voluntad de combatir y la disposición a entregarlo todo. Las reservas del pueblo son inmensas, su fuerza latente puede barrer con el fascismo pero sus destacamentos de vanguardia deben conducirlo por el camino adecuado. El pueblo de Chile y su heroica clase obrera no resisten otra derrota de la magnitud de la que sufrieron.

Por ello la importancia de que esta nueva etapa de la lucha popular sea orientada, estratégica y tácticamente en forma justa.

Las tareas del movimiento popular deben estar sólidamente fundamentadas en el análisis de la actual situación política nacional y su marco externo. Debe considerarse el carácter de la contrarrevolución y de su régimen militar, su capacidad de consolidación y sus factores de debilidad, sus contradicciones internas y las tendencias previsibles en su política. De acuerdo a la nueva situación, se debe trazar la divisoria entre el pueblo y sus enemigos, y definir la contradicción principal a resolver frente al fascismo, como asimismo la vía previsible para el triunfo del pueblo. Sobre estas bases y considerando la correlación de fuerzas objetivas de cada momento, será posible determinar las tareas políticàs y las formas de lucha concreta que se desarrollarán.

Cumplir exitosamente estos requisitos ineludibles para conquistar la victoria, es responsabilidad de todas las fuerzas políticas del pueblo; pero, en particular, de los partidos de la clase obrera. La aplicación consecuente y creadora del marxismo-leninismo, el estudio concienzudo de las condiciones concretas, de nuestra realidad política, social y económica la consideración de la experiencia de los últimos 3 años, -de la que hay que extraer todas las lecciones posibles-, y el ejercicio de una vocación histórica de conquista del poder por la clase obrera, son los factores que hacen posible definir una correcta línea política. El presente documento pretende ser un aporte para avanzar en este sentido. Su contenido es el fruto de una intensa y rica discusión interna, desarrollada pese al fuerte deterioro orgánico producto de la represión fascista y a las dificultades surgidas de la falta de

homogeneidad y a las deficiencias ideológicas de la organización, que han exigido revisar problemas teóricos, no aclarados antes o definidos de manera idealista y dogmática. A pesar de ser sintético, procura mantener cierto rigor conceptual y será completado posteriormente con otros documentos sobre materias específicas.

El C.C. entrega este documento al Partido para definir con la mayor precisión su quehacer político global y el del movimiento popular, y como elemento central de una lucha ideológica que busca consolidar el punto de vista proletario en el seno del Partido, fundamento de su absoluta unidad de acción y de su reconstrucción orgánica.

I.- Chile en la actual situación internacional

Ascenso revolucionario y retroceso imperialista a nivel mundial.

Para definir las tareas políticas que la actual situación chilena plantea al movimiento popular, es necesario considerar el marco internacional y el carácter del período por que atraviesa el movimiento revolucionario mundial y latinoamericano en particular.

La situación internacional, determinada por el desarrollo del enfrentamiento entre las fuerzas del sistema imperialista y las fuerzas que abren paso al socialismo, se caracteriza en los últimos años por el avance sostenido del movimiento revolucionario. Pese a los intensos contraataques imperialistas y a las dificultades internas del movimiento progresista y revolucionario, éste mantiene y desarrolla en su favor la correlación de fuerzas, aislando y golpeando, significativamente al imperialismo y sus aliados.

Las tres grandes vertientes que abren paso al socialismo como sistema universal: el campo socialista, las luchas de la clase obrera en los países capitalistas desarrollados, y las luchas de liberación nacional en los países dependientes, neo-coloniales y coloniales, experimentan en los últimos años un inmenso desarrollo y ponen en jaque al imperialismo, debilitado por su crisis general, la agudización de sus contradicciones internas, y las tendencias centrífugas y divisiones entre las propias potencias capitalistas.

El imperialismo sufre una situación de creciente inestabilidad producto de la crisis económica y política: declina la inversión privada, se agrava la tendencia inflacionaria y se cierne la amenaza de la recesión económica y el desempleo masivo, agudizada por la grave crisis energética surgida de la crisis del Medio Oriente. En ese marco mundial de ascenso de las fuerzas del socialismo la contradicción principal entre el imperialismo y la lucha liberadora de los pueblos, se va

resolviendo favorablemente a estos últimos con los triunfos y avances revolucionarios obtenidos en Vietnam, Camboya, Laos y Guinea, con la consolidación de Cuba socialista y el sostenido debilitamiento de la política imperialista en Medio Oriente.

Ofensiva imperialista y repliegue revolucionario en América Latina

En América Latina se vivió en los últimos años un período de ascenso de las luchas antiimperialistas, que en 1970 marca un hito con la victoria de la Unidad Popular en Chile, la consolidación de las tendencias antiimperialista y progresistas del Gobierno del Perú, la instalación del Gobierno de Torres en Bolivia, la formación del Frente Amplio en Uruguay, el aislamiento de EE.UU. en organismos internacionales que siempre fueron su instrumento y el auge de las luchas obreras y estudiantiles en Argentina, México y Uruguay. Pero no era de esperarse que el imperialismo aceptara pasivamente, en condiciones de retroceso mundial y con una serie de crisis en perspectiva, una pérdida progresiva de su influencia y control en América Latina, considerada como su patio trasero y base de sustentación política, económica y militar indisputable.

Desde 1970, arrinconado a nivel mundial, el imperialismo norteamericano pone en práctica un repliegue que entre otras cosas implica fortalecer y asegurar su plena dominación en América Latina. Complementándola con una apertura económica y diplomática de acuerdo al nuevo estilo de su política exterior, desarrolla una táctica conducente a golpear, decisivamente y de menor a mayor, a los movimientos populares, liquidar sus conquistas y crear o fortalecer regímenes de fuerza de tipo fascista, incondicionales del imperialismo. El retroceso a nivel mundial obliga al imperialismo a hacerse fuerte en su patio trasero.

El derrocamiento del gobierno de Torres en Bolivia, el autogolpe de Estado fascista en Uruguay, luego del vigoroso avance del Frente Amplio; las amenazantes posiciones reaccionarias y anticomunistas dentro y fuera del peronismo en Argentina, y como el más duro golpe, el derrocamiento del Gobierno Popular en Chile, éxitos claves del plan de consolidación imperialista en América Latina.

Puede constatarse, sin embargo, que la ofensiva yanqui tiene sus tropiezos. A pesar de sus empeños, no han podido llevarse por delante a los regímenes democráticos burgueses de diversos países, como México, Venezuela, Costa Rica y Colombia. Allí se afianza y extiende el sentimiento democrático y antiimperialista en amplias masas, dando lugar al surgimiento de tendencias nacionalistas en el seno de los propios partidos burgueses y pequeño burgueses. No obstante, no es ésta la situación predominante.

El actual período está caracterizado en esta parte del mundo, por un retroceso del movimiento popular, golpeado y puesto en repliegue por la acción imperialista.

Solidaridad internacional con el pueblo chileno

El triunfo de la contrarrevolución en Chile y sus dramáticas consecuencias, ha repercutido con gran fuerza en todo el ámbito internacional. No sólo por ser un severo retroceso del movimiento revolucionario mundial, sino por mostrar crudamente hasta dónde es capaz de llegar el imperialismo y la reacción interna en la defensa del orden social y el sistema de dominación capitalista en crisis. La contrarrevolución en Chile ha puesto al desnudo ante el mundo la amenaza y la presencia agresiva del fascismo como instrumento y última carta del capitalismo.

Una ola gigantesca de solidaridad con el pueblo chileno ha concitado el apoyo de todos los movimientos, organizaciones de masa, instituciones y personalidades democráticas, progresistas y revolucionarias del mundo, que se han movilizado contra la Junta Militar y su criminal política represiva. Esta solidaridad constituye un aporte de primera importancia para el desarrollo de la resistencia popular contra el fascismo, porque crea las condiciones para el aislamiento político, económico y diplomático del régimen militar. Esa solidaridad que el pueblo chileno reconoce y agradece, debe ser sostenida y estimulada, porque con ella no sólo se apoya la lucha antifascista en el país, sino que levanta una barrera para impedir el avance internacional del fascismo. El proceso revolucionario desarrollado por la Unidad Popular y, a continuación, la solidaridad activa con el pueblo de Chile golpeado por la contrarrevolución, han estrechado profundamente los lazos de amistad de la clase obrera y el pueblo de Chile con los países socialistas, con los partidos obreros y revolucionarios de todo el mundo y con todos los pueblos que luchan también por su liberación y el socialismo.

Hoy más que ayer, la clase obrera y el pueblo de Chile son parte integrante de las fuerzas que a nivel mundial se enfrentan con el imperialismo y enarbolan las banderas victoriosas de la democracia y el socialismo.

II.- La experiencia revolucionaria de la Unidad Popular

La conquista del Gobierno en la lucha por el poder.

El 4 de Septiembre de 1970, el movimiento popular derrotó a la reacción

en una batalla decisiva. En más de medio siglo de luchas reivindicativas y políticas, la clase obrera maduró hasta comprender que su liberación sólo era posible ejerciendo directamente el poder. Y que para que conquistarlo debía forjar un sólido movimiento, que uniera a todo el pueblo contra sus enemigos fundamentales, preservando para sí el papel dirigente y conductor de la revolución. En la lucha por el poder, la conquista del Gobierno fue el triunfo más importante y trascendental materializado por el pueblo.

Ello fue posible como resultado del ascenso del movimiento de masas y de su unidad política, en el marco de una grave crisis del sistema de dominación capitalista dependiente, que luego de fracasar rotundamente en sus experiencias conservadoras, aplicadas con gobiernos claramente reaccionarios o con la mediación de agentes políticos de capas medias de corte populista, fracasa también en su intento de salvar el sistema a través del reformismo desarrollista del Gobierno de Frei, inspirado en las recetas de la Alianza para el Progreso.

La incapacidad de conciliar los intereses de clase contradictorios presentes en dicha experiencia, agudizó la dependencia del país y las trabas a su desarrollo, abrió paso al movimiento popular y le permitió constituirse en alternativa de poder.

El Programa de la Unidad Popular

En la conquista de la unidad del pueblo y en la movilización política masiva que aseguró la victoria electoral, jugó un papel decisivo el programa de la Unidad Popular.

A partir de una acertada caracterización de la sociedad chilena y de la crisis del sistema de dominación, el Programa señaló con justeza los enemigos principales cuyo poder se debía destruir para hacer posible las transformaciones revolucionarias.

Planteó correctamente el carácter de estas transformaciones, al señalar al proceso liberador tareas nacionales, democráticas y populares, y la construcción del socialismo no como una perspectiva remota e inalcanzable sino como resultado del mismo proceso.

De la definición de la formación social chilena como CAPITALISTA, DEPENDIENTE, MONOPÓLICA, CON ALTO GRADO DE INTERVENCIÓN ESTATAL, desprendía que el problema fundamental de la revolución chilena pasaba por enfrentar el poder del capital imperialista, la burguesía monopólica y los terratenientes, que constituía el núcleo central, el centro de gravedad del sistema de dominación.

El carácter de la estructura económica y social del país como asimismo su sistema político, determinaban que este núcleo dominante, sustentado por la

explotación directa o indirecta de los demás sectores de la sociedad, fuese el sostén del capitalismo en Chile. Destruido su poder económico y despojado de su poder político, ninguna otra fracción burguesa estaba en condiciones de encabezar un intento de desarrollo capitalista, quedando definitivamente subordinadas en un proceso de construcción social y económica que conducía al socialismo. De aquí la importancia de esta caracterización justa de los enemigos principales en el proceso revolucionario, porque permitía intentar aislarlos y concretar una amplia alianza en torno a la clase obrera y la pequeña burguesía como fuerzas principales, donde era perfectamente factible ganar, o neutralizar a las fracciones de la burguesía pequeña y mediana subordinada a los monopolios.

La posibilidad de esta alianza, estaba sustentada materialmente en la tarea común de destruir el capitalismo monopólico dependiente y desarrollar una economía de transición, que no terminaba con todas las formas de propiedad privada de todos los medios de producción, sino en primer lugar con la propiedad imperialista, monopólica y terrateniente, columna vertebral y base de la dominación burguesa en las condiciones particulares de nuestra formación social.

El fundamento del carácter revolucionario de esta amplia alianza, lo constituye el papel dirigente y hegemónico de la clase obrera. Existiendo múltiples contradicciones de intereses entre las diversas fuerzas componentes del frente, el ejercicio permanente del principio de unidad y lucha debía materializar la hegemonía del proletariado en su seno.

Sólo la hegemonía de la clase obrera podía garantizarla fidelidad del movimiento a sus objetivos estratégicos. En definitiva es la clase obrera la interesada en el desarrollo integral y hasta las últimas consecuencias de la revolución, y necesita ganar, mantener y desarrollar la unidad de las otras fuerzas, definiendo en cada momento los objetivos parciales a cumplir y garantizando siempre el curso progresivo y ascendente del proceso hacia sus objetivos máximos.

La viabilidad de la estrategia de la Unidad Popular

Establecido el carácter revolucionario del Programa y de la alianza que permitía generar, el factor que en definitiva permite caracterizar como revolucionario el proceso iniciado con la conquista del Gobierno por la Unidad Popular, es la viabilidad del mismo, como estrategia revolucionaria del proletariado que hacía posible la conquista de todo el poder, y la construcción del socialismo en Chile.

La revolución chilena no podía escapar a las leyes generales de la transición del capitalismo al socialismo, y exigía al proletariado y sus aliados conquistar el control del poder del Estado y reemplazar revolucionariamente sus instituciones.

La originalidad de la situación chilena consistía en la posibilidad real de asumir esta tarea includible a partir del manejo del más importante centro de poder institucional por el pueblo: el Gobierno, con una legitimidad reconocida por toda la sociedad.

Con el control del Gobierno era posible cumplir cuestiones esenciales del Programa, intentar mejorar la correlación de fuerzas, golpear y debilitar a los enemigos principales, facilitar la unidad del pueblo, fortalecer al movimiento de masas y mantener una constante iniciativa política que arrinconara al enemigo y los obligara a ceder posiciones o, lo que era más probable, a resistir el proceso revolucionario desde el plano de la ilegalidad lo que facilitaría su enfrentamiento y destrucción. Siendo un factor limitante en determinados aspectos, la legalidad podía servir principalmente al movimiento popular, porque mediatizaba el comportamiento y actitud de capas sociales, partidos e instituciones, que no compartían el programa. Siendo los enemigos del pueblo los que quebraran la legalidad, la conquista de la plenitud del poder político y la destrucción de las instituciones burguesas, debía resultar de la acción defensiva de contragolpe del movimiento popular, desarrollado sobre la base de la defensa legítima de las posiciones alcanzadas en el terreno de la legalidad.

Sobre la base de la hegemonía del proletariado en el frente y de una acertada, flexible y audaz conducción política de las fuerzas acumuladas por el movimiento, la estrategia de la Unidad Popular permitía intentar la conquista del poder.

Balance de la acción del Gobierno Popular

Desde la instalación del Gobierno Popular, y a través de sus primeras medidas concretas, quedó en evidencia la decisión irrenunciable de cumplir el programa y avanzar firmemente por el camino de las transformaciones revolucionarias. Los primeros meses, en particular, se caracterizaron por una acción ofensiva del Gobierno Popular, que asumía un papel de vanguardia y conducción por encima incluso del frente y los partidos, que recién se adaptaban a las nuevas condiciones y necesidades de fuerza de gobierno.

Las transformaciones que el pueblo, convertido en fuerza gobernante, promovió en la sociedad chilena, dejaron una huella profunda que el fascismo no podrá borrar. Por primera vez en su historia, Chile se convirtió en centro de la atención mundial y escenario de un proceso liberador caracterizado por la reivindicación plena de la soberanía nacional expresada en una política exterior independiente, antiimperialista y profundamente solidaria con la causa de todos los pueblos dependientes y progresistas, y por la

recuperación de las riquezas básicas que la clase dominante entregó al capital extranjero.

La liquidación de la oligarquía terrateniente con la profundización de la reforma agraria y el traspaso al control del Estado de las principales empresas monopólicas y de las instituciones financieras dando forma a un Área Social dominante en la economía, exacerbaron el odio de clase de los enemigos del pueblo contra el Gobierno Popular al mismo tiempo que fortalecían su base social y el respaldo de las masas. Todas las medidas de la política económica estuvieron inspiradas en un sentido profundamente democrático y popular. La drástica redistribución del ingreso a través de la política de sueldos y salarios, tributaria y de mejoras sociales, el impulso a los planes de desarrollo social y de vivienda, la nueva política educacional y de desarrollo cultural, la política cambiaria y crediticia destinada a defender los intereses de las masas, fueron todas medidas de beneficio popular enmarcadas en el cuadro de transformaciones radicales de la estructura económica. Se trataba de construir una economía para asegurar el desarrollo nacional independiente y garantizar la satisfacción de las necesidades del pueblo. Pero, no contando con todos los mecanismos institucionales necesarios, y enfrentando el criminal sabotaje económico organizado por el imperialismo y los reaccionarios, se crearon tensiones agudas que fueron hábilmente explotadas por el enemigo.

A pesar de los importantes logros del pueblo en el aumento de la producción y en el control de la distribución con participación de las masas, no fue posible evitar el desequilibrio entre la oferta y la demanda, el mercado negro, las presiones inflacionarias y el déficit de divisas.

Mientras la clase obrera daba lecciones de heroísmo anónimo y cotidiano en el terreno de la producción, estimuladas por la creciente participación organizada de la gestión económica en el gobierno, los enemigos del pueblo no descansaban en su tarea destructiva.

Lo avanzado en casi tres años en la reconquista de la soberanía nacional, en la recuperación de las riquezas básicas del país, en la destrucción del poder monopólico y formación del Área Social dominante, en el impulso de la Reforma Agraria, en el desarrollo de nuevos sectores productivos como la pesca y la explotación forestal, en el desarrollo social y la satisfacción de las urgentes necesidades del pueblo, en el fortalecimiento acelerado de la organización y la conciencia política de las masas populares agudizó las contradicciones sociales y elevó la lucha de clases a niveles nunca vistos con anterioridad, se produjo un desate de fuerzas sociales, una masiva comprensión del carácter de clase de las instituciones del aparato estatal y una expectativa de poder, que reflejaron la profunda toma de conciencia de la clase obrera y el pueblo de su propia fuerza y de su papel histórico revolucionario.

La estrategia de los enemigos del pueblo

El trascendental desarrollo de las condiciones subjetivas para el avance del proceso revolucionario no logró equilibrar los éxitos obtenidos por el enemigo en el mismo plano.

El factor fundamental de la derrota de la experiencia de la Unidad Popular lo constituyó la decidida resistencia de los enemigos del pueblo al proceso y la inmensa fuerza que lograron acumular.

La derecha hizo cuanto estuvo a su alcance desde el mismo 4 de septiembre para impedir la asunción al gobierno de Salvador Allende. Y aunque fracasó en su primer intento, se mantuvo agresiva con el claro propósito de buscar la frustración y la caída del Gobierno Popular. Lo característico en la primera etapa fue su decisión estratégica, pero su absoluta dispersión y la ausencia de una táctica coherente. Su sector más consciente y hábil se replegó sin poder impedir la expresión desesperada de grupos extremistas, particularmente de la pequeña burguesía fascistizada, representada por Patria y Libertad y organizaciones semejantes, que postularon desde el principio el desorden institucional y el golpismo. Los mejores cerebros de los círculos políticos del imperialismo y la reacción interna, fuertemente relacionados con los medios empresariales monopólicos y agrarios, se abocaron a diseñar una política destinada a conquistar los necesarios aliados, explotar las debilidades del proceso revolucionario y utilizar eficazmente su inmensa fuerza económica, institucional y publicitaria, a fin de crear condiciones para terminar con el Gobierno Popular antes de 1976 y reemplazarlo por un régimen que aplastara el ascenso revolucionario del pueblo chileno. Para ello su primera tarea política fue asegurar la formación de un amplio frente opositor al Gobierno Popular y evitar a toda costa un eventual entendimiento de la Democracia Cristiana con la U.P. en torno a iniciativas concretas. El hábil tratamiento de las contradicciones internas de ese partido constituyó uno de los problemas de la política de la reacción desde la ratificación de Allende por el Congreso Pleno. Para acumular fuerzas, la reacción aplicó una táctica muy flexible haciendo todo tipo de concesiones a la pequeña burguesía, conducente a aislar al movimiento popular y desgastar al Gobierno, creando hechos políticos que modificaran a su favor la correlación de fuerzas. Hábilmente combinaron todas las formas de lucha, legales e ilegales, pacíficas y violentas, para avanzar tras el objetivo final. Haciendo concesiones cada vez que el mantenimiento de la unidad política lo exigía la derecha arrastró a su política a la D.C. y a otros sectores políticos y fuerzas sociales no comprometidas directamente con los intereses imperialistas y monopólicos. A su acción saboteadora en la economía, se sumó el cerco institucional al proceso: la resistencia y la permanente obstrucción ejercida por el parlamento, el poder

judicial, la contraloría y las diversas instancias de la burocracia estatal controladas por los reaccionarios. A partir de los problemas objetivos de determinados sectores sociales, fundamentalmente de la pequeña burguesía, se desarrolló una fuerte resistencia de masas que incluyó todas las formas de movilización, hasta las verdaderas asonadas sediciosas que organizó el fascismo en las calles de Santiago y de las principales ciudades del país. Sus ejemplos más característicos fueron los paros empresariales de Octubre de 1972 y Agosto de 1973, que atentaron criminalmente contra la marcha de la economía del país. Paralelamente se actuaba en el terreno conspirativo adulando y presionando a las FF.AA., a fin de comprometer a la oficialidad en aventuras golpistas, combinada con la organización y preparación de grupos paramilitares derechistas, y con un intenso tráfico de armas en la frontera. Con estos elementos se desató embozadamente el terrorismo y la violencia, que caracterizan al fascismo. La escalada sediciosa conoció todos los matices, incluyendo el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército, general Schneider, en Octubre de 1970; el asesinato del ex-vicepresidente de la República E. Pérez Zujovic, el asesinato del Capitán Araya, Edecán Naval del Presidente Allende, en Julio de 1973. A todos estos sucesos está ligada tangiblemente la CIA (Inteligencia Norteamericana). De todas las formas de lucha antipopular, la utilizada con más eficacia fue la ideológica. Con el inmenso poder publicitario de sus medios de comunicación de masas, la reacción logró dar coherencia a su política global, formar corrientes de opinión y orientar la articulación de todas las formas de resistencia en forma magistral. En base a la presión ideológica se introdujeron las consignas y se movilizó a todas las fuerzas en torno a reivindicaciones parciales que se fueron elevando hasta el cuestionamiento de la existencia misma del Gobierno Popular. De la simple agitación de problemas mínimos de abastecimiento en Diciembre de 1971, se llegó a la agitación masiva de la renuncia del Presidente Allende en Agosto de 1973.

Ideológicamente se legitimó la "resistencia civil", el "acosamiento institucional" e incluso el levantamiento golpista del Regimiento Blindado N□2. Progresivamente se acusó al Gobierno Popular de arbitrariedades, de ilegalidades, de ilegitimidad y finalmente de inconstitucionalidad, en base al conflicto de poderes del Estado creado por los reaccionarios desde el Parlamento con apoyo de la Contraloría y el poder judicial.

La gran mayoría de las llamadas capas medias se incorporaron a la resistencia al Gobierno orgánicamente, a través de sus instituciones representativas y en muchos casos como fuerza de choque: los medianos y pequeños empresarios de la industria, el comercio, la agricultura y las capas medias de la pequeña burguesía propietaria y no propietaria, artesanos, profesionales, empleados, dueñas de casa, estudiantes e inclusive elementos atrasados de la propia clase obrera. Junto con

obtener el concurso decisivo del PDC en la resistencia, aislando a sus sectores democráticos que no tuvieron la entereza y la claridad para no hacerle el juego a la política crecientemente fascista de la derecha. Los enemigos del pueblo consiguieron meter cuñas en el propio movimiento popular, a través de la división del Partido Radical e intentando crear disensiones en el seno de los trabajadores organizados.

Las debilidades del proceso

La derrota del pueblo y el triunfo de la alternativa contrarrevolucionaria, no puede explicarse como la simple derrota militar en la resistencia directa al golpismo. La derrota política del movimiento popular estuvo sellada antes del 11 de septiembre, determinada por el grado de aislamiento de la clase obrera y la ausencia de una real fuerza dirigente capaz de hacer uso, con posibilidades de éxito, de la potencialidad revolucionaria latente en la fuerza de las masas y en los instrumentos de poder institucional al alcance del Gobierno.

La incapacidad de usar la fuerza que se tenía y evitar el aislamiento progresivo de la clase obrera, reflejan claramente que no llegaron a imponerse los intereses de ésta en la conducción del proceso. Contando con las más importantes y significativas posiciones conquistadas en su historia, y con una estrategia viable que permitía la conquista del poder, el movimiento popular no logró concretar un acuerdo estratégico en torno al cual constituir una real fuerza dirigente del Gobierno y del movimiento de masas.

No habiendo hegemonía de la clase obrera en el frente, no fue posible desarrollar una política correcta para concretar la alianza que presuponía el programa, no se consiguió evitar el aislamiento buscado por el enemigo, no hubo capacidad de autocrítica y corrección oportuna de los errores, no hubo capacidad para retomar la ofensiva, no hubo línea política clara, confundiéndose diversas orientaciones y matices que no hacían sino reflejar la presión de las tendencias pequeño burguesas, disparadas hacia el evolucionismo, la conciliación sin principios, el aislamiento o el extremismo anárquico.

La ausencia de unidad en torno a una estrategia única del movimiento popular, orientada por la clase obrera como fuerza dirigente, se expresó en diversos errores cometidos en el tratamiento de problemas y situaciones específicas a lo largo de los tres años.

Se manifestaron discrepancias respecto al ritmo de desarrollo del proceso, cuestión que dependía en cada momento de la correlación de fuerzas real y no de la voluntad o buenos deseos de nadie. No hubo comprensión acertada de los requisitos de un proceso de acumulación de fuerzas para derrotar a un enemigo poderoso, y de la necesidad de avanzar fijando prioridades y subordinando objetivos parciales al gran objetivo estratégico.

No tenía sentido dispersar fuerzas en la intervención de una pequeña empresa, mientras la Papelera continuaba siendo el principal monopolio del país.

Faltó capacidad para que todo el movimiento popular expresara en la acción de masas y en el ejercicio del poder de Gobierno, diferenciara los enemigos principales del pueblo de quienes no lo eran. No era lo mismo tratar a la SNA que a la Federación de Asentamientos, a la SOFOFA que a la AMPICH, al Partido Nacional y Patria y Libertad que a la Democracia cristiana, etc.

Respecto a la posibilidad de concertar compromisos tácticos y a la política de alianzas hubo todo tipo de desviaciones y prejuicios.

Junto a las posiciones "izquierdistas" de rechazo a cualquier forma de compromiso calificándolos de conciliación y traición, hubo quienes reducían el problema de ganar a los aliados sociales que señalaba el programa, a conquistarlos por la base a través de la política económica, al margen de sus representantes políticos, sin entender nada del papel decisivo que juega la ideología, sobre todo en las llamadas capas medias. Por otra parte, se manifestó la tendencia al entendimiento político superestructural desde posiciones de debilidad, sin articularlo con políticas de masas.

Respecto de la institucionalidad, faltó claridad para comprender el papel que jugaba en el proceso y las condiciones y oportunidad de su reemplazo. Una de las cuestiones fundamentales sobre la que debió existir claridad y educarse a las masas, es el problema del enfrentamiento de clases y la violencia revolucionaria. Se sembraron ilusiones en el desarrollo pacifico y evolutivo del proceso y cundió también el verbalismo insurreccionalista, que reducía el problema de la revolución a meras situaciones de enfrentamiento. Faltó energía para imponer un consenso en torno a una apreciación correcta del problema. Se debía estar alerta y contar con la fuerza necesaria, imponer la voluntad mayoritaria del pueblo y consolidar el proceso revolucionario en todos los terrenos, incluyendo el del enfrentamiento directo. Pero contando el movimiento popular con la iniciativa, teniendo en sus manos parte importante del poder del Estado para cumplir sus objetivos y teniendo una legitimidad de ejercicio de ese poder reconocida ampliamente, más que nunca la violencia sería iniciativa y responsabilidad del enemigo. La fuerza de las masas y la fuerza institucional importante con que se debía contar, ejercían la violencia revolucionaria con plena legitimidad para aplastar de contragolpe la acción insurreccional del enemigo, de paso barrer con todos los vestigios de su poder y consolidar el curso socialista de la revolución.

Para hacer efectiva esta posibilidad no se debía legitimar la acción del enemigo y su propaganda hacia las FF.AA., jugando a las milicias o haciendo gala de verbalismo insurreccionalista, ni se podía tener tolerancia alguna con el terrorismo fascista al que debió haberse reprimido sin contemplaciones con la fuerza

institucional apoyada en las masas. La política era desarrollar la fuerza del movimiento popular y darle confianza manteniendo la legitimidad.

Muy relacionado con lo anterior, estaba el tratamiento correcto de las FF.AA. Hubo excesiva tolerancia con elementos golpistas que debieron ser reprimidos a tiempo, no se respaldó firmemente a quienes defendieron dentro de las instituciones militares una posición progresista y constitucionalista, no hubo decisión para ejercer las atribuciones legítimas del Ejecutivo en este plano, no se planteó nunca una discusión para estudiar los problemas de democratización y reorganización institucional que postulaba el Programa, se limitó al trato a los mandos superiores y hubo, en general, una actitud demasiado rígida y mecánica del gobierno y los partidos respecto de las FF.AA. Se desconfió de las posibilidades de integración al proceso y no se aplastó al golpismo como y cuando se debía. De otro lado, el MIR, con su típico espíritu infantilista enajenó el apoyo de sectores de las FF.AA., al hacer llamados abiertos que servían fundamentalmente de justificativo a los golpistas, a pesar de su intención de esclarecer y orientar a la tropa, olvidando la fuerza ideológica de la jerarquía militar. No comprendieron que atacando al Gobierno se debilitaba su ascendiente dentro de las Fuerzas Armadas.

Existieron además otros tipos de errores y desviaciones como la tolerancia frente a la burocratización, casos de corrupción administrativa no denunciados y combatidos públicamente, sectarización del trabajo del frente en la base, ausencia de políticas sectoriales claras y únicas, y definición de las relaciones de Gobierno-Partidos, etc.

Pero la deficiencia principal, fue la incapacidad para articular y combinar el ejercicio de todas las formas de poder con que contaba el movimiento popular: el poder del Gobierno y la fuerza del movimiento de masas organizado. Todas las desviaciones pequeño burguesas, cuya pugna esterilizó la política popular, se conjugaron para impedir el avance del proceso sobre la base de la utilización armónica, oportuna y coordinada de estas fuerzas de poder, subestimando algunos las posibilidades del Gobierno y otros las de la acción de las masas.

Esta deficiencia fundamental se reflejó en la incomprensión del problema de la generación del Poder Popular, en actitudes paternalistas en el estímulo al enfrentamiento entre el Gobierno y el poder de masas, en la no valoración de la participación de los trabajadores en los diversos niveles de decisión económica y política, en la creencia que la fuerza de las masas se expresaba únicamente por medio de concentraciones y desfiles, en el descuido de problemas concretos de las masas que podían ser resueltos a no mediar la insensibilidad de la burocracia funcionaria, en el sectarismo y chovinismo partidario que castraba la fuerza del movimiento de masas (recuérdese las elecciones de la CUT, el Congreso de los Trabajadores de la Construcción, la Confederación del Cobre, las elecciones de FESES,

la lucha por el control de los organismos sindicales y de participación, etc.), en la lucha ideológica que con escasas excepciones no tenían en vista la necesidad de educar a las masas respecto a los grandes problemas del proceso, y, sobre todo, en la renuncia a utilizar el poder del Gobierno para fortalecer mucho más aún el poder y la fuerza de las masas organizadas, y estimular un apoyo mutuo de Gobierno y masas, basado en la comprensión real del significativo papel revolucionario que cumplían ambos elementos para conquistar el poder.

Todas estas desviaciones, producto de la insuficiente hegemonía proletaria en el proceso, crearon las condiciones propicias para el éxito de la estrategia de la contrarrevolución.

La unidad alcanzada entre el PS y el PC, y entre todas las fuerzas de la Unidad Popular, fue suficiente para aplicar el Programa en sus postulados económicos fundamentales (con las debilidades y excesos anotados), pero fue absolutamente insuficiente para enfrentar las circunstancias más decisivas en que estuvo en juego el cambio de calidad en la correlación política de fuerzas, o el propio problema del poder.

Para realizar los virajes tácticos exigidos por la situación política, o para entregar consignas únicas a las masas en las fases de repliegue del enemigo, o en sus momentos de ofensiva abierta, casi nunca estuvimos de acuerdo socialistas y comunistas. Esta dispersión y divergencias casi constantes, no hicieron posible que la hegemonía proletaria adquiriera la fuerza determinante en todo el proceso.

El partido ante los problemas y coyunturas decisivas del proceso

La derrota del movimiento popular

Con el objeto de precisar las posiciones que mantuvo la dirección del Partido en el seno de la Unidad Popular y ante el compañero Allende, se examinarán brevemente algunas de las principales coyunturas y problemas del proceso y el desarrollo de las condiciones políticas que culminaron con la derrota del pueblo y el triunfo contrarrevolucionario:

a) Plebiscito

Después de las elecciones de Abril de 1971, en que la Unidad Popular obtuvo más del 50% de la votación nacional, el Partido propuso la convocatoria

de un plebiscito para reformar la Constitución y resolver el diferendo con el Parlamento. Este planteamiento fue reiterado posteriormente en otras situaciones, siendo rechazado por la UP, y acogido a medias por el Presidente. Analizando las posibilidades reales a la luz de la historia pasada, se puede afirmar que no era ésta una proposición acertada, en la medida que no aseguraba resolver a favor del Gobierno Popular y la revolución, el conflicto de clases.

b) Nacionalización del Cobre

El Partido mantuvo con intransigencia no indemnizar a las compañías norteamericanas del cobre, lo que finalmente fue aceptado por el compañero Presidente y los demás partidos de la UP. Ésta fue una de las principales medidas económicas del Gobierno y tuvo una gran repercusión internacional y permitió sentar la "doctrina Allende" respecto de la nacionalización de capitales extranjeros en los países dependientes y neocoloniales. Fue notoria la deficiente agitación y propaganda en el seno de las masas, que acerara su condición antiimperialista, deficiencia habitual en el estilo de trabajo de la Unidad Popular.

c) Sobre la primera rueda de conversaciones UP-DC.

En torno a un proyecto de Reforma Constitucional sobre Área Social y participación de los trabajadores presentado por la Democracia Cristiana, y que perseguía paralizar el cumplimiento del Programa y en vista de la fuerza demostrada por el Gobierno Popular, la directiva del PDC (controlada todavía por su sector progresista), manifestó su disposición favorable a concertar un compromiso con la UP. Se presentó entonces una oportunidad de comprometer a la D.C. en el impulso a cuestiones esenciales del Programa (comunes al programa presidencial de Tomic), decisivas para quebrar el espinazo del régimen capitalista dependiente expropiando la propiedad monopólica.

La oposición del ala derechista de la Democracia Cristiana, que se jugó entera, frustró esta posibilidad, y a ello contribuyó la oposición del oportunismo de izquierda, expresado principalmente en el seno del Partido, que no fue capaz de entender que los compromisos tácticos son posibles y necesarios en una política revolucionaria.

d) Sobre la política económica

El partido fue el más firme partidario e impulsor de conformar rápidamente el Área Social e imponer el control popular en la economía. La dirección estuvo consciente de delimitar las áreas de propiedad, pero fue incapaz de explicar su

punto de vista a la militancia que preocupada exclusivamente de situaciones locales exigían la expropiación de pequeñas y medianas empresas.

Además, el Partido planteó desde el inicio del proceso la necesidad de renegociar la deuda externa y tomar las medidas para paliar los inevitables desequilibrios que surgían de la política económica de corto plazo: déficit fiscal y del Área Social, agotamiento de divisas, presiones inflacionarias y problemas de abastecimiento.

e) El Paro de Octubre

La agudización de las contradicciones desatadas por el avance del movimiento popular y la tensa y violenta resistencia del enemigo de clase y sus aliados, tuvo una primera expresión abierta en Octubre de 1972, con el paro de las organizaciones empresariales y gremios pequeño-burgueses lideralizados por agentes del fascismo, llevando como furgón de cola a la pequeña-burguesía democrática (D.C.). De esta experiencia el Gobierno Popular salió fortalecido, con un gabinete con participación de la CUT y de las FF.AA., a la cabeza del cual estuvo el general Prats.

Tras este fracaso reaccionario se crearon condiciones para propinar duros golpes a los enemigos principales, en los marcos estrictos del cumplimiento del programa, pero ello no prosperó al interior de la Unidad Popular. El Partido no supo imponer esta posición a nivel de la dirección política del frente, además de ser dramáticamente impotente para explicar a las masas el significado objetivo del gabinete y para desatar por sí sólo una profunda contraofensiva popular.

Lo que está fuera de dudas es que ese Gabinete no fue una "capitulación ante los generales", como afirmó el MIR, posición que tuvo eco en un sector del Partido y en otros partidos de la Unidad Popular

f) Elecciones Parlamentarias

A pesar de las relativas debilidades, errores tácticos y del error estratégico de no aprovechar las condiciones posteriores al paro de Octubre, las elecciones de Marzo fueron una victoria popular categórica y un duro golpe para la contrarrevolución. Como el Partido lo afirmó, el porcentaje del 44%, fue cualitativamente superior a lo obtenido en la elección de regidores y constituía una sólida base sobre la cual podía intentarse seriamente remontar las dificultades políticas y económicas que se habían ido profundizando durante la gestión del Gobierno. La situación abría posibilidades de sellar la alianza del movimiento popular con un sector progresista de las FF.AA.

Sin embargo, la Unidad Popular fue incapaz de concretar esta posibilidad revolucionaria, lo que permitió al oportunismo de izquierda sabotear exitosamente su materialización y postular una pretendida "reagrupación de fuerzas en torno al polo revolucionario". La agudización del conflicto entre el ala proletaria de la UP (que fue incapaz de imponerse en la lucha ideológica y de masas) y la ultraizquierda, terminó por paralizar y disgregar la fuerza del pueblo. De otro lado, las presiones tendientes a concretar acuerdos sin una debida información y agitación en la masa, ayudaron eficazmente a anarquizar el movimiento popular y dividir su fortaleza. fue el terreno fértil sobre el cual iba a entrar a operar la embestida final de los enemigos del pueblo.

g) El "tancazo" y la derrota popular

La sublevación del Regimiento de Blindados Nº 2 el 29 de Junio, fue el campanazo de alerta que evidenció el avance del plan conspirativo.

La dirección de la UP intentó nuevamente establecer una alianza con sectores de las FF.AA., incorporando mandos militares al Gabinete, por el general Prats, actitud violentamente combatida por los golpistas contrarrevolucionarios y por el infantilismo de izquierda, que una vez más trató de dividir a la UP levantando el fantasma de la "capitulación", y las consignas confusionistas del "polo revolucionario" y el "gobierno de trabajadores".

La vanguardia política PS-PC fue incapaz de resolver los múltiples problemas tácticos y estratégicos planteados al movimiento popular, perdió por completo la iniciativa y quedó a merced de la ofensiva contrarrevolucionaria. El enemigo percibió que el problema político decisivo pasaba a ser el control de la fuerza militar, condición última de su éxito. Esta cuestión no fue correctamente resuelta por la UP. De hecho el retroceso político facilitaba el trabajo y fortalecimiento de la sedición. Pero, además, ni el Gobierno, ni el Partido, ni los demás partidos de la UP, ni el MIR por supuesto, pudieron evitar el avance de las posiciones golpistas en el seno de las FF.AA. La escalada conspirativa fue progresivamente desplazando a los mandos constitucionalistas; el general Prats jugó un valiente y decidido papel intentando consolidar el régimen constitucional y el gobierno legítimo de Salvador Allende, pero fue finalmente impotente ante el cerco de los golpistas.

El 11 de Septiembre se desencadenó la ofensiva final de los enemigos del pueblo, con el concurso institucional de las FF.AA., que actuaron cohesionadas por el consenso de la oficialidad y la represión violenta y anticipada a su sector no golpista. Esta cohesión fue el factor decisivo de la derrota popular, porque le dio al enemigo una superioridad de fuerzas aplastante. Sin embargo, el pueblo, llamado

a combatir en el último momento, resistió heroicamente y como pudo, encabezado por su compañero Presidente y, fundamentalmente, por el Partido, que resolvió, a las puertas del repliegue general, no entregar el Gobierno sin lucha. El 11 de Septiembre y los días siguientes, de Arica a Magallanes y en fábricas, poblaciones, oficinas públicas y en el campo, se escribieron páginas heroicas en la historia patria con la sangre de cientos y miles de compatriotas. Pero la derrota militar de la resistencia al golpe, no hizo más que ratificar dramáticamente una derrota política de la clase obrera que ya estaba sellada.

De este somero análisis, se comprende que las fuerzas revolucionarias tuvieron oportunidad de remontar el plano inclinado a que fueron llevadas por sus deficiencias y la tenaz ofensiva del enemigo, puntos de viraje donde se dieron las condiciones para golpear a los enemigos principales, dividir el frente opositor, consolidar el Gobierno Popular y asegurar el desarrollo del proceso.

La ocasión más propicia se presentó en Abril de 1971, con la izquierda a la ofensiva sin que se hubiera desatado la crisis económica, con una derecha aislada y desprestigiada, con la oposición dividida, con la D.C. aún bajo la influencia de la campaña avanzada de Tomic y bajo la conducción de su ala democrática. En condiciones políticas generales menos favorables, se presentaron oportunidades de ofensiva estratégica similares con la derrota del paro de Octubre y luego del éxito electoral de Marzo de 1973. En definitiva, el pueblo fue derrotado al no contar con una vanguardia política a la altura de las complejas necesidades del proceso revolucionario.

Cuando un proceso revolucionario frustra una posibilidad estratégica de victoria, la principal responsabilidad recae sobre las direcciones de la clase obrera. En la experiencia de la UP, se fracasó en la tarea fundamental y decisiva de construir la fuerza dirigente capaz de dirigir acertadamente el proceso hasta conquistar el poder para la clase obrera, y por la ausencia de una real unidad socialista-comunista, y porque ninguno de los dos partidos obreros fue por sí sólo capaz de darle conducción única a la izquierda y resolver correctamente el problema de unir a todo el pueblo en torno a las tareas deducidas de una concepción proletaria de la estrategia de la Unidad Popular.

Las desviaciones con respecto a una línea proletaria no fueron más que el reflejo de las insuficiencias de la vanguardia. La ausencia de una clara y sólida hegemonía de la clase obrera y el consecuente desgaste del movimiento popular en una estéril pugna interna, fueron las razones esenciales de la derrota.

III.- El carácter de la contrarrevolución

El objetivo estratégico de la contrarrevolución

El país vive la experiencia de la contrarrevolución burguesa e imperialista que se explica como la reacción al profundo proceso revolucionario iniciado por la UP. El movimiento popular no consiguió destruir al capitalismo dependiente ni a sus instituciones, pero los remeció hasta sus cimientos, poniéndolos al borde de su derrumbe definitivo.

Los enemigos fundamentales del pueblo tienen planteada la tarea de restaurar plenamente su sistema de dominación sobre el conjunto de la sociedad. El período histórico iniciado el 11 de Septiembre es el opuesto antagónico al proceso anterior. Constituye la reacción al serio deterioro y trastocación del sistema económico, de las instituciones políticas, los valores ideológicos y todas las relaciones sociales vigentes antes de la experiencia de la UP.

Persigue asegurar la estabilidad del capitalismo dependiente y monopólico por un largo tiempo.

La contrarrevolución no es una simple recuperación de posiciones perdidas. Se propone una transformación profundamente reaccionaria de la sociedad chilena, una involución histórica en todos los planos que garantice a la gran burguesía y al imperialismo la represión exitosa de cualquier nueva amenaza revolucionaria a la estabilidad del sistema.

Este proyecto histórico y social regresivo, tiene su única posibilidad de reorganización en la consolidación del capitalismo dependiente con un alto grado de concentración monopólica. Estas características estructurales son determinantes para mantener al sistema en estado de crisis permanente, y su reafirmación sólo permite esperar la profundización extrema de sus contradicciones sociales.

Para la concreción de este proyecto social, la burguesía monopólica y el imperialismo, núcleo dominante y sostén principal de la sobrevivencia del capitalismo, al mismo tiempo que sus beneficiarios fundamentales, requieren fortalecer su alianza con el sector fascistizado de la pequeña burguesía. Las contradicciones emanadas del modelo económico y político de la restauración capitalista, plantean una reagrupación de las fuerzas sociales que resquebraja y reduce el amplio frente social movilizado contra el Gobierno Popular.

El modelo económico de la restauración

La restauración de las deterioradas relaciones capitalistas de producción exige desatar un proceso de acumulación acelerada de capital, en base a la

superexplotación de la mano de obra y al estímulo a la inversión extranjera que permite una reestructuración y modernización de la economía nacional, orientándola hacia nuevos mercados externos. Este proceso se caracteriza por la profundización de la dependencia externa a un grado sin precedente: La inversión destinada a elevar la capacidad exportadora en las ramas dinámicas y estratégicas de la industria, en la agricultura y en la minería, se hace absolutamente subordinadas al capital extranjero, desde el punto de vista financiero, comercial y tecnológico. La economía nacional se adapta a las necesidades y requisitos de un proceso de integración monopólica internacional subordinado a los intereses imperialistas. Este modelo ratifica incuestionablemente la impotencia histórica de la burguesía chilena para proponerse un desarrollo independiente y basa todas sus posibilidades de supervivencia en la dependencia de la economía imperialista.

La segunda característica del modelo es la progresiva concentración de la propiedad y la producción en manos del sector monopólico y el fortalecimiento del capitalismo en la agricultura.

Esto implica la restricción máxima de las posibilidades de desarrollo del sector no monopólico de la economía, y su expoliación sistemática y en muchos casos su quiebra definitiva.

Toda la política económica que ya se ha puesto en práctica sirve a los objetivos del modelo económico expuesto. La política de libertad de precios, el régimen de libre competencia, la política de sueldos y salarios, la política cambiaria, la rebaja de aranceles de importación, la restricción crediticia, el ahorro forzoso, la reforma tributaria, los cambios al régimen previsional, la política fiscal y presupuestaria, incluso el blanqueo de capitales, son medidas que se insertan orgánicamente en los propósitos generales y características de la restauración.

El efecto de esta política ha sido desatar un profundo receso económico que hace sentir sus nefastas consecuencias sobre la producción industrial (textiles, alimenticias, cuero y calzado, gráfica, muebles y madera), el transporte privado, el comercio detallista y la producción artesanal.

En particular, el aumento desmesurado del valor de los insumos importados, ha tenido efectos catastróficos sobre la industria elevando los costos de producción a un nivel que producen presiones inflacionarias extremas y aumenta la cesantía, por el cierre de muchas empresas.

El eje y centro de gravedad del modelo de la restauración capitalista, lo constituye la superexplotación de la masa asalariada, en particular de la clase obrera. Las fuentes de los inmensos recursos que exige la consolidación del capitalismo dependiente, sólo puede ser el estrujamiento de la mano de obra.

Con el aumento considerable de la explotación se financiarán las inversiones en actividades nuevas y más rentables, o en la modernización y renovación

de los equipos industriales que hagan posible aumentar la productividad de la mano de obra. En esas condiciones, la producción industrial tendrá costos que le permitan competir en el mercado internacional. La superexplotación afecta al conjunto de las masas trabajadoras, empleados, técnicos, profesionales y clase obrera, deteriorando seriamente a los núcleos tradicionalmente mejor rentados, como es el caso de los trabajadores del cobre. Los instrumentos de la superexplotación son una política de sueldos y salarios que mantienen permanentemente los reajustes muy por debajo de la inflación, y las restricciones presupuestarias, que deterioran muy seriamente el sector público. La Escala Única expresa esta política, terminando con todas las conquistas de los trabajadores del Estado. La consecuencia de esto es una regresión progresiva de la distribución del ingreso y la riqueza, con inmensa pérdida del poder adquisitivo de la población. Un factor decisivo para posibilitar la superexplotación y la máxima reducción de los niveles de ingreso, es la mantención de un gran sector de trabajadores desocupados. Un ejército industrial de reserva en crecimiento resulta ser también requisito básico de la restauración capitalista.

Para la política económica restauradora, es virtual impulsar el comercio exterior en términos agresivos, más allá de los límites y restricciones proteccionistas que emanan de los acuerdos del Pacto Subregional Andino. Necesariamente la Junta planteará su revisión y de hecho su cancelación, dañando seriamente las relaciones con el Gobierno Peruano, principal impulsor de la integración Regional. Además de responder a las necesidades exportadoras de la restauración, el régimen militar servirá a las expectativas de penetración económica del subimperialismo brasileño en el mercado del Pacífico.

Una cuestión decisiva del modelo restaurador, es el largo plazo que requiere para conseguir sus objetivos. La gran cantidad de excedentes que necesita acumular en sus manos la clase dominante y la complejidad del proceso de modernización y reorientación de la estructura productiva, obligan a mantener durante muy largo tiempo y sin alteración ninguna, todas las condiciones y supuestos del modelo. Una de sus características ineludibles es por lo tanto, su falta de flexibilidad.

Entre las dificultades que enfrenta la consolidación del modelo en el plano económico cabe señalar, además de la recesión económica interna que ya se manifiesta, la carencia de un mercado de capitales interno eficiente, la falta de interés en la inversión privada extranjera, el aislamiento económico originado en el repudio político de los gobiernos menos reaccionarios y progresistas, la situación crítica de la balanza de pagos por el alza de las materias primas, combustibles y alimentos en el mercado internacional, los problemas en la renegociación de la deuda externa en el Club de París, etc. Aparte del

aumento sin precedentes del precio del cobre, el aumento leve de la producción agropecuaria, y el respaldo activo del imperialismo norteamericano y del régimen de Brasil (aunque todavía no tiene una fuerte expresión de auxilio económico), el cuadro general para la política económica de la dictadura es desfavorable.

Los requisitos políticos de la restauración

El Gobierno Popular fue derrocado por las FF.AA.,S instrumento de una amplia alianza de clases, capas y grupos, en que actuó como fuerza dirigente la gran burguesía industrial y agraria y el imperialismo, como fuerza principal la pequeña burguesía propietaria y no propietaria y como aliados los sectores no monopólicos de la burguesía, elementos del proletariado atrasado y sectores del subproletariado.

Las FF.AA. asumieron la plenitud del poder, como representantes del conjunto de la alianza, y en consecuencia, reflejan las contradicciones de esta alianza y la hegemonía de los intereses de la burguesía monopólica vinculada estructuralmente al imperialismo. Las instituciones armadas, y su alto mando, son de una composición de clase fundamentalmente pequeño-burgués y no propiamente oligárquica, como en otros países latinoamericanos.

Dado esto, la hegemonía de la gran burguesía en la política de la Junta Militar, es posible por dos razones: En primer lugar, porque sólo el imperialismo y los monopolios ofrecen un modelo de restauración y desarrollo del capitalismo, coherente con un cierto grado de viabilidad, a imagen y semejanza del modelo brasileño. Ni los sectores no monopólicos de la burguesía ni las fracciones pequeño burguesas pueden ofrecer un proyecto político y económico alternativo que sea viable. En segundo lugar, porque dentro del conglomerado de fuerzas movilizadas por la contrarrevolución, adquirieron progresiva importancia los sectores fascistizados de la pequeña burguesía, con importante expresión en la oficialidad alta y media de las FF.AA. Dada la crisis del sistema político liberal-parlamentario anterior, la burguesía monopólica encuentra en el modelo dictatorial fascista el instrumento adecuado para imponer el orden social necesario a sus intereses. Se produce una coincidencia de objetivos políticos del capital monopólico con la pequeña burguesía fascistizada, aunque sus intereses económicos no sean exactamente los mismos. Históricamente, siempre el fascismo ha tenido una base social pequeño-burguesa, pero sus postulados contradictorios se han convertido en el instrumento adecuado de los intereses del gran capital, aún a costa de los intereses propios de la pequeña-burguesía.

Estando representadas en las FF.AA. todas las corrientes políticas sumadas a la contrarrevolución, en su seno se desarrollan con fuerza y adquieren peso dominante los sectores fascistas, convertidos en agentes políticos del entendimiento entre el gran capital y los sectores fascistizados de la pequeña burguesía. Como resultado de esta hegemonía la dictadura militar asumió desde el primer momento un carácter fuertemente represivo y antipopular, condimentado ideológicamente por una exacerbación chovinista, un nacionalismo vago, un supuesto apoliticismo y el ingrediente fundamental del antimarxismo histórico. Respecto del modelo fascista típico, falta un Partido que canalice en términos de movilización y acción políticas el apoyo de masas de la dictadura en el sector fascista civil de la pequeña burguesía. Los ideólogos de la contrarrevolución se han planteado la formación de un movimiento cívico-nacionalista que sea el "brazo político" de la dictadura militar (declaraciones Jarpa-Arnello).

El punto más débil de la dictadura es la heterogeneidad de su base de apoyo inicial. La restauración del capitalismo dependiente está condicionada al desarrollo del modelo económico antes descrito, que genera fuertes contradicciones y provoca la paulatina y progresiva disolución de la alianza, conduciendo al inevitable aislamiento de la Junta. El modelo económico no le deja margen alguno a la dictadura para un juego populista por un largo plazo (hasta que no pueda contar con una mayor cuota de excedentes que se pueda repartir con otras capas sociales). El Estado represivo adquiere una importancia creciente como el factor extra-económico que hace posible el funcionamiento del modelo económico. Ello condiciona a nivel jurídico-político la liquidación de toda forma de democratismo, el desarrollo sin precedentes del aparato policial y militar y la mantención de una fuerte represión.

La tendencia a darle forma a un nuevo Estado (el "orden Nuevo" o Estado Resistente) es el resultado de la necesidad de la clase dominante de consolidar su hegemonía creando condiciones que permitan imponer el modelo económico de restauración.

El Nuevo Estado de características crecientemente fascistas, exige la destrucción de los partidos de la clase obrera y el receso obligado de los partidos políticos burgueses y pequeño burgueses. Ello ha tenido efectos concretos en la división del Partido Nacional, en un ala liberal republicana dirigida por Bulnes, y otra fascista dirigida por Jarpa y Arnello. En la Democracia Cristiana, el fracaso del freismo en su intento de poner a la Junta al servicio de su política, ha provocado su aislamiento interno. El afianzamiento de las tendencias fascistas del régimen militar ha conducido a la represión creciente contra el conjunto del Partido Demócrata Cristiano, y en particular, contra sus corrientes y personeros que han tenido

una actitud de condenación a los desbordes represivos y a la política antipopular de la dictadura. La clase dominante, consciente de que con la dictadura fascista se juega su última carta para conservar y darle estabilidad a su dominación, no está dispuesta a tolerar ninguna forma de oposición política que represente el descontento social en ascenso.

La brutalidad y extensión sin precedentes en la historia contemporánea mundial de la represión política, económica e ideológica, acelera el aislamiento social y político de la dictadura.

La represión ideológica: cierre de facultades y carreras universitarias, expulsión de docentes, investigadores y estudiantes, la represión a las manifestaciones culturales y artísticas, la intervención militar de todas las universidades, el control y censura de todos los medios de comunicación de masas, la postergación de la intelectualidad profesional y técnica reducida a niveles de ingreso inferiores a los de un sargento; el drama cotidiano de las dueñas de casa que sufren más directamente que nadie la pérdida del poder adquisitivo; la represión a los colegios profesionales impidiéndoles fijar aranceles a sus asociados; la represión policial y tributaria del comercio; la discriminación y la arbitrariedad consagradas en la Escala Única del sector fiscal, son todos factores que influyen en el descontento general y repudio a la dictadura.

La única posibilidad de la dictadura de impedir la expresión política del creciente descontento social, es organizar la represión sistemática y masiva, recurriendo a todos los extremos de la barbarie fascista: la delación, la presión sicológica, la cárcel, la tortura y el exterminio físico de los militantes del movimiento popular o de la propia oposición pequeño burguesa.

La clase dominante ha renegado de la ideología liberal y republicana (que alimentó la resistencia al Gobierno Popular), y recurre a los valores característicos de la ideología fascista: todas las manifestaciones del irracionalismo, el oscurantismo, el chovinismo, el mesianismo, etc. Se impone la falsificación grosera de la historia nacional, el paternalismo social, el pragmatismo ciego, el sectarismo y el dogmatismo extremos, la exaltación de un supuesto orden nacional jerarquizado y excluyente.

La dictadura construye una ideología oficial haciendo suyos todos los retazos y desperdicios ideológicos burgueses que ayuden a justificar y a darle cierta legitimidad a la represión, a la organización política totalitaria, a la explotación abierta y generalizada.

La última carta de reserva de la dictadura para conjugar las consecuencias de su absoluto aislamiento social y político, es la exacerbación de sentimientos chovinistas y la agitación irresponsable de un conflicto exterior. En esta línea se explica la política agresiva del régimen ante el Gobierno progresista del Perú, que, junto al de Panamá, está en la mira del imperialismo como próximo obstáculo a

derribar para consolidar su pleno dominio en América Latina, sustentado en regímenes dictatoriales incondicionales a su política e intereses económicos.

La imposibilidad de una alternativa burguesa al fascismo

La gravedad de la crisis de dominación capitalista dependiente plantea a corto y mediano plazo una crisis de políticas reformistas alternativas a la conducción burguesa actual expresada en la dictadura militar (generada eventualmente por un reajuste interno en las FF.AA., o por un "prematuro" retorno a los cuarteles y consiguiente restauración de formas democráticas burguesas), dada su imposibilidad de contener el movimiento de masas.

Las condiciones de debilidad del sistema al cabo de tres años de Gobierno Popular no admite un intento de consolidar el capitalismo aplicando las concepciones confusas del reformismo burgués. Los postulados de democratización política, elecciones libres, funcionamiento de poderes del Estado independientes, reducción de las FF.AA. a su rol estrictamente profesional, participación popular, intervención estatal en la economía, empresas de trabajadores y auto gestión, renegociación de los términos de la dependencia externa, control de la inversión extranjera y proteccionismo industrial, son todos propósitos que no se pueden conciliar con la mantención del capitalismo desde la profundidad de su crisis. La experiencia reformista jugó su oportunidad histórica con el Gobierno de Frei y fracasó. No fue capaz de morigerar las contradicciones del sistema, y ayudó a desatar las fuerzas sociales que condujeron a la victoria de la UP.

La contrarrevolución burguesa-imperialista en curso, con su modelo económico de restauración y la construcción de un estado de corte fascista, conduce en consecuencia, a la crisis final del capitalismo en Chile, como producto del inevitable fracaso de su último intento de supervivencia basado en el ejercicio ilimitado de la violencia contrarrevolucionaria.

La única y remota posibilidad en el plano de algunos años de que las FF.AA. se retiren del ejercicio directo del poder político sería como consecuencia de un significativo éxito de su modelo económico que les permitiría darle estabilidad al sistema. En todo caso, jugarían el papel de gerentes de una institucionalidad cuyo "democratismo" sería limitado, con plenas facultades de intervención y con una gran autonomía. Esta alternativa sería aceptable para el reformismo burgués, porque lograría cierta participación política.

IV.- Las tareas del pueblo en la lucha por la democracia y el socialismo

Reflujo revolucionario y objetivos estratégicos de la clase obrera

El triunfo de la contrarrevolución ha impuesto una situación de reflujo al movimiento popular. La violenta represión política ha desplazado al pueblo de las posiciones de poder ganadas anteriormente, ha deteriorado fuertemente la integridad de los partidos y de todas las organizaciones de masas.

La intensa represión ha tenido relativo éxito creando una correlación de fuerzas real muy desfavorable, que ha obligado al pueblo a replegarse profundamente, limitado en su capacidad de lucha actual. Desde el 11 de Septiembre en adelante, la represión fascista ha ido en aumento, y el retroceso del movimiento popular ha debido continuar.

El carácter general del periodo histórico, a escala universal, y el grado de desarrollo de la formación social chilena y sus contradicciones más profundas, plantea la vigencia del socialismo como objetivo histórico a conquistar en un proceso revolucionario cuyo protagonista principal es la clase obrera. La formulación de la estrategia de la clase obrera debe considerar la dictadura del proletariado, la revolución socialista, como su programa máximo, y definir un programa inmediato de acuerdo al obstáculo principal que se necesita superar para avanzar hacia la construcción del socialismo.

Elementos fundamentales de la estrategia del proletariado

Los problemas fundamentales planteados a los partidos de la clase obrera, son definir el carácter de la revolución y las fuerzas motrices en que se sustenta su desarrollo, y prever la vía o línea principal del desenlace de la lucha de clases.

Se parte de la base que el derrocamiento de la dictadura requiere, necesariamente, de una revolución en el sentido marxista del termino: la ruptura violenta de la superestructura política, es decir, el desarrollo de un proceso que culmine con la destrucción del Estado erigido por la dictadura, y su sustitución por un nuevo Estado, que exprese institucionalmente la hegemonía de las fuerzas sociales y políticas revolucionarias sobre el conjunto de la sociedad.

El carácter de la revolución está determinado por la contradicción principal que impide el desarrollo de las fuerzas productivas, por las tareas principales que se plantean a la clase obrera en esta etapa de desarrollo del país, en su camino al socialismo. Dicho de otra manera, la necesidad de enfrentar el poder

de los enemigos fundamentales de la clase, que constituyen la traba o dique social a aquel desarrollo.

Hay una estricta relación entre el carácter de la revolución (antiimperialista, democrática, popular, con perspectiva socialista), el enemigo principal (imperialismo, burguesía monopólica y gran burguesía agraria), y la política de alianzas del proletariado (amplio frente antifascista). A una distinta definición del objetivo principal, corresponde un enemigo principal y una política de alianzas también distintos.

La revolución chilena sigue teniendo un carácter fundamentalmente democrático, antiimperialista y antimonopólico, de tipo muy avanzado y popular. Esto obedece al carácter dependiente y de alta concentración monopólica que constituye el imperialismo, la burguesía monopólica y agraria el núcleo central, eje de sostenimiento y centro de gravedad de la dominación capitalista del país.

La concentración del poder económico y político capitalista en este núcleo dominante, y el peso de los restos de formas precapitalistas de producción (pequeña producción mercantil), condiciona una estructura de clases y un sistema de contradicciones tal, que permite agrupar en torno al proletariado no sólo a las capas de la pequeña burguesía urbana y rural, sino también a las fracciones dominadas de la burguesía mediana y pequeña.

El obstáculo principal que se debe enfrentar hoy para impulsar el desarrollo del proceso revolucionario (y avanzar en su perspectiva socialista), es el poder del núcleo dominante expresado en la dictadura militar y el Estado fascista que ésta construye. El derrocamiento de la dictadura y la destrucción del Estado fascista se convierten en el objetivo principal frente al cual el proletariado debe acumular todas las fuerzas posibles, explotando minuciosamente todas y cada una de las contradicciones existentes entre los enemigos principales y el resto de las clases, capas y fracciones de clase.

El derrocar una dictadura y destruir un Estado totalitario no es necesariamente una tarea socialista. El inmenso poder concentrado por los enemigos principales por medio de la dictadura, exige contar con todas las fuerzas susceptibles de movilizarse, para enfrentarlos y derrotarlos. Si no se elimina ese obstáculo principal, resulta utópico proponerse los objetivos subsiguientes. La dirección que la clase obrera debe asumir en esta revolución es determinante para que la perspectiva socialista no sea simplemente un planteo utópico. No es correcto postular la revolución socialista en esta etapa, en tanto ella exigiría levantar un programa que planteara la destrucción de todas las formas fundamentales de propiedad burguesa. Ello colocaría al conjunto de las fracciones y capas de la burguesía en contra de la clase obrera, la que no es capaz por sí sola, de derrotar a la dictadura y al poder acumulado de todas las clases y capas no asalariadas. El

carácter de nuestra revolución, no siendo socialista desde el inicio, lleva los gérmenes de su transformación en socialista, en un proceso único.

Las posibilidades de concretar una amplia alianza que explote todas las contradicciones objetivas, dependen de la formulación de un programa que considere las reivindicaciones comunes al proletariado, la pequeña burguesía y las fracciones no monopólicas de la burguesía, la democracia política y el desarrollo independiente del país. En torno a estos objetivos se puede movilizar y contar con la fuerza de aliados que no tienen interés por el socialismo, pero que son indispensables para allanar el obstáculo principal de hoy, al curso ascendente de la lucha revolucionaria de la clase obrera.

Tampoco corresponde eludir esta necesidad planteando la lucha por la democracia y el socialismo simultáneamente. Lenin no planteaba una lucha simultánea del proletariado ruso contra el Zar y los terratenientes, y también contra la burguesía. Todas las revoluciones de los países dependientes (China, Corea, Vietnam, Cuba) y aquellas que se han desarrollado en los países liberados del fascismo (democracias populares europeas), han atravesado por una primera etapa democrática.

El planteamiento correcto de la dialéctica democracia-socialismo es una cuestión de la mayor importancia política. Lenin señalaba en 1921 que ni los anarquistas, ni los pequeño-burgueses radicales "casi socialistas", al estilo de los socialrevolucionarios, ni los reformistas de la II Internacional fueron capaces de comprender esta correlación existente entre la revolución democrática y la revolución socialista.

Cuando más estrecha y brutal se hace la política de dominación del imperialismo y los monopolios, más amplia y flexible y no más sectaria ni infantilista debe ser la política proletaria.

Todo lo anterior no es en absoluto contradictorio con la posibilidad de subrayar con máxima claridad la perspectiva socialista de la revolución.

En relación con las experiencias históricas citadas (China, Cuba, etc.), la revolución chilena tiene un carácter mucho más avanzado, por el grado relativamente más importante del desarrollo capitalista, por la rica experiencia política del pueblo en la lucha de clases, y por el grado de crisis a que ha llegado el sistema de dominación durante la experiencia del Gobierno Popular y el agotamiento de todas las alternativas burguesas.

El programa democrático, popular y antiimperialista de la revolución

Los elementos básicos del programa mínimo de la clase obrera y el Partido, válido como objetivo estratégico parcial, son el derrocamiento de la dictadura,

la destrucción del Estado fascista, la construcción de un nuevo Estado democrático, popular y anti imperialista y la reivindicación de todas las conquistas sociales, económicas y políticas alcanzadas por el pueblo antes de la contrarrevolución.

La condición fundamental para que la victoria popular en la resistencia antifascista sea decisiva, es la modificación sustancial del carácter de clase del Estado, indispensable para reprimir los inevitables intentos contrarrevolucionarios, junto a medidas políticas y jurídicas revolucionarias que garanticen el aplastamiento definitivo de los fascistas y los cómplices de sus crímenes.

El nuevo poder revolucionario, no sólo restaurará los derechos democráticos de que el pueblo ha sido despojado, sino que los ampliará por todos los medios. Será preciso tener en cuenta algunas características de la ideología política de amplias capas medias para consolidar su participación en la alianza. Deben considerarse los conceptos de pluralismo, régimen amplio, de partidos, sufragio universal, etc., que no se refieren al tipo de Estado sino que a formas de gobierno. Que no se trate de majaderías reformistas lo demuestra el hecho de que Lenin planteaba el juego democrático de los partidos revolucionarios en el ámbito de los soviet y afirmaba que las restricciones electorales que estableció la revolución rusa "son un problema puramente ruso y no es un problema de la dictadura del proletariado en general". (*La revolución proletaria y el renegado Kautsky*).

El programa económico, fundamental en la destrucción del poder del capital imperialista, los monopolios y los terratenientes, debe construirse en torno a los objetivos de una economía de transición, con un área social dominante, un área de cogestión y un área privada, garantías para la mediana y pequeña propiedad, control popular organizado sobre la producción y la distribución, planificación de la economía, etc.

El Estado que surgirá de la revolución antifascista será un Estado de Nueva Democracia. El frente no debe perseguir la simple restauración del Estado y la organización política democrático-burguesa, destruida por el fascismo.

Ello sería volver atrás a una situación superada por la historia. Se trata de construir una nueva institucionalidad que asegure efectivamente el control por parte de la mayoría del pueblo de la dirección del Estado, y que destierre para siempre al fascismo del país. Será necesario destruir para transformar todas las instituciones que el fascismo haya desarrollado y, sobre todo convertir a las FF.AA. y policiales en instrumentos al servicio del pueblo. Sólo la transformación de las FF.AA. en instituciones controladas por el pueblo, garantizará, en último término, el carácter genuinamente democrático del nuevo Estado. Por lo tanto, no se trata de restaurar la vieja democracia burguesa, sino de crear una

nueva democracia popular, que exprese la dirección del pueblo (de la alianza antifascista) sobre el conjunto de la sociedad.

Democracia popular en el sentido que garantizará todos los derechos políticos y sociales de las diversas clases y capas del pueblos y demás expresiones políticas. Dictadura popular en el sentido que reprime enérgicamente al fascismo y destruye el poder del núcleo de dominación imperialista, monopólica y terrateniente.

En suma, tras el derrocamiento de la dictadura, se abre un periodo de intensa lucha caracterizada por las tentativas de recuperación del poder de los sectores minoritarios contrarrevolucionarios, y por un esfuerzo desesperado por explotar las contradicciones entre el proletariado y los sectores menos consecuentes de la alianza antifascista.

Esta etapa, marcada por la represión y el aplastamiento definitivo del fascismo, impulsada por una alianza amplia del proletariado y capas medias, entre las cuales existe una relación de unidad, pero también de lucha, tiene una duración y desenlace que depende de qué fuerza establece su hegemonía, en definitiva, sobre el frente político de la revolución.

El carácter del Estado de transición que surge tras la caída del fascismo, es un problema de relaciones de fuerzas.

La hegemonía sin contrapeso de la clase obrera se expresará en un estado democrático popular sin configuración institucional acabada, cuya característica esencial es la destrucción de los aparatos represivos, la desarticulación de las FF.AA. y policiales como instrumentos de la burguesía y el control efectivo de la clase obrera en su reorganización. Se trata de un periodo inestable, de transición. La revolución adquirirá carácter socialista, planteándose como nuevo objetivo programático, la supresión de todas las formas de explotación, por métodos indudablemente distintos a los necesarios en la expropiación del capital extranjero y los monopolios, pero que expresarán el ejercicio de la dictadura del proletariado.

De darse una hegemonía de la clase obrera limitada por una fuerza considerable de la pequeña burguesía consecuente, se establecería un Estado democrático popular con institucionalidad propia, desarrollada, expresaría claramente la hegemonía de la alianza antifascista sobre el conjunto de la sociedad. Las FF.AA. serían depuradas de la influencia fascista y reestructuradas, pero no convertidas en instrumento exclusivo de la clase obrera, quedando bajo control conjunto del frente. La perspectiva socialista dependería del fortalecimiento y consolidación del papel dirigente de la clase obrera en el proceso.

En el muy improbable caso que se diera una hegemonía pequeño burguesa en la revolución, se generaría un estado democrático, depurado de fascismo con una institucionalidad menos definida y con FF.AA. reservadas como instituciones

apolíticas por "encima" de las contradicciones sociales, su autonomía y posibilitando la restauración de la vieja democracia.

En todo caso, con la derrota de los enemigos principales y la destrucción del Estado fascista, se iniciará un proceso irreversible de avance hacia el socialismo, garantizado por la nueva institucionalidad e impulsado resueltamente por el proletariado, a la cabeza de una alianza de clases mayoritarias (no necesariamente idéntica a la que derrocó a la Junta). La posibilidad de la transformación de la revolución en socialista en un periodo muy corto, depende del rol dirigente del proletariado en la fase democrática de la revolución. El paso al socialismo será, con toda seguridad, rápido, constituyendo un proceso continuo y único.

En la experiencia de las democracias populares europeas y de las revoluciones china, coreana, vietnamita y cubana, las etapas democráticas y socialistas constituyeron dos fases sucesivas de un proceso revolucionario único, que en todo momento estuvo dirigido por la clase obrera. Una característica importante de tal transformación es que no se produjo un reagrupamiento significativo de las fuerzas de clase.

Casi todos los aliados de la clase obrera en la etapa democrática de la revolución, apoyaron el viraje hacia la construcción socialista. Sin embargo, el paso de la revolución de una etapa a otra no fue un proceso exento de choques de clase, las cuales en algún país (Checoslovaquia, en 1948, por ejemplo), llegaron a adquirir carácter agudo.

La política de alianzas y la hegemonía de la clase obrera en el frente

Desde el punto de vista de las fuerzas motrices de la revolución, la orientación estratégica es unir a todas las clases y capas del pueblo que tienen contradicciones objetivas con los enemigos fundamentales. Por cierto, no todos los sectores no monopólicos ni anti imperialistas, tienen contradicciones de la misma naturaleza con aquellos; pero las condiciones políticas y sociales creadas por la contrarrevolución permiten consolidar una férrea alianza entre la clase obrera, el sub proletariado, y una gran parte de la pequeña burguesía no propietaria y propietaria, y, en torno de este bloque fundamental agrupar como aliados secundarios, o al menos neutralizar, a los sectores no monopólicos de la burguesía, fuertemente golpeados por la política de la dictadura.

La alianza no se producirá espontáneamente ni con facilidad. Es obligación de la clase obrera y sus vanguardias conquistarla, y ello implica no sólo postular las reivindicaciones y considerar los intereses particulares de cada

sector en el programa, sino también conseguir el entendimiento con los representantes y agentes políticos de las diversas clases y fracciones de clase.

La alianza pluriclasista encabezada por la clase obrera encontrará su expresión en el Frente Anti Fascista, donde deben confluir la Unidad Popular, el MIR y la Democracia Cristiana, sobre la base de la hegemonía de su sector democrático y progresista. El desarrollo del proceso unitario y su fortalecimiento conduce a la derrota de la derecha DC.

Frei no es, precisamente, el llamado a encabezar a la D.C. en la alianza antifascista. Su compromiso con los golpistas, antes del 11 de Septiembre, y su fatigosa y rastrera búsqueda de ser elegido por el imperialismo como la alternativa menos sanguinaria de Pinochet, lo ubican en el campo de los aliados de los grandes capitales extranjeros y nacionales.

El carácter revolucionario de la alianza y del Frente, y el resguardo de los intereses históricos de la clase obrera, está sustentado en el ejercicio de una real hegemonía suya en él. La cuestión del papel dirigente de la clase obrera se convierte, más que nunca, en decisiva para asegurar el avance consecuente de la lucha por el programa del frente.

En el Frente tienen particular vigencia los conceptos de unidad y lucha, al agrupar fuerzas sociales y políticas muy diferentes, entre las que subsisten importantes contradicciones internas. De allí la necesidad de conservar la más completa independencia de clases del proletariado y la importancia crucial de su hegemonía, que depende en lo esencial, del desarrollo de una dirección única proletaria.

Condición básica para ello es pasar a nuevos niveles de unidad en las relaciones socialista-comunista, y consolidar cada vez más estrechamente la alianza con las demás organizaciones de la Unidad Popular.

Para asegurar la dirección proletaria del frente es imprescindible que los partidos populares superen sus deficiencias orgánicas, ideológicas y políticas. La responsabilidad fundamental corresponde a los partidos Socialista y Comunista, vertientes históricas de la clase obrera chilena. Sobre la base de la enseñanza de los éxitos y fracasos anteriores, es posible construir una línea justa. Esta tarea revolucionaria fundamental, la crítica y la autocrítica, debe realizarse desde el interior del movimiento popular y de los partidos obreros, en particular, al calor de los nuevos combates librados contra la dictadura fascista. Es una pretensión absurda intentar hacer tabla rasa de la rica experiencia de los partidos de la clase obrera y creer mecánicamente que ellos no tienen vigencia, postulando su reemplazo por pseudo-vanguardias "puras, sin pecados originales".

La calidad de partido revolucionario se demuestra también por el reconocimiento franco de sus propios errores y su superación. Esta actitud es comprendida y respaldada por los sectores conscientes de la clase obrera, y sólo de esta manera se reconquista plenamente su confianza.

Conviene reiterar una vez más la importancia fundamental que tiene la unidad socialista-comunista, por el papel histórico del Partido Comunista, partido obrero revolucionario, y hacer presente la necesidad de una fraternal crítica mutua.

El Partido Comunista es un Partido ligado históricamente al desarrollo del proletariado chileno, prioritariamente a su núcleo minero industrial, y al movimiento obrero internacional, desde su misma fundación. Ha sido una fuerza inserta vitalmente en las luchas del movimiento popular, contribuyendo poderosamente a su organización y desarrollo ideológico. No es por casualidad que se reconoce en la clase obrera un alto grado de maduración política. Esta tarea la ha compartido con el PS, que se ha incorporado hace ya 41 años a los combates populares.

Sin pretender hacer un análisis histórico, tarea que las direcciones del movimiento popular tiene pendiente (que explica la existencia de dos partidos revolucionarios con decisiva influencia en la clase obrera), necesario señalar con ánimo unitario y constructivo algunas de las debilidades observables en el trabajo político y de masas del PC, durante los tres últimos años.

El proletariado consciente es organizado, disciplinado y firme, pero muy apegado a las fórmulas tradicionales de organización y lucha de masas.

Dada la línea principal del desarrollo de la lucha de clases, centrado en las formas electorales, el proletariado chileno carece de la vivencia de la combinación de variados métodos de lucha en un periodo corto de tiempo (a diferencia del proletariado ruso, por ejemplo). Esta limitante afectó de manera importante el desarrollo de la lucha de masas en las nuevas condiciones generadas por la victoria de la UP.

Los métodos de lucha a través de los cuales nuestra clase obrera y el pueblo lograron grandes éxitos de carácter económico-social y en sus derechos políticos, fueron sobrevalorados en sus posibilidades históricas por el Partido Comunista. La lucha económica y electoral, como instancias fundamentales en las batallas de los trabajadores en el pasado, en el seno del PC adquirieron dimensión excluyente. La posibilidad de una vía pacifica, o no armada, fue magnificada, lo que redundó en ilusionismo y en errores fatales de apreciación del carácter de clase de las instituciones democrático-burguesas. En gran parte de su masa militante, tal concepción era absolutamente predominante.

Si para los infantilistas de izquierda la cuestión del enfrentamiento violento constituía el tema único, primero y último de la lucha de clases, para el PC, por contraposición, estaba marginado o era eludido de un análisis específico y oportuno. Esta actitud fue además, por sí misma orientadora para los cuadros medios y militantes de base comunistas. El PC tendió a sobrevalorar los aspectos tácticos, sin resolver siempre correctamente la ligazón de la táctica con la estrategia. Respecto al problema de la alianza con las capas medias, el PC man-

tuvo una política ajustada al Programa, pero perdió de vista la necesidad de construir esta alianza desde posiciones de fuerza, extremó su cautela y no impulsó con decisión el desarrollo de las nuevas formas de organización popular. Reflejo de ello, la CUT tuvo un insuficiente desarrollo de su trabajo de organización y de masas, y no cubrió adecuadamente los requerimientos que imponían las nuevas circunstancias.

De aquí, debilidades serias en la participación, falta de control respecto a los interventores y de la burocracia estatal, casi nulo trabajo en los Comités de Vigilancia del Área Privada (gérmenes de control obrero, que hubieran permitido combatir el boicot patronal e imponer metas económicas del Gobierno Popular), mala ligazón con sus organismos intermedios, deficiente desarrollo de la organización base territorial de la CUT, que hizo de los cordones caja de resonancia de corrientes anarquistas y aventureras, a excepción de donde existía previamente organización de la CUT.

Además, el PC no ha demostrado una comprensión adecuada de la especificidad histórica del Partido Socialista, su arraigo obrero y de masas, su acceso a sectores sociales que no se identifican con el PC. De la incomprensión del perfil y personalidad histórica del Partido Socialista, se desprende el sectarismo en la base, pese a las reiteradas declaraciones acerca de la importancia de la unidad.

Por cierto, en todos los problemas anotados existe una cuota de responsabilidad compartida que se analizará más adelante.

El valioso aporte de cada uno de los demás partidos de la Unidad Popular debe contribuir a canalizar la adhesión a posiciones revolucionarias de grupos o capas sociales no interpretadas por socialistas ni comunistas.

Por otra parte, el MIR, expresión política de un sector de la pequeña burguesía revolucionaria, debe aportar a la lucha antifascista, pero es indispensable que manifieste una actitud responsable y efectivamente unitaria. En el MIR priman concepciones incorrectas en el plano programático, incapacidad para comprender el carácter de la experiencia de la Unidad Popular, excesivo voluntarismo y subjetivismo que impregnan su política, lo que a su vez lo conduce a estimular políticas aventureras, que sectarizan su trabajo. Sigue desconociendo sus graves errores y su débil inserción en la clase obrera, que no justifican su chovinismo partidario extremo y sus pretensiones vanguardistas excluyentes.

El problema de la vía revolucionaria

El derrocamiento de la dictadura sólo será posible en la medida en que el frente antifascista logre acumular más fuerzas que el fascismo en todos los planos, político, social, ideológico y militar. Las formas que asumirá el decisivo

enfrentamiento de fuerzas, no puede delimitarse con precisión ahora, cuando aún no se logra prever con claridad la evolución probable de algunos factores tan esenciales como el grado de aislamiento político de la Junta, las contradicciones al interior de las FF.AA., la capacidad de manejo de la situación económica, el desarrollo de la alianza deseable en el campo popular, la capacidad de sobrevivencia y desarrollo del movimiento de masas y los partidos, la capacidad de desarrollo de la autodefensa popular frente a la agresión, etc.

Sin embargo, es ineludible la definición de nuestra revolución. El prever la línea principal del desenlace de la lucha de clases, no significa en absoluto negar la flexibilidad táctica, ni la necesidad de preparación adecuada para desarrollar todas las formas de lucha. La vía es una previsión estratégica posible, indispensable para la vanguardia no sólo en condiciones de situación revolucionaria inminente, sino durante los diversos estados de desarrollo de la lucha revolucionaria. Renunciar a una formulación acerca de la vía, significa en la práctica caminar a ciegas, arriesgar a encontrarse inesperadamente en presencia de una situación revolucionaria que exija una capacidad de lucha no desarrollada oportuna y seriamente.

En la revolución rusa, la vía estaba planteada por Lenin ya desde "dos Tácticas" (1905), aunque hubo en la práctica variaciones importantes, perspectivas nuevas (como la que se abrió en febrero y octubre de 1917, con la consigna de "todo el poder a los soviets", y la posibilidad del tránsito pacífico), en lo fundamental su curso siguió los lineamientos previstos por los bolcheviques. Aun más, en "dos tácticas", Lenin plantea la insurrección como vía probable y deseable de la revolución democrática rusa, para demoler el aparato estatal y facilitar el pasaje a la revolución socialista.

La determinación del carácter de la vía depende de múltiples factores, internacional (carácter de la época, correlación de fuerzas internacional, situación de flujo o reflujo revolucionario), situación regional, situación interna (formas de dominación de clase, características del aparato estatal y sus instrumentos represivos, desarrollo de la ideología, extensión de la lucha política, correlación de fuerzas real y su evolución probable, etc.).

En una primera aproximación, se puede afirmar que, aunque en importantes periodos de la resistencia anti fascista se emplearán principalmente métodos no armados, y aunque el factor esencial de la acumulación de fuerzas para derribar la dictadura será la lucha política y de masas, en la fase final de la lucha las formas de lucha armada tendrán una importancia decisiva.

Las condiciones generales de desenvolvimiento de la resistencia popular a la dictadura fascista, permiten descartar las líneas que ponen en primer lugar la actividad conspirativa y la lucha de elites, y no el combate de las masas

populares, llámese foquismo, guerrillerismo urbano o rural, etc. Tampoco existen condiciones propicias para el desarrollo exitoso de una guerra popular de curso prolongado con liberación de zonas parciales.

La forma más probable de derrocamiento de la dictadura es la insurrección armada, definida por Lenin como "aspecto particular de la lucha política" en que confluyen simultáneamente todos los factores de la crisis del sistema de dominación, llevada a su último extremo por el ascenso acelerado de todas las formas de lucha política, económica, ideológica de masas y se pone a la orden del día el levantamiento armado de las fuerzas populares para tomar el poder.

El desencadenamiento de una insurrección con perspectivas de éxito requiere de un conjunto de condiciones políticas, sociales y militares. Desde el punto de vista político y social la condición fundamental es el aislamiento y la debilidad extrema de la dictadura, su incapacidad manifiesta de resolver los problemas del país, el desarrollo de una gran movilización de masas, y un estado subjetivo de confianza de las masas en sus fuerzas y en su dirección política. Desde el punto de vista militar se requieren dos condiciones simultáneas: el desarrollo de la capacidad militar y paramilitar de las masas –especialmente obreras- que les permitan copar y defender los centros vitales de la economía en las zonas estratégicas del país y, la existencia de una fracción de las FF.AA. dispuestas a combatir a la dictadura. Por último, el desencadenamiento de una insurrección requiere una sólida y eficiente dirección que centralice la conducción del movimiento de masas, del frente político y de los sectores antifascistas de las fuerzas armadas.

Acerca de la táctica

Una cuestión es la definición clara sobre el camino más probable de la revolución (problema estratégico), y otra distinta, la enunciación de la táctica, que no tiene por que explicitarse en todas sus partes.

Algunos aspectos esenciales de la táctica del movimiento popular en la resistencia antifascista son la combinación de todas las formas de lucha, de acuerdo a las condiciones concretas que se presenten, la sustentación de la resistencia en el inmenso desarrollo del movimiento de masas, y la ligazón de todas las reivindicaciones parciales de los diversos sectores y capas del pueblo con los objetivos programáticos de la etapa actual.

Se debe partir de la base que la primera fase es de reconstitución de vanguardias políticas del pueblo, de reorganización y de activación del movimiento de masas.

Después de los recios y graves golpes recibidos, el movimiento popular debe reagrupar sus fuerzas, lograr que se agrupen de nuestro lado todos los descontentos con la política de la Junta y crear las condiciones orgánicas y políticas para impulsar una lucha ascendente que conduzca a una situación revolucionaria.

Lo prioritario hoy día, es preservar las fuerzas del pueblo, acrecentarlas considerablemente y mantener iniciativas políticas que demuestren que no está vencido, que den confianza a las masas y abran camino a combates decisivos.

Las vanguardias populares deben movilizar todos los recursos a su alcance para combatir el inmenso poderío ideológico publicitario de la dictadura.

Se necesita educar al pueblo para defenderse de la represión, agitar todos los problemas sentidos por las masas, desenmascarar al régimen, convencer a los vacilantes, denunciar a los traidores, combatir el quietismo y multiplicar todas las formas de resistencia.

El movimiento popular no parte de la nada y por lo tanto no puede convertir la resistencia antifascista en una simple actividad conspirativa. La fuerza del movimiento de masas ha sido muy deteriorada, proporciona la base más sólida para la lucha contra la dictadura. Una tarea de la mayor importancia es la reconstrucción del movimiento sindical y de la organización campesina, donde la dictadura ha combinado la represión criminal con las pretensiones de control de un sector atrasado y desclasado de masa asalariada.

Las vanguardias del movimiento popular deben orientar la lucha que se manifiesta casi espontáneamente en los sectores poblacionales, donde más pesan los efectos de la crisis económica y la cesantía. Es vital combatir con éxito los intentos de la dictadura fascista de influir sobre el sector femenino de la población, a través de organizaciones oficialistas y de la intensa presión ideológica. Es importante también encauzar la resistencia de la juventud estudiantil y los sectores intelectuales, portadores de una profunda vocación democrática y libertaria, que deben convertirse en aliados importantes de la clase obrera en la lucha antifascista.

El movimiento popular debe resolver correctamente la actitud frente al personal de las FF.AA., valorando las contradicciones que se dan entre sus niveles de mando superior, oficiales, sub oficialidad, personal de planta y conscriptos, las contradicciones entre ramas y, principalmente, las contradicciones políticas entre el sector fascista, dominante a nivel de los mandos, y los elementos conservadores no fascistas "profesionalistas", e incluso progresistas que vienen de vuelta de su actitud de conciliación y tolerancia con el fascismo. El pueblo debe comprender que incluso en el interior del aparato represivo, tiene y puede ganar aliados. A corto plazo hará crisis la contradicción entre la descarada política pro imperialista de la Junta (indemnización a las empresas del cobre, instructores yanquis y brasileños en los cuarteles, etc.) y el pretendido nacionalismo de

los planteamientos fascistas y el nacionalismo anti imperialista de algunos oficiales y sectores de la sub oficialidad.

El problema inmediato más importante es concretar la agrupación de fuerzas sociales, dándole forma al Frente Antifascista. Las reivindicaciones comunes que permiten agrupar fuerzas deben acogerse en un Programa de acción inmediata que proponga:

La defensa y garantías de respeto de los derechos humanos, sistemáticamente atropellados por la dictadura. Fin al estado de guerra interna.

La restitución de todas las libertades públicas y derechos políticos, por la Junta. El respeto a los derechos sindicales y a todas las organizaciones del pueblo.

La defensa del nivel de vida de las masas, con reajustes proporcionales a la inflación desatada, y restitución de todas las conquistas sociales de los trabajadores.

La defensa de la independencia y la soberanía nacional amenazada por la penetración imperialista amparada y alentada por la junta.

En base a este programa inmediato, las vanguardias de la clase obrera pueden aislar política y socialmente a la dictadura, y construir el Frente Antifascista.

V.- El Partido y la construcción de la vanguardia revolucionaria

Necesidad de una crítica marxista leninista

La dramática experiencia vivida por la clase obrera y el pueblo en los últimos anos, confirma categóricamente que el triunfo de la revolución no depende únicamente de un desarrollo adecuado de las condiciones objetivas, y de la enunciación de una estrategia correcta desde el punto de vista del proletariado. La derrota de la Unidad Popular demostró la importancia determinante del factor subjetivo, expresado en una fuerza política dirigente del proceso revolucionario. Sin una vanguardia organizada, que haga posible la mediación entre teoría revolucionaria y la práctica revolucionaria consecuente de la clase obrera y el pueblo, no es posible conquistar la victoria.

La construcción de la fuerza dirigente de la revolución es la tarea esencial, y su cumplimiento pasa por la gestación de una dirección única proletaria. La experiencia histórica indica que la construcción de la fuerza dirigente no es una cuestión que se pueda intentar en abstracto, al margen de

las luchas concretas. La vanguardia debe forjarse al calor de la resistencia antifascista, paralelamente al avance en la construcción del frente.

Conquistar una dirección única proletaria, exige comprender profundamente el carácter de los partidos que la clase obrera se ha dado en su larga lucha, el papel que les ha correspondido jugar y el aporte que pueden y deben hacer en los planos teórico, ideológico, organizativo, de influencia de masas, etc.

Para comprender la naturaleza especifica y el carácter del Partido, y el rol que ha cumplido en la lucha de clases, sobre todo en los últimos años, es necesario estudiar su raíz histórica y analizar su práctica política revolucionaria, a la luz del marxismo-leninismo, desarrollando una critica profunda, que se inserta en la crítica y autocrítica que la experiencia pasada exige a todo el movimiento popular. Demostrando responsabilidad y honestidad absoluta en el reconocimiento de los errores, se conquista la confianza de las masas y el reconocimiento a la calidad de fuerza de vanguardia.

La crítica que debe realizarse supone precisar el grado de responsabilidades de los actores-sujeto del proceso histórico: líderes, dirigentes, partidos y movimientos. Exige situar los factores subjetivos en el contexto de la realidad objetiva en que actúan. De esta manera se evitará el error de explicar el complejo proceso histórico de una revolución, en base a las genialidades o debilidades de los líderes. Asimismo, se evitará la actitud superficial de descargar todos los fracasos en las solas condiciones objetivas (situación económica, marco internacional, etc.).

Esa crítica debe ser masiva. En la autocrítica debe participar todo el Partido, y el objeto de la crítica es también todo el Partido, tanto su dirección nacional, como sus direcciones intermedias y organismos de base. Hay que reconocer y corregir errores cometidos a todos los niveles.

La crítica se hace desde un punto de vista de clase y desde la óptica del proletariado, sirve para avanzar en la revolución, para construir organización revolucionaria y con esa perspectiva debe estimularse, y combatir con la mayor energía la crítica destructiva, pequeño burguesa, que sirve de instrumento al enemigo porque se usa para dividir y desintegrar al Partido.

Es una crítica revolucionaria en tanto se hace al calor de la lucha. Es una crítica entre combatientes y herramienta de construcción orgánica. Requiere calidad moral y revolucionaria, por lo tanto no se puede aceptar la de quienes no están comprometidos en la lucha popular, de los desertores, o de los ociosos. El Partido acepta y recoge la crítica de cualquier militante y la que surge en el seno de las masas, pero no tolerará más la de los franco tiradores de izquierda, que pontifican sobre táctica y estrategia, ni de aquéllos que, a nombre de la "idiosincrasia socialista", defienden desviaciones de derecha,

superadas por la historia del Partido, sin asumir ninguna responsabilidad política.

El Comité Central considerará debidamente todas las críticas, opiniones y aportes que provengan de los niveles de dirección intermedia y de la militancia del Partido, avalados por una práctica revolucionaria consecuente, y de carácter constructivo.

Bajo los supuestos enunciados, la crítica ayudará decisivamente a un proceso de reconstrucción del Partido, proletarizándolo en su ideología, en su línea política, en su organización y en su práctica concreta en la lucha de clases, y fortalecerá su unidad a un nivel superior, derrotando definitivamente las posiciones anti marxistas y disolventes.

El Partido Socialista en las luchas del pueblo chileno

El Partido Socialista esta indisolublemente ligado, en su generación y desarrollo, a las alternativas de la lucha de clases de los últimos 40 años. Desde su fundación se entronca profundamente a la realidad social latinoamericana y a la lucha antiimperialista continental; y progresivamente, se inserta en el movimiento obrero y revolucionario internacional, sobre todo luego que la experiencia de la Revolución Cubana demostró que, hoy por hoy, todo movimiento revolucionario nacional consecuente, necesita apoyarse y contribuir en la lucha internacional contra el imperialismo.

El Partido nació en el contexto de la crisis mundial del capitalismo de 1929, y sus dramáticos efectos en el país: crisis de la industria salitrera, cesantía masiva, aumento de la miseria de los trabajadores asalariados, deterioro violento del nivel de vida de las capas medias y el consecuente ascenso de la lucha social, con repercusiones serias en lo político, que condujeron a la República Socialista de 1932 y a la reacción represiva posterior. El movimiento revolucionario mundial vivía una crisis de conducción y una situación de reflujo, caracterizada por una política infantil y sectaria de la III

Internacional, la oposición violenta entre el movimiento revolucionario y el reformismo obrero (II Internacional), la derrota de las experiencias revolucionarias de China y Europa Central (Alemania, Polonia, Hungría), y el surgimiento triunfante del fascismo (Italia y Alemania). Esta situación se expresaba en el plano nacional, en la ausencia de una real vanguardia popular; el joven Partido Comunista se hallaba gravemente aislado de gran parte de las masas asalariadas y de otras organizaciones de izquierda.

El Partido surgió con un proyecto de transformación revolucionaria muy general, de carácter pequeño burgués democrático, fuertemente impregnado de

latinoamericanismo antiimperialista. Las definiciones teóricas y políticas del PS no fueron socialdemócratas, en la acepción leninista del concepto. En la primera Declaración de Principios se postulaba la necesidad de la "dictadura de los trabajadores organizados" para poder hacer efectivas las transformaciones socialistas, rechazando expresamente la posibilidad de un tránsito evolutivo como era planteado por los reformistas de la II Internacional.

Sin embargo, la aceptación del marxismo, "rectificado y enriquecido", dejaba traslucir una gran debilidad teórica, expresando en esa forma ecléctica la ambivalencia clasista del Partido: los sectores más afectados por la crisis -asalariados y pequeña burguesía- eran interpretados con una amplitud sin contornos por el PS.

Durante de década del 30, el Partido consolidó su influencia entre las capas de pequeña burguesía más empobrecida, funcionarios, artesanos, juventud intelectual y entre los sectores de la clase obrera no interpretados por la política del PC.

En todo caso, el Partido no logró desarrollarse en el núcleo principal de la clase obrera de la época: el proletariado minero. Su política radical llenó un vacío en la izquierda y no constituyó una alternativa derechista en el movimiento popular. Mantuvo una actitud consecuente, sin caer en el oportunismo reformista que caracterizó a los partidos socialistas en general. Reflejó el ascenso del populismo revolucionario nacionalista de América Latina, que tuvo expresión en el APRA peruano, ADECO en Venezuela, MNR en Bolivia, varguismo en Brasil, peronismo en Argentina, y la prolongación anti imperialista de la revolución agraria mexicana (gobierno de Cárdenas). Esa ola progresista continental logró su máxima expresión en Chile con el triunfo del Frente Popular en 1938, que dio un salto decisivo en el desarrollo industrial capitalista, favorecido por las condiciones internacionales creadas por la Segunda Guerra Mundial. El agotamiento de esa experiencia, por la capacidad estructural de la burguesía chilena para impulsar un desarrollo independiente del imperialismo, creó una crisis de línea política del movimiento popular. El Partido entró en un periodo que se prolonga por la década del 40, caracterizado por su moderación política y la persistencia de una línea de colaboración de clases, participando en gobiernos burgueses sin postular una alternativa clara para las luchas populares. Esta situación condujo a una verdadera debacle partidaria, se dividió el Partido, surgieron traidores a la clase obrera y descendió notablemente su influencia de masas, sindical y electoral.

El populismo revolucionario nacionalista hizo crisis en la década del 50, fracasando rotundamente por su incapacidad para mantener una política anti imperialista consecuente, que necesariamente debía radicalizarlo hacia el socialismo. Así lo confirmaron las experiencias del peronismo, del varguismo, de

la revolución boliviana y del gobierno de Betancourt en Venezuela; cuando la presión imperialista oligárquica exigió a esos procesos, afirmarse en las masas y avanzar hacia la revolución, claudicaron o traicionaron sus postulados. Sólo la Revolución Cubana fue consecuente con su programa y derivó hacia el socialismo, cancelando definitivamente la alternativa del populismo nacionalista en América Latina. La crisis final del populismo en Chile tuvo lugar con el gobierno de Ibáñez, en el cual participó temporalmente el PS Popular. Su fracaso creó las condiciones para que el Partido restableciera su unidad en torno a una política avanzada de Frente de Trabajadores, que enfatizaba el problema de la necesaria independencia del proletariado, como reacción a las negativas experiencias colaboracionistas posteriores al Frente Popular.

Esta maduración política revolucionaria influyó notablemente en el ascenso del movimiento popular, que se expresó en la campaña presidencial del FRAP en 1958, en las intensas luchas de clase de los años 60-64, y en la bullente campaña presidencial del FRAP en 1964.

El desarrollo orgánico y el crecimiento de la influencia política del Partido se vincula con el surgimiento de un poderoso y combativo movimiento campesino, con la incorporación a las luchas populares de los sectores semi proletarios y con el espectacular desarrollo político de la clase obrera industrial en la década del 60. La política del Partido interpreta las aspiraciones revolucionarias de las masas populares, oprimidas por la crisis del desarrollo capitalista dependiente (en el gobierno de Alessandri), y el fracaso del reformismo burgués (administración Frei). El Partido se caracteriza por su gran sensibilidad política frente a los problemas de las masas y por su consecuencia para encabezar e impulsar sin restricciones todas las luchas reivindicativas espontáneas de los trabajadores, pobladores, estudiantes, etc. A pesar de la débil organización y de la falta de una política central de masas, los socialistas se ponen a la cabeza de todas las manifestaciones de la lucha de clases, cada vez más radicalizadas. La rica práctica revolucionaria de la lucha de clases durante toda la década del 60 no alcanzó a ser asimilada y orientada plenamente por una línea política justa del movimiento popular. Hubo un rezago en el desarrollo de la teoría respecto a la realidad concreta, que afectó fundamentalmente al Partido. En el Congreso de 1965 (Linares), el Partido Socialista se define marxista-leninista, y caracteriza correctamente el carácter de la experiencia reformista burguesa de Frei, postulando los objetivos programáticos socialistas del proletariado, la independencia de clase de su frente político y la vigencia de la violencia revolucionaria, como medio para la conquista del poder, autocriticando a fondo los errores políticos anteriores. La definición del carácter leninista del Partido adquiere concreción en sus nuevos Estatutos y Principios Orgánicos (Conferencia de Organización de 1967).

Los aciertos del Partido en el plano de las definiciones estratégicas no se reflejaron en una táctica leninista, flexible y coherente. El Partido no escapó a las deficiencias en la asimilación de la experiencia de la Revolución Cubana, comunes a los movimientos que derivaron de la crisis del populismo. Asimismo, fue permeable a los efectos de los conflictos en la conducción del movimiento comunista internacional. El mecanicismo y la no aplicación creadora de la teoría revolucionaria en la realidad concreta, que generó el fracaso de experiencias revolucionarias heroicas durante toda la década del 60 (Venezuela, Perú, Argentina, Guatemala, Colombia y Bolivia, la más importante de todas), llevó al Partido a enarbolar una política dogmática en términos de las formas de lucha y de la restricción del frente (Congreso de Chillán, 1967), que relevó la influencia del foquismo y la falta de comprensión de las peculiaridades del desarrollo de la sociedad chilena, de los efectos de la dependencia, de las contradicciones de clases reales, de los rasgos del sistema jurídico político, y de las ideologías en pugna. Por esta razón se manifestó una disociación entre los postulados del Partido y su práctica política real, que iba mucho más allá de las eventuales inconsecuencias de sus dirigentes. Las condiciones reales del desenvolvimiento de la lucha de clases abrieron el camino a la experiencia revolucionaria de la Unidad Popular, a la cual el Partido hizo un aporte decisivo, a pesar de no haber logrado elevarse a una cabal comprensión del proceso histórico que protagonizaba.

Carácter de clase del Partido

Un partido revolucionario proletario se define por su ideología marxista-leninista, su programa científico de transformación de la sociedad, su línea política justa, su composición de clase y el carácter de su organización y dirección.

Desde el punto de vista ideológico, en el Partido Socialista confluyen históricamente corrientes marxistas no leninistas (una especie de socialismo democrático, utópico), formas de anarquismo, el populismo nacionalista revolucionario y corrientes marxistas ligadas fundamentalmente a las disidencias de la III Internacional (trotskistas en particular). Dentro de esta diversidad ideológica inicial, complementada por la constante incorporación de nuevas corrientes ideológicas revolucionarias "disidentes", el factor común es una vocación revolucionaria orientada muy en general por el marxismo, con una fuerte dosis de idealismo político, desvinculado de las cuestiones concretas de la lucha de clases. En el Partido militaron siempre cuadros con formación marxista, pero el conjunto de la organización no fue formada en el estudio ni en la práctica del marxismo-leninismo. El marxismo consecuente y el leninismo

se desarrollaron lentamente, sin llegar a predominar, largos años después de la fundación del Partido. Otra característica notoria es la extrema sensibilidad del Partido a todos los conflictos surgidos en el seno del movimiento revolucionario internacional. El complejo proceso de maduración ideológica y política de la clase obrera y el pueblo, a través de los últimos 40 años, se refleja fielmente en las alternativas del desarrollo ideológico del Partido, que a su vez ha influido dialécticamente sobre el conjunto del movimiento.

El último Programa del Partido, de 1947, dejó de tener vigencia por resolución de un Congreso, y no fue reemplazado sino con un proyecto (1969) que no llegó a tener redacción definitiva.

La línea política del Partido se caracterizó por su discontinuidad (radicalismo, colaboracionismo, etc.), hasta el Congreso de Unidad de 1957 que le dio un carácter revolucionario mantenido después de forma consecuente. Una constante de la política partidaria ha sido plantear certeras previsiones estratégicas, pero no tener capacidad para desarrollar una táctica correcta y construir la organización necesaria para concretarla en la práctica.

Esto ha permitido que la práctica política del Partido haya caído en desviaciones de derecha ("cretinismo parlamentario") y de izquierda (extremismo infantil).

En el plano internacional, la política del Partido ha mantenido como única constante histórica su latinoamericanismo. Surgió en oposición al fenómeno stalinista y mantuvo una actitud contraria a la política de la III Internacional, que llegó incluso al anti sovietismo extremo. Se relacionó fuertemente con la Liga de los Comunistas de Yugoslavia, y apoyó con decisión su alternativa de derecha a la política soviética ("Tercer Frente"). Respaldó combativamente y desde el inicio de su lucha al Movimiento 26 de Julio, y se vinculó estrechamente a la Revolución Cubana, cuya influencia contribuyó a la redefinición internacional del Partido, como integrante del conglomerado de fuerzas que se enfrentan al imperialismo y luchan por el socialismo, a nivel mundial. La destacada participación del Partido en las Conferencias Tricontinental y Latinoamericana de Solidaridad con los Pueblos y en el trabajo del Comité Permanente de la Tricontinental, así como el estrechamiento de relaciones con el Partido Comunista de Cuba, con el Partido del Trabajo de Corea, con el Partido de los Trabajadores de Vietnam y el FLN de Sudvietnam, con el Partido Comunista de la Unión Soviética y con los Partidos Comunistas y Obreros de los demás países socialistas, han permitido el reconocimiento internacional del Partido Socialista de Chile, como fuerza integrante del movimiento obrero revolucionario mundial, solemnemente ratificado en los actos de celebración del 40 Aniversario del Partido (1973).

En términos de su composición de clase, el Partido tiene una militancia proletaria abrumadoramente mayoritaria (más de un 70% de obreros industriales, mineros y agrícolas) con una proporción importante de militantes de extracción pequeño burguesa (funcionarios, empleados, intelectuales, estudiantes y pequeños propietarios). Sin embargo, las direcciones políticas de todo nivel (de sus Seccionales a Comité Central) muestran un predominio absoluto de elementos de la pequeña burguesía, intelectual y funcionaria, principalmente.

Desde el punto de vista de su organización, el Partido refleja certeramente sus contradicciones ideológicas y el predominio de las corrientes pequeño burguesas. La pequeña burguesía revolucionaria, políticamente inestable (tiende con facilidad a caer en desviaciones de derecha o de izquierda), es intrínsecamente desorganizada. Manifiesta un individualismo que la incapacita para el trabajo colectivo (inconstancia, diletantismo, indisciplina, tendencia a aislarse de las masas y a eludir las tareas políticas). No tiene ninguna de las características que hacen del proletariado consciente una clase con tendencia natural a la organización. El predominio ideológico de la pequeña burguesía revolucionaria en el Partido, ha impedido en la práctica, la construcción de una organización leninista.

El Centralismo Democrático, base de los principios proletarios de organización, es desconocido por la militancia del Partido y no se practica a pesar de los Estatutos y Principios Orgánicos (leninistas consecuentes), aprobados en 1966. La organización del Partido no se ha desarrollado desde el punto de vista del leninismo. Ha sido concebida fundamentalmente para la lucha electoral, no está planteada en función del trabajo cotidiano en el movimiento de masas; no ha garantizado, ni mucho menos, condiciones para trabajar en la ilegalidad; ha permitido la existencia de grupos y fracciones al interior del Partido, y ha tolerado el manejo y la influencia de caudillos locales, regionales y nacionales que tuvieron gran trascendencia en toda la historia partidaria. De una u otra forma, la organización difusa y movimientista del Partido lo ha transformado en un instrumento adecuado a los intereses de fracciones, tendencias particulares, personalidades, etc. Ha sido característico en el Partido impedir la promoción de cuadros proletarios, la carencia de educación política a la militancia, la falta de un periódico que ligue al Partido a las masas, la insuficiencia de la creación teórica (no hubo revista desde 1967), el burocratismo en el trabajo de masas, el oportunismo absoluto en la lucha ideológica.

La definición proletaria y leninista del Partido, en el plano de la organización, no se logró concretar plenamente, por el factor decisivo de predominio de la pequeña burguesía revolucionaria en su conducción y su incapacidad para proletarizarse.

El Partido y la experiencia de la Unidad Popular

El papel que jugó el Partido en el proceso revolucionario desatado por la Unidad Popular, estuvo condicionado por las características analizadas en las páginas precedentes. La adaptación más importante surgió del Congreso de La Serena (Enero del 71), que avanzó un largo trecho en el terreno de la interpretación científica de la situación histórica, y renovó totalmente la dirección del Partido, aprobando importantes criterios de superación orgánica. Es importante comprender las limitaciones de ese evento partidario, en el sentido de que no estuvo precedido de una discusión política e ideológica a fondo de todo el Partido, y se caracterizó como culminación de una intensa lucha tendencial por el control del poder interno. De aquí la deformación de los términos de la lucha interna que se pretendía abriera paso a la hegemonía del marxismo-leninismo consecuente, en términos de línea política, dirección, concepciones orgánicas y estilos de trabajo. Las corrientes que predominaron no expresaban un pensamiento homogénco, y el propio Congreso fue una expresión de sectarismo y estilo burocrático para resolver los problemas políticos y las contradicciones ideológicas del Partido, sin perjuicio de su legitimidad interna.

En este contexto se puede precisar la inmensa responsabilidad que cabe al Partido en el desarrollo y desenlace de la experiencia revolucionaria de la UP. El Partido fue, en gran medida el principal portador, pese a los esfuerzos de la dirección, de la dispersión política que impidió consolidar la hegemonía de la clase obrera en la conducción del proceso.

No hubo capacidad para combatir con éxito las deficiencias y errores que surgían de la incomprensión de los problemas estratégicos fundamentales. Pese a las resoluciones políticas del Congreso del Partido, y a los numerosos documentos e informes de la dirección, que conceptualizaron correctamente los rasgos esenciales del proceso entregando una acertada dirección política, el conjunto del Partido (dirigentes intermedios, mandatarios, cuadros destacados de la Administración Pública, dirigentes de masas y militancia en general), no asimiló siempre el carácter de la coyuntura histórica.

En general no se valoró el contenido revolucionario del Programa, de la alianza de clases que suponía, los problemas de la estrategia para la conquista del poder. Faltó comprensión del problema de la hegemonía proletaria en el frente, del papel del Gobierno y del movimiento de masas. En el Partido se expresaron con fuerza las desviaciones de izquierda (subestimación del papel del Gobierno, culto del espontaneísmo de las masas, verbalismo revolucionario, oposición infantil a cualquier concesión o compromiso, voluntarismo, no consideración de la correlación de fuerzas real, etc.). En un caso se expresaba en ideologismos y desarraigo de los problemas concretos

de la lucha de clases de muchos dirigentes intermedios y militantes de extracción pequeño burguesa, y en el otro, la carencia de compromiso revolucionario y militancia partidaria de un apreciable sector de mandatarios y funcionarios de Gobierno.

No obstante el esfuerzo de la dirección, no siempre impulsado homogéneamente, por imponer una línea única de acción para todo el Partido, que tuviera concreción en las tareas de Gobierno y en la lucha de masas, de las propias filas del Partido surgió la caricaturización de la experiencia revolucionaria de la UP.

En las condiciones del Gobierno Popular el Partido avanzó espectacularmente en su influencia y ascendiente de masas. Ello quedó reflejado en las elecciones nacionales de 1971 y 1973, en las elecciones de la directiva de la CUT y en la importante penetración socialista en los principales centros fabriles y mineros.

El objetivo fundamental propuesto a su quehacer orgánico en este periodo fue convertir en fuerza organizada este inmenso apoyo de masas, construir Partido en base a respaldo de masas (Pleno Nacional, Abril 1971). Aunque hubo progresos innegables y de gran importancia, la dirección no fue capaz de organizar al Partido en base a una concepción proletaria, para ponerlo a la altura de la situación histórica.

La condición primera para superar los problemas orgánicos del Partido era tener conciencia cabal de ello y actuar homogéneamente, y ninguno de estos dos requisitos logró concretarse.

La incapacidad de la dirección para transformar al Partido en una organización verdaderamente marxista-leninista refleja las contradicciones no resueltas entre los distintos puntos de vista presentes en su seno, y el profundo arraigo del espíritu fraccional y de grupo en el seno del Partido.

No resolviéndose las contradicciones de carácter ideológico, no fue posible comprometer a todo el Partido en el cumplimiento de las tareas orgánicas aprobadas en general por la dirección. No hubo una política de reclutamiento, formación, promoción y control de cuadros, indispensable para cimentar una estructura orgánica nacional centralizada. No se intentó profesionalizar al conjunto de dirigentes nacionales y regionales del Partido. No se impulsó ni hubo recursos para un Sistema Nacional de Educación Política, con publicaciones y Escuelas de Cuadros permanentes. No se destinó recursos indispensables para desarrollar las tareas de Frente de Masas. No hubo firmeza para combatir y aplastar todas las formas de trabajo fraccional, la indisciplina y la infiltración en el seno del Partido. No se resolvieron criterios adecuados para encauzar una sana lucha ideológica, que permitiera conquistar la unidad ideológica del Partido, cimiento de su real unidad orgánica. La

dirección en su conjunto mantuvo una débil ligazón con las masas y con la base del Partido, pese a las excepciones individuales.

Las debilidades orgánicas tuvieron también expresión en las graves deficiencias del trabajo de masas (en términos de elaboración de políticas y de construcción de los medios para aplicarlas); y del trabajo en el frente del Gobierno (donde hubo mucha elaboración de políticas, pero falló el mecanismo de aplicación y control).

A pesar de todas estas debilidades, el Partido hizo aportes esenciales al proceso revolucionario y constituyó uno de los pilares básicos de su sustentación. El rezago histórico de su transformación leninista le impidió contribuir más decisivamente a la construcción de una vanguardia que concretara la hegemonía proletaria en el proceso, pero de acuerdo a sus posibilidades se jugo por el triunfo. Ante la historia comparte la responsabilidad de sus debilidades y la satisfacción de sus éxitos.

Vigencia histórica del Partido y sus tareas de hoy

Como se ha afirmado en estas páginas, el Partido Socialista está profundamente enraizado en el pueblo, del que es uno de sus representantes políticos más característicos.

En particular, ha canalizado las aspiraciones de transformación social de una parte de la clase obrera y de la pequeña burguesía revolucionaria, las que por razones históricas muy concretas ya vistas, dieron nacimiento y constituyeron la materia humana fundamental del desarrollo del Partido.

Como hemos dicho, la construcción de la fuerza dirigente de la revolución es la tarea esencial, y la vigencia histórica del Partido Socialista emana del aporte decisivo que le cabe entregar a su cumplimiento.

El PS ha sido un partido en el que sus virtudes y sus defectos se han manifestado fundamentalmente a través de su voluntarismo. La transformación leninista del Partido debe recoger de esa tradición el contenido revolucionario de tal voluntarismo.

La misión histórica de un partido marxista-leninista es de carácter subjetivo, de conducción. Es un destacamento de vanguardia que no sustituye a la clase obrera, sino que la educa y orienta.

El factor conciencia, espíritu de combate, voluntad revolucionaria, es siempre esencial. No puede ser sustituido por el acierto teórico ni por el funcionamiento eficaz de la organización. Tanto Marx y Engels, como Lenin, pusieron una y otra vez énfasis en el factor voluntad como elemento vital para la conducción de las masas, y actuaron consecuentemente.

En el análisis que hemos realizado de los vicios e insuficiencias del Partido, dejamos claramente establecido cuán dañino ha sido el subjetivismo y el anti cientificismo presente en su teorización y accionar. Al valorar la importancia del factor voluntad, no podemos subestimar la titánica tarea de combatir los defectos subjetivistas del Partido, que solo conducen a aventuras o al derrotismo. El voluntarismo, a la vez que se contrapone a las concepciones mecanicistas y evolucionistas, desligado del análisis concreto de la realidad degenera en aventurerismo.

El arraigo del PS entre las masas populares, a lo largo de todo el país, es un factor esencial que testimonia su vigencia. Los partidos no surgen por decreto. En más de cuatro décadas de vida el PS se ha transformado en un vocero querido de amplios sectores de trabajadores; al Partido Socialista se le escucha y se le reclama en todo Chile. Aun hoy, golpeado con crueldad, obreros, campesinos, empleados y estudiantes, sufriendo la brutal represión de la Junta militar, esperan y anhelan escuchar la voz y orientación de los dirigentes del PS. Es un estimable síntoma de confianza al que debemos corresponder.

El PS ha estado inserto, desde su nacimiento, en la vida política del país, como una fuerza actuante, y en algunos periodos determinante, del acontecer nacional. El nacimiento de la CTCH y posteriormente de la CUT, el Frente Popular, el FRAP y la UP, fueron posibles, en sus circunstancias, con el aporte del PS. No sin dificultades, por supuesto, y en algunos casos a pesar de rechazos de amplios sectores del propio Partido. El nacimiento de la Unidad Popular, por ejemplo, no tuvo el respaldo unánime de los dirigentes del PS en aquel entonces. La claridad política de la absoluta mayoría de los militantes, surgida básicamente del instinto de clase de la base socialista trabajadora, presionaba en favor de quienes postularon y defendieron la estrategia unitaria de la Unidad Popular.

Esa herencia altamente positiva, que responde a los intereses de la clase obrera y del pueblo, esta hoy presente y se expresa en el odio encarnizado de los fascistas a nuestro Partido y a todos sus militantes. La Junta todos los días nos da por derrotados y desaparecidos: es más que nada la expresión de sus deseos.

A los propios dirigentes de la burguesía les preocupa nuestra existencia, consolidación y desarrollo. Nos saben capaces de avanzar por el camino de la unidad. No es con ingenuidad, sino con calculada intención, que los más astutos dirigentes derechistas, y hoy día algunos menos brutos de los oficiales fascistas, lanzan rumores estimulando el sectarismo en algunos militantes. No hay mejor forma de irritar y hacer perder el juicio a un socialista, que demostrar desprecio a su partido. Los ideólogos y publicistas de la Junta juegan con esa herramienta, como lo recomiendan los manuales de la guerra psicológica.

Temen al Partido, no tanto porque lo estimen capaz, por si solo, de derrotar a la dictadura, sino sobre todo, porque ven en él un elemento fundamental de la unidad de la clase obrera, del pueblo y de todos los sectores anti fascistas. De ahí su empeño denodado de destruirlo, a cualquier costo. El destino de un gran contingente obrero y de sectores pequeño burgueses que interpretamos y conducimos se dispersarían anárquicamente si el Partido fuera destruido. He ahí un desafío a nuestras capacidades. La unidad del pueblo requiere nuestra presencia.

Pensar, en la actualidad, en resistir y derrotar a la dictadura, es pensar y trabajar por la más amplia unidad anti fascista. Y en esa tarea nuestro aporte es decisivo. Lo saben los fascistas, y también así lo estiman los partidos de la UP, el propio MIR, y con singular preocupación lo aprecian los sectores democráticos y progresistas del PDC.

Como lo hemos referido anteriormente, internacionalmente el Partido ha recorrido un largo y matizado camino dentro de los cauces del antiimperialismo.

Hoy somos reconocidos como una fuerza componente del movimiento revolucionario mundial. Las relaciones con los Partidos Comunistas y Obreros se mejoran casi a diario, y recibimos de ellos un amplio apoyo y estimulo. Nuestra comprensión de los problemas que afrontan los países socialistas en su desarrollo, y por el quehacer y preocupaciones del movimiento obrero mundial son cada vez mayores, y a través de ese mutuo conocimiento nos acercamos y hermanamos más. Están dadas las condiciones para desarrollar y ampliar esas relaciones. Un campo específico en que nuestra labor puede ser muy fructífera, y que va dando resultados, es el de la social democracia internacional. Allí se producen contradicciones entre sus alas más reaccionarias y los sectores progresistas, propensos éstos al mejoramiento de las relaciones con el campo socialista y con los partidos comunistas y obreros. El acercamiento entre tendencias del movimiento obrero, en favor del movimiento revolucionario mundial, y a partir de posiciones de principio, es una gran tarea en la que el PS puede aportar, tal vez como ninguna otra fuerza política chilena, dado su particular desarrollo histórico.

Todos los aspectos señalados anteriormente conforman la potencialidad revolucionaria del Partido. Allí están las raíces de su vigencia histórica.

La actual generación de militantes tiene por tarea esencial hacer suya, extender y profundizar, la ideología científica del proletariado para que tales virtudes y potencialidades del Partido, germinen en buen terreno, haciendo posible la construcción de la fuerza dirigente de la revolución.

La reconstrucción del Partido es hoy nuestra tarea vital. Y es a través de ella que debemos proletalizarlo, en su ideología y métodos de trabajo, única forma de remontar la pendiente y no volver a ser pasto del fascismo.

La primera tarea para avanzar en la reconstrucción del Partido, es asegurar una línea política única para todo el Partido, fundamentada sólidamente en los principios. Los elementos básicos de esa línea única, están contenidos en el presente documento.

Es indispensable transformar la actual organización en un Partido homogéneo, desarrollando la ideología proletaria, poco arraigada aún, introduciendo el marxismo-leninismo en la práctica concreta de los militantes, combatiendo sistemáticamente todas las desviaciones que surjan al interior de la organización e intensificando el trabajo de masas del Partido. El Partido debe convertirse en un destacamento disciplinado y consciente de sus objetivos, como asimismo de los medios para conquistarlo.

Uno de los supuestos de la reconstrucción orgánica del Partido, es su depuración. El combate a muerte a los rezagos de actividad fraccional, es un compromiso que la dirección cumplirá sin vacilaciones, y que debe contar con el respaldo de toda la militancia. El Partido debe depurarse definitivamente de todos los elementos oportunistas, infiltrados y profesionales de la división.

Las actuales condiciones represivas exigen practicar efectivamente el centralismo democrático, enfatizando hoy la centralización de la dirección política. Hoy con mayor fuerza que nunca, se debe salvaguardar la unidad del Partido: férrea unidad orgánica, consciente unidad ideológica y combativa unidad de acción. Atentar en cualquier forma contra la unidad del Partido, hoy día significa traicionar al pueblo de Chile.

El desafío planteado es inmenso, construir un partido leninista, destacamento de vanguardia de la clase obrera, con influencia en extensas capas sociales, adaptado a las condiciones del trabajo clandestino, capaz de resistir la represión fascista, que domine a fondo todas las formas de lucha, profundamente enraizado en las masas y conductor efectivo de todos los combates del pueblo.

La construcción del Partido, la gestación de una dirección única proletaria y la formación del Frente Anti fascista, son las tres tareas fundamentales de toda la militancia, y se cumplirán al calor de la resistencia contra la dictadura. La lucha revolucionaria exige una cuota creciente de sacrificios y no se puede esperar éxitos inmediatos. El heroísmo individual, en los momentos culminantes de la lucha, es valioso, pero el pueblo necesita hoy de otra forma de heroísmo.

El Partido debe aprender la lección del heroísmo proletario. El del trabajo colectivo anónimo y cotidiano, que exige mayor energía revolucionaria y, sobre todo, mucha paciencia.

El Partido debe aprovechar todos los recursos humanos y materiales de que se puede disponer para reconstruirse y combatir la dictadura. Su gran reserva material está en el pueblo. En las filas del pueblo encontrará también su gran

reserva moral, la potencialidad revolucionaria que emana del espíritu libertario indestructible de las masas populares.

La reconstrucción orgánica del Partido no parte de cero, pero debe llenar muchos vacíos. El odio de clase del fascismo se ha descargado en particular sobre el Partido y su organización ha sido fuertemente deteriorada; asesinados cuatro miembros del Comité Central (compañeros Arnoldo Camú, Eduardo Paredes, Arsenio Poupin y Luis Norambuena) y siete secretarios políticos regionales del Partido; entre otros muchos militantes, encarcelados 12 miembros del Comité Central y 20 Secretarios Políticos Regionales. Estos datos escuetos reflejan el efecto de la criminal represión fascista sobre el Partido.

A pesar de los sensibles golpes recibidos, el Partido conserva lo esencial de su estructura nacional y cuenta con una dirección central legítima, volcada por completo a las difíciles tareas de entregar a la militancia una línea política clara, reconstruir la organización y encabezar la resistencia anti fascista.

El golpe de Estado impidió convocar al Congreso General del Partido, previsto para enero de 1974; ello sólo podrá hacerse cuando las condiciones políticas lo permitan, para que el Partido democráticamente se dé un Programa, apruebe los Estatutos, ratifique su estrategia y táctica y genere una dirección. Mientras tanto el Comité Central mantiene todas las prerrogativas de organismo superior del Partido, ha reorganizado su trabajo, resuelto incorporar a las tareas de dirección a los mejores cuadros disponibles para reemplazar a los compañeros caídos y a quienes han sido separados del Comité Central por deserción (decisión individual de abandonar el país).

La dirección política del Partido se ejerce desde Chile y a la dirección interior de la lucha revolucionaria se subordina el trabajo del Secretariado Exterior del Partido, encabezado por el Secretario General del Partido, camarada Carlos Altamirano.

El Comité Central tiene un compromiso histórico ante el pueblo de Chile y una responsabilidad inmensa ante el Partido, y, está dispuesto a cumplir, a pesar de las dificultades, de la falta de experiencia, y de los embates brutales de la represión que ha costado ya, en pocos meses de lucha en la clandestinidad, la vida y la prisión de miembros de la dirección y de valiosos cuadros combatientes del Partido.

La noche negra de la dictadura no será eterna. La dignidad del pueblo de Chile y su espíritu libertario no han sido encadenados, y en sus entrañas se incuba la fuerza rebelde que aplastará el fascismo.

Con la fuerza política y la autoridad de quienes han permanecido fieles a la causa del socialismo y decididos a entregarlo todo para conquistar

la victoria, el Comité Central llama a todos los militantes del Partido a estudiar y asimilar la línea política, a aplicarla creadoramente en el trabajo cotidiano, a luchar por la unidad de todo el pueblo, a construir una gran organización de combate, conductora de las masas, y a ser dignos herederos del ejemplo heroico del camarada Salvador Allende y de todos los mártires del Partido y del pueblo, dispuestos, como ellos, a entregar la vida y, por sobre todo, decididos a vencer.

Comité Central
Partido Socialista de Chile
Santiago, Marzo de 1974.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece públicamente la valiosa colaboración que tuvo, en diversos aspectos, de Carmen Gloria Aguayo, Óscar Aguilera, José Cademártori, Juan Humberto Campos, Paty Coñoman, Hugo Díaz, Galo Eldestein, Hugo Fazio, Aída Figueroa, Tulio Galgani, Mario González, Julio González, Sergio Insunza, Sergio Jara, Carlos Jorquera, Hilda López, Víctor López Zambrano, Tomás Moulian, Manuel Riesco, Patricio Palma, Carlos Toro; de mis nietas Julieta Cerda y Andrea Insunza (la primera me ayudó a digitar y la segunda a criticar) y de mi hija Viviana, criticona, domadora del computador y experta navegante en los espacios celestiales de Internet.

Mis agradecimientos a la Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, que me facilitó acceder a las cronologías de los años 70-73, y al Centro de Estudios Públicos, CEP, que me proporcionó los dos tomos de "Los Mil Días de Allende" de Miguel González Pino y Arturo Fontaine Talavera y los seis tomos de "La Izquierda Chilena (1969-1973)" de Víctor Farías.

Una palabra de especial reconocimiento para David Mac Conell, que ha seguido de comienzo a fin la escritura de este libro, entregándome un valioso aporte en materiales y opiniones.

Y para Jorge Soto Veragua, profesor y artista gráfico, mis particulares agradecimientos y felicitaciones por la portada y portadillas del libro.

Índice

TRABAJAN EN LOM

Comité Editorial Silvia Aguilera, Juan Aguilera, Mauricio Ahumada, Mario Garcés, Luis Alberto Mansilla, Tomás Moulian, Héctor Muñoz, Naín Nómez, Julio Pinto, Paulo Slachevsky, Verónica Zondek **Relaciones Públicas** Mónica Benavides, Soledad Hernández **Proyectos** Ignacio Aguilera **Diseño y Diagramación Editorial** Hugo Ortiz de Pinedo, Claudia Quintero, Marcos Ribeiro **Exportación** Ximena Galleguillos **Página web** Juan Pedraza **Producción** Eugenio Cerda **Impresión Digital** Carlos Aguilera, Jorge Ávila, Marcelo Díaz, William Tobar **Preprensa Digital** Ingrid Rivas, Daniel Véjar **Impresión Offset** Eduardo Cartagena, Héctor García, Luis Palominos, Rodrigo Véliz, Francisco Villaseca **Corte** Enrique Arce, Eugenio Espíndola **Encuadernación** Carlos Campos, Rodrigo Carrasco, Sergio Fuentes, Francisco González, Gabriel Muñoz, Miguel Orellana, Marcelo Toledo, Daniel Vergara, Julio Zapata, Juan Zúñiga **Diseño y Diagramación Computacional** Carolina Araya, Guillermo Bustamante, Jessica Ibaceta, Claudio Mateos, Pablo Valenzuela **Servicio al Cliente** Elizardo Aguilera, Carlos Bruit, José Lizana, Edgardo Prieto **Difusión y Distribución** Carolina Acuña, Elba Blamey, Marcos Bruit, Luis Fre, Carlos Jara, Marcelo Melo, Nelson Montoya, Pedro Morales, Santiago Oyarzo **Librerías** Nora Carreño, Ernesto Córdova **Área de Administración** Jaime Arel, Mary Carmen Astudillo, Mirtha Ávila, Alejandra Bustos, Diego Chonchol, Eduardo Garretón, Marcos Sepúlveda. *Se han quedado en nosotros Adriana Vargas, Anne Duattis y Jorge Gutiérrez.*

El Gobierno de Salvador Allende

LUIS CORVALÁN LÉPEZ

A treinta años del derrocamiento del gobierno del Presidente Allende me ha parecido un deber escribir las páginas que componen este libro. En ellas invoco la obra realizada, la audaz tentativa de producir cambios de raíz en busca de una vida mejor para todos y en primer lugar para los más desposeídos y necesitados. Destaco el protagonismo del pueblo, la posición asumida por los diferentes actores, las dificultades que surgieron en el camino, las insuficiencias y fallas del gobierno y de los partidos que lo apoyaban. Y me permito expresar algunos juicios críticos y autocríticos, bajo mi propia responsabilidad, producto de las reflexiones que me merecen los acontecimientos mirados a la distancia que nos separa de aquel tiempo. Doy también mi testimonio sobre el largo proceso de luchas sociales y políticas que generó la unidad de la izquierda chilena y su victoria del 4 de septiembre de 1970, entrego mi visión del gobierno de Salvador Allende, traigo al recuerdo lo que hizo a favor del pueblo, las transformaciones revolucionarias que llevó a cabo en la esfera de la economía, su política internacional independiente, las preocupaciones más sentidas que lo motivaban, todo aquello que lo inscribe y lo inserta en la historia con rasgos propios e indelebles.

Pretendo, a la vez, sumar mi voz junto a las de otros compatriotas, en contra de las tergiversaciones y de los tergiversadores, todavía empeñados en denostar la figura del Presidente Allende, en menoscabar su obra y presentar, en cambio, como salvadores de la Patria y dechados de virtudes al dictador y a quienes, junto a él, gobernaron durante 17 años, sembrando el terror y la muerte.







Este documento ha sido tomado de

“Reseña Biográfica de Luis Corvalán Lepe”

en la página de la

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile

https://www.bcn.cl/historiapolitica/resenas_parlamentarias/wiki/Luis_Corvalán_Lepe